



**UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y
ECONÓMICAS**

**CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DOCUMENTACIÓN
SOCIOECONÓMICA-CIDSE**

INFORME FINAL DEL PROYECTO:

***DESIGUALDADES ÉTNICO RACIALES, ACCIÓN
COLECTIVA, ETNICIDAD Y RESISTENCIA EN EL NORTE
DEL CAUCA Y SUR DEL VALLE***

(CONVOCATORIA INTERNA DE LA VRI 2006)

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN PARTICIPANTES:

- MIGRACIÓN, URBANIZACIÓN E IDENTIDADES
DE LAS POBLACIONES AFROCOLOMBIANAS**
- ACCIÓN COLECTIVA Y CAMBIO SOCIAL**

PROFESORES INVESTIGADORES:

**LUIS CARLOS CASTILLO
ÁLVARO GUZMÁN
JORGE HERNÁNDEZ
MARIO LUNA
FERNANDO URREA**

ABRIL DE 2009

PRESENTACION

El proyecto de investigación: “Desigualdades Étnico Raciales, Acción Colectiva, Etnicidad y Resistencia en el Norte del Cauca y Sur del Valle” se llevó a cabo con el trabajo de profesores y estudiantes pertenecientes a dos Grupos de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas que participaron en la Convocatoria Interna de la Vicerrectoría de Investigaciones (2006) de la Universidad del Valle: el Grupo de Investigación sobre Migración, Urbanización e Identidad de la Poblaciones Afrocolombianas y el Grupo de Investigación sobre Acción Colectiva y Cambio Social.

El Objetivo General de la Investigación, implicaba observar y caracterizar en la Región del Norte del Cauca y Sur del Valle, en las dos últimas décadas, las acciones colectivas, la movilización social de diverso orden y la resistencia pacífica de actores étnico-raciales, en contra de la guerra. Igualmente, la incidencia que han tenido los actores armados en la configuración territorial y social de la Región, todo esto dentro de un marco socio demográfico complejo de desigualdades étnico raciales y de procesos de participación política muy particulares.

El informe final para la Vicerrectoría de Investigaciones que se presenta a continuación da cuenta del trabajo efectivo de investigación durante tres semestres, desde febrero/07 hasta Julio/08. Debe considerarse que, con la excepción de la última parte dedicada a la participación política regional, los demás capítulos requieren de un trabajo de edición, unos más que otros, para poder ser considerados para publicación. El informe contiene cinco partes, cada una liderada por un profesor, que se describen sistéticamente a continuación.

La primera parte se refiere a los “Patrones Sociodemográficos de la Región comprendida entre el Sur del Valle y el Norte del Cauca, controlando dimensión étnico racial”, bajo la coordinación del profesor Fernando Urrea. Se trata de mostrar las características de una Región con amplio predominio demográfico negro e indígena. Se inicia con una presentación de los datos para Colombia, para el Valle del Cauca y para el Cauca, con referencia a los indicadores básicos de población, nivel educativo y escolaridad. En un segundo momento se hace un análisis de la información para 25 municipios de la Región, presentando las estadísticas de población e introduciendo información socio-económica, de ICV y NBI, Nivel Educativo, Posición Ocupacional y Salud. Una última sección de esta primera parte se refiere a las dinámicas contextuales del Área Metropolitana de Cali y de Popayán en relación con la zona de la Ley Páez que está en el centro de atención de nuestra Región de estudio. Igualmente se hace un análisis de la Población indígena en Cauca y Valle.

La segunda parte desarrolla un planteamiento sobre: “Historia Regional, Demografía, Acción Colectiva y Resistencia de las Comunidades Negras en una Región en formación (Norte del Cauca y Sur del Valle)”. La investigación se apoyó en la perspectiva de la acción colectiva y movimiento social que se ha producido en la teoría del proceso político, en las aproximaciones sobre movimiento social e identidad y en los desarrollos recientes sobre etnicidad, resistencia y territorio que valoran cada vez más el análisis de la identificación

con el espacio (representaciones del espacio, espacios de representación, prácticas espaciales, localidad, localización, sentido del lugar) en la movilización social y la acción colectiva.

Se combinaron diseños de investigación cualitativos y cuantitativos. La fuente fundamental de información del estudio la constituyó la base de datos de noticias de prensa sobre protestas, luchas y movilizaciones sociales del Centro de Investigación y Educación Popular, (CINEP). En los últimos diez años, CINEP ha venido construyendo esta base que se ha convertido en una de las más importantes del país sobre el estudio de la protesta social en Colombia.

El informe enfatiza sobre seis grandes componentes. En primer lugar, se describe en detalle la estrategia metodológica. En segundo lugar, la apuesta teórica en la que se exponen las categorías sociológicas en que se apoyó la investigación, categorías tales como acción colectiva, movimiento social, motivación de la acción, repertorios de acción, estructura de oportunidad política, etnicidad, espacio, territorio, resistencia y comunidades negras. En tercer lugar, una aproximación sociodemográfica a la Región en la que se enfatiza, con base en las cifras del Censo 2005, en la diversidad étnica de la región lo que ha dado origen a un crisol étnico compuesto por poblaciones indígenas, negras, mestizas y blancas. En cuarto lugar, la conformación regional. En este aparte se propone una relectura de los procesos históricos que han dado origen a la conformación regional enfatizando en los cambios sociales y en el surgimiento de capas sociales negras que desarrollan acción colectiva y resistencia con lo que han construido la historia de la región. En quinto lugar, la fenomenología de la acción colectiva negra en la que se describe en el tiempo y el espacio la acción colectiva de la gente negra que habita en la región de estudio, los flujos y reflujos de la acción, los principales repertorios, los entramados organizativos, los espacios en los que se despliega la acción, la estrategia de alianzas, entre otras dimensiones sociológicas del estudio de la acción colectiva y la protesta. Finalmente, se describe, con particular énfasis en el municipio de Buenaventura, la manera creativa cómo las comunidades negras, movilizándolo el espacio, han puesto en práctica formas de resistencia territorial pacífica en contra de la guerra y sus impactos que se han traducido en muerte y desterritorialización de los afrocolombianos en este puerto sobre el Pacífico.

La tercera parte tiene como tema: “La Acción Colectiva y la Formación de Estado en la Región del Norte del Cauca y Sur del Valle”, bajo la responsabilidad del profesor Álvaro Guzmán B. El trabajo pretende mostrar la amplia variación de las formas de acción colectiva regionales, en un contexto de violencia y delincuencia muy acentuados. Esta variación incluye desde formas asociadas al terror y la barbarie, hasta demandas, movilizaciones y peticiones ciudadanas abiertas y no violentas. Las distintas formas de acción colectiva expresan conflictos en los que interviene de manera importante el Estado y otros grupos que ejercen poder y autoridad. En consecuencia, es posible establecer una relación entre la Acción Colectiva y una formación estatal particular. La información muestra el predominio de la criminalidad organizada, del conflicto político armado, la debilidad de los sectores sociales y la precariedad de una construcción estatal basada en el derecho, el espacio público y la ciudadanía. Para desarrollar este trabajo, se inicia con un

primer capítulo en el que se describe el contexto de criminalidad y violencia de la Región, comparando con datos para Colombia, para el Valle del Cauca y para Cali. En un segundo momento, de este primer capítulo, se hace un trabajo detallado con información por municipio y con datos de los delitos estrechamente asociados con violencia. En un segundo capítulo se presenta y analiza la información sobre Acciones Colectivas recogida para los años 2006 y 2007, según un conjunto de variables que subrayan la localización, el tamaño, los contendores, la forma, el uso de la violencia y el carácter más o menos organizado y negociable de la Acción Colectiva. Esta parte da lugar a un análisis esencialmente cuantitativo de la información. En el tercer capítulo, se hace la presentación de dos “escenarios” de Acción Colectiva relevantes en la Región: el de los Indígenas y el del Municipio de Buenaventura. La investigación utilizó fuentes de información de la Policía Nacional, Policía Valle y Policía Cauca. Las acciones colectivas fueron identificadas en un seguimiento minucioso del Diario El País y los estudios de caso se hicieron con base documental, fundamentalmente de prensa.

La cuarta parte se refiere a: “Los Rasgos de la Acción Bélica de Actores Legales e Ilegales en el Norte del Cauca y Sur del Valle”, a cargo del profesor Mario Luna. La fuente principal de información fue el Observatorio de la Vicepresidencia de la República que, a su vez, trabaja con diversas fuentes oficiales. Los cuadros son producto de una selección y una elaboración de los datos de dicho Observatorio y tienen un nivel de definición estadística sencilla. El texto utiliza además datos de orden cualitativo, provenientes de documentos diversos (incluyendo fuentes secundarias diversas) o bien de las entrevistas realizadas, además, de cierto conocimiento anterior a la investigación de los términos del conflicto armado en la región. Por razones específicas del conflicto armado, se incluyó la comparación con seis municipios del centro del Cauca, colindantes por el lado sur con el norte del Cauca, pues supusimos imposible una caracterización analítica de esta subregión sin ese referente, especialmente por la idea de que el conflicto armado ha llegado a niveles de desterritorialización que privilegia la acción de control sobre corredores estratégicos. Aunque se habla de la evolución de la insurgencia armada y del conflicto armado, el texto ha privilegiado el período 2000-2006, en razón a los límites de la información obtenida y trabajada.

El texto trabaja cuatro líneas de reflexión. En primer lugar, un contexto de análisis sobre la evolución del conflicto armado en Colombia a partir de las ideas desarrolladas por diversos especialistas, incluyendo algunas sobre sus especificidades para el suroccidente colombiano. Se pone un énfasis especial en la evolución política y militar del conflicto armado, especialmente en las coordenadas espaciales y temporales que definen la evolución de una geografía política y militar del mismo. La reflexión se detiene en los aspectos de orden local y regional centrados en nociones como las de control territorial y territorialidad, desterritorialización, nociones que hacen posible una caracterización de zonas santuario y de tradición de insurgencia armada, zonas de acción bélica y de corredores estratégicos donde se juegan el control de recursos, la movilidad y la comunicación de los actores armados, y finalmente micro y macro regiones que concentran el conflicto armado y/o la violencia. Se resalta que en esta evolución la población es desplazada de un papel social y político dentro del conflicto para volverse instrumento de los intereses externos de los

actores y finalmente blanco u objetivo de una acción violenta selectiva u colectiva. El interrogante que se propone es si en el examen de los datos se reafirman los rasgos señalados en dicha evolución del conflicto.

Dado que la orientación analítica de diversos autores contextualiza el conflicto armado respecto a la evolución de la violencia en las zonas donde se desarrolla, se presenta en segundo lugar, y presidiendo todo el análisis, los rasgos que definen la situación de violencia, medida por el homicidio, en los municipios de nuestras subregiones; lo específico en este caso, es una lectura de la violencia que parte de la definición de los municipios por su pertenencia a distintos tipos de zonas del conflicto armado (incluyendo principalmente los corredores estratégicos), llegando por lo tanto a una organización de dichos municipios por la concentración y la intensidad de la violencia en ellos; implícitamente se usa también una referencia al dominio o no de conflicto étnicos y sociales de otros orden en dichos municipios. Aunque relacionada con la acción bélica directa o indirecta de los actores armados, aquí en este texto no damos esa relación como un hecho y tratamos de establecerla, con cierta orientación de oposición o de colaboración entre la perspectiva de acción directa bélica y los repertorios de violencia de los actores armados, incluyendo la fuerza pública.

En un tercer momento se aborda el centro del análisis compuesto por los rasgos del conflicto armado, medidos por el repertorio de acción de los diversos grupos ilegales a los que se suma la iniciativa de la Fuerza pública; este análisis se realiza a través de un proceso incipiente de acercamiento crítico de las principales rasgos que se supone caracterizan el conflicto armado en Colombia, con los datos empíricos que encontramos y con el conocimiento que se ha ido adquiriendo de los rasgos sociales, espaciales y temporales de la geografía política y militar del conflicto en las zonas estudiadas. Los datos cualitativos nos sirven para definir en ciertos municipios el predominio de la presencia de un actor ilegal o de la confluencia de varios, o por lo menos instaurar la sospecha de ese predominio, y también para establecer la evolución de la acción de la Fuerza pública y compararla principalmente con la iniciativa bélica directa (emboscadas, hostigamientos, ataques a instalaciones militares) o indirecta (actos de terrorismo). Dentro de esos datos cualitativos insertados en el texto como diferenciación dentro del período seleccionado (2000-2006) y su encuadramiento político, se encuentran los de la evolución política nacional y local.

Finalmente, se maneja información sobre los impactos que el conflicto armado tiene en la población a través de unas cuantas variables, en las que se puede destacar la cuantificación agregada concerniente a la acción violenta política (caracterizada por asesinato político, desapariciones forzadas, heridos, secuestros, violencia sexual y tortura, amenaza individual, detención arbitraria y retención) que vulnera los derechos de la población indígena, el desplazamiento de la población y otros ítems más.

La quinta parte, bajo la coordinación del profesor Jorge Hernández, se refiere a los procesos políticos locales y está dedicado principalmente a analizar el impacto que ha tenido en los municipios de la región la ampliación de la democracia que se produjo a raíz de la elección popular de alcaldes y otras reformas políticas o administrativas realizadas en

la segunda mitad del decenio de los años ochenta del siglo pasado, tendientes a descentralizar el Estado nacional y fortalecer el Estado local, reforzadas luego por nuevas reformas políticas y favorecidas por ciertos cambios demográficos, económicos y sociales que se presentaron desde entonces en esta parte del país.

El análisis se detiene especialmente en algunos acontecimientos políticos que han contribuido a definir los límites de la propia región, la normatividad que ha regulado la vida política municipal entre 1986 y 2007, los efectos de la nueva democracia municipal en la pacificación parcial de las confrontaciones político-militares entre guerrillas y Estado, los niveles de participación y la consiguiente legitimidad con que han sido elegidos los gobiernos municipales, la forma en que la trama de partidos y movimientos políticos expresa la diversidad social de la región, esto último con énfasis en los clivajes étnicos y raciales, una aproximación a los grados de gobernabilidad mediante el examen del tipo de relación que permite la composición política de ejecutivos y legislativos municipales y, finalmente, la exploración de algunas de las culturas políticas predominantes, con base en los casos de tres municipios que cuentan con una composición étnica bien diferenciada.

Lo que resulta de este análisis es la comprobación de que efectivamente la ampliación de la democracia ha brindado “ventanas de oportunidad” que las comunidades indígenas y afrocolombianas, así como otros conglomerados sociales, han aprovechado en diversa medida, dependiendo de sus trayectorias previas, su grado de organización, sus niveles de cohesión en torno a propósitos comunes, el mayor o menos favor que reciben de la normatividad vigente y otros factores asociados. Se trata de un proceso que ha debido vencer poderosos obstáculos, entre los cuales se destacan: el asedio permanente de grupos armados irregulares, las interferencias del narcotráfico, el contrarreformismo centralizador de algunos gobiernos nacionales y la arraigada tradición clientelista, principalmente.

Las fuentes de información fueron los datos electorales de la Registraduría Nacional del Estado Civil, varios periódicos de circulación regional y nacional, entrevistas no estructuradas con algunos activistas políticos de los municipios, incluidos alcaldes y exalcaldes, algunos estudios previos sobre el tema que incluyen información primaria y, adicionalmente, observación directa intermitente del propio autor.

El análisis de los procesos políticos locales de estos municipios valida la hipótesis según la cual, entre las cordilleras central y occidental al sur del Valle y el norte del Cauca, ha estado surgiendo durante los últimos decenios una nueva subregión caracterizada, entre otras cosas, por poseer una gran diversidad étnica/racial que se expresa de muchas maneras, una de las cuales es el creciente pluralismo político asociado con las divisiones que produce dicha diversidad.

Este informe se presenta como Informe Final de Investigación. Pero, como ya se dijo, es un material que requiere un trabajo adicional para su publicación. Con este trabajo nos encontramos comprometidos. Para hacerlo mejor, es fundamental la crítica y las observaciones que podamos recibir sobre el presente documento. Debemos reconocer y agradecer la asignación de tiempo para la investigación que nos dio la Universidad, a través

del Departamento de Ciencias Sociales, asignación que nunca consideramos suficiente, pero que es muy valiosa, única, en nuestro medio. Igualmente, a los colegas de los dos Departamentos de la Facultad que estuvieron pendientes del desarrollo de la Investigación. Una mención especial para los estudiantes que nos acompañaron como monitores, reconocimiento que queda consignado en cada una de las partes del presente documento. Al personal del CIDSE que siempre estuvo atento al buen desarrollo del proyecto, nuestras gracias por su comprensión en momentos de tensión. También se debe reconocer el apoyo de la Universidad, centrado en la Vicerrectoría de Investigaciones, por financiar la investigación con recursos internos. Esta modalidad debe ser objeto de una evaluación costo/beneficio, con objetivos de conocimiento, en la que creemos que se pueden obtener logros muy significativos.



FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS
CENTRO DE INVESTIGACIONES Y
DOCUMENTACIÓN SOCIOECONÓMICA

Cidse

**UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y
ECONÓMICAS**

**CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DOCUMENTACIÓN
SOCIOECONÓMICA-CIDSE**

**INFORME FINAL DEL PROYECTO:
DESIGUALDADES ÉTNICO RACIALES, ACCIÓN COLECTIVA,
ETNICIDAD Y RESISTENCIA EN EL NORTE DEL CAUCA Y
SUR DEL VALLE
CONVOCATORIA INTERNA DE LA VRI 2006**

**GRUPO DE INVESTIGACIÓN:
MIGRACIÓN, URBANIZACIÓN E IDENTIDADES DE LAS
POBLACIONES AFROCOLOMBIANAS**

PARTE I

**PATRONES SOCIODEMOGRÁFICOS DE LA REGIÓN
COMPRENDIDA ENTRE EL SUR DEL VALLE Y EL NORTE DEL
CAUCA, CONTROLANDO LA DIMENSIÓN
ÉTNICA-RACIAL**

**Profesor Investigador:
Fernando Urrea G.**

**Monitores del Proyecto:
Waldor Federico Arias B. (enero – junio 2007)
Catalina Escobar G. (enero – julio 2008)
Jaime A. Correa S. (mayo – julio 2008)**

CALI, ABRIL DE 2009

Patrones sociodemográficos de la región sur del Valle y norte del Cauca a través de la dimensión étnica-racial

Fernando Urrea Giraldo¹

Introducción.

Este capítulo sobre la región norte del Cauca y sur del Valle, conformada por 27 municipios, 21 en el Cauca² y 6 en el Valle, tiene el propósito de hacer una caracterización sociodemográfica de la misma a través de la variable étnica-racial, utilizando los censos de 1993 y 2005, como las fuentes básicas de referencia estadística. En el contexto precedente se analizan los diferenciales sociodemográficos y socioeconómicos de la población a través de tres grandes grupos étnico-raciales: población afrocolombiana, la cual incluye población que se autoreconoció en el censo 2005 como “afrodescendiente, afrocolombiana, negra, mulata, Raizal y Palenquera”, población indígena (de todos los pueblos indígenas y sin conocimiento a cuál es el pueblo al cual pertenece) y población no étnica (o también, sin autoreconocimiento étnico-racial, o sea, que en el censo respondió “ninguna de las anteriores” ante las distintas categorías de autoreconocimiento que propone la ‘pregunta étnica’ del formulario censal)³.

Se hará también uso de otras fuentes estadísticas de estudios específicos que se han realizado en la subregión del norte del Cauca, al igual que un estudio etnográfico, relacionados con la Ley Páez, que atañen solamente a 6 municipios de la zona plana nortecaucana, pero que permiten aportar elementos del contexto socioeconómico del Cauca y de esos 5 municipios y así visualizar mejor importantes dinámicas socioeconómicas y sus efectos potenciales sobre las tendencias sociodemográficas más recientes de dicha subregión (Urrea y Hurtado, 1997; Escobar, 2003; Alonso y Lotero, 2006; Bermúdez et al., 2007; Cuentas Regionales del DANE, 1990-2005).

El eje principal del análisis sociodemográfico es el considerable efecto de la variable étnica-racial en la región de estudio, como se verá más adelante, tomando en cuenta los pesos poblacionales de negros e indígenas en los 27 municipios. En primer lugar, se consideran dos agrupaciones municipales, según los límites departamentales (la primera los 21 municipios en el norte del Cauca, la segunda los 6 municipios en el sur del Valle), constituyendo las dos la gran región. En el análisis de las dos agrupaciones es preciso incluir un análisis comparativo de cada una con el respectivo departamento y entre los dos departamentos.

El orden de este capítulo es el siguiente: una introducción en la cual se hace una aproximación sociodemográfica y socioeconómica espacial de la región, enfatizando el amplio peso demográfico negro e indígena en ella. Se continúa con el análisis de las

¹ Sociólogo, Profesor Titular Departamento de Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, Universidad del Valle.

Han colaborado en el procesamiento de datos para este capítulo el economista Jaime A. Correa Scarpetta y los estudiantes de sociología Catalyna Escobar García y Waldor Arias Botero.

² A partir de diciembre del año 2006 se creó el municipio de Guachené.

³ En este texto se emplean con la misma equivalencia los términos de población afrocolombiana, negra, gente negra, negros y afrocolombianos. De otro lado, se excluye en este artículo el análisis de la población Rom o gitana porque sus efectivos demográficos son demasiado reducidos a escala municipal, regional, departamental y nacional.

principales tendencias sociodemográficas en el período intercensal 1993-2005 para los municipios de la región agrupando los 27 municipios en tres fases de la transición demográfica y se prosigue con el análisis de los mismos indicadores y otros adicionales para los tres grupos étnico-raciales (indígenas, afrocolombianos o negros y no étnicos, en su mayor parte conformados por una población mestiza/blanca) para 26 municipios⁴ con base en los datos del censo 2005, incluyendo la presentación de la fecundidad histórica, la TGF y la tasa de fecundidad general. El siguiente aparte analiza la variable de los principales niveles educativos alcanzados por grupo étnico-racial y sexo en los municipios estudiados, de acuerdo con el censo 2005 y se entra a continuación en la presentación de dos importantes indicadores del mercado laboral y condiciones de vida, la posición ocupacional y el tipo de cobertura en salud, por grupo étnico-racial, sexo y para los 26 municipios de la región. La última parte aborda el contexto socioeconómico del área metropolitana de Cali frente a Popayán y la Ley Páez, para determinar las interacciones con las transformaciones sociodemográficas observadas en los municipios del sur del Valle y norte del Cauca. Las conclusiones presentan así los principales resultados de los cambios sociodemográficos y socioeconómicos observados al nivel municipal y por grupo étnico-racial con fenómenos como la conformación de un área metropolitana de Cali y el impacto de la Ley Páez.

Una primera aproximación sociodemográfica y socioeconómica espacial de la región.

Al nivel espacial se pueden establecer siete subregiones entre los 27 municipios que constituyen la gran región, según el peso demográfico de un determinado grupo étnico-racial (ya sean negros, indígenas o por el contrario, sin pertenencia étnica-racial) y las siguientes características sociogeográficas: a) predominio de zona plana del valle geográfico o de montaña o ambas, y llanura húmeda Pacífica; y b) el predominio de cultivos agroindustriales (caña de azúcar) u otros tipos de cultivos (comerciales o de producción campesina) y ganadería, o minería de aluvión y explotación forestal y cultivos de bosque húmedo tropical. Con base en estos criterios se tienen así las 7 subregiones:

- Municipio de Buenaventura. Municipio de llanura húmeda tropical de mayoría poblacional afrocolombiana, que mantiene una explotación minera de aluvión, que conforma el segundo centro urbano del Valle y el principal puerto marítimo del país bajo el comando de una empresa privada (Sociedad Portuaria). Las poblaciones indígena y no étnica-racial son claramente minoritarias.

- Municipios de Palmira, Florida y Pradera. Son municipios que combinan zona plana del valle geográfico del río Cauca con área de montaña de la Cordillera Central. Con poblaciones negras e indígenas importantes pero minoritarias al lado de una población no étnica-racial mestiza mayoritaria. Tiene enorme importancia el cultivo de caña de azúcar en la zona plana pero también hay presencia de una economía campesina de montaña indígena, mestiza y negra. Palmira además forma parte del área metropolitana de Cali.

- Municipios de Candelaria, Puerto Tejada, Caloto, Guachené, Padilla, Villarrica, y Miranda. Son siete municipios que se concentran en la zona plana del valle geográfico,

⁴ No existen datos desagregados aún para el municipio de Guachené.

cuya economía gira principalmente alrededor del cultivo de la caña de azúcar y la producción azucarera y de etanol, pero además con importantes empresas industriales de maquila en el caso de cuatro municipios del norte del Cauca (Ley Páez). Son municipios de amplia mayoría de población negra con grupos indígenas importantes en algunos de ellos, pero minoritarios (Caloto y Miranda), al igual que población no étnica-racial (Candelaria, Miranda), pero minoritaria respecto a la afrocolombiana. Dos municipios tienen una importante área de montaña (Caloto y Miranda) pero sus economías giran más alrededor de la zona plana mediante la caña de azúcar y las empresas de Ley Páez. También hay que señalar que en varios de estos municipios (Candelaria, Puerto Tejada, Caloto, Guachené, Padilla y Miranda) sobreviven parcelas de la antigua economía campesina negra floreciente antes de 1950. Candelaria y otros municipios del norte caucano también entran a formar parte del área metropolitana de Cali bajo la modalidad de “ciudades dormitorio” en sus cabeceras (Puerto Tejada, Villarrica, Caloto y Guachené) o concentraciones urbanas por fuera de la cabecera como en el caso de Candelaria (Urrea y Hurtado, 1999; Barbary y Urrea, 2004).

- Municipio de Santander de Quilichao. Es un municipio que tiene zona plana y montaña, el cual si bien tiene muchas características similares a los anteriores - debido al peso significativo de la población afrocolombiana, los cultivos agroindustriales y la presencia de empresas de Ley Páez -, por su área de montaña y piedemonte con una significativa población indígena, en su mayor parte de economía campesina vinculada al sistema de resguardo, es adecuado tomarlo aparte. Igualmente, este municipio tiene una población mestiza/blanca (no étnica o sin autoreconocimiento étnico) importante en la cabecera. En este municipio, al igual que en los municipios anteriores, se conservan parcelas de campesinado negro. Se trata de un municipio en el cual los dos grupos étnico-raciales (negros e indígenas) y los no étnicos no alcanzan a ser cada uno una mayoría: entre los dos primeros son el 52,8% (19,4% indígenas y 33,4% negros) y los segundos el 47,2%. Sin embargo, en la cabecera la población no étnica sí es ampliamente mayoritaria (68,0%). Al igual que los anteriores municipios nortecaucanos la cabecera de Santander de Quilichao funciona como “ciudad dormitorio” de Cali.

- Municipios de Jamundí, Suárez y Buenos Aires. Son tres municipios que conforman el valle geográfico del río Cauca hacia el margen de la cordillera occidental y también con zona de montaña, de mayorías poblacionales negras de acuerdo con el censo de 2005, pero con poblaciones indígenas si bien minoritarias con una relativa importancia en el resto (sobretudo en las áreas rurales de Buenos Aires y Suárez). Los tres son municipios que mantienen una economía campesina negra importante en la parte plana y de piedemonte, y un poco más agroindustrial en pequeña y mediana escala diferente a la caña de azúcar en Jamundí, de empresarios negros y no étnicos, al lado de grandes empresarios no étnicos. La particularidad de Jamundí en su casco urbano es que se trata de una “ciudad dormitorio” de clases bajas, medias medias y medias altas de Cali⁵, no étnicas (mestizas/blancas) y negras, con un buen sector de sus residentes procedentes de Cali, por lo cual forma parte del área metropolitana. En la cabecera de Jamundí, las poblaciones negra y no étnica, son cada una el 50% de la población total, mientras en el resto el 88,0% es afrocolombiana. En cambio, a diferencia de Suárez y Buenos Aires, la población indígena es bien minoritaria.

⁵ Se trata de una gama heterogénea de clases medias: clases medias bajas, medias medias y algunas urbanizaciones de profesionales de clases medias acomodadas o altas.

- Municipios de Corinto, Caldono, Jambaló, Toribío, Páez, Inzá, Silvia y Totoró. Estos municipios constituyen la subregión indígena por excelencia en el norte del Cauca, con dos pueblos indígenas predominantes: Nasa y Guambiano o Misak, pero también con otros pueblos minoritarios como Totoró, Coconuco, Yanacona, Inga, algunos de ellos ubicados en las cabeceras municipales (Yanaconas e Inga). En esta subregión la población negra es pequeña mientras la no étnica es más importante, aunque una buena parte de ella son indígenas que no se reconocen como tales o se trata de una población mestiza con vínculos de parentesco con indígenas. En municipios como Páez casi el 6% de la población es afrocolombiana y el 25,8% es no étnica, pero la gran concentración demográfica no étnica se da en la zona rural. En Inzá los no étnicos son la mitad de la población en el resto, pero su comportamiento demográfico se asemeja al indígena. En Caldono tienen un peso menor los no étnicos y posiblemente también se trata de campesinos mestizos/indígenas; y en Silvia también tienen un menor reducido peso frente a los indígenas pero son una minoría importante en cabecera y resto. En Corinto los tres grupos de población no tienen una mayoría demográfica pero los indígenas ejercen una hegemonía respecto a negros y no étnicos. Los otros municipios (Jambaló, Toribío y Totoró) son más de predominio absoluto indígena. En todos estos ocho municipios la economía campesina indígena es predominante, aunque por supuesto presenta diferencias por grupo étnico y en el interior de cada uno, como la relación entre indígenas y no étnicos, lo cual también se refleja en las estructuras sociodemográficas.

- Municipios de Morales, Piendamó, Cajibío y El Tambo. Se trata de municipios de la montaña caucana hacia el centro de este departamento y norte de Popayán, con minorías étnico-raciales más reducidas y por lo mismo, con un gran peso de la población mestiza/blanca expresada en los no étnicos, sin que se desconozca la significativa existencia población indígena y negra. Sus economías son más mixturadas, incluyendo unidades campesinas con explotaciones empresariales y de gran extensión (ganadería), al lado de actividades comerciales y de servicios. Los municipios cuya población indígena minoritaria es superior a la negra son Morales, Piendamó y El Tambo; mientras que en Cajibío es la negra.

Una región con amplio predominio demográfico negro e indígena.

Los 27 municipios que conforman la región entre el sur del Valle y el norte del Cauca presentan una clara población mayoritaria negra e indígena. A su vez, los dos departamentos, Valle y Cauca, están entre los de mayor concentración absoluta de grupos étnico-raciales del país: en poblaciones negra el Valle y en indígena el Cauca.

Se trata entonces de una región con un peso significativo en términos demográficos de poblaciones negras o afrocolombianas e indígenas, donde han sido siempre mayoría, dependiendo del tipo de municipio, de zona plana o montaña, según el largo proceso de configuración de la misma, que viene desde el período Colonial hasta finales del siglo XIX, a través de la estructura social de grandes haciendas cuyos propietarios articulaban ganado, agricultura, comercio y minería (Colmenares, 1979), y luego su rápida transformación a lo largo del siglo XX y primeros años del XXI, pero ya en una dinámica que está estrechamente relacionada con los polos urbanos de Cali y Popayán, y las actividades socioeconómicas, sobre todo agroindustriales e industriales, que entre las dos capitales departamentales se han venido desarrollando, de acuerdo con las tendencias del desarrollo económico del país y la especialización regional impuesta.

Los cuadros 1, 2 permiten una mirada reciente intercensal (1993-2005) de los pesos demográficos de los grupos étnico-raciales en los 27 municipios. Los cuadros 1 y 2,

respectivamente censos de 1993 y 2005, presentan las poblaciones negra e indígena en la región para cada municipio, total, cabecera y resto, y por departamento.

Los datos del censo de 1993 (Cuadro 1) arrojan el 8,1% de la población del Cauca como negra y el 14,8% indígena. Según el censo de 2005 se pasa al 21,8% (Cuadro 2) respectivamente. La duplicación porcentual de la población indígena en sólo 12 años se puede explicar mejor por problemas de subregistro en el censo de 1993. No obstante, paradójicamente en el Cauca se logró un mejor registro de afrocolombianos que en el Valle en 1993 (ver Cuadro 1). Como ya ha sido analizado (Barbary y Urrea, 2004) para el censo de 1993 la población negra tuvo serios inconvenientes en su captación en casi todo el país. Ahora bien, considerando también las serias limitaciones del registro indígena en el censo de 1993 se observa que aún así lo que capta ya es relevante: la cuarta parte de la población nortecaucana (25,3%) se reconocía indígena. Por otra parte, un 7,3% se reconoció perteneciente a una “comunidad negra”. O sea, la tercera parte (el 32,6%) de la población en los 19⁶ municipios nortecaucanos se reconoció perteneciente a un grupo étnico-racial (Cuadro 1). Este cuadro señala ya claramente las separaciones entre la zona plana de asentamientos negros y la zona de montaña de poblamiento indígena.

⁶ Para 1993 aún no existían como municipios Villarrica y Guachené.

Cuadro 1. Población negra e indígena de la región norte Cauca y sur del Valle por municipio y peso poblacional, para total, cabecera y resto, censo 1993															
Departamento/Municipio	Población ajustada con base retroproyecciones censo 2005, 1985-2020 y cálculos propios														
	Población Total					Población Cabecera					Población Resto				
	Población Total	Población Negra		Población Indígena		Población Total	Población Negra		Población Indígena		Población Total	Población Negra		Población Indígena	
	Total	Total	%	Total	%	Total	Total	%	Total	%	Total	Total	%	Total	%
Cauca Total	1107525	90047	8,1%	167804	14,8%	387634	5381	1,4%	8154	2,1%	719891	84665	11,8%	159651	22,2%
Buenos Aires	16457	4548	27,6%	1077	6,5%	1137	0	0,0%	93	8,2%	15320	4548	29,7%	984	6,4%
Cajibío	30201	25	0,1%	102	0,3%	1622	0	0,0%	0	0,0%	28578	25	0,1%	102	0,4%
Caldono	27129	452	1,7%	18788	69,4%	1433	419	29,2%	426	29,8%	25696	33	0,1%	18361	71,5%
Caloto	34507	10849	31,4%	6108	17,7%	3472	12	0,3%	13	0,4%	31035	10837	34,9%	6095	19,6%
Corinto	22631	2077	9,2%	5815	25,1%	13295	2025	15,2%	2074	15,6%	9336	52	0,6%	3741	40,1%
El Tambo	43990	2515	5,7%	1520	3,5%	3218	5	0,1%	6	0,2%	40772	2510	6,2%	1514	3,7%
Inzá	22170	91	0,4%	7536	34,0%	1523	64	4,2%	94	6,2%	20647	27	0,1%	7442	36,0%
Jambaló	10853	619	5,7%	10445	96,2%	926	609	65,7%	649	70,1%	9927	10	0,1%	9795	98,7%
Miranda	21540	771	3,6%	2723	12,0%	11074	13	0,1%	17	0,2%	10466	758	7,2%	2706	25,9%
Morales	23686	498	2,1%	8519	36,0%	1962	52	2,7%	53	2,7%	21725	446	2,1%	8466	39,0%
Padilla	9830	5869	59,7%	820	8,8%	3342	2	0,1%	742	22,2%	6487	5867	90,4%	78	1,2%
Páez	31144	443	1,4%	18891	60,6%	3118	138	4,4%	484	15,5%	28026	304	1,1%	18407	65,7%
Piendamó	27464	223	0,8%	990	3,5%	10363	55	0,5%	85	0,8%	17101	168	1,0%	905	5,3%
Puerto Tejada	44569	4247	9,5%	407	0,9%	39561	7	0,0%	346	0,9%	5008	4240	84,7%	61	1,2%
Santader de Quilichao	74526	4181	5,6%	7107	9,2%	30734	181	0,6%	517	1,7%	43792	4000	9,1%	6590	15,0%
Silvia	32080	507	1,6%	18618	57,7%	4375	407	9,3%	464	10,6%	27705	100	0,4%	18154	65,5%
Suárez	22777	222	1,0%	8	0,0%	7977	1	0,0%	3	0,0%	14800	221	1,5%	5	0,0%
Toribío	23665	865	3,7%	18944	80,1%	1.862	295	15,8%	418	22,4%	21.803	570	2,6%	18526	85,0%
Totoró	13806	61	0,4%	6295	45,7%	749	35	4,7%	35	4,7%	13057	26	0,2%	6260	47,9%
Subtotal Municipios	533024	39062	7,3%	134713	25,3%	141744	4319	3,0%	6522	4,6%	391280	34743	8,9%	128191	32,8%
Valle del Cauca Total	3589024	3409	0,1%	12377	0,3%	3007153	3133	0,1%	7345	0,2%	581871	276	0,0%	5032	0,9%
Buenaventura	238645	1	0,0%	598	0,3%	201547	0	0,0%	0	0,0%	37098	1	0,0%	598	1,9%
Candelaria	58836	0	0,0%	0	0,0%	18063	0	0,0%	0	0,0%	40773	0	0,0%	0	0,0%
Florida	53009	0	0,0%	2125	4,0%	38054	0	0,0%	0	0,0%	14955	0	0,0%	2125	14,2%
Jamundí	54953	0	0,0%	0	0,0%	36720	0	0,0%	0	0,0%	18233	0	0,0%	0	0,0%
Pradera	42653	0	0,0%	0	0,0%	36062	0	0,0%	0	0,0%	6591	0	0,0%	0	0,0%
Palmira	252579	0	0,0%	0	0,0%	207614	0	0,0%	0	0,0%	44965	0	0,0%	0	0,0%
Subtotal Municipios	700676	1	0,0%	2723	0,4%	538060	0	0,0%	0	0,0%	162615	1	0,0%	2723	1,7%
Total Municipios	1233700	39063	3,2%	137436	11,1%	679805	4319	0,6%	6522	1,0%	553895	34744	6,3%	130914	23,6%

Fuente: Censo 1993 con ajustes de cobertura con base proyecciones de población 1985-2020, a partir de ecuación compensadora de población y resultados Censo 2005.

Cuadro 2. Población negra e indígena de la región norte Cauca y sur del Valle por municipio y peso poblacional, para total, cabecera y resto, censo 2005

Departamento/Municipio	Población Conciliada														
	Población Total 30-Jun-2005					Población Cabecera 30-Jun-2005					Población Resto 30-Jun-2005				
	Población Total	Población Negra		Población Indígena		Población Total	Población Negra		Población Indígena		Población Total	Población Negra		Población Indígena	
	Total	%	Total	%	Total	Total	%	Total	%	Total	Total	%	Total	%	
Cauca Total	1.268.937	272290	21,5%	276247	21,8%	482.421	127273	26,4%	17339	3,6%	786.516	145017	18,4%	258908	32,9%
Buenos Aires	26961	18556	68,8%	4427	16,4%	1932	773	40,0%	16	0,8%	25029	17783	71,1%	4411	17,6%
Cajibío	34706	5475	15,8%	1292	3,7%	1586	231	14,6%	8	0,5%	33120	5244	15,8%	1284	3,9%
Caldono	30906	148	0,5%	21821	70,6%	1358	11	0,8%	349	25,7%	29548	137	0,5%	21472	72,7%
Caloto (con Guachené)	36921	23050	62,4%	8575	23,2%	4148	1821	43,9%	58	1,4%	32773	21229	64,8%	8516	26,0%
Guachené (solo)*	19523	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	4627	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	14896	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.
Caloto (solo)*	17398	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	4148	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	13250	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.
Corinto	28310	7253	25,6%	13505	47,7%	12153	6280	51,7%	890	7,3%	16157	973	6,0%	12615	78,1%
El Tambo	45804	2115	4,6%	4381	9,6%	5710	1256	22,0%	20	0,4%	40094	859	2,1%	4361	10,9%
Inzá	26989	26	0,1%	12777	47,3%	2140	4	0,2%	426	19,9%	24849	22	0,1%	12351	49,7%
Jambaló	14625	18	0,1%	14418	98,6%	1044	11	1,1%	898	86,0%	13581	7	0,1%	13520	99,6%
Miranda	33245	17088	51,4%	6483	19,5%	22021	12931	58,7%	1630	7,4%	11224	4157	37,0%	4853	43,2%
Morales	24391	1528	6,3%	10638	43,6%	1605	86	5,3%	119	7,4%	22786	1442	6,3%	10519	46,2%
Padilla	8336	8081	96,9%	59	0,7%	3919	3783	96,5%	9	0,2%	4417	4297	97,3%	50	1,1%
Paez	31800	1892	5,9%	21698	68,2%	2726	300	11,0%	548	20,1%	29074	1592	5,5%	21150	72,7%
Piendamó	35804	753	2,1%	5046	14,1%	12694	488	3,8%	544	4,3%	23110	265	1,1%	4503	19,5%
Puerto Tejada	44324	43212	97,5%	51	0,1%	39009	38044	97,5%	33	0,1%	5315	5168	97,2%	18	0,3%
Santander de Quilichao	80282	26737	33,3%	15698	19,6%	40251	11138	27,7%	1725	4,3%	40031	15598	39,0%	13972	34,9%
Silvia	30960	46	0,1%	24690	79,7%	4110	44	1,1%	1039	25,3%	26850	2	0,0%	23651	88,1%
Suárez	19244	11222	58,3%	4045	21,0%	4648	3372	72,5%	193	4,1%	14596	7850	53,8%	3852	26,4%
Toribío	26.512	60	0,2%	25427	95,9%	1.701	29	1,7%	1028	60,4%	24.811	30	0,1%	24399	98,3%
Totoró	17430	14	0,1%	13440	77,1%	1352	10	0,7%	533	39,4%	16078	4	0,0%	12907	80,3%
Villa Rica	14326	13879	96,9%	36	0,2%	10350	10149	98,1%	14	0,1%	3976	3730	93,8%	22	0,5%
Subtotal Municipios	611876	181151	29,6%	208506	34,1%	174457	90761	52,0%	10080	11,1%	437419	90390	20,7%	198427	45,4%
Valle del Cauca Total	4.161.425	1121671	27,0%	22752	0,5%	3.593.410	988188	27,5%	12936	0,4%	568.015	133484	23,5%	9815	1,7%
Buenaventura	328794	290158	88,2%	3353	1,0%	292947	259989	88,7%	893	0,3%	35847	30169	84,2%	2460	6,9%
Candelaria	70296	17565	25,0%	103	0,1%	19620	11504	58,6%	8	0,0%	50676	6061	12,0%	95	0,2%
Florida	56008	12795	22,8%	2663	4,8%	41057	12135	29,6%	362	0,9%	14951	660	4,4%	2301	15,4%
Jamundí	96993	52874	54,5%	864	0,9%	65758	32419	49,3%	126	0,2%	31235	20455	65,5%	738	2,4%
Pradera	48843	16506	33,8%	494	1,0%	42246	14587	34,5%	179	0,4%	6597	1920	29,1%	315	4,8%
Palmira	277465	40284	14,5%	554	0,2%	222246	30476	13,7%	388	0,2%	55219	9808	17,8%	166	0,3%
Subtotal Municipios	878399	430182	49,0%	8031	0,9%	683874	361109	52,8%	1956	0,3%	194525	69073	35,5%	6076	3,1%
Total Municipios	1490275	611333	41,0%	216538	14,5%	858331	451870	52,6%	12035	1,4%	631944	159463	25,2%	204502	32,4%

* Estimaciones de la población de Guachené y Caloto como municipios separados cada uno a 30 de junio de 2005, fecha del corte censal. El municipio de Guachené fue creado mediante el Decreto 0653 de diciembre de 2006. La población de cabecera y resto de los dos municipios diferenciada no coincide con las poblaciones antes de separarse los dos municipios, debido a que la nueva cabecera municipal de Guachené originalmente era el principal corregimiento del municipio de Caloto. Caloto con Guachené no separados se tomaron como base para el cálculo de las poblaciones total, cabecera y resto de los municipios del norte del Cauca. No hay datos disponibles para Guachené separado para el conjunto de los indicadores según grupo étnico-racial y tampoco indicadores por cabecera y resto.

Fuente: censo 2005, población conciliada.

En el Valle el censo de 1993 arroja muy pobres resultados, sobre todo para los afrocolombianos (Cuadro 1). Sin embargo, alcanzó a captar un 0,3% de población indígena en el total departamental y un 0,7% en el sur del Valle. Similar al Cauca aquí se produce una duplicación en 12 años de los efectivos. Para los indígenas podrían ser más creíbles los resultados entre los dos censos ya que no es un departamento históricamente con una significativa población indígena (comparar Cuadros 1 y 2), por lo que puede suponerse que el incremento poblacional se explique por fuertes inmigraciones indígenas desde el Cauca y otros departamentos del país que ha captado el censo de 2005. Esto último como se señalará hacia adelante es más plausible. Si se toma una sola región, sur Valle y norte Cauca, para el censo de 1993 las cifras son 3,2% de afrocolombianos y 11,1% de indígenas en los 26 municipios, pero ya sabemos que el censo de 1993 presentó un considerable fracaso en la captación de la población afrocolombiana, especialmente para el departamento del Valle (ver Cuadro 1). Ahora bien, qué pasa con los datos del censo de 2005.

De acuerdo con el Cuadro 2, en el Departamento del Cauca (41 municipios según el censo 2005), el 22,2% de la población se autoreconoció afrocolombiana y el 21,6% indígena, lo cual significa que en este departamento el 43,8% se autoreconoció, ya sea como indígena o como negro-a, mientras el 56,2% se clasificó sin pertenencia étnico-racial. Pero en los municipios del norte del Cauca, de norte a sur, Puerto Tejada, Villarrica, Caloto (incluyendo a Guachené), Padilla, Miranda, Santander de Quilichao, Buenos Aires, Suárez, Corinto, Toribío, Jambaló, Caldono, Páez, Inzá, Silvia, Totoró, Piendamó, Cajibío, Morales y El Tambo, la población que se autoreconoció como afrocolombiana alcanzó el 29,6% y la indígena el 30,9%; o sea, el 60,5% de toda la población en los 20 o 21 municipios nortecaucanos (si separamos Guachené de Caloto) es negra o indígena.

En el Departamento del Valle del Cauca (42 municipios) el 27,2% de la población (Cuadro 2) se autoreconoció como afrocolombiana y el 0,56% como indígena en el censo 2005; o sea que el 72,2% no se autoreconoció bajo ningún criterio étnico-racial. Por el contrario, en los municipios del sur del Valle, Buenaventura, Candelaria, Florida, Palmira, Pradera y Jamundí, la población afrocolombiana es el 49,0% y la indígena el 0,9% del total de la población de los seis municipios; es decir, se trata de una subregión vallecaucana con predominio de gente negra y con una población indígena muy reducida.

Esto significa que los 27 municipios de la región sur del Valle y norte del Cauca – incluyendo a Guachené - presentan claramente un fuerte componente étnico-racial para el 2005 (Cuadro 2): el 50,0% en los seis del sur del Valle y el 63,7% en los veintiuno del norte del Cauca. Para el conjunto de los 27 municipios que constituyen la región estudiada los porcentajes son los siguientes: el 41,0% de su población se reconoció como afrocolombiana y el 14,5% como indígena, o sea, el 55,6% de la población total de los 27 municipios es negra o indígena según el criterio de autoreconocimiento.

Diferencias por cabecera y resto, censo 2005:

Sin embargo, al diferenciar entre cabecera y resto se presentan variaciones interesantes para los 27 municipios y los dos departamentos (Cuadro 2), según autoreconocimiento étnico-racial. Por supuesto, esto último hay que relacionarlo con la distribución urbano-rural, el tamaño del municipio y los procesos históricos de poblamiento en la larga duración. Respecto al último factor hay que señalar, primero, la presencia de importantes poblaciones amerindias originarias (Nasa, Guambiana, Totoró y Coconuco)

especialmente en la cordillera central en ambos departamentos a la llegada de los españoles, además de las que ellos introducen desde lo que hoy día es el Ecuador y el Perú (Yanacona), hasta la presencia de otros grupos étnicos llegados en los últimos 30 años de otras regiones del país. Segundo, la población negra esclava introducida desde el siglo XVI mediante lo que se constituye el sistema de la hacienda colonial esclava, que articula la minería de aluvión en el Pacífico y el valle geográfico del río Cauca y la explotación ganadera en este último con la actividad del comercio entre los principales centros urbanos coloniales del Suroccidente en lo que hoy en día es Colombia, sobre todo entre los siglos XVII y XVIII. Esto se prolonga hasta unos años más tarde de la abolición de la esclavitud en el siglo XIX, lo cual da como resultado en la zona plana del valle geográfico de una economía campesina negra relativamente próspera hasta la década del 40 en el siglo XX y que precisamente cubre los municipios del sur del Valle y norte del Cauca, parte plana. Por otro lado, Buenaventura se constituirá en uno de los municipios de mayor población negra a lo largo de la costa Pacífica, fenómeno que se intensifica una vez se consolida a lo largo del siglo XX como el principal puerto colombiano de exportación e importación, gracias al ferrocarril del Pacífico y luego a la carretera que la une con Cali.

De los 27 municipios, Buenaventura y Palmira en el Valle son al mismo tiempo ciudades intermedias con un poco menos de 300.000 habitantes, siguiendo en orden de importancia Jamundí con casi 66 mil habitantes en el casco urbano, fuertemente relacionado con Cali en razón de conformarse como una “ciudad dormitorio” en el área metropolitana, y Florida, Pradera en el Valle y Santander de Quilichao en el Cauca, con poblaciones urbanas las dos primeras por encima de 40 mil habitantes y la tercera con un poco más de 40 mil. No obstante, Candelaria en el Valle al sumar la cabecera con los centros poblados que ya tienen una conformación de áreas urbanas, se acerca a 60 mil personas, igualmente en estrecha relación con el proceso de metropolización alrededor de Cali. Un sexto centro urbano importante entre los 27 municipios es Puerto Tejada, con un poco menos de 40 mil habitantes, que con Santander de Quilichao constituyen el eje urbano más importante del norte del Cauca en fuerte interacción con Cali.

El 52,5% de la población de cabecera en los 21 municipios nortecaucanos es afrocolombiana y el 1,5% indígena (Cuadro 2), mientras en el resto el 21,9% afrocolombiana y el 42,5% indígena. De esta manera, en el área urbana de la subregión nortecaucana el 54,0% de toda la población es negra o indígena y en el área rural el 64,4%. Para el total del departamento del Cauca, en cabecera el 26,4% afrocolombiana y el 3,6% indígena; en el resto el 18,4% afrocolombiana y el 32,9% indígena; lo cual significa que el 30,0% de la población urbana se construye étnico-racialmente y el 51,4% de la población rural (Cuadro 2).

Los 6 municipios del sur del Valle, presentan así la distribución étnico-racial en cabecera: el 52,8% afrocolombiano y el 0,3% indígena; en resto: el 35,5% afrocolombiano y el 3,1% indígena (Cuadro 2). Así, el 53,1% de la población en cabecera o área urbana es negra e indígena y el 38,6% en el resto o área rural, con un claro predominio afrocolombiano. Para el departamento del Valle del Cauca (42 municipios, incluyendo a Cali) la distribución es la siguiente: en cabecera, el 27,5% afrocolombiana y el 0,36% indígena; en el resto el 23,5% afrocolombiana y el 1,73% indígena; es decir, el 27,8% de la población urbana del Valle tiene autoreconocimiento étnico-racial y el 25,2% de la rural (ver Cuadro 2), lo cual contrasta con una significativa mayor participación porcentual de la gente negra en los municipios del sur del Valle, como se observó antes, tanto en la cabecera como en el resto.

Los patrones de concentración étnico-racial precedentes hay que observarlos a la luz de tendencias demográficas más amplias, como lo es la distribución urbano-rural de la población y el tamaño de algunos centros urbanos municipales. En primer lugar, mientras el 86,4% de la población vallecaucana reside en cabeceras o centros urbanos, en la caucana es apenas el 38,02%, de acuerdo con el censo 2005, curiosamente encontrándose entre los departamentos con un peso menor al 40% de población en cabecera⁷. Este factor es fundamental para explicar que un poco más de la mitad de la población rural caucana es indígena o negra. Por el contrario, en el caso del Valle del Cauca el patrón predominantemente urbano de este departamento se relaciona de la misma manera con la mayor concentración urbana de la población afrocolombiana al igual que la indígena⁸.

Por otro lado, se advierte que en el período intercensal 1993-2005 se registran considerables incrementos de la población indígena en la mayor parte de municipios de la región estudiada, sobre todo en el departamento del Cauca, bastante sospechosos, especialmente en la zona resto pero igual en cabecera, ya que no son consistentes con una dinámica poblacional de alta emigración desde una zona de economía campesina indígena, ni siquiera explicable con altas tasas de fecundidad. Esto hace pensar que no sólo el censo de 1993 fue un fracaso para captar la población negra, como ya en varios trabajos se ha señalado (Barbary y Urrea, op. Cit.; Urrea, 2006 y 2007), sino lo más sorprendente es que la población indígena tampoco fue bien captada en dicho censo⁹. En el caso de la población negra para este censo el subregistro en el Valle fue generalizado¹⁰.

⁷ Para el censo de 1993 el 35% de la población del Cauca residía en cabecera y el 83,8% para el Valle. En 12 años se pasa al 38% y 86,4% respectivamente en cabecera. Esto revela un fuerte rezago rural para el Cauca, lo cual como se verá más adelante se asocia a indicadores más bajos de condiciones de vida, vía NBI mayores.

⁸ Si al nivel nacional el 72,6% de la población negra residía en cabeceras (censo 2005), en el Valle era el 88,5% y en el Cauca el 49,4%, o sea, que ligeramente un poco más de la mitad residía en el resto o área rural en el 2005 en este último departamento. Por el contrario, como era de esperar, la población indígena tenía una mayor sobre concentración rural: al nivel nacional el 78,6% residía en la zona resto frente al 21,4% en cabecera. La diferencia entre los dos departamentos sobre patrones urbano-rurales de las poblaciones indígenas es relevante: si en el Valle del Cauca en cabecera residía el 56,1% de los indígenas del departamento en el Cauca era sólo el 6,9%. De todos modos, entre el censo de 1993 y el de 2005 la urbanización de la población indígena en el país es considerable, al pasar del 7,8% al 21,4% para el total nacional.

⁹ Curiosamente se trata de municipios que históricamente siempre han sido casi en su totalidad indígenas, de ahí que la sorpresa sea mayor. Esto hace pensar que el incremento intercensal de los indígenas quizás obedeció más al enorme subregistro del censo de 1993 en los departamentos con municipios mayoritariamente indígenas, como son los casos de Cauca y La Guajira. Por otro lado, entre los dos censos se presenta un sector de la población indígena que no sabe o no conoce a cuál grupo étnico pertenece. Para el Departamento del Cauca en 1993 fue el 5,7% del total, descendiendo al 3,8% en el censo de 2005; en el caso del Departamento del Valle en 1993 fue de 49,2% sin grupo étnico específico para pasar al 18,0% en el 2005. Esto último muestra también una menor captación de la población indígena por grupo étnico para el censo de 1993, especialmente en departamentos como el Valle; si bien hay que señalar que este fenómeno puede tener que ver más con sectores campesinos-indígenas por fuera de las áreas de resguardo, con una mayor dificultad de autoreconocimiento identitario. Lo importante es que se observa un avance importante entre los dos censos al respecto.

¹⁰ Como puede observarse en el Cuadro 1 en el municipio de Buenaventura el censo de 1993 sólo registró a 1 persona que se autoreconoció de “comunidad negra” y ninguna persona en Candelaria, Jamundí, Palmira, Florida y Pradera.

Tendencias sociodemográficas municipales en el período intercensal 1993-2005.

Este capítulo aborda los diferenciales sociodemográficos de los 27 municipios¹¹, en términos comparativos con los totales departamentales, a través de la teoría clásica en las ciencias sociales de la transición demográfica¹². En este artículo se propone una clasificación de los municipios de la región en tres fases de la transición demográfica, construidas de acuerdo con los patrones de comportamiento de los indicadores observados en los 27 municipios: a) municipios en una fase avanzada de la transición, reflejadas en tasas de dependencia juvenil menores a 0,6¹³ y la razón de hijos menores de 5 años por mujeres en edad fértil inferior a 0,4¹⁴; además de fuertes descensos en el período intercensal 1993-2005 de ella; y un tamaño promedio del hogar inferior a 4,0 personas; b) municipios en una fase rezagada, con las mayores tasas de dependencia juvenil, en general por encima de 0,65, razón de hijos superior a 0,48, y tamaños promedio del hogar superiores a 4,5 personas; c) municipios en una fase intermedia, cuyos indicadores se mueven entre las dos fases anteriores, con tasas de dependencia juvenil entre 0,6 y 0,65 y un tamaño promedio del hogar entre 4 y 4,5 personas. De cualquier manera los municipios en una fase rezagada ya venían años atrás con descensos en la mortalidad infantil y en las tasas de fecundidad, reflejado en menores tasas de dependencia juvenil y de razón de hijos por mujeres en edad fértil; es decir, ya habían entrado en el proceso de transición demográfica. Por otro lado, como se podrá observar, hay una fuerte asociación con otros indicadores concomitantes de tipo sociodemográfico y socioeconómico, lo cual permite ordenar el análisis de los mismos a través del eje analítico del patrón de transición demográfica propuesto.

Para observar mejor la dinámica de cambio en 25 de los 27 municipios entre 1993 y 2005, de los diferentes indicadores demográficos básicos, al lado de otros como tamaño promedio del hogar, migración y porcentaje de población con NBI, pero sin diferenciar por grupos étnico-raciales debido a la limitación que se tiene con la información censal de 1993 ya antes comentada, ordenados según los tres grupos de la transición, nos remitimos a los cuadros 3.1, 3.2 y 3.3. Para Villarrica únicamente tenemos los datos del censo 2005 y en el caso de Caloto (excluyendo a Guachené) y Guachené los principales indicadores para el total de la población en el 2005.

¹¹ Recordemos que datos para Guachené y Caloto sin Guachené, son disponibles sólo para los indicadores básicos demográficos correspondientes al total municipal, cabecera y resto (tasas de dependencia, masculinidades y razón de hijos por mujeres en edad fértil), pero sin diferenciación por grupo étnico-racial y sin la referencia de 1993 porque no existía como municipio.

¹² Ver los trabajos clásicos sociológicos y demográficos de Thompson, 1929; Thompson et al. 1963; Davis, 1963; Coale, 1973; y Caldwell, 1976. Para Colombia véase Flórez, 2000. Según estos autores las sociedades agrícolas tradicionales necesitaban altas tasas de fecundidad para compensar las altas tasas de mortalidad; con la urbanización y sobre todo con la expansión del sistema educativo y los cambios económicos y sociales macro y micro concomitantes, se genera una fuerte disminución de las tasas de mortalidad, en particular las tasas de mortalidad de menores de un año, mientras que las tasas de fecundidad también declinan a medida que se valoran pocos hijos debido a que la organización familiar se articula a un patrón de vida moderno en las diferentes clases sociales. Este proceso conlleva a incrementos importantes en la esperanza de vida y por ello a un envejecimiento del conjunto de la población.

¹³ Por cada persona entre 15-64 años se tiene menos de 0,6 personas menores de 15 años.

¹⁴ Por cada mujer en edad fértil (15-49 años) se tiene menos de 0,4 niños menores de 5 años.

Municipios con un patrón de transición demográfica avanzada (ver Cuadro 3.1):

Se trata de 11 municipios organizados de acuerdo al patrón de mayor a menor cambio demográfico: Palmira, Candelaria, Jamundí, Santander de Quilichao, Puerto Tejada, Florida, Padilla, Pradera, Piendamó, Caloto -sin Guachené- y Villarrica. En general, son municipios que presentaron descensos significativos en las tasas de dependencia juvenil, por debajo de 0,6 con excepción del municipios de Guachené, por lo que éste estaría más en el segundo grupo de municipios (transición intermedia). De los 11 municipios, 3 de ellos - Palmira, Candelaria y Jamundí - tienen en el 2005 tasas menores de dependencia juvenil a 0,5, por lo que configuran el grupo con un patrón más moderno. Las dependencias totales son superiores a 0,7 personas de 65 años y más por cada persona entre 15-64 años, de nuevo con excepción de Guachené. Por otro lado, tienen para el 2005 un tamaño promedio del hogar no mayor a 4 personas, con la excepción de Villarrica; mientras que en el censo de 1993, no pasaban de 5 personas promedio del hogar, con excepción de Caloto y del Departamento del Cauca.

Igualmente, son municipios que además se caracterizan por una razón de hijos menores de 5 años por mujer en edad fértil en fuerte descenso entre 1993 y 2005, y a la vez una razón baja para el 2005, tanto en cabecera como en resto. Palmira se destaca, por ser el municipio con la menor TDJ, razón de hijos*mujer y tasa de dependencia total. De los 10 municipios restantes, Candelaria presenta un considerable descenso en sus tasas de dependencia (especialmente la juvenil) y razón de hijos*mujer (0,29), le siguen Jamundí, Santander de Quilichao, Puerto Tejada y Florida con tasas de razón hijos*mujer entre 0,33 y 0,36. Un segundo grupo de municipios lo constituyen Padilla, Pradera, Piendamó, Caloto y Villarrica, cuyas tasas de razón hijos*mujer varían entre 0,40 y 0,43. Solamente Palmira y Candelaria presentan una tasa de razón hijos*mujer menor que la del Valle (0,31, ver Cuadro 3.1.)¹⁵, sin embargo los otros 9 municipios tienen tasas cercanas, aunque superiores. Son también municipios cuyo índice de masculinidad es inferior a 1,0, también con la excepción de Piendamó.

Piendamó resulta en este grupo un caso excepcional, porque si bien los datos de dependencia juvenil y razón de hijos*mujer en edad fértil se mueven en los parámetros similares a los del conjunto del primer grupo que lo permiten ubicar entre un municipio de transición demográfica avanzada, las tasas globales de fecundidad en el resto, como veremos más adelante responde más al del segundo grupo.

Municipios intermedios entre una transición demográfica avanzada y un mayor rezago (ver Cuadro 3.2):

Se trata de los siguientes 8 municipios de la gran región: Buenos Aires, Corinto, Miranda, El Tambo, Buenaventura, Suárez, Morales y Cajibío. En ellos la transición demográfica está acercándose a los 11 anteriores pero aún registran una base piramidal con peso importante, lo cual se refleja en tasas de dependencia juvenil entre 0,6 y 0,65 y tamaños promedios del hogar mayores, entre 3,87 (El Tambo) y 4,73 (Corinto), para el censo 2005. Por otro lado, de los 8, Buenos Aires, Corinto, Suárez y Morales para el censo de 1993 tenían promedios de personas por hogar por encima de 5 miembros; en cambio, en los del primer grupo sólo Caloto. Estos municipios tienen mayores tasas de razón de hijos*mujer en edad fértil: entre 0,43 (Buenos Aires) y 0,54 (Cajibío). Estas

¹⁵ El departamento del Valle del Cauca se encuentra entre Candelaria y Jamundí y el Cauca entre Caloto y Villarrica.

tasas superan la del departamento del Cauca (0,42). Con excepción de Buenos Aires, Buenaventura y Miranda presentan un índice de masculinidad de 1,0 o más. Por la extensa base piramidal Buenaventura podría encontrarse en el tercer grupo (el más rezagado en su transición demográfica), al punto que no presenta grandes cambios de estructuras de población en su base piramidal en el período intercensal 1993-2005. Sin embargo, su tasa de dependencia juvenil y la razón de hijos*mujer lo ubican más en un municipio de transición demográfica intermedia.

Municipios con el mayor rezago en la transición demográfica, ver Cuadro 3.3.:

Se trata de municipios mayoritariamente indígenas (Nasa y Guambiano y de otros pueblos) del norte del Cauca: Silvia, Totoró, Jambaló, Toribío, Caldono, Inzá y Páez. Ver Cuadro 3.3. Los siete poseen hacia el 2005 todavía una base piramidal importante (menores de 15 años o una muy alargada de menores de 5 años) que les significa altas tasas de dependencia juvenil, ligeramente por debajo pero cercana o por encima de 0,65, llegando algunos a tasas por encima de 0,7, sobre todo en la zona resto, donde están las áreas de resguardo. Algunos de estos municipios presentan tamaños promedio de hogar por encima de 4,5 en el 2005. Las razones de hijos*mujer varían entre 0,49 (Silvia) y 0,72 (Páez) en el 2005 y algunos como Toribío, Jambaló, Inzá y Páez, venían de razones entre 0,73 y 0,80 hijos*mujer en 1993. Aunque Silvia tiene una baja razón de hijos*mujer, ya desde el censo de 1993, muy similar a las del grupo anterior, sin embargo, otros indicadores como la tasa de dependencia juvenil y la total, y el tamaño promedio del hogar ameritan que este municipio se ubique en este grupo. En ellos el índice de masculinidad es siempre sistemáticamente superior a 1,0, lo cual revela que son espacios expulsivos de mujeres indígenas hacia los centros urbanos.

Estos 7 municipios tienen los tamaños promedio del hogar más altos de los 26 municipios observados, todos por encima de 4,2 miembros y cuatro de ellos por encima de 4,6 miembros para el censo 2005. En 1993 tenían tamaños promedio del hogar considerablemente altos, entre 5,0 y 6,3 personas por hogar, lo cual indica que se produjeron importantes cambios en el período censal 1993-2005: a) un proceso de constitución de nuevos hogares gracias a la ampliación de las áreas de resguardo indígena mediante recuperación y compra; b) un proceso de disminución de las tasas de fecundidad, lo cual se observa indirectamente en los descensos de la razón de hijos*mujeres en edad fértil entre 1993 y 2005, para total, cabecera y resto (ver Cuadro 3.3), que en algunos de estos municipios fueron significativas, a pesar de que todavía siguen altas; y c) no puede desconocerse la dinámica de migración hacia otros municipios y centros urbanos, especialmente de las mujeres Nasa. Sin embargo, todavía los tamaños promedio del hogar son altos en términos comparativos con el resto de municipios de la región.

Cuadro 3.1 Municipios con transición demográfica avanzada

Indicadores	Año	Palmira			Candelaria			Departamento del Valle del Cauca			Jamundí			Santander de Quilichao		
		Total	Cabecera	Resto	Total	Cabecera	Resto	Total	Cabecera	Resto	Total	Cabecera	Resto	Total	Cabecera	Resto
Dependencia Juvenil	1993	0,44	0,43	0,53	0,57	0,53	0,59	0,48	0,46	0,58	0,51	0,47	0,61	0,63	0,53	0,72
	2005	0,40	0,38	0,45	0,44	0,37	0,46	0,44	0,43	0,51	0,48	0,46	0,53	0,51	0,44	0,60
Dependencia Senil	1993	0,08	0,08	0,08	0,07	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
	2005	0,12	0,12	0,10	0,09	0,10	0,09	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,11	0,10	0,09	0,11
Dependencia Total	1993	0,53	0,51	0,61	0,64	0,59	0,66	0,55	0,53	0,65	0,58	0,54	0,68	0,70	0,60	0,79
	2005	0,52	0,50	0,55	0,53	0,47	0,55	0,55	0,54	0,62	0,58	0,56	0,64	0,61	0,53	0,70
Razón niños * mujer	1993	0,32	0,30	0,41	0,43	0,38	0,46	0,34	0,32	0,49	0,36	0,33	0,44	0,45	0,34	0,55
	2005	0,26	0,25	0,32	0,29	0,25	0,31	0,31	0,30	0,39	0,33	0,30	0,38	0,35	0,28	0,43
Índice de masculinidad	1993	0,94	0,92	1,02	1,00	0,97	1,02	0,94	0,91	1,11	0,96	0,95	0,99	0,98	0,91	1,03
	2005	0,93	0,90	1,02	0,97	0,96	0,98	0,92	0,90	1,07	0,94	0,91	1,00	0,95	0,89	1,02
Tamaño promedio del hogar	1993	4,20	4,17	4,38	4,50	4,51	4,50	4,27	4,21	4,63	4,42	4,35	4,57	4,92	4,44	5,36
	2005	3,68	3,64	3,83	3,65	3,49	3,71	3,78	3,77	3,79	3,89	3,99	3,69	3,98	3,80	4,19
% Hogares con miembros en el exterior	2005	10,60			2,97	3,22	2,86	6,38	6,96	2,56	4,32	5,50	0,88	1,45	2,45	0,32
%Población migrante de toda la vida	1993	41,60			61,19			46,93			52,86			36,49		
%Población migrante reciente	1993	16,50			20,03			17,59			24,01			16,08		
% Población NBI	1993	21,60	19,90	30,64	28,37	27,95	28,58	24,63	22,88	34,76	27,69	23,47	37,00	38,20		
	2005	12,75	10,04	23,64	13,73	17,89	12,12	15,57	14,01	25,79	15,55	8,48	31,77	33,34	13,95	53,08

Indicadores	Año	Puerto Tejada			Florida			Padilla			Pradera		
		Total	Cabecera	Resto	Total	Cabecera	Resto	Total	Cabecera	Resto	Total	Cabecera	Resto
Dependencia Juvenil	1993	0,65	0,65	0,64	0,58	0,55	0,65	0,63	0,62	0,63	0,60	0,60	0,60
	2005	0,55	0,55	0,54	0,52	0,51	0,53	0,56	0,54	0,58	0,55	0,56	0,51
Dependencia Senil	1993	0,07	0,07	0,08	0,07	0,07	0,08	0,08	0,10	0,07	0,08	0,08	0,08
	2005	0,09	0,09	0,09	0,11	0,11	0,12	0,14	0,13	0,15	0,11	0,11	0,12
Dependencia Total	1993	0,72	0,72	0,72	0,65	0,62	0,73	0,71	0,71	0,70	0,68	0,68	0,69
	2005	0,64	0,64	0,63	0,63	0,62	0,65	0,70	0,67	0,73	0,66	0,67	0,63
Razón niños * mujer	1993	0,48	0,48	0,53	0,42	0,40	0,50	0,46	0,45	0,46	0,43	0,43	0,44
	2005	0,35	0,35	0,38	0,36	0,35	0,38	0,41	0,39	0,43	0,40	0,40	0,37
Índice de masculinidad	1993	0,93	0,92	1,07	0,98	0,96	1,06	1,00	0,94	1,03	0,97	0,95	1,11
	2005	0,90	0,89	1,00	0,97	0,95	1,01	0,96	0,93	0,99	0,97	0,95	1,08
Tamaño promedio del hogar	1993	4,43	4,43	4,48	4,71	4,45	5,64	4,84	4,03	5,45	4,58	4,59	4,50
	2005	3,98	4,01	3,79	3,90	3,90	3,89	3,77	3,68	3,85	4,01	4,08	3,66
% Hogares con miembros en el exterior	2005	3,64	3,96	1,43	4,06	4,88	1,82	1,05	1,41	0,71	6,21	7,02	1,54
%Población migrante de toda la vida	1993	39,27			57,52			28,44			55,21		
%Población migrante reciente	1993	16,32			19,68			10,55			20,41		
% Población NBI	1993	31,71			33,00	29,07	43,95	46,03			35,86	35,77	36,36
	2005	18,05	18,52	14,56	21,47	18,24	30,33	22,21	18,68	25,38	23,78	22,78	30,20

Indicadores	Año	Piendamó			Caloto (*)			Departamento del Cauca			Villa Rica		
		Total	Cabecera	Resto	Total	Cabecera	Resto	Total	Cabecera	Resto	Total	Cabecera	Resto
Dependencia Juvenil	1993	0,65	0,62	0,67	0,72	0,57	0,74	0,69	0,57	0,77	-	-	-
	2005	0,54	0,52	0,56	0,59	0,44	0,61	0,55	0,46	0,62	0,57	0,58	0,55
Dependencia Senil	1993	0,09	0,09	0,10	0,08	0,11	0,07	0,08	0,08	0,08	-	-	-
	2005	0,12	0,11	0,12	0,11	0,12	0,11	0,11	0,10	0,12	0,09	0,09	0,11
Dependencia Total	1993	0,74	0,71	0,76	0,80	0,68	0,81	0,77	0,65	0,85	-	-	-
	2005	0,66	0,63	0,68	0,70	0,56	0,72	0,66	0,56	0,74	0,66	0,67	0,65
Razón niños * mujer	1993	0,55	0,46	0,63	0,55	0,42	0,57	0,52	0,38	0,63	-	-	-
	2005	0,41	0,37	0,44	0,43	0,28	0,45	0,42	0,32	0,51	0,42	0,44	0,35
Índice de masculinidad	1993	1,08	0,94	1,19	0,99	0,95	1,00	1,01	1,02	1,01	-	-	-
	2005	1,02	0,93	1,08	0,96	0,94	0,96	0,99	0,91	1,06	0,93	0,92	0,97
Tamaño promedio del hogar	1993	4,75	4,45	4,97	5,98	4,42	6,23	5,62	4,56	6,50	-	-	-
	2005	3,90	3,93	3,88	3,82	3,80	3,82	4,06	3,90	4,18	4,29	4,37	4,07
% Hogares con miembros en el exterior	2005	0,62	0,61	0,63	0,53	1,28	0,43	1,31	2,36	0,54	1,64	1,05	3,12
%Población migrante de toda la vida	1993	34,58			27,06			25,25			-	-	-
%Población migrante reciente	1993	14,61			9,61			9,90			-	-	-
% Población NBI	1993	47,51			50,85			56,40			-	-	-
	2005	38,12	26,47	44,48	38,08	13,95	41,07	46,41	23,97	61,59	30,65	34,32	20,89

Indicadores	Año	Caloto (sin Guachené)			Guachené		
		Total	Cabecera	Resto	Total	Cabecera	Resto
Dependencia Juvenil		0,52	SI	SI	0,68	SI	SI
Dependencia Senil		0,10	SI	SI	0,11	SI	SI
Dependencia Total		0,62	SI	SI	0,79	SI	SI
Razón niños * mujer		0,37	SI	SI	0,54	SI	SI
índice de masculinidad		0,98	SI	SI	1,00	SI	SI

Cuadro 3.2 Municipios con transición demográfica intermedia

Indicadores	Año	Buenos Aires			Corinto			Miranda			El Tambo		
		Total	Cabecera	Resto	Total	Cabecera	Resto	Total	Cabecera	Resto	Total	Cabecera	Resto
Dependencia Juvenil	1993	0,81	0,57	0,83	0,75	0,72	0,81	0,64	0,57	0,72	0,77	0,60	0,79
	2005	0,59	0,46	0,60	0,61	0,56	0,66	0,64	0,67	0,58	0,53	0,53	0,53
Dependencia Senil	1993	0,08	0,12	0,08	0,08	0,09	0,06	0,08	0,08	0,07	0,09	0,10	0,09
	2005	0,09	0,13	0,09	0,09	0,10	0,08	0,11	0,11	0,10	0,15	0,15	0,15
Dependencia Total	1993	0,90	0,69	0,91	0,83	0,81	0,87	0,72	0,66	0,79	0,86	0,70	0,88
	2005	0,68	0,59	0,69	0,70	0,66	0,74	0,75	0,78	0,68	0,68	0,68	0,68
Razón niños * mujer	1993	0,59	0,32	0,61	0,61	0,56	0,70	0,46	0,39	0,55	0,61	0,39	0,63
	2005	0,43	0,42	0,44	0,44	0,37	0,51	0,49	0,51	0,43	0,48	0,56	0,46
Índice de masculinidad	1993	1,01	1,02	1,01	1,07	1,06	1,11	0,99	0,94	1,05	1,03	0,92	1,04
	2005	1,00	0,93	1,00	1,01	0,95	1,06	1,00	0,99	1,01	1,04	0,93	1,06
Tamaño promedio del hogar	1993	5,09	4,16	5,18	5,74	5,45	6,26	4,86	4,37	5,58	4,73	4,44	4,76
	2005	4,73	4,01	4,81	3,87	3,87	3,88	4,00	4,09	3,80	3,90	4,19	3,84
% Hogares con miembros en el exterior	2005	1,12	2,71	0,94	0,93	1,58	0,35	1,72	1,69	1,77	0,48	0,43	0,49
%Población migrante de toda la vida	1993	20,03			37,76			49,04			15,94		
%Población migrante reciente	1993	9,31			12,91			17,22			4,95		
% Población NBI	1993	61,07			60,81			40,00			67,47		
	2005	57,86	25,89	60,78	52,92	21,25	81,02	50,19	51,24	47,62	52,03	33,77	55,70

Indicadores	Año	Buenaventura			Suárez			Morales			Cajibío		
		Total	Cabecera	Resto	Total	Cabecera	Resto	Total	Cabecera	Resto	Total	Cabecera	Resto
Dependencia Juvenil	1993	0,68	0,65	0,91	0,68	0,67	0,68	0,79	0,63	0,80	0,76	0,58	0,77
	2005	0,64	0,62	0,80	0,65	0,57	0,68	0,65	0,67	0,65	0,62	0,49	0,63
Dependencia Senil	1993	0,05	0,05	0,08	0,05	0,05	0,05	0,07	0,09	0,07	0,08	0,07	0,08
	2005	0,08	0,07	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,16	0,10	0,12	0,12	0,12
Dependencia Total	1993	0,74	0,70	0,99	0,73	0,72	0,73	0,86	0,72	0,87	0,84	0,65	0,85
	2005	0,72	0,70	0,91	0,76	0,66	0,79	0,76	0,82	0,75	0,74	0,61	0,75
Razón niños * mujer	1993	0,47	0,43	0,78	0,47	0,44	0,49	0,69	0,41	0,73	0,61	0,41	0,63
	2005	0,50	0,48	0,77	0,52	0,42	0,56	0,52	0,55	0,52	0,54	0,33	0,55
Índice de masculinidad	1993	0,93	0,91	1,03	1,13	1,15	1,12	1,19	1,02	1,21	1,07	0,87	1,09
	2005	0,93	0,92	1,05	1,09	0,98	1,12	1,11	0,97	1,12	1,12	0,95	1,12
Tamaño promedio del hogar	1993	4,73	4,70	4,92	5,26	5,28	5,25	5,14	4,35	5,22	4,79	4,22	4,82
	2005	4,41	4,46	4,03	4,28	3,81	4,45	4,29	4,09	4,30	4,06	3,41	4,10
% Hogares con miembros en el exterior	2005	4,59	4,96	1,71	0,65	1,19	0,46	0,58	2,31	0,45	0,54	0,00	0,57
%Población migrante de toda la vida	1993	29,70			19,47			20,18			13,44		
%Población migrante reciente	1993	12,20			7,32			7,10			4,49		
% Población NBI	1993	36,04			70,23			78,49			66,60		
	2005	35,47	34,47	44,14	59,55	28,40	69,10	62,23	25,80	64,76	63,41	22,03	65,40

Cuadro 3.3 Municipios con transición demográfica rezagada

Indicadores	Año	Silvia			Totoró			Jambaló		
		Total	Cabecera	Resto	Total	Cabecera	Resto	Total	Cabecera	Resto
Dependencia Juvenil	1993	0,68	0,46	0,72	0,74	0,59	0,74	0,96	0,69	0,99
	2005	0,65	0,43	0,69	0,67	0,49	0,69	0,76	0,51	0,78
Dependencia Senil	1993	0,07	0,08	0,06	0,06	0,09	0,05	0,06	0,07	0,06
	2005	0,09	0,12	0,09	0,09	0,07	0,09	0,08	0,06	0,08
Dependencia Total	1993	0,75	0,54	0,79	0,79	0,69	0,80	1,03	0,76	1,06
	2005	0,74	0,55	0,77	0,76	0,56	0,78	0,84	0,56	0,86
Razón niños * mujer	1993	0,55	0,31	0,60	0,60	0,42	0,61	0,82	0,62	0,85
	2005	0,49	0,28	0,52	0,58	0,37	0,60	0,63	0,35	0,65
Índice de masculinidad	1993	0,99	0,95	0,99	1,05	1,00	1,05	1,09	1,10	1,09
	2005	1,01	0,89	1,02	1,02	0,91	1,04	1,07	1,23	1,06
Tamaño promedio del hogar	1993	6,06	4,82	6,30	5,70	4,89	5,80	5,90	5,80	5,94
	2005	4,94	3,71	5,20	4,69	4,03	4,76	4,59	4,45	4,60
% Hogares con miembros en el exterior	2005	0,48	1,90	0,18	0,21	0,00	0,23	0,25	0,84	0,20
%Población migrante de toda la vida	1993	10,68			11,19			9,55		
%Población migrante reciente	1993	4,81			4,92			2,63		
% Población NBI	1993	80,03			85,66			100,00		
	2005	50,26	12,22	56,07	60,74	32,40	63,10	73,03	23,15	76,46

Indicadores	Año	Toribio			Caldono			Inzá			Páez		
		Total	Cabecera	Resto	Total	Cabecera	Resto	Total	Cabecera	Resto	Total	Cabecera	Resto
Dependencia Juvenil	1993	0,95	0,75	0,97	0,78	0,58	0,79	0,86	0,59	0,88	0,88	0,71	0,90
	2005	0,74	0,57	0,76	0,70	0,60	0,70	0,78	0,94	0,76	0,81	0,58	0,84
Dependencia Senil	1993	0,06	0,10	0,06	0,08	0,10	0,08	0,08	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08
	2005	0,08	0,06	0,08	0,10	0,11	0,10	0,11	0,12	0,11	0,11	0,10	0,11
Dependencia Total	1993	1,01	0,85	1,03	0,86	0,67	0,87	0,94	0,68	0,96	0,96	0,78	0,98
	2005	0,82	0,63	0,83	0,80	0,71	0,81	0,89	1,06	0,87	0,92	0,68	0,94
Razón niños * mujer	1993	0,80	0,45	0,84	0,68	0,42	0,70	0,73	0,45	0,75	0,77	0,42	0,82
	2005	0,59	0,49	0,60	0,61	0,44	0,61	0,67	0,80	0,66	0,72	0,36	0,76
Índice de masculinidad	1993	1,06	0,90	1,07	1,10	1,17	1,10	1,06	0,94	1,06	1,07	0,83	1,11
	2005	1,06	1,07	1,06	1,07	1,08	1,07	1,06	0,99	1,06	1,06	0,94	1,07
Tamaño promedio del hogar	1993	6,20	5,27	6,30	5,47	4,63	5,52	5,21	4,69	5,25	6,04	4,75	6,23
	2005	4,82	4,05	4,89	4,25	4,02	4,26	4,62	5,65	4,55	4,47	3,69	4,56
% Hogares con miembros en el exterior	2005	0,45	0,71	0,43	0,60	1,47	0,56	0,14	0,26	0,13	0,24	0,68	0,19
%Población migrante de toda la vida	1993	11,30			21,61			10,70			13,70		
%Población migrante reciente	1993	6,66			5,43			4,29			7,64		
% Población NBI	1993	99,89			80,91			76,59			87,12		
	2005	61,58	32,86	63,45	69,76	27,49	71,70	68,40	24,75	72,22	64,23	21,36	68,24

Migración, variaciones intercensales de población con NBI y transición demográfica:

En términos de movilidad espacial vía migración de toda la vida y reciente (censo 1993) y participación de hogares con migrantes en el exterior (2005) las tendencias observadas para los tres grupos de la transición demográfica son importantes (ver Cuadros 3.1, 3.2 y 3.3):

a) El primer grupo de municipios presentaba para el censo de 1993 más del 25% de su población como migrante de toda la vida (había nacido fuera del municipio) y más del 10% migrante reciente (últimos cinco años) – con excepción de Caloto con 27,06% de migrantes de toda la vida y 9,6% de migrantes recientes -. En el segundo grupo sólo en Corinto, Miranda y Buenaventura tenían más del 25% migrante de toda la vida y más del 10% de migrante reciente en 1993, los demás tenían menos del 25% y 10% respectivamente (Buenos Aires, El Tambo, Suárez, Morales, Cajibío). Por último, en el tercer grupo sistemáticamente todos los municipios tenían en 1993 menos del 25% y 10% de migrantes de toda la vida y reciente respectivamente, lo cual señala una menor movilidad espacial en los municipios indígenas.

b) De manera concomitante, el porcentaje de hogares con miembros en el exterior para el censo de 2005 arroja diferencias que van de la mano con las de migración interna (Cuadros 3.1, 3.2 y 3.3): los municipios de mayor transición demográfica tienen más del 1% de sus hogares con miembros en el exterior, con excepción de Piendamó y Caloto; incluso muy por encima: Palmira (10,6%), Pradera (6,21%), Jamundí (4,32%), Florida (4,06%), Puerto Tejada (3,64%), Candelaria (2,97%), Villarrica (1,64%) y Santander de Quilichao (1,45%). En los de transición demográfica intermedia Buenaventura tiene el tercer porcentaje mayor (4,59%), por el efecto de ser ciudad portuaria, y en mucho menor grado, Buenos Aires y Miranda, apenas con más del 1%; mientras Corinto, El Tambo, Suárez, Morales y Cajibío, menos del 1%. Por último, los de mayor rezago en la transición demográfica tienen menos del 1% de hogares con miembros en el exterior. Resalta el fenómeno de Palmira por ser el municipio del Valle del Cauca y del país con el mayor porcentaje de hogares con miembros en el exterior.

c) Los fuertes descensos del indicador de porcentaje de población con NBI (necesidades básicas insatisfechas) entre 1993 y 2005 revela tendencias concomitantes con los indicadores anteriores, bien significativas para los tres grupos de municipios, como era de esperar. Los primeros 8 municipios del grupo de transición demográfica avanzada tuvieron reducciones significativas del porcentaje de población con NBI y para el 2005 dicho porcentaje es inferior al 25%; en cambio, los otros tres municipios de este grupo presentaron reducciones considerables en su NBI, pero todavía se mantiene por encima del 25%. En varios de los municipios de transición demográfica intermedia se dieron reducciones en el NBI, pero en algunos casos fueron muy moderadas (El Tambo, Cajibío) y continúa siendo alto el porcentaje de población con NBI para el censo de 2005, por encima del 50%, con excepción de Buenaventura. Paradójicamente en el caso de Buenaventura se mantuvo el porcentaje de NBI entre 1993 y 2005, y es muy alto para una ciudad intermedia en el país¹⁶. El municipio de Miranda incrementó el

¹⁶ Obsérvese que en el municipio de Buenaventura es la cabecera la que incrementa el porcentaje de población con NBI (Cuadro 3.2.: de 33,12% en el 1993 a 34,47% en el 2005), debido al efecto demográfico del colapso de los servicios públicos ante la población desplazada por el conflicto armado.

porcentaje de NBI¹⁷. Finalmente, los municipios del tercer grupo, donde se concentra la población indígena, si bien lograron presentar reducciones en su NBI hacia el 2005, éste continuó siendo considerablemente muy alto, por encima del 60% de la población con NBI, con excepción del municipio de Silvia.

Tendencias sociodemográficas por grupo étnico-racial y municipio, censo 2005 (cabecera y resto).

Se entra en esta parte al análisis más detallado de los comportamientos demográficos por grupo étnico-racial con los datos del censo 2005, para los 26 municipios, pues se carecen de datos separados para Guachené, a través de dos tipos de cuadros: a) el correspondiente a las tasas de dependencia, la razón de hijos*mujer, masculinidades, tasas de jefatura femenina, tamaño promedio del hogar y porcentaje de personas con NBI – cuadros 4.1, 4.2, 4.3– y b) los cuadros 5.1, 5.2, 5.3 que contienen los tres indicadores clásicos de fecundidad: promedio de hijos nacidos vivos por mujer de 12 años y más, la tasa global de fecundidad y la tasa de fecundidad general. En los dos tipos de cuadros se incluyen para efectos comparativos el total nacional y los departamentos del Cauca y del Valle, correspondientes a los cuadros 4.4 y 5.4, en los respectivos indicadores anunciados.

En los municipios de transición demográfica más avanzada (4.1) las tasas de dependencia y razón de hijos menores de 5 años*mujeres en edad fértil son menores en la población no étnica frente a la afrocolombiana y la indígena. La excepción es el municipio de Villarrica, donde la no étnica presenta tasas mayores al igual que en Caloto. En los municipios que tienen una población indígena importante (Jamundí, Santander de Quilichao, Florida, Piendamó y Caloto) ésta tiene las tasas y razones más altas, por lo que se desprende que es la más pobre, lo cual como se ve en el indicador de NBI, ella tiene los mayores porcentajes. Se presentan algunas excepciones, según cabecera-resto, por ejemplo, en Puerto Tejada, en la zona rural la población no étnica tiene mayores tasas y en Padilla en cabecera. En Palmira la población indígena tiene tasas mucho más bajas que las poblaciones no étnica y afrocolombiana, pero su peso demográfico específico es muy bajo (0,2%).

Se debe resaltar que Palmira y Candelaria son los municipios con las menores tasas y razones hijo*mujer de todos los 11, tanto para la población afrocolombiana como la no étnica, lo cual permite entender los menores porcentajes de población no étnica y afrocolombiana con NBI para estos dos municipios en toda la región. En segundo lugar, Santander de Quilichao es el municipio en el cual los indicadores sociodemográficos entre la población afrocolombiana y la no étnica son más cercanos, lo cual quiere decir que las dos poblaciones tienen comportamientos muy similares en este municipio.

Los índices de masculinidad de la población indígena son casi siempre superiores a 1, pero en Padilla y Piendamó la población no étnica supera el índice de la indígena. En Villarrica el índice de masculinidad del grupo indígena es menor a 1, pero su peso demográfico en este municipio es muy reducido.

¹⁷ Miranda presenta un patrón similar al de Buenaventura, aunque desafortunadamente no se tienen los datos del porcentaje de población con NBI discriminada cabecera y resto para 1993. Es la cabecera la que presenta un deterioro entre los dos años censales.

Los tamaños promedio del hogar son sistemáticamente menores para la población no étnica en los 11 municipios de la transición demográfica más avanzada respecto a los de la población afrocolombiana, como era de esperar. Al igual, siempre los porcentajes de población con NBI son superiores entre la población afrocolombiana, con excepción de los municipios de Villarrica (en resto), Caloto (en cabecera y resto) y Padilla (en resto).

En los 8 municipios de transición intermedia no se sigue el mismo patrón que en los 11 anteriores (Cuadro 4.2). Mientras en Buenos Aires, Miranda, Buenaventura y Morales las tasas de dependencia juvenil y totales son menores en la población no étnica, en Corinto, El Tambo, Suárez y Cajibío por el contrario son en la afrocolombiana. Esto quiere decir que en estos últimos municipios las condiciones de vida son relativamente mejores para los afrocolombianos que para la población mestiza.

No en todos los casos se presenta una menor razón hijos*mujer relacionada con una menor tasa de dependencia juvenil: en Buenos Aires y Suárez la población afrocolombiana tiene una menor razón. Además, Buenaventura se distingue por una población indígena en la zona rural y total con tasas de dependencia juvenil y totales más altas, al igual que razón de hijos*mujer. Buenos Aires y Corinto presentan índices de masculinidad menores de 1 para la población afrocolombiana y la no étnica. Los demás con variantes en cabecera y resto por encima de 1, lo cual muestra el fenómeno migratorio similar en población afrocolombiana y no étnica.

Los tamaños promedio del hogar de la población afrocolombiana en estos municipios son siempre superiores a los de la no étnica. Respecto a la indígena los siguientes municipios tienen los mayores promedios de miembros por hogar frente a afros y no étnicos: Buenos Aires, Buenaventura, Morales, Corinto, Suárez y Cajibío. En cambio, en Miranda y El Tambo los promedios son menores. Estas variaciones tienen que ver con el relativo peso que tienen los pueblos Nasa, Guambiano y otros en Buenos Aires, Morales, Corinto, Suárez y Cajibío, sin ser necesariamente el grupo poblacional de mayor peso porcentual. Esto se refleja a la vez en mayores porcentajes de NBI para la población indígena en los siguientes municipios: Buenos Aires, Buenaventura, Morales, Corinto y Suárez. En El Tambo a pesar de un promedio de personas por hogar menor, los indígenas tienen un NBI mayor que afros y no étnicos y en Cajibío es la población afrocolombiana la que tiene el mayor porcentaje de población con NBI, seguido de los no étnicos.

En los 7 municipios indígenas de mayor rezago en su transición demográfica como era de esperar las tasas de dependencia y razón de hijos*mujer más altas son las indígenas (Cuadro 4.3)¹⁸. La población no étnica tiende a ser mestiza-indígena, aunque sus indicadores presentan variaciones respecto a la población indígena. Páez es un caso diferente porque tiene más diferenciados los tres grupos étnico- raciales: aquí la población afrocolombiana tiene las menores tasas de dependencia y menor razón de hijos*mujer, mientras las no étnicas e indígenas son superiores. Sin embargo, al comparar estas dos últimas poblaciones, la indígena arroja indicadores más altos en las tasas de dependencia, razón de hijos y masculinidades, al igual que un porcentaje de población con NBI mayor respecto a la no étnica. Esto en general es válido para todos los municipios indígenas.

¹⁸ Los datos de Silvia, Totoró, Jambaló, Toribío, Inzá y Caldon para afrocolombianos no son demográficamente confiables por ser poblaciones muy pequeñas. Igual en Jambaló para no étnicos.

Los índices de masculinidad varían en los distintos municipios pero tienden a ser más altos, algunos entre la población no étnica (Totoró, Toribío, Caldonó, Inzá), mientras para Silvia en la indígena y para Páez en la afrocolombiana. A mayor índice de masculinidad significa una mayor salida de mujeres no étnicas, indígenas o afrocolombianas.

De la zona resto donde se concentra la población indígena de resguardo, los municipios que tienen los mayores tamaño promedio del hogar son Silvia, Totoró, Toribío, Inzá y Páez (Cuadro 4.3). Pero entre los anteriores municipios en la fase de transición demográfica intermedia también se presentan altos promedios de personas por hogar entre los indígenas: Buenos Aires, Morales y Buenaventura, en la medida en que allí también se encuentran resguardos (Cuadro 4.2). Finalmente, los municipios de Jambaló y Caldonó tienen los tamaños promedio menores (Cuadro 4.3).

El Valle del Cauca registra entre las poblaciones no étnica y la afrocolombiana las menores tasas de dependencia y razón de hijos*mujer comparado con el total nacional y el departamento del Cauca (4.4). Además, los índices de masculinidad para afrocolombianos y no étnicos en el Valle son ligeramente más bajos que para el total nacional y para el Cauca. Sin embargo, en los tres agregados geográficos la población no étnica presenta sensiblemente mejores condiciones de vida a través de estos indicadores que la afrocolombiana, lo cual se refleja en considerables menores porcentajes de población con NBI (cuadro 4.4.).

En relación con la población indígena en los tres agregados es diferente dependiendo cabecera o resto (Cuadro 4.4.): en cabecera los indicadores analizados son mejores para el Valle, seguidos del Cauca y luego del total nacional, pero en el resto el Valle arroja indicadores no muy buenos para la población indígena, aunque esto no se refleja en un porcentaje mayor de población con NBI en el Valle respecto al total nacional y al Cauca.

Para las poblaciones afrocolombiana y no étnica, los patrones del Valle son similares a los de municipios como Palmira, Candelaria y Jamundí como era de esperarse. Los del Cauca se distancian y se acercan más al grupo de municipios de transición demográfica intermedia, lo cual no es de extrañar ya que con excepción de Buenaventura los demás pertenecen a este departamento. En cambio, los municipios indígenas, todos del Cauca, tienen en estos indicadores valores más altos.

Cuadro 4.1 Municipios con transición demográfica avanzada

PALMIRA	Total Población			Indígena			Afrocolombiana			No Étnica			CANDELARIA	Total Población			Indígena			Afrocolombiana			No Étnica				
	Total	Cabecera	Resto	Total	Cabecera	Resto	Total	Cabecera	Resto	Total	Cabecera	Resto		Total	Cabecera	Resto	Total	Cabecera	Resto	Total	Cabecera	Resto	Total	Cabecera	Resto		
Dependencia Juvenil	0.40	0.30	0.45	0.20	0.10	0.23	0.41	0.41	0.43	0.39	0.30	0.48	0.44	0.37	0.45	0.20	0.00	0.22	0.45	0.40	0.48	0.42	0.34	0.45			
Dependencia Senil	0.12	0.12	0.10	0.12	0.13	0.10	0.10	0.10	0.10	0.12	0.13	0.10	0.09	0.10	0.09	0.13	0.14	0.13	0.09	0.09	0.08	0.09	0.10	0.09			
Dependencia Total	0.52	0.50	0.55	0.32	0.31	0.33	0.51	0.51	0.53	0.51	0.51	0.58	0.53	0.47	0.55	0.33	0.14	0.35	0.54	0.49	0.56	0.52	0.44	0.54			
Razón niños * mujer 2005	0.26	0.25	0.32	0.14	0.13	0.17	0.26	0.25	0.27	0.27	0.25	0.33	0.29	0.25	0.31	0.10	0.00	0.19	0.29	0.27	0.31	0.29	0.23	0.31			
Índice de masculinidad total	0.93	0.90	1.02	1.24	1.24	1.24	0.96	0.94	1.04	0.92	0.90	1.02	0.97	0.95	0.98	1.10	1.67	1.07	0.98	0.95	1.00	0.96	0.96	0.96			
Tasa de jefatura femenina	31.45	33.56	22.54	22.58	22.78	22.03	30.62	33.68	20.95	31.63	33.57	22.91	26.42	26.93	26.21	11.11	0.00	12.20	27.97	28.81	27.56	24.76	24.23	24.94			
Tamaño promedio del hogar	3.68	3.64	3.83	3.70	3.79	3.47	3.89	3.89	3.89	3.64	3.59	3.82	3.64	3.47	3.70	3.67	5.00	3.52	3.70	3.44	3.82	3.55	3.53	3.58			
NBI por persona	12.75	10.04	23.64	3.50	0.00	11.34	16.89	11.36	33.94	12.11	9.88	21.50	14.51	17.89	13.20	3.96	0.00	4.30	16.98	22.52	14.53	11.81	11.41	11.94			
JAMUNDÍ	Total Población			Indígena			Afrocolombiana			No Étnica			SANTANDER DE QUILICHAO			Total Población			Indígena			Afrocolombiana			No Étnica		
Dependencia Juvenil	0.48	0.46	0.52	0.52	0.18	0.62	0.50	0.47	0.53	0.46	0.45	0.49	0.52	0.45	0.59	0.67	0.45	0.71	0.52	0.48	0.55	0.45	0.43	0.52			
Dependencia Senil	0.09	0.09	0.10	0.10	0.06	0.11	0.09	0.08	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.11	0.07	0.07	0.08	0.10	0.09	0.11	0.11	0.10	0.13			
Dependencia Total	0.57	0.55	0.62	0.63	0.24	0.73	0.58	0.56	0.63	0.55	0.55	0.59	0.61	0.54	0.70	0.75	0.51	0.78	0.62	0.57	0.67	0.56	0.53	0.65			
Razón niños * mujer 2005	0.32	0.30	0.38	0.34	0.08	0.42	0.33	0.30	0.38	0.31	0.30	0.35	0.34	0.28	0.42	0.50	0.25	0.54	0.33	0.29	0.36	0.30	0.27	0.37			
Índice de masculinidad total	0.93	0.91	0.99	0.98	0.63	1.07	0.95	0.92	0.98	0.91	0.90	1.08	0.95	0.98	1.02	1.03	0.81	1.07	0.94	0.91	0.96	0.92	0.88	1.04			
Tasa de jefatura femenina	30.42	31.87	27.33	23.41	40.00	19.39	30.01	32.36	27.08	31.20	31.37	29.90	29.35	34.69	23.34	20.36	37.84	17.69	31.8	36.44	28.9	30.92	34.18	22.1			
Tamaño promedio del hogar	3.87	3.96	3.67	4.09	3.24	4.29	3.92	4.06	3.73	3.79	3.86	3.23	3.96	3.77	4.18	4.44	4.01	4.51	4.09	3.97	4.19	3.69	3.67	3.74			
NBI por persona	15.63	8.49	32.02	43.40	0.00	51.88	19.75	11.26	31.24	8.65	5.81	43.43	33.60	14.01	63.65	74.56	29.12	80.18	27.27	15.74	35.62	20.93	12.29	43.92			
PUERTO TEJADA	Total Población			Indígena			Afrocolombiana			No Étnica			FLORIDA			Total Población			Indígena			Afrocolombiana			No Étnica		
Dependencia Juvenil	0.55	0.55	0.53	0.22	0.05	0.50	0.55	0.56	0.53	0.41	0.40	0.49	0.51	0.51	0.52	0.58	0.25	0.64	0.55	0.57	0.55	0.49	0.49	0.47			
Dependencia Senil	0.09	0.09	0.09	0.25	0.40	0.00	0.09	0.09	0.09	0.12	0.12	0.09	0.11	0.11	0.12	0.11	0.13	0.11	0.09	0.09	0.10	0.12	0.12	0.13			
Dependencia Total	0.64	0.64	0.62	0.47	0.45	0.50	0.66	0.66	0.62	0.53	0.52	0.57	0.62	0.62	0.64	0.69	0.38	0.75	0.66	0.66	0.65	0.61	0.61	0.60			
Razón niños * mujer 2005	0.35	0.35	0.36	0.21	0.00	0.60	0.36	0.36	0.36	0.32	0.31	0.41	0.35	0.35	0.36	0.44	0.11	0.50	0.37	0.38	0.35	0.34	0.34	0.33			
Índice de masculinidad total	0.90	0.88	1.00	1.14	0.81	2.00	0.90	0.88	1.00	0.96	0.91	1.31	0.97	0.96	1.01	1.09	1.06	1.10	1.00	1.01	1.01	0.94	0.93	0.97			
Tasa de jefatura femenina	33.67	35.11	23.71	28.57	37.5	0	33.93	35.33	24.11	25	26.82	14.89	24.43	25.67	21.01	18.73	18.79	18.72	23.56	23.48	23.76	25.27	26.74	19.77			
Tamaño promedio del hogar	3.97	3.99	3.79	3.67	3.69	3.60	3.97	4.00	3.79	3.75	3.70	4.08	3.89	3.89	3.89	4.11	3.88	4.18	4.14	4.20	3.99	3.73	3.74	3.70			
NBI por persona	18.05	18.52	14.56	-	-	18.24	18.71	14.74	7.37	6.78	11.59	21.63	18.48	30.27	61.74	20.84	68.20	23.76	22.20	27.35	17.50	16.89	19.92				
PADILLA	Total Población			Indígena			Afrocolombiana			No Étnica			PRADERA			Total Población			Indígena			Afrocolombiana			No Étnica		
Dependencia Juvenil	0.55	0.53	0.58	0.62	0.17	0.71	0.56	0.53	0.58	0.42	0.39	0.45	0.56	0.56	0.52	0.39	0.20	0.54	0.65	0.65	0.60	0.52	0.52	0.51			
Dependencia Senil	0.14	0.12	0.15	0.06	0.17	0.04	0.14	0.12	0.15	0.18	0.18	0.17	0.11	0.10	0.12	0.18	0.11	0.23	0.08	0.08	0.10	0.12	0.12	0.12			
Dependencia Total	0.69	0.65	0.73	0.68	0.33	0.75	0.69	0.66	0.73	0.59	0.58	0.62	0.67	0.67	0.65	0.56	0.31	0.77	0.73	0.73	0.69	0.64	0.64	0.64			
Razón niños * mujer 2005	0.39	0.36	0.41	0.50	0.50	0.50	0.39	0.36	0.41	0.40	0.41	0.39	0.40	0.40	0.38	0.30	0.14	0.44	0.47	0.47	0.36	0.37	0.36	0.38			
Índice de masculinidad total	0.95	0.92	0.99	1.04	0.33	1.23	0.95	0.92	0.98	1.15	1.04	1.34	0.97	0.95	1.07	1.14	1.02	1.21	0.98	0.98	0.94	0.96	0.93	1.08			
Tasa de jefatura femenina	33.33	36.68	30.18	-	-	33.5	36.88	30.55	33.79	35.65	26.67	25.62	25.89	24.06	21.43	23.08	20.22	24.86	25.01	20.97	26.02	26.36	24.53				
Tamaño promedio del hogar	3.76	3.66	3.85	5.17	4.00	5.40	3.79	3.71	3.86	3.09	3.19	2.67	4.00	4.07	3.64	4.05	4.05	4.39	4.39	4.35	3.81	3.88	3.53				
NBI por persona	22.17	18.59	25.38	31.48	0.00	36.61	22.50	19.68	24.86	24.97	1.35	61.10	23.80	22.80	30.24	24.55	13.87	31.05	28.47	29.07	12.14	21.83	19.62	33.44			
PIENDAMÓ	Total Población			Indígena			Afrocolombiana			No Étnica			CALOTO			Total Población			Indígena			Afrocolombiana			No Étnica		
Dependencia Juvenil	0.54	0.52	0.56	0.63	0.43	0.66	0.46	0.44	0.49	0.53	0.52	0.53	0.59	0.44	0.61	0.73	0.31	0.73	0.54	0.43	0.55	0.55	0.48	0.61			
Dependencia Senil	0.12	0.11	0.12	0.09	0.08	0.10	0.06	0.06	0.06	0.12	0.11	0.12	0.11	0.13	0.11	0.08	0.14	0.08	0.12	0.12	0.12	0.12	0.14	0.11			
Dependencia Total	0.66	0.63	0.67	0.73	0.52	0.76	0.51	0.50	0.54	0.65	0.64	0.68	0.68	0.67	0.65	0.72	0.44	0.81	0.66	0.55	0.67	0.67	0.61	0.72			
Razón niños * mujer 2005	0.41	0.37	0.43	0.46	0.23	0.49	0.32	0.32	0.32	0.40	0.38	0.42	0.43	0.28	0.45	0.57	0.21	0.57	0.36	0.23	0.38	0.40	0.31	0.47			
Índice de masculinidad total	1.02	0.93	1.08	1.05	0.86	1.07	0.97	0.99	0.93	1.02	0.93	1.08	0.96	0.94	0.96	1.04	0.63	1.04	0.92	0.90	0.93	0.97	0.90	1.03			
Tasa de jefatura femenina	23.66	30.66	19.87	20.82	23.94	20.42	32.21	37.01	24.69	23.08	30.7	19.67	20.42	33.58	27.76	21.03	42.86	21.71	31.93	32.76	31.86	25.95	33.98	20.64			
Tamaño promedio del hogar	3.80	3.91	3.87	4.28	4.17	4.30	4.15	4.15	4.16	3.81	3.80	3.78	3.81	3.70	3.82	3.45	4.10	3.45	4.01	3.06	4.03	3.59	3.57	3.61			
NBI por persona	37.90	26.47	44.27	57.57	17.10	62.43	41.77	34.75	54.87	24.67	26.50	39.79	30.08	13.95	41.07	79.72	6.74	80.17	22.95	13.39	23.76	29.64	14.34	41.03			
VII LA RICA	Total Población			Indígena			Afrocolombiana			No Étnica			Total Población			Indígena			Afrocolombiana			No Étnica					
Dependencia Juvenil	0.57	0.58	0.54	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.57	0.58	0.54	0.63	0.71	0.57	0.57	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58			
Dependencia Senil	0.09	0.09	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	0.11	0.06	0.02	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09			
Dependencia Total	0.66	0.67	0.64	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.66	0.67	0.64	0.69	0.72	0.67	0.66	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67			
Razón niños * mujer 2005	0.41	0.44	0.34	0.33	0.																						

Cuadro 4.2 Municipios con transición demográfica intermedia

BUENOS AIRES	Total Población			Indígena			Afrocolombiana			No Étnica			CORINTO	Total Población			Indígena			Afrocolombiana			No Étnica		
	Total	Cabecera	Resto	Total	Cabecera	Resto	Total	Cabecera	Resto	Total	Cabecera	Resto		Total	Cabecera	Resto	Total	Cabecera	Resto	Total	Cabecera	Resto	Total	Cabecera	Resto
Dependencia Juvenil	0.58	0.43	0.60	0.79	0.00	0.80	0.56	0.42	0.57	0.49	0.44	0.52	Dependencia Juvenil	0.60	0.56	0.64	0.64	0.48	0.65	0.56	0.56	0.56	0.58	0.57	0.60
Dependencia Senil	0.09	0.13	0.09	0.05	0.07	0.05	0.10	0.15	0.10	0.10	0.12	0.09	Dependencia Senil	0.09	0.10	0.08	0.08	0.07	0.08	0.10	0.10	0.14	0.10	0.11	0.09
Dependencia Total	0.68	0.56	0.69	0.85	0.07	0.85	0.66	0.57	0.66	0.59	0.56	0.61	Dependencia Total	0.69	0.66	0.72	0.71	0.55	0.73	0.67	0.66	0.70	0.68	0.68	0.68
Razón niños * mujer 2005	0.43	0.35	0.43	0.64	0.00	0.64	0.38	0.25	0.39	0.44	0.42	0.45	Razón niños * mujer 2005	0.43	0.37	0.49	0.48	0.25	0.51	0.37	0.37	0.37	0.41	0.38	0.48
Índice de masculinidad total	1.00	0.92	1.00	1.08	1.14	1.08	0.99	0.92	0.99	0.96	0.92	0.98	Índice de masculinidad total	1.00	0.95	1.05	1.03	0.93	1.04	0.96	0.96	1.00	0.99	0.95	1.12
Tasa de jefatura femenina	26.53	34.58	25.64	17.20	40.00	17.05	28.48	34.81	28.15	27.42	34.38	23.56	Tasa de jefatura femenina	25.00	30.50	20.10	20.02	27.52	19.32	30.44	30.84	27.46	27.30	30.65	20.80
Tamaño promedio del hogar	4.72	3.97	4.81	4.95	4.50	4.95	4.89	4.65	4.91	3.85	3.59	4.00	Tamaño promedio del hogar	3.87	3.86	3.88	4.00	4.40	3.96	3.87	3.86	3.94	3.64	3.72	3.47
NBI por persona	57.89	25.74	60.83	95.64	20.00	95.95	53.61	30.60	54.75	37.72	22.28	44.87	NBI por persona	53.58	21.23	82.30	80.56	35.24	84.45	25.90	21.53	60.10	34.32	15.01	79.67
MIRANDA	Total Población			Indígena			Afrocolombiana			No Étnica			EL TAMBO	Total Población			Indígena			Afrocolombiana			No Étnica		
Total	Cabecera	Resto	Total	Cabecera	Resto	Total	Cabecera	Resto	Total	Cabecera	Resto	Total		Cabecera	Resto	Total	Cabecera	Resto	Total	Cabecera	Resto	Total	Cabecera	Resto	
Dependencia Juvenil	0.63	0.66	0.54	0.53	0.47	0.56	0.74	0.80	0.54	0.50	0.50	0.51	Dependencia Juvenil	0.54	0.61	0.53	0.57	0.89	0.56	0.52	0.60	0.38	0.54	0.61	0.53
Dependencia Senil	0.10	0.11	0.10	0.10	0.11	0.09	0.10	0.10	0.10	0.12	0.12	0.12	Dependencia Senil	0.15	0.13	0.15	0.10	0.11	0.10	0.13	0.11	0.15	0.15	0.14	0.16
Dependencia Total	0.73	0.77	0.64	0.63	0.58	0.65	0.84	0.90	0.64	0.62	0.62	0.63	Dependencia Total	0.69	0.74	0.68	0.66	1.00	0.66	0.64	0.71	0.53	0.69	0.75	0.69
Razón niños * mujer 2005	0.48	0.50	0.43	0.48	0.37	0.53	0.57	0.63	0.36	0.34	0.34	0.36	Razón niños * mujer 2005	0.48	0.62	0.46	0.45	2.00	0.44	0.45	0.55	0.27	0.49	0.64	0.46
Índice de masculinidad total	1.00	0.99	1.02	1.02	0.99	1.04	1.02	1.03	1.00	0.94	0.92	1.03	Índice de masculinidad total	1.04	0.92	1.06	1.05	2.60	1.05	1.03	0.94	1.25	1.04	0.91	1.06
Tasa de jefatura femenina	25.03	25.54	23.85	24.94	27.02	23.95	23.7	23.23	25.35	27.09	28.57	21.07	Tasa de jefatura femenina	26.00	42.60	22.89	23.52	16.67	23.58	30.83	39.39	19.05	25.98	43.38	22.92
Tamaño promedio del hogar	3.99	4.08	3.80	3.87	3.79	3.91	4.32	4.47	3.77	3.50	3.48	3.55	Tamaño promedio del hogar	3.90	4.19	3.84	4.26	6.00	4.24	4.69	5.28	3.96	3.82	3.96	3.79
NBI por persona	50.28	51.22	47.98	55.92	34.58	65.26	65.08	72.60	34.38	19.14	16.59	30.37	NBI por persona	53.45	33.77	57.46	59.63	55.56	59.66	44.48	45.80	41.94	53.35	32.67	56.83
BUENAVENTURA	Total Población			Indígena			Afrocolombiana			No Étnica			SUÁREZ	Total Población			Indígena			Afrocolombiana			No Étnica		
Total	Cabecera	Resto	Total	Cabecera	Resto	Total	Cabecera	Resto	Total	Cabecera	Resto	Total		Cabecera	Resto	Total	Cabecera	Resto	Total	Cabecera	Resto	Total	Cabecera	Resto	
Dependencia Juvenil	0.64	0.63	0.69	0.68	0.36	0.88	0.65	0.65	0.70	0.50	0.51	0.41	Dependencia Juvenil	0.65	0.55	0.68	0.66	0.37	0.67	0.64	0.59	0.67	0.66	0.48	0.73
Dependencia Senil	0.07	0.07	0.10	0.09	0.11	0.07	0.07	0.07	0.10	0.06	0.06	0.08	Dependencia Senil	0.10	0.10	0.10	0.10	0.16	0.10	0.10	0.09	0.10	0.12	0.11	0.12
Dependencia Total	0.71	0.70	0.79	0.77	0.47	0.96	0.72	0.72	0.80	0.57	0.57	0.49	Dependencia Total	0.75	0.65	0.78	0.76	0.53	0.77	0.74	0.68	0.76	0.78	0.60	0.85
Razón niños * mujer 2005	0.50	0.48	0.76	0.70	0.30	0.95	0.50	0.48	0.77	0.44	0.44	0.42	Razón niños * mujer 2005	0.51	0.39	0.55	0.55	0.32	0.56	0.48	0.42	0.51	0.55	0.32	0.67
Índice de masculinidad total	0.93	0.91	1.07	0.97	0.97	0.98	0.91	0.90	1.06	1.04	1.02	1.38	Índice de masculinidad total	1.09	0.98	1.12	1.18	1.23	1.17	1.03	0.99	1.05	1.15	0.92	1.24
Tasa de jefatura femenina	37.97	39.00	29.97	22.82	31.80	16.75	39.15	40.44	28.08	33.62	32.72	39.56	Tasa de jefatura femenina	24.93	37.16	20.53	15.09	28.57	14.14	30.28	40.39	25.49	20.65	30.23	16.2
Tamaño promedio del hogar	4.41	4.46	4.03	4.74	4.54	4.88	4.61	4.66	4.18	3.39	3.41	3.26	Tamaño promedio del hogar	4.27	3.79	4.45	4.45	3.88	4.49	4.34	3.89	4.56	3.86	3.43	4.05
NBI por persona	35.85	34.52	47.32	63.41	25.60	81.35	37.86	36.70	50.58	24.21	24.22	24.11	NBI por persona	59.51	28.23	69.10	84.83	40.02	86.98	43.30	32.86	47.58	79.91	12.53	-
MORALES	Total Población			Indígena			Afrocolombiana			No Étnica			CAJIBÍO	Total Población			Indígena			Afrocolombiana			No Étnica		
Total	Cabecera	Resto	Total	Cabecera	Resto	Total	Cabecera	Resto	Total	Cabecera	Resto	Total		Cabecera	Resto	Total	Cabecera	Resto	Total	Cabecera	Resto	Total	Cabecera	Resto	
Dependencia Juvenil	0.65	0.67	0.65	0.75	0.68	0.75	0.69	0.59	0.69	0.57	0.68	0.55	Dependencia Juvenil	0.60	0.47	0.60	0.70	0.17	0.70	0.58	0.53	0.59	0.59	0.45	0.60
Dependencia Senil	0.10	0.16	0.10	0.07	0.03	0.07	0.09	0.08	0.09	0.13	0.17	0.13	Dependencia Senil	0.12	0.12	0.12	0.06	0.17	0.06	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12
Dependencia Total	0.75	0.83	0.75	0.82	0.71	0.82	0.78	0.67	0.79	0.70	0.85	0.68	Dependencia Total	0.72	0.59	0.72	0.76	0.33	0.77	0.70	0.64	0.70	0.72	0.58	0.72
Razón niños * mujer 2005	0.51	0.55	0.51	0.59	0.56	0.59	0.54	0.35	0.55	0.44	0.56	0.43	Razón niños * mujer 2005	0.53	0.29	0.55	0.55	0.00	0.56	0.52	0.33	0.53	0.53	0.29	0.55
Índice de masculinidad total	1.11	0.96	1.12	1.09	1.19	1.09	1.19	1.07	1.20	1.12	0.93	1.14	Índice de masculinidad total	1.12	0.96	1.13	1.21	1.00	1.22	1.19	0.93	1.20	1.10	0.96	1.11
Tasa de jefatura femenina	19.2	32.05	18.26	15.53	22.73	15.45	24.14	32	23.53	21.19	32.65	19.79	Tasa de jefatura femenina	20.28	36.19	19.36	17.97	50.00	17.75	21.40	38.89	20.44	20.15	35.62	19.22
Tamaño promedio del hogar	4.29	4.06	4.30	4.89	4.71	4.89	4.55	4.46	4.56	3.81	3.98	3.80	Tamaño promedio del hogar	4.05	3.41	4.09	4.66	2.00	4.67	4.19	3.45	4.23	4.00	3.41	4.03
NBI por persona	62.29	25.80	64.83	74.80	42.37	75.17	72.22	25.88	75.00	50.48	24.46	53.85	NBI por persona	63.74	22.03	65.74	58.33	0.00	58.71	67.15	25.44	69.01	63.18	21.88	65.30

Cuadro 4.3 Municipios con transición demográfica rezagada

SILVIA	Total Población			Indígena			Afrocolombiana			No Étnica			TOTORÓ	Total Población			Indígena			Afrocolombiana			No Étnica		
	Total	Cabecera	Resto	Total	Cabecera	Resto	Total	Cabecera	Resto	Total	Cabecera	Resto		Total	Cabecera	Resto	Total	Cabecera	Resto	Total	Cabecera	Resto	Total	Cabecera	Resto
Dependencia Juvenil	0,65	0,44	0,69	0,71	0,49	0,72	0,37	0,40	0,00	0,46	0,43	0,49	Dependencia Juvenil	0,66	0,49	0,68	0,72	0,63	0,72	0,40	0,43	0,33	0,51	0,41	0,54
Dependencia Senil	0,09	0,12	0,09	0,08	0,07	0,08	0,07	0,08	0,00	0,13	0,14	0,12	Dependencia Senil	0,09	0,07	0,09	0,08	0,04	0,08	0,00	0,00	0,00	0,10	0,09	0,11
Dependencia Total	0,74	0,57	0,77	0,79	0,56	0,80	0,44	0,48	0,00	0,59	0,57	0,61	Dependencia Total	0,75	0,56	0,77	0,80	0,67	0,80	0,40	0,43	0,33	0,61	0,50	0,64
Razón niños * mujer 2005	0,48	0,28	0,52	0,53	0,31	0,54	0,08	0,08	-	0,31	0,27	0,36	Razón niños * mujer 2005	0,55	0,36	0,57	0,59	0,43	0,60	0,75	0,50	-	0,43	0,31	0,46
Índice de masculinidad total	1,00	0,86	1,02	1,01	0,85	1,02	1,05	0,95	-	0,97	0,87	1,08	Índice de masculinidad total	1,02	0,90	1,03	1,02	0,88	1,02	2,50	1,50	-	1,03	0,90	1,07
Tasa de jefatura femenina	21,66	32,88	19,24	19,9	34,6	19,02	-	-	-	26,75	32,25	20,59	Tasa de jefatura femenina	22,81	37,57	21,31	22,43	35,25	21,81	-	-	-	23,83	38,04	19,86
Tamaño promedio del hogar	4,92	3,63	5,20	5,27	4,05	5,35	3,69	3,50	6,00	3,86	3,48	4,27	Tamaño promedio del hogar	4,88	4,01	4,75	4,96	4,18	5,00	3,50	3,40	3,67	3,93	3,91	3,94
NBI por persona	50,29	12,22	56,00	57,21	18,93	58,82	5,13	0,00	100,00	23,17	10,05	35,30	NBI por persona	60,97	32,40	63,42	65,74	36,40	66,98	21,43	30,00	0,00	45,07	30,04	49,00

PÁEZ	Total Población			Indígena			Afrocolombiana			No Étnica		
	Total	Cabecera	Resto	Total	Cabecera	Resto	Total	Cabecera	Resto	Total	Cabecera	Resto
Dependencia Juvenil	0,78	0,57	0,81	0,83	0,55	0,84	0,58	0,58	0,58	0,71	0,58	0,75
Dependencia Senil	0,11	0,10	0,11	0,10	0,10	0,10	0,17	0,13	0,18	0,10	0,10	0,10
Dependencia Total	0,89	0,68	0,91	0,94	0,65	0,94	0,75	0,72	0,76	0,81	0,68	0,85
Razón niños * mujer 2005	0,70	0,36	0,74	0,77	0,24	0,79	0,52	0,54	0,51	0,58	0,37	0,66
Índice de masculinidad total	1,06	0,95	1,07	1,06	0,91	1,06	1,07	1,18	1,06	1,07	0,93	1,12
Tasa de jefatura femenina	19,91	31,47	18,56	18,48	31,37	18,03	24,72	26,19	24,45	21,87	32,39	18,34
Tamaño promedio del hogar	4,47	3,67	4,56	4,74	3,94	4,77	3,79	4,11	3,72	4,00	3,49	4,18
NBI por persona	64,27	21,37	68,28	70,00	23,23	71,23	49,57	39,46	51,49	53,31	18,09	63,80

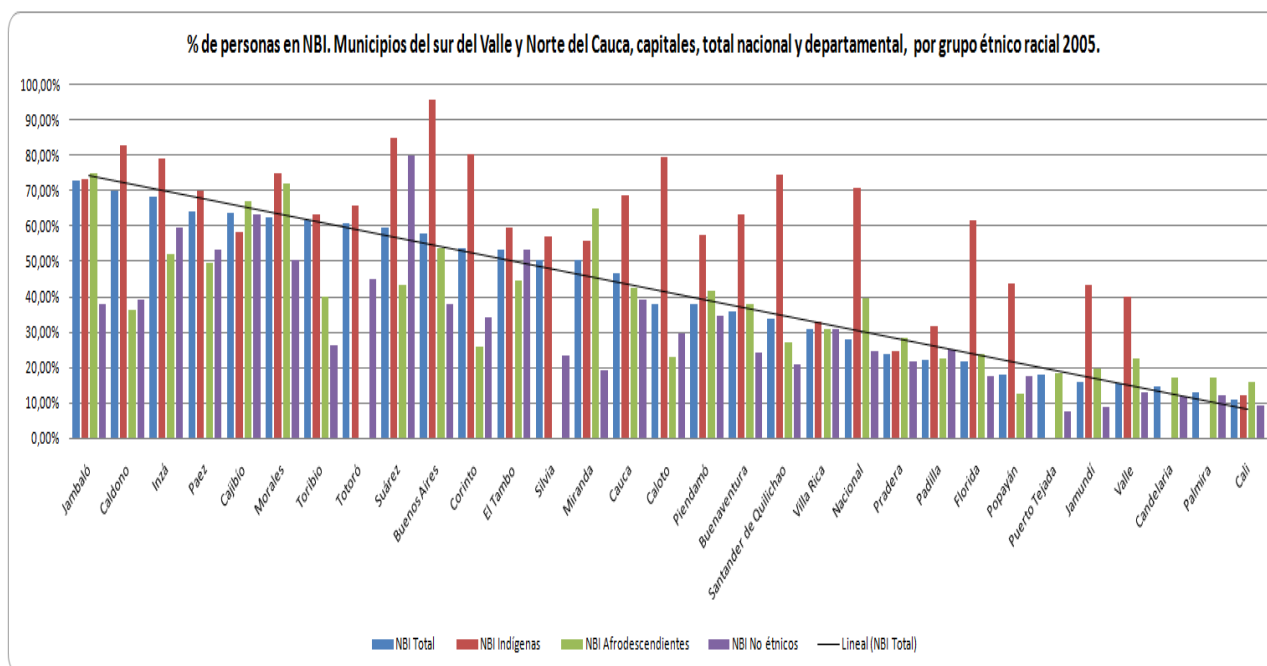
Cuadro 4.4 Tendencias Nacional, Valle del Cauca y Cauca

VALLE	Total Población			Indígena			Afrocolombiana			No Étnica			NACIONAL	Total Población			Indígena			Afrocolombiana			No Étnica		
	Total	Cabecera	Resto	Total	Cabecera	Resto	Total	Cabecera	Resto	Total	Cabecera	Resto		Total	Cabecera	Resto	Total	Cabecera	Resto	Total	Cabecera	Resto	Total	Cabecera	Resto
Dependencia Juvenil	0,44	0,43	0,50	0,40	0,21	0,75	0,50	0,50	0,52	0,42	0,41	0,49	Dependencia Juvenil	0,49	0,45	0,61	0,72	0,47	0,80	0,54	0,51	0,64	0,47	0,45	0,58
Dependencia Senil	0,11	0,11	0,11	0,09	0,10	0,09	0,08	0,08	0,10	0,12	0,12	0,12	Dependencia Senil	0,10	0,10	0,11	0,09	0,09	0,10	0,09	0,08	0,10	0,10	0,10	0,12
Dependencia Total	0,55	0,54	0,61	0,50	0,31	0,84	0,58	0,58	0,62	0,54	0,53	0,60	Dependencia Total	0,59	0,55	0,72	0,81	0,56	0,89	0,63	0,59	0,74	0,57	0,54	0,70
Razón niños * mujer 2005	0,31	0,30	0,38	0,33	0,13	0,73	0,35	0,34	0,40	0,30	0,29	0,37	Razón niños * mujer 2005	0,36	0,32	0,53	0,62	0,34	0,72	0,42	0,37	0,58	0,35	0,32	0,49
Índice de masculinidad total	0,92	0,90	1,07	0,98	0,90	1,10	0,93	0,91	1,04	0,92	0,90	1,07	Índice de masculinidad total	0,96	0,92	1,12	1,02	0,96	1,04	0,99	0,95	1,11	0,96	0,91	1,13
Tasa de jefatura femenina	32,3	33,93	21,64	23,28	27,58	15,18	34,36	35,7	24,85	31,67	33,35	20,73	Tasa de jefatura femenina	29,91	32,83	19,76	24,85	30,94	22,73	30,71	33,95	21,8	29,99	32,74	19,08
Tamaño promedio del hogar	3,75	3,75	3,77	4,15	3,93	4,58	4,05	4,08	3,85	3,63	3,62	3,73	Tamaño promedio del hogar	3,90	3,81	4,19	4,90	4,43	5,08	4,25	4,19	4,40	3,82	3,76	4,05
NBI por persona	15,62	14,06	25,82	40,02	18,64	67,02	22,69	21,80	29,45	12,76	11,08	23,59	NBI por persona	27,74	19,64	53,33	70,82	41,95	78,63	39,40	33,28	55,68	24,61	17,98	49,21

CAUCA	Total Población			Indígena			Afrocolombiana			No Étnica		
	Total	Cabecera	Resto	Total	Cabecera	Resto	Total	Cabecera	Resto	Total	Cabecera	Resto
Dependencia Juvenil	0,54	0,46	0,61	0,69	0,45	0,71	0,59	0,59	0,60	0,48	0,41	0,55
Dependencia Senil	0,11	0,10	0,12	0,09	0,08	0,09	0,11	0,09	0,12	0,12	0,10	0,14
Dependencia Total	0,65	0,56	0,73	0,78	0,53	0,80	0,70	0,68	0,72	0,59	0,52	0,68
Razón niños * mujer 2005	0,42	0,31	0,51	0,56	0,28	0,58	0,45	0,41	0,49	0,36	0,28	0,46
Índice de masculinidad total	0,99	0,91	1,06	1,04	0,90	1,05	0,97	0,93	1,01	0,99	0,90	1,09
Tasa de jefatura femenina	28,19	34,85	23,33	21,17	33,54	20,03	31,76	35,18	28,46	29,19	34,8	23,42
Tamaño promedio del hogar	4,04	3,87	4,17	4,53	4,02	4,58	4,28	4,22	4,29	3,79	3,73	3,88
NBI por persona	46,61	24,27	61,75	68,94	30,33	71,77	42,54	38,59	46,39	39,18	18,37	60,77

Para una perspectiva de conjunto del comportamiento del porcentaje de población con NBI por grupo étnico-racial en los 26 municipios, incluyendo para efectos comparativos a las ciudades de Cali y Popayán, los departamentos del Valle y Cauca, y el total nacional, es muy útil el Gráfico 1. Se observa de izquierda a derecha un patrón esperado de descenso de los valores del NBI total municipal, con las respectivas variaciones por grupo étnico-racial. En el extremo izquierdo se encuentra el municipio de Jambaló con los valores más altos de población en NBI para los tres grupos étnicos, aunque aquí lo que cuenta son ante todo indígenas y una minoría no étnica, ya que la población negra es insignificante en este municipio, pero por su ubicación se encuentra en pobreza similar a la indígena y no étnica. En el otro extremo, el derecho, el municipio de Cali y en dirección hacia la izquierda los siguientes municipios: Palmira, Candelaria, Jamundí – el Valle en el medio de Candelaria y Jamundí -, Puerto Tejada, Florida, Padilla, - Popayán en el medio de Puerto Tejada y Florida -, Pradera, Villarrica – el total nacional en el medio de Pradera y Villarrica – y Santander de Quilichao. Luego sigue en la dirección de derecha a izquierda un segundo grupo de municipios: Buenaventura, Piendamó, Caloto y Miranda, - el Cauca en el medio de Caloto y Miranda -. En esa misma dirección viene un cuarto grupo con los municipios de Silvia, El Tambo, Corinto, Buenos Aires y Suárez; y finalmente, un quinto grupo con los municipios de Totoró, Toribío, Morales, Cajibío, Páez, Inzá, Caldono y Jambaló, donde se mezclan municipios del segundo y tercer grupo de transición demográfica.

Gráfico 1



El Gráfico 1 muestra que en casi todos los municipios los indígenas presentan los mayores porcentajes de población con NBI, pero de todas maneras con un relativo descenso a medida que se va de izquierda a derecha. Por supuesto, el segundo grupo étnico-racial con NBI es el afrocolombiano, pero aquí llama la atención es cómo a medida que se desplaza la línea hacia la derecha los porcentajes van disminuyendo como era de esperar ya que el indicador de NBI tiene una fuerte asociación con los indicadores sociodemográficos antes presentados y a mayor transición demográfica se espera que el NBI tienda a bajar. Esto es válido para los tres grupos étnico-raciales.

Al analizar la tasa de jefatura femenina en los tres grupos de municipios según la dinámica de la transición demográfica se observan los siguientes patrones: en los municipios de transición avanzada como Palmira y Jamundí, los porcentajes mayores son de la población no étnica en jefatura femenina por encima del 30%, mientras en Florida, Pradera y Padilla igualmente pero con porcentajes menores al 30%. Por el contrario, en municipios como Puerto Tejada, Piendamó, Villarrica, Santander de Quilichao y Caloto el mayor porcentaje de tasa de jefatura femenina es entre la población afrocolombiana por encima del 30%. En los siguientes municipios igualmente, pero con tasas menores al 30%: Padilla y Candelaria (véase Cuadro 4.1).

En Buenaventura, Suárez, El Tambo y Corinto la población afrocolombiana presenta las mayores tasas de jefatura femenina con porcentajes superiores al 30% y en Buenos Aires y Morales con tasas menores al 30%. El único municipio en donde la población no étnica tiene tasas mayores de jefatura femenina es Miranda, inferiores al 30%. En otro municipio pero del grupo indígena de mayor rezago en la transición, Páez, también la población afrocolombiana tiene las mayores tasas de jefatura femenina pero inferior al 30%. Ahora bien, para el total nacional y los departamentos del Valle y Cauca se observa de la misma forma un mayor porcentaje de jefatura femenina negra respecto a la no étnica e indígena, en tasas superiores al 30%, sobre todo en cabecera (Cuadro 4.4).

Las mayores tasas de jefatura femenina en hogares afrocolombianos se dan en los municipios de claro predominio de población negra: Buenaventura, Puerto Tejada, Villarrica, Caloto, Candelaria, Padilla, Buenos Aires, pero también en el caso de Santander de Quilichao en la zona plana. En el caso de Jamundí no es así, a pesar del 60% de autoreconocimiento afro. Sin embargo, los valores porcentuales son muy cercanos entre la población no étnica y afro (31,20% y 30,01%).

De otro lado, por lo general, en todos los municipios la población indígena tiene las menores tasas de jefatura femenina, y en los que predomina la población indígena o tiene un relativo peso importante casi siempre por debajo del 20%, con excepción de Totoró, Miranda, El Tambo con valores por encima del 20%; al igual que en los municipios de Piendamó, Jamundí, Santander de Quilichao, Pradera y Caloto. Este fenómeno sociológico es a la vez más acentuado en la zona resto que en cabecera (ver Cuadros 4.1, 4.2. y sobre todo 4.3, pero también para el Valle, total nacional y Cauca, Cuadro 4.4). Este fenómeno es consecuente del mayor peso de las formas de familia patriarcal en la que sólo se reconoce la jefatura masculina, con un madresolterismo y viudez regulados. Sin embargo, es posible que una parte de las mujeres con hijos en los hogares con jefes hombres hayan sido en una situación precedente madres solteras. Así, en los municipios con tasas de jefatura femenina indígena superiores al 20% pero no mayores al 25%, es posible que la presencia de madresolterismo sea más visible.

La fecundidad histórica, la TGF y la tasa general de fecundidad (Cuadros 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4) presentan las siguientes tendencias:

- a) Como era de esperar varían según el indicador de razón de hijos*mujer en edad fértil, aunque con algunas variaciones. En general, las tasas más altas las tienen las poblaciones indígenas, sobre todo a medida que se trata de municipios con importante peso de la población indígena, como es el grupo de los 7 municipios de la zona andina nortecaucana, pero también en otros de los dos primeros grupos con núcleos indígenas relevantes en la zona rural.

- b) En general las tasas de fecundidad histórica, TGF y tasa general de fecundidad son mayores en la población afrocolombiana respecto a la no étnica, en cabecera y en resto (Cuadro 5.1). Hay excepciones como en el resto de Santander de Quilichao en donde los afrocolombianos tienen las menores tasas respecto a la población indígena y no étnica, al igual que en el resto de Pradera. En algunos casos la fecundidad histórica es menor para los afrocolombianos como en la cabecera de Padilla y en el resto de Jamundí, pero en este municipio en la zona rural la TGF y la tasa de fecundidad histórica son mayores entre la población afrocolombiana respecto a la no étnica, aunque menores que las indígenas, que terminan siendo las más altas. En Piendamó aunque los afrocolombianos tienen una fecundidad histórica mayor, los no étnicos tienen mayores tasas que los indígenas en la cabecera y lo contrario en la zona resto o rural. En la cabecera de Caloto las mayores fecundidades las tienen los indígenas, seguidas de los no étnicos y luego los afrocolombianos, sobre todo en la fecundidad histórica, pero esta última población arroja TGF y tasa de fecundidad general mayores que la no étnica. En el resto los indígenas tienen las mayores fecundidades respecto a no étnicos y afrocolombianos.
- c) En los municipios de transición intermedia (Cuadro 5.2) hay variaciones interesantes: los afrocolombianos tienen tasas menores que los no étnicos e indígenas, tanto en cabecera y resto, en Buenos Aires, Corinto y El Tambo; mientras que en Miranda en cabecera los afrocolombianos tienen las mayores tasas y lo contrario en el resto de este municipio. En la cabecera de Suárez las mayores tasas son las indígenas y en el resto las no étnicas, aunque la fecundidad histórica es mayor para los indígenas. Por lo mismo los afrocolombianos en este municipio tienen las menores tasas. En Buenaventura las tasas en la cabecera más alta son las indígenas seguidas de las de los afrocolombianos y luego las no étnicas, pero en el resto en cambio son muy similares las altas tasas de afrocolombianos e indígenas. En Cajibío la población afrocolombiana tiene las tasas más altas en cabecera y resto. En la cabecera de Morales las tasas más altas pertenecen a la población no étnica mientras en el resto a la indígena.
- d) En los 7 municipios indígenas con algunas excepciones los indígenas presentan las mayores tasas en los tres indicadores de fecundidad para cabecera y resto (Cuadro 5.3) respecto a no étnicos y en los municipios con alguna presencia afrocolombiana como Páez. Sin embargo, se presentan algunas excepciones: por ejemplo, en Totoró los no étnicos tienen mayores tasas que los indígenas, y en Inzá la TGF y la fecundidad histórica en la cabecera también es mayor en la población no étnica frente a la indígena, pero en el resto opera lo contrario, como era de esperar.
- e) En la cabecera del Valle del Cauca las tasas más altas corresponden a la población afrocolombiana (Cuadro 5.4), pero en el resto a las indígenas, seguidas de los afrocolombianos. En ambos casos la población no étnica tiene las menores tasas. Al nivel nacional para cabecera y resto las tasas más altas son las indígenas, seguidas de las afrocolombianas, pero en el resto las tasas son sistemáticamente superiores para los tres grupos étnico- raciales (Cuadro 5.4), como era de esperar: la zona rural mantiene un patrón rezagado de fecundidad respecto a la zona urbana. En la cabecera del Cauca las tasas más altas las tienen los afrocolombianos, seguidos de los indígenas; por el contrario, como era de

esperar en el resto las más altas son las indígenas. Para los indígenas en el Cauca, tanto en cabecera como en resto, las tasas son más bajas que las indígenas al nivel nacional, lo cual refleja el peso de otros pueblos indígenas con fecundidades mayores. Igual pasa con los afrocolombianos en el resto del Cauca, pero lo opuesto se da en la cabecera: aquí son más altas las de los afrocolombianos del Cauca respecto al total nacional (Cuadro 5.4).

Cuadro 5.1 Fecundidades Municipios con transición demográfica avanzada

	Palмира						Candelaria						Jamundí					
	Cabecera			Resto			Cabecera			Resto			Cabecera			Resto		
	Indígenas	Afrocolombianos	No étnicos	Indígenas	Afrocolombianos	No étnicos	Indígenas	Afrocolombianos	No étnicos	Indígenas	Afrocolombianos	No étnicos	Indígenas	Afrocolombianos	No étnicos	Indígenas	Afrocolombianos	No étnicos
TF Histórica	3,30	3,06	2,87	3,61	3,20	3,21	3,33	2,97	2,94	3,09	3,13	3,05	2,88	2,84	2,77	4,25	3,29	3,39
TGF	4,23	2,18	1,89	2,08	2,43	2,32	-	2,07	1,86	1,90	2,22	2,21	1,19	2,21	1,95	4,05	2,37	1,85
TFG	115,29	67,03	55,75	62,37	74,68	72,37	-	65,83	56,11	59,34	70,32	68,39	42,94	67,22	59,03	136,49	76,85	58,58

	Santander de Quilichao						Puerto Tejada						Florida					
	Cabecera			Resto			Cabecera			Resto			Cabecera			Resto		
	Indígenas	Afrocolombianos	No étnicos	Indígenas	Afrocolombianos	No étnicos	Indígenas	Afrocolombianos	No étnicos	Indígenas	Afrocolombianos	No étnicos	Indígenas	Afrocolombianos	No étnicos	Indígenas	Afrocolombianos	No étnicos
TF Histórica	3,10	2,99	2,82	3,64	3,49	3,46	4,83	3,16	3,05	2,33	3,28	2,94	3,46	3,40	3,16	4,08	3,60	3,43
TGF	2,44	2,77	1,90	2,63	2,47	2,55	-	2,39	2,11	-	2,77	1,61	2,36	2,20	2,08	3,64	2,40	2,15
TFG	78,57	72,76	59,51	90,37	81,74	83,66	-	77,30	63,97	-	84,96	80,27	64,12	74,19	64,53	121,03	77,89	67,20

	Padilla						Pradera						Piedemón					
	Cabecera			Resto			Cabecera			Resto			Cabecera			Resto		
	Indígenas	Afrocolombianos	No étnicos	Indígenas	Afrocolombianos	No étnicos	Indígenas	Afrocolombianos	No étnicos	Indígenas	Afrocolombianos	No étnicos	Indígenas	Afrocolombianos	No étnicos	Indígenas	Afrocolombianos	No étnicos
TF Histórica	4,00	3,22	3,85	3,50	3,47	3,29	3,48	3,70	3,35	4,20	3,35	3,70	3,25	3,36	3,20	3,71	3,93	3,56
TGF	-	2,39	-	-	2,42	-	-	2,88	2,23	-	2,69	3,15	1,40	-	2,36	3,76	-	2,79
TFG	-	79,20	-	-	82,64	-	-	101,10	71,75	-	86,09	90,29	49,85	-	73,26	123,82	-	92,13

	Caloto						Villa Rica						
	Cabecera			Resto			Cabecera			Resto			
	Indígenas	Afrocolombianos	No étnicos	Indígenas	Afrocolombianos	No étnicos	Indígenas	Afrocolombianos	No étnicos	Indígenas	Afrocolombianos	No étnicos	
TF Histórica	-	3,83	2,93	3,16	4,01	3,45	3,46	3,00	3,10	2,62	2,50	3,27	3,40
TGF	-	-	2,23	1,86	3,94	2,44	3,42	-	2,04	1,01	-	2,23	5,73
TFG	-	-	62,87	58,49	135,77	83,62	111,04	-	68,19	43,34	-	75,41	145,11

Cuadro 5.2 Fecundidades Municipios con transición demográfica intermedia

	Buenos Aires						Corinto						Miranda					
	Cabecera			Resto			Cabecera			Resto			Cabecera			Resto		
	Indígenas	Afrocolombianos	No étnicos	Indígenas	Afrocolombianos	No étnicos	Indígenas	Afrocolombianos	No étnicos	Indígenas	Afrocolombianos	No étnicos	Indígenas	Afrocolombianos	No étnicos	Indígenas	Afrocolombianos	No étnicos
TF Histórica	4,67	3,21	3,36	3,66	3,61	3,73	3,44	3,39	3,53	3,74	3,30	3,75	3,86	4,43	3,23	3,76	3,44	3,50
TGF	-	1,49	2,55	4,55	2,37	3,34	2,94	2,54	2,95	3,56	2,68	3,63	-	4,05	2,40	-	2,29	2,68
TFG	-	51,94	80,29	151,39	84,78	110,26	93,91	82,09	92,93	122,38	96,82	112,52	-	132,45	74,08	-	76,56	82,19

	El Tambo						Buenaventura						Suárez					
	Cabecera			Resto			Cabecera			Resto			Cabecera			Resto		
	Indígenas	Afrocolombianos	No étnicos	Indígenas	Afrocolombianos	No étnicos	Indígenas	Afrocolombianos	No étnicos	Indígenas	Afrocolombianos	No étnicos	Indígenas	Afrocolombianos	No étnicos	Indígenas	Afrocolombianos	No étnicos
TF Histórica	5,33	3,18	3,27	3,72	4,02	3,95	3,69	3,46	2,97	4,61	4,95	3,85	4,63	3,58	3,48	4,44	4,38	4,16
TGF	-	1,76	2,28	3,32	2,53	3,21	4,10	2,72	2,52	5,49	5,25	3,27	4,52	2,65	3,03	3,70	3,26	4,30
TFG	-	49,79	64,84	106,77	73,20	99,21	128,58	90,57	79,65	160,13	171,28	107,89	150,32	89,51	93,14	131,10	110,14	135,56

	Morales						Cajibío					
	Cabecera			Resto			Cabecera			Resto		
	Indígenas	Afrocolombianos	No étnicos	Indígenas	Afrocolombianos	No étnicos	Indígenas	Afrocolombianos	No étnicos	Indígenas	Afrocolombianos	No étnicos
TF Histórica	2,85	3,09	3,19	4,32	4,77	3,90	1,50	3,36	3,21	3,78	4,30	4,04
TGF	1,19	-	2,66	4,21	3,21	3,28	-	2,43	2,00	3,36	3,92	3,74
TFG	41,46	-	78,23	142,73	116,82	106,18	-	84,20	62,94	117,92	126,38	120,76

Cuadro 5.3 Fecundidades Municipios con transición demográfica rezagada

	Silvia						Totoró						Jambaló						Páez					
	Cabecera			Resto			Cabecera			Resto			Cabecera			Resto			Cabecera			Resto		
	Indígenas	Afrocolombianos	No étnicos	Indígenas	Afrocolombianos	No étnicos	Indígenas	Afrocolombianos	No étnicos	Indígenas	Afrocolombianos	No étnicos	Indígenas	Afrocolombianos	No étnicos	Indígenas	Afrocolombianos	No étnicos	Indígenas	Afrocolombianos	No étnicos	Indígenas	Afrocolombianos	No étnicos
TF Histórica	3,05	3,00	2,95	3,92	n.a.	3,37	3,21	1,00	3,15	4,00	n.a.	3,73	3,20	n.a.	4,25	4,25	3,00	3,17	3,47	3,49	3,29	4,57	4,40	4,39
TGF	1,79	-	1,54	3,66	-	2,72	2,70	-	3,40	3,68	-	2,89	2,19	-	-	3,64	-	-	3,20	-	2,47	4,91	-	3,92
TFG	53,22	-	46,36	119,26	-	83,62	80,80	-	109,50	124,42	-	94,54	77,59	-	-	124,51	-	-	99,83	-	73,04	159,34	-	128,23

	Tombó						Caldono						Inzá					
	Cabecera			Resto			Cabecera			Resto			Cabecera			Resto		
	Indígenas	Afrocolombianos	No étnicos	Indígenas	Afrocolombianos	No étnicos	Indígenas	Afrocolombianos	No étnicos	Indígenas	Afrocolombianos	No étnicos	Indígenas	Afrocolombianos	No étnicos	Indígenas	Afrocolombianos	No étnicos
TF Histórica	3,09	3,30	2,89	4,16	3,00	3,25	3,43	1,00	3,17	4,40	3,58	3,60	3,25	3,00	3,54	4,49	2,43	4,46
TGF	4,11	-	1,75	4,44	-	1,67	3,51	-	2,17	4,70	-	2,67	3,16	-	3,46	4,55	-	4,09
TFG	125,03	-	62,02	153,32	-	53,02	93,89	-	60,95	151,60	-	84,40	104,86	-	103,80	148,16	-	132,58

Cuadro 5.4 Fecundidades Tendencias Nacional, Valle del Cauca y Cauca

	Valle del Cauca						Nacional					
	Cabecera			Resto			Cabecera			Resto		
	Indígenas	Afrocolombianos	No étnicos	Indígenas	Afrocolombianos	No étnicos	Indígenas	Afrocolombianos	No étnicos	Indígenas	Afrocolombianos	No étnicos
TF Histórica	2,97	3,09	2,90	4,22	3,57	3,46	3,57	3,33	3,07	4,30	4,28	4,07
TGF	2,19	2,25	1,87	4,93	2,83	2,63	2,83	2,50	2,17	4,30	3,75	3,34
TFG	68,36	71,99	56,26	156,73	89,49	80,34	88,90	79,77	66,49	138,30	122,64	105,40

	Cauca					
	Cabecera			Resto		
	Indígenas	Afrocolombianos	No étnicos	Indígenas	Afrocolombianos	No étnicos
TF Histórica	3,19	3,42	2,90	4,04	3,83	3,75
TGF	2,51	2,56	1,98	3,82	2,75	3,02
TFG	80,74	83,26	61,32	127,92	92,60	97,44

Principales niveles educativos alcanzados según grupo étnico-racial en los 26 municipios, cabecera y resto, y para el total nacional, Valle y Cauca, censo 2005.

Se entra ahora al análisis de la variable educación en los 26 municipios de la región. Para tal efecto se han tomado tres tipos de niveles educativos relevantes¹⁹ para observar diferencias entre municipios y entre grupos étnico-raciales por sexo, utilizando la herramienta metodológica de los tres grupos de municipios de acuerdo al patrón de transición demográfica. Al igual que en los cuadros anteriores se compara con el total nacional y los departamentos del Valle y el Cauca. Interesa sobremanera establecer las relaciones entre los comportamientos educativos por sexo según nivel alcanzado y otras variables ya analizadas como la fecundidad. Véase al respecto los Cuadros 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4.

En los municipios de transición demográfica avanzada (Cuadro 6.1) Palmira y Jamundí en la cabecera presentan los mayores porcentajes de población no étnica con estudios universitarios (por encima del 10% o cercanos). También la población afrocolombiana tiene en estos dos municipios un mayor porcentaje de formados en este nivel, pero sólo entre un 6% y un 7%, o sea, la población no étnica tiene mejores niveles educativos, pero esto es válido en general para todos los municipios de este primer grupo. Un segundo grupo de municipios en el que se destaca Santander de Quilichao entre un 8% y 9% con población no étnica con estudios universitarios y una población afrocolombiana entre un 4,7% y un 6,5%, al cual le siguen Caloto, Candelaria, Puerto Tejada y Padilla. En todos ellos los niveles de primaria completa y sobre todo media completa son bien importantes, superiores al 12% y 13%. Les siguen Piendamó, Florida, Pradera y por último Villarrica. En estos últimos la concentración principal es en primaria y media completas.

Por sexo, en algunos municipios, tanto para afrocolombianos como no étnicos, las mujeres presentan porcentajes ligeramente mayores: Candelaria y Caloto. Sin embargo, en la mayor parte de los municipios al comparar los dos grupos étnicos, en estudios universitarios y media completa las mujeres presentan mayores porcentajes entre los afrocolombianos, aunque casi siempre con niveles educativos por debajo de los no étnicos.

En la zona resto los municipios de Jamundí, Puerto Tejada (sobre todo los hombres) y Candelaria tienen los mayores niveles de educación superior. De igual manera, los porcentajes más altos son entre la población no étnica. Llama la atención el peso porcentual de población masculina y femenina con estudios medios secundarios completos en la zona rural de Villarrica y Puerto Tejada, lo cual se relaciona con la presencia de las empresas industriales y de servicios de Ley Páez, las cuales sólo enganchan mujeres y hombres operarios-os con este nivel educativo.

En los diversos municipios el relativo mayor peso porcentual corresponde a la primaria completa en cabecera y sobre todo en resto para la gente negra. Aquí sí en algunos municipios el porcentaje de personas con ese nivel puede ser más masculino que femenino.

¹⁹ Primaria completa, media académica completa y nivel superior (estudios universitarios profesionales, especialización, maestría y doctorado).

En los municipios de transición intermedia (Cuadro 6.2) en la cabecera se destacan Buenaventura, Buenos Aires y Morales con una población no étnica y afrocolombiana con estudios universitarios, pero al igual que en el grupo anterior, las desigualdades entre los dos grupos étnico-raciales son considerables, incluso en Buenaventura. En la cabecera de Cajibío la única población con estudios universitarios es no étnica, a pesar de la presencia importante de población negra e indígena. En la zona resto se destaca Buenaventura con un porcentaje moderado con estudios universitarios, pero es el más sobresaliente en el resto de los 8 municipios. En general, como era de esperar, en la zona resto se concentran los mayores porcentajes de población con estudios de primaria completa. Vale la pena señalar la excepción del municipio de Morales que sobresale por el mayor porcentaje con media completa en el resto.

En los dos grupos anteriores de municipios la población indígena tiene los niveles de escolaridad menores, concentrándose en primaria completa, sobre todo en el resto. Sin embargo, hay sorpresas interesantes en la cabecera con niveles altos de participación porcentual en estudios universitarios en Palmira y Jamundí, en segundo lugar en Santander de Quilichao, Florida y Caloto para los hombres.

En los 7 municipios más indígenas (Cuadro 6.3) en la cabecera, Silvia, Inzá, Toribío, Caldoño y Páez (hombres), tienen en ese orden los mayores porcentajes de población indígena con estudios universitarios. En general se presentan fuertes diferencias a favor de la población no étnica, en términos de porcentaje con estudios universitarios: Paéz, Jambaló, Inzá y Toribío. En Silvia es el municipio en donde tienen en la cabecera porcentajes similares los dos grupos étnico-raciales con estudios universitarios. Como en los otros municipios los considerables diferenciales educativos entre la cabecera y el resto para estos municipios es importante, pero especialmente para los indígenas. En el resto, como era de esperar, el mayor porcentaje se da en estudios de primaria completa para los dos sexos.

Como podría esperarse, la población no étnica para el Valle, total nacional y Cauca tiene los mayores porcentajes de educación universitaria (Cuadro 6.4) respecto a la afrocolombiana y la indígena. Hay también una mayor predisposición de la población indígena para concentrarse en estudios de primaria completa en los tres agregados geográficos. Esto revela sus condiciones de mayor desigualdad en su inserción al sistema educativo, sobre todo en la zona resto. Sin embargo, llama la atención que en el Valle cabecera son muy cercanos los porcentajes de afrocolombianos e indígenas para los dos sexos con estudios universitarios, en cambio en el Cauca cabecera son ligeramente más altos los indígenas.

De una manera muy descriptiva puede señalarse que hay una asociación entre mayores niveles educativos, si tomamos estudios universitarios completos y secundaria o media completa, especialmente entre las mujeres, con menores tasas de fecundidad, ya sean tasas históricas, TGF o tasa de fecundidad general. Por lo menos esto es lo que se observa al comparar los cuadros 5 y 6 en los tres grupos de municipios. Por otro lado, esta asociación atraviesa los tres grupos étnico-raciales: la población femenina y masculina no étnica presenta mejores niveles educativos y a la vez tiene las tasas de fecundidad menores. La situación de la población femenina y masculina indígena marca el otro extremo, con la inserción menor al sistema educativo y las mayores tasas de fecundidad, en particular en la zona rural, ya que en cabecera se presenta otra situación. Finalmente, la población afrocolombiana se encuentra en una situación intermedia entre las dos anteriores.

A la vez, los mayores o menores niveles educativos se relaciona con los otros indicadores sociodemográficos presentados y claro está, con los diferenciales de NBI por grupo étnico-racial y municipio (ver Gráfico 1).

Cuadro 6.1
Niveles educativos, Municipios con transición demográfica avanzada

	Cabecera						Resto						Cabecera						Resto											
	Indígena		Afrocolombiana		No Étnica		Indígena		Afrocolombiana		No Étnica		Indígena		Afrocolombiana		No Étnica		Indígena		Afrocolombiana		No Étnica							
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer						
PALMIRA																														
Primaria completa	1,44%	1,16%	4,49%	4,14%	4,84%	4,12%	13,33%	21,13%	16,66%	16,39%	19,16%	18,87%	20,00%	0,00%	14,56%	12,80%	13,08%	14,11%	22,73%	24,44%	17,21%	16,19%	15,67%	15,79%	9,09%	13,33%	8,48%	9,65%	9,85%	9,94%
Media académica completa	1,44%	1,16%	1,97%	1,98%	2,40%	2,35%	6,67%	8,45%	6,49%	6,92%	7,87%	8,68%	40,00%	0,00%	12,59%	10,83%	16,76%	14,68%	9,09%	13,33%	8,48%	9,65%	9,85%	9,94%	9,09%	13,33%	8,48%	9,65%	9,85%	9,94%
Nivel superior (Profesional, especialización, maestría, Doctorado)	12,02%	6,98%	6,29%	6,43%	10,73%	10,52%	4,44%	4,23%	1,75%	2,23%	2,29%	2,39%	20,00%	0,00%	3,83%	5,63%	5,02%	7,28%	6,82%	4,44%	1,16%	1,89%	2,72%	2,93%	6,82%	4,44%	1,16%	1,89%	2,72%	2,93%
JAMUNDÍ																														
Primaria completa	8,51%	21,33%	13,35%	13,23%	12,70%	13,37%	10,95%	11,76%	16,29%	15,02%	15,91%	15,96%	15,40%	16,89%	13,51%	13,11%	13,23%	13,08%	17,25%	14,23%	18,06%	16,50%	17,43%	16,06%	17,25%	14,23%	18,06%	16,50%	17,43%	16,06%
Media académica completa	10,64%	10,67%	11,33%	11,87%	11,11%	11,46%	1,41%	2,94%	4,67%	5,49%	4,64%	6,40%	9,85%	8,61%	11,85%	12,75%	13,34%	13,84%	3,58%	3,56%	8,24%	10,99%	6,98%	8,96%	3,58%	3,56%	8,24%	10,99%	6,98%	8,96%
Nivel superior (Profesional, especialización, maestría, Doctorado)	12,77%	5,33%	6,72%	7,47%	10,28%	9,78%	0,35%	0,00%	1,82%	2,09%	6,21%	6,23%	3,88%	2,76%	4,70%	6,55%	8,77%	8,55%	0,91%	0,63%	0,49%	0,68%	1,38%	1,17%	0,91%	0,63%	0,49%	0,68%	1,38%	1,17%
PUERTO TEJADA																														
Primaria completa	15,38%	18,75%	12,46%	11,18%	12,34%	14,06%	10,95%	11,76%	14,14%	14,15%	22,58%	6,25%	16,29%	19,39%	13,30%	12,96%	14,44%	14,91%	14,73%	17,11%	16,12%	13,01%	15,29%	15,11%	14,73%	17,11%	16,12%	13,01%	15,29%	15,11%
Media académica completa	7,69%	6,25%	9,95%	11,90%	9,82%	11,16%	-	-	11,01%	14,52%	16,13%	25,00%	-	-	8,61%	8,61%	12,47%	12,21%	3,59%	3,20%	4,81%	5,40%	7,22%	7,14%	3,59%	3,20%	4,81%	5,40%	7,22%	7,14%
Nivel superior (Profesional, especialización, maestría, Doctorado)	0,00%	0,00%	2,75%	4,27%	5,29%	5,36%	-	-	1,31%	2,34%	8,06%	2,08%	5,06%	2,42%	1,95%	2,08%	3,65%	3,58%	0,85%	0,10%	0,62%	0,99%	1,10%	1,45%	0,85%	0,10%	0,62%	0,99%	1,10%	1,45%
PADILLA																														
Primaria completa	-	-	13,35%	10,45%	22,00%	12,50%	-	-	15,10%	13,94%	14,71%	10,71%	18,82%	15,46%	12,34%	12,26%	15,09%	14,69%	19,86%	10,33%	12,74%	13,94%	17,59%	15,69%	19,86%	10,33%	12,74%	13,94%	17,59%	15,69%
Media académica completa	-	-	12,65%	15,21%	10,00%	12,50%	-	-	5,08%	9,24%	8,82%	3,57%	10,59%	16,67%	7,70%	8,00%	11,02%	11,17%	3,42%	1,67%	10,59%	8,76%	6,46%	7,80%	3,42%	1,67%	10,59%	8,76%	6,46%	7,80%
Nivel superior (Profesional, especialización, maestría, Doctorado)	-	-	2,42%	3,31%	18,00%	4,17%	-	-	0,36%	0,86%	0,00%	0,00%	0,00%	2,38%	1,20%	1,92%	2,44%	2,89%	0,00%	0,83%	0,42%	1,20%	0,96%	0,96%	0,00%	0,83%	0,42%	1,20%	0,96%	0,96%
PIENDAMÓ																														
Primaria completa	18,67%	15,58%	14,29%	16,10%	15,23%	14,47%	19,38%	15,77%	11,86%	12,60%	19,46%	18,17%	15,00%	21,88%	12,53%	13,52%	12,89%	12,71%	16,39%	13,85%	16,69%	14,60%	17,59%	15,97%	16,39%	13,85%	16,69%	14,60%	17,59%	15,97%
Media académica completa	12,83%	11,59%	6,70%	7,20%	11,88%	13,25%	2,74%	2,55%	4,24%	3,15%	4,51%	5,21%	5,00%	15,63%	7,57%	8,16%	15,03%	13,62%	4,34%	4,85%	10,76%	12,60%	5,10%	6,64%	4,34%	4,85%	10,76%	12,60%	5,10%	6,64%
Nivel superior (Profesional, especialización, maestría, Doctorado)	2,90%	1,09%	4,46%	4,24%	4,91%	4,03%	0,42%	0,25%	0,85%	2,36%	1,11%	0,98%	5,00%	0,00%	6,08%	6,93%	6,19%	6,85%	0,40%	0,51%	0,72%	1,09%	1,05%	0,93%	0,40%	0,51%	0,72%	1,09%	1,05%	0,93%

	Cabecera						Resto					
	Indígena		Afrocolombiana		No Étnica		Indígena		Afrocolombiana		No Étnica	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
VILLA RICA												
Primaria completa	-	-	15,97%	15,25%	13,51%	17,65%	-	-	17,46%	15,46%	17,35%	16,16%
Media académica completa	-	-	9,96%	11,19%	12,16%	9,41%	-	-	7,20%	11,21%	8,16%	11,11%
Nivel superior (Profesional, especialización, maestría, Doctorado)	-	-	1,61%	2,46%	0,00%	1,18%	-	-	0,30%	0,63%	3,06%	2,02%

Cuadro 6.2
Niveles educativos, Municipios con transición demográfica intermedia

	Cabecera						Resto						Cabecera						Resto											
	Indígena		Afrocolombiana		No Étnica		Indígena		Afrocolombiana		No Étnica		Indígena		Afrocolombiana		No Étnica		Indígena		Afrocolombiana		No Étnica							
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer						
BUENOS AIRES																														
Primaria completa	-	-	15,27%	9,07%	15,15%	12,36%	13,53%	13,61%	16,80%	15,70%	18,26%	17,62%	15,36%	15,31%	15,72%	14,71%	14,68%	14,08%	17,63%	16,18%	16,72%	12,54%	16,61%	15,96%	17,63%	16,18%	16,72%	12,54%	16,61%	15,96%
Media académica completa	-	-	10,78%	14,56%	14,52%	20,00%	2,41%	3,14%	6,14%	8,33%	4,41%	6,88%	4,19%	6,12%	8,64%	10,90%	7,39%	10,09%	3,26%	3,56%	3,10%	3,58%	2,36%	3,99%	3,26%	3,56%	3,10%	3,58%	2,36%	3,99%
Nivel superior (Profesional, especialización, maestría, Doctorado)	-	-	4,79%	3,85%	6,02%	9,61%	0,19%	0,35%	0,40%	0,92%	0,73%	0,31%	1,40%	1,28%	1,87%	2,35%	2,41%	2,41%	0,19%	0,42%	0,31%	0,30%	0,34%	0,50%	0,19%	0,42%	0,31%	0,30%	0,34%	0,50%
MIRANDA																														
Primaria completa	15,15%	10,88%	10,91%	10,50%	13,71%	13,33%	14,42%	13,04%	15,19%	13,32%	14,50%	14,58%	23,08%	40,00%	21,01%	20,41%	13,49%	11,92%	17,16%	14,89%	16,00%	13,82%	18,67%	17,53%	17,16%	14,89%	16,00%	13,82%	18,67%	17,53%
Media académica completa	7,38%	7,43%	4,92%	4,80%	10,87%	12,18%	4,48%	5,78%	7,73%	8,31%	7,62%	6,46%	0,00%	0,00%	1,41%	2,25%	7,89%	8,04%	5,84%	5,97%	6,00%	4,88%	3,14%	4,35%	5,84%	5,97%	6,00%	4,88%	3,14%	4,35%
Nivel superior (Profesional, especialización, maestría, Doctorado)	2,24%	2,79%	1,26%	1,34%	4,00%	4,08%	0,84%	1,55%	0,92%	0,92%	3,07%	2,15%	0,00%	0,00%	3,23%	2,06%	2,35%	3,15%	0,58%	0,38%	0,33%	1,63%	0,28%	0,19%	0,58%	0,38%	0,33%	1,63%	0,28%	0,19%
BUENAVENTURA																														
Primaria completa	15,89%	13,52%	11,09%	10,05%	14,57%	12,72%	9,58%	7,87%	9,23%	8,36%	11,68%	14,75%	17,5%	16,5%	12,1%	12,2%	13,3%	15,4%	17,26%	17,21%	13,85%	13,43%	18,25%	14,64%	17,26%	17,21%	13,85%	13,43%	18,25%	14,64%
Media académica completa	6,83%	4,59%	8,23%	10,01%	10,12%	11,49%	4,01%	2,13%	3,30%	3,81%	12,03%	7,30%	2,1%	2,5%	4,7%	4,9%	7,6%	6,9%	1,25%	0,86%	3,23%	4,40%	1,71%	2,64%	1,25%	0,86%	3,23%	4,40%	1,71%	2,64%
Nivel superior (Profesional, especialización, maestría, Doctorado)	3,01%	3,57%	3,57%	5,24%	6,04%	6,12%	1,57%	0,66%	0,89%	1,40%	3,86%	4,35%	2,1%	1,3%	1,7%	2,1%	3,0%	3,0%	0,05%	0,06%	0,32%	0,49%	0,27%	0,34%	0,05%	0,06%	0,32%	0,49%	0,27%	0,34%
MORALES																														
Primaria completa	1,92%	11,32%	2,38%	0,00%	4,76%	4,28%	2,35%	1,96%	2,07%	2,19%	2,18%	2,49%	-	-	24,27%	12,39%	15,59%	17,78%	11,64%	13,67%	16,20%	15,02%	16,69%	15,76%	11,64%	13,67%	16,20%	15,02%	16,69%	15,76%
Media académica completa	19,23%	15,09%	16,67%	19,44%	15,27%	13,31%	7,13%	6,76%	3,46%	5,72%	8,47%	10,15%	-	-	10,60%	13,27%	14,15%	13,60%	3,88%	3,91%	1,70%	2,35%	2,30%	2,62%	3,88%	3,91%	1,70%	2,35%	2,30%	2,62%
Nivel superior (Profesional, especialización, maestría, Doctorado)	1,92%	0,00%	4,76%	2,78%	4,43%	6,66%	0,25%	0,27%	0,00%	0,17%	0,43%	0,60%	-	-	0,00%	1,77%	5,79%	6,51%	2,53%	1,76%	0,54%	0,67%	0,60%	0,72%	2,53%	1,76%	0,54%	0,67%	0,60%	0,72%

Cuadro 6.3
Niveles educativos, Municipios con transición demográfica rezagada

	Cabecera						Resto						TOTORÓ	Cabecera						Resto										
	Indígena		Afrocolombiana		No Étnica		Indígena		Afrocolombiana		No Étnica			Indígena		Afrocolombiana		No Étnica		Indígena		Afrocolombiana		No Étnica						
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer		Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer					
SILVIA																														
Primaria completa	13,65%	9,66%	-	-	13,01%	14,14%	15,96%	13,59%	-	-	19,19%	13,37%	17,72%	12,13%	-	-	14,09%	17,94%	16,11%	13,05%	-	-	22,64%	17,49%						
Media académica completa	8,47%	13,02%	-	-	8,49%	10,41%	3,80%	2,69%	-	-	5,13%	4,57%	13,92%	12,13%	-	-	16,30%	18,43%	4,22%	4,97%	-	-	4,93%	5,47%						
Nivel superior (Profesional, especialización, maestría, Doctorado)	7,76%	7,89%	-	-	6,88%	7,61%	0,99%	0,57%	-	-	0,83%	1,04%	2,53%	3,31%	-	-	2,21%	2,46%	0,58%	0,66%	-	-	1,26%	1,22%						
TORIBIO																														
Primaria completa	15,69%	10,10%	-	-	19,57%	12,05%	15,38%	12,73%	-	-	11,60%	10,12%	12,25%	10,35%	-	-	20,00%	20,00%	15,69%	13,20%	-	-	12,50%	11,76%						
Media académica completa	9,60%	12,93%	-	-	8,70%	13,65%	2,47%	2,45%	-	-	9,94%	7,74%	12,50%	19,06%	-	-	0,00%	0,00%	2,65%	2,26%	-	-	0,00%	0,00%						
Nivel superior (Profesional, especialización, maestría, Doctorado)	4,68%	6,26%	-	-	7,97%	12,85%	1,03%	1,00%	-	-	4,42%	7,14%	1,96%	2,82%	-	-	20,00%	33,33%	0,52%	0,57%	-	-	0,00%	0,00%						
CALDOW																														
Primaria completa	8,39%	12,03%	-	-	12,55%	13,57%	12,36%	9,87%	-	-	17,23%	14,40%	8,50%	8,29%	-	-	12,40%	10,37%	17,02%	15,55%	-	-	21,55%	19,74%						
Media académica completa	7,74%	10,76%	-	-	11,52%	13,80%	2,90%	2,20%	-	-	7,40%	7,48%	9,15%	15,12%	-	-	15,27%	14,46%	3,07%	3,13%	-	-	3,21%	3,58%						
Nivel superior (Profesional, especialización, maestría, Doctorado)	7,10%	4,43%	-	-	7,82%	5,66%	0,76%	0,52%	-	-	1,53%	2,11%	5,88%	6,34%	-	-	9,66%	12,14%	0,44%	0,67%	-	-	0,69%	0,98%						

	Cabecera						Resto					
	Indígena		Afrocolombiana		No Étnica		Indígena		Afrocolombiana		No Étnica	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
PÁEZ												
Primaria completa	16,67%	13,38%	6,52%	3,97%	12,07%	11,19%	14,88%	13,67%	16,72%	14,50%	17,64%	17,35%
Media académica completa	15,00%	8,92%	10,87%	9,52%	12,13%	14,21%	2,69%	2,14%	5,23%	5,46%	2,95%	3,70%
Nivel superior (Profesional, especialización, maestría, Doctorado)	5,42%	3,35%	4,35%	8,73%	7,35%	12,19%	0,26%	0,31%	1,31%	1,47%	0,30%	0,66%

Cuadro 6.4
Niveles educativos, departamental y nacional

	Cabecera						Resto						NACIONAL	Cabecera						Resto										
	Indígena		Afrocolombiana		No Étnica		Indígena		Afrocolombiana		No Étnica			Indígena		Afrocolombiana		No Étnica		Indígena		Afrocolombiana		No Étnica						
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer		Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer					
VALLE																														
Primaria completa	18,47%	20,30%	12,70%	12,84%	12,65%	13,76%	11,25%	11,07%	15,64%	14,57%	16,37%	16,54%	14,07%	14,04%	12,22%	12,37%	12,93%	13,09%	12,67%	11,04%	13,75%	13,55%	17,81%	17,35%						
Media académica completa	11,08%	9,61%	10,75%	11,30%	12,74%	13,24%	2,81%	2,40%	6,41%	7,29%	6,81%	7,89%	11,11%	10,80%	11,04%	11,31%	12,35%	12,76%	3,19%	3,09%	4,82%	5,44%	42,90%	4,96%						
Nivel superior (Profesional, especialización, maestría, Doctorado)	6,57%	4,93%	5,12%	5,76%	10,53%	10,17%	1,05%	0,54%	1,33%	1,78%	1,78%	1,94%	5,65%	5,45%	6,33%	6,79%	10,97%	10,95%	0,58%	0,60%	0,94%	1,11%	1,10%	1,20%						
CAUCA																														
Primaria completa	15,86%	14,11%	12,43%	11,82%	13,24%	13,18%	16,24%	13,97%	15,28%	14,14%	18,99%	17,06%	16,24%	13,97%	15,28%	14,14%	18,99%	17,06%												
Media académica completa	10,74%	11,37%	9,92%	10,95%	12,58%	13,30%	3,42%	3,24%	6,25%	7,98%	3,73%	4,27%	3,42%	3,24%	6,25%	7,98%	3,73%	4,27%												
Nivel superior (Profesional, especialización, maestría, Doctorado)	5,91%	5,07%	3,91%	5,00%	12,94%	11,95%	0,65%	0,62%	0,77%	1,03%	0,81%	0,81%	0,65%	0,62%	0,77%	1,03%	0,81%	0,81%												

Dos indicadores relacionados con el mercado laboral y las condiciones de vida: posición ocupacional y tipo de cobertura en salud por grupo étnico-racial y sexo en los 26 municipios de la región, con base al censo de 2005.

Este capítulo aborda el componente socioeconómico de la región a través de dos indicadores disponibles en la explotación del formulario ampliado del censo 2005²⁰: a) la posición ocupacional²¹ que permite acercarse al conjunto de las relaciones sociales dominantes en cada municipio al nivel de cabecera y resto y b) la cobertura de salud²². En este capítulo estamos utilizando la cobertura de salud como un indicador proxy privilegiado del mercado laboral, ya que está claramente asociado a las condiciones de trabajo, de ahí que al lado de la posición ocupacional se puede disponer de una mirada más completa de los procesos de formalidad o informalidad en el trabajo. En segundo lugar, no podemos desconocer que el indicador de cobertura de salud es fundamental en el componente de condiciones de vida.

Posición ocupacional según grupo étnico racial y municipios de la región:

A través del Gráfico 2 se observa que la categoría trabajador cuenta propia es predominante en los municipios con mayoría o alto peso de población indígena, o también ante la presencia de una economía campesina negra. Esto se hace visible a partir del municipio de Inzá hacia la izquierda, con 40% o más de la categoría cuenta propia. En sentido contrario, con menos del 30% hacia porcentajes menores en dirección derecha del gráfico, hasta llegar a valores cercanos al 10% como en el municipio de Candelaria. Se tienen así dos municipios polares en la distribución: Silvia, el de mayor peso porcentual de trabajo cuenta propia y Candelaria el de menor peso.

La región puede así organizarse en cuatro grandes tipos de municipios según el peso porcentual de esta categoría.

- 1) Municipios con menos del 20% de su PEA ocupada en empleos bajo la categoría cuenta propia: Candelaria, Palmira, Buenaventura, Puerto Tejada, Florida, Jamundí, Pradera y Villarrica.

²⁰ El formulario ampliado correspondió a la encuesta co-censal, que incluyó una batería de preguntas en diferentes componentes socioeconómicos y de condiciones de vida. Esta encuesta co-censal se aplicó por muestra calculada según niveles de concentración urbana, pero en la zona rural más dispersa tuvo carácter de censo al igual que la aplicación del formulario básico o universal. Esto último aplicó especialmente en todas las áreas de resguardos indígenas del país, así como en la zona rural de todos los municipios del Pacífico.

²¹ Por posición ocupacional se entiende la relación social del individuo en el empleo u ocupación en el proceso de trabajo.

²² El formulario censal establece las siguientes categorías de cobertura de salud: ISS, regímenes especiales de salud, EPS privadas (las anteriores tres categorías corresponden al sistema contributivo), ARS mediante clasificación SISBEN u otra modalidad (sistema subsidiado) y ninguna cobertura. Aquí se han agregado las tres primeras en EPS (ya sean privadas o públicas), quedando así: cobertura por EPS, ARS mediante SISBEN o simplemente SISBEN, y ninguna cobertura. Las tres primeras categorías fueron agregadas por razones técnicas del CVE (coeficiente de variación estadística), ya que se trata de una muestra.

Posición ocupacional para 26 municipios del norte del Cauca y sur del Valle, departamentos y capitales por grupo étnico-racial, para población total, 2005

Gráfico 2

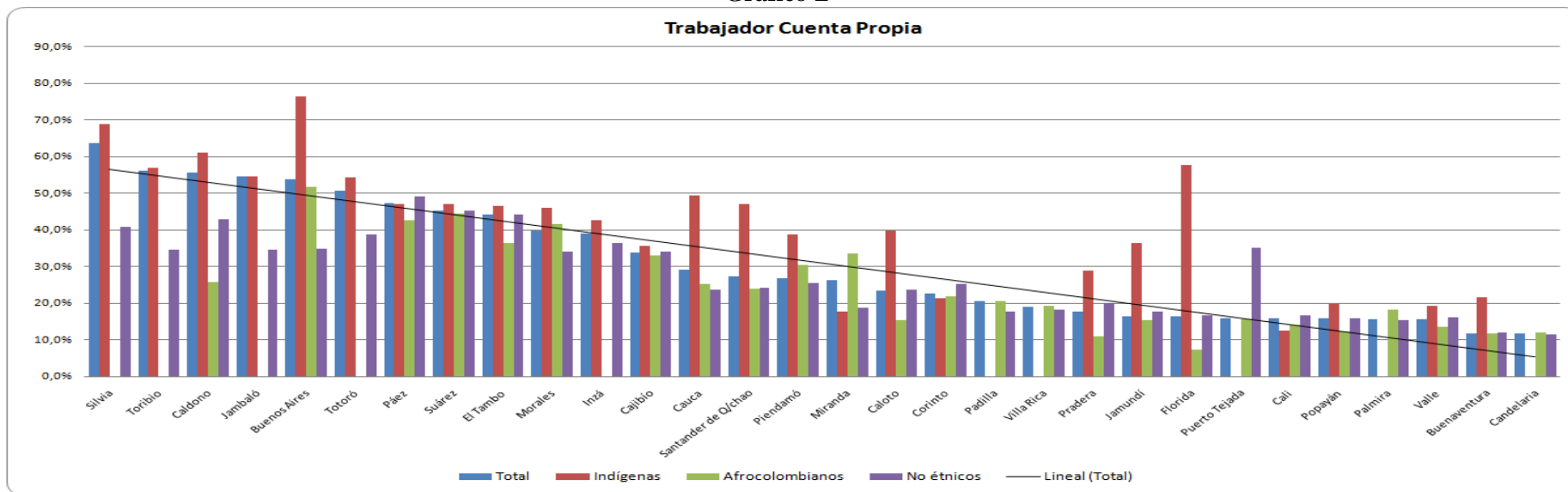


Gráfico 3

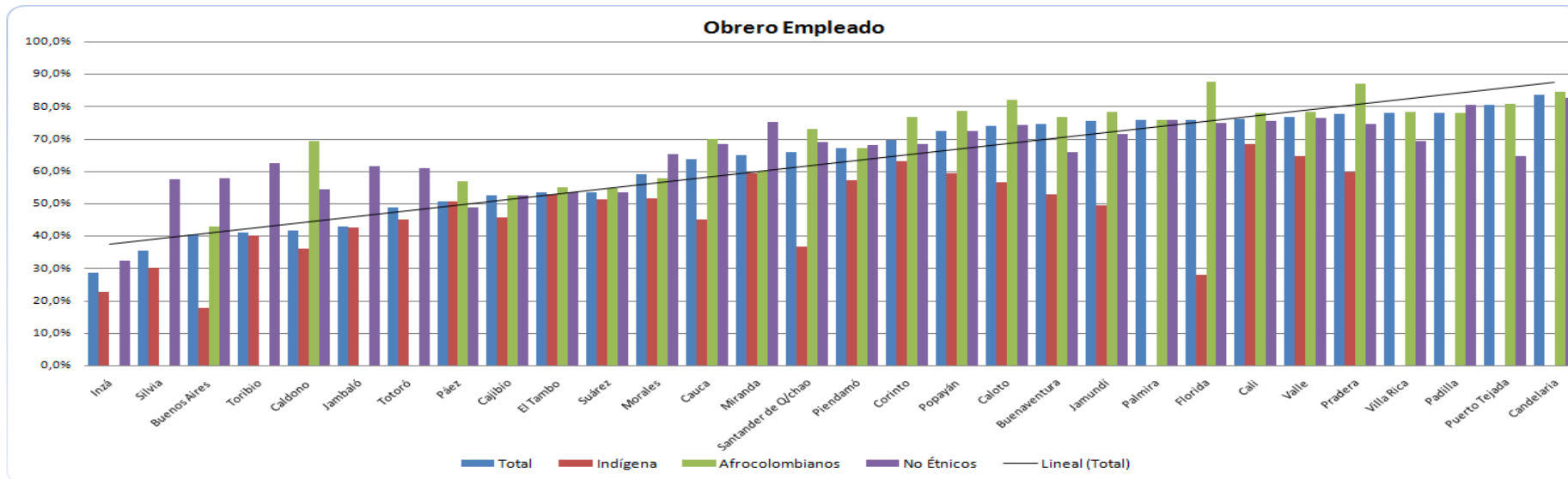


Gráfico 4

Patrón Empleador

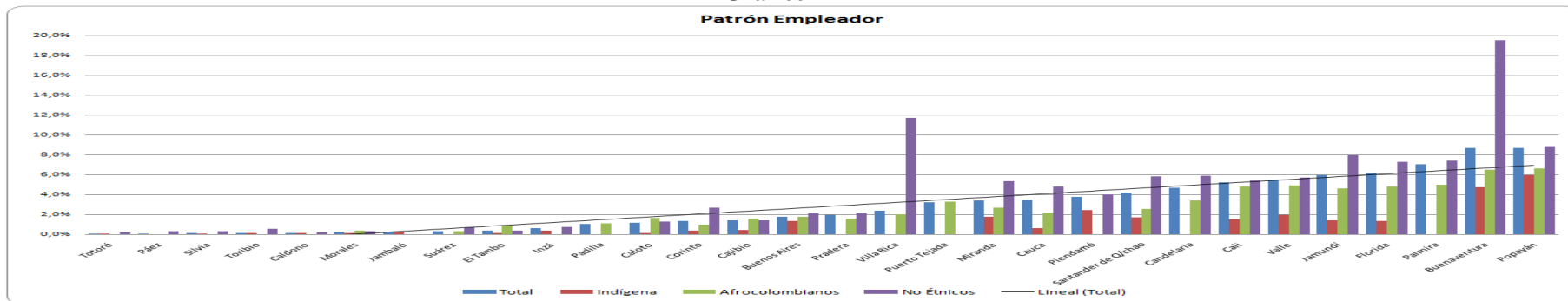


Gráfico 5

Empleado Doméstico

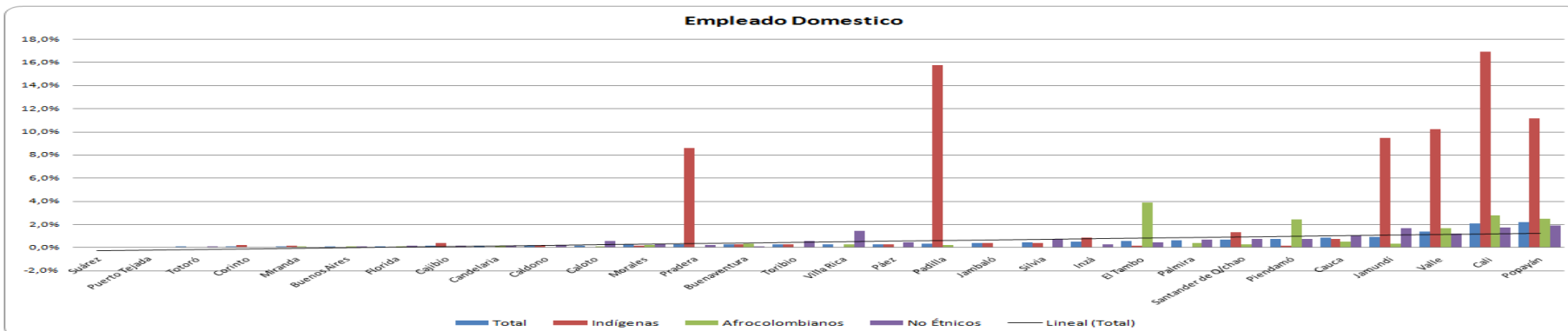
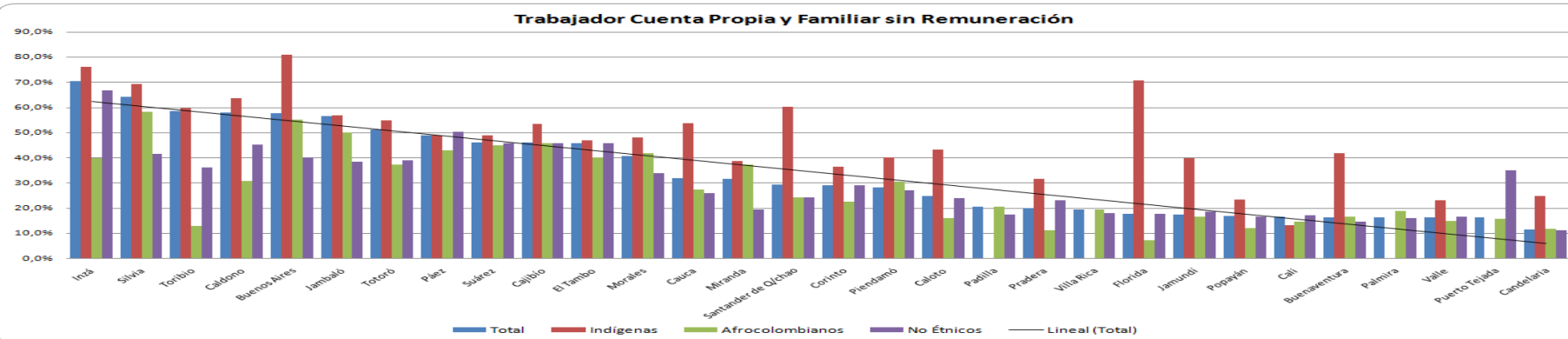


Gráfico 6

Trabajador Cuenta Propia y Familiar sin Remuneración



- 2) Municipios entre 20 y 30%: Padilla, Corinto, Caloto, Miranda, Piendamó y Santander de Quilichao.
- 3) Municipios entre 30 y 40%: Cajibío, Inzá y Morales.
- 4) Municipios con más del 40%: El Tambo, Suárez, Páez, Totoró, Buenos Aires, Jambaló, Caldon, Toribío y Silvia.

El Gráfico 3, sobre la distribución de la categoría obrero-empleado, como era de esperar, es el reverso del anterior. Se presentan algunos cambios en el orden de los municipios. Sin embargo, se puede observar que se mantiene la distribución en tres grandes grupos de municipios: a) los de mayor peso de asalariamiento y menor cuenta propia, Candelaria, Palmira, Puerto Tejada, Padilla, Villarrica, Pradera, Florida, Jamundí y Caloto; b) los que tienen una mayor participación de trabajo cuenta propia y una relativa menor participación de asalariado, Corinto, Piendamó, Santander de Quilichao y Miranda; y c) el tercer grupo, donde el peso del trabajo cuenta propia pasa del 30% y desciende la importancia del trabajo asalariado, en menos del 60%, Morales, Suárez, El Tambo, Cajibío, Páez, Totoró, Jambaló, Caldon, Toribío, Buenos Aires, Silvia e Inzá. Los cambios más importantes tienen que ver con Inzá que pasa a constituir el municipio con menos proporción de trabajo asalariado de los 26 y por lo mismo, en el extremo derecho del gráfico de la categoría obrero-empleado y el caso de Buenaventura, el cual en términos de trabajo asalariado se reubica entre Caloto y Jamundí, o sea, en el grupo de mayor asalariamiento.

El gráfico de patrón-empleador, de menor a mayor, muestra como tendencia una relación esperada con la gráfica de asalariamiento (categoría obrero-empleado), a pesar de variaciones en el orden de los municipios pero conservando la relación inversa asalariamiento/cuenta propia. El mayor cambio se da con el municipio de Buenos Aires, el cual se desplaza hacia una posición intermedia, entre Pradera y Cajibío (ver gráfico señalado). De cualquier forma, no hay una relación lineal con los dos gráficos anteriores precisamente porque esta categoría es muy heterogénea con un peso enorme de pequeños empresarios, que incide sobre el orden resultante de municipios.

Popayán – municipio de referencia comparativa - y Buenaventura son los municipios con el mayor peso porcentual de patrones empleadores, seguidos por Palmira, Florida, Jamundí, Valle, Cali - referencia comparativa -, Candelaria y Santander de Quilichao. En gran medida se trata de pequeños empresarios. En el segundo grupo de municipios se destacan Piendamó, Cauca, Miranda, Puerto Tejada, Villarrica y Pradera. En el resto de municipios más bien es poco relevante la presencia de esta categoría social (inferior al 2%). Hay que señalar que en casi todos los municipios se trata de población no étnica la que predomina en esta categoría laboral, con importantes excepciones respecto a presencia de empresarios indígenas o afrocolombianos (en Santander de Quilichao, Piendamó, Jamundí, Florida, Buenaventura). Por otro lado, se ve claramente que en los municipios indígenas, a partir de Inzá hacia la izquierda, es completamente marginal esta categoría y por ello la línea de tendencia alcanza una pendiente negativa²³.

²³ Se tiene conocimiento de la importancia que tiene el comercio y los pequeños negocios y el transporte en el pueblo indígena Guambiano, concentrado en un 56% en el municipio de Silvia. Desafortunadamente la información censal no detecta esta población.

El Gráfico 5 de la categoría empleada-o o servicio doméstico (en el mismo orden de cuenta propia) revela que es fundamental este empleo para las mujeres indígenas, sobre todo en ciudades (Cali, Popayán, Jamundí) y en las cabeceras de los municipios de Pradera, Padilla, Santander de Quilichao, Inzá. Este hallazgo es clave para entender la inserción urbana de la población indígena femenina, ya sea en las cabeceras de municipios rurales o en centros urbanos de importante magnitud como Cali o Popayán²⁴.

La categoría trabajador familiar sin remuneración de mayor a menor (Gráfico 6), que representa la relación social más atrasada en el espacio laboral, tiene importancia en una serie de municipios, con destaque especial entre la población indígena de los municipios de Suárez, Cajibío, Páez, Caldon, Totoró, Jambaló, Buenos Aires, Toribío Silvia e Inzá.

Cobertura de salud en los 26 municipios, según grupo étnico-racial: régimen contributivo, subsidiado y ninguna cobertura en salud:

Los Gráficos 7, 8 y 9, relacionados con afiliación a seguridad social, en los 25 municipios del norte del Cauca y sur del Valle, departamentos y sus capitales, por grupo étnico racial para población total, permiten profundizar algunas de las características del mercado de trabajo en la región y aproximarse a las condiciones de vida.

La afiliación a una EPS – régimen contributivo - está directamente asociado a una relación asalariada, lo cual se confirma en el Gráfico 7. Los siguientes municipios, entre un 30% y 50% de sus empleos, tienen cobertura de salud mediante la modalidad contributiva: de menor a mayor (de izquierda a derecha) Miranda, Santander de Quilichao, Padilla, Villarrica, Caloto, Pradera, Florida, Jamundí, Puerto Tejada, Candelaria y Palmira. Cali como punto de comparación está en el extremo izquierdo, Valle entre Palmira y Puerto Tejada y Popayán entre Pradera y Caloto. De los anteriores, Palmira, Candelaria, Puerto Tejada, Jamundí, Florida y Pradera, tienen entre el 45% y 50% de su población cubierta por esta modalidad de afiliación. Se trata de municipios de la zona plana del valle geográfico, aunque varios de ellos tienen área de montaña, con predominio de un mercado de trabajo asalariado agroindustrial azucarero y de etanol e industrial. Concretamente en los casos de Santander de Quilichao, Villarrica, Puerto Tejada, Caloto y Miranda, como veremos en el siguiente capítulo, el impacto de la Ley Páez ha sido significativo en el componente de empleo industrial. Viene un segundo grupo de municipios con participación media baja de la modalidad contributiva en salud bajo EPS entre un 30% y 20%, de mayor a menor: Corinto, Buenaventura, Piendamó, Silvia y Buenos Aires. Llama la atención aquí el caso de un municipio indígena (Silvia) con una relativa cobertura contributiva media-baja, sin embargo, muy por encima de otros municipios indígenas, lo cual tiene que ver con el peso de la población no étnica de cabecera afiliada bajo esta modalidad (véase gráfico de cabecera). Esto es válido para los otros municipios indígenas en lo concerniente a cobertura por EPS en el sector de la cabecera municipal. Puede suponerse que hay un

²⁴ Los datos del censo 2005 muestran que el empleo femenino indígena es igualmente importante en ciudades como Bogotá y Medellín, además de otras en el país.

sector de la población indígena que tiene afiliación vía EPS, por cuanto tiene empleos a través del sector público local y ONG's²⁵.

Un tercer grupo de municipios presenta una cobertura de salud contributiva entre el 20% y el 10%, Páez, Toribío, Caldono y Morales, los tres primeros municipios indígenas. Por último, los municipios de El Tambo, Inzá, Cajibío, Totoró, Suárez y Jambaló, con la menor cobertura contributiva, inferior al 10%.

Respecto a la afiliación vía sistema subsidiado (ARS) a través de la clasificación de pobreza que genera el SISBEN, en principio la tendencia debiera ser la inversa a la anterior: los municipios con mayor participación contributiva tendrían una menor participación en salud subsidiada. Veamos entonces el comportamiento de los datos municipales (Gráfico 8).

²⁵ Como muestran los datos, en el caso de Silvia y los otros municipios indígenas en cabecera aparece una población indígena con cobertura contributiva, o sea, por EPS. A manera de hipótesis, hay que tener en cuenta que esta información también puede ser el resultado de una confusión durante el operativo censal en el momento de responder la pregunta, al asimilar la afiliación a la ARS indígena como si fuese una EPS.

Afiliación a seguridad social, en los 25 municipios del norte del Cauca y sur del Valle, departamentos y sus capitales, por grupo étnico racial para población total

Gráfico 7

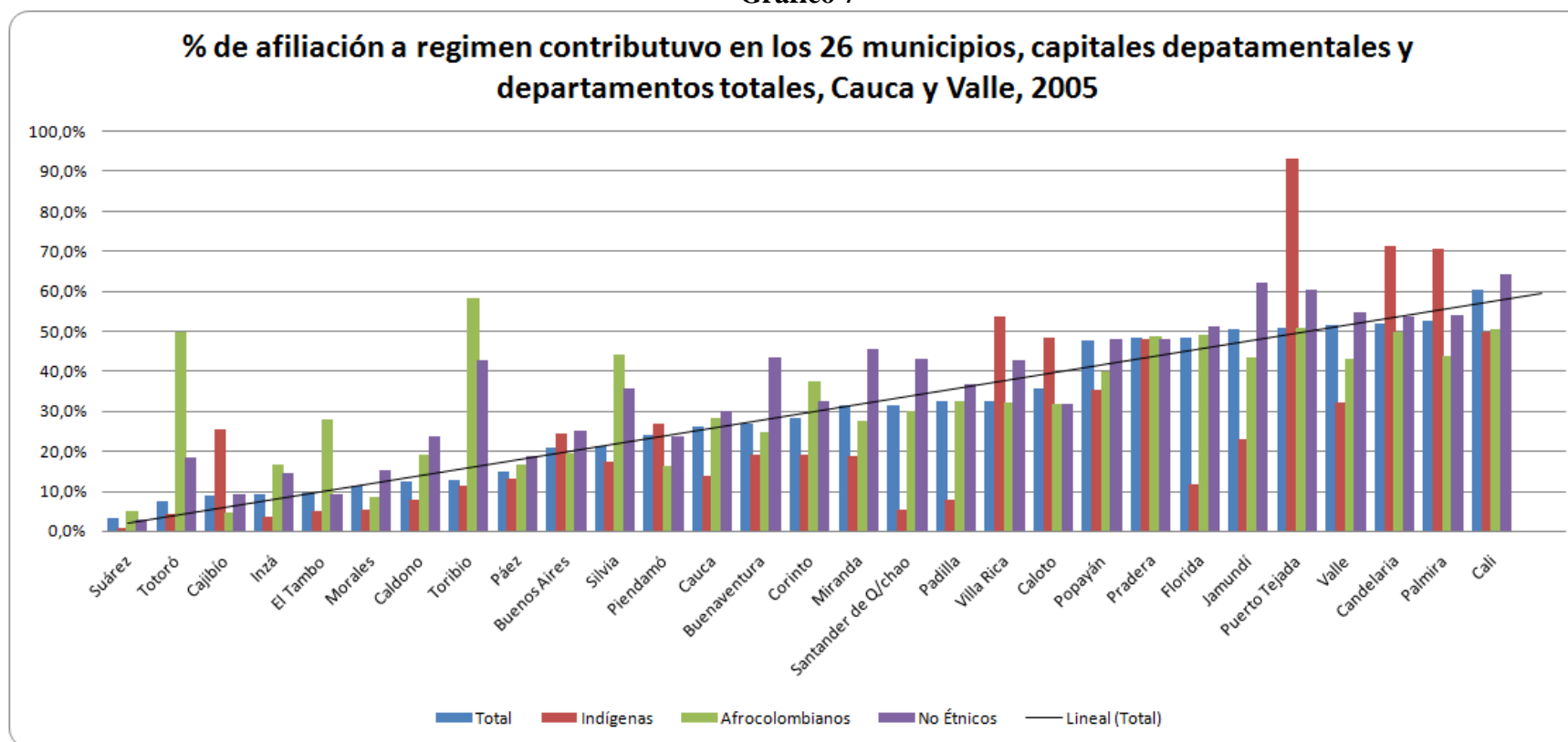


Gráfico 8

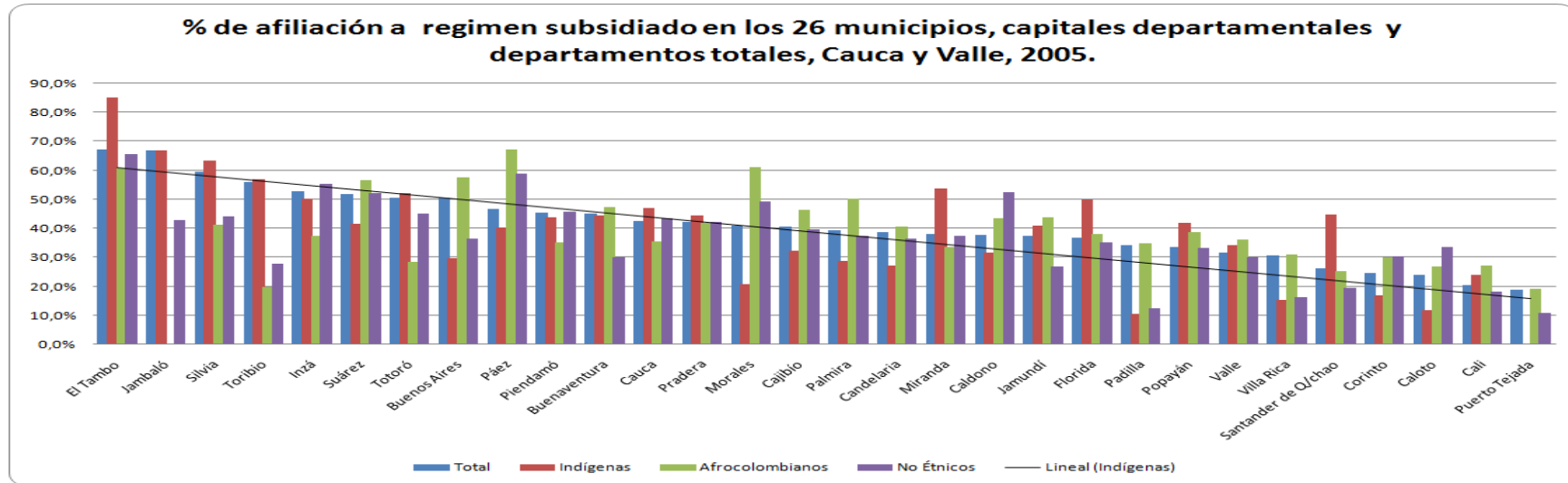
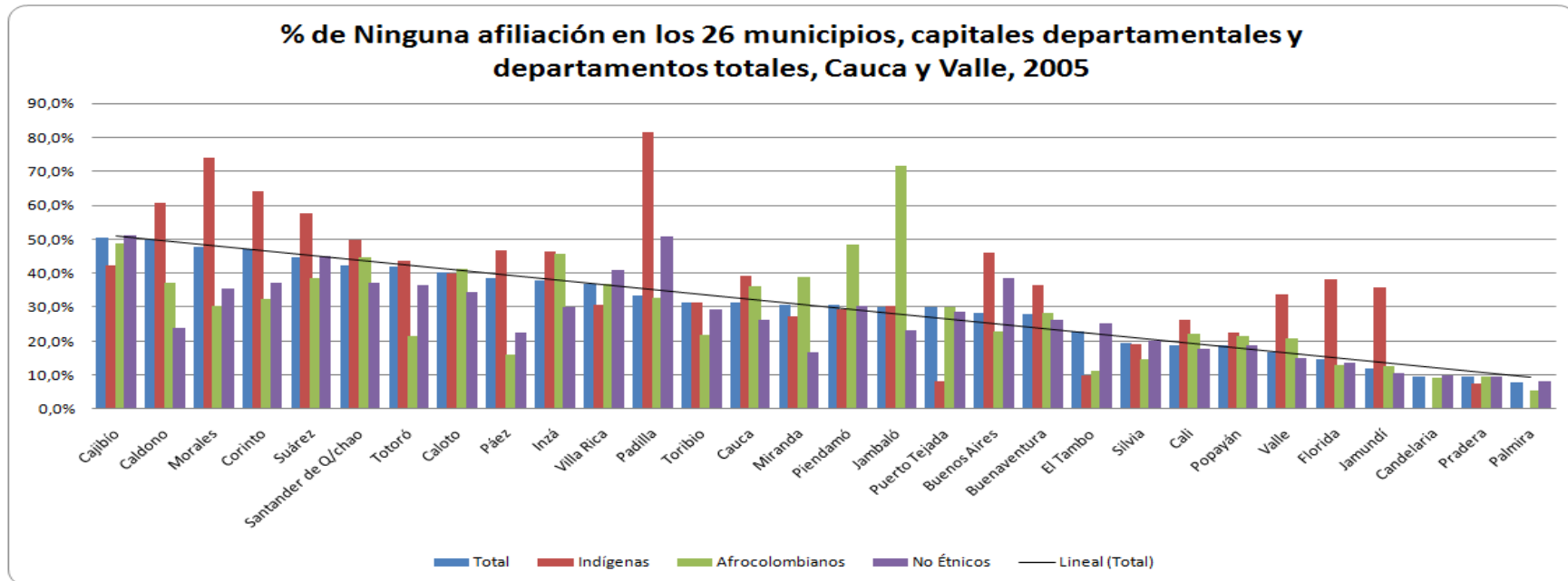


Gráfico 9



Los municipios de Puerto Tejada, Florida, Candelaria, Palmira, Jamundí y Pradera tienen cobertura de afiliación subsidiada baja (<30%) o media-baja (30%-50%), al tiempo que su afiliación en salud mediante EPS es alta (45% o más). En el extremo opuesto, los municipios de El Tambo, Jambaló, Toribío, Inzá, Suárez, Totoró, Morales, Caldon, Cajibío y Páez tienen coberturas altas mediante subsidio del 50% o más o media-baja (30%-50%) y por afiliación a EPS baja, menor al 20%. Ver Cuadro 7. Por otro lado, están los municipios con cobertura subsidiada alta (50% o más) y contributiva media-baja (20%-29%), Silvia y Buenos Aires; los de cobertura subsidiada baja (<30%)

Cuadro 7
Distribución de los 26 municipios según cobertura de salud contributiva vs subsidiada y porcentaje de población sin ninguna cobertura, 2005.

CONTRIBUTIVO	SUSIDIADO	ALTO ≥50%	MEDIO <50% - ≥30%	BAJO <30%
ALTO ≥45%			Candelaria (D) Palmira (D) Jamundi(C) Pradera(D) Florida(C)	Puerto Tejada (B)
MEDIO <45% - ≥30%			Miranda(B) Villa Rica(B) Padilla(B)	Caloto(A) Santander de Quilichao (A)
MEDIO BAJO <29% - ≥20%		Buenos Aires(C) Silvia(C)	Buenaventura(C) Piendamó(B)	Corinto(A)
BAJO <20%		Toribio(B) Totoró(A) Inzá(B) Jambaló(B) Suárez(A) El Tambo(C)	Morales(A) Caldono(A) Cajibio(A) Páez(B)	

Simbología "Ninguna Cobertura de salud" (A) 40%-50%
 (B) 30-39%
 (C) 20-10%
 (D) <10%

y contributiva, con Corinto; y en una situación intermedia (cobertura por subsidio media y contributiva media-baja), con Buenaventura y Piendamó. Finalmente, los de cobertura subsidiada baja y contributiva media (30%-45%), Caloto y Santander de Quilichao; y los de cobertura subsidiada media y contributiva media, Miranda, Villarrica y Padilla.

De acuerdo con lo anterior, y como lo muestra de manera tipológica el Cuadro 7, aunque hay un patrón de concentración en dos polos: municipios con alta participación de EPS y reducida cobertura o cobertura media-baja vía SISBEN versus municipios con baja o media cobertura de EPS y alta o media cobertura subsidiada, sin embargo, no se presenta una tendencia bien clara, debido precisamente a la presencia de un grupo numeroso de municipios en posiciones intermedias y además a la existencia de

municipios en los dos polos en un rango medio difuso, tanto para la cobertura contributiva como la subsidiada. Esto puede observarse mucho mejor en el nivel de “ninguna cobertura” a través del gráfico respectivo y señalado a través de la simbología (A, B, C y D), la cual no tiene un patrón definido relacionado con el tipo de cobertura en salud (ver Cuadro 7). Este fenómeno muy posiblemente tiene que ver con la dinámica de aumento de la cobertura del sistema subsidiado, mediada más por factores políticos locales y regionales, entre otros la capacidad de presión y negociación de las organizaciones sociales y las autoridades locales y regionales, por el incremento de recursos para ampliar la base de la población beneficiaria censada a través del SISBEN y menos por la existencia de una mayor o menor presencia de población afiliada vía EPS. Sin embargo, valga la pena advertir que el carácter de la temporalidad e inestabilidad de los empleos asalariados hace que los trabajadores requieran recurrir al sistema subsidiado con frecuencia entre el período de término de un contrato laboral y el reinicio del siguiente, incluso en la misma empresa

Finalmente, ¿qué se puede decir del mercado laboral a través de la cobertura de salud en los 26 municipios? Primero, en los municipios de mayor asalaramiento es claro que se presentan más altas coberturas vía EPS y lo opuesto, en los de mayor predominio del trabajo cuenta propia y familiar sin remuneración es mayor el peso del sistema subsidiado. Esto es relativamente válido con las limitaciones antes anotadas al encontrarse un número importante de municipios en una situación intermedia entre los dos polos. Segundo, sin embargo, una generalización del asalaramiento no significa mayor formalización del mercado de trabajo. Esto último se escapa al análisis de este texto. Sólo puede anotarse que el fenómeno de subcontratación laboral está ampliamente consolidado en los diferentes municipios de la zona plana del valle geográfico, por lo que se desprende del mecanismo de las CTA (cooperativas de trabajo asociado) en el sector de la caña de azúcar (Aricapa, 2006; Urrea, 2007; Castaño, 2008) y como ha sido analizado por Bermúdez et al., (2007) para las empresas industriales en los municipios de Ley Páez. Tercero, en esta dirección, los datos apuntan más bien a un mercado laboral asalariado en el grupo de municipios ya mencionados, que convive con una informalidad impuesta por el régimen de subcontratación y por lo mismo, reproduce una alta rotación de mano de obra en el sector azucarero e industrial maquilador en los municipios de la Ley Páez. Cuarto, no obstante, frente a las condiciones de trabajo y de vida de las economías campesinas indígena, negra y mestiza que forman parte de la región es indiscutible que los indicadores sociodemográficos y socioeconómicos de la subregión más capitalista son mucho mejores. En ese sentido, a pesar de una inserción capitalista precaria de la población negra, indígena y mestiza en los 11 municipios con los mejores indicadores sociodemográficos y socioeconómicos, no pueden desconocerse los procesos de modernización / modernidad que esto ha conllevado y que forman parte de las características del área metropolitana de Cali, entre la zona plana del sur del Valle y norte del Cauca.

Una mirada al contexto socioeconómico de la región: el área metropolitana de Cali versus Popayán y la Ley Páez

En este punto intentamos analizar cuál ha sido el potencial efecto de dos fenómenos, la conformación del área metropolitana de Cali hacia el sur versus la influencia de la ciudad de Popayán y el proceso agroindustrial y sobre todo industrial que trajo la Ley Páez a partir de 1997 en los municipios del norte del Cauca (Caloto, Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Villarrica y Miranda). Por supuesto, el proceso de conformación del área metropolitana hacia el sur de Cali viene desde la década del 80 en el siglo pasado (Urrea y Hurtado, 1997), pero con la Ley Páez este fenómeno se ha consolidado. Por otro lado, no sólo se trata del impacto en los cinco municipios donde están ubicadas las empresas industriales sino cuáles efectos muestran los datos disponibles sobre otros municipios de la región, especialmente los indígenas.

Dinámica demográfica de los polos urbanos de la región sur Valle – norte Cauca y sus áreas de influencia:

La dinámica demográfica intercensal 1993-2005 de los dos principales polos urbanos que inciden sobre la región y sus áreas de influencia permite captar cuáles son las principales tendencias de influencia y consolidación urbana en torno a un área metropolitana y su incidencia sobre el espacio regional sur Valle – norte Cauca.

El Cuadro 8 ilustra las tendencias de crecimiento poblacional en el período intercensal 1993-2005. En primer lugar, los dos departamentos, Valle y Cauca, tienen tasas de crecimiento de población muy magras, lo cual significa que ambos son expulsores – más el Cauca que el Valle -, si bien el Valle alcanza a crecer 0,3% más que el Cauca. En segundo lugar, llama la atención que Cali alcanza a presentar una tasa de crecimiento exponencial ligeramente mayor a la del departamento del Valle, pero inferior a la de Popayán (1,4% versus 1,6%); es decir, el dinamismo demográfico de esta última ciudad ha sido un poco más alto que el de Cali, en un contexto de un departamento fuertemente expulsor (Cauca). En tercer lugar, los dos grupos de municipios que conforman sociológicamente el área metropolitana de Cali, los del sur del Valle (Palmira, Florida, Candelaria, Jamundí y Yumbo) y los del norte del Cauca (Puerto Tejada, Caloto, Villarrica y Santander de Quilichao), crecieron a ritmos bien diferentes, al igual que el conjunto de ellos con Cali: 0,9% los del norte del Cauca, 2,5% los del sur del Valle y 1,6% los 10 municipios; mientras Popayán, los municipios próximos a Popayán (Puracé, Totoró, Cajibío, Morales, Piendamó, Silvia, El Tambo, Timbío y Sotará) y el conjunto de los 10 con Popayán, crecieron a 1,6%, 1,1% y 1,4% respectivamente.

Lo anterior significa que el principal dinamismo demográfico lo tuvo la subregión del sur del Valle que forma parte del área metropolitana de Cali, muy por encima de esta última (2,5% versus 1,4%), lo cual demuestra que en estos municipios se registró una tasa neta migratoria positiva alta (inmigración), desde Cali y desde otros municipios del Valle y sobre todo desde otros departamentos como el Cauca. Por el contrario, los municipios del área metropolitana de Cali del norte del Cauca apenas crecieron el 0,9%, en claro contraste con los anteriores.

Cuadro 8. Tasas de crecimiento exponencial de la población: Cali, municipios AM Cali, Popayán y municipios próximos, 1993-2005

Municipio	Población		Tasa expon. crecimiento
	1993	2005	1993 - 2005
Cali	1794512	2119908	1,4%
Mpios AM Cali del norte Cauca (1)	157933	175853	0,9%
Mpios AM Cali del sur Valle (2)	445904	599959	2,5%
Cali + Mpios AM Cauca y Valle	2398349	2895720	1,6%
Valle del Cauca	3589024	4161425	1,2%
Popayán	212091	257512	1,6%
Mpios próximos Popayán (3)	219290	249789	1,1%
Popayán + Mpios próximos	431381	507301	1,4%
Cauca	1107525	1268937	1,1%

(1) Puerto Tejada, Caloto, Villarrica, Santander de Quilichao.

(2) Palmira, Florida, Candelaria, Jamundí, Yumbo.

(3) Puracé, Totoró, Cajibío, Morales, Piendamó, Silvia, El Tambo, Timbío, Sotará.

Fuente: censo 1993 con población ajustada, censo 2005 con población conciliada; DANE.

Aquí se dio un fenómeno de fuerte salida o emigración de población, muy seguramente hacia Cali y los municipios del sur del Valle (Candelaria, Jamundí, Yumbo), Popayán y sobre todo hacia otras ciudades, especialmente Bogotá, y regiones del país y el exterior. En síntesis, Cali como centro urbano perdió fuerza a favor de los municipios del área metropolitana del sur del Valle y Popayán alcanzó a tener un relativo mejor dinamismo, apoyándose en la inmigración desde los municipios próximos y de otros municipios del Cauca y del departamento de Nariño. Como hipótesis preliminar hay que señalar una periferia del área metropolitana que se expande y otra que expulsa población. Curiosamente la segunda es la subregión por excelencia donde se ha concentrado la inversión industrial de la Ley Páez²⁶.

¿Por qué incluimos a estos cinco municipios del norte del Cauca en el área metropolitana de Cali? En un estudio de Urrea y Hurtado (1997) ya se hacía un primer análisis detallado del fenómeno de Puerto Tejada como “ciudad dormitorio” respecto a Cali, al igual que se introducía una información sobre Santander de Quilichao y Caloto y sus nexos cotidianos con Cali, especialmente del primer municipio. Veamos los datos existentes para el censo de 1993.

²⁶ Con la única excepción del municipio de Miranda.

Cuadro 9. Distribución porcentual de los migrantes de toda la vida en la región metropolitana de Cali, 1993 (porcentajes horizontales)

MUNICIPIO	NATIVOS %	MIGRANTES %	OTRO %	OTRO DEPARTAMENTO %	OTRO PAIS%
Cali	53,50%	46,50%	33,71%	65,13%	1,16%
Candelaria	38,80%	61,20%	63,12%	36,70%	0,18%
Jamundí	47,14%	52,86%	55,37%	44,32%	0,31%
Palmira	58,84%	41,16%	50,71%	48,59%	0,70%
Yumbo	36,40%	63,60%	67,26%	32,44%	0,30%
Puerto Tejada	60,73%	39,30%	41,82%	57,48%	0,70%

Fuente: Urrea y Hurtado, Puerto Tejada 100 Años, Editor Francisco Zuluaga (1997, pág. 220)

Hacia el año 1993 ya era claro que los municipios de Candelaria, Jamundí y Yumbo contenían una población migrante bien superior a la nativa (más del 50%, Cuadro 9) y que en su gran mayoría provenía de otro municipio del mismo departamento (más del 60% para Candelaria y Yumbo, y más del 50% para Jamundí). Este municipio por excelencia era Cali. Palmira presentaba un panorama más moderado, pero igualmente seguía la tendencia de los otros municipios del área metropolitana para esa época. Puerto Tejada era el municipio menos cosmopolita pues tenía menos del 40% de su población migrante pero el 55% procedía de otro departamento (Nariño, Valle, Antioquia y departamentos del Viejo Caldas, etc.).

El Cuadro 10 presenta la migración reciente, observándose tendencias similares a la de toda la vida. Puerto Tejada presenta menores porcentajes respecto a los otros municipios del Valle, pero de todos modos no deja de ser importante, sobre todo en relación con los residentes del mismo departamento y de otro país.

Cuadro 10. Distribución porcentual de los migrantes de cinco años anteriores a la fecha del Censo de 1993 en la región metropolitana de Cali (1988) (porcentajes horizontales)

MUNICIPIO	%RESIDENTES MISMO MPIO	% RESIDENTES OTRO MPIO MISMO DEPTO	% RESIDENTES OTRO MPIO DE OTRO DEPTO	% RESIDENTES MISMO DEPTO	% RESIDENTES OTRO PAIS
Cali	83,21%	16,79%	30,79%	64,30%	4,91%
Candelaria	85,14%	14,86%	87,39%	11,09%	1,52%
Jamundí	75,99%	24,01%	61,06%	37,36%	1,59%
Palmira	84,87%	15,13%	56,62%	39,53%	3,85%
Yumbo	76,51%	23,49%	69,46%	29,27%	1,26%
Puerto Tejada	83,68%	16,32%	36,61%	59,05%	4,34%

Fuente: Urrea y Hurtado, Puerto Tejada 100 Años, Editor Francisco Zuluaga (1997, pág. 220)

Pero lo que permite concluir de una manera más contundente es la población inmigrante en Cali de toda la vida y de menos de cinco años que procede desde los municipios del norte del Cauca en el censo de 1993 (Cuadro 11). Ya Puerto Tejada arrojaba tasas altas de emigrantes de toda la vida sobre el total de la población del municipio que residían en Cali y tasas migratorias*mil desde el municipio expulsor para medir la migración de menos de 5 años. Además, se tienen datos para Santander de Quilichao y Caloto.

Cuadro 11. Población migrante de toda la vida y de menos de cinco años en Cali, nacida en algunos municipios del norte del Cauca, Censo de 1993

MUNICIPIO	MIGRANTES DE TODA LA VIDA			MIGRANTES DE MENOS DE 5 AÑOS		
	Expulsor	%	% del municipio expulsor	con base para Migran.	% Pob. Cali	Tasa migratorias x 1000 municipio expulsor
Puerto Tejada	7395	0,88%	24,15%	1512	0,57%	42,90%
Santander de Quilichao	7858	0,93%	14,00%	2345	0,89%	37,30%
Caloto	3710	0,44%	12,20%	939	0,36%	29,36%
Total migrantes en Cali	840971	100,00%		262452	100,00%	

Fuente: Urrea y Hurtado, Puerto Tejada 100 Años, Editor Francisco Zuluaga (1997, pág. 224)

Se observa que para el censo de 1993 Puerto Tejada tenía una interacción considerable con Cali, ya que ésta era un centro de atracción para migrantes de toda la vida y recientes desde Puerto Tejada, bien por encima de Santander de Quilichao y Caloto. Sin embargo, no son tan reducidas las tasas que mostraban estos dos municipios. O sea, si Puerto Tejada ya tenía las características de un municipio con dormitorio para gente que trabajaba y estudiaba en Cali (Urrea y Hurtado, op. cit.: 227-232), pero esto estaba relacionado también con ser un municipio de población residente en Cali muchos años atrás. El mismo fenómeno ya se detectaba para Santander de Quilichao y Caloto (Cuadro 11), aunque para el año censal de 1993 no tenían estos dos municipios la dinámica que había alcanzado Puerto Tejada.

En resumen, hacia mediados de la década del noventa en el siglo XX se presentaba ya una extensión del área metropolitana de Cali hacia el sur, incluyendo al municipio de Puerto Tejada y ya con nexos importantes construidos a lo largo de la década del ochenta y noventa con Santander de Quilichao y Caloto. El área metropolitana de Cali había así desbordado los municipios del sur del Valle, si bien dicho fenómeno se había venido dando sin las características de conurbación que ha operado en otras áreas metropolitanas del país como es el caso del Valle de Aburrá, los municipios de la Sabana de Bogotá, y los del área metropolitana de Barranquilla²⁷. Esto último explica el comportamiento diferencial del área metropolitana de Cali respecto a las de Bogotá, Medellín y Barranquilla (Medina, 2008). Para Medina los resultados del censo 2005 con base en el formulario ampliado muestran en las cuatro áreas metropolitanas (Barranquilla, Bogotá, Medellín y Cali) una mayor movilidad entendida como intercambios diarios entre los municipios del área y el centro urbano principal por factores de trabajo y estudio para las áreas de Bogotá y Medellín, en tercer lugar la de Barranquilla y finalmente la de Cali. Según la autora el factor de la conurbación determina la intensidad de esas interacciones. Al observar los municipios que constituyen el AM en Cali se tiene que comparada con las otras tres AM la conurbación para esta autora ha sido mucho más baja en el caso de Cali. No obstante, según Urrea y Hurtado (Op. Cit.), ya para los años noventa los flujos entre el norte del Cauca, el sur del Valle y la ciudad de Cali por trabajo y estudio permitían proponer la hipótesis de

²⁷ Una hipótesis esbozada por Urrea y Hurtado (Op. Cit.) sobre el patrón de metropolización sin la existencia de una conurbación continua entre los municipios que van constituyendo la periferia alrededor del centro, en el caso de Cali y su región metropolitana, tiene que ver con la competencia de las tierras urbanizables ante su explotación agroindustrial cañera en la medida en que ésta genera mayores plusvalías para los propietarios de las fincas y los ingenios.

“ciudades dormitorio” (casos de Puerto Tejada, Candelaria, Jamundí, Yumbo), las cuales constituyen sociológicamente una condición fundamental de metropolización.

De otra parte, Santander de Quilichao, Villarrica y Caloto en el norte del Cauca y Florida en el sur del Valle a lo largo de la década del noventa y la primera década del siglo XXI han aumentado significativamente sus flujos respecto a la ciudad de Cali. Para los tres primeros el efecto de las inversiones industriales de empresas maquiladoras muy seguramente ha jugado un papel determinante, aunque ya antes en Caloto la articulación con Cali era considerable a través de la instalación de la planta papelera de Papelcol y también los flujos de pasajeros desde Santander de Quilichao hacia Cali y desde ésta hacia el primero eran importantes (Urrea y Hurtado, Op. Cit.). En cuanto a Florida la expansión del cultivo de caña para la producción de etanol con la instalación de las plantas de su generación en varios de los ingenios del área, en particular el del Ingenio Mayagüez, ha tenido un impacto en los flujos de movilidad diaria con Cali y entre Florida y otros municipios como Candelaria y Puerto Tejada.

Sin embargo, el desarrollo y profundización del AM de Cali cubriendo municipios del sur del Valle y norte del Cauca, a pesar de no existir un espacio conurbado como existe en el Valle de Aburrá o entre Bogotá y municipios contiguos (Soacha, Chía, La Calera, Madrid, Mosquera, Funza)²⁸, no puede minimizar el efecto de atracción de la ciudad de Popayán. Los datos aportados anteriormente sobre la tasa de crecimiento ligeramente mayor a la de Cali indican que su influencia sobre los diferentes municipios del norte del Cauca tiene también importancia. Aunque no puede considerarse la existencia todavía de un AM para el caso de Popayán, de todas maneras es una ciudad intermedia capital de departamento, que no sólo es el centro de la burocracia departamental, por donde pasan todos los procesos administrativos públicos de los municipios del norte del Cauca, sino también un epicentro que se ha beneficiado con la Ley Páez y por ello un polo industrial que incorpora mano de obra, además del efecto sobre las otras actividades económicas. En resumen, Popayán constituye el segundo centro urbano de atracción sobre el conjunto de la región, en particular los 21 municipios del norte caucano, comenzando por los más próximos. Desafortunadamente, un análisis más detallado sobre los efectos en los municipios del valle geográfico del río Cauca escapa a los objetivos de este estudio. Por el momento es importante señalar que este es uno de los polos de influencia de la región después de Cali, pero de manera diferenciada: primero sobre los municipios indígenas, negros y mestizos de la región de montaña y luego sobre los de la zona plana. Sin embargo, Cali tiene a la vez una influencia importante sobre los municipios indígenas como mercado de trabajo femenino y masculino no calificado y espacio para estudios de educación superior para las elites indígenas Nasa y Guambiana (Universidad del Valle).

²⁸ El modelo de algunos municipios del AM de Cali se parece más al de Facatativa, Zipaquirá, Gachancipá respecto a Bogotá. Vale la pena comentar que mientras el DANE y diversos centros de investigación ya incluyen como parte del AM de Bogotá prácticamente a la mayor parte de los municipios de la Sabana de Bogotá, sin que en todos los casos aún medie un fenómeno de conurbación, en cambio para los municipios de la subregión sur Valle y norte Cauca, fuera de Yumbo, Palmira y Jamundí, no se los haya incluido o reconocido formando parte del AM. Los dos casos más sobresalientes son Puerto Tejada y Candelaria. En el último caso ya se detecta una conurbación a través de Juanchito y las urbanizaciones nuevas de los últimos 10 años, como el Poblado Campestre y el Diamante.

El impacto de la Ley Páez²⁹ en la región:

A partir de 1997 se registra la producción de las primeras empresas industriales instaladas en los municipios de Santander de Quilichao, Caloto, Miranda y Puerto Tejada, pero ya desde el mismo año 1995 había comenzado la conformación de sociedades registradas en la Cámara de Comercio del Cauca, con un fuerte pico en 1996 (Alonso y Lotero, 2006: 25). Veamos qué características tiene esta masiva inversión de capitales en términos de los sectores de actividad económica, empleos directos generados, municipios implicados, tipo de empresas y el modelo del proceso productivo impuesto de bienes y servicios. Finalmente cómo se relaciona este tipo de inversión con los cambios sociodemográficos en los municipios tocados por ella y en general en el conjunto de los municipios del norte del Cauca y sur del Valle.

El Cuadro 12 describe los sectores económicos de inversión desde 1995 hasta diciembre de 2005, para un total de 139 firmas registradas en la Cámara de Comercio del Cauca: 95 empresas (68,3%) con 3751 trabajadores (77,0%) son del sector manufacturero, 26 firmas (18,7%) con 791 trabajadores (16,2%) agropecuarias, 13 de la construcción y comercialización de inmuebles con 265 trabajadores y 5 de comercio y servicios especializados (entre ellos logísticos y financieros) con 66 trabajadores. El total de trabajadores directos son 4873. Esto significa un promedio de 39,5 trabajadores por firma industrial, 30,4 por empresa agropecuaria, 20,4 por construcción y comercialización de inmuebles, y 13,2 trabajadores por firma de comercio y servicios especializados.

Cuadro 12. Empresas con beneficios de la Ley Páez por sector económico (a diciembre de 2005)

ACTIVIDAD ECONÓMICA	EMPRESAS		EMPLEADOS	
	#	%	#	%
Sector manufacturero	95	68,30%	3751	77,00%
Construcción y comercialización de inmuebles	13	9,40%	265	5,40%
Comercio y servicios	5	3,60%	66	1,40%
Agropecuarias	26	18,70%	791	16,20%
TOTAL	139	100,00%	4873	100,00%

Fuente: Alonso y Lotero (2006, pág. 20)

En síntesis, se trata de unidades económicas de tamaño pequeño, menores a 100 trabajadores, sin que con esto se diga que se trate de pequeña o mediana industria. Más bien corresponde a una inversión de grandes grupos económicos que han instalado factorías industriales o unidades económicas agropecuarias o de servicios especializados

²⁹ Se trata de la Ley 218 de 1995. La Ley comprendía inicialmente para el departamento del Cauca los municipios de Caldono, Inzá, Jambaló, Toribío, Caloto, Totoró, Silvia, Páez, Santander de Quilichao, Popayán, Miranda, Morales, Padilla, Puracé, Tambo, Timbío y Suárez. Luego, la cobertura geográfica de la Ley Páez fue aumentada por medio del artículo 42 de la Ley 383 de 1997, incluyendo los municipios caucanos de Cajibío, Piendamó, Sotará, Buenos Aires, La Sierra, Puerto Tejada, Corinto y Patía.

que realizan procesos productivos de bienes y servicios en cadenas productivas o clusters bajo un modelo cercano al de maquila: «encontramos empresas anexas directamente al capital multinacional....En estos casos, al tiempo que se funciona como una firma global, ubicada estratégicamente para abastecer mercados regionales, se funciona como «maquiladoras» para otras firmas o para clientes que encargan el producto bajo firma propia para abastecer mercados en los grandes almacenes de cadena en la región o para exportación» (Bermúdez et al., 2007). La misma autora señala a continuación: «Esta combinación de estrategias productivas para la competitividad que integran la producción y distribución de firmas de reconocimiento mundial –de manera directa o mediante alianzas estratégicas- y la prestación de servicios de maquila para el abastecimiento del mercado regional para una amplia superficie de consumidores en el mercado minorista, resulta ser una característica singular y funcional....En estas condiciones (bajo el modelo de empresas de Ley Páez) se ha ido configurando un nuevo perfil de empresa en la región, que fluctúa entre lo global y lo local....».

El Cuadro 13 presenta la concentración de empresas según municipio de ubicación, empresas en parques industriales y fuera de ellos y total de trabajadores.

Cuadro 13. Empresas con beneficios de la Ley Páez por municipio (a diciembre de 2005)

MUNICIPIO	EMPRESAS EN PARQUES INDUSTRIALES		EMPRESAS FUERA DE LOS PARQUES		TOTAL EMPRESAS		TOTAL EMPLEADOS	
	#	%	#	%	#	%	#	%
Santander de Quilichao	21	29,2%	38	56,7%	59	42,4%	1710	35,1%
Caloto	37	51,4%	12	17,9%	49	35,3%	1831	37,6%
Villa Rica	6	8,3%	4	6,0%	10	7,2%	599	12,3%
Miranda	5	6,9%	3	4,5%	8	5,8%	390	8,0%
Puerto Tejada	3	4,2%	10	14,9%	13	9,4%	343	7,0%
TOTAL	72	100,0%	67	100,0%	139	100,0%	4873	100,0%

Fuente: Alonso y Lotero (2006, pág. 21)

Obsérvese que son 72 firmas ubicadas en parques industriales (51,8%) y 67 fuera de ellos (48,2%). La principal concentración de empresas se da en los municipios de Santander de Quilichao (42,4%) con el 35,1% de los trabajadores enganchados mediante empresas de Ley Páez en los cinco municipios, y en Caloto con el 35,5% de las empresas y el 37,6% de los trabajadores. Puerto Tejada concentra el 9,4% de las empresas y el 7,0% del empleo; Villarrica el 7,2% y 12,3% respectivamente; y Miranda el 5,8% y el 8,0% respectivamente (Cuadro 13)³⁰.

Llama la atención que dos parques industriales, el de Santander de Quilichao y Caloto concentren un volumen de empresas considerable: 36 y 15 respectivamente, para un total de 2430 trabajadores, una masa considerable de trabajadores en dos parques industriales en 108 empresas. Pero fuera de los parques industriales hay empresas, también con un peso significativo importante.

Diverso tipo de empresas manufactureras, ya sean de multinacionales o nacionales, ampliamente reconocidas en el mercado nacional e internacional. Por ejemplo, en el sector farmacéutico, dos ejemplos: Tecnofar de Tecnoquímicas en Villarrica, donde se produce entre otros Sal de Frutas Lúa, Bonfiest, Yodora, medicamentos y cremas, pañales desechables en una alianza estratégica con Kimberley Clark. Genfar (genéricos

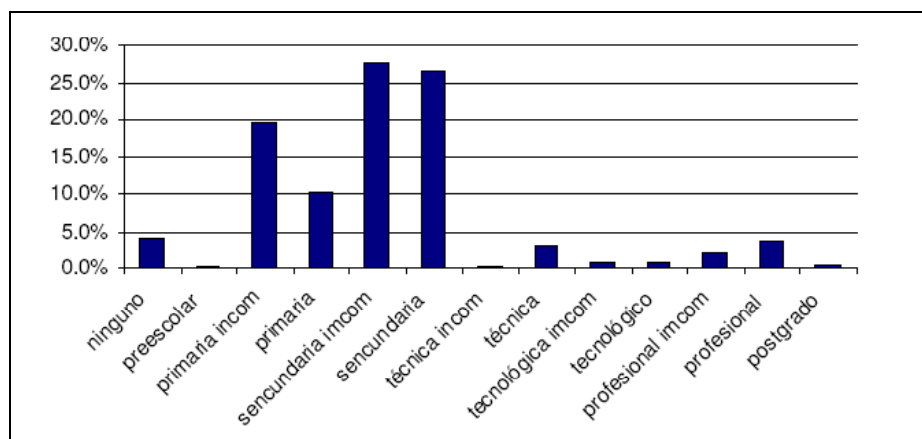
³⁰ Popayán cuenta con el Parque Industrial de Popayán, surgido también en el contexto de la Ley Páez, el cual concentra alrededor de 800 trabajadores. Tomado de www.caucanoticias.com

farmacéuticos), también en Villarrica, con una planta de las más modernas en América Latina (Bermúdez et. al, 2007). Entre las empresas multinacionales en la línea de productos para el hogar un ejemplo es Drypers Andina S.A., que produce el pañal Chicolastic, Papeles del Cauca S.A., planta afiliada a Kimberly Clark, ubicada en el municipio de Santander de Quilichao. En otras líneas industriales como alimentos, Inducolsa (Industria Colombiana de Alimentos, municipio de Caloto), y Colombina del Cauca S.A. (producción de galletas y tortas), propiedad de Colombina S.A.(municipio de Santander de Quilichao), Frigorífico del Sur, propiedad de Rica Rondo (Caloto); baterías, MAC (Caloto); productos del papel, Familia del Pacífico anexa a Familia Sancela (municipio de Caloto, hoy Guachené); Prodispel S.A. (procesadora y distribuidora de papeles, propiedad de Dispapeles S.A., Caloto).

Ahora bien, ¿cuál es la composición por género, grupos de edad, raza y nivel educativo de los trabajadores y qué tipo de empleos han generado las empresas de Ley Páez en los municipios del norte del Cauca? y ¿cuál es el tipo de inserción laboral de la población local, especialmente afrocolombiana, en esas empresas?

De acuerdo al estudio del CIENFI-ICESI, el 54% de la población total de la muestra de hogares en los municipios de Ley Páez son mujeres y el 46% hombres. Si bien, el estudio no presenta la información por sexo de la PET (población en edad de trabajo, 12 años y más), debe responder a un 58% femenina y 42% masculina. Por otro lado, el perfil educativo de la población en edad de trabajar (Gráfico 10) revela una sobreconcentración en secundaria incompleta (27,5%) y completa (26,0%), es decir, el 53,5% se ubica en este nivel educativo. El segundo grupo responde a primaria incompleta (19,0%) y primaria completa (10,5%), un 29,5%. Por el contrario, los niveles de educación técnica, tecnológica incompleta y completa, profesional incompleta y completa y postgrado, sumados llegan solamente al 17,0%. Entre profesional incompleto, completo y postgrado alcanza apenas al 7,0%. Ya se había señalado antes que en la zona rural de los municipios de Villarrica y Puerto Tejada hay una importante participación de población con nivel educativo de media completa para los dos sexos.

Gráfico 10. Distribución de la PET (Población en Edad de Trabajar) según nivel educativo en los municipios de Ley Páez



Fuente: tomado de Alonso y Lotero (2006).

No hay registros según sexo y raza de la población trabajadora en las empresas de Ley Páez, pero los estudios de corte etnográfico (Bermúdez et al., 2007) indican que por lo

menos al nivel de trabajo no calificado y semicalificado hay una sobre participación afrocolombiana femenina, sobre todo en las plantas más cercanas al modelo maquilador, en actividades de empaque, envase de productos y en general, en procesos productivos rutinarios. Sin embargo, existe una jerarquía social según nivel de calificación en la cual está presente procedencia (municipio de residencia o de origen), presencia mayoritaria de un color de piel y diferenciación por género de acuerdo al tipo de actividades en el proceso productivo.

Los empleos de alta dirección y al nivel profesional, e incluso en el campo de técnicos y tecnólogos, se concentra para el personal que es reclutado en Cali. Por el contrario, los municipios de Candelaria, Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Caloto y otros municipios del Cauca se concentran en educación media, preferencialmente secundaria completa y ningún nivel educativo. Por lo mismo, las ocupaciones a las que acceden se ubican en los niveles de más baja calificación, en actividades rutinarias y repetitivas como por ejemplo, el empaque de productos.

Mora y Durán (Op. Cit.: 39 y 46), al presentar la paradoja de empleos precarios para la gente de la región sin muchas opciones, comentan lo siguiente: “así, los niveles de capital humano en la zona son bastante precarios, la formación de los pobladores de estos municipios no parece estar acorde con la necesaria para satisfacer las demandas de personal capacitado que efectúan las empresas que se localizaron en la región por motivo de aprovechar los beneficios de la Ley Páez. Y tampoco para satisfacer la demanda de las empresas que decidan permanecer allí una vez se acaben plenamente los beneficios de la Ley Páez. La falta de capacitación y profesionalización en la población de los anteriores municipios muestra que las cosas han cambiado poco desde el resultado encontrado por el estudio de la Cámara de Comercio del Cauca (1998), según el cual buena parte de los empleos generados en la zona de la Ley Páez en el norte del Cauca, no fueron para los habitantes de la región sino para personas provenientes de otras localidades del departamento del Cauca...La situación laboral de los municipios analizados muestra un círculo vicioso a romper: Las empresas no contratan trabajadores con alto nivel educativo porque no lo consiguen y los trabajadores de la región no alcanzan niveles educativos altos porque las empresas no los demandan. Este hecho es tan preocupante que cuando se analiza el subempleo por competencias el porcentaje es bajo e inexistente ya que los trabajadores de la región están realizando actividades que no requieren un nivel de educación superior”.

La inserción laboral de los trabajadores de la región nortecaucana, en su gran mayoría afrocolombianos, se da a través del mecanismo de subcontratación y temporalidad como estrategia para el disciplinamiento y la formación como mano de obra (Bermúdez et al., 2007). Según Bermúdez (Op. Cit.) las empresas instaladas en el norte del Cauca han generalizado la subcontratación a través de agencias temporales de empleos temporales. Para la autora “de esta forma una generación de jóvenes negros hijos de parceleros con vocación campesina se ha ido proletarizando en condiciones de flexibilidad en el mercado laboral en los últimos diez años...de esta forma, en la última década, los jóvenes han centrado sus expectativas en hacerse bachilleres para obtener el reconocimiento de “empleabilidad” otorgado por las agencias intermediadoras e ingresar a las fábricas y hacerse operarios, lo que significa aprender a manejar una máquina. Esta generación de jóvenes negros del norte del Cauca que ingresa en condición de temporalidad al trabajo de manufactura permanece en esta condición durante varios años – entre 4 y 5 – para aspirar a un contrato con algo de certidumbre laboral. La vinculación en condición de temporal representa recibir el 25% menos de

salario y, por supuesto, una mayor incertidumbre laboral...En esta generación de jóvenes...vinculados a través de nuevas formas flexibles de contratación laboral, se presenta una ruptura con su pasado para articularse a la vida fabril, en condiciones de jóvenes operarios flexibilizados y precarizados, en los que se sintetiza las desigualdades de un pasado de estigmatización étnica y territorial que se actualizan en las condiciones de la inserción laboral del presente”.

Según los autores del estudio de CIENFI-ICESI, en los municipios cobijados por la Ley Páez las remuneraciones para estos trabajadores tienden a la « convergencia, es decir, que en este grupo de municipios presenta una tendencia a la igualdad en los salarios promedio. » (Mora y Durán, Op. Cit.: 45), una manera edulcorada para decir salarios bajos, incluso por debajo del salario mínimo.

Este contexto sociolaboral en los municipios del norte del Cauca donde se concentran las empresas de la Ley Páez (Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Caloto, Villarrica y Miranda) se puede esbozar la hipótesis de relación entre este tipo de inversión productiva, predominante bajo el modelo de maquila, y el comportamiento demográfico expulsivo en estos municipios como antes ya se había analizado, con una tasa de crecimiento exponencial promedio anual de apenas 0,9% (ver Cuadro 8). Las reducidas opciones de enganche laboral a medida que se incrementa el nivel educativo en ocupaciones de mayor estatus y mejor remuneradas, a las que es poco probable acceder, en los empleos manufactureros y de servicios especializados, es un factor que favorece considerablemente la salida de la población más educada, tanto hombres como mujeres. La paradoja más curiosa es que la sonada inversión empresarial en la región en lugar de generar dinámicas endógenas que permitan diversificar el proceso productivo de bienes y servicios con empleos más calificados para la gente negra de la región ha producido un efecto opuesto: acelerar la emigración hacia diferentes centros urbanos del país (Bogotá, Cali) y del exterior (España, Estados Unidos y otros países). En resumen, esto explica de alguna forma el comportamiento diferenciado de estos municipios que hacen parte del AM de Cali.

Finalmente, ¿cuál ha sido el potencial impacto de las empresas de Ley Páez en los cambios sociodemográficos relacionados con los patrones de jefatura femenina, fecundidad, nivel educativo? Por los resultados vistos en este documento sobre las transformaciones sociodemográficas en el período intercensal 1993-2005, los municipios considerados donde se ha concentrado la inversión productiva de bienes y servicios son del grupo de transición demográfica avanzada. Por supuesto, este proceso demográfico viene de largo aliento, mucho antes del surgimiento de la inversión de Ley Páez. Es bastante plausible que un mayor impacto antes de esta masiva inversión industrial lo ha tenido el fenómeno de expansión del AM de Cali hacia municipios como Puerto Tejada y en menor medida Santander de Quilichao y Caloto, según ya se advirtió, desde la década del 80 en el siglo pasado; es decir, la combinación de la urbanización y la expansión del sistema educativo. Sin embargo, tampoco puede desconocerse que la Ley Páez ha dinamizado el proceso de transición demográfica que venía incubándose desde antes. Los datos aportados muestran que ha incentivado la escolarización hacia la educación secundaria y superior, favoreciendo una mayor inversión en capital escolar por parte de las mujeres afrocolombianas. Esto tiene un impacto en los comportamientos reproductivos y en las mismas relaciones de género al dar mayor independencia económica a las mujeres, a pesar de los bajos salarios. El mismo disciplinamiento laboral en las fábricas contribuye a favorecer comportamientos modernos, al separar el espacio laboral del doméstico, creando nuevos espacios para

procesos de sociabilidad y subjetivación especialmente entre las mujeres (Cuero, notas de terreno, 2008). El hecho que esta inversión haya incentivado la migración de salida hacia centros urbanos nacionales e internacionales también tiene una cara positiva. O sea, el balance es más complejo porque tiene diferentes aristas el fenómeno social de la Ley Páez.

Por último, en términos macroeconómicos sobre el departamento del Cauca y la región cuáles han sido sus efectos. Para este punto vale la pena observar brevemente el comportamiento de las cuentas departamentales del Cauca con los datos disponibles. Los Cuadros 14 y 15 entregan las tasas de crecimiento del PIB por ramas de actividad del departamento del Cauca, el primero para el período 1990-2005 con año base 1994, y el segundo para el período 2000-2005, con año base 2000 (nuevas cuentas departamentales DANE). Se observa en la serie de más larga duración el mayor dinamismo de la industria a partir del segundo quinquenio, 1995-2000, muy por encima del crecimiento del PIB departamental. En la serie más reciente con año base 2000, con excepción de los años 2000-2001, ha continuado el dinamismo de la industria manufacturera en el Cauca, fundamentalmente explicado por la continua expansión de empresas en la región del norte del Cauca.

Cuadro 14: Tasa de crecimiento del PIB del Cauca 1990-2005, a precios constantes de 1994

	TASA DE CRECIMIENTO			
	1990-1995	1995-2000	2000-2005	1990-2005
AGRICULTURA SILVICULTURA Y PESCA	1,3%	-0,3%	5,2%	2,0%
MINERIA	5,3%	-5,7%	4,7%	1,3%
ELECTRICIDAD GAS Y AGUA	14,5%	7,6%	13,1%	11,7%
INDUSTRIA	1,0%	9,8%	8,0%	6,2%
CONSTRUCCION	13,2%	-8,3%	15,3%	6,1%
COMERCIO	-13,0%	-2,2%	8,5%	-2,6%
TRANSPORTE	-3,3%	6,0%	1,0%	1,2%
PIB TOTAL	3,4%	3,7%	5,3%	4,1%

Fuente: Cálculos propios, en base con la información del DANE

Cuadro 15. Tasa de crecimiento del PIB del Cauca 2000-2005, a precios constantes de 2000

	TASA DE CRECIMIENTO					
	2000-2001	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2000-2005
AGRICULTURA SILVICULTURA Y PESCA	17,8%	10,8%	-16,4%	-1,1%	7,1%	3,0%
MINERIA	26,5%	-6,2%	9,1%	-16,8%	5,5%	2,6%
INDUSTRIA	-5,7%	15,6%	9,5%	18,8%	3,6%	8,0%
ELECTRICIDAD GAS Y AGUA	4,0%	-0,9%	3,2%	23,8%	16,7%	9,0%
CONSTRUCCION	13,2%	-4,2%	43,1%	-3,9%	10,9%	10,6%
COMERCIO	4,5%	10,8%	13,4%	-2,5%	19,6%	8,9%
TRANSPORTE	-1,7%	-5,2%	10,4%	7,5%	11,7%	4,3%
SERVICIOS	3,5%	4,7%	2,2%	8,9%	6,4%	5,1%
PIB TOTAL	4,8%	7,7%	1,3%	7,6%	6,9%	5,6%

Fuente: Cálculos propios, en base con la información del DANE

El sector que más ha competido con la industria en el quinquenio 2000-2005 ha sido la construcción (Cuadro 15). Por otro lado, el sector agropecuario después del 2002 ha tenido un comportamiento negativo, lo contrario a lo que ha sucedido con la industria manufacturera.

Este cambio significativo del peso de la industria en el conjunto del PIB departamental en el Cauca ha traído para los municipios del norte del Cauca efectos importantes en términos de su capacidad fiscal y claro está su incremento en la participación dentro del valor agregado departamental. A pesar del fenómeno de bajos salarios, de cualquier forma la presencia en los últimos 10 años de una masa salarial global en aumento por la expansión del empleo industrial en cada uno de los cinco municipios que concentran la mayor parte de las inversiones de Ley Páez ha redundado en mejora de las condiciones de vida de la población. Esto se ha reflejado indirectamente en la reducción del índice de NBI en el período intercensal 1993-2005. Por supuesto, esto favorece la profundización del AM de Cali, volviéndola más extensa territorialmente a través de un territorio que si bien no está conurbado sí está más comunicado, entre los municipios del sur del Valle y los del norte del Cauca. Es indiscutible que en esto también ha jugado la expansión de la caña de azúcar para la producción de etanol desde el 2002, homogenizando la parte plana de los municipios de Pradera, Florida, Miranda, Caloto, Santander de Quilichao, con municipios más de la zona plana como Candelaria, Puerto Tejada y Villarrica.

Conclusiones.

Los datos censales de 1993 y 2005 permiten observar importantes transformaciones sociodemográficas en los 27 municipios de la región sur Valle – norte del Cauca, en la cual se ha podido comprobar que es un espacio inter étnico-racial con una población mayoritaria negra e indígena en interacción con una población no étnica, siendo esta última en buena parte mestiza-blanca. Los 27 municipios no presentan las mismas concentraciones de poblaciones negras, indígenas y mestizas. Hay grandes diferencias: algunos municipios como se ha descrito son mayoritariamente negros, en cambio otros son indígenas y un tercer grupo presenta una mezcla inter étnica-racial con peso importante de la población no étnica. En términos muy esquemáticos la zona plana del valle geográfico del río Cauca en los dos departamentos tiene una población negra mayoritaria mientras la zona de montaña en las dos cordilleras acoge la mayor parte de población indígena.

No obstante, la heterogeneidad étnica-racial es más generalizada. Incluso algunos municipios indígenas tienen reductos negros importantes (Páez) o lo contrario, municipios de mayoría negra con población indígena (Buenos Aires, Suárez). En otros como en Santander de Quilichao los tres grupos étnico-raciales tienen importantes contingentes de población. Además en todos los casos hay presencia de población no étnica (blanca/mestiza).

Las variaciones entre los montos y participaciones de poblaciones negras e indígenas entre los dos censos de población tienen que ver con el fracaso rotundo del censo de 1993 en la pregunta de pertenencia a “comunidad negra”, pero también el enorme subregistro de poblaciones indígenas enteras para este censo en el norte del Cauca, como se pudo analizar.

Las principales transformaciones sociodemográficas entre 1993 y 2005 han tenido que ver como era de esperar en todos los indicadores observados para los tres grupos étnico-raciales, pero con importantes diferencias según grupos de municipios con determinados patrones demográficos de más larga duración.

En los 12 años del período intercensal se observa una reducción esperada de las tasas de dependencia juvenil y de la razón de hijos menores de 5 años por mujeres en edad fértil

en los diferentes municipios. Esto ha sido sistemático en cabecera y resto, aunque más intenso ha sido en cabecera este cambio.

Sin embargo, este proceso de transformación social en los 27 municipios ha sido diferenciado de acuerdo con los patrones de la dinámica demográfica que sostiene la teoría clásica de la transición demográfica. Los municipios que se encuentran en una fase de transición demográfica avanzada (menores tasas de dependencia juvenil y razón de hijos*mujer) corresponden a los de la zona plana del valle geográfico del río Cauca y varios de zona plana y montaña pero con una población más concentrada en la zona plana de mayoría negra. Los más rezagados con las mayores tasas de dependencia juvenil y razón de hijos*mujer corresponden a los municipios de mayoría demográfica indígena en la zona de montaña cordillerana y los intermedios son municipios muy diversos en términos étnico-raciales en donde pesan más las poblaciones negras en zona de costa o montaña (Buenaventura, Buenos Aires o Suárez) o indígenas con población no étnica la mayor parte en la zona de montaña caucana.

En todos los indicadores sociodemográficos y socioeconómicos se observa un fuerte diferencial entre cabecera y resto para los 27 municipios, lo cual revela las diferentes condiciones de vida entre la zona urbana y la rural, como era de esperar. Si esto se combina con el factor étnico-racial, los indígenas concentrados en la zona rural presentan la situación de mayor vulnerabilidad, especialmente en el conjunto del grupo de municipios indígenas del Cauca.

Entre 1993 y 2005 en los 26 municipios observados descendieron los niveles de NBI por persona, si bien en los casos de Buenaventura y Miranda este descenso no se produjo. Para el año 2005 los diferenciales de NBI entre los 26 municipios como era de esperar siguen el patrón de grupos de municipios: los de menor NBI corresponden a los de transición demográfica avanzada y los más altos NBI a los de transición rezagada, o sea los de mayoría indígena.

En el anterior contexto no es de extrañar el aumento en los niveles educativos en los 26 municipios durante el período intercensal. Sin embargo, este aumento no fue de la misma manera ya que se relaciona con la fase de avance en la transición demográfica. Los incrementos en la educación secundaria y superior han sido más consolidados y también más favorables a las mujeres en los municipios de transición demográfica avanzada. Por el contrario, en los municipios de transición intermedia y sobre todo rezagada, las mujeres han tendido a tener menores niveles educativos que los hombres y por razón del peso demográfico que aún mantienen los grupos menores de 10 años los mayores incrementos porcentuales han sido en los niveles de educación primaria. En general, entre la población indígena a diferencia de la afrocolombiana y la no étnica las mujeres tienen menores niveles educativos que los hombres.

Al analizar las variables correspondientes a posición ocupacional y cobertura en salud se confirma que los 26 municipios observados de la región se distribuyen entre un polo de asalaramiento generalizado y otro polo de unidades campesinas indígenas, negras y mestizas. Esta lógica social que revelan los datos es consistente con los demás indicadores analizados: los municipios más articulados a un proceso de desarrollo capitalista agroindustrial e industrial son los que muestran los indicadores de transición demográfica avanzada en oposición a los municipios de economía campesina con indicadores de rezago en la transición demográfica. Esta polarización social en la región se ha construido en la larga duración, especialmente a partir de los años 50 en el siglo XX al expandirse progresivamente el cultivo de caña en el sur del Valle y norte del

Cauca. La conformación y consolidación del área metropolitana de Cali y la implantación de las empresas de Ley Páez en el norte del Cauca han profundizado esta polarización social sin que pueda decirse que las economías campesinas indígenas, negras y mestizas, especialmente de la zona de montaña, estén condenadas a su desaparición, aunque sí a un proceso de fuerte diferenciación social en su interior.

El AM de Cali y la ciudad de Popayán han jugado un papel importante en la articulación sociodemográfica y socioeconómica de los 27 municipios. Si bien los municipios de la zona plana tienen una mayor integración con el AM de Cali también es notorio el impacto de esta última y de Popayán en los municipios menos integrados de montaña.

Hacia el sur del Valle y norte del Cauca el AM de Cali viene estructurándose desde los años 80 en el siglo XX. Sin embargo, su expansión y consolidación, integrando a municipios como Santander de Quilichao, Villarrica y Caloto, es más reciente favorecida por el impacto de las empresas de Ley Páez. Es decir, esta inversión ha jugado un papel determinante en los desarrollos residenciales y laborales de los últimos 10 años entre el norte del Cauca, sur del Valle y Cali.

A pesar del modelo de industria maquiladora con bajos salarios que se ha implantado en el norte del Cauca con las empresas de Ley Páez es indiscutible su impacto favorable en el incremento de los niveles educativos en los municipios nortecaucanos y la creación de un espacio laboral de disciplinamiento de la fuerza de trabajo, en su gran mayoría afrocolombiana y buena parte femenina. Pero por la misma característica del empleo temporal, precario y subcontratado, con pocas opciones de movilidad social, que ofrecen las empresas a la gente negra de la región, esto ha incentivado una dinámica de emigración desde la zona plana nortecaucana, incluso tan fuerte o más que la presentada por otras subregiones del norte del Cauca como muestran los datos. Esto último contrasta con la situación de los municipios del sur del Valle (sobre todo Jamundí y Candelaria) y otros del AM de Cali como Yumbo que han visto tasas de crecimiento exponencial por encima del 2,0% anual en el período intercensal.

La evolución sociodemográfica en los 27 municipios de la región sur Valle – norte del Cauca ha consolidado un proceso de urbanización de la población afrocolombiana alrededor del AM de Cali, constituyendo esta última la mayor región urbana de población negra en el país. En segundo lugar, también ha incentivado el proceso de urbanización de la población indígena, el cual sin ser de la magnitud que presenta el de la población negra de todos modos ha conllevado que la mitad de la población indígena del Valle resida en el AM de Cali y que la interacción entre el polo urbano de la región y los municipios indígenas se haya incrementado considerablemente.

Bibliografía

ALONSO, Julio Cesar y LOTERO, Ana María. *10 Años de Ley Páez*. Centro de Investigación en Economía y Finanzas – CIENFI- Universidad ICESI, Octubre 2006, 95p. [http://www.icesi.edu.co/leypaez/contenido/pdf/libro_ley_paez.pdf]

ARICAPA, Ricardo (2006) *Las cooperativas de trabajo asociado en el sector azucarero. Flexibilización o salvajismo laboral*. Medellín: Escuela Nacional Sindical.

BARBARY, Olivier y URREA, Fernando, (editores) (2004) *Gente negra en Colombia. Dinámicas sociopolíticas en cali y el Pacífico*. Medellín: Ediciones Cidse/Univalle, IRD, Colciencias, Editorial Lealon.

BERMÚDEZ, Rosa Emilia y VAN DER HUCK, Felipe (2007) *El trabajo en Drypers Andina de Colombia: firma global-producción local*. 17p. [Versión Preliminar]

CALDWELL, John C. 1976. "Toward a restatement of modern demographic theory." *Population and Development Review* 2:321-366.

Cámara de Comercio del Cauca (1998). Investigación Región Páez.

CASTAÑO, Jairo (2008) "Las cooperativas de trabajo asociado en el sector azucarero: el caso del ingenio Mayagüez". Trabajo de grado para optar al título de sociólogo, Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, Universidad del Valle. [Versión Preliminar]

COALE, Ansley J. (1973) "The demographic transition," IUSSP Liege International Population Conference. Lieja: IUSSP. Volumen 1: 53-72.

COLMENARES, Germán (1997) *Historia económica y social de Colombia*. Tomo II. Popayán: Una sociedad esclavista (1680-1800). Bogotá: La Carreta.

Cuentas Regionales del DANE, (1990-2005); en <http://www.dane.gov.co/cuentasnacionales>

CUERO, Julieth (2008) "Apuntes etnográficos de visita a una planta de empaque en el norte del Cauca", Informe presentado en el marco de las discusiones del proyecto "Sexualidades y feminidades contemporáneas de mujeres negras e indígenas: un análisis de cohorte generacional y étnico-racial", Colciencias- Convocatoria 405/07.

DANE (1996) Sistema de consulta del Censo 1993, versión 1.05, resumen censal.

DAVIS, Kingsley (1963) "The theory of change and response in modern demographic history." *Population Index* 29 (Octubre): 345-366.

ESCOBAR, Jaime (2003) "Apertura económica y ley paez en el departamento del Cauca: Análisis del impacto socioeconómico a corto plazo", en: Álvaro Guzmán, et al. (Editores) *Cuatro ensayos de coyuntura: Valle y Cauca a finales del siglo veinte*. Cali: Universidad del Valle (CIDSE) - CEREC. 103-171pp.

FLÓREZ, Carmen Elisa. 2000. *Las Transformaciones Socio-demográficas en Colombia durante el siglo XX*. Banco de la República-Tercer Mundo Editores.

MEDINA, Margarita. « Movilidad cotidiana en áreas metropolitanas (am): Valle de Aburrá, Cali, Barranquilla, Bogotá y municipios metropolitanos. Análisis descriptivo de la información del Censo General 2005 ». Bogotá: Departamento Administrativo Nacional de Estadística - Dirección Técnica de Censos, abril 2008. 62p.

MORA, John James y DURAN, Julián. 'Empleo', en: Editores: Julio Cesar Alonso y Ana María Lotero, *10 Años de Ley Páez*; Centro de Investigación en Economía y

Finanzas – CIENFI- Universidad ICESI, Octubre 2006, 42p. [Versión electrónica: <http://www.icesi.edu.co/leypaez/contenido/pdf/empleo.pdf>]

THOMPSON, Warren S. 1929. "Population". *American Sociological Review* 34(6): 959-975.

THOMPSON, Warren S y David T. LEWIS. *Problemas de población*. México: La Prensa Médica Mexicana, 1969.

URREA, Fernando y HURTADO, Teodora. (1997) « Puerto Tejada: de núcleo urbano de proletariado agroindustrial a ciudad dormitorio ». En: Francisco Zuluaga (editor) *Puerto Tejada 100 años*. Alcaldía municipal de Puerto Tejada, pp. 197-244.

Fuentes de Internet :

<http://www.caucanoticias.com>

<http://www.dane.gov.co/poblacion/conciliación>

<http://www.dane.gov.co/poblacion/seriespoblacion1985-2005>



**UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y
ECONÓMICAS**

**CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DOCUMENTACIÓN
SOCIOECONÓMICA-CIDSE**

**INFORME FINAL DEL PROYECTO:
DESIGUALDADES ÉTNICO RACIALES, ACCIÓN COLECTIVA,
ETNICIDAD Y RESISTENCIA EN EL NORTE DEL CAUCA Y
SUR DEL VALLE
CONVOCATORIA INTERNA DE LA VRI 2006**

**GRUPO DE INVESTIGACIÓN:
MIGRACIÓN, URBANIZACIÓN E IDENTIDADES DE LAS
POBLACIONES AFROCOLOMBIANAS**

PARTE II

**HISTORIA REGIONAL, DEMOGRAFÍA, ACCIÓN COLECTIVA Y
RESISTENCIA DE LAS COMUNIDADES NEGRA EN UNA REGIÓN
EN FORMACIÓN (NORTE DEL CAUCA Y SUR DEL VALLE)**

**Profesor Investigador:
Luis Carlos Castillo G.**

**Monitor del Proyecto:
Aurora Vergara F.**

CALI, ABRIL DE 2009

ACCIÓN COLECTIVA Y RESISTENCIA NEGRA EN EL NORTE DEL CAUCA Y SUR DEL VALLE

Luis Carlos Castillo¹

1. INTRODUCCIÓN

Este capítulo presenta una fenomenología de las acciones colectivas y de la resistencia de las poblaciones afrodescendientes en el norte del Cauca y sur del Valle del Cauca entre los años 1995 y 2007. La región de estudio está conformada por 19 municipios de los cuales 13 pertenecen al departamento del Cauca (Buenos Aires, Caldon, Caloto, Corinto, Jambaló, Miranda, Morales, Padilla, Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Suárez, Toribío, Villa Rica) y 6 al Valle del Cauca (Buenaventura, Candelaria, Florida, Jamundí, Pradera y Palmira).

Se parte de una aproximación conceptual sobre la región que la considera como una realidad social dinámica sometida a cambios de sus fronteras internas y externas, reales e imaginarias, producidos por los agentes, actores e instituciones que la conforman. Esta región ha estado sometida a un fuerte proceso de metropolitanización e industrialización que ha tenido como epicentro la ciudad de Cali. También ha sido escenario de conflictos sociales de diverso orden, por el acceso a la tierra, a los servicios sociales que brinda el Estado y recientemente de resistencia pacífica frente a las acciones de guerrillas y paramilitares.

Uno de sus rasgos socio-antropológicos sobresalientes es la diversidad étnica y racial, lo que le da un signo distintivo a las acciones colectivas y al conflicto social. Allí conviven poblaciones indígenas, que pertenecen a diferentes grupos étnicos como los paeces, los yanaconas, los guambianos, gente negra, mestizos y blancos lo que estructura un núcleo étnico racial de los más importantes y diversos de Colombia. En efecto, de acuerdo con el Censo de Población del año 2005, en la región habitan 1.245.224 personas, el 2,9% de la población nacional, sobre un total poblacional de 42.090.502 habitantes (DANE, 2006). La diferenciación por grupos étnicos arroja que el 48,1% de la población es negra, es decir, 599.978 personas; el 39,6% es mestiza, es decir, 493.233 personas; el 10,1% es indígena, es decir, 125.877 personas. Un análisis extenso de la estructura demográfica, según identificación étnica, se presenta en este mismo libro en el capítulo escrito por Fernando Urrea.

El estudio de las acciones colectivas negras que se presenta en este capítulo se basó en una combinación de diseños cualitativos y cuantitativos de investigación. La aplicación de estos diseños se materializó en el uso de la prensa, de documentación histórica sobre la región y de la conformación de grupos focales en la ciudad de Buenaventura para estudiar las estrategias de resistencia frente a la guerra de las comunidades ribereñas de los ríos de este puerto sobre el Pacífico colombiano. El archivo digital de prensa del Centro de

¹ Doctor en sociología, profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad del Valle, miembro del grupo de investigación sobre Migración, Urbanización e Identidad de las Poblaciones Afrocolombianas de la misma universidad.

Investigación y Educación Popular, CINEP, fue la principal fuente de información de la investigación.

El archivo digital de prensa del Sistema de Información del CINEP consta de las bases de datos sobre actores armados y acciones bélicas, violación a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, luchas sociales, acciones colectivas por la paz, actores y dinámica del conflicto armado y el sistema de Información georreferenciada. Consta de 167 descriptores temáticos contenidos en 29 subtemas y 5 ejes temáticos, los cuales clasifican los registros de noticias de los periódicos desde 1995².

La información se tomó, entre los años 1995 y 2006, de 10 periódicos nacionales y regionales. Los nacionales fueron los siguientes: *El Tiempo*, *El Espectador*, *La República*, *Nuevo Siglo* y *Voz Proletaria*, de la capital del país. Y los regionales: *El Colombiano* y *El Mundo*, de Medellín; *El País*, de Cali; *El Herald*, de Barranquilla; *Vanguardia Liberal*, de Bucaramanga. A partir del año 2007 se incluyeron 10 fuentes regionales, así: *La Opinión*, de Cúcuta; *La Nación*, de Neiva; *Nuevo Día*, de Ibagué; *La Patria*, de Manizales; *El Liberal*, de Popayán; *Llano 7 Días*, de Villavicencio; *Boyacá 7 Días*, de Tunja; *La Tarde*, de Pereira; *El Universal*, de Cartagena; *Hoy Diario del Magdalena*, de Santa Marta y *Diario del Sur*, de Pasto.

El registro de las acciones colectivas se hizo en dos momentos. En el primero, se “barrió” todo el archivo digital de prensa. Se agruparon las acciones colectivas bajo los criterios de **departamento** (Valle –Cauca), **año** (1995/2007) y **municipio**. A la clasificación por municipio, se le integró una reclasificación de los datos bajo el criterio de los **municipios que concentran mayor población afrocolombiana**. De esta manera, la información obtenida se registró en una ficha diseñada para tal propósito.

El segundo momento consistió en crear una base de datos en SPSS. De esta manera, información de tipo cualitativo, que proviene de la prensa, se transformó en información cuantitativa, es decir, la calidad se convirtió en cantidad. Esta base de datos permitió dar cuenta del comportamiento de cada una de las variables que fueron privilegiadas en el estudio, es decir, describir, analizar, cruzar, comparar e inferir sobre las acciones colectivas objeto de estudio.

La prensa, como fuente de información para el estudio de la acción colectiva y los movimientos sociales, tiene ya cierta tradición. Charles Tilly ha sido uno de los investigadores más destacados de la acción colectiva que ha hecho uso de esta fuente en sus reconocidos estudios sobre las luchas y los movimientos sociales tanto en Europa como en

² De los 167 descriptores, se privilegiaron, entre otros, los siguientes: Protestas cívicas, urbanas y populares; Paros cívicos, desobediencia civil; Tomas, bloqueos, disturbios, asonadas; Marchas; Participación ciudadana, acciones populares, jueces de paz; Cabildos, consulta popular, referendos; Éxodos; Desplazados, refugiados, protestas campesinas, paros; Tomas, bloqueos, asonadas, disturbios; Organizaciones campesinas, protestas de mujeres; Movilización estudiantil; Protestas padres de familia; Protestas en defensa del medio ambiente; Negritudes; Acciones sindicales; Paros de trabajadores; Huelgas y Cese de actividades; Condiciones de trabajo; Convención colectiva, pliego de peticiones, concertación; Paramilitares y grupos de autodefensa; Grupos guerrilleros.

los Estados Unidos. En Colombia, el CINEP ha sido el pionero en los estudios sobre luchas sociales usando la prensa.

La prensa, como fuente de información, permite analizar la duración de la acción colectiva, los actores, el número de participantes, las motivaciones, el lugar en el cual se despliega la acción y el uso de la violencia, entre otros factores del espectro social formado por las protestas, movilizaciones, acciones colectivas y revoluciones. Otros aspectos tienen que ser derivados de forma intuitiva. Una de las fortalezas metodológicas de la prensa como fuente de información es la posibilidad de construir “series de tiempo” lo que permite analizar sincrónica y diacrónicamente la acción colectiva y, por lo tanto, llegar a la conclusión de si existen ciclos de protesta y ciclos de reflujo de la acción. Sin embargo, como lo muestra Susan Olsak (1989), también el uso de la prensa presenta problemas de definición, medición y métodos de estimación.

Tal vez, el principal problema radica en que la prensa no registra todas las acciones colectivas, sino aquellas que por su trascendencia se convierten en noticias que merecen ser cubiertas por los periódicos. Es decir, es imposible que la prensa cubra toda la acción colectiva tal como la entendemos en esta investigación por lo que un resultado de ello es, por supuesto, el subregistro. Un segundo problema radica en que a pesar de la gran discusión que existe en torno de la objetividad de la información, siempre la noticia es interpretada y valorada por quien la produce. Por lo tanto, la acción colectiva puede ser considerada como un hecho social, en el sentido de Durkheim (1994), que tiene existencia objetiva, pero que es interpretado y construido, en primera instancia, por el productor noticioso.

En nuestro estudio los actores armados, tanto guerrillas como paramilitares, aparecen como antagonistas de la resistencia pacífica de las poblaciones negras fue necesario también considerar, en una primera instancia, a estos actores. Así, en el estudio de las acciones colectivas no desarrolladas por las comunidades negras, resultó, en primer lugar, un total de 1.836 noticias. Al excluir de estas las llevadas a cabo por actores armados, resultaron 412 noticias. Pero en este universo, una acción se repite cinco o seis veces porque los diferentes periódicos cubren la acción colectiva. Por ejemplo, la toma de la carretera panamericana protagonizada por los indígenas aparece diez veces como noticia, cubierta por todas las fuentes. Al hacer la depuración se encuentra que las acciones colectivas desarrolladas por gente negra son un total de 221. Por lo tanto, hacer investigación empírica tomando como fuente de información fundamental a la prensa, como es el caso de este estudio, debe partir de reconocer sus limitaciones para explotar sus potencialidades.

La investigación se apoya en la teoría de la acción colectiva, los movimientos sociales, la etnicidad y la resistencia civil. En las categorías de análisis se combinan dos perspectivas teóricas que parecerían contradictorias; por un lado, las del proceso político, de inspiración Tilliana; por otro, la de la identidad, más relacionadas con autores europeos. Así, las categorías centrales de análisis son las siguientes:

Acción Colectiva (ACC) y Acción Colectiva Étnica (ACCE)

La categoría central de análisis en esta investigación es la acción colectiva (ACC). Operacionalmente, entendemos por tal, una acción emprendida por tres o más personas, o por los representantes de un colectivo, que buscan estratégicamente un objetivo; por lo tanto, que está motivada y en la que hay un oponente, regularmente el Estado, lo que implica un conflicto público, es decir, de intereses para terceros (Guzmán, 2007; Tarrow, 2004).

La acción colectiva siempre es contenciosa, es decir, implica conflicto porque hay un oponente, pero el conflicto no es siempre violento. Aunque, como dice Tarrow (2004), la violencia es el rastro más visible de la acción colectiva, tanto en la cobertura que los medios contemporáneos le ofrecen como en el registro histórico, en este estudio excluimos las acciones colectivas violentas desarrolladas por los actores armados como las guerrillas o los paramilitares, que tienen una tradición importante en la región de estudio.

Cuando un actor, que se identifica como étnico, desarrolla acciones colectivas en cuya motivación hay una identificación étnica, cultural, racial o territorial, llamaremos a esta acción, acción colectiva étnica (ACCE). Muchas investigaciones sobre la violencia étnica, el conflicto y la activación de las fronteras étnicas parten de la hipótesis que la identidad étnica ha provocado y sostenido los principales conflictos desde la Segunda Guerra Mundial (Olzak, 2006: XIV). Como dice Olzak (2006: 35), la relación entre etnicidad y acción colectiva es de reforzamiento mutuo y antes que identificar una primera causa, parece más útil explorar cómo la acción colectiva valida, reinventa y refuerza lealtades basadas en marcadores étnicos y raciales.

La literatura sobre los movimientos sociales y la acción colectiva étnica ha desarrollado diferentes clasificaciones de la acción colectiva étnica basadas en la duración, la táctica, la estrategia, la violencia y el contenido de las demandas. Esto ha permitido la siguiente clasificación: 1) Movimientos regionales que incluyen movimientos separatistas, nacionalistas, por las autonomías regionales y por el control de territorios ancestrales; 2) Movimiento por los derechos civiles, que demanda la expansión de los derechos civiles y económicos de un grupo; 3) movimientos antagonistas en contra de oponentes étnicos que incluyen ataques colectivos que incluyen el genocidio, las limpiezas étnicas, entre otras y; 4) nacionalismo, “strengthening”, que intenta unificar diversas culturas (Olzak 2006).

Los análisis más recientes sobre la movilización étnica han llegado a la conclusión de que la identidad del grupo es tanto una estrategia de movilización como un resultado de la acción social. En América Latina un rasgo sobresaliente de esta movilización es la lucha por territorios con los que se ha construido o inventado una identidad emocional que es susceptible de movilizar. El asentamiento de población afrodescendiente en territorios continuos como es el caso de la Costa Pacífica o el norte del Cauca y el sur del Valle en Colombia muestra que entre los conglomerados étnicos o raciales se presentan, por identificación, por ejemplo, con el color de la piel, acción colectiva en y en pro de estos territorios, pero que también intentan acceder a recursos del Estado y al reconocimiento.

Las demandas territoriales de los movimientos étnico, la migración internacional, los procesos de des-territorialización, el refugio político, el destierro, el cruce de fronteras, entre otros fenómenos contemporáneos, han incidido para que la relación entre movimiento social, espacio, lugar y territorio, al estilo de los estudios de Agnew (1987), Agnew y Duncan (1989), Escobar (2001, 2008), Harvey (1998, 2003) y Osleder (2002, 2004a), entre otros, hayan adquirido una mayor importancia en geografía política, sociología y en la teoría de los movimientos sociales. Esto ha producido un acercamiento disciplinar entre la geografía política, la sociología y geopolítica.

Movimiento social

Interesa estudiar, ante todo, el tipo de acción colectiva en la que actores sociales subalternos unen sus fuerzas para enfrentarse a las elites, a las autoridades y a sus antagonistas sociales. Cuando las acciones colectivas se apoyan en redes sociales y símbolos culturales a través de los cuales de estructura la acción social y conducen a una acción sostenida con sus oponentes, se produce el movimiento social. En consecuencia, los movimientos sociales pueden ser definidos como secuencias de acción políticas basadas en redes sociales internas y marcos de acción colectiva, que desarrollan la capacidad para desarrollar desafíos frente a oponentes poderosos (Tarrow, 2004: 23). También los movimientos sociales pueden ser entendidos como “desafíos colectivos planteados por personas que comparten objetivos comunes y solidaridad en una interacción mantenida con las elites, los oponentes y las autoridades”.

Los movimientos sociales son desafíos colectivos contra el Estado, las elites, las autoridades y otros grupos o códigos culturales. Los movimientos sociales implican, también, objetivos comunes y plantean exigencias comunes a los adversarios. El denominador común de los movimientos sociales es el interés. Es el reconocimiento de una comunidad de intereses lo que traduce los movimientos sociales en acción colectiva. El mantenimiento de la acción colectiva, a través de las redes resulta fundamental para el movimiento. Las acciones colectivas forman parte de la cultura política de una sociedad. Los líderes inventan, adaptan, y combinan distintas formas de acción colectiva para estimular el apoyo de la gente. Las formas de acción colectiva son heredades o infrecuentes, habituales o poco familiares, aisladas o parte de campañas concertadas. Cada grupo tiene una historia, y una memoria, propia de la acción colectiva (Tarrow, 2004).

Las acciones colectivas pueden constituirse en movimientos sociales cuando la acción es “a) basada en la solidaridad, b) desarrolla un conflicto, c) que rompe los límites normativos del sistema en el que se desarrolla la acción” (Melucci, 1985:795, citado por Guzmán, 2007: 2) o cuando se presentan secuencias de acción política que implican “desafíos colectivos planteados por personas que comparten objetivos comunes y solidaridad en una interacción mantenida con las elites, los oponentes y las autoridades” (Tarrow, 2004: 26).

Actor social

La otra categoría central en esta investigación es la de actor social. Por tal entendemos un sujeto social que es estratégico. Por lo tanto, que tiene un proyecto social que es motivado,

es decir, que busca objetivos. Regularmente, este sujeto cuenta con una organización social y con recursos de diverso tipo que le permiten desarrollar acción social, bajo la forma de acción colectiva. Para lograr sus objetivos evalúa las circunstancias políticas en términos de costos y beneficios (McAdam, Tarrow y Tilly, 2005; Tarrow, 2004; Touraine, 1981, 2000, 2005;). En el proceso de conformación como actor social que genera acción colectiva, juega un rol muy importante la conformación de la identidad (Olzak, 2006). En esta investigación el actor social más relevante es el que es conocido en Colombia como Las comunidades negras (Castillo, 2007; Escobar, 1997, 1999, 2008).

2. CARACTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES COLECTIVAS DE LA POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE

Como se comentó antes, nuestro universo de estudio está conformado por un total de 412 acciones que se ajustan a nuestra definición operacional de acción colectiva. Es decir, durante el periodo de estudio, constituido por los doce años que van entre 1995 y el 2007, diferentes actores sociales, con diversas motivaciones y haciendo uso de variados repertorios de acción protagonizaron estas acciones. De este total, 221 acciones, es decir el 53,6%, fueron desarrolladas por actores afrodescendientes o, lo que es lo mismo, al estudiar la composición étnica de los manifestantes encontramos que en su gran mayoría eran afrocolombianos. Nuestro interés se orienta al estudio de esas 221 acciones colectiva. A continuación presentamos la “fenomenología” de las acciones colectivas, se trata en principio de una descripción, aunque en algunos casos se propone una “explicación” del comportamiento de dichas acciones colectivas.

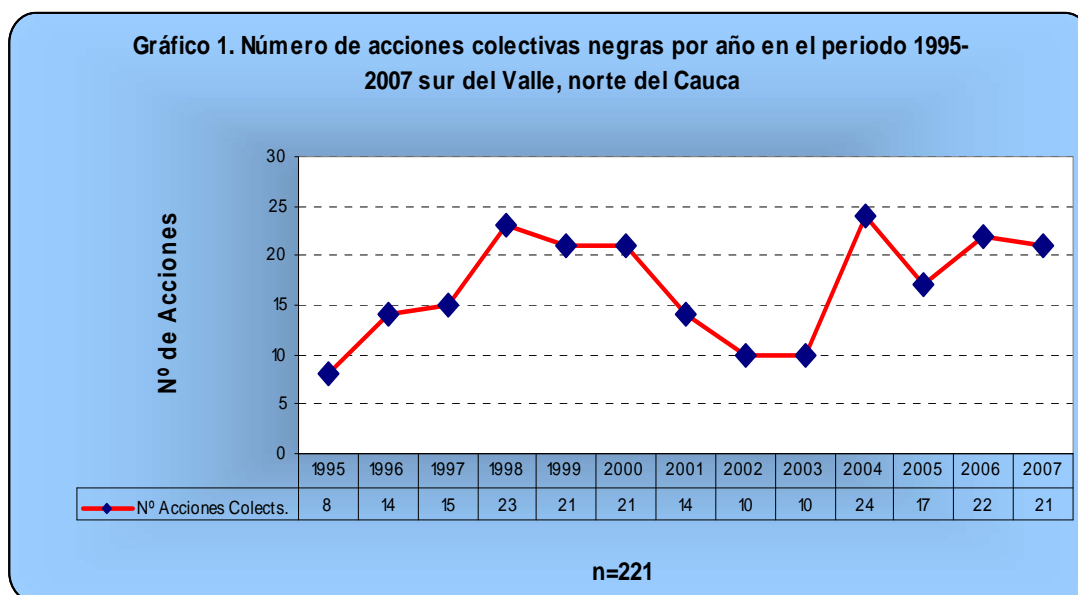
2.1 Las acciones colectivas en el tiempo

Como se dijo en la introducción, las “series de tiempo” de las acciones colectivas que se construyen con base en la prensa permiten estudiar el comportamiento de la acción en el tiempo. Esto ha permitido llegar a la conclusión de que existen ciclos de protestas, es decir, periodos en los que la protesta se incrementa y periodos en que decae. Es necesario advertir, como se hizo antes, que el uso de la prensa tiene ventajas para este tipo de análisis, pero también grandes desventajas. Una de éstas es el subregistro que se presenta de las acciones porque la prensa, por diversos motivos, que van desde factores ideológicos hasta aspectos logísticos, como la imposibilidad de cubrir la noticia, no reporta todas las acciones colectivas. Sin embargo, el universo de noticias sobre las acciones colectivas se constituye en un indicador de la protesta y la movilización y, nos permite, en consecuencia, saber cuándo la protesta se incrementa y cuando decrece. En la medida en que se puedan construir series de tiempo de periodos largos, como lo hizo Charles Tilly en sus estudios históricos sobre la acción y la violencia colectiva, podremos indagar por los factores de la estructura política que incentivan o desincentivan la protesta.

Los ciclos de protesta están asociados con diferentes factores de la estructura política y social. La tendencia en la teoría de los movimientos sociales, conocida como del comportamiento político, postula que estos ciclos están relacionados con la estructura de oportunidad política (EOP), como se dijo antes. Como es bien sabido, esta categoría, de gran éxito en la teoría de los movimientos sociales, fue introducida por Eisinger en el año 1973, en su estudio comparativo sobre los resultados de la protesta en 43 ciudades

norteamericanas durante el año 1968 (García, 2004; McAdam, Tarrow, Tilly, 2005; Tarrow, 2004; Salvador, 2005). Eisinger dice: “la incidencia de la protesta tiene una ligera relación con el tipo de estructura de oportunidades políticas que se dé en una ciudad; he definido éstas como una función de probabilidad que tienen los grupos de acceder al poder y de manipular el sistema político” (Eisinger, 1973: 25). Posteriormente, a esta categoría, se le incluirán aspectos relacionados con la apertura o cierre del sistema político, con las crisis en las alianzas de los sectores en el poder y los factores favorables a nivel internacional para las demandas de los movimientos sociales. Lo relevante aquí es entender que los ciclos de protesta, el incremento y el declive de la acción colectiva, están asociados con las características de la estructura política y como dijo Tocqueville (1911), en *La Democracia en América*, la gente actúa cuando tiene oportunidad de hacerlo.

En efecto, al preguntarnos por la distribución del número de acciones colectivas negras en nuestra región de estudio en el periodo 1995-2007, se muestra que hay años en los que hay un número mayor de acciones y otros en los que estas disminuyen, tal como se aprecia en el gráfico N° 1. Se puede observar, también, que hay tres subperiodos claramente diferenciados. El Primer subperiodo va de 1995 al 2000. Durante estos años hay una especie de efervescencia de la acción colectiva negra con un pico en 1998 en el que la acción casi se triplica en relación con 1995. El segundo subperiodo va de 2001 al 2003 en el que la acción colectiva decae, con un mínimo de diez acciones en el 2003, es decir, hay una especie de reflujos de la protesta. El tercer subperiodo va de 2004 al 2007 en el que la protesta vuelve a cobrar fuerza con un pico de 22 acciones en el 2006.



Fuente: Cálculos propios con base en la base de datos de prensa del CINEP.

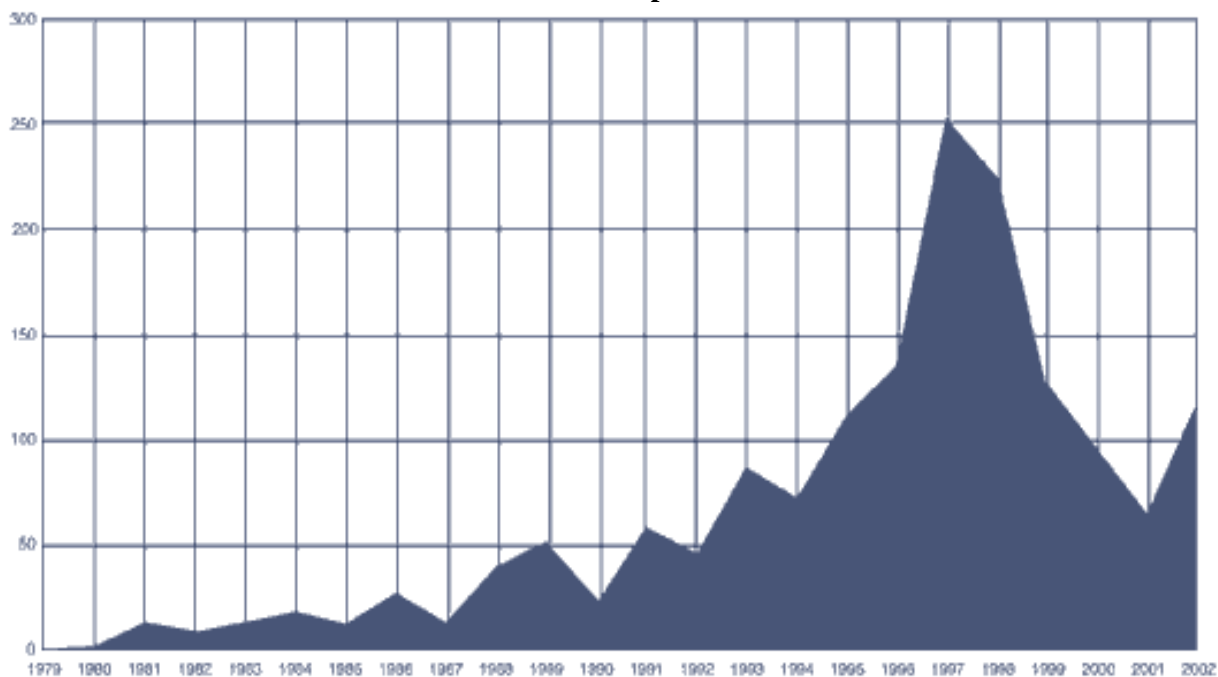
Primer subperiodo: 1995-2000: Efervescencia de la protesta negra

¿Cómo explicar estos flujos y reflujos de la acción colectiva negra en nuestra región de estudio? El incremento en el primer periodo podría estar asociado con la estructura de oportunidad política favorable que se abre en Colombia para las protestas étnicas a raíz de

la Constitución de 1991. Como se sabe, esta carta, rompiendo con una tradición de más de cien años, reconoce amplios derechos a las poblaciones indígenas y a las comunidades negras y postula que el fundamento de la nacionalidad está en la diversidad étnica y cultural. A raíz de este reconocimiento, la Corte Constitucional, en múltiples sentencias, crea doctrina favorable a las demandas étnicas. Por lo tanto, pudo crearse un escenario político favorable para la movilización y las protestas étnicas, escenario aprovechado por las comunidades negras para llevar a cabo movilizaciones en muchos casos con contenido étnico.

Llama la atención que, precisamente, durante este periodo, mientras hay un incremento de las acciones colectivas en la región de estudio, también se presenta el mayor auge de las acciones por la Paz en Colombia. En efecto, en su estudio *Movilizaciones por la paz en Colombia 1978-2002*, Carlos Fernández, Mauricio Durán y Fernando Sarmiento establecen una periodización del comportamiento de tipo de acciones colectivas en el país: 1) 1978-1985 Antecedentes de la Movilización por la paz; 2) 1986-1992 Activación de la movilización por la paz; 3) 1993-1999 Organización y grandes movilizaciones por la paz. El comportamiento de estas acciones se aprecia en el gráfico siguiente:

ACCIONES POR LA PAZ EN COLOMBIA 1979-2002
Total de acciones por año



Fuente: Fernández Carlos, Durán Mauricio, Sarmiento Fernando (2004): *Movilizaciones por la paz en Colombia 1978-2002*. Con base en el Banco de Datos de Acciones por la Paz del CINEP, <http://www.c-r.org/our-work/accord/colombia/spanish/movilizacion.php>

Los autores atribuyen este auge a la crisis del gobierno Samper derivada del proceso 8.000.

Segundo subperiodo: 2001-2003: Repliegue de la protesta

Parte del segundo subperiodo que comprende los años 2001, 2002 y 2003 y en que la protesta decae, de un máximo de 14 acciones colectiva a un mínimo de diez, coincide con el término del gobierno Pastrana y el inicio del primer mandato de Álvaro Uribe Vélez. Lo que llama la atención es que el periodo en el que la protesta negra se repliega coincide con la elección popular de Floro Alberto Tunubalá³ como gobernador del departamento del Cauca.

Floro Tunubalá es el primer indígena, en la historia de Colombia, en ser elegido por voto popular como gobernador. Es también, junto con Gabriel Muyuy y Anatolio Quirá, uno de los primeros senadores indígenas de Colombia después de la Constitución de 1991 que aprueba la Circunscripción Especial Indígena.

Floro Tunubalá llega a la gobernación del Cauca como candidato del *Bloque Social Alternativo*. Esta fuerza es constituida en el año 2000 con el objetivo de representar los intereses de sectores sociales y políticos que hasta la fecha no habían accedido al poder. Con este interés, alrededor del Bloque Social se organizan diferentes fuerzas sociales. Al lado de una mayoría indígena participan también organizaciones locales, sub regionales y regionales de campesinos, de obreros, de profesores y de afrocolombianos. El departamento del Cauca se ha caracterizado, históricamente, por tener una elite política fuertemente anti-indios, que se reclama de ascendencia española, muy vinculada con la Iglesia Católica y perteneciente a los dos partidos tradicionales. Por estas razones, la elección de Floro Tunubalá puede ser considerada como un triunfo del movimiento indígena caucano y colombiano, éxito que posee una fuerte carga simbólica.

Tunubalá es elegido como gobernador del Cauca con la votación más alta en la historia de este departamento, 148.183 votos. La mayor votación la obtiene, por supuesto, en las zonas indígenas donde se destacan los municipios de Totoró, Jambaló, Toribío, Silvia pero también en los municipios en los que la población negra es muy importante como Puerto Tejada y Santander, localidades de nuestra región de estudio y en municipios negros que no hacen parte de ésta como Guapi y Timbiquí, en la Costa Pacífica y Patía, en el sur del departamento.

Durante su gobierno, siguiendo los lineamientos del movimiento indígena de desarrollar resistencia pacífica frente al conflicto armado, impulsa lo que llama los “Laboratorios de Paz”, una estrategia política que busca solucionar el conflicto a través de una activa participación de la sociedad civil. Aunque con pocos recursos económicos, impulsa importantes programas en educación y salud para las poblaciones indígenas y afrodescendientes.

Todo el anterior juego de intereses, y las políticas a favor de las comunidades indígenas y afrodescendientes que pone en práctica Floro Tunubalá, parecen estar asociados con el repliegue de la protesta negra, al menos en los municipios de nuestra región de estudio que pertenecen al Cauca. Es como si la elección de este líder indígena hubiese abierto un

³ Floro Tunubalá pertenece al grupo indígena guambiano. En lengua guambiana Tunubalá significa “grandeza”.

compás de espera en la protesta de los afrodescendiente, porque Tunubalá representa los intereses de los subalternos, en especial de los indígenas y de sectores de la gente negra.

Llama también la atención que así como el periodo de auge de las acciones colectivas negras coincide con el incremento de las acciones colectivas por la paz en Colombia, también el descenso de las acciones colectivas negras en la región de estudio coincide con el descenso de las acciones por la paz, de acuerdo con el estudio citado de Fernández, Duran y Sarmiento. Dicen los autores:

2000-2003: crisis de las expresiones nacionales y fortalecimiento de las locales. Paradójicamente, los procesos de paz con las guerrillas fueron determinantes en el descenso de la movilización por la paz a escala nacional, debido a las expectativas que se despertaron por lo que podría resultar de las negociaciones, particularmente en el Caguán. Como puede verse en la gráfica No.1, y no obstante las marchas del No más, la movilización comienza a descender a partir del momento en que la administración Pastrana inicia el proceso de paz con las FARC, y entra en un verdadero periodo de crisis y reflujo cuando el proceso de paz se rompe. (Fernández Carlos, Durán Mauricio, Sarmiento Fernando (2004): *Movilizaciones por la paz en Colombia 1978-2002* <http://www.c-r.org/our-work/accord/colombia/spanish/movilizacion.php>).

Tercer subperiodo: 2003-2006: Nuevo ascenso de la protesta

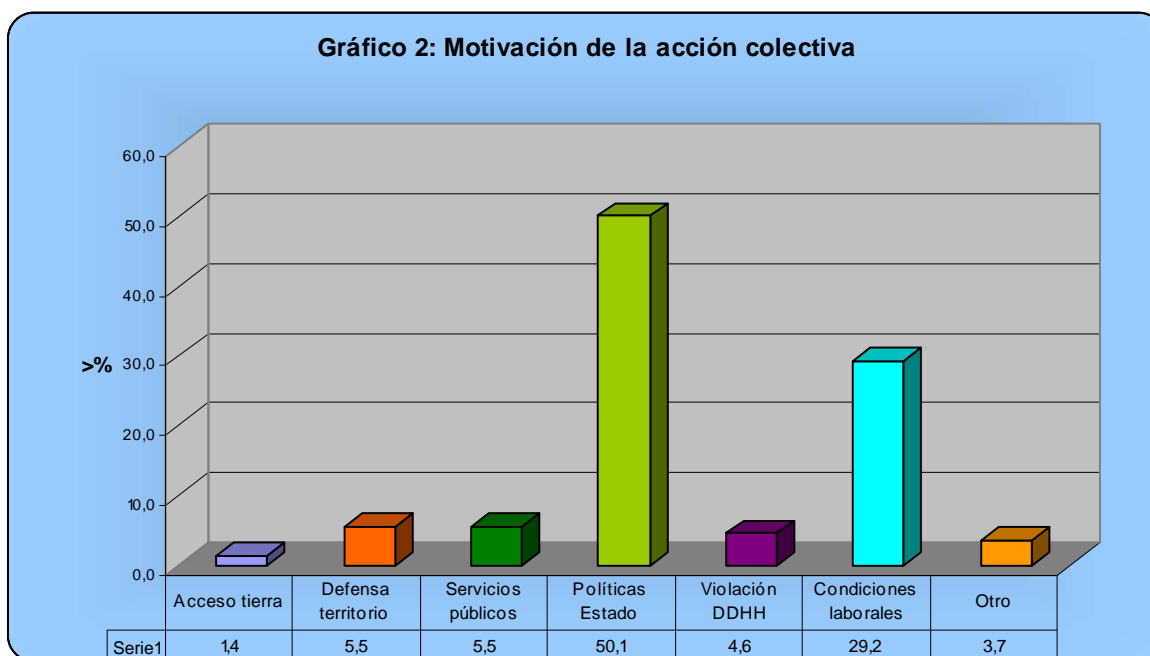
En el tercer subperiodo, que comprende los años de 2003 al 2007, hay un nuevo ascenso de la protesta negra. Inmediatamente termina el gobierno de Floro Alberto Tunubalá, la protesta se reactiva. En efecto, en el 2003 se presentan diez acciones colectivas; al siguiente año (2004) las acciones se duplican; en el 2005 se mantienen y en el 2006 se disparan a un total de 22 acciones. Esto muestra que en el subperiodo hay una alta conflictividad en la región de estudio. Como veremos más adelante, esta conflictividad tiene diversas motivaciones y el contendor principal es el Estado.

La aplicación de la teoría de la Estructura de Oportunidad Política debería indicar que en un contexto caracterizado por una política como la de seguridad democrática, que se inicia a partir del año 2002, con el primer gobierno de Uribe, la dinámica de las acciones colectivas en la región de estudio debería declinar porque en un análisis de los costos de la acción ésta sería más costosa en un escenario caracterizado por la implantación de una política como la de la seguridad democrática. Sin embargo, los datos muestran lo contrario ya que lo que se presenta es la reactivación de la protesta. Este comportamiento, parece estar más asociado, antes que con la estructura nacional, con las condiciones de política y con las divisiones de las elites políticas regionales.

2.2 Las motivaciones de la acción

Uno de los interrogantes fundamentales de la teoría de los movimientos sociales es: ¿Qué motiva a los actores sociales a desplegar la acción colectiva?, ¿Qué determina que gente, regularmente apática, se eche a la calle, bloquee carreteras, se tome instalaciones oficiales, retenga funcionarios públicos, incendie peajes y se enfrente con la Fuerza Pública? Es en la motivación donde se da el tránsito de la demanda individual a la demanda colectiva, lo que constituye una de las preguntas centrales de la teoría de los movimientos sociales. En la

revisión minuciosa que se hace de la prensa, durante los años 1995 y 2007, se identifica que la motivación de las acciones colectivas son demandas por el acceso a la tierra, por la defensa del territorio, por los servicios públicos, en contra de políticas generales del Estado, en contra de la violación de los Derechos Humanos y por mejores condiciones laborales asociadas con el salario.



Fuente: Cálculos propios con base en la base de datos de prensa del CINEP.

Políticas generales del Estado y servicios públicos

La alta proporción de estas dos motivaciones, que suman el 55,6% del total de las acciones colectivas, muestra que la protesta de la gente negra en la región de estudio tiene como principal contendor al Estado. Otro rasgo protuberante es que la acción está motivada, en su gran mayoría, por el acceso a los servicios que presta el ente estatal. Por un lado, está el acceso a los equipamientos colectivos que bajo la forma de servicios públicos (agua, acueducto, energía, aseso, alcantarillado) presta el Estado; por otro, el acceso a los servicios relacionados con las políticas sociales en general: política educativa, de salud, de distribución de tierras, de empleo, de transporte y comunicaciones, entre otras.

Lo anterior se desagrega en dos grandes tendencias. Primero, se protesta porque el Estado no brinda los servicios públicos; segundo, se protesta porque el servicio que presta es de mala calidad. Por lo tanto, la mayor parte de la movilización tiene que ver con demandas asociadas con la calidad de la vida. Lo que devela esta motivación es que las protestas y las movilizaciones siguen expresando las graves condiciones de desigualdad social acumuladas históricamente en nuestra región de análisis. En consecuencia, aquí se plantea el tema de que la inequitativa distribución y acceso a los recursos y a las oportunidades produce inequidades e injusticias lo que provee las motivaciones para llevar a cabo acciones, protestas y movilizaciones en contra del Estado y del *status quo*.

En efecto, de acuerdo con algunos de los clásicos de la sociología (Marx y Engels) una inequitativa distribución y acceso a los recursos que produce inequidades e injusticias provee motivaciones y justificaciones para adelantar acciones en contra del *status quo*, incluso, mediante el uso de la violencia. Sin embargo, tal interpretación no ha sido validada empíricamente. Al respecto, lo que recientemente ha llamado la atención de los estudiosos es que bajo la suposición de que el desarrollo económico debe erosionar los lazos de identificaciones étnicas primordiales (Weber, Marx y Durkheim creían en ello), se comienza a encontrar que, por el contrario, el desarrollo económico parece fortalecer la movilización étnica. Esta situación parece darse, ante todo, en aquellas condiciones en el desarrollo económico produce la situación que algunos sociólogos han calificado como de colonias internas. Este parece ser el caso de la Costa Pacífica colombiana y, en menor medida, de nuestra región de estudio.

Las acciones colectivas de la población negra en contra de las políticas del Estado y por los servicios públicos han sido recurrentes en las tres últimas décadas en nuestra región de estudio. Aunque la definición de lo que constituye un movimiento social es una controversia en la sociología y su conceptualización depende del enfoque teórico con el que se analiza la acción, si nos atenemos a nuestra definición de movimiento social, las luchas por el acceso a los servicios públicos en la región de estudio son las que más se acercan a la fenomenología de lo que se entiende en este estudio por movimiento social. Esto porque la acción política ha sido recurrente en las tres últimas décadas, porque se ha basado en redes internas que han subsistido a lo largo del tiempo y porque ha desafiado a un actor como es el Estado.

En la memoria colectiva de la gente negra están presentes estas luchas que adquieren la forma de los paros cívicos durante los años ochenta del siglo pasado, pero que tienen sus primeras manifestaciones en la década de los setenta. Estas movilizaciones dominan el panorama de las luchas sociales durante los ochenta y aunque también se presentan movilizaciones rurales, por ejemplo, por la electrificación rural, tienen un carácter urbano que, como veremos más adelante, es una tendencia de la acción colectiva que se acentúa cada vez más en la región.

A mediados de los años ochenta, grupos de base gestan una red interna en la que se sustenta la organización de este movimiento, es decir, las estructuras de movilización. Éstas son enunciadas por unas de las líderes en los siguientes términos:

Cada uno de los grupos debe ser un nudo de una gran red. Pero no se puede pensar que estos nudos estén sueltos. Se necesitan hilos que los unan para que pueda ser una red. Esos hilos son la comunicación, la solidaridad y el trabajar juntos entre los grupos. Entonces lo que hace una red exitosa son los nudos, los hilos, y los huecos que existen entre los nudos. Los huecos significan que cada grupo es independiente, es decir, que cada grupo es autónomo. (De Roux, 1991a:18).

El ambiente de luchas y movilizaciones por los servicios públicos y en contra de las políticas del Estado derivan hacia la conformación del Movimiento Cívico Popular Nortecaucano en el que convergen múltiples organizaciones de diferentes sectores sociales

pero cuya composición es mayoritariamente de gente negra. Esta expresión popular incursiona en la política electoral para enfrentar a los partidos tradicionales, pero no tiene el éxito que logra con la movilización de la población⁴.

Las 111 acciones colectivas, que en nuestro universo de 221 acciones representan el 50,1 %, que tienen como motivación la protesta en contra de las políticas generales del Estado presentan un alto grado de agregación. Al desagregarlas aparecen diferentes factores que motivan la acción tal como se aprecia en la tabla 1.

Tabla 1: Decisiones de los gobiernos y políticas generales del Estado contra las que se protesta	
1	Clausura de cantera mineras del cerro de Catalina/// Rechazo al cierre de minas.
2	Demanda por nuevas oportunidades de empleo.
3	Altas tasas de interés de los créditos de la vivienda.
4	Solicitud de un nuevo docente.
5	Deuda social y económica que genera la construcción en 1980 de la represa de la Salvajina.
6	Instalación de rellenos sanitarios.
7	Incumplimiento en pavimentación de vías suburbanas.
8	Solicitud de recursos para educación, salud y estímulos agrarios.
9	Demandan el cumplimiento de los programas sociales solicitados para ser cubiertos con dineros de la venta de las acciones de la electrificadora del Pacífico S.A. EPSA.
10	Incumplimiento de la construcción de la doble calzada.
11	Fumigación con glifosato.
12	Incumplimiento en la compra de la fibra del fique.
13	Exigencia de cumplimiento de acuerdos aprobados en el gobierno de Samper Pizano sobre apoyo para obras viales, educativas, de salud, de protección al medio ambiente y programas productivos.
14	Solicitan apertura de una política de producción de empaques y la prohibición del ingreso al país de productos con hilos sintéticos que compiten deslealmente con la industria nacional de fique.
15	Protesta en contra de la sustitución de cultivos ilícitos.
16	Irregularidades en la construcción de vías.
17	El plano trazado para la construcción de la vía alterna/interna tapona el acceso de algunos barrios.
18	Mala calidad de los servicios públicos, inseguridad, desempleo, atraso en pago a maestros.
19	Incumplimiento en tarifas de fletes.
20	Abandono estatal.
21	Incumplimiento en proyectos de ampliación vial y saneamiento básico.
22	Deficiente administración de colegios.
23	Alza en precio del ACPM.
24	Exigencia de aplazamiento de examen para docentes.
25	Alza en impuestos.
25	Contra la inseguridad, las basuras, la criminalidad, la carencia de agua potable y la deficiente elección de alcalde.
26	Desatención social del Estado.
27	Mal estado de las vías y poca atención a las necesidades de los campesinos.
28	Liquidación del Instituto de Seguros Sociales, ISS.
29	Altas tasas de tarifas de los servicios de acueducto y alcantarillado.

⁴ Para una mayor información sobre el Movimiento Cívico Popular Nortecaucano ver De Roux (1991b), Velasco (1982), Velasco (1990), Yunda (1993).

30	Ubicación de peaje.
31	Irregularidades en la presentación del proyecto y en el estudio técnico para un relleno sanitario.
32	Mejoras en infraestructuras y adecuación de centros docentes.
33	Anomalías en la construcción de la doble calzada Candelaria-Cali.
34	Exigencia de seguridad ante amenazas de actores armados.

Fuente: Procesamiento propio a partir del Archivo de prensa de CINEP

En efecto, la información que brinda esta tabla es reveladora ya que muestra que la motivación de la protesta se asocia con el amplio espectro de problemas sociales que el Estado pretende resolver a través de la política pública y en especial de la política social. De esta manera, la acción colectiva se desarrolla para protestar en contra de los altos intereses de los créditos de vivienda; para solicitar más profesores para las escuelas primarias; para oponerse a la instalación de rellenos sanitarios⁵; para denunciar la inseguridad, la criminalidad, la carencia de agua potable, el mal estado de las vías y el alza en los precios del ACPM; para exigir protección del Estado ante los crímenes de los grupos armados; para pedir mayor atención estatal; para solicitar que el Estado cumpla con los acuerdos que desactivan alguna protesta social años atrás; para denunciar los impactos negativos sobre las comunidades de macroproyectos como la construcción de la represa de la Salvajina.

De todos los anteriores aspectos, son recurrentes las acciones en contra del cobro de peaje en carreteras nacionales (carretera panamericana) y departamentales. Aunque en nuestra clasificación estas acciones aparecen desarrolladas por la población afrocolombiana, en la práctica ellas agrupan manifestantes de varios municipios y de diferentes sectores sociales, como se deriva de la siguiente noticia que se refiere al rechazo del peaje en la vía Cali-Candelaria:



(El Tiempo, 01, 12, 1999, D53).

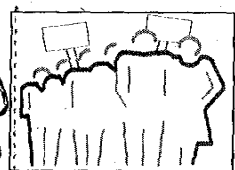
⁵ Para un estudio de las acciones colectivas en el sur del Valle y el norte del Cauca en contra del relleno sanitario de Cali, ver el trabajo de grado de maestría en sociología de Néstor Espitia (2009) "No al relleno sanitario. Protesta ambiental en el sur del Valle y norte del Cauca". Esta investigación se llevó a cabo en el proyecto "Desigualdades étnico raciales, acción colectiva, etnicidad y resistencia en el norte del Cauca y el sur del Valle".

Las protestas en contra de instalación de peajes son recurrentes en la región de estudio. Cuando el Estado propone la construcción de un nuevo peaje, de inmediato la población se moviliza en contra de tal decisión. La movilización de la gente ha permitido, regularmente, llegar a acuerdo con el Estado. El caso paradigmático lo constituye la protesta de pobladores, en una proporción muy importante pertenecientes a la población negra y de los municipios de Candelaria y Florida, que durante varios años protestan y se movilizan en contra de la instalación de un peaje en la vía Cali-Candelaria. En este caso se presenta una secuencia de acciones colectivas que se despliegan durante varios años y a través de las cuales se logran acuerdos parciales del Estado, como se deriva de la siguiente serie de noticias:

Habitantes de Candelaria bloquean vía hacia Cali en protesta por peaje

Cali

Una nueva protesta sacudió ayer la economía del Valle. Cientos de habitantes del municipio de Candelaria mantienen bloqueada la vía que comunica a esa localidad con Cali y



los transportadores ya comenzaron a perder cuantiosas sumas por el paro generado en rechazo al

cobro del peaje en dicha carretera.

Mientras la procuradora departamental, Josefa Córdoba, amenazó con despejar por la fuerza la carretera, los manifestantes advirtieron que no dejarán la protesta por ningún motivo hasta tanto se les dé alguna solución al problema generado por el impuesto vial, el más caro del país y que, según los manifestantes, "es un abuso, porque la vía sigue sin terminarse".

El problema viene desde hace tres años, cuando el gobierno departamental entregó en concesión a la compañía Cisa S.A. la construcción de la doble calzada Cali-Candelaria y la rehabilitación de la vía Cali-Florida, con un costo cercano a los \$31.000 millones. Hoy vale

\$60.000 millones y está inconclusa, razón por la cual los habitantes rechazan el cobro del peaje.

En noviembre del 98, Cisa instaló el peaje y comenzó a cobrar el impuesto vial más caro del país: \$2.300. La obra estaba en veranos.

Ese mismo año arrancó el reparcho de los primeros 17 kilómetros de vía, pero estudios técnicos de dicha compañía encontraron que el índice de vehículos que por ella transitaban estaba sobredimensionado y que la única forma de recuperar la inversión era instalando otro peaje. El impuesto, entonces, llegó a \$4.300 por cada vehículo.

La gota que rebozó la copa está relacionada con el hecho de que el peaje del río Frayle fue trasladado a 100 metros de la central de abastos de Cavasa y el de las Palmas sería reubicado en Juanchito, cuando el compromiso hecho con la administración hace año y medio contemplaba, precisamente, la no reubicación de dichos peajes.

Lo crítico es que nadie quiere ir a Cavasa a comprar sus víveres, porque lo que se ahorran en ellos lo tienen que dejar en las casetas de cobro del impuesto vial. Igualmente, los dueños de establecimientos comerciales de Juanchito están en bancarrota y compañías como Carvajal se están yendo para el Cauca.

(Fuente: *El Espectador*, 19-06-1998, página 12A)

Desalojo de vía duró pocas horas

Candelaria (Valle)
El despeje de la vía Cali-Candelaria, realizada por la Policía en la madrugada de ayer, solo duró unas pocas horas. Con la claridad del día, los cerca de 4.000 habitantes reanudaron la protesta y bloquearon la carretera en tres puntos.

Algunos habitantes denunciaron atropellos de los uniformados, pues "aprovecharon que estaba totalmente oscuro y buena parte de la gente descansaba", dijo uno de los líderes de la protesta.

Vino luego un prolongado enfrentamiento a piedra, gases lacrimógenos y bolillo entre unos 200 uniformados y los manifestantes. La caseta del peaje del corregimiento Villagorgona fue destruida.

En medio de la 'batalla campal', 20 policías resultaron con contusiones de alguna consideración y varios habitantes sufrieron heridas leves. Cuatro manifestantes fueron detenidos y dos de las

cuatro tanquetas de la Policía quedaron semidestruidas.

Las dos estaciones de gasolina, ubicadas sobre la vía de 32 kilómetros, fueron atacadas a piedra.

Al promediar la tarde, la tensión en la carretera era extrema, pues algunos minutos después de las 4 apareció un grupo de soldados de la Policía Militar que se apostó al frente de los manifestantes que bloqueaban la vía.

El taponamiento se inició en la tarde del lunes, en tres puntos la carretera, en protesta por las irregularidades en la obra cuyos trabajos se encuentran paralizados desde hace un año.

El proyecto inicial habló de una doble calzada, pero luego se alteró el contrato y se definió una ampliación. Además, los trabajos se recortaron en diez kilómetros.

En días pasados, la Contraloría General de la Nación confirmó las irregularidades en la obra.

(Fuente: *El Tiempo*, 02-12-1999, pág. 8A)

Se levanta el bloqueo; no se cobrará peaje por quince días

Acuerdo parcial en la vía a Candelaria

Un acuerdo entre la comunidad, el concesionario y el Gobierno Departamental se llegó anoche en el conflicto que mantenía bloqueada la vía Cali-Candelaria.

A partir de hoy y por quince días, Concesiones de Infraestructura, Cisa, la firma que construye y opera los 32 kilómetros de carretera, se abstendrá de cobrar el peaje a los vehículos que por allí circulan, con el propósito de facilitar un arreglo definitivo.

El acuerdo al que se llegó luego de que por primera vez se reunieron las partes en conflicto, permite que los manifestantes despejen la carretera, después de cuatro días de protestas de los habitantes del suroriente del Valle del Cauca que exigían el desmonte de los peajes y la renuncia del contrato de concesión.

"A partir de hoy, Cisa y el equipo de la Gobernación, con la veeduría de la comunidad, tratarán en una solución bilateral, que puede terminar, o bien, en la renuncia del contrato o en la terminación de la obra", precisó Jorge Mario Eastman, vice ministro del Interior, quien actuó en el convenio como gobernador ad hoc, en vista de que el titular encargado, Juan Fernando Botilla Guoza, se declaró impedido.

Por su parte, Andrea Franco, líder cívica de Candelaria y veedora en el proceso, se declaró "satisfecha, en un acuerdo beneficioso para las partes, que se sientan a dialogar de verdad por primera vez desde que empezó este conflicto y eso es de valorar".

En igual sentido se pronunció Hernán Molano, gerente de Macroproyectos, quien anunció que "se dio un plazo hasta el 22 de diciembre para llegar a un acuerdo definitivo".

Al cierre de esta edición, se esperaba que el bloqueo se estuviera levantando, ya que los vecinos de la comunidad procedieron de inmediato a dar a conocer el acuerdo.

A los peñales por el taponamiento de la vía se sumó ayer el grave problema de depósito de cien toneladas de basuras, entre la zona urbana y rural de Candelaria, ya que los carros recolectores no podían pasar y se temía por una emergencia sanitaria.

Gobernación del Valle del Cauca, concesionario y comunidad de Candelaria se sentaron a dialogar. El plazo convenido hasta el 22 de diciembre es para encontrar una solución definitiva.

Alimentos llegaron a Cali

La caída en los precios de algunos alimentos perecederos y el paulatino aumento de las calles alrededor de las plazas de mercado de Cali, por el resultado del conflicto generado por el bloqueo de la vía Cali-Candelaria.

Sin embargo, el bajó de precios llegó al bolsillo del consumidor sino que se quedó en el de los intermediarios.

En vista de que los Cayapas quedó asediada e incapacitada para recibir aproximadamente 2.500 toneladas que estaban en

una bodega, los transportadores se desplazaron hasta las plazas de mercado de Cali, para esperar, dice la carga.

El papaya se conseguía hasta a siete mil pesos el bulto, aunque normalmente se vende entre \$12.000 y \$20.000, dice

Raquel Velásquez, administradora de la galería Santa Elena.

Esa situación fue calificada por Aba y Caza como una, dice, hora de liberación de Cayapas, quien confió que en el mercado de ayer no ingresó ni un solo camión con alimentos.

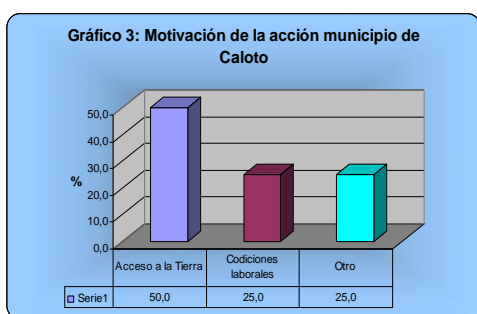
(Fuente: *El País*, 03-12-99, Pág. B3)

2.3 Las demandas por el territorio

La diferencia entre demandas por la tierra y defensa del territorio es sociológicamente relevante por la diferencia entre actores sociales que ello implica. Mientras que la demanda por la tierra está asociada, fundamentalmente, a las luchas de un campesinado negro, que viene de varias décadas atrás, que considera la tierra como un medio de producción que

garantiza la reproducción de la familia campesina, la defensa del territorio implica la construcción de un actor social que ha generado una identificación emocional con un espacio que se construye como territorio.

De acuerdo con Smith (1986)⁶, hace parte de la identidad de un actor étnico la identificación con el territorio. Así por ejemplo, un actor como el Proceso de Comunidades Negras, que lidera el proceso de titulación de más de cinco millones de hectáreas como territorios colectivos en la Costa Pacífica Colombiana define el territorio como el espacio donde ser, “Como espacio vital, el territorio es una condición necesaria para la recreación y desarrollo de nuestra visión cultural. No podemos ser si no tenemos un espacio para vivir de acuerdo con lo que pensamos y deseamos como forma de vida. De ahí se sigue que vemos el territorio como hábitat y espacio donde las gentes negras desarrollan sus ser en armonía con la naturaleza” (Grueso, Rosero y Escobar 1998: 205). Por lo tanto, no tener territorio es la desarticulación del ser y la destrucción de las relaciones sociales que se producen en la comunidad. Se mostró en el gráfico 2 que las acciones colectivas que tienen como motivación la defensa del territorio representan el 5,5%. Sin embargo, al analizar el comportamiento municipal se observa que el número de acciones colectivas que están motivadas por la defensa del territorio se concentran en un conjunto de municipios en los cuales hay predominio de gente negra, como se puede observar en los siguientes gráficos.

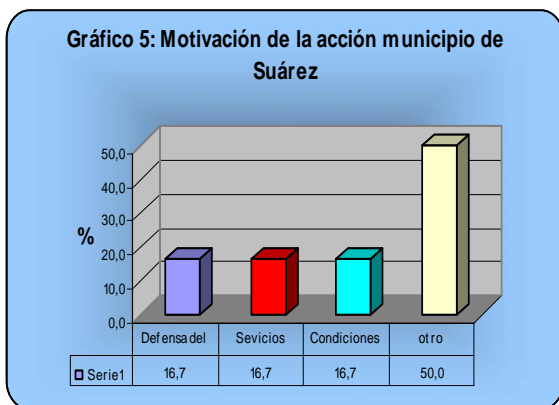


Fuente: procesamiento propio a partir de la base de datos del CINEP.

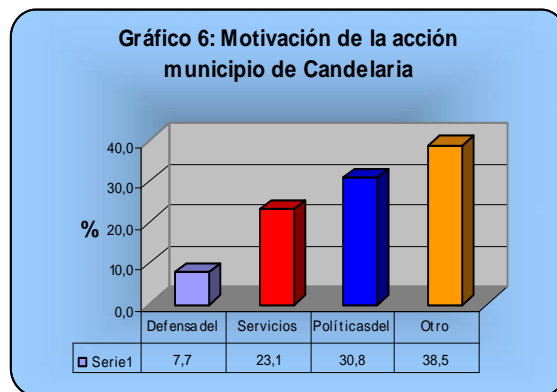


Fuente: procesamiento propio a partir de la base de datos del CINEP.

⁶ Anthony Smith, en el marco de los estudios sobre el nacionalismo, establece seis características de la comunidad étnica: un nombre colectivo, un mito de descendencia común, una historia compartida, una cultura distintiva, una asociación con un territorio específico y un sentido de solidaridad. Define grupo étnico como “a category of population with a common name, descent, myths, history, culture and territorial association. It is also a community with a definite sense of identity and solidarity which often finds institutional philanthropic expression” (Smith, 1986: 29).

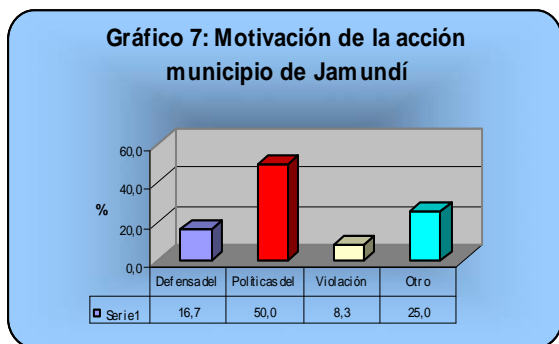


Fuente: procesamiento propio a partir de la base de datos del CINEP.

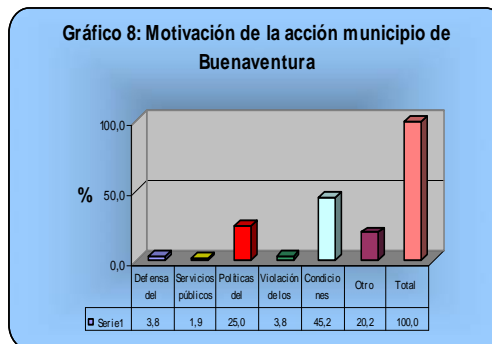


Fuente: procesamiento propio a partir de la base de datos del CINEP.

Estas comunidades han iniciado una lucha que reclama el reconocimiento de territorios colectivos de comunidades negras. Demandan la propiedad colectiva sobre tierras en las que trabajan y viven como grupos étnicos, se identifican como tales y han construido la ficción de una historia compartida, de unas prácticas tradicionales de producción y una supuesta cultura particular que diferiría de la cultura mestiza nacional dominante. Buscan controlar los recursos que provienen de la minería y de agricultura mediante el dominio territorial y la promulgación de los Consejos Comunitarios de Comunidades Negras, como los consejos que son estipulados en la Ley 70 para la administración y cuidado de los territorios colectivos de comunidades negras en la Costa Pacífica colombiana. Son demandas de autonomía y autogobierno en buena medida similar a las que han levantado las comunidades indígenas en los territorios de resguardos que son reconocidas en la Constitución de 1991.



Fuente: Procesamiento propio a partir de la base de datos de CINEP.



Fuente: procesamiento propio a partir de la base de datos de CINEP.

Esta “nueva idea” de identificación con territorios ancestrales y de lucha por el reconocimiento de tierras de comunidades negras se remonta a los finales de los años ochenta y comienzos de los noventa y son una expresión del moderno movimiento negro colombiano que se reivindica como grupo étnico y que levanta consignas identitarias, culturales y territoriales.

Las organizaciones y los liderazgos que se crean en la región del norte del Cauca durante la década de los años ochenta en el marco de las movilizaciones que adquieren

la forma de los paros cívicos y que demandan el acceso a servicios públicos y la puesta en marcha de políticas sociales estatales van derivando hacia la conformación de una “conciencia negra”. En términos sociológicos, es un proceso de invención de que se hace parte de una “comunidad imaginada”⁷ negra con la cual se compartiría una historia común, signada ante todo por el recuerdo traumático de la esclavitud en las haciendas esclavistas del antiguo gran Cauca, una prácticas culturales comunes y el recuerdo de “territorios ancestrales” que no son más que las antiguas haciendas esclavistas y las fincas campesinas que desaparecieron ante el proceso de urbanización, metropolitización y ampliación de la empresa agraria capitalista.

Algunas de estas organizaciones como Sinecio Mina participan activamente en el proceso que se desencadena a comienzos de la década de los noventa con la citación a la Asamblea Nacional Constituyente en la que las organizaciones de comunidades negras buscan la titulación de territorios negros. Son también muy activas en el proceso post constituyente de formulación de la Ley 70 o ley de negritudes con el objetivo de lograr la titulación de territorios negros en los municipios de mayor población afrodescendiente del norte del Cauca.

Como es suficientemente conocido, la aprobación de la Ley 70 de 1993, desencadena un intenso proceso de titulación de territorios colectivos de comunidades negras, pero circunscrito a la región de la Costa Pacífica. Esto en parte porque la misma Ley, en el Artículo 1º dice: “La presente ley tiene por objeto reconocer a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva, de conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes”.

Sin embargo, la misma Ley abre la posibilidad de titulación de territorios colectivos por fuera de la Costa Pacífica ya que el artículo 1º dice: “De acuerdo con lo previsto en el párrafo 1º del artículo transitorio 55 de la Constitución Política, esta ley se aplicará también en las zonas baldías, rurales y ribereñas que han venido siendo ocupadas por comunidades negras que tengan prácticas tradicionales de producción en otras zonas del país y cumplan con los requisitos establecidos en esta ley”. Aunque el Estado sólo ha reconocido territorios colectivos en la Costa Pacífica, este artículo ha sido una de las motivaciones más importante de las comunidades negras del norte del Cauca para exigir el derecho a territorios colectivos. De otra parte, La Ley 70 en su artículo 5º estipula que: “Para recibir en propiedad colectiva las tierras adjudicables, cada comunidad formará un Consejo Comunitario como forma de administración interna, cuyos requisitos determinará el reglamento que expida el Gobierno Nacional”.

En parte como una extensión del proceso de titulación de territorios colectivos de la Costa Pacífica colombiana y como resultado de la conformación de un entramado de organizaciones y de liderazgos negros que se adscriben al Proceso de Comunidades Negras, en la región del norte del Cauca se despliega un proceso de lucha por la titulación de territorios colectivos⁸. Estas organizaciones definen el territorio como “el espacio donde se vive la cultura, se ejerce la autonomía y se recrean los aspectos

⁷ Para el concepto de comunidad imaginada ver Anderson (1993).

⁸ Precisamente, el nombre de Proceso de Comunidades Negras es adoptado por más de 100 organizaciones de afrocolombianos en la Tercera Asamblea Nacional de dichas organizaciones que se lleva a cabo en el año 1993 en el municipio de Puerto Tejada, norte del Cauca.

esenciales para la vida, el aire, el agua y el alimento del cuerpo y el espíritu desde tiempo ancestrales. El lugar donde están nuestros ombligos y nuestros muertos, donde soñamos, reímos, dormimos, despertamos y bailamos”. Los núcleos más activos de esta lucha se concentran en los municipios de Caldoño, Buenos Aires y Jamundí.

En el municipio de Caloto, comunidades negras e indígenas paeces, mediante una alianza inter étnica, a mediados de la década de los ochenta invaden la hacienda El Pílamo. Después de fuertes negociaciones con el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA), actual INCODER, en el año 1992, los negros adquieren título de propiedad sobre 950 hectáreas y los indígenas sobre 1.100 hectáreas (Urrea y Hurtado, 2004: 380).

En los municipios de Buenos Aires y Suárez, desde el año 1992, después de procesos de desplazamientos y de los impactos negativos que tiene la construcción de la Hidroeléctrica La Salvajina sobre campesinos y mineros negros, las hoy comunidades negras llevan a cabo un proyecto colectivo en los que sus participantes buscan constituirse como territorios colectivos de comunidades negras a semejanza de los territorios étnico negros de la Costa Pacífica (Moore, 2007). Estas comunidades definen los objetivos de su proyecto en los siguientes términos:

- Fortalecer la autonomía de las comunidades afrocaucanas de Buenos Aires y del norte del departamento.
- Conservar su identidad cultural y preservar las prácticas ancestrales de producción.
- Construir desde una visión propia, modelos de desarrollo enfocados en sus formas de gobierno, fortaleciendo el ejercicio de la gobernabilidad local en sus comunidades.
- Consolidar el proceso de resistencia civil para que las comunidades sobrevivan a la guerra que existe en el territorio (Organización comunitaria Brisas del Río Agua Blanca, 2006).

Una situación similar acontece con comunidades negras del municipio de Jamundí que expresan sus objetivos territoriales y ambientales en el siguiente manifiesto público:

MANDATO REGIONAL DE LAS OMUNIDADES AFRODESCENDIENTES DEL NORTE DEL CAUCA Y SUR DEL VALLE

“Las comunidades de los territorios afrodescendientes de la zona sur del municipio de Jamundí, comunidad en general y las del norte del departamento del Cauca, con base en la autonomía y la libre autodeterminación que tenemos las minorías étnicas en Colombia y con el objetivo de defender derechos constitucionales, fundamentados en los Derechos Humanos fundamentales: como el Derechos a la vida; lo consagrado en el Convenio 169 de la OIT (ONU), La Agenda 21, la Declaración de Río de Janeiro de 1992 sobre medio ambiente y desarrollo; en su Art. I de los Principios Generales Ambientales; la biodiversidad del País, por ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible. Las políticas de población tendrán en cuenta el derecho de los seres humanos a una vida saludable y productiva en Armonía con la naturaleza. Principio V: en la utilización de los recursos hídricos, el consumo humano tendrá prioridad sobre cualquier otro uso; Principio VIII: El paisaje por ser patrimonio común será protegido. Cap. 5. de sus objetivos: Mejor comprensión de la relación que existe entre la relación demográfica, la tecnología, el comportamiento cultural, los recursos naturales y los sistemas sustentadores de la vida.

El territorio es el espacio donde se vive la cultura, se ejerce la autonomía y se recrean los aspectos esenciales para la vida, el aire, el agua y el alimento del cuerpo y el espíritu desde tiempos ancestrales: el lugar donde están nuestros ombligos y nuestros muertos, donde soñamos, reímos, dormimos y despertamos, bailamos y cantamos y día a día contamos historias y hacemos ceremonias de adoración a nuestros dioses. En la zona Etnoeducadora Saludable Productora luchamos por al defensa de nuestro territorio, que es escaso para satisfacer las necesidades presentes y futuras de nuestras comunidades.

EN VISTA DE ELLO ORDENAMOS:

A las comunidades luchar por la defensa de nuestro patrimonio cultural y ancestral, “El Territorio”...

A la administración municipal en cabeza de su ejecutivo, respetar la autonomía de nuestras comunidades.

a la honorable corporación Edilicia, asumir el compromiso de defensa del territorio y sus habitantes en cuanto a las determinaciones que puedan afectarla.

Al señor gobernador y equipo de colaboradores, manifestar su vocación de lucha a favor de los derechos colectivos, del ambiente y el territorio.

Al Estado que impulse los planes de manejo y de ordenamiento del territorio acordes con las normas contempladas en el PBOT y características culturales de sus comunidades y su participación real en los mismos

Se reconozca, Valore y respete el trabajo desarrollado por las diferentes organizaciones de base del territorio en la conservación del entorno.

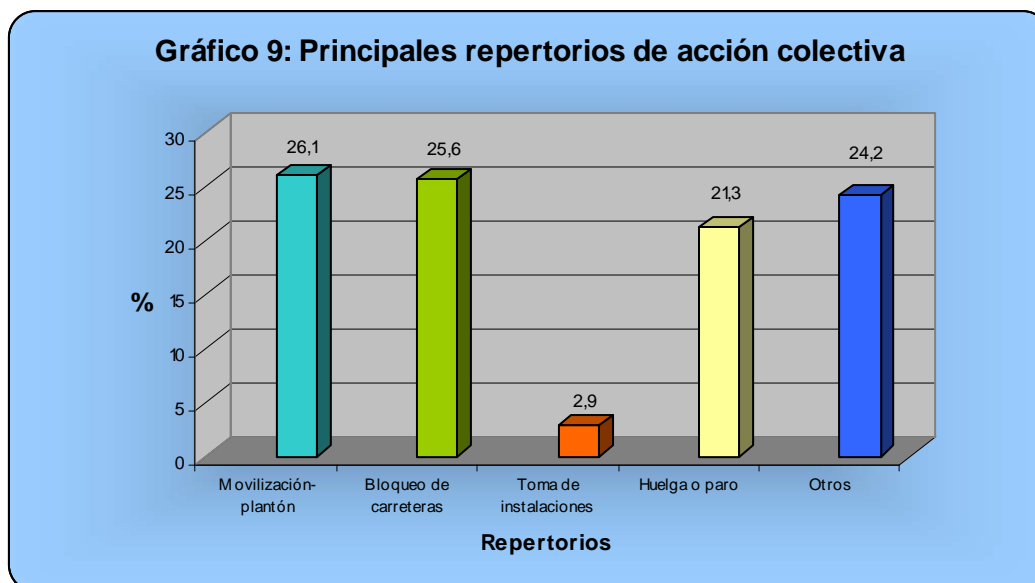
A todas las comunidades: Afrodescendientes, indígenas y mestizas de Colombia, su solidaridad, compromiso y espíritu de lucha en defensa del territorio y trabajo mancomunado en la ejecución de nuestros proyectos de vida, que nos permitan reivindicarnos como grupos étnicos grandes y fuertes en medio de la diferencia, con el respeto por el otro.

Respetar a las organizaciones propias afrocolombianas y acatar sus decisiones tomadas al interior de estas... (Espitia, 2009).

Sin embargo, el Estado con el argumento de que la titulación colectiva para comunidades negras sólo es posible en la región de la Costa Pacífica ha negado las demandas de titulación colectiva. Esta lucha por la titulación de territorios y por la demanda de autogobierno argumentando que se pertenece a un grupo étnico, es la expresión de la emergencia de las nuevas etnicidades en Colombia y de la estructuración de nuevos sujetos étnicos que instrumentalizan la diferencia en la contienda política. Estas luchas, pequeñas y localizadas, son también las expresiones particulares de la lucha más general que ha desplegado el Proceso de Comunidades Negras en Colombia.

2.4 Los repertorios de la acción

El gráfico 9 muestra los principales repertorios de acción a los que acuden los afrocolombianos de nuestra región de estudio cuando despliega acciones colectivas. Se destaca que esta población, organizada a veces como actor social, usa fundamentalmente la movilización y el bloqueo de carreteras para protestar. ¿Por qué estos actores usan básicamente tales repertorios de acción? Existen razones estratégicas, es de decir, de análisis de costos y beneficios, y de poder para priorizar estos repertorios.



Fuente: Cálculos propios con base en la base de datos CINEP

Las poblaciones afrocolombianas privilegian la movilización o el plantón como repertorio de acción porque tal vez es el único recurso de poder, no violento, con el que cuentan, cuyo uso produce, por regla general, beneficios políticos en la contienda. Si actores más poderosos disponen de otros recursos de poder porque, por ejemplo, tienen acceso a los espacios en los que se decide la política regional y nacional y se distribuyen los recursos económicos, estas comunidades, en la práctica, sólo cuentan con la movilización como el recurso más expedito para que sus demandas sean escuchadas.

Además de la movilización, el bloqueo de carreteras es tal vez el instrumento más poderoso con el que cuentan estas comunidades para que sus demandas tengan solución y sean escuchadas por el Estado y por la sociedad nacional. La predilección por este tipo de repertorio está asociada con varios factores que son estratégicos en tanto implican un análisis de lo costoso que tiene para la acción colectiva un tipo de repertorio que fácilmente es reprimido por la Fuerza Pública y que tiene tenues líneas divisorias con la protesta no institucional, es decir, con aquella que no es aceptada por el Estado y que contiene algún grado de violencia⁹. En primer lugar, la región de estudio, ante todo, los municipios del norte del Cauca y del sur del Valle, tienen como principal arteria de comunicación la carretera panamericana. Esta es la vía nacional más

⁹ En la actualidad hay una fuerte discusión en América Latina sobre la clasificación de las acciones colectivas como cívicas, y no cívicas, civilizadas y no civilizadas, institucionales y no institucionales, de buenas maneras y de malas maneras (Ver Álvarez, 2008). El primer polo de esta dicotomía se refiere a medios de lucha que son aceptados socialmente y el segundo a los no aceptados, decir, que se consideran ilegítimos. Offe (1985) en su propuesta del tipo de acción colectiva que debe ser tomada en cuenta en el análisis de los movimientos sociales, surge que aunque las acciones colectivas son “no-institucionales”, los movimientos sociales desarrollan medios de lucha aceptados socialmente, es decir, no delinenciales. El problema con estas dicotomías es que introducen toda la problemática de las clases peligrosas y la clasificación de acciones colectivas civilizadas y no civilizadas tiene toda la carga ideológica de lo civilizado y lo bárbaro que refiere de inmediato a las relaciones coloniales que consideraban a lo europeo como lo civilizado y lo indígena y negro lo no civilizado o bárbaro. Otro problema de la dicotomía es lo que McAdam, Tarrow y Tilly plantean: “Es difícil trazar con precisión las fronteras entre la política institucionalizada y la no institucionalizada. Y, aún más importante, ambos tipos de política interactúan incesantemente e implican procesos causales similares. Las coaliciones, interacción estratégica y las luchas identitarias están ampliamente presente en la política de las instituciones establecidas, tanto como en las interrupciones que suponen las rebeliones, las huelgas y los movimientos sociales” (McAdam, Tarrow, Tilly, 2005: 7). Un análisis del uso del terrorismo por parte de movimientos sociales puede verse en Evans (1983) y en Tilly (2004).

importante del sur de Colombia porque comunica el centro con el sur del país y porque por ella se transporta buena parte de las mercancías del intercambio comercial con el Ecuador, el tercer socio comercial de Colombia. Por lo tanto, el taponamiento o bloqueo de esta arteria, así sea por algunas horas, tiene costos económicos altos y genera caos vial por su alto grado de uso. En segundo lugar, con el bloqueo de las vías sucede algo similar a lo que acontece con el plantón, ante la carencia de otros recursos de poder, el bloqueo es expedito y aunque puede ser, fácilmente, reprimido por la Fuerza Pública, su impacto y rentabilidad política son altos.

El bloqueo de las vías como uno de los principales repertorios de la protesta de la gente negra no es algo exclusivo de la acción colectiva en la región de estudio. Como lo ha mostrado el seguimiento permanente que el Observatorio Social América Latina, (OSAL) hace de la protesta y de los movimientos sociales en el subcontinente, el bloqueo de vías es el principal repertorio que usa el movimiento indígenas en América Latina. Mediante el taponamiento de las vías, el movimiento indígena de Bolivia y Ecuador ha logrado, literalmente, en varias oportunidades, paralizar estos países y negociar sus demandas ante el Estado central (OSAL, N° 18; Castillo, 2006a)¹⁰.

El bloqueo de vías como uno de los repertorios de acción que produce mayores impactos económicos y políticos ha sido tan fuerte que en el Perú, mediante la distorsión de algunas figuras legales, se permite penalizar el bloqueo de carreteras hasta con 25 años de cárcel, una pena mayor a la que se establece por asesinato o violación (Hoetmer, 2008: 15). Una serie de organizaciones, que incluye a la Asociación Pro Derechos Humanos, la Confederación General de Trabajadores del Perú y la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería del Perú (Conacami), han demandado, ante el Tribunal Constitucional, por inconstitucional los decretos que permiten dichas penalizaciones (Hoetmer, 2008:15).

El bloqueo de carreteras aunque puede generar los beneficios más altos en tanto hay generalmente una respuesta rápida de las autoridades oficiales a las demandas de los actores sociales, es también el más costoso para la acción colectiva. Para analizar los costos en términos de heridos, detenidos, muertos y enfrentamientos con la Fuerza Pública hemos construido lo que llamamos el “desencadenamiento” del repertorio. Al procesar la información se encuentra que sólo 60 acciones colectivas, de nuestro micro-universo de 221, tenían información que nos permitía inferir cómo se había desencadenado la acción colectiva. Esta es una de las desventajas de investigar la acción colectiva con la información de prensa, como anotamos antes. Ello sugiere que la prensa, en buena parte de los casos, no le hace seguimiento a la acción colectiva o que en el cubrimiento de la noticia se omite información.

¹⁰ Por ejemplo, en Ecuador, durante el mes de marzo de 2006, cuando entraba en su fase final la negociación del TLC, los indígenas, liderados por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), exigen que se detenga la negociación del Tratado y proponen una consulta popular que decida sobre éste. Las movilizaciones se llevan a cabo durante dos semanas, los indígenas bloquean las carreteras, se enfrentan con la Fuerza Pública, logran paralizar 5 de las 22 provincias y llegan hasta Quito. Ante la fuerza de la protesta, el Gobierno abre las puertas para la realización de un plebiscito. Los indígenas se oponen al Tratado porque consideran que con éste se entregaría el control de los recursos naturales a los Estados Unidos y se incrementaría la importación de productos agroalimentarios que destruirían la producción agropecuaria indígenas y la de pequeños y medianos productores que abastecen en la actualidad el mercado interno (Castillo, 2006a).

Sin embargo, con las anteriores deficiencias, la tabla 2 es muy ilustrativa en tanto muestra que de los diferentes repertorios de acción, movilización, bloqueo de carreteras, tomas de instalaciones, huelga, entre otros, es el bloqueo de carreteras el que termina mayoritariamente en enfrentamiento y es el que genera mayores heridos, detenidos y muertos como resultado de estos enfrentamientos con la Fuerza Pública. Es en este repertorio, en que la acción colectiva conflictiva, cuando se desencadena en enfrentamientos, en el que los contendientes hacen uso de la violencia. Ahora, en los dos casos en los que el enfrentamiento concluye con muertos, es claro el uso desmedido de la fuerza por parte de las autoridades.

Tabla 2: Desencadenamiento de los repertorios de acción						
Repertorios de acción	Desencadenamiento					
	Enfrentamiento con la Fuerza Pública	Detenidos	Muertos	Enfrentamiento, detenidos, heridos, muertos	Otro	Total
Movilización	3				11	14
Bloqueo de carreteras	8	1		2	10	21
Toma de instalaciones					1	1
Huelga			1		8	9
Otros		1			14	15
Total	11	2	1	2	44	60

Fuente: cálculos propios a partir de la base de datos de prensa de CINEP

La huelga o el paro sigue siendo uno de los repertorios de acción más utilizados. En nuestro microuniverso de estudio, representa el 21,3%. Marc Bloch dice que hay una estrecha relación entre acción social y estructura social. Es a raíz de esta relación que un repertorio de acción como la huelga se le ha identificado con la sociedad industrial y con la gran empresa capitalista. Por ello la huelga ha sido el típico repertorio utilizado por la clase obrera. Sin embargo, dicho repertorio se ha ido extendiendo de la esfera de la producción industrial (la huelga es la parálisis del proceso de producción) a otras actividades no productivas de tal forma que se configura el paro de actividades sean éstas productivas o no. Es en esta acepción que en esta investigación se emplea esta categoría. En efecto, en nuestra región de estudio, la huelga o el paro es utilizado por los maestros, por los estudiantes, por los pequeños productores rurales negros, por los empleados oficiales, por los comerciantes y por pequeños transportadores, entre otros actores sociales. También entra aquí el paro cívico que es empleado por la alianza de diferentes actores sociales para presionar por los servicios públicos o para exigir que uno u otro gobierno cumpla los acuerdos firmados en algún momento para desactivar una propuesta social.

Al igual que en las motivaciones, en los repertorios de acción, en la categoría otro, se agrupa una variedad de formas bajo las cuales la gente negra desarrolla las acciones colectivas y la protesta. En la tabla 3 se pueden apreciar esos “otros repertorios”. Sobresalen el cabildo abierto, la desobediencia civil, los encuentros culturales, la denuncia ante las autoridades nacionales y organismos internacionales de diverso orden, la tutela, los memoriales de agravios, las declaraciones públicas, los actos simbólicos, entre otros. Estos repertorios pueden ser clasificados como institucionales ya que

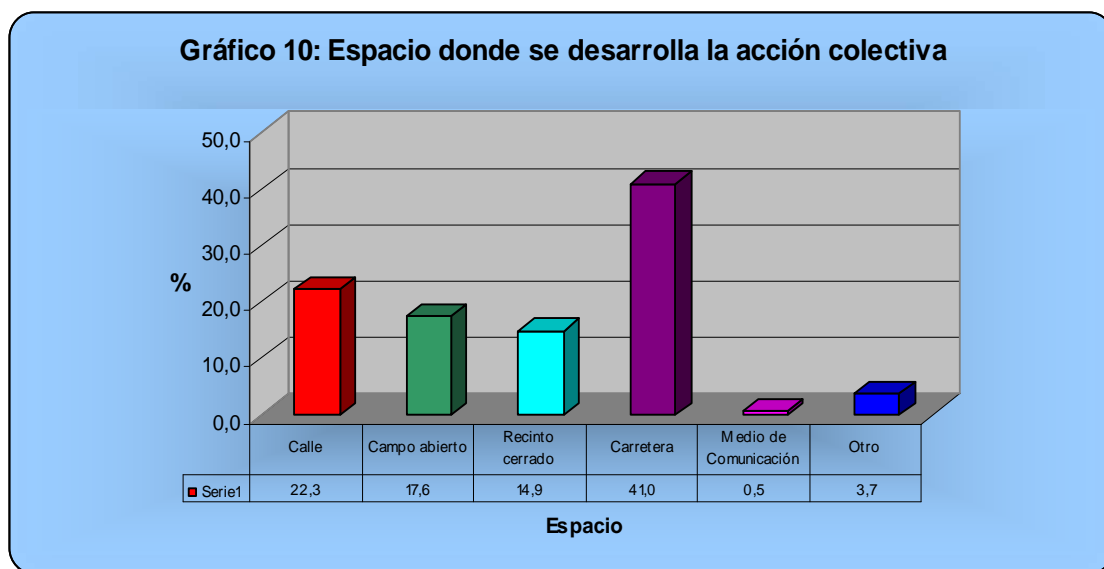
poseen legitimidad social como es el caso de la tutela y la denuncia nacional e internacional. Esta diversidad de repertorios da cuenta de lo imaginativo y recursivo que resultan los actores sociales a la hora de desplegar la acción colectiva.

Tabla 3: Otros repertorios de acción	
Cabildo Abierto	Asambleas
Desobediencia civil	Memoriales de agravios
Denuncia ante organismo internacionales como la Organización	Actos simbólicos, por ejemplo, bloqueo contra las
Denuncia ante organismos nacionales	Denuncias públicas ante los medios de información

Fuente: cálculos propios a partir de la base de datos de prensa de CINEP

2.5 Espacio donde se desarrolla la acción colectiva

El espacio o escenario donde se desarrolla la acción colectiva es también un indicador significativo de su fenomenología. El gráfico 10 evidencia que en la región de estudio, la acción colectiva es ante todo pública en el sentido que se lleva a cabo en las calles, en los espacios abiertos como las plazas y parques y en las carreteras. En estrecha relación con los repertorios, son las carreteras los espacios donde se despliega mayoritariamente la acción. Los recintos cerrados como instalaciones oficiales, escuelas, colegios, auditorios, coliseos, entre otros, son menos significativos. Menos importantes son las instalaciones de los medios de comunicación. Aunque estos espacios son cuantitativamente menos relevantes, cualitativamente son muy significativos por el impacto que regularmente tiene la difusión de noticias y comunicaciones.



Fuente: Cálculos propios con base en la base de datos CINEP

2.6 ¿Qué tan masiva es la acción colectiva?

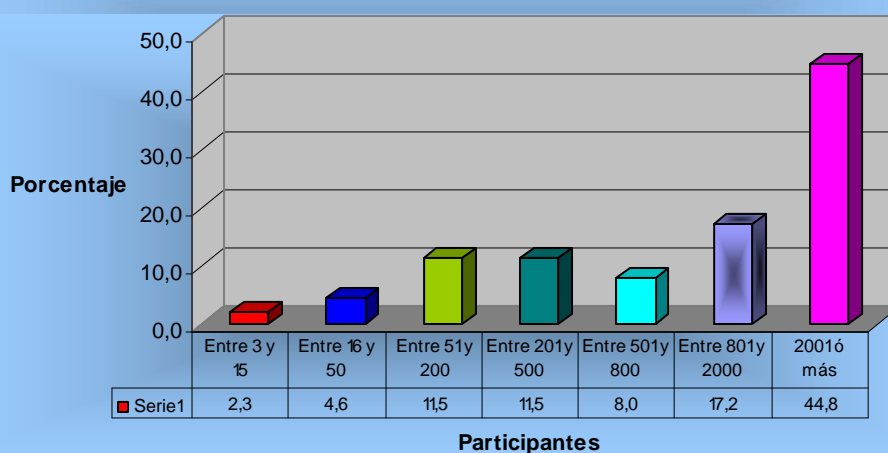
Uno de los grandes desafíos de los dirigentes de la acción colectiva es lograr la movilización del mayor número de personas. Este número es un indicador de la

capacidad de movilización de las organizaciones que regularmente organizan la acción, de qué tanto las motivaciones tienen raíces en la población y qué tanto responden a “necesidades sentidas de la gente” y ante todo, de que entre mayor sea el número de los que toman parte en la acción colectivas, bajo sus diferentes repertorios (movilización, plantón, toma de carreteras, concentración en plazas públicas, entre otras) más grande es la legitimidad de la protesta y de la demanda de los manifestantes. Es lo que algunos autores denominan “el poder de las masas”. La legitimidad que se le otorga a las grandes movilizaciones y concentraciones de la población, siempre y cuando se utilicen repertorios de acción que son calificados como institucionales por el poder del Estado, como se mencionó antes, parte de la teoría de la soberanía popular, es decir, del principio de que el poder legítimo radica en el pueblo. Fueron las grandes movilizaciones las que dieron al traste con el régimen político de la antigua Unión Soviética (Huntington, 1991); fueron las grandes movilizaciones en Manila, de millones de personas, durante cuatro días consecutivos, de enero de 2001, las que depusieron al presidente de Filipinas Joseph Estada, el derrotado (Tilly, 2005:12)¹¹; quince años atrás, fueron también las grandes movilizaciones en Manila las que derrocaron a Ferdinand Marcos, fueron las grandes movilizaciones de la Revolución Naranja en contra del fraude electoral en Ucrania las que llevaron a la Presidencia al líder opositor Yuliya Tymoshenko; fueron las grandes protestas callejeras del 10 de mayo de 1957 las que contribuyeron a la caída del dictador Rojas Pinilla en Colombia.

Bien, para analizar qué tan masivas son las acciones colectivas que desarrolla la población afrocolombiana en la región de estudio, clasificamos el número de participante entre 3 y 15, 16 y 50, 51 y 200, 2001 y 500, 501 y 800 y 801 y 2000 y más de 2001. Como en buena parte de las clasificaciones, hay algo de arbitrario en estos rangos, salvo que la definición operacional de acción colectiva en la investigación dice que ésta implica a más de tres personas. Han podido ser otros rangos ya que lo que se pretende determinar es qué tan nutridas son las acciones colectivas en la región de estudio y en el periodo estudiado. Arbitrarios o no, los rangos permiten concluir, como se puede observar en el gráfico 11, que cerca del 50% de las acciones colectivas analizadas son masivas ya que involucran a más de 2001 personas. De la misma manera, las acciones colectivas en las que toman parte entre 801 y 2000 participantes representan el 17, 2% del total de acciones, una proporción también significativa. Por el contrario, el porcentaje de acciones en las que el número de personas está entre 3 y 15, es poco significativo. Esta amplia participación de la gente negra en las acciones colectivas que se despliegan por la obtención de diferentes objetivos, parece estar asociada, y es a la vez un indicador, de una larga tradición de movilización y organización de la gente negra en el norte del Cauca y en el sur del Valle.

¹¹ Al respecto, Tilly comenta que en el momento de las grandes movilizaciones en Manila que deponen al presidente Joseph Estrada, el Fiscal Oscar Moreno declaró “El Foro está ahora en las calles, no en los pasillos del Senado. Está en el terreno de la opinión pública y estoy seguro de que los filipinos estarán a la altura de las circunstancias” (Tilly, 2005: 12).

Gráfico 11: Número de participantes en la acción colectiva



Fuente: Cálculos propios con base en la base de datos CINEP

Si la participación en la mayoría de las acciones colectivas de la gente negra en la región de estudio puede ser calificada como significativa, o, si que quiere, masiva, surge, entonces, el interrogante por el lugar o el espacio en el que se despliega dicha acción. Como era de esperarse, al cruzar el número de participantes en la acción con el lugar en el cual ésta se despliega, se muestra, como se aprecia en la tabla 4, que son las carreteras el espacio privilegiado para la protesta masiva de la gente negra.

Tabla 4: Espacio donde se desarrolla la acción y número de participantes

NÚMERO DE PARTICIPANTES	ESPACIO DONDE SE DESARROLLA LA ACCIÓN COLECTIVA					Total
	Calle	Campo abierto	Recinto cerrado	Carretera	Otro	
Entre 6 y 15			1	1		2
Entre 16 y 50	1	1		2		4
Entre 51 y 200	1	2	2	1	4	10
Entre 201 y 500	1	2	4	2		9
Entre 501 y 800	3	1	1	2		7
Entre 801 y 2000	3	1	1	7	1	13
2001 o más	10	7	3	16		36
Total	19	14	12	31	5	81

Fuente: Cálculos propios con base en la base de datos CINEP

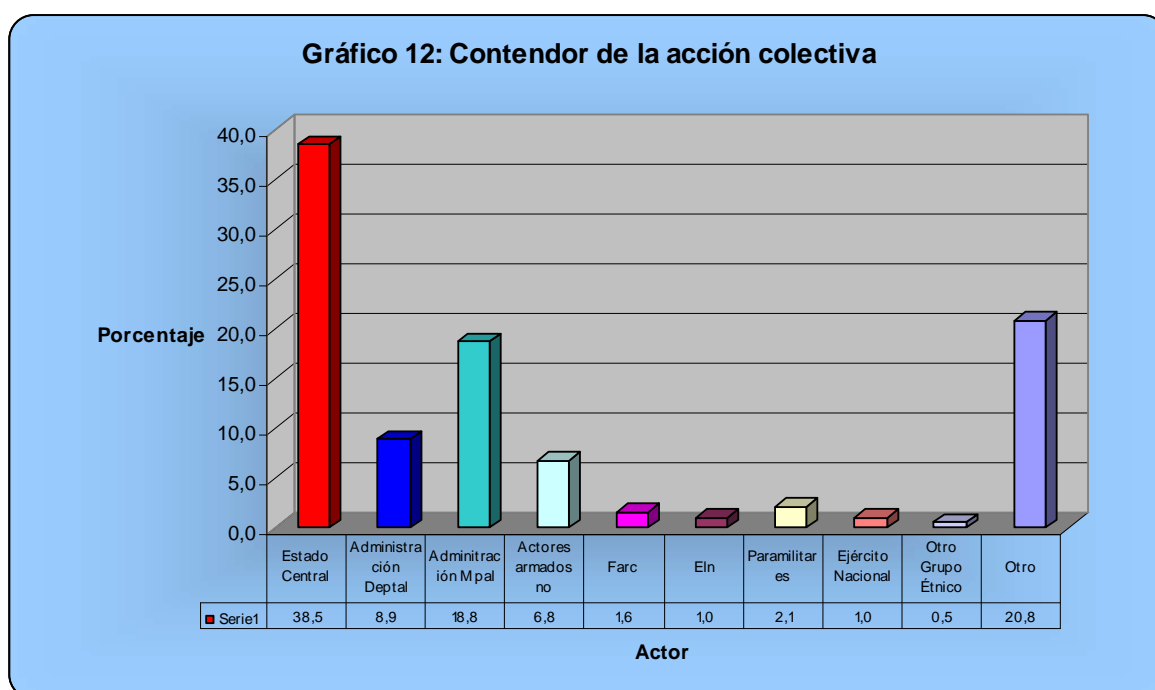
Ahora, al preguntarnos por cuál es la motivación de la acción colectiva que más moviliza a los participantes, se destaca que es la protesta en contra de las políticas generales del Estado la que logra la mayor la participación, de tal forma que dicha acción colectiva se convierte en una protesta también masiva, tal como se aprecia en la tabla 5.

Tabla 5: Número de participantes en la motivación de la acción colectiva

MOTIVACIÓN DE LA ACCIÓN COLECTIVA							
NÚMERO DE PARTICIPANTES	Acceso a la tierra	Defensa del territorio	Servicios públicos	Políticas generales de estado	Violación de los DDHH	Condiciones laborales (salario)	Total
Entre 6 Y 15				2			2
Entre 16 y 50		1		2			3
Entre 51 y 200				4		6	10
Entre 201 y 500	2	2		1	1	4	10
Entre 501 y 800	1			5		1	7
Entre 801 y 2000				9	1	5	15
2001 o más		3	1	19	2	14	39
Total	3	6	1	42	4	30	86

Fuente: Cálculos propios con base en la base de datos CINEP

2.7 Los contendores de la acción colectiva



Fuente: Cálculos propios con base en la base de datos CINEP

Hasta el momento se han descrito variables centrales de la fenomenología de las acciones colectivas de la gente negra en la región de estudio: comportamiento en el tiempo, motivación, espacio, número de participantes, entre otras. Para proseguir en el análisis es importante preguntarnos por los contendores. El gráfico 12 da una respuesta a este interrogante. Lo primero que se destaca es que, como habíamos avanzando, el principal contendor de las protestas de la gente negra es el Estado. Éste es diferenciado entre central, departamental y municipal. La suma de estos tres contendores representa de lejos la proporción más importantes en la distribución de contendores ya que es el 66,2%. Pero lo que llama poderosamente la atención es que después del Estado, las acciones colectivas se despliegan en contra de los actores armados, tanto actores armados no identificados¹² como Farc, Eln y paramilitares.

¹² En este caso aparece actor armado no identificado porque la noticia no permite deducir de que actor se trata.

Lo anterior permite aseverar que en términos gruesos las acciones colectivas de la gente negra en el norte del Cauca y en el sur del Valle se orientan a enfrentar al Estado al que se le demanda, como se vio antes, soluciones asociadas con la condición de pobreza de la población, y a enfrentar a los poderes armados no legítimos, es decir, guerrillas y paramilitares. Como se verá más adelante, este enfrentamiento contra poderes armados no legítimos adquiere la forma de resistencias pacíficas contra la guerra y contra los efectos nefastos del conflicto internos que se traducen en desplazamiento y muerte de la gente negra.

El enfrentamiento contra actores privados como la empresa agraria capitalista y en general las elites económicas está contemplado en la opción otro, que es importante ya que representa cerca del 21% de los contendores. Esta información parece ser indicativa de una transformación que se estaría produciendo en el carácter de las luchas en la región de estudio. De una situación de resistencia a la descomposición campesina, en la que el contendor es la empresa agraria, como uno de los factores que origina la proletarianización, se estaría transitando a una resistencia contra los actores armados. La misma situación se estaría presentando en el municipio de Buenaventura donde tiene más importancia la resistencia contra los paramilitares y los guerrilleros que el “enfrentamiento” en contra del “capital” y las elites económicas representados en los llamados macroproyectos contra los cuales las comunidades fueron muy activas recientemente, aunque esto continúa siendo muy importante.

Finalmente, llama la atención la presencia de otro grupo étnico como contendor. Esto es indicativo del enfrentamiento entre comunidades negras y comunidades indígenas sobre todo en relación con la posesión de tierras.

2.8 Motivación y contendor en el despliegue de la Acción Colectiva

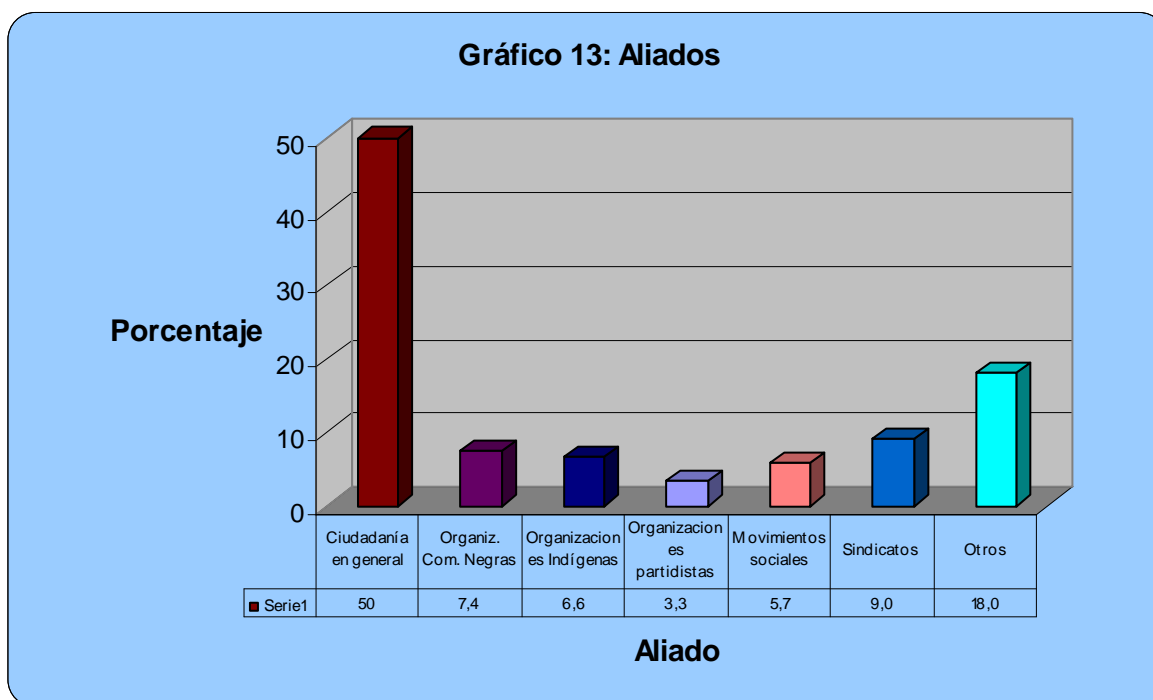
Tabla 6: Motivaciones y Contendor en el despliegue de la Acción Colectiva											
Motivación	Contendor										
	Estado	Adm.. Dept.	Adm. Mpal	Act. Armad.	Farc	Eln	Paramilitares	Ejército	Grup. Étnic	Otro	Total
Acceso a la tierra	1		1						1		3
Defensa del territorio	1	1	1	4	1	1	1	1		1	12
Servicios públicos	1		7							4	12
Políticas estatales	45	12	17	4	2	1	1			20	102
Violación DDHH	5			2			2	1			10
Condiciones labor.	20	4	10							13	47
Otro	1			3						1	5
Total	74	17	36	13	3	2	4	2	1	39	191

Fuente: procesamiento propio con base en base de datos CINEP

Lo anterior es más explícito cuando se realiza el cruce entre la motivación y el contendor en el despliegue de la acción colectiva. En efecto, como lo muestra la tabla 6, para 191 casos válidos, de un total de 221, la acción colectiva enfrenta al Estado por sus políticas generales y por el acceso a servicios públicos, como se mostró antes en extenso, y se enfrenta a los actores armados, a las Farc, al Eln y a los paramilitares para defender el territorio y en contra de la violación de los Derechos Humanos. En la movilización para mejorar las condiciones laborales el contendor principal sigue siendo el Estado bien sea central, departamental o municipal.

2.9 Los aliados más importantes en el despliegue de la acción colectiva

En la contienda política, las alianzas con otros actores sociales son fundamentales para el logro de los objetivos de la acción. A través de las alianzas y los apoyos de otros actores sociales, el actor controla de manera indirecta recursos con lo que se fortalece en una lógica de costos y beneficios, de movilización de recursos y de logros y de identificación con otros sujetos sociales con los cuales puede haber identidad étnica o racial, como parece es el caso en la región de estudio.

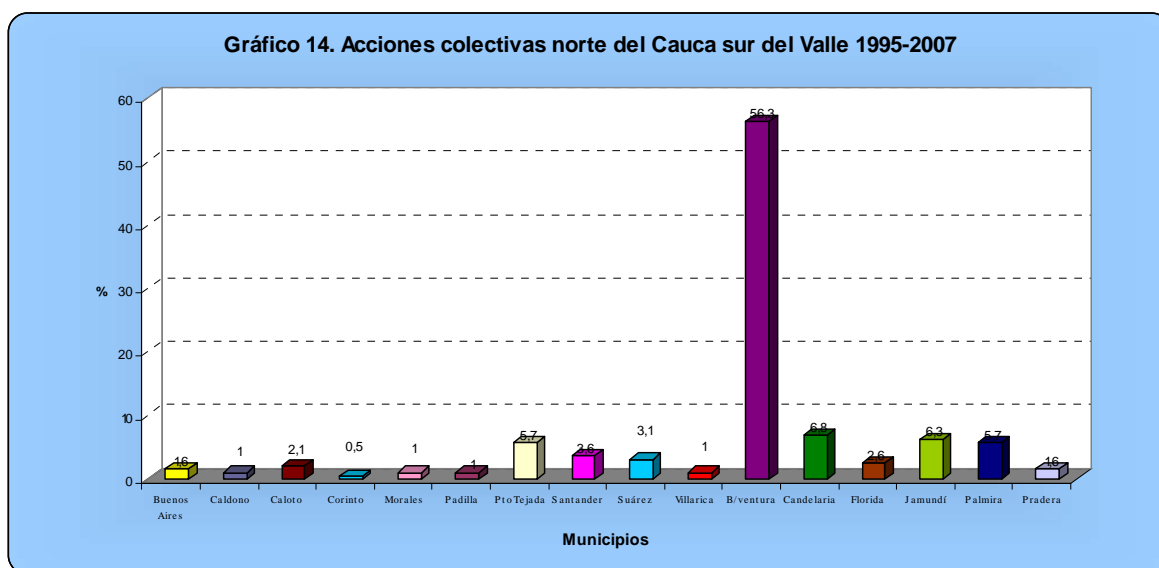


Fuente: Cálculos propios con base en la base de datos CINEP

El gráfico 13 muestra que el aliado fundamental de las acciones colectivas de la gente negra en la región de estudio es la “ciudadanía en general”. Sin embargo, como es de conocimiento amplio, esta categoría es difusa y genérica y se refiere en nuestro estudio al apoyo que reciben las marchas, las movilizaciones y las protestas por parte de la gente sin introducir una diferenciación material, ideológica o política. Las noticias lo que indican es que cuando se realizan las marchas, a lo largo del recorrido, la gente saca pañuelos blancos para expresar su solidaridad y apoyo a la acción colectiva. Es el caso típico de las movilizaciones en contra de la guerra, de la violencia y por la defensa del territorio que durante el año 2007 se llevan a cabo en Buenaventura después de atentados que arrojan un número considerable de muertos, pero también los bloqueos para oponerse al cobro de peajes, por ejemplo.

En segundo lugar, aparecen como aliados actores con los cuales puede haber identificaciones étnicas, raciales o políticas. Desde una interpretación marxista se diría sectores con los cuales hay intereses comunes de clase. Se destacan, entonces, las organizaciones de comunidades negras, las organizaciones indígenas, los sindicatos, los movimientos sociales y organizaciones partidistas.

2.10 La acción colectiva negra en los municipios de la región de estudio



Fuente: Cálculos propios con base en la base de datos CINEP

A esta altura de la descripción de las acciones colectivas de la gente negra en la región de estudio, es necesario preguntarse por la forma como se distribuyen las acciones en el conjunto de municipios que integran la región.

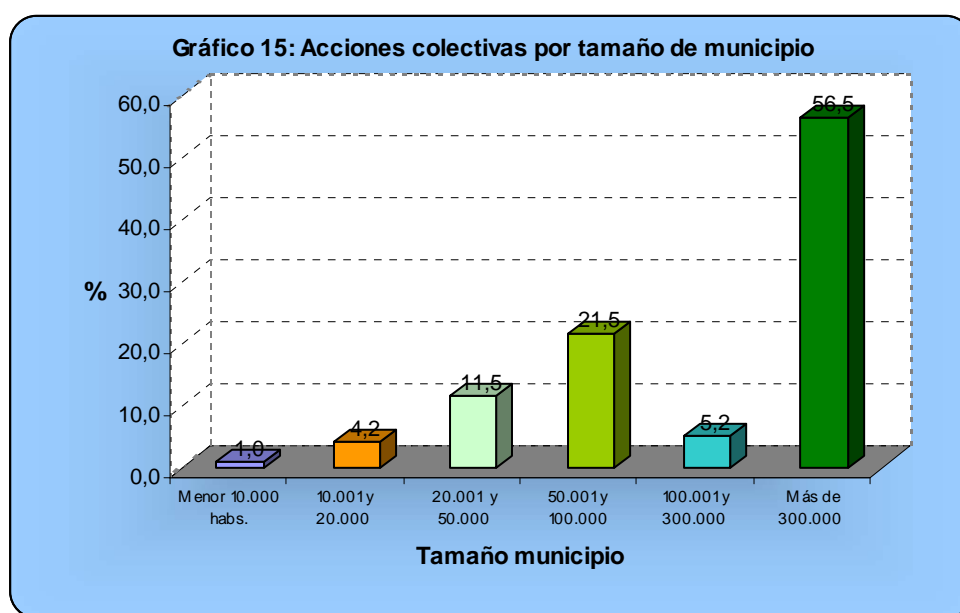
De nuestro universo compuesto por 221 acciones colectivas realizadas por la población afrodescendiente, la gran mayoría, el 56,3%, se desarrolla en Buenaventura. Le sigue, en orden de importancia, aunque con una distancia considerable, un conjunto de municipios integrado por Candelaria, Jamundí y Palmira que representa el 18% del total de las acciones. A continuación hay otro conjunto municipal que lo integra Santander, Puerto Tejada, Florida y Pradera cuyas acciones representan el 10,9% de las 221 acciones colectivas que hemos clasificado como negras. Finalmente, hay un grupo integrado por el resto de municipios en los que las acciones varían entre menos del 1% y el 2% del total, como se aprecia en el gráfico 14.

Sobresale, entonces, que Buenaventura concentra el mayor número de acciones colectivas. Aunque esta fenomenología está asociada, en términos sociológicos, con el tamaño del municipio, esta alta proporción de acciones colectivas son un indicador de la dramática situación por la que atraviesa esta localidad. En efecto, Buenaventura, por su localización estratégica, puerto sobre el Pacífico rodeado de canales, caños y esteros y con un ambiente de selva pluvial tropical espesa, entre otros factores, se ha convertido, desde comienzos del año 2000, en un sitio estratégico del conflicto armado y lugar en el cual se enfrentan a muerte paramilitares y guerrilleros por el control del territorio, de la gente negra y de las rutas del tráfico de drogas y armas. Este punto será tratado en detalle en el apartado correspondiente a la resistencia territorial de las comunidades negras en la que las acciones colectivas de esta comunidades tiene como principal antagonista, precisamente, a guerrilleros y paramilitares¹³.

¹³ Llama la atención la situación diferente en relación con el Censo de 1993, 12 años antes. La relación urbano/rural era del 49% versus 51%, es decir, que doce años después la migración rural-urbana en el Pacífico colombiano hay sido impresionante (Urrea, 2007: 17). Este cambio tan dramático está relacionado con el conflicto armado que ha convertido al Pacífico en epicentro de la guerra y ha generado una crisis de grandes proporciones en toda la región: des territorialización, muerte, desplazamiento interno y acentuación de la pobreza, como se verá más adelante.

El Censo de Población de 2005 muestra que este municipio tiene el mayor número de habitantes de la región de estudio. De un total regional de 1.245.224 pobladores, Buenaventura concentra el 26%, es decir, 324.207 personas, de las cuales el 88,5%, se autoidentifica como afrodescendiente en dicho censo.

En efecto, al asociar la acción colectiva con el tamaño del municipio, tal como se muestra en el gráfico 15, resulta que una alta proporción, el 55% de las acciones, se concentra en los municipios cuya población está por encima de los 300.000 habitantes. Sin embargo, hay dos factores que merecen ser destacados. En primer lugar, este comportamiento se rompe, extrañamente, en los municipios entre 100.000 y 300.000 habitantes. En segundo lugar, sin lugar a dudas, dicho comportamiento está afectado por el peso demográfico de Buenaventura.



Fuente: Cálculos propios con base en la base de datos del CINEP

Para conocer el grado de esta asociación entre el número de acciones colectivas y el tamaño del municipio, se realizó una prueba de contingencia. En efecto, tal como se aprecia en la tabla 7, con 192 casos válidos, el coeficiente de contingencia es de 0,91. En consecuencia, puede decirse que existe una estrecha asociación entre el tamaño del municipio y el número de acciones colectivas. La conclusión sociológica que se deriva de todo esto es que el patrón que parece seguir la acción colectiva de la población afrodescendiente en la región de estudio es que entre más grande es demográficamente el municipio mayor es el número de las acciones colectivas. Es indudable que este comportamiento está asociado con los cambios demográficos que ha sufrido la gente negra en Colombia en las últimas cinco décadas que ha pasado de ser una población fundamentalmente rural a una población mayoritariamente urbana. Pero esto se puede observar, con mayor claridad, en el carácter urbano y rural de la acción colectiva negra.

Tabla 7: contingencia: Resumen del procesamiento de los casos. Medidas simétricas

	Casos					
	Válidos		Perdidos		Total	
	N	Porcentaje	N	Porcentaje	N	Porcentaje
ACCIONES COLECTIVAS * TAMAÑO MUNICIPIO	192	86,9%	29	13,1%	221	100,0%

		Valor	Sig. aproximada
Nominal por nominal	Coefficiente de contingencia	0,910	
N de casos válidos		192	

a Asumiendo la hipótesis alternativa.

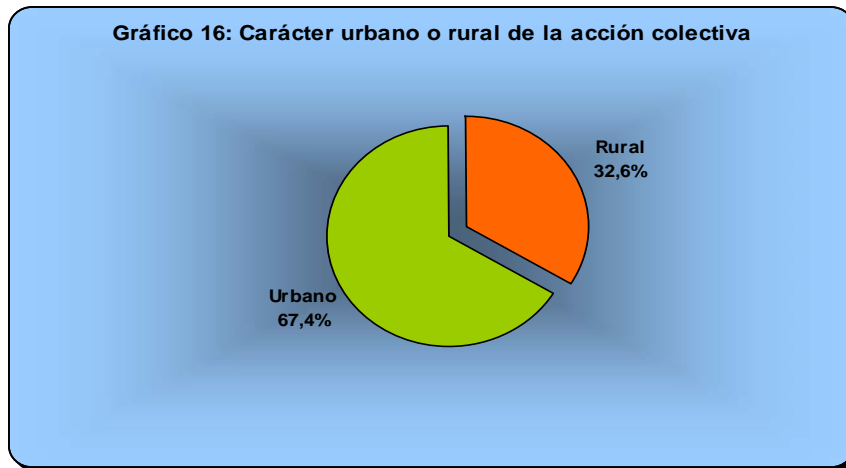
b Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.

2.11 El carácter urbano predominante de la protesta de la gente negra

En un extraordinario libro, *La historia rural francesa: caracteres originales*, el gran historiador de la sociedad feudal, Marc Bloch dice que hay una estrecha relación entre acción social y estructura social: “la lucha agraria parece ser tan inseparable del régimen señorial como la huelga lo es de la gran empresa capitalista”. Este principio se aplica, perfectamente, al carácter de las luchas en nuestra región de estudio. Pero, lo que parece aquí significativo es que ha comenzado a presentarse un tránsito de luchas propias de una sociedad rural, como son las luchas por la tierra y por el territorio a demandas que van adquiriendo dimensiones urbanas. Aunque lo urbano gana terreno, lo rural sigue siendo muy importante, sobre todo articulado a demandas étnicas como es la lucha por la defensa de lo que algunos actores (el Proceso de Comunidades Negras, PCN, por ejemplo) consideran territorios negros y la resistencia en contra de los actores armados, lo que constituye el nuevo carácter de demandas propiamente étnicas y rurales en la región de estudio.

En la región ha habido una larga tradición de luchas y resistencias rurales por parte de un campesinado negro, descendiente de esclavos. Diferentes estudios han registrado estas luchas y han enfatizado en la resistencia a la descomposición campesina ante el avance de la empresa agraria capitalista (Cabal, 1976; De Roux, 1991a; Taussig). Este campesinado, durante la segunda mitad del siglo XIX y parte del XX, puso en práctica repertorios de acción típicamente rurales, lo que se deriva de una sociedad agraria, casi señorial, como fue la que perduró durante siglos en nuestra región de análisis. Sin embargo, el intenso proceso de urbanización y metropolitización ha que ha estado sometido la región al menos desde la década de los setenta del siglo pasado ha impactado también en una creciente urbanización de las acciones colectivas.

En efecto, al preguntarnos por el carácter urbano o rural de las acciones colectivas de la gente negra, es abrumador su carácter urbano ya que el 67, 4% de ellas se despliegan en los cascos de los municipios. Una menor proporción, aunque nada despreciable, el 32,6% se lleva a cabo en el sector rural como muestra el gráfico 16.



Fuente: Cálculos propios con base en la base de datos del CINEP

El carácter predominantemente urbano de la acción colectiva negra en nuestra región de estudio se asocia también con el proceso acentuado de urbanización de la sociedad colombiana¹⁴. En efecto, como buena parte de los países de América Latina, el proceso de urbanización de la sociedad colombiana ha sido acelerado lo que también ha sucedido con las acciones colectivas. Por ejemplo, mientras en el año 1973, el 60% de la población colombiana se asentaba en los centros urbanos, para 1985 de 37.664.711 habitantes, el 69% ya vivía en las ciudades hasta ser el 85% de la población como se deriva del último censo de población de 2005.

Más específicamente, el carácter urbano de las acciones colectivas de la población afrodescendiente se asocia con su acelerado proceso de urbanización, lo que constituye uno de los cambios demográficos más dramáticos que ha sufrido este grupo poblacional en un tiempo relativamente corto. En efecto, el Censo de Población de 2005 muestra la alta urbanización de esta población. Esto se expresa en el hecho de que existe un patrón similar entre la distribución urbano/rural de esta población y la colombiana, 72,8% para la primera y 75,0% para la segunda. Este patrón se cumple en nuestra región de estudio e, incluso, en el andén Pacífico, que era, hasta hace poco, la principal concentración de población negra en Colombia. Hoy, la población afrocolombiana, como lo ha mostrado Urrea (2007a: 17), es predominantemente urbana y se concentra en grandes ciudades y en las 16 principales áreas metropolitanas de Colombia (Cali, Cartagena, Medellín, Barranquilla, Bogotá, Santa Marta, Pereira y otras 9 áreas metropolitanas), pero aún mantiene una concentración importante en el Pacífico, en ciudades menores y donde es ligeramente más rural que la nacional.

El Censo al mostrar que la población afrocolombiana es fundamentalmente urbana ha reavivado la discusión en las organizaciones de negritudes como las que se articulan al Proceso de Comunidades Negras (PCN) de la relación campo-poblado y sobre todo el interrogante de qué nuevo debe hacer un movimiento social que ha levantado consignas rurales, como la titulación de territorios colectivos de las comunidades negras. Con esto el tema de la territorialidad urbana de la comunidad negra y su derecho al trabajo, a la educación y a la salud, entre otros derechos sociales, cobran importancia al lado de la

¹⁴ Sin embargo, también en la región de estudio la acción colectiva desarrollada por el movimiento indígena caucano tiene un carácter rural ya que la población indígena, a diferencia de la población negra, está ubicada mayoritariamente en los territorios de resguardos en los que se desarrollan sociedades rurales con una particular relación con la tierra.

lucha en contra de la des territorialización en los territorios de comunidades negras, la discriminación y el racismo.

Por lo tanto, se puede concluir que paralelo con el patrón demográfico rural/urbano de la población afrodescendiente, las acciones colectivas de la gente negra en la región de estudio y, probablemente a nivel nacional, van adquiriendo un patrón predominantemente urbano.

3. RESISTENCIA NEGRA CONTRA LA GUERRA Y POR LA DEFENSA DEL TERRITORIO EN BUENAVENTURA, COSTA PACÍFICA COLOMBIANA

3.1 Resistencia civil, identificación con el territorio, localidad, localización y sentido del lugar

El otro gran componente de la investigación se refiere al análisis de las estrategias de resistencia en contra de la guerra en Colombia, como formas de acción colectiva no violenta, que diferentes organizaciones de comunidades negras en la Costa Pacífica colombiana, pero con particular interés en el municipio de Buenaventura, vienen poniendo en práctica¹⁵.

Las estrategias de resistencia civil pacífica tienen también una tradición muy importante en la historia de la acción política y de las acciones colectivas. Fueron empleadas en las luchas contra el colonialismo, de lo que es un ejemplo paradigmático la resistencia de Gandhi contra el imperio colonial inglés; en contra de la invasión alemana de la Segunda Guerra Mundial; en contra de los regímenes comunistas durante la antigua Unión Soviética o en contra de las dictaduras militares en América Latina. Estas experiencias han generado una literatura que ha reflexionado sobre las características de este tipo de acción política, algunos de los estudios más importantes son los siguientes: *Non-Violent Coercion*, de Clarence Marsh Case; *The Power of Non-Violence*, de Richard Gregg; *The Conquest of Violence*, de Bart de Ligt; *War without Violence: A Study of Gandhi's Method and Its Accomplishments*, de Krishnalal Shridharani (Randle, 1998:33)

En Colombia las estrategias de resistencia civil recientes se originan en el escalonamiento del conflicto armado y en su mayor impacto sobre la población civil, que resulta la más afectada por el desplazamiento, la desterritorialización y la muerte a que es sometida por los actores armados (Hernández, 2004). Siguiendo a Esperanza Hernández (2004: 32), las características de la resistencia civil se pueden definir de la siguiente forma:

¹⁵ El concepto de guerra se utiliza recientemente para referirse al conflicto colombiano. No obstante, antes de la década de los noventa se usaban otros términos. Así, diversos analistas proponen la expresión La Violencia para nombrar el enfrentamiento entre los partidos Liberal y Conservador, que a mediados del siglo pasado arrojó cerca de 180.000 muertos. A finales de los años ochenta, se habla de violencias para referir que múltiples actores de violencias, con motivaciones diferentes, es lo que caracteriza el caso colombiano (Comisión de Estudios sobre la Violencia, 1987). Esta noción parecía dar más cuenta del fenómeno ya que destacaba la importancia cada vez mayor de los componentes urbanos del conflicto. En rigor, el término guerra comienza a imponerse a partir del año 1995 cuando las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) obtienen varios éxitos militares lo que lleva a diferentes analistas a plantear que esta agrupación armada estaba abandonando la tradicional guerra de guerrilla para pasar a la guerra de posiciones. Después del fracaso del proceso de paz adelantado por el presidente Pastrana y de la política de mano dura del presidente Uribe, el concepto se extiende para referirse al conflicto colombiano (Castillo, 2006a; Pécaut, 2004)

Es un proceso.

Es una acción colectiva.

Constituye una respuesta a diferentes modalidades de violencia.

Evita cualquier recurso a la violencia, sin que implique la adopción de una ética pacifista.

Es generada y ejercida por la población civil, aunque conquiste la solidaridad de otros estamentos de la sociedad e incluso de representantes del Estado.

Funciona movilizándolo a la población para que no colabore, debilitando las fuentes de poder del oponente y logrando el apoyo de terceras partes.

Requiere la existencia previa de un proceso organizativo y de planeación.

Se soporta en un elemento de fuerza moral que la legitima.

Las acciones colectivas de resistencia civil se han convertido en una de las armas políticas más eficaces. Un ejemplo de esto son las formas de resistencia pacífica en contra de la guerra impulsadas por las comunidades negras de la Costa Pacífica, en especial en la ciudad de Buenaventura. Las acciones colectivas no violentas tienen también una historia asociada con la estructura de oportunidades políticas. Como ha sido anotado por varios estudiosos de la acción colectiva, un Estado fuerte y represivo inhibe la acción colectiva porque esta resulta más costosa para los actores sociales. Por el contrario, un Estado no represivo permite que florezca la protesta.

Ahora, lo particular del caso que estudiamos aquí es que la resistencia en contra de la guerra se ejerce desde el territorio con lo que se configura una forma particular de resistencia pacífica territorial. Tal vez esta es la especificidad que adquiere la resistencia en la Costa Pacífica colombiana, en particular en Buenaventura, uno de los principales municipios de la región de estudio de esta investigación.

Como se mencionó al comienzo de este capítulo, el lugar y el territorio se han convertido en importantes factores en la acción colectiva y en los movimientos sociales en América Latina (Escobar, 1999, 2001, 2008). Este es un giro muy significativo ya que, como dice Agnew (1987)¹⁶, a partir de la reconsideración del papel del lugar en los procesos políticos y sociales, los movimientos sociales no se articulan ya exclusivamente a la clase, sino que surgen otras dimensiones como el lugar y el territorio, lo que muestra que existen diferentes formas de relación entre identidad política, territorio y, para el caso que nos ocupa, resistencia.

La identidad con el territorio y sus formas de representación, como mencionamos antes, ha sido un factor fundamental de la acción colectiva de las comunidades negras en Buenaventura, en la Costa Pacífica colombiana y en menor medida en el norte del departamento del Cauca. La identificación con el territorio de las comunidades negras del Pacífico Colombiano, en general, y de Buenaventura, en particular, tiene una fuerte asociación con sus prácticas espaciales, es decir, como la forma como estas comunidades construyen sociedades comarcales en una estrecha interacción con el sistema de ríos que caracteriza la ecología de la Costa Pacífica Colombiana (West, 1957). Como ha mostrado Oslender (1999, 2002, 2004a), la gente negra ha desplegado con este sistema de ríos interacciones permanentes que han originado un “espacio acuático”. Éste se refiere a la influencia determinante que ríos, quebradas, caños y el

¹⁶ Puede verse también: John Agnew y J. S. Duncan (eds): (1989) *The Power of Place: Bringing Together Geographical and Sociological Imaginations*, Londres, Unwin Hyman.

ritmo de mareas ejercen sobre la vida cotidiana de los pobladores. Esto ha producido espacios de representación y una profunda identificación emocional con el río, o un sentido del “lugar acuático”. Es decir, el río es un referente fundamental de la identidad personal y social a tal punto que ningún negro del Pacífico se concibe sin referencia a la cuenca hidrográfica donde nace y crece.

Fue la identificación (motivación) con el territorio y la construcción de nuevos espacios de representación los ejes movilizados de toda la acción colectiva que despliegan las comunidades negras del Pacífico Colombiano para lograr la titulación de más de cinco millones de hectáreas durante la segunda mitad de la década de los noventa y los comienzos del presente milenio (Agudelo, 2002; Escobar, 2008; Castillo, 2007).

Agnew (1987) ha introducido tres conceptos que nos permiten aproximarnos a las razones de por qué el municipio de Buenaventura se ha convertido en uno de los epicentros del conflicto colombiano y del enfrentamiento entre guerrilla, paramilitares y bandas del narcotráfico y cuyo impacto sobre la población civil ha generado las estrategias de resistencia pacífica en contra de la guerra por parte de las comunidades negras de este puerto sobre el Pacífico. Nos apoyaremos en su conocida triada sobre el lugar: localidad, ubicación y sentido del lugar.

3.2 Buenaventura (y El Pacífico colombiano) de lugar de paz a lugar de guerra

Buenaventura es el principal puerto sobre el Pacífico colombiano. Es también el único municipio del Valle del Cauca que pertenece a la Costa Pacífica, región que desde el periodo colonial fue centro de la explotación minera con la organización de cuadrillas de trabajo esclavo bajo la dirección de la elite blanca de la gran región conocida como el Gran Cauca (West, 1957; Romero, 1995). Desde el nacimiento del asentamiento en 1540, la ubicación de Buenaventura y el Pacífico contribuyen para que se articulen a los circuitos del comercio internacional en calidad de fuente de materias primas que genera ciclos de bonanzas y colapsos para responder a la demanda exterior (Whitten, 1986). De esta forma, ha tenido bonanzas y colapsos en la explotación del oro, del platino, de la tagua y de la madera.

La creación del departamento del Valle del Cauca en 1910 significa que las elites políticas y económicas del Valle les habían ganado la partida a los señores de la tierra caucanos. La consolidación del nuevo departamento está estrechamente ligada a la creación del ferrocarril del Pacífico y éste al puerto de Buenaventura por donde comienza a salir buena parte de las importaciones colombianas en una fuerte competencia con las elites económicas antioqueñas¹⁷. Después de 1950, Buenaventura se consolida como el principal puerto sobre el Pacífico ya que las exportaciones de azúcar, que se incrementan durante la década de los sesenta al salir Cuba del mercado norteamericano, y de café salen por el puerto y entran cerca del 50% de las exportaciones.

¹⁷ La construcción del ferrocarril del Pacífico, para comunicar a Buenaventura con Cali, capital del departamento, tiene una larga historia que se remonta al año 1854, cuando el General Tomás Cipriano de Mosquera obtiene una concesión del gobierno nacional para construir un “camino de ruedas” que comunicaría a Cali con el puerto de la Buena Ventura, hasta 1915, cuando después de múltiples vicisitudes y con la participación de varias compañías, llega la línea ferroviaria a Cali (Mejía, 1988, 2007).

A pesar de ser Buenaventura un lugar estratégico de la economía regional, no sólo del Valle del Cauca sino de otros departamentos como Antioquia y el eje cafetero, el modelo de desarrollo que ha considerado a Buenaventura y al Pacífico como reservorios de materias primas que es indispensable explotar, ha mantenido a este puerto en una condición histórica de marginalidad y subordinación hasta la actualidad, situación que se refleja muy bien en el título del libro de Sofonías Yacup: *Litoral Recóndito*.

Las condiciones históricas de marginalidad a que han estado sometidos Buenaventura y el Pacífico por modelos de desarrollos diseñados y puestos en práctica por las elites políticas y económicas andinas se habían presentado también en relación con el conflicto interno colombiano. En efecto, históricamente, Buenaventura y el Pacífico habían pertenecido a los “márgenes lejanos” de las principales olas de colonización y de control guerrillero. No fueron un escenario del conflicto político de mediados del siglo XX que se conoce como La Violencia, mas bien fueron un lugar de refugio de muchos liberales que huían del enfrentamiento bipartidista. A mediados de la década de los noventa, antes de iniciarse el proceso de titulación de territorios colectivos, Buenaventura y el Pacífico eran también un “Litoral recóndito para la guerra” (Castillo, 2007). Sin embargo, esta situación cambia drásticamente a partir del año 2000 cuando comienzan las masacres en Buenaventura y el otrora puerto pacífico se convierte en un paisaje de muerte y de enfrentamiento entre guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes y en uno de los principales municipios expulsores y receptores de desplazados en Colombia. Hoy, la situación de Buenaventura es dramática. El territorio está dividido y controlado por actores armados que bajo la amenaza de muerte impiden la movilidad de un barrio a otro de la gente negra. Esto ha llevado a que se hable en Buenaventura de confinamiento y desplazamiento interno, es decir, dentro de la misma ciudad (ver mapa 1).

Mapa 1. Distribución del territorio entre guerrilleros y paramilitares



Fuente: *El Tiempo*, 8 de noviembre de 2006, página 1-2.

La masacre es una de las formas más terribles de expresión del enfrentamiento entre guerrilleros y paramilitares¹⁸. Tiene por objetivo afectar las redes de apoyo del enemigo, acabar con los informantes, atemorizar a los familiares de los combatientes y amedrentar a la población para controlarla bajo un clima de terror.

El 11 de mayo de 2000, en el río Dagua, zona rural de Buenaventura, 80 miembros de las Autodefensas del Bloque Pacífico asesinan a 13 campesinos y desaparecen a 8 más por supuestos vínculos con la guerrilla (Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, Observatorio, 2003: 58).

La masacre del río Naya ha sido una de las más terribles por su “orgía de muerte”, por esto ha sido también una de las que ha tenido mayor despliegue de información internacional. En efecto, en noviembre de 2000, los paramilitares del Bloque Calima informan que están en la zona rural de Buenaventura para “recuperarla” y “limpiarla” de guerrilleros y colaboradores de la guerrilla.

El PCN y la Asociación de Afrocolombianos Desplazados, (AFRODES), a través de diversos medios de comunicación y mediante Internet denuncian la inminencia de la masacre por parte de los paramilitares en el río Naya. El PCN hace circular en la red la siguiente denuncia:

Urgente, Urgente, Urgente. Comenzó incursión paramilitar en el Pacífico. Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) llevan más de un mes anunciando una masacre navideña a lo largo de los ríos Naya, Cajambre y Raposo, del Pacífico colombiano [Zona rural de Buenaventura]. Hemos sido informados que hoy, el 21 de diciembre de 2000, que hay presencia de 150 paramilitares en el corregimiento de Puerto Merizalde, Río Naya. Este hecho empeora la situación de las comunidades de los ríos Naya, Yurumanguí y Cajambre amenazadas por una incursión paramilitar. Llaman a los funcionarios de gobierno, embajadas, organizaciones de DDHH, a quien se les ocurra para frenar la barbarie que se viene. (www.ainfos.ca).

De nada sirvieron estas denuncias. Entre el 10 y el 13 de abril de 2001, en una orgía de sangre y muerte, el Bloque Calima de las AUC masacra a 45 personas en las veredas Patio Bonito, El Ceral, La Silvia, La Mina, El Playón, Alto Seco, Palo Grande en el

¹⁸ Con base en un análisis del caso colombiano y apoyándose en Veronique Nahoum-Grappe, etnóloga francesa que estudió en detalle las recientes masacres cometidas por los serbios en la antigua Yugoslavia, Blair define la masacre “como el teatro de la crueldad en el que el enemigo debe no solamente morir, sino que debe hacerlo con suplicio”. La describe de la siguiente manera: “Dentro de la dinámica de la masacre y para que las pasiones puedan desplegarse libremente, hay necesidad de lugares cerrados, a veces geográficamente y si no es así, los victimarios se encargan de tender el cerco. Una vez circunscrito el *teatro* de la violencia, las víctimas son sometidas a todas las vejaciones. Un segundo elemento que aparece como central en el desarrollo de la masacre: el tiempo. Aquella tiene necesidad de éste para explorar todos los rincones y escondrijos. La masacre—otra vez diferente del combate o la persecución—no tiene futuro inmediato, sino únicamente la duración del presente. Sería más fácil matar rápidamente a la víctima y abandonarse a la ebriedad de la destrucción. Sin embargo, no sucede así, pues, como la tortura, *la masacre quiere frenar el tiempo, prolongar la agonía, diversificar la violencia*. Una muerte rápida pondría fin a la masacre, de ahí la necesidad de inventar siempre nuevas atrocidades: violaciones, robos, suplicios. Con éstos, *el tiempo de la masacre se prolonga; es el exceso regocijándose*. Después del ataque por sorpresa, sus autores no tienen prisa; conscientes de su superioridad, hacen pausas, interrumpen la acción, reposan entre una y otra muerte; a veces, mientras la ejecutan, sus autores comen o beben. Todos los medios para prolongar la efusión de sangre son permitidos. Hay deleite en la angustia de la víctima. A la variedad de los ritmos y los lugares, se suma la diversidad de los actos de violencia. Todo está permitido. En este contexto se explican los excesos: mutilar los cuerpos, vaciar completamente el cargador aunque se sepa que la víctima ya está muerta (...) el asesino trabaja a « mano » y de cerca. Él quiere ver el cuerpo que sangra y los ojos llenos de miedo. La masacre es una orgía sangrante”. (Blair, 2004: 62-63).

Alto Naya. La mayoría de las víctimas son degolladas con machetes y motosierras, más de 3.000 personas son desplazadas. (Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, Observatorio, 2003: 54-55). Después de la masacre y cuando comienza el desplazamiento de la población civil, varias organizaciones comunitarias informan sobre el desplazamiento de la gente:

Al menos siete mil personas, en máximo estado de vulnerabilidad y desprotección, huyen a ésta hora de los paramilitares que avanzan por el Camino Real del Naya, sur del departamento del Valle del Cauca...Esta circunstancia ha llevado a que el éxodo tenga que realizarse hacia la ciudad de Buenaventura, en condiciones topográficas adversas, atravesando caminos selváticos, desafiando profundos desfiladeros y tomando por ríos caudalosos, situación que hace temer por la vida de mujeres, ancianos y niños. A esto se suma el grave peligro en que se encontrarán los desplazados cuando se acerquen a Puerto Merizalde y Buenaventura donde desde hace varios meses los paramilitares han instalado retenes permanentes. (Asociación Nacional de Ayuda Solidaria ANDAS; Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos; Corporación para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos REINICIAR; Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos CSPP, Masacre del Naya, Bogotá, abril 14 de 2001).

A pocos días de la masacre del Alto Naya, se produce otra masacre, pero en el río Yurumanguí, zona rural de Buenaventura. En efecto, a finales de abril de 2001, los paramilitares incursionan en un pueblo de pescadores llamado El Firme, en la desembocadura del río Yurumanguí, y asesinan y descuartizan con hacha a siete personas acusadas de ser colaboradoras de la guerrilla, cerca de mil personas son desplazadas. Un sobreviviente de la masacre describe lo que sucedió en los siguientes términos:

En la masacre ocurrida el 29 de abril, en el Firme, sobre el río Yurumanguí llegaron doce hombres armados a la una de la mañana, convocaron a la comunidad a una reunión con ellos, la gente salió de las casas a atender la reunión e inmediatamente le presionaron para que se tire en el piso. Algunos intentaron escapar, y entonces asesinaron a dos, y a los que estaban en el suelo los descuartizaron con hacha. Y esto lo hicieron a vista de todo el mundo, para eso convocaron a la reunión, para que todo el mundo viera como se descuartizaba a la gente, y de esa manera poder implantar el terror. Imagínesse una barbarie como esa, al día siguiente la gente salió en estampida y se produjo el éxodo. A otras personas las cortaron con motosierra y las descuartizaron. Desde el año pasado han venido ocurriendo masacres y la gente ha alertado al gobierno pero no se hace nada, los paramilitares se dan el lujo de anunciar su masacre, con hojas volantes o escritos en las paredes: iremos a tal parte, vamos a masacrar en tales y tales veredas; y lo que prometen lo cumplen, sin que el ejército haga nada para evitarlo, el ejército se dedica a recoger víctimas, nosotros pensamos que esa ayuda no la necesitamos, necesitamos evitar las masacres. (Juan de Dios García, testimonio de un sobreviviente, <http://www.sudnordnews.org/negras.html>).

En un espiral de violencia, Buenaventura se convierte en uno de los municipios más violentos del país donde guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes se disputan el control territorial y las rutas del tráfico de armas y de estupefacientes. De la zona rural, el enfrentamiento se desplaza hacia el casco urbano. Entre el 2000 y el 2005 se presentan 2.644 homicidios en Buenaventura. En marzo de 2005, matan a “Félix”, ex jefe del desmovilizado bloque de autodefensas Calima, y a tres desmovilizados más. En

el mes de abril del mismo año, son asesinados 12 presuntos milicianos de las FARC en un partido de fútbol. El mes de mayo de 2006 es crítico en la oleada de violencia. En la segunda semana de este mes, cada día hubo ataques con explosivos que dejaron 24 heridos y un muerto en el casco urbano de Buenaventura. El Gobernador del Valle del momento, Angelino Garzón, lidera movilizaciones y actos públicos de la población civil para exigirle a las FARC que detengan los atentados. El 18 de agosto del mismo año, frente a un Centro de Atención Integral (CAI), estalla otra carga explosiva que era transportada por un taxi, muere el taxista y 8 heridos. El atentado es atribuido a las FARC como retaliación por milicianos detenidos por las autoridades. En el año 2006 se produjeron 450 homicidios, es decir, 121 x 100.000 habitantes. Una cifra escalofriante si se tiene en cuenta que en Colombia las tasas más altas de homicidios han sido las de la década de los ochenta y comienzos de los noventa cuando el país tuvo en promedio 70 homicidios por cada 100.000 habitantes. La alta tasa de homicidios en Buenaventura se produce en el marco de una tendencia a la disminución nacional de los homicidios que hoy se estima, aproximadamente, en 37 por cada 100.000 habitantes.

En la primera semana de enero de 2007, pistoleros asesinan a cuatro personas y hieren a dos más que estaban en una peluquería del sector conocido como el Zaguancito. El 21 de enero de 2007, en el barrio la Independencia, estalla una carga explosiva al paso de un camión de la Policía, mueren cuatro civiles y dos policías. El mismo día, 300 personas huyen del barrio San Francisco ante el rumor de una toma de la guerrilla. Al finalizar el mes de mayo de 2007, 265 personas habían muerto violentamente¹⁹. Al finalizar el año se habían presentado 38 atentados.

Entre el 2001 y el 2006, de 403 enfrentamientos entre grupos armados y Fuerza Pública que se producen en los diez municipios del Valle del Cauca con un promedio mayor de enfrentamientos, Buenaventura ocupa el primer lugar, con 91 enfrentamientos, el 22,5% del total. Es seguido de lejos por Cali, con 65 enfrentamientos, el 18% del total (CIDSE-CEDETES, 2007: 191). Es tal la intensidad del conflicto que en el año 2006 el Ministerio de la Defensa toma la decisión de convertir a Buenaventura en Distrito Especial de Policía y asigna a 1.057 hombres a este cuerpo y se crea un grupo de elite para combatir a las FARC y a los paramilitares.

Otro de los efectos desastrosos de la guerra que los diferentes actores armados libran por el control territorial de Buenaventura es el desplazamiento forzado de la gente negra²⁰. Las cifras sobre desplazamiento tienen una variación significativa de acuerdo con la institución que recoge la información y con el concepto que se utilice de desplazado. Por ejemplo, El Sistema Único de Registro (SUR) de la Acción Social calcula que entre 1995 y marzo de 2006 habrían sido desplazadas en Colombia 1.784.626 personas. Sin embargo, Ibáñez et al (2006) estiman en un 30% el subregistro del SUR por lo que los desplazados serían aproximadamente 2.459.613. Por su parte, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) estima que entre 1985 y septiembre de 2005, 3.662.842 habrían sido desplazadas (Urrea et al, 2007b:1). A pesar de esas diferencias lo claro es que Colombia es el segundo país en

¹⁹ Para una buena reconstrucción de la ola de violencia en Buenaventura entre la masacre del Naya y el año 2007 ver Castillo María del Pilar (2007).

²⁰ De acuerdo con Carlos Rosero (2004: 551-555), el desplazamiento de la gente negra en el Pacífico se origina en los territorios ancestrales y regularmente se presenta una vez las comunidades han recibido los títulos de propiedad de las tierras colectivas de comunidades negras que se logran a raíz de la Ley 70 o ley de negritudes.

desplazamiento en el mundo después de Sudán. Esta dramática situación del desplazamiento es uno de los resultados más devastadores del conflicto interno que padece Colombia.

¿Cuál es el peso de la población afrocolombiana en la desplazada y cuál el peso específico de la población afrocolombiana desplazada en el total de los afrocolombianos? Urrea y Viáfara (2005) estiman aproximadamente en el 30% la participación de la población afrodescendiente en el total de los desplazados. Se tendrían las siguientes cifras “hacia marzo de 2006: 535.388 afrocolombianos con datos gubernamentales (Acción Social), 737.884 afrocolombianos con datos de Ibáñez et al. y 915.000 afrocolombianos con base en CODHES” (Urrea et al, 2007: 3)

En el Censo de 2005, el 10,6% de la población colombiana se autoidentifica como afrodescendiente. A marzo de 2006 los desplazados afrocolombianos representan el 11,7% del total de dicha población, con datos de Acción Social, el 16,1% con base en Ibáñez et al., y el 20,0% con base en las estimaciones de CODHES (Urrea et al, 2007: 3). Sin embargo, en las regiones de mayoría afrocolombiana como en los 50 municipios del andén del Pacífico, los desplazados pueden llegar a representar alrededor del 45% de dicha población si se toman las cifras de Ibáñez et al (2006). En el caso de la población rural del andén del Pacífico el impacto demográfico puede llegar al 60%. Esto revela claramente el fuerte impacto desestabilizador del fenómeno del desplazamiento masivo en términos sociodemográficos para la región negra más importante del país, debido al conflicto armado, a la vez que para el conjunto de la gente negra colombiana, ya que en todos los casos se trata de población afectada por la guerra (Urrea et all, 2007: 3).

De acuerdo con la base de datos del IDEAM-Red de Solidaridad Social, en el periodo 2000-2001, Buenaventura se convierte en el segundo municipio más expulsor de desplazados del país después de Carmen de Bolívar (Urrea, 2003: 9). Y en el Valle del Cauca, y en nuestra región de estudio, es el municipio con la mayor tasa promedio de desplazamiento, con 1.763 expulsiones x 100.000 habitantes durante el periodo. Igualmente, tuvo una tasa promedio de recepción de 1.796 casos x 100.000 habitantes. Esto significa que entre los años 2002 y 2006, como resultado del conflicto, huyeron de Buenaventura 28.296 personas y llegaron, 28.825 que provienen fundamentalmente de los territorios colectivos de comunidades negras, territorios que están siendo vaciados.

En el periodo intercensal 1993-2005 Buenaventura pasó de tener un total poblacional (cabecera y resto) de 248.424 habitantes a 328.794, es decir, una tasa de crecimiento del 2,34. Este incremento se acentúa en la cabecera que pasa de 209.806 habitantes a 292.947. Y mientras la cabecera crece, la zona rural decrece ya que su población pasa, en doce años, de 38.618 habitantes a 35.847, es decir, una tasa de crecimiento negativa de -0,62% (Urrea et al, 2007: 5). El 61% (28.546 personas) de los llegados a Buenaventura procedían de su zona rural y el 22% (10.300) de municipios del Pacífico de los Departamentos del Chocó y Cauca (Urrea et al, 2007: 6). Estos cambios demográficos obedecen al fenómeno del desplazamiento por el conflicto armado en el Pacífico colombiano.

Esto configura el drama del desplazamiento y de la des territorialización de la gente negra de Buenaventura y el Pacífico colombiano. Llegado a este punto hay que preguntarse: ¿Por qué Buenaventura se ha convertido en un lugar de guerra?, ¿por qué

es ahora uno de los municipios que más produce desplazados en Colombia y con una de las tasas de homicidios más altas del país?

La respuesta a estos interrogantes está asociada con la localización de Buenaventura, con sus características como localidad y con la estrategia política y de guerra de los actores armados que están involucrados en el conflicto interno colombiano. En efecto, Buenaventura, por sus características geográficas, es decir, su extenso territorio rural, que está constituido por selva pluvial tropical, ríos caudalosos (Naya, Yurumanguí, Cajambre, Mallorquín, Raposo, Calima, San Juan, Anchicayá, Sabaletas, Agua Clara, Dagua entre otros) y decenas de canales y esteros que se comunican con el mar, el aislamiento geográfico y dificultades de comunicación, es un espacio geográfico propicio para las acciones tipo guerrilla y donde se dificultan los operativos aéreos e incluso terrestres de las Fuerzas Militares. Además, en Buenaventura hay un gran “ejército de reserva”, jóvenes negros que viven en las peores condiciones de pobreza y que encuentran en los actores armados una fuente de trabajo con lo que se convierten en mercenarios de la guerra. Con un ingreso per cápita anual que no sobrepasa los 600 dólares, enrolarse en la guerrilla o en las bandas emergentes del paramilitarismo les garantiza una entrada que sobrepasa con creces esa cifra.

Ahora, el Estado colombiano ha emprendido desde hace cinco años una agresiva campaña fumigación contra los cultivos de coca en la selva amazónica y como resultado de esta estrategia dichos cultivos se han ido desplazando hacia los ríos del Pacífico y de Buenaventura, aprovechando también su aislamiento geográfico y la salida al mar (Naciones Unidas 2005, 2007). Por ello, la presencia militar de las FARC en Buenaventura está estrechamente relacionada con la decisión estratégica de asegurar el corredor que va del Amazonas al Pacífico, que es precisamente una ruta crítica del narcotráfico. Por lo tanto, con el control de Buenaventura (y del Pacífico colombiano), la guerrilla busca dominar una zona que le garantiza ventajas estratégicas en la confrontación y recursos provenientes de los cultivos de coca. La expansión de la guerrilla hacia Buenaventura ha ido acompañada también del incremento del terror²¹.

En la historia del conflicto armado colombiano, el fortalecimiento militar y económico de la guerrilla estuvo acompañado del surgimiento y expansión del paramilitarismo. Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) nacen como respuesta a la expansión de la guerrilla y al ser uno de sus objetivos fundamentales la “recuperación de los territorios controlados por las fuerzas insurgentes” se desata una guerra por el control territorial. De una presencia inicial en la década de los ochenta en Córdoba, en Urabá y el Magdalena Medio, en el 2003, antes de la desmovilización propiciada con la Ley de Justicia y Paz, los paramilitares habían creado 22 grupos que tenían presencia en 28 departamentos y les disputan el territorio a sangre y fuego a las guerrillas.

Como detrás de la guerrilla llegan los paramilitares, Buenaventura rápidamente se convierte en un lugar que es objeto de una encarnizada lucha entre estos actores armados por ser un corredor geográfico que permite el acceso a los recursos económicos provenientes de la droga, que facilita control del tráfico de armas además de ser zona de

²¹ Según cálculos militares “...el 70% de los recursos requeridos por las fuerzas irregulares, narcotraficantes, guerrilleros y paramilitares, para librar la guerra contra el Estado, se movilizan actualmente por el Pacífico (Almario, 2004:86).

refugio. Las FARC buscan abrirse paso hacia el océano Pacífico aprovechando la colonización campesina del norte del río Naya, zona rural de Buenaventura en los límites entre los departamentos del Cauca y el Valle del Cauca y corredor estratégico de comunicación, tráfico de armas y comercialización de la droga entre el Amazonas, la Zona Andina y el Pacífico colombiano. Por lo tanto, la localización estratégica de Buenaventura se ha convertido en uno de los factores que explican la tragedia que hoy vive su gente negra.

Algunos analistas del conflicto colombiano sostienen que las FARC, ante la superioridad militar del Ejército impulsada por la política de seguridad democrática del gobierno Uribe y ante los golpes militares que han recibido, han comenzado a pasar de una estrategia de control de territorios, al control de corredores estratégicos, es decir, áreas con recursos económicos y zonas de avanzada y repliegue, con el fin de garantizar la supervivencia en un entorno adverso ante la superioridad militar del Estado. Echandía sostiene “que ante la ofensiva de la Fuerza Pública, la guerrilla dejó de lado la lógica estricta de control territorial, para seguir la lógica más amplia del control estratégico”. Un rasgo de algunos de estos corredores estratégico es su carácter selvático ya que la selva constituye una barrera de protección formidable que le permite al actor armado protegerse, camuflarse, abastecerse y descansar. Todo parece indicar que el río Naya, zona rural de Buenaventura se ha convertido, precisamente, en uno de esos corredores estratégicos para la guerrilla.

Los bloques Pacífico y Calima de las Autodefensas que ejercían control paramilitar en Buenaventura (en el Pacífico colombiano y sectores del Valle del Cauca) se desmovilizan con 557 hombres en diciembre de 2004. Por la presión que ejerce el Ejército en Buenaventura, en diciembre de 2006, 45 miembros del Frente Manuel Cepeda Vargas de las FARC también se desmovilizan. Sin embargo, de los frentes desmovilizados de los paramilitares surgen las bandas emergentes o grupos criminales ligados al paramilitarismo que no han dejado las armas. Estos grupos armados se caracterizan porque no tienen conexión entre sí o las conexiones son muy débiles, establecen vínculos muy estrechos con los carteles de la droga y el enfrentamiento con las FARC obedece fundamentalmente a la disputa por el control de las rutas del narcotráfico. La OEA ha llamado a estos grupos “paramilitarismo narcotizado” y estima que hay vinculados a dichos grupos unos 3.000 hombres. En Buenaventura los ex paras se alían con los “rastros”, grupo de sicarios del asesinado narcotraficante Wílber Varela y le disputan a las FARC el control de las rutas del narcotráfico y las áreas de cultivo de coca. Como la población civil es la más afectada con el desplazamiento, la muerte y la des territorialización han comenzado a surgir formas de resistencia territorial contra la guerra tanto en las zonas rurales como urbanas de Buenaventura. Estas estrategias de resistencia son lideradas por las organizaciones étnico territoriales y organizaciones del movimientos negro como el Proceso de Comunidades Negras, PCN.

3.3 Estrategias de resistencia contra la guerra, la muerte y la des-territorialización de la gente negra

Desde que comienzan las primeras masacres en los ríos de Buenaventura y que se inicia el terror por parte de los actores armados, las comunidades negras y las organizaciones étnico territoriales comienzan a crear y a poner en práctica acciones colectivas que configuran estrategias de resistencia pacífica en contra la guerra que tienen como

objetivo preservar la vida, evitar la muerte, detener el desplazamiento, defender el territorio y enfrentar el terror. A partir de la conciencia de que han resistido históricamente definen la resistencia en los siguientes términos:

*Como las formas ancestrales que se han usado para mantenerse como sujeto social y político en el territorio, entendido como un **Espacio Para Ser**, en medio de los diversos conflictos que históricamente se han presentado y que actualmente se ven agravados por el Conflicto Armado Interno, la indiscriminada e inconsulta explotación de los recursos naturales y del ambiente y la invasión territorial impulsada por las políticas de Estado en función de la globalización económica.*
(Proceso de Comunidades Negras (PCN), 2007: 3).

Los Territorios de Paz y Alegría

Después de la masacre de El Firme en el río Yurumanguí, la Organización Étnico Territorial APONURY (Asociación Popular de Negros Unidos del Río Yurumanguí) en conjunto con el Consejo Comunitario del Río Yurumanguí y el Proceso de Comunidades Negras y con el acompañamiento de ONG internacionales defensoras de los Derechos Humanos realizan una asamblea general para oponerse a la guerra. En esta Asamblea surge la idea de declarar el río Yurumanguí un *territorio de paz y alegría*. Esta decisión tiene una fuerte carga simbólica que termina convertida en una estrategia de resistencia territorial a la guerra. Declarar que un territorio es de paz es colocar fronteras imaginarias frente al conflicto y exigir que el territorio sea excluido de la guerra. Esto significa que ningún actor armado, incluso el Ejército, puede asentarse en el lugar de paz por lo que no puede ser escenario de guerra.

La estrategia de declarar el río Yurumanguí *un territorio de paz y alegría* que se relaciona con la “lógica del río” y el “sentido del lugar acuático” recrea y retoma la experiencia de “Las comunidades de paz San Francisco de Asís”. En efecto, en el año 1997, 53 comunidades del municipio de Río Sucio, en el departamento del Chocó, unos 7.000 afrodescendientes, afectadas por el enfrenamiento entre guerrillas y paramilitares, se declaran como una comunidad de paz y exigen ser excluidas de una “guerra que no les pertenece”. En esta iniciativa las comunidades son apoyadas por la Diócesis de Apartadó que haciendo uso de su carácter de Iglesia logra ser intermediaria en la negociación con los actores armados y obtiene el retorno de más del 95% de la población desplazada de esta localidad. Siguiendo este ejemplo, cuando la gente negra del río Yurumanguí declara que constituye una comunidad de paz y alegría asume varios compromisos que materializan la resistencia. En primer lugar, todos se comprometen a acatar las decisiones que se toman colectivamente, lo que constituye una forma de democracia directa. En segundo lugar, nadie de la comunidad puede colaborar con ninguno de los actores armados, ni dando información, ni engrosando sus filas, ni brindando enseres y alimentos ni prestando apoyo logístico. En tercer lugar, las mujeres no pueden establecer relaciones sentimentales con guerrilleros ni paramilitares.

En la decisión de declararse Comunidad de Paz, la gente negra del río Yurumanguí ha contado con el apoyo del Proceso de Comunidades Negras y con la Pastoral Social de Buenaventura. Sin embargo, a pesar de estos apoyos, esta resistencia es muy débil porque son comunidades desarmadas que se enfrentan a actores muy poderosos que imponen su voluntad a las comunidades porque el “poder nace del fusil”. A pesar que hablan en nombre de las comunidades, los líderes de esta forma de resistencia son

amenazados y asesinados por los actores armados. El caso más dramático en el río Yurumanguí es el del líder negro Naka Mandinga, amenazado en varias ocasiones, y a quien los actores armados le han asesinado cinco familiares.

La Movilización del Espacio

El mismo espacio físico, que ha servido a los actores armados, sobre todo a las FARC, para desarrollar su estrategia de guerra y control territorial, le sirve ahora a la gente negra de los ríos de Buenaventura para defenderse y resistir a los actores violentos desarrollando estrategias de resistencia territorial contra la guerra. En otras palabras, la gente negra “moviliza el espacio” para enfrentar al terror en los lugares que durante siglos han habitado. Las redes laberínticas de caños, cañadas, quebradas, afluentes y ríos le brindan a la gente rutas de escape mediante “microdesplazamientos” en el territorio. Son estrategias de ocultamiento que usan el conocimiento centenario sobre el lugar y el territorio para defender la vida amenazada ante la presencia de los actores armados. Dado que esta estrategia se caracteriza porque la gente negra pone en práctica las tácticas guerreras y de ocultamiento que utilizaban los cimarrones para huir de los campos de minas o de las haciendas esclavistas para construir los palenques o “sociedad de hombres libres”, Castillo (2006b) ha llamado a esta estrategia “cimarronismo moderno”.

En efecto, la gente se refugia en los afluentes, en los caños y en las quebradas donde permanecen por semanas y cuando la situación deja de ser crítica regresa a los lugares en que habita regularmente. Las comunidades llaman a estos sitios encaletados, “donde no nos encuentra nadie”. Por lo tanto, en lugar de ir al poblado, la estrategia para enfrentar el terror consiste en ir “monte adentro”, donde tienen mayores posibilidades de mantener la cohesión grupal. Por lo tanto, en un nuevo contexto, para salvaguardar la vida y el territorio, se repiten las técnicas guerreras de los cimarrones.

La aplicación de estas estrategias de resistencia va acompañada con tácticas de seguridad alimentaria que garantizan la permanencia en el territorio. De esta manera, muchas comunidades han optado no sólo por sembrar sus chagras para alimentarse, sino que organizan brigadas para ir monte adentro, en los encaletados, y “sembrar comida” en varios lugares. Esto ha implicado recuperar semillas tradicionales, rescatar antiguos cultivos y buscar nuevas fuentes de proteínas. El caso paradigmático es el de las comunidades negras del río Yurumanguí que después de 30 años, ante el cerco alimentario a que han estado sometidas por la guerra, han vuelto a sembrar arroz usando las semillas tradicionales (Castillo, 2007).

Planes de Prevención y Contingencia de la Gente Negra para evitar el Desplazamiento

Las comunidades de los ríos de Buenaventura han solicitado el apoyo y la solidaridad de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos y de las instituciones del Estado para formular lo que llaman “Planes de Prevención y Contingencia de la Gente Negra para evitar el desplazamiento y los impactos causados por el Conflicto Interno en los territorios ancestrales de las comunidades negras”. Definen estos planes como:

Una herramienta vital para que la organización étnico-territorial y los Consejos Comunitarios, planifiquen y tome decisiones en el territorio colectivo, en relación con la prevención del desplazamiento forzado, la atención humanitaria, la

prevención de la violación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y en general contribuya a la permanencia en forma digna de las comunidades. (PCN, 2007:1).

Los planes de contingencia operan mediante un sistema de alertas tempranas que comunican entre sí a los poblados que se ubican a lo largo de los ríos e informan a nivel nacional e internacional sobre la presencia de grupos armados que ponen en peligro la vida de los pobladores. Los Consejos Comunitarios de Comunidades Negras operan las alertas tempranas e informan al mundo sobre el inminente peligro y piden el apoyo y la solidaridad nacional e internacional de redes globales que están atentas a tales llamados. Los Consejos Comunitarios son los únicos autorizados para emitir las alertas tempranas y para firmar los llamados de solidaridad y apoyo a la comunidad internacional.

A través de los planes de contingencia se prepara y coordina a la gente para la evacuación colectiva, si la intensidad del conflicto lo amerita; la ubicación de lugares seguros para la protección de la comunidad; el apoyo psicosocial a las víctimas; el desarrollo de acciones para evitar el reclutamiento y la vinculación forzada de los jóvenes y niños a los grupos armados. A través de estos planes, las comunidades negras han desarrollado un debate sobre la posibilidad de evacuar pueblos enteros cuando las incursiones y las amenazas de los actores armados comprometen la integridad de los pobladores. Los Consejos Comunitarios de Comunidades Negras entienden que tales evacuaciones tienen que ser colectivas y temporales porque éstas conllevan la destrucción de la vida social individual y colectiva y la pérdida de los lazos de solidaridad e identidad grupal. Por ello, también, la estrategia puede implicar, por el contrario, resistir en el territorio y decir no al desplazamiento. Uno de los activistas del PCN se refería en los siguientes términos a esta estrategia:

A mi modo de ver no es suficiente que una comunidad decida no desplazarse y lo haga en su río, se mantenga ahí de manera callada y silenciosa. Se necesita que ese no-desplazamiento en lo local esté articulado en lo regional, nacional e internacionalmente para que sea efectivo. Y en esa dimensión juega mucho los asuntos de las alertas. Una comunidad ha decidido no desplazarse, pero hay una amenaza, tiene que circular, esa comunidad tiene que plantearse las estrategias para que eso circule. Muchas veces las estrategias eran sencillas: un compañero, por ejemplo, está metido en el río. Si hay una amenaza, ese compañero nos llama. Y entonces uno acá se sienta, pone la alerta y a las dos horas la alerta se conoce en todo el mundo, está traducida al inglés, al francés, etc. Con esos ejemplos quiero decir que una necesidad que tiene el movimiento es de comprender y articular las partes. No en ese rollo A o B, sino A y B. No es que los que están en lo local, esos sean los más importantes, o los que están en lo nacional, en lo internacional. Esto es importante, pero esto también es importante. (Oslender, 2007:6)

Acciones colectivas de re-territorialización: Navegando el Pacífico

Las comunidades negras y las organizaciones étnicas territoriales han mostrado una inagotable creatividad para enfrentar la guerra en sus territorios, como situación inédita hace aproximadamente un decenio. Como una acción colectiva de resistencia civil contra la guerra, la des territorialización y el impacto de lo que llaman los “macroproyectos”, en octubre de 2007, diferentes organizaciones como el Proceso de Comunidades Negras, El Palenque El Congal de Buenaventura, CENSAT, Agua Viva, Amigos de la Tierra Colombia y miembros de las organizaciones étnico territoriales,

entre otras, inician una campaña que denominan “Navegando el Pacífico: resistencia frente al vaciamiento de los territorios”. Salen de Buenaventura y durante varios días navegan hacia el Pacífico Sur, pasando por los ríos Naya, Yurumanguí, Raposo, Cajambre, Micay y Guapi, entre otros. Esta acción colectiva opera como un foro ambulante que recorre poblados y comunidades para “hacer práctica la resistencia”. Por ejemplo, cuando llegan al Yurumanguí, se quedan en El Nuevo Firme, el poblado que se reconstruye después de la masacre de abril de 2001 en el río Yurumanguí. En cada localidad que visitan se va sumando más gente negra y se realizan foros y conversatorios con las comunidades en la Iglesia, en la escuela o en el salón comunal. En estos foros se analiza la situación de las comunidades en medio del conflicto, cómo defender el territorio y cómo resistir la guerra. Al referirse a los impactos de la guerra, una de las líderes que participa en el viaje dice:

En el [río] Tapaje comprendemos el significado de la guerra, navegando por él observamos sus poblados abandonados. Nos enteramos de los cientos de familias desplazadas, nos agrada ver las fuerzas de contraguerrilla refugiándose en los caseríos, junto a las escuelas o en medio del río a menos de 50 mts. de los poblados, violando el Derecho Internacional Humanitario; nos duele ver cómo los programas gubernamentales de atención a las familias desplazadas atentan contra la dignidad de los pueblos; nos violenta la destrucción que las fumigaciones han provocado en los cultivos de pan coger, las huertas y los proyectos colectivos de las mujeres en San José. Pero también nos asombra la capacidad de resistencia de estos pueblos, que han dado en llamarse los resistentes y han conformado su asamblea, admiramos su tenacidad, preferirán morir en su territorio antes que abandonarlo, y disfrutamos los cantos de las mujeres que son su máxima expresión de resistencia.(Roa, 2007:4).

Este viaje es un acto creativo de resistencia civil que permite “la re-territorialización temporal” ya que las comunidades pueden expresarse en las reuniones que se hacen en los poblados a lo largo del recorrido y porque algunas comunidades ribereñas que estaban confinadas y atemorizadas por la guerra salen y hablan. También es una acción colectiva de fuerte contenido simbólico, aunque, por supuesto, sin el despliegue mediático que tiene la marcha desde el sur del país hasta Bogotá del profesor Moncayo. Esta acción de resistencia se puede llevar a cabo gracias al entramado organizativo de decenas de organizaciones étnico territoriales que existen en los ríos y que reciben a la comitiva, la hospedan, la alimentan y organizan las asambleas comunitarias. Buena parte de estas organizaciones surgen en el proceso de titulación de los territorios colectivos que permite la promulgación de la Ley 70.

El uso del Internet en la resistencia de las comunidades negras

Las comunidades negras de los ríos de Buenaventura y sus organizaciones étnicas territoriales han mostrado también una gran creatividad en el uso de Internet para hacer efectiva la resistencia. Internet es uno de los medios más eficaces mediante el cual las organizaciones de los ríos se comunican con el mundo, divulgan rápidamente información, “visibilizan” protestas y resistencias que son “invisibilizadas” por los medios masivos de información, solicitan el apoyo de la comunidad internacional y coordinan acciones y toman decisiones que hacen efectiva la resistencia. Como resultado de la compresión espacio temporal que ha introducido la revolución informática (Harvey, 1998), Internet le ha permitido a estas organizaciones romper las barreras físicas y geográficas que la topografía de la Costa Pacífica había impuesto por

siglos a los pobladores de los ríos o al *Litoral recóndito*. En efecto, antes de la masacre del río Naya, el Proceso de Comunidades Negras se comunica con el mundo a través del correo electrónico, anuncian esta masacre y solicitan la solidaridad internacional para detener la muerte. Después de la masacre, y ante un nuevo peligro de incursión paramilitar, emiten a la comunidad internacional el siguiente comunicado:

**** LLAMADO URGENTE DE ACOMPAÑAMIENTO INTERNACIONAL
PARA LAS COMUNIDADES DE LOS RÍOS NAYA, YURUMANGUI,
CAJAMBRE Y RAPOSO, AMENAZADAS POR LOS PARAMILITARES ****

Las comunidades que habitan los ríos Naya, Cajambre Yurumanguí y Raposo, en el Pacífico del Departamento del Valle del Cauca, han sido nuevamente amenazadas con una incursión de los paramilitares. En semana santa del 2001, una incursión de los paramilitares sobre el Alto Naya y los ríos Naya y Yurumanguí, dejó muchas personas de las comunidades muertas atrocemente y desplazadas de sus territorios. Las autoridades colombianas en todos los niveles conocen de esta alerta, igual a como sabían, desde diciembre del 2000 que podría haber una incursión sobre el Alto Naya. Por experiencia conocemos que estas mismas autoridades harán poco para proteger la vida, los territorios y derechos de nuestras comunidades, por lo anterior en defensa de las comunidades negras de esta importante región, estamos convocando a que en la medida de las posibilidades y del tiempo, organicen brigadas de voluntarios internacionales dispuesto a venir a Colombia y a acompañara en terreno a estas comunidades para evitar que nuevamente sean agredidas. Los estamos convocando a tocar todas las puertas para que el Estado colombiano adopte medidas reales y efectivas para proteger a estas comunidades. Podríamos haber escrito un mejor llamado, pero ustedes entenderán que tenemos la Vida y la Esperanza, colgando de un hilo y en esas circunstancias no hay mucho lugar para hacer literatura. Con nuestra tradicional afirmación de Vida y Alegría, Esperanza y Libertad, Equipo de Coordinación Nacional Proceso de Comunidades Negras en Colombia.

Igualmente, El Consejo Comunitario del río Yurumanguí denuncia ante el mundo las masacres en el río Naya y en el Yurumanguí y las amenazas por parte de los paramilitares para que abandonen el territorio.

En el río Yurumanguí, ubicado al suroccidente del municipio de Buenaventura [...] convivimos 4.000 personas, de los cuales 1.300 son menores de edad. Esta población pertenece en su totalidad a la etnia afrodescendiente. [...] Queremos decir que ejercemos control sobre este río y sus recursos hace un poco más de 200 años. [...] El 23 de mayo del año 2000, mediante resolución número 01131, emitido del gobierno nacional, se nos otorgó un título de propiedad colectiva por 54 mil hectáreas, el cual está bajo la administración del Consejo Comunitario. Pero este título de propiedad colectiva se ha convertido en un estorbo para el desarrollo de la política estatal y los agentes del capital trasnacional, quienes codician de sobremanera la riqueza en recursos naturales que posee nuestro territorio. Desde hace algo más de un año, los paramilitares [...] vienen amenazándonos con incursionar contra nosotros si no abandonamos el río. En abril del 2001, después de masacrar a 150 personas en el Alto Naya, entraron en nuestro río y en la vereda El Firme descuartizaron con hacha a 7 miembros de nuestro Consejo Comunitario que se dedicaban a la actividad de la pesca, lo que ocasionó el desplazamiento de 450 personas hacia el puerto de Buenaventura y 600 personas que se desplazaron dentro del río Yurumanguí. Como Consejo Comunitario organizamos y logramos el retorno de quienes se habían desplazado hacia Buenaventura. Ahora los paramilitares amenazan con invadirnos en estas

festividades navideñas y que los miembros de la Junta del Consejo Comunitario debemos abandonar el río o sus familiares que viven en la ciudad morirán. Queremos informarle a todo el mundo que así como nuestros mayores resistieron organizadamente a través de sus palenques a la invasión, nosotros también resistiremos política y organizativamente a través de nuestro Consejo Comunitario. [...] Como organización política estamos dispuestos a no abandonar nuestro río y para lo cual creemos que morimos con dignidad dentro del territorio ancestral que nos dejaron nuestros mayores. (Río Yurumanguí, a diciembre 22 del 2001)”

Este mensaje fue distribuido por correo electrónico el 23 de diciembre 2001. Es un testimonio de las atrocidades cometidas por los actores armados en contra de la gente negra. Y, como dice Oslender (2007: 5), “son una manera de escribir contra el terror y de construir contra-discursos para hacer frente al terror o, como podríamos decir, para enfrentar al terror en su lugar. La narración misma, el mensaje mandado al mundo constituye una resistencia a la elaboración cultural del miedo generalizado en las comunidades locales y rompe el silencio que el terror impone como estrategia de dominación”.

La globalización de la resistencia

Las anteriores estrategias de resistencia de las comunidades negras contra la guerra, el desplazamiento y la des territorialización son políticas localizadas que tienen éxitos relativos porque es el enfrentamiento de comunidades civiles desarmadas en contra de poderes armados muy poderosos y con un Estado débil que no garantiza la vida de los ciudadanos. Por esta razón, las comunidades negras y sus organizaciones étnicas territoriales comienzan a globalizar la resistencia. Le apuestan a la presencia en organismos internacionales y en foros mundiales para denunciar la guerra, solicitar el apoyo de la comunidad internacional, de las organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos y de la Iglesia para que tengan presencia en los territorios colectivos.

Recientemente, en la estrategia de internacionalización de la resistencia contra la guerra, AFRODES abrió una oficina con un representante en Washington que funciona como centro de información para los senadores norteamericanos y la población norteamericana en general. Las organizaciones de los ríos y sus líderes han elaborado un discurso de resistencia pacífica que entiende que esta es su mayor fortaleza, pero que ante un poder que se impone por la fuerza de las armas, comienzan a desarrollar, para la defensa de los territorios y de la vida, una resistencia globalizada contra la guerra. Es decir, a la resistencia desde lo local, pero manejando la escala nacional y global²²

La movilización en las calles

“La movilización del lugar” para resistir a los actores armados y oponerse a los resultados de la guerra es una resistencia civil no violenta que se lleva a cabo desde territorios que tienen un carácter rural y con los cuales la gente ha construido un fuerte

²² En la teoría de los movimientos sociales la escala geográfica es crucial. Esta debe ser entendida como escalas de resistencia de tal forma que solamente los movimientos que han sabido manejar este tipo de escalas han obtenido logros en su lucha. Ver Harvey (2003), Marston (2000), Miller (2000) y Oslender (2004a).

sentido del lugar. Esto en buena medida ha sido posible porque la resistencia se ha apoyado en entramados organizativos que surgen en la lucha de las comunidades negras por la titulación de territorios colectivos gracias a la estructura de oportunidad política que crea la Ley 70 de 1993.

Un atributo sociológico sobresaliente de esta resistencia es su carácter rural. Pero a medida que el enfrentamiento entre los actores armados se urbaniza o que el casco urbano de Buenaventura se convierte en escenario del enfrentamiento entre las bandas emergentes del paramilitarismo y las FARC por el control de la gente y de las rutas de la droga y de las armas, la resistencia también se urbaniza. Sin embargo, la resistencia urbana no tiene la misma organicidad que la que se presenta en los ríos y en los territorios colectivos de comunidades negras. Tal vez más que constituir formas de resistencia lo que se ha generado en el casco urbano de Buenaventura son formas de protesta de la gente negra.

El repertorio fundamental de la protesta urbana en contra de los impactos del conflicto ha sido la movilización y concentración en espacios abierto con una participación muy importante de manifestantes. La organización de las marchas ha sido “policlasista” y “multi institucional” en el sentido que han sido impulsadas por organizaciones de comunidades negras, por la Iglesia, la administración local y sectores de la producción.

Como se dijo antes, el 2007 es un año de ascenso sustancial del conflicto en Buenaventura. Este incremento es acompañado con la protesta de la gente en las calles. La protesta es descrita por la prensa en los siguientes términos:

BUENAVENTURA. Jornada inicia desde las 7:00 a.m., con una eucaristía en el barrio La Independencia

Porteños marcharán contra la violencia

Monseñor Héctor Epalza presidirá una ceremonia religiosa en memoria de las siete personas que perdieron la vida en el atentado terrorista del 21 de enero. La comunidad bonaerense paralizará sus actividades como resistencia a los actos de barbarie.

En los últimos dos años 797 personas han muerto de manera violenta en Buenaventura.

Redacción de El País

El dato clave

Una falsa alarma se vivió en los alrededores del terminal de transportes cuando fue abandonada una paleta de gas, que estaba vacía y sin ningún explosivo en su interior.

El programa será transmitido por las cuatro estaciones radiales de la localidad.

El espacio servirá para interceder lecturas, testimonios y que podamos sensibilizar en este día, aún más, a nuestra comunidad sobre estos hechos que no pueden volver a ocurrir”, precisó el Mandatario local.

“Buenaventura se une contra la violencia, no podemos ser indiferentes”, precisó Jaime Martínez, secretario de Gobierno.

Entre tanto, las autoridades locales señalaron que siguen trabajando para evitar que atentados como el ocurrido en el barrio Independencia se vuelvan a registrar.

El comando de la Segunda Brigada Fluvial de Infantería, con sede en el Puerto, anunció la llegada de nuevos refuerzos de unidades antiterroristas procedentes de la región Caribe.

Buenaventura. Hoy el Puerto se paralizará para rechazar las acciones de los violentos en un gesto simbólico que se cumplirá a las 10:00 a.m.

“La idea es que a esa hora en cualquier sitio en que se encuentren, todas las personas denuncien sus actividades para que los dignos no a los violentos”, dijo el alcalde Santo Quiñones.

De igual forma, monseñor Héctor Epalza Quintero, obispo de la Diócesis, presidirá a las 7:00 a.m. una liturgia que se llevará a cabo en la calle del barrio La Independencia, donde el pasado 21 de enero murieron seis personas y más de doce resultaron heridas como consecuencia de un atentado realizado, al parecer, por las milicias de las Farc.

“Es la oportunidad para que todos levantemos nuestra voz de rechazo a estos actos que simulan la destrucción en nuestra ciudad”, precisó Epalza.

Igualmente, al terminar la misa, el alcalde Quiñones realizará su tradicional programa “Aló alcalde” desde ese mismo sector con los familiares y vecinos de las personas que sufrieron los estragos de las dos bombas que explotaron al paso de una patrulla policial.

(Fuente: *El País*, 31-01-2007)

RECHAZO. Más de siete mil personas salieron a protestar ayer

Buenaventura le dio un no rotundo a los violentos

La serie de atentados con explosivos que azotaron la ciudad en la última semana y la muerte de una niña de 3 años en uno de ellos, condujeron a una masiva movilización ciudadana. El alcalde Saulo Quiñones anunció la creación de una mesa coordinadora para la paz.

Redacción de El País

Buenaventura. Más de siete mil personas marcharon ayer por las principales calles de la zona insular para protestar por la ola de violencia que azotó la ciudad la semana pasada.

La marcha, que inició a las 8:00 a.m., recorrió los barrios donde se originó la oleada terrorista que hace ocho días tuvo su punto más crítico con la muerte de tres personas, una de ellas una niña de 3 años.

Desde sectores como Lleras, Viento Libre, Muro Yusti, Pueblo Nuevo y La Playita emergieron mujeres y niños portando la bandera de Colombia, pañuelos y globos blancos para apoyar la movilización.

"Fue una gran demostración de repudio a los violentos, la gente rompió con la indiferencia, pues la tragedia del vecino no debe ser indiferente por el sólo hecho de que no le toca a uno. Más temprano que tarde podemos ser víctimas", dijo el alcalde Saulo Quiñones.

El alcalde Saulo Quiñones marchó por las calles del Puerto junto a miles de habitantes, quienes con arengas y pancartas rechazaron el accionar de los violentos.

"Este clamor de Buenaventura nos da aliento para lo que vamos a realizar el próximo jueves en Cali. Nuestro objetivo es seguir reclamándole a los violentos que dejen a la población civil por fuera del conflicto", destacó la gestora social del departamento, Monserrat Muñoz, quien marchó con el Alcalde.

"Este clamor de Buenaventura nos da aliento para lo que vamos a realizar el próximo jueves en Cali. Nuestro objetivo es seguir reclamándole a los violentos que dejen a la población civil por fuera del conflicto", destacó la gestora social del departamento, Monserrat Muñoz, quien marchó con el Alcalde.

Durante gran parte del recorrido la atención de los presentes se concentró en el afiche de Valentina Morales, la pequeña de 3 años, que fue víctima de

Valentina Morales, la niña de 3 años fallecida en Junchaco, se convirtió en el principal símbolo de la marcha.

la escalada terrorista ocurrida la semana pasada en el corregimiento de Junchaco.

Sus padres, familiares y amigos se unieron a la marcha para expresar su rechazo a los violentos.

"No queremos más pérdidas de vidas como la de Valentina. Esta es una confrontación desigualada y está jugando con el futuro de Buenaventura", manifestó el alcalde Quiñones.

Al final del recorrido, en la plaza del CAM, gran parte de la población paralizó sus actividades por quince minutos en rechazo a las acciones violentas que, en los últimos cinco años ha dejado más de 1.500 personas asesinadas.

Al concluir, Alcalde anunció la creación de una mesa de coordinación para la paz, a cargo de Jorge Moreno, quien interactuó con todos los sectores sociales del Puerto para buscar una salida a la crisis de violencia que afecta la ciudad.

El número
19
personas
perdieron la vida en atentados en lo que va del año: 15 asesinos y 4 muertos y 670 viviendas han sido afectadas.

Reacciones
"Para lograr la paz, lo que se requiere urgentemente en el Puerto son soluciones en materia de empleo".
Daniel Jaramilla, presidente de Sudec

"Con esta marcha, Buenaventura demostró que todos están interesados en conseguir la paz".
Héctor Manuel Aguirre, jefe mayor de la Brigada Fluvial de Marina.

(Fuente: *El País*, 30-06-2007, página 3B)

Marcha en Buenaventura

"No queremos que maten a nuestros jóvenes"

Más de dos mil personas marcharon en Buenaventura para protestar contra la oleada de violencia que azota al puerto y por el respeto a su territorio.

REDACCIÓN NACIONAL
Más de dos mil personas, entre habitantes de Buenaventura, organizaciones sociales y gobiernos extranjeros, marcharon por las calles de Buenaventura para protestar contra la creciente ola de violencia que azota el puerto y para exigir el respeto a la vida y su territorio.

Con arengas como "no queremos que maten a nuestros jóvenes" y "exigimos el respeto a nuestro territorio", los habitantes de Buenaventura gritaron su inconformismo ante la creciente violencia en el puerto. Así mismo, las víctimas del desplazamiento y del conflicto armado solicitaron en una audiencia pública que se llevó a cabo en el Coliseo de Buenaventura y que fue convocada por la Comisión de Derechos Humanos del Senado, que quiere la paz. La marcha partió desde el barrio Juan XXIII, donde las organizaciones sociales, las indígenas y la comuni-

dad afrodescendiente que habita el puerto y su área rural, solicitaron al gobierno nacional "voluntad política para solucionar los problemas que padecen los habitantes de Buenaventura en materia de salud, educación y empleo", manifestó Desiderio Valencia, líder cívico de la región.

"El mensaje que queremos transmitir es que Buenaventura quiere la paz y exigimos al gobierno nacional que invierta en el desarrollo del puerto, principalmente en el área del empleo", comentó Desiderio Valencia.

El líder cívico agregó que al desempleo se atribuyen gran parte del brote de violencia que le ha costado la vida a más de 265 víctimas en lo que va corrido del año.

En el Frente El Frial, la marcha se detuvo para dar paso a una representación dramática organizada por mujeres de la Ruta Pacífica, que vinieron desde diferentes partes del país.

Susana Pérez, integrante de la Ruta Pacífica de Mujeres regional Santander y quien acompañó la marcha, junto a una delegación de esta organización en el departamento, indicó que "las principales peticiones tienen que ver con la falta de empleo y salud en el caso de los indígenas, mientras que la población afrodescendiente, que asegura ser de casi el 50% en el país, exige el respeto a su territorio, que se termine el desplazamiento forzado al cual se han visto sometidos".

La comunidad afrocolombiana manifestó que los asesinatos hacia su población se acrecentaron en mayo, cuando se celebraba el mes de la afrocolombianidad.

Aida Oribio Granja, líder del Equipo Pastoral Afro, manifestó que "pedimos que

se nos respete el derecho a la vida y al territorio, porque ya hemos visto que los actores armados vienen por nuestros ríos, por nuestra madera, por nuestros recursos naturales".

Más de 800 personas de la comunidad afrocolombiana de Buenaventura y el Chocó, salieron a las calles a exigir la presencia del gobierno para hacerse cargo de la grave situación de orden público que aqueja al puerto.

"Nos sentimos satisfechos porque hace mucho tiempo no se presentaba una marcha así, la gente que tenía temor de salir, lo hizo. Lamentablemente, el temor a ser señalados y desplazados nos detiene a la hora de protestar, pero el jueves pudimos hacerlo", señaló Aida Oribio.

Representantes del go-

Delegadas de la organización social Ruta Pacífica de Mujeres se hizo presente en la movilización. Susana Pérez fue uno de los departamentos que hizo presencia durante la jornada de protesta.

bierno de Noruega, Suiza y Estados Unidos se hicieron presentes, así como los periodistas internacionales, quienes "se mostraron extrañados de que este pueblo exija la paz, cuando nunca la ha tenido", explicó Susana Pérez, a su regreso a Bucaramanga.

El viernes se llevó a cabo una audiencia pública en el Coliseo de Buenaventura. Las víctimas, las organizaciones sociales de Colombia y extranjeras se dieron cita para denunciar ante

la Comisión de Derechos Humanos, conformada por ocho senadores, los abusos de los actores armados hacia su comunidad.

El balance de la jornada fue calificado como "excelente" por parte de los líderes cívicos de Buenaventura, pero Susana Pérez manifestó que "hace falta más acompañamiento a las víctimas en este tipo de procesos, para que no tenga que revivir una y otra vez su dolor".

(Fuente: *Pr252D-1*)

SEGUIMOS ADELANTE

Ante los graves hechos terroristas perpetrados contra la población de Buenaventura durante el presente año, que han dejado un saldo trágico de víctimas, condenamos en forma enérgica este accionar de los grupos al margen de la Ley que se han instalado en nuestra ciudad y hacemos un llamado a todas las fuerzas vivas del país para que nos den su incondicional apoyo en tan difícil momento.

SEGUIMOS ADELANTE, A pesar de estos intentos de los violentos por detenernos.
 SEGUIMOS ADELANTE en nuestro trabajo diario por hacer de Buenaventura una ciudad cada vez mejor.
 SEGUIMOS ADELANTE en nuestro apoyo firme y decidido al Gobierno Nacional y sus Fuerzas Armadas y de Policía en sus planes por reconquistar la tranquilidad en nuestro territorio.
 SEGUIMOS ADELANTE en nuestro trabajo diario y continuo para hacer del nuestro el principal y más moderno Terminal Portuario del pacífico Latinoamericano.
 SEGUIMOS ADELANTE en nuestro esfuerzo por trabajar de forma decidida en el cubrimiento de las necesidades más apremiantes de los sectores vulnerables de nuestra población.
 SEGUIMOS ADELANTE por hacer de la nuestra una ciudad de la cual todos los colombianos puedan sentirse verdaderamente orgullosos.
 SEGUIMOS ADELANTE, porque tenemos biodiversidad, el mar pacífico, con gente buena, honesta y con una cultura rica en valores y principios.
 SEGUIMOS ADELANTE, porque los buenos somos muchos más.
 SEGUIMOS ADELANTE, porque somos una tierra acogedora de todas las etnias.
 SEGUIMOS ADELANTE, porque tenemos jóvenes emprendedores, adultos con deseos de vivir, niños con deseos de tener un futuro mejor, estamos vivos a pesar de las agresiones.
 SEGUIMOS ADELANTE, porque todos los días contamos con la Bendición de DIOS para trabajar por el desarrollo integral de la ciudad.
 SEGUIMOS ADELANTE, en el empeño que nos une con el Gobierno Nacional para el desarrollo del comercio internacional y hacer de Buenaventura el NODO PORTUARIO DEL PACIFICO COLOMBIANO

SEGUIMOS ADELANTE, porque somos la **BUENA.....VENTURA.**

FUERZAS VIVAS DE LA CIUDAD.

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.

CAMARA DE COMERCIO DE BUENAVENTURA

ASOCIACION COLOMBIANA DE INDUSTRIALES Y ARMADORES PESQUEROS -ACODIARPE

ASOCIACION DE TRANSPORTE MULTIMODAL - ASOTRAM

ASOCIACION DE PROFESIONALES DEL COMERCIO EXTERIOR - APROCOMEX

SECTOR ACADEMICO DE BUENAVENTURA (UNIVERSIDADES)

ALCALDIA MUNICIPAL DE BUENAVENTURA

DIOCESIS DE BUENAVENTURA

ASOCIACION DE COMERCIANTES DE BUENAVENTURA- ACOB

ASOCIACION BANCARIA - CAPITULO DE BUENAVENTURA

ASOCIACION DE OPERADORES PORTUARIOS -ASOPORT

Y DEMAS GREMIOS

Por lo tanto, el despliegue de todas estas acciones colectivas constituyen resistencias creativas, resistencias locales, pero también globales, que buscan defender la vida y preservar el territorio con el objetivo con de mantenerse como comunidades negras en lo que ellas llaman el territorio de los ancestros.

BIBLIOGRAFÍA

ANDERSON, Benedict (1993): *Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo*, México, Fondo de Cultura Económica.

AGUDELO, Carlos (2002): *Poblaciones negras y política en el Pacífico colombiano: paradojas de una inclusión ambigua*, París, Universidad de París III, Nueva Sorbona, Instituto de Altos Estudios de América Latina, Tesis Doctoral.

ALMARIO, Oscar (2004): “Dinámica y consecuencias del conflicto armado colombiano en el Pacífico: limpieza étnica y desterritorialización de afrocolombianos e indígenas y ‘multiculturalismo’ de Estado” e indolencia nacional”, en Eduardo Restrepo, Axel Rojas (Eds.): *Conflicto, e (in)visibilidad. Restos en el estudio de la gente negra en Colombia*, Popayán, Editorial Universidad del Cauca-Colección políticas de la alteridad, pp 73-118.

ÁLVAREZ, Sonia (2008): “ Beyond the Civil Society Agenda?: “Civic Participation” and practices of Governance, Governability and Governmentality”, Interrogating the Civil Society Agenda: Social Movements, Civil Society, and Democratic Innovation, An International Conference, University of Massachusetts Amherst Center for Latin American, Caribbean and Latino Studies, Amherst, April 24-27.

AGNEW, John (1987): *Place and Politics: The Geographical Mediation of State and Society*, Boston, Allen & Unwin.

AGNEW, John, DUNCAN, J. (eds): (1989) *The Power of Place: Bringing Together Geographical and Sociological Imaginations*, Londres, Unwin Hyman.

BLAIR, Elsa (2004): “Barbarie y crueldad o la profundización del dolor a través del cuerpo: códigos de un nuevo lenguaje de la violencia en Colombia, L. C. Castillo (Editor): *Colombia a comienzos del nuevo milenio: octavo coloquio nacional de sociología*, Cali, Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, Departamento de Ciencias Sociales, pp. 49-83.

BLOCH, Marc (1978): *La historia rural francesa : caracteres originales*, Barcelona, Crítica Grijalbo.

CABAL, Carlos Alfredo (1976): *Norte del Cauca. De la finca y la hacienda a la empresa agrícola*, Cali, Universidad del Valle, Centro de Investigaciones Multidisciplinarias en Desarrollo Rural, CIMDER.

CASTILLO, Luís Carlos (2006a): “El movimiento indígena colombiano: redes globales, alianzas geoestratégicas en la lucha por el territorio y resistencia glocalizada contra globalización y la guerra”, ponencia presentada en el 52º Congreso de Americanistas, Sevilla, España, 17-21 de julio.

CASTILLO, Luis Carlos (2006b): “Guerras, territorios de muerte y resistencia en Colombia”, en Heriberto Cairo y Jaime Pastor (Compiladores): *Geopolítica, guerras y resistencias*, Madrid, Trama Editorial.

CASTILLO, Luís Carlos (2007): *Etnicidad y nación. El desafío de la diversidad en Colombia*, Cali, Programa Editorial de la Universidad del Valle.

CASTILLO, María del Pilar (2007): “Buenaventura. La maldición de los malos vecinos”, *Posiciones*, Revista de la Universidad del Valle, N° 1, pp. 20-33.

CIDSE-CEDETES (2007): *Evaluación final al Plan de Desarrollo: Vamos juntos por el Valle del Cauca*, Cali, Universidad del Valle.

COMISIÓN DE ESTUDIOS SOBRE LA VIOLENCIA (1987): *Colombia: Violencia y democracia*, Informe presentado al Ministerio de Gobierno, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia.

Departamento Nacional de Estadística (DANE) (2006): *Colombia: una nación multicultural. Su diversidad étnica*, Bogotá, Dirección de Censos y Demografía.

DE ROUX, Gustavo (1991a): “Formación, disolución y recomposición del campesinado negro nortecaucano”, Cali, CIDSE, Universidad del Valle.

DE ROUX, Gustavo (1991b): “Orígenes y expresiones de una ideología liberal”, *Boletín socioeconómico*, N° 22, Cali, CIDSE, Universidad del Valle, pp. 3-26.

DURÁN, Mauricio (2006): *Movimiento por la paz en Colombia 1978-2003*, Bogotá, CINEP.

DURHEIM, Emilio (1994): *Las reglas del método sociológico*, Barcelona, Altaya.

EISINGER, Peter (1973): "The Conditions of Protest Behavior in American Cities" *American Political Science Review*, N° 67.

ESCOBAR, Arturo (1997): Cultural politics and biological diversity: State, capital, and social movements in the Pacific coast of Colombia, in L. Lowe y D. Lloyd (eds.): *The Politics of Culture in the Shadow of Capital*, Durham, Duke University Press, pp. 201-226.

ESCOBAR, Arturo (1999): "Comunidades negras de Colombia: en defensa de biodiversidad, territorio y cultura", *Biodiversidad*, n° 22, pp 15-20.

ESCOBAR, Arturo (2001): "Culture sits in Places: Reflections on Globalism and Subaltern Strategies of Localization", *Political Geography*, vol. 20, n° 2, pp. 139-174.

ESCOBAR, Arturo (2008): *Social Movements and Biodiversity Conservation in the Colombian Pacific*, Department of Anthropology, University of North Carolina, Chapel Hill.

ESPITIA, Néstor (2009): " ! No al relleno al sanitario! Protesta ambiental en el sur del Valle y norte el Cauca", Tesis de Maestría, Cali, Universidad del Valle, Maestría en Sociología.

EVANS, Ernest, (1983): "The Use of Terrorism by American Social Movements", en J. Freeman (Ed.): *Social Movements of the Sixties and Seventies*, New York & London, Longman.

FERNÁNDEZ, Carlos, DURÁN, Mauricio, SARMIENTO, Fernando (2004): *Movilizaciones por la paz en Colombia 1978-2002* (<http://www.c-r.org/our-work/accord/colombia/spanish/movilizacion.php>)

GARCÍA, Ana (2004): "perspectivas teóricas en el estudio de los movimientos sociales", *Circunstancia*, revista de Ciencias Sociales del Instituto universitario de Investigación Ortega y Gasset, Revista electrónica cuatrimestral ISSN 1696- 1277 Año I Número 3 enero de 2004.

GRUESO, Libia, ROSERO, Carlos and ESCOBAR, Arturo (1998): "The process of black community organizing in the southern Pacific coast region of Colombia", S. Alvarez, S. Dagnino and A. Escobar (eds): *Culture of Politics, Politics of Culture: Re-visioning Latin American Social Movements*, Oxford, Westview Press, pp. 196-219.

GUZMÁN, Álvaro (2007): "Reflexiones teóricas y metodológicas sobre acción colectiva conflictiva". Potenciada presentada en el IX Congreso Colombiano de Sociología, Balances y perspectivas nacionales y globales, Bogotá, 5-8 diciembre 2007.

HARVEY, David (1998): *La condición de la posmodernidad. Investigaciones sobre los orígenes del cambio cultural*, Buenos Aires, Amorrortu.

HARVEY, David (2003): *Espacios de esperanza*, Madrid, Akal-Cuestiones de Antagonismo.

HERNÁNDEZ, Jorge (2004): “Repertorios, marcos y entramados de resistencia civil en Colombia: los premios nacionales de paz, 1999-2002”, L. C. Castillo (Editor): *Colombia a comienzos del nuevo milenio: octavo coloquio nacional de sociología*, Cali, Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, Departamento de Ciencias Sociales, Universidad del Valle, pp. 209-229.

HERNANDEZ, DELGADO, Esperanza (2004): *Resistencia civil artesana de paz*, Bogotá, Editorial Pontificia Universidad Javeriana.

HOETMER, Raphael (2008): “Observaciones de un veedor. Reflexiones sobre la consulta vecinal de Ayabaca, Pacaipampa y Carmen de la Frontera y las posibilidades de construir democracias reales en el Perú”, ponencia presentada en el seminario Interrogating de Civil Society Agenda: Social Movements, Civil Society, and Democratic Innovation, Internacional Conference, Amherest, University of Massachussets Amherest, Center for Latin American, Caribbean and Latino Studies, Amherest, United State, April 24-27.

HUNTINGTON, Samuel (1991): *The Third Wave. Democratisation in the Late Twentieth Century*, Oklahoma, Norman Press.

IBAÑEZ, Ana María, MOYA, Andrés y VELÁSQUZ, Andrea (2006): *Hacia una política proactiva de la población desplazada*. Universidad de los Andes, Secretariado Nacional de Pastoral Social, USAID, Bogotá.

MARSTON, S. (2000): “The social construction of scale, *Progress in Human Geography*, 24 (2), pp. 219-242.

MARTÍ, Salvador (2005): “Sobre la emergencia y el impacto de movimientos indígenas en las arenas política de América Latina. Algunas claves interpretativas desde lo local y lo global”, S. Martí y J. Sanahuja (eds.): *Etnicidad, autonomía y gobernabilidad en América Latina*, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, pp. 367-398.

MCADAM, Doug, TARROW, Sidney, TILLY, Charles (2005): *Dinámica de la contienda política*, Barcelona, Hacer Editorial.

MELUCCI, Alberto (1985) “The Symbolic Challenge of Contemporary Movements”, en *Social Research* n° 52, vol. 4, pp. 789-816.

MEJÍA, Carlos (1988): “Ferrocarriles colombianos en el siglo XIX: inicio de una mentalidad moderna y tecnológica en el país”, *Revista Credencial Historia*, No. 102, pp. 8-12.

MEJÍA, Carlos (2007): *Ferrocarriles, sociedad y tecnología en Colombia: 1850-1990*, Cali, Universidad del Valle, Departamento de Ciencias Sociales y Económicas, Informe de Investigación.

MILLER, B (2000): *Geography and social movements: comparing antinuclear activism in Boston area*, Minneapolis, University of Minnesota Press.

MOORE, Donald, (2007): *Turf Wars. Territory and Citizenship in the Contemporary State*, University of California, Berkeley, Stanford University Press.

NACIONES UNIDAS (2005): *Colombia: Censo de cultivos de Coca*, Bogotá, Oficina Contra la Droga y el Delito, Gobierno de Colombia.

NACIONES UNIDAS (2007): *Colombia: Censo de cultivos de Coca*, Bogotá, Oficina Contra la Droga y el Delito, Gobierno de Colombia.

Observatorio Social de América Latina, OSAL, N° 18 (2006): Los movimientos sociales de Porto Alegre a Caracas. Dominación imperial y alternativas, Buenos Aires, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO.

OFFE, Clauss (1985): “New Social Movements: Challenging the Boundaries of Institutional Politics”, *Social Research*, Vol. 52 N° 4, Winter, 1985, New School for Social Research, New York.

OLZAK, Susan (2006): *The Global Dynamics of Racial and Ethnic Mobilization*, Stanford, Stanford University Press.

OLZAK, Susan (1989): “Analysis of events in the study of collective action” *Annual Review of Sociology*, Vol. 15, pp. 119-141.

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA BRISAS DEL RÍO AGUA BLANCA (2006) “Buenas Prácticas para superar el conflicto”, Comunicado de la organización, Buenos Aires, Cauca.

OSLENDER, Ulrich (1999): “Espacio e identidad en el Pacífico colombiano”, en J. Camacho y E. Restrepo (eds.): *De montes, ríos y ciudades: territorios e identidades de la gente negra en Colombia*, Bogotá, Instituto Colombiano de Antropología, pp. 25-48.

OSLENDER, Ulrich (2002): *The Logic Of The River: A Spatial Approach To Ethnic Territorial Mobilization In The Colombian Pacific Region*, Department of Geography, University of Glasgow, Glasgow, Scotland.

OSLENDER, Ulrich (2004a): “Fleshing out the geographies of social movements: Colombia’ Pacific coast black communities and the <<aquatic space>>”, Department of Geography, University of Glasgow, Glasgow, article in press for *Political Geography*.

OSLENDER, Ulrich (2004b) “Construyendo contrapoderes a las nuevas guerras geoeconómicas: Caminos hacia una globalización de la resistencia”, *Revista de Humanidades Tabula Rasa*, n° 2, pp. 59-78.

OSLENDER, Ulrich (2007): “estrategias y espacios de resistencia: desde la des-territorialización a la re-territorialización desde lo local, vía lo nacional, hacia lo global (y de vuelta a lo local)”, Universidad de Glasgow, Escocia, informe de investigación para el Proyecto Otros Saberes de LASA, Latin American Studies Association.

PÉCAUT, Daniel (2004): “Conflictos armados, guerras civiles y política. Relación entre el conflicto colombiano y otras guerras internas contemporáneas”, L. C. Castillo (Editor): *Colombia a comienzos del nuevo milenio: octavo coloquio nacional de sociología*, Cali, Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, Departamento de Ciencias Sociales, pp. 23-48.

PROGRAMA PRESIDENCIAL DE DERECHOS HUMANOS Y DIH, OBSERVATORIO (2003): *Colombia, conflicto armado, regiones, derechos humanos y DIH*, Bogotá, Presidencia de la República de Colombia.

PROCESO DE COMUNIDADES NEGRAS (PCN) (2007): “Planes de prevención y contingencia de Buenaventura. Una estrategia para la prevención del desplazamiento forzado y la disminución de los impactos causados por el conflicto armado”, Buenaventura, con el apoyo de *Waron Want*, el Proyecto Construcción de Paz y Movilidad Humana y El Comité Andino de Servicios.

RANDLE, Michael (1998): *Resistencia civil. La ciudadanía ante las arbitrariedades de los gobiernos*, Barcelona, Paidós.

ROA, Tatiana (2007): “Navegando el Pacífico. Campaña de resistencia a los agrocombustibles. Llenando tanques vaciando territorios”, Proceso de Comunidades Negras, mimeo.

ROMERO, Diego (1995): *Doblamiento y sociedad en el Pacífico colombiano. Siglos XVI al XVIII*, Cali, Editorial Universidad del Valle.

ROSERO, Carlos (2002): “Los afrodescendientes y el conflicto armado en Colombia: la insistencia en lo propio como alternativa”. En: Claudia Mosquera, Mauricio Pardo y Odile Hoffmann (eds.): *Afrodescendientes en las Américas. Trayectorias sociales e identitarias. (150 años de la abolición de la esclavitud en Colombia)*. pp. 547-559. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia/ICANHIRD-ILAS.

SMITH, Anthony (1986): *The Ethnic Origins of Nations*, Oxford , Blacwell.

TARROW, Sidney (2004): *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*, Madrid, Alianza-Ensayo.

TAUSSIG, Michael (1978): *Destrucción y resistencia campesina*, Bogotá, Punta de Lanza.

TOCQUEVILLE, Alexis (1991): *La Democracia en América*, Madrid, Tipolit, L. Faure.

TILLY, Charles (1984): “Terror, terrorism, terrorists”, en *Sociological Theory*, nº 22, pp.5-13.

TOURAINÉ, Alain (1981): *The Voice and the Eye: Un Analysis of Social Movements*, Cambridge, Cambridge University Press.

TOURAINÉ, Alain (2000): *¿Podremos vivir juntos? El destino del hombre en la aldea global*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.

TOURAINÉ, Alain (2005): *Un nuevo paradigma para comprender el mundo*, Barcelona, Paidós.

URREA, Fernando (2003): “Patrones de segregación urbana de la población afrocolombiana y migrantes recientes a causa del conflicto armado en Cali”, ponencia presentada en el simposio “Guerra en el Pacífico, Bogotá, Universidad Nacional.

URREA, Fernando y HURTADO, Teodora (2004): “Políticas y movimiento social negro agrario en el norte del Cauca”, O. Barbary, F. Urrea (Eds.) *Gente negra en Colombia. Dinámicas sociopolíticas en Cali y el Pacífico*, Cali, CIDSE-Universidad del Valle, pp.359-388.

URREA, Fernando (2007a): “La visibilidad estadística de la población afrodescendiente en Colombia, 1993-2005: entre lo étnico y lo racial”. Ponencia presentada en el “I Encuentro Taller Latinoamericano de Experiencias sobre Censos y Estudios de Población Afrodescendiente”, realizado en Caracas, 20-22 de junio de 2007.

URREA, Fernando, RODRIGUEZ, Cecilia, FOSTER, Badi (2007b): *Evaluación afrocolombiana. Medición del impacto de la asistencia de USAID-Colombia, Informe final, USAID, Bogotá.*

URREA, Fernando, VIÁFARA, Carlos (2005): *Informe final: Pobreza y grupos étnicos en Colombia. Análisis de los factores determinantes y lineamientos de política para su reducción. Equipo Cidse-Ird, sobre Minorías Étnicas, Universidad del Valle, Cali, Misión para el Diseño de una Estrategia para la Reducción de la Pobreza y la Desigualdad, Departamento Nacional de Planeación- BID.*

VELASCO, Álvaro (1982): “Génesis de un movimiento social”, Cali, EMCONDES.

VELASCO, Iván (1990): “Movimientos sociales y régimen municipal en Santander de Quilichao, monografía de pregrado para optar al título de sociólogo, Programa de Sociología, Cali, Universidad del Valle.

WEST, Robert (1957): *The Pacific Low Lands of Colombia*, Baton Rouge, Louisiana State University Press.

WHITTEN, Norman (1986): *Black Frontiersmen: Afro-Hispanic Culture of Ecuador and Colombia*, Prospect Heights III, Waveland Press.

YUNDA, Ana Claudia (1993): “La estructura del poder política clientelista en el norte del Cauca”, monografía de grado para optar al título de socióloga, Programa de Sociología, Cali, Universidad del Valle.



**UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y
ECONÓMICAS**

**CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DOCUMENTACIÓN
SOCIOECONÓMICA-CIDSE**

**INFORME FINAL DEL PROYECTO:
DESIGUALDADES ÉTNICO RACIALES, ACCIÓN COLECTIVA,
ETNICIDAD Y RESISTENCIA EN EL NORTE DEL CAUCA Y
SUR DEL VALLE
CONVOCATORIA INTERNA DE LA VRI 2006**

**GRUPO DE INVESTIGACIÓN:
ACCIÓN COLECTIVA Y CAMBIO SOCIAL**

PARTE III

**ACCION COLECTIVA Y FORMACION DE ESTADO EN LA
REGION: NORTE DEL CAUCA – SUR DEL VALLE**

**Profesor Investigador:
Álvaro Guzmán B.
Profesora Investigadora Asociada (I Semestre de 2008):
Renata Moreno**

**Monitores del Proyecto
Yeison Andrey Salazar
Jasmany Lozano (agosto 2007 – junio 2008)**

CALI, ABRIL DE 2009

ACCION COLECTIVA Y REGION: EL NORTE DEL CAUCA Y SUR DEL VALLE (2006-2007).

Álvaro Guzmán Barney¹

En este artículo se busca caracterizar las principales formas de acción colectiva en un conjunto de municipios del norte del Cauca y del sur del Valle que denominaremos “Región Norte-Sur”. Se trabaja con el supuesto de que estas formas de acción colectiva son la expresión de características estructurantes, tanto de la sociedad como del Estado en el ámbito regional. La tesis central argumenta sobre una combinación de formas de acción colectiva, entre formas vinculadas al conflicto político armado, esencialmente rural, y formas vinculadas a la criminalidad organizada y al espacio urbano. De manera significativa, en medio de formas altamente organizadas y violentas de conflicto, la región deja entrever intersticios de manifestaciones propiamente “*sociales*” de la acción colectiva, vinculadas en parte con temas étnicos, pero también con otros temas, algunos tradicionales como los conflictos clasistas y otros indicativos de la emergencia de una sociedad distinta. La tesis describe entonces el “acorralamiento” en el que se mueve la acción colectiva societal y el rasgo dominante de estructuración de la sociedad, a partir de la criminalidad y el recurso a la violencia. Es en este contexto en el que interviene de manera contradictoria el Estado y en el que la sociedad va definiendo un rumbo que no es necesariamente el de la civilidad y la democracia.

Este trabajo sigue en la línea de esfuerzos anteriores que caracterizaron dinámicas regionales de criminalidad y violencia en el Cauca y en el Valle (Guzmán, 2003) o que se propusieron una primera descripción de las acciones colectivas regionales (Guzmán, 2007a). Se sigue, de manera no ortodoxa, un enfoque tilleano que tiene que ver con una concepción de Acción Colectiva y su manera de estudiarla empíricamente (Tilly, 1978) y por otro lado, con el rol que este concepto juega en la formación de la sociedad moderna y del Estado (Tilly, 1992).

La visión general que se maneja en el artículo, contrasta con el enfoque que sostiene el informe sobre Desarrollo Humano para Colombia del PNUD (2003) y retoma problemas planteados, especialmente por Fernán González, en una parte del estudio sobre el Magdalena Medio (González, 2006). En la parte final de este artículo se sintetiza la visión que se tiene de la Región, una vez realizado el análisis, en el contexto de planteamientos recientes de otros investigadores. El informe: “El Conflicto: callejón con salida” considera que: “...el conflicto se ha ensañado, sobretodo, en la ‘periferia’ campesina y ha sido marginal al sistema político colombiano” (PNUD, 2003: 21). Del papel del conflicto en la periferia, el informe deriva la importancia y persistencia de la insurgencia armada en Colombia, pero también sus límites, ya que al mismo tiempo, existiría para los autores una democracia en el “centro” del País. A pesar de lo dicho, el informe reconoce -aunque no aclara ni explica- que: “...aunque el conflicto exista *principalmente* en la ‘periferia’, su raíz, su motor y su objetivo están *principalmente* en el ‘centro’” (Ibid: 42). Nuestro trabajo se propone mostrar como el conflicto atraviesa la sociedad en sus zonas centrales y como se reproduce en las periféricas, y argumenta el carácter precario de la democracia y del Estado central, intensamente permeados por la

¹ Profesor Titular, Departamento de Ciencias Sociales, Universidad del Valle, miembro del Grupo de Investigación “Acción Colectiva y Cambio Social”.

criminalidad. La deuda con Fernán González y de manera más general con el CINEP, es demasiado grande y requiere su momento propio para evaluarla reflexivamente. Solo puedo decir que me identifiqué con su interés, mostrado de tiempo atrás, por estudiar la manera como se ha conformado la nación colombiana, el aporte de las regiones, la relación entre luchas sociales y políticas, el surgimiento de nuevas identidades en medio del conflicto armado y lo esquivo que ha resultado el Estado de Derecho (González, 2006).

Desde el punto de vista metodológico, hemos querido mostrar que una dinámica de violencia y criminalidad se relaciona en la Región con formas de Acción Colectiva y que esta puede tener rasgos interesantes para el análisis, tanto en su interpretación cuantitativa como cualitativa. En el marco del proyecto se produjo un documento en el que se precisan los retos de una nueva forma de estudiar la acción colectiva vinculando el tema de la criminalidad, se define la acción colectiva y algunos de sus rasgos cuantificables (Guzmán, 2007b). La información agregada utilizó datos proporcionados por la Policía Nacional (Revista Criminalidad y Regionales de la Policía, Cauca, Valle y Metropolitana de Cali). Los hechos de acción colectiva son el producto de una revisión minuciosa del diario El País durante los años 2006 y 2007.

Este trabajo de investigación tiene por marco el Proyecto: “Desigualdades étnico-raciales, Acción Colectiva y resistencia en el norte del Cauca y Sur del Valle”, financiado por la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Valle, adelantado conjuntamente entre los Grupos de Investigación “Migración, Urbanización é Identidad de las Poblaciones Afrocolombianas” y “Acción Colectiva y Cambio Social”, adscritos al CIDSE de la Universidad del Valle.² El trabajo que se presenta es, a su vez, el fruto de una investigación de grupo. A lo largo de todo el Proyecto me colaboró como Monitor el estudiante de Sociología Yeison Salazar y durante un semestre el también estudiante de Sociología Jasmany Lozano. Durante un semestre tuve el apoyo de la socióloga Renata Moreno³. En las circunstancias de la universidad pública en Colombia, es necesario reconocer la financiación interna que se tuvo de la Vicerrectoría de Investigaciones, el apoyo con un tiempo apreciable del Departamento de Ciencias Sociales y el apoyo logístico, abnegado, del CIDSE⁴.

El artículo se divide en cuatro partes. En la primera se presenta el contexto de criminalidad y violencia de la Región, con datos agregados y de manera comparativa. La segunda parte describe los hechos de acción colectiva conflictiva, identificados y sistematizados a partir de una lectura minuciosa del diario El País. La tercera presenta un análisis de cinco “escenarios” de acción colectiva en la región que consideramos

² Mis agradecimientos a los colegas Luís Carlos Castillo y Fernando Urrea, miembros del primer Grupo y a Jorge Hernández Lara y Mario Luna, compañeros de ruta en el Grupo sobre Acción Colectiva y Cambio Social. Sus comentarios fueron claves para lograr concreción en mis ideas, asunto nunca bien logrado de parte mía.

³ El trabajo de Yeison Salazar fue particularmente dedicado y desarrollado con gran calidad: desde la construcción de instrumentos de recolección de datos, elaboración de bases de datos, hasta la interpretación y redacción de informes preliminares. He mantenido varias de sus intuiciones é ideas que son prometedoras. La colega Renata Moreno tuvo una dedicación puntual, pero mostró una gran capacidad para asimilar el proyecto y redactar un excelente documento de base sobre la movilización indígena. Mis disculpas por no haber dejado el sello de ambos como hubiera querido, en el fondo por razones interpretativas mías. Mis reconocimientos intelectuales para todos.

⁴ Gracias puntuales a Olga Lucia Villa, Rocío Recalde y Jackeline Hernández, todas atentas y colaboradoras, aunque unas más silenciosas que la otra.

relevantes para describir la estructuración de la sociedad regional. Iniciamos intencionalmente con el escenario de la criminalidad organizada, continuamos con el de conflicto político armado, luego con el escenario (genérico) de luchas sociales, enseguida con el específico de las acciones colectivas y movilizaciones indígenas y terminamos con el caso de Buenaventura, como caso resumen y paradigmático. La parte final caracteriza la Región Norte-Sur sobre la base de la información previa y muestra las dificultades de estructuración de la sociedad y el Estado, allí donde la criminalidad tiene un peso específico tan significativo en la modernización de la sociedad. En esta parte la interpretación regional se hace en relación con planteamientos de otros autores en estudios regionales.

PRIMERA PARTE: CONTEXTO DE CRIMINALIDAD Y VIOLENCIA.

La Acción Colectiva no se puede identificar con la violencia, aunque mostraremos en la segunda parte de este informe la medida en que la acción colectiva y la violencia pueden relacionarse. Pero es pertinente y no puede menospreciarse una descripción del “medio violento” en que se desarrolla la acción colectiva. En esta sección buscamos entonces caracterizar el contexto de violencia homicida de la Región, ampliado con una caracterización de la criminalidad asociada con la violencia.

Inicialmente se muestra la tendencia de los homicidios en Colombia, contrastándola con la de los dos departamentos y la Región. De manera muy significativa, la tendencia del Valle muestra tasas más altas que las colombianas, las del Cauca más bajas que éstas y las regionales una situación intermedia entre los dos departamentos. La tendencia de la Región en el tiempo es a tomar los rasgos del departamento del Valle (ver Grafica 1). En un segundo momento, se hace el mismo ejercicio de comparación con datos de criminalidad, mostrando esa intrigante tendencia inversa a los homicidios y, de nuevo, la tendencia de la Región a similar a la del Valle (ver Gráfica # 2). En tercer lugar, se maneja un indicador de “Delitos Asociados con la Violencia” (DAV), con el que se hace un análisis desagregado por municipios de la Región. Finalmente se presentan algunas conclusiones.

1.1. Los Homicidios, tendencias generales: Colombia, Valle, Cauca y Región Norte-Sur (1981-2007).

Teniendo en cuenta la tasa de homicidios para Colombia, sobresale la tendencia continuamente creciente entre 1983 y 1991, cuando la tasa pasa de 32 a 81, en nueve años, y la tendencia decreciente, desde ese año hasta 1998, cuando llega a 59. Desde este año hasta 2002, la tasa aumenta notablemente hasta llegar a 70 en cuatro años y, desde este año hasta 2007, la tasa desciende notablemente para llegar a 39. Se presentan entonces en las tasas nacionales dos picos: uno más pronunciado en 1991 con una tasa de 81 y otro en 2002 con una tasa de 70. La interpretación de esta situación privilegia, para la primera coyuntura, una combinación del conflicto dependiente de la confrontación guerrilla-Estado con el auge del narcotráfico. Esta coyuntura se contrarresta parcialmente, con los efectos de la Constitución del 91. La segunda coyuntura tiene que ver con la agudización del conflicto armado con guerrilla, los paramilitares y la Fuerza Pública, coyuntura que se contrarresta, también parcialmente, con la política de Seguridad Democrática del Gobierno, especialmente con la

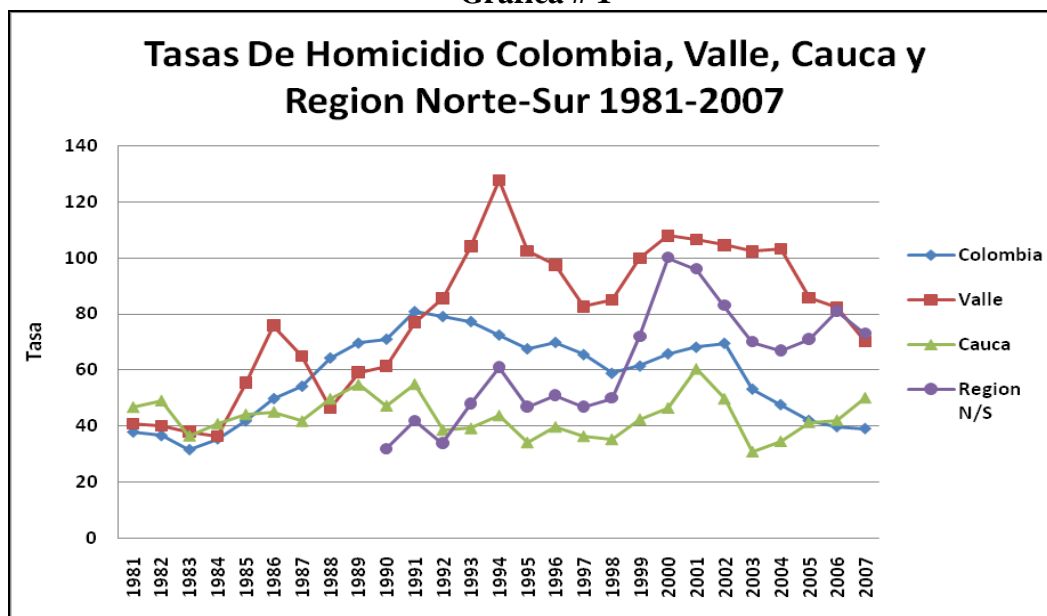
desmovilización de los grupos para-militares.

Con referencia al Departamento del Valle, en los años 80's sobresale la coyuntura entre 1984 y 1986, muy específica si se la compara con la evolución de las tasas para Colombia. Si nos concentramos, por otro lado, en el período 1990-2007, se debe destacar otra particularidad: el Departamento tiene de nuevo una trayectoria con tasas mucho más altas que las colombianas. Entre 1990 y 1992, la tasa promedio para el Departamento es de 75. Esta tasa aumenta a 111 para el período 1993-1995, siendo 1994 el año pico con una tasa de 128. La tasa promedio desciende para el período 1996-1998 a 88 y, de nuevo, aumenta durante el período 1999-2004, cuando llega a un promedio de 103, con una tasa pico, en el año 2000, de 108. El último período, 2005-2007 tiene una tasa promedio de 79. Entonces, dos coyunturas en el Departamento del Valle desde 1990: la de 1994, marcada por el clímax de actividad del llamado cartel de Cali y la del 2000, marcada por la entrada de los para-militares al Departamento y la confrontación con la guerrilla.

Entre 1981 y 1984, el Cauca tiene tasas promedio más altas que las de Colombia y el Valle. Pero, a partir de 1985, el Departamento del Cauca muestra tasas más bajas que las otras dos. El promedio entre 1985 y 1989 es de 47 y llega a un promedio de 50 entre 1990-1991. Desciende notablemente durante el período 1992-1998, después de la Constituyente y el proceso de Paz con el M-19, a un promedio de 38 y aumenta notablemente entre 1999 y 2002 para llegar de nuevo a 50, desciende por un corto período, entre 2003 y 2004, cuando llega a un promedio de 33 y, contrario a lo que sucede a nivel nacional y del Valle, aumenta durante el período 2005-2007 cuando llega a 50. La particularidad de las tasas del Cauca se relaciona con que son significativamente menores que las del Valle, siguen trayectorias que se pueden asociar mejor con dinámicas del conflicto político armado y, en el último período, muestra aumentos, en contravía de lo que sucede en el País o en Valle, como resultado de la política de Seguridad Democrática.

La información para los municipios del norte del Cauca y sur del Valle desde 1990, comparada con la información para Colombia, Valle y Cauca, se presenta en la Gráfica 1. La tasa empieza en 1990 con 32, su punto mas bajo. Tiene una tendencia creciente hasta 1994, cuando se ubica en 61, solo con un ligero descenso en 1992. Como es típico en las cuatro agregaciones analizadas, en 1995 la tasa desciende con relación al año anterior y fluctúa en niveles similares hasta 1998 con un promedio de 49. En los años 1999 y 2000, hay un incremento muy significativo en la tasa, duplicándose en solo dos años de 50 a 100. En estos años, las tasas de la Región se acercan mucho más a las del Valle que a las del Cauca, como había sucedido hasta entonces. A partir de 2001 la tasa desciende continuamente hasta 2004 cuando se ubica en 67, para luego tener un pequeño incremento en 2005 y 2006 hasta llegar a 81. En el ultimo año, el 2007, la tasa vuelve a descender para finalizar el periodo en 73, superando ligeramente la del Valle.

Gráfica # 1



Fuentes: Revista Criminalidad de Policía Nacional.
Estadísticas delincuenciales Policía Cauca, Valle y Metropolitana de Cali.
Estadísticas de población Dane – Estimaciones y proyecciones en base a censo 2005.

En síntesis, se debe destacar el aumento en las tasas nacionales, departamentales y regionales a partir de 1999. Entre este año y 2007, las tasas más altas son las del Valle, seguidas por las regionales, después por las nacionales y finalmente por las del Cauca. De manera irregular y distinta en cada caso, desde el año 2000 y 2001, las tasas disminuyen hasta el 2003-2004, cuando la tasa del Cauca y la nacional son las más bajas y las tasas del Valle y de la región son las más altas. En los cuatro últimos años, las tasas nacionales y del Valle disminuyen, mientras que las del Cauca y la Región aumentan, esta última con una disminución en el último año 2007, aunque ligeramente superior a la del Valle (73 y 70 respectivamente). La inquietud que surge es por indagar las razones del aumento de las tasas entre 1998 y 2000 o 2001, el descenso desde ese año hasta 2003 y el aumento posterior en las tasas del Cauca y de la Región. La interpretación de contexto “político” induce a pensar en el auge del conflicto armado de diverso origen desde 1998 hasta 2000 y un mayor control sobre éste desde 2001 y, posteriormente, la desmovilización de grupos para-militares. Los aumentos de los dos últimos años para el Cauca y para la Región requieren alguna explicación preliminar que en este momento no tenemos.

1.2. Los Delitos: Colombia, Valle, Cauca y Región Norte-Sur (1981-2007).

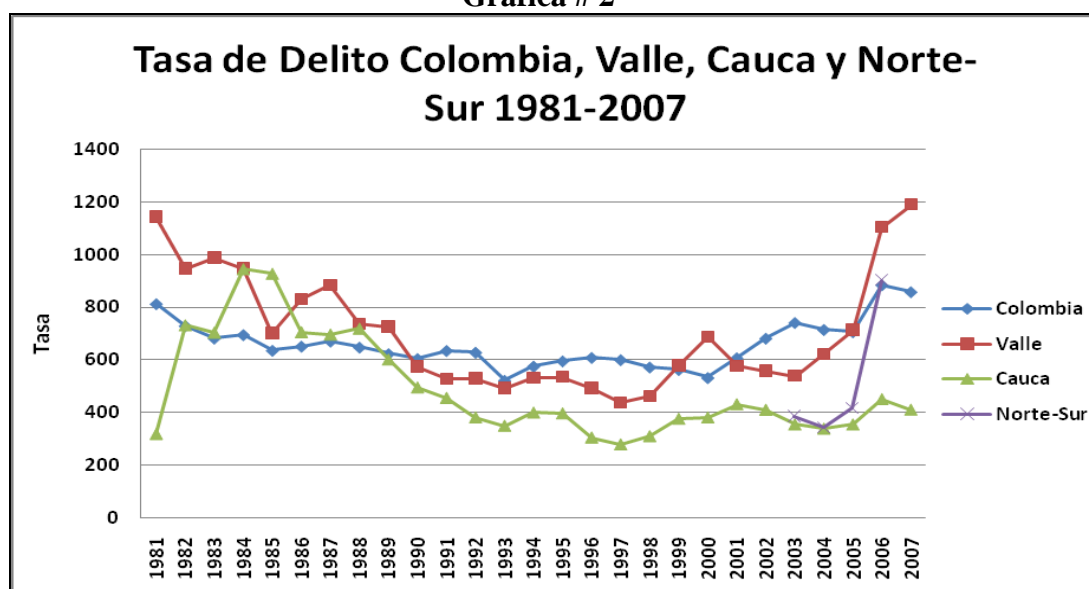
Si tenemos en cuenta los delitos globales denunciados ante la Policía Nacional, las tasas son decrecientes de manera general y con excepciones puntuales, entre 1981 y 1997-1998, aunque para Colombia se extiende hasta el año 2000. A partir de 1998 y 2001 para Colombia se pasa a una tendencia al aumento de las tasas. En Colombia y Valle son cercanas (tasas promedio de 702 y 686 respectivamente), mientras que la del Cauca es más baja (tasa de promedio de 382). Para el año 2006, la tasa de Colombia y Cauca alcanzan uno de sus niveles más altos -por lo menos desde 1993- llegando la primera a 884 y la segunda a 451, para luego tener una pequeña reducción en 2007. En el caso del

Valle, la tasa no disminuye de 2006 a 2007, sino que continua aumentando, luego de un aumento significativo de 2005 a 2006, cuando pasa de 712 a 1103 en un solo año.

La información para la Región Norte-Sur, solamente está disponible desde 2003, cuando la tasa regional es de 386, baja a 344 en el 2004 y aumenta de manera notable en los dos años siguientes para llegar a 901 en el 2006, es decir una tasa similar a la nacional, por encima de la del Cauca, pero por debajo de la del Valle.

Como se ha mostrado en otros trabajos, la tasa de delincuencia tiende a aumentar, cuando la de homicidios disminuye, e inversamente, seguramente como un efecto de una reducción o de un aumento (en el segundo caso) en la impunidad que se genera en una situación de conflicto violento agudo, acompañada de una alta proporción de delito “oculto” o no denunciado a las autoridades. Sin embargo, entre el 2004 y el 2006, en la Región hay un aumento de la criminalidad y de los homicidios, aunque mucho mas de la primera que de los últimos.

Gráfica # 2



Fuentes: Revista Criminalidad de Policía Nacional.

Estadísticas delincuenciales Policía Cauca, Valle y Metropolitana de Cali.

Estadísticas de población Dane – Estimaciones y proyecciones en base a censo 2005.

1.3. Delitos Asociados con la Violencia y Región Norte-Sur (2003-2007).

Para hacer un diagnóstico más detallado de la situación regional y por municipios, se ha construido un indicador de “Delitos Asociados con la Violencia (DAV)” que incluye homicidios, lesiones personales y hurtos; delitos de mayor cuantía y significación. Este indicador tiene una tasa promedio anual de 258 para el período 2003-2006 para todos los municipios de la Región “Norte-Sur”. Ésta tasa es aproximadamente la mitad de la tasa promedio del total de delitos para el mismo período y los mismos municipios (519). La tasa es de 214 en el 2003, baja a 180 en el 2004 y sube de manera muy pronunciada en el año 2006 para llegar a 415. En éste año como ya vimos, aumenta la tasa de delitos y homicidios, pero también la de los Delitos Asociados con la Violencia (ver Tabla 1.1).

Tabla # 1. 1.
Frecuencias y Tasas de Delitos, Delitos Asociados con la Violencia (DAV) y Homicidios en Región Norte-Sur 2003-2007:

Año	Delitos	Tasa	DAV	Tasa	Homicidio	Tasa
2003	4672	386	2587	214	769	64
2004	4287	344	2240	180	838	67
2005	5314	417	2698	212	902	71
2006	12057	901	5554	415	1059	79
2007	----	----	----	----	947	74
Prom.	6583	519	3270	258	903	71

Teniendo en cuenta la distribución porcentual anual de los Delitos Asociados con la Violencia, se observa un aumento relativo de los homicidios entre 2003 y 2004, cuando llegan al 37.4% de los casos y una disminución relativa desde ese año hasta el 2006, cuando llegan al 19.1% del total de DAV. Las lesiones aumentan de manera notable entre 2003 y 2005 cuando llegan al 45.2% de los casos y disminuyen al 36.4% en 2006. Los hurtos tienen un comportamiento irregular: suman 46.8% de los casos en 2003, bajan a 21.4% en 2005 y vuelven a aumentar a 44.5% en 2006. Para el conjunto del período analizado, 44.3% de los DAV son lesiones, 28.4% hurtos y 27.3% son homicidios (ver Tabla # 1.2). Cada uno de estos indicadores esta relacionado con escenarios de conflicto distintos o pueden aparecer combinados en un mismo escenario, pero en su conjunto dan cuenta de una forma de sociedad altamente convulsionada por el conflicto violento. Esta es una situación de contexto que se reflejara entonces en el campo mas especifico de la Acción Colectiva.

Tabla # 1.2.
Distribución Porcentual Anual de los DAV en Región Norte-Sur 2003-2006

Año	Homicidio	Lesiones	Hurtos	Total	N=
2003	29,7	23,5	46,8	100,0	2587
2004	37,4	40,3	22,3	100,0	2240
2005	33,4	45,2	21,4	100,0	2698
2006	19,1	36,4	44,5	100,0	5554
Prom.	27,3	44,3	28,4	100,0	3270

1.4. DAV por municipio en Región Norte-Sur.

Al discriminar las tasas de DAV por municipio de la Región Norte-Sur y para el período 2003-2007 encontramos variaciones muy grandes, desde una tasa máxima de 443 para Palmira y una mínima de 23 para Jámbalo (ver Tabla # 1.3).

Tabla # 1. 3
Promedios generales de DAV en municipios Región Norte-Sur 2003-2007

Municipio	Homic. Prom.	Tasa	Hurtos Prom.	Tasa	Lesiones. Prom.	Tasa	Total DAV Prom. anual	Tasa DAV
Palmira	216	76	695	245	345	122	1256	443
Buenaventura	283	86	358	109	333	101	974	297
Candelaria	25	35	113	161	69	98	206	294
Pradera	30	62	66	135	43	88	139	286
Jamundí	84	88	123	127	65	67	271	282
Santander	58	73	82	103*	51	64*	190	240*
Florida	68	121	35	63	30	54	133	239
Villa Rica	7	51	13	91*	11	79*	31	220*
Pto. Tejada	49	112	26	60*	16	37*	93	211*
Padilla	4	43	6	69*	2	24*	12	138*
Caloto	20	62	12	32*	14	38*	46	125*
Corinto	17	61	9	32*	7	23*	33	119*
Miranda	10	30	14	43*	12	37*	37	113*
Suárez	4	21	5	25*	7	36*	16	82*
Morales	5	20	4	16*	5	22*	14	56*
Buenos Aires	10	38	3	11*	4	13*	15	55*
Toribio	4	14	0	1*	11	40*	14	54*
Caldoso	5	16	4	13*	4	14*	12	40*
Jámbalo	1	7	1	4*	2	16*	3	23*
Total	903	71	1450	114*	928	73*	3270	258*

*Los promedios para los municipios del Cauca están hasta 2006 por falta de los datos del año 2007.

Los cinco municipios con tasas de DAV mayores a 260 para el período 2003-2007, tienen la siguiente composición porcentual promedio general de sus DAV:

Tabla 1.3a

Municipio - Tasa DAV	% Hom	% Les	% Hur	Total	N Prom. =
Palmira - 443	17.3	27.1	55.6	100,0	1256
Buenaventura - 297	31.9	31.3	36.7	100,0	974
Candelaria - 294	12.7	31.1	56.2	100,0	206
Pradera - 286	29.8	36.1	34.0	100,0	139
Jamundí - 282	33.3	24.5	42.2	100,0	271

Palmira y Candelaria tienen un perfil similar de DAV con una proporción relativamente menor de homicidios y mayor de hurtos; mientras que Buenaventura y Jamundí tienen un porcentaje relativamente mayor de homicidios, aunque los hurtos siguen siendo ligeramente predominantes. Por su parte en Pradera, los homicidios tienen el porcentaje menor, pero las lesiones son levemente mayores que los hurtos. Esta diferenciación es clave y remite a inserciones distintas del crimen organizado o bien de la llamada criminalidad “común” en cada caso. Es notable la asociación que se puede hacer entre las tasas más altas de DAV y municipios con mayor desarrollo socio-económico.

Los ocho municipios que siguen, tienen tasas de DAV entre 240 (Santander de

Quilichao) y 113 (Miranda). La distribución porcentual de sus DAV es la siguiente:

Tabla 1.3b

Municipio - Tasa DAV	% Hom	% Les	% Hur	Total	N prom =
Santander - 240	30.1	26.9	43.0	100.0	190
Florida - 239	59.1	18.7	22.2	100.0	133
Villa Rica - 220	22.8	35.8	41.5	100.0	31
Puerto Tejada - 211	54.2	17.5	28.3	100.0	93
Padilla - 138	32.6	17.4	50.0	100.0	12
Caloto - 125	44.3	30.1	25.7	100.0	46
Corinto - 119	53.0	19.7	27.3	100.0	33
Miranda - 113	28.8	32.9	38.4	100.0	37

En este caso se distinguen cuatro perfiles distintos. En Florida, Puerto Tejada y Corinto, la situación de homicidios es aguda, con porcentajes superiores en cada caso al 50.0%, mientras que las lesiones tienen porcentajes menores al 20.0%. En Caloto los homicidios también son predominantes (44.3%), pero las lesiones (30.1%) son mayores que los hurtos (25.7%). En Santander y Padilla el porcentaje de homicidios es intermedio, oscilando alrededor del 30.0% y los hurtos poseen el porcentaje mayor, de 43.0% y 50.0% respectivamente. Por último en Villarrica y Miranda el porcentaje de homicidios es menor sin superar el 30.0%, mientras que los hurtos son mayores, pero relativamente menor al perfil de los municipios anteriores. Estos municipios están en el corazón de la zona plana agroindustrial más reciente de la Región norte-sur.

Finalmente, hay seis municipios con las tasas más bajas de DAV, entre 82 (Suárez) y 23 (Jámbalo).

Tabla 1.3c

Municipio - Tasa DAV	% Hom	% Les	% Hur	Total	N prom=
Suárez - 82	25.4	44.4	30.2	100.0	16
Morales - 56	33.3	38.9	27.8	100.0	14
Buenos Aires - 55	56.9	24.1	19.0	100.0	15
Toribio - 54	23.2	75.0	1.8	100.0	14
Caldono - 40	32.7	34.7	32.7	100.0	12
Jámbalo - 23	15.4	69.2	15.4	100.0	3

De acuerdo a la participación de homicidios se pueden destacar dos perfiles. Uno, el caso de Buenos Aires con un porcentaje de homicidios muy alto, superior al 50.0%, pero con un porcentaje de hurtos menor. El otro perfil está dado por porcentajes mayores de lesiones, destacándose los casos de Toribio y Jámbalo alrededor del 70.0%. En éste último municipio, así como en Caldono, el porcentaje de homicidios y hurtos coinciden en su magnitud, aunque Caldono muestra porcentajes doblemente mayores. En Suárez los homicidios tienen un menor porcentaje, mientras que en Morales y Toribio los homicidios son sustancialmente mayores que los hurtos, principalmente en éste último municipio, donde el porcentaje de hurtos es apenas de 1.8%. Estos municipios son de ladera y con una población indígena muy significativa en los casos de Toribio, Caldono y Jámbalo.

Si se tienen en cuenta las *trayectorias* de los distintos municipios en cuanto a homicidios y DAV, se pueden destacar ciertos casos (ver Tabla 1.4). De manera agregada, como ya hemos dicho, la Región muestra un aumento en las tasas de homicidio y DAV para el año 2006. Para el año 2007, la de homicidios disminuye un poco, mientras que de los DAV lamentablemente no se tiene información completa. Al discriminar la situación por municipio, encontramos los siguientes rasgos en algunos de ellos:

La tasa de DAV de Palmira es pronunciadamente creciente entre 2003 y 2006, cuando llega a 883, pero su tasa de homicidios es relativamente estable en el período, alrededor de 76 (17.3% de los DAV). Es un caso de “criminalización” notable en el período.

La tasa de DAV de Buenaventura, pasa de 252 en 2003 y llega a 412 en 2007, mientras que la tasa de homicidios pasa de 85 a 120 en 2006 y desciende a 91 en 2007. En promedio del periodo, los homicidios son el 31.9% del DAV, indicando una grave situación combinada de delincuencia y violencia que tiene su punto más álgido en 2006.

La tasa de DAV de Jamundí, pasa de 199 en 2003 a 365 en 2007, mientras que la de homicidios pasa de 77 a 114 en 2004 (en un solo año) y llega a 91 en 2007. El municipio muestra una dinámica más acentuada de violencia que de delincuencia, pero de todas maneras, aumenta.

Entre 2003 y 2007, la tasa de DAV de Florida pasa de 219 a 269. Sus tasas de homicidio tienen el promedio más alto de la región en el periodo, comenzando con una tasa de 159 en el 2003 para llegar a 131 en 2006 y caer de manera muy importante a 62 en 2007. Es un caso de violencia homicida muy acentuada, pero que tiende a disminuir en los últimos años.

Puerto Tejada, aumenta su tasa de DAV de 112 en 2003 a 268 en 2006. Pero sucede una situación particular con la tasa de homicidios que pasa de 49 en 2003 a 183 en 2005 (casi se multiplica por cuatro, en dos años), a 152 en 2006 y a 103 en 2007. Se debe tener en cuenta que en 2005, 56.3% de los DAV de Puerto Tejada fueron homicidios. Este es un municipio de la parte plana del Cauca con una fuerte implantación de la agroindustria azucarera y sin presencia significativa de la guerrilla.

Pradera, aumenta notablemente sus tasas de DAV que pasan de 96 en 2003 a 634 en 2007, pero tiene tasas de homicidio mas o menos estables en los distintos años. Padilla, Corinto, Miranda y Morales tienen tasas decrecientes de homicidio entre 2003 y 2007.

Los municipios con tasas de DAV inferiores a 100 tienen también tasas bajas de homicidios, aunque con picos en algunos años: Toribio en 2005 tiene una tasa de DAV de 109 y Suárez en 2006 de 130.

Finalmente Jámalo, un municipio con importante población indígena tiene tasas de DAV y de homicidio bajas. Los homicidios son el 15.4% de los DAV y se presentan sólo en los años 2004 y 2006.

Tabla # 1. 4
Municipios NS: Tasas de Homicidio y Tasas DAV por año: 2003-2007.

TASAS DE HOMICIDIO Y DAV PARA MUNICIPIOS REGION NORTE-SUR POR AÑO 2003-2007												
Municipio	2003		2004		2005		2006		2007		2003-2007	
	Tasa Hom	Tasa DAV	Tasa Hom	Tasa DAV	Tasa Hom	Tasa DAV	Tasa Hom	Tasa DAV	Tasa Hom	Tasa DAV	Tasa Hom	Tasa DAV
Palmira	81	304	70	354	66	688	79	883	84	493	76	443
Candelaria	51	273	46	256	27	137	25	504	28	295	35	294
Buenaventura	85	252	82	220	89	205	120	383	91	412	86	297
Jamundí	77	199	114	248	87	160	69	422	91	365	88	282
Santander	57	244	64	210	65	279	72	226	77	---	73	237*
Florida	159	219	118	199	136	198	131	305	62	269	121	239
Villa Rica	21	163	42	332	70	230	68	155	54	---	51	218*
Pto. Tejada	49	112	63	135	183	325	152	268	103	---	112	210*
Pradera	61	96	46	98	63	174	62	406	78	634	62	286
Padilla	46	47	47	191	60	120	48	193	36	---	43	138*
Caloto	41	107	27	82	49	165	64	145	115	---	62	140*
Corinto	80	169	57	134	60	92	41	86	52	---	61	118*
Miranda	51	148	34	131	24	81	26	96	20	---	30	111*
Suárez	10	36	36	83	10	78	37	130	21	---	21	82*
Morales	29	69	21	79	8	37	16	40	24	---	20	56*
Buenos Aires	28	21	19	62	33	45	61	89	65	---	38	55*
Toribio	4	16	19	58	15	109	11	29	22	---	14	53*
Caldono	13	48	7	23	6	45	22	44	26	---	16	40*
Jámbalo	0	46	7	21	0	14	7	13	20	---	7	23*
Total	70	214	67	180	71	212	78	414	74	---	71	257*

1. 5 Conclusiones.

- 1) La Región Norte-Sur alcanza una tasa muy alta de homicidios en el año 2000 cuando llega a 100. Desde este año, la tasa desciende, irregularmente, hasta llegar a 67 en el 2004. Pero, a partir de este año, la tasa aumenta de nuevo y llega a 78 en el 2006. En el 2007 desciende a 74, tasa cercana a la del Departamento del Valle. En síntesis, los años 2000 y 2006 son años pico de violencia homicida en la región Norte-Sur que llega a tener tasas similares a las del Departamento del Valle en los años 2006 y 2007.
- 2) La criminalidad global aumenta en la Región entre 2004 y 2006, al mismo tiempo que los homicidios. La criminalidad asociada con la violencia (DAV) también aumenta durante estos años, pero muy especialmente en el 2006. En consecuencia: aumenta la criminalidad y aumenta la violencia homicida en la Región a finales del periodo de estudio. Esta situación se refleja en la composición de los DAV en la Región para el período 2003-2006: el 27.3% fueron homicidios, 44.3% lesiones y 28.4% hurtos.
- 3) Para los años 2003-2006, la violencia homicida es altamente diferenciada por municipios. En el 2004, las tasas más altas están en los municipios de Florida (118), Jamundí (114), Buenaventura (82), Palmira (70) y Santander (64). Pero,

en 2006, las tasas más altas son las de Puerto Tejada (152), Florida (131), Buenaventura (120), Palmira (79) y Santander (72). Si se tiene en cuenta la trayectoria desde el 2003 al 2006, la tasa de homicidios pasa en Buenaventura de 85 a 120, en Puerto Tejada de 49 a 152 y en el caso de Florida disminuye, pero con tasas muy altas que pasan de 159 a 131.

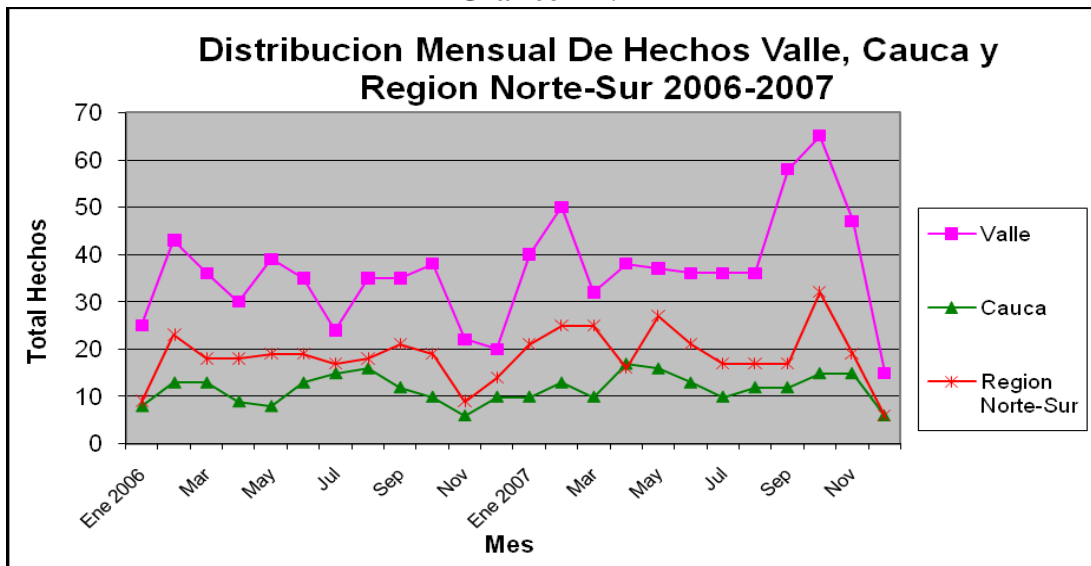
- 4) Si los datos de los DAV se discriminan por municipio para el período 2003-2006, se presentan perfiles bien distintos. La tasa más alta de DAV es la de Palmira, pero en su caso solamente el 17.3% son homicidios. Buenaventura tiene una tasa más baja, pero 31.9% de sus DAV son homicidios. En el caso de Florida este porcentaje es de 59.1% y en el de Puerto Tejada de 54.2%. Algunos municipios tienen tasas de DAV relativamente estables, mientras que las de homicidio disminuyen y otros municipios pueden tener tasas de DAV y de homicidios bajas. Los indicadores de violencia homicida y de delincuencia asociada con la violencia pueden funcionar de manera contraria en cada situación.
- 5) La situación de la Región es intermedia entre el perfil del Valle y el del Cauca, pero las cifras muestran una tendencia que se aproxima al perfil que presenta el departamento del Valle del Cauca. La diferenciación por municipios es muy alta. Hay municipios “establecidos” como Palmira, con tasas altas de DAV, aunque no tan altas de homicidios. Hay municipios que tienen tasas altas de DAV y tasas altas de homicidios, como Buenaventura. Hay municipios en los que la proporción de homicidios es muy alta, en relación con los DAV (Florida, Puerto Tejada) y hay municipios con tasas bajas de DAV y proporciones bajas de homicidios (Toribio, Jámalo). Queda por establecer las posibles razones que subyacen a esta diferenciación.
- 6) Para la investigación, interesa subrayar el contexto marcado de criminalidad y violencia de la Región, en medio del cual se da la acción colectiva. Los niveles altos y coyunturales de violencia homicida y delincuencia remiten a pensar en dinámicas de conflictos armado y/o de delincuencia organizada, que no son los tradicionales del conflicto político armado (solamente) y que pueden tener por escenario los municipios de la parte plana, con un proceso importante de urbanización. Por su parte, los niveles bajos de violencia homicida en la Región pueden asociarse con municipios predominantemente indígenas.

SEGUNDA PARTE: ACCION COLECTIVA CONFLICTIVA Y REGION NORTE-SUR.

Para los años 2006 y 2007 se identificaron 1154 acciones colectivas en los dos Departamentos, con la misma metodología utilizada en trabajos anteriores (Guzmán, 2007). De estas, 75.3% (872) sucedieron en el Valle del Cauca y 24.7% (285) en el Cauca. Del total de acciones colectivas, 38.7% (447) corresponden a la Región Norte-Sur y son el centro de atención del presente análisis.

El gráfico # 2.1 muestra la trayectoria mensual de las acciones para los dos años. Se presentan caídas importantes hacia finales de ambos años y un momento de frecuencias muy altas en Octubre 2007, la cual coincide con las elecciones regionales. Durante el primer año, se identificaron en los dos departamentos 515 acciones colectivas (44.6%); durante el segundo aumentaron notablemente a 639 (55.4%), especialmente en septiembre, octubre y noviembre de 2007. El gráfico compara la evolución de las acciones colectivas en los dos departamentos con la Región.

Gráfico # 2.1



Del total de acciones de la Región, 70.5% (315) correspondieron a acciones desarrolladas en jurisdicción de municipios del Departamento del Valle y 22.1% (99) sucedieron en municipios del Departamento del Cauca. El 7.4% de las acciones sucedieron en más de un municipio de la región, o bien, en municipios de la región y de otros municipios de los dos departamentos o de la región y otros municipios de otros departamentos del país. Las frecuencias por municipios de la región Norte-Sur se presentan en la Tabla # 2.1.

Tabla # 2.1
Distribución de Hechos de Acción Colectiva por Municipios 2006-2007

MUNICIPIO	Frecuencia	Porcentaje
Buenaventura	190	42,5
Palmira	49	11,0
Florida	31	6,9
Jamundí	26	5,8
Santander	16	3,6
Toribio	13	2,9
Pradera	11	2,5
Caldono	10	2,2
Caloto	10	2,2
Corinto	9	2,0
Candelaria	8	1,8
Puerto Tejada	8	1,8
Jámbalo	7	1,6
Buenos Aires	5	1,1
Miranda	4	0,9
Morales	4	0,9
Suárez	4	0,9
Villarrica	3	0,7
Guachené	2	0,4
Padilla	1	0,2
Varios región norte-sur	4	0,9
Varios n/s y otros de ambos dptos.	25	5,6
Varios dptos. Con norte-sur	7	1,6
Total	447	100,0

Sobresalen los casos de Buenaventura con 42.5% de los casos, seguido por Palmira con 11.0%. Son las ciudades más grandes de la Región, pero la primera refleja una forma de conflicto muy acentuado, vinculado con la acción colectiva.

Si se reagrupan los demás municipios con un cierto criterio de proximidad y pertenencia a un departamento, tenemos que, entre Florida y Pradera, se presentan 9.4% de los casos, mientras que Jamundí y Candelaria concentran 7.6%. Con referencia al Departamento del Cauca: Toribio Caldono y Jámbalo concentran 6.7% de las frecuencias; Santander, Morales y Buenos Aires: 5.6%: Caloto, Corinto, y Miranda: 5.1% y Puerto Tejada, Villarrica, Guachené y Padilla: 3.1%. En Varios municipios de la Región se presentaron 0.9%. Las acciones colectivas que tuvieron lugar en Varios municipios de la Región y en Otros municipios de los dos departamentos sumaron 5.6%; En Municipios de la Región y en Varios departamentos: 1.6%.

2.1. Acción Colectiva, Sector rural-urbano, Espacio e Impacto de los hechos.

En la tabla # 2.2 se presenta la información sobre el sector rural/urbano de los hechos observados en la Región norte-sur, comparada con la información para cada

departamento y para los dos departamentos en su conjunto. 42.7% de los hechos de la región suceden en cabeceras municipales con más de 50.001 habitantes. Para este rango, el porcentaje es sólo del 6.0% para el Cauca y de 62.5% para el Valle. Hay entonces un porcentaje considerable de acciones que tienen lugar en agrupaciones urbanas “grandes”. 16.3% de los hechos regionales suceden en la zona rural de municipios con cabeceras mayores a 50.001 habitantes, es decir, con núcleos urbanos considerables que son, como ya se observó, espacios de concentración de la acción colectiva. En esta categoría, el porcentaje para el Cauca es sólo de 2.8%. El porcentaje regional siguiente, 11.0%, sucede en el sector rural de municipios con cabeceras menores a 20.000 habitantes, considerados como “pequeños”. Un porcentaje muy similar de hechos regionales, 10.5%, suceden en espacios rurales de municipios con cabeceras entre 20001 y 50000 habitantes. Un porcentaje que no es menospreciable, el 7.2%, que relativamente es mayor al que corresponde a los otros dos departamentos, sucede en el sector urbano de municipios con cabeceras entre 20.001 y 50.000 habitantes, considerados como “medianos”. 4.3% de los hechos son urbanos con cabeceras hasta de 20.000 habitantes y 5.6% se caracterizaron como hechos fundamentalmente urbanos. En suma, 59.8% de los hechos regionales se pueden entender como claramente “urbanos” y 40.2% como rurales, aunque 26.8% de los hechos que son rurales, suceden en municipios con cabeceras de más de 20.000 habitantes. Lo urbano juega, en consecuencia, un papel importante en la acción colectiva regional.

Tabla # 2.2.
Distribución Porcentual del Sector en Donde Ocurre el Hecho

SECTOR	Región	Valle	Cauca	Total
Urbano con cabecera hasta 20000 hab.	4,3	2,8	14,5	5,8
Urbano con cabecera entre 20001 y 50000 hab.	7,2	3,6	3,9	3,4
Urbano con cabecera con más de 50001 hab.	42,7	62,5	6,0	48,7
Rural con cabecera hasta 20000 hab.	11,0	6,3	57,8	18,9
Rural con cabecera entre 20001 y 50000 hab.	10,5	4,5	6,0	4,8
Rural con cabecera con más de 50001 hab.	16,3	14,3	2,8	11,7
Varios municipios, fundamentalmente urbano	5,6	4,5	2,5	4,0
Varios municipios, fundamentalmente rural	2,5	1,6	6,4	2,8
Total	100,0	100,0	100,0	100,0
N=	447	872	282	1154

La Tabla # 2.3 presenta la información sobre *el espacio* en el que ocurren los hechos. Los hechos suceden fundamentalmente en el espacio urbano de *la calle* (30.2%). Pero el porcentaje que sigue hace referencia al *campo abierto rural* (23.9%). De manera significativa, el espacio de la acción colectiva tiene porcentajes relevantes en los *recintos cerrados* (19.5%) o bien en los *medios de comunicación* (6.9%). Las *carreteras* o vías intermunicipales juegan también un papel importante como espacios de la acción colectiva, pero sucede lo contrario con los espacios tradicionales de la acción colectiva, abiertos y urbanos, como pueden ser las *Plazas* y *los Parques públicos*. Se presentan variaciones significativas al comparar con las distribuciones de los dos departamentos. La *calle* tiene una mayor significación en el Valle, el *campo abierto* en el Cauca, el *recinto cerrado* y los *medios de comunicación* en el Valle, la *carretera* en el Cauca. El perfil de la región se aproxima más al del Valle.

Tabla # 2.3.
Espacio Donde Ocurre El Hecho de Acción Colectiva

ESPACIO	Región	Valle	Cauca	Total
Calle (Urbano)	30,2	36,1	9,9	29,5
Recinto Cerrado	19,5	25,9	16,7	23,7
Campo Abierto (Rural)	23,9	15,0	50,7	23,8
Medio de Comunicación	6,9	7,1	1,8	5,8
Carretera	9,6	5,8	12,1	7,4
Recinto Abierto (Plaza, Parque Urbano)	1,8	1,9	1,4	1,8
Sin Información	8,1	8,0	7,4	7,9
Total	100,0	100,0	100,0	100,0
N=	447	872	282	1154

En cuanto al *Impacto* de los hechos (ver Tabla 2.4), una abrumadora mayoría tiene un impacto regional puramente *local* (78.1%). En 13.7% de los casos regionales, el impacto de los hechos llega al nivel de uno de los departamentos o de ambos, cifra que no se puede menospreciar (“impacto regional en el Valle y en el Cauca”). En 7% de los hechos hay impacto en varios departamentos o bien se presenta un impacto nacional. Hay un impacto internacional en 1.1% de los hechos de Acción Colectiva. Aunque la conexión con temas locales es muy clara, la relación con la región y la nación deben tenerse en cuenta.

Tabla # 2.4.
Impacto del Hecho de Acción Colectiva

IMPACTO	Región	Valle	Cauca	Total
Impacto Local	78,1	78,4	67,0	75,6
Impacto Regional Valle	6,3	8,6	1,4	6,8
Impacto Regional Cauca	5,4	0,2	22,3	5,6
Impacto Regional Valle y Cauca	2,0	0,7	2,8	1,2
Impacto en Varios Departamentos	0,7	0,5	2,8	1,0
Impacto Nacional	6,3	8,1	3,2	7,0
Impacto Internacional	1,1	3,3	0,4	2,6
Sin Información	0,2	0,1	0,0	0,0
Total	100,0	100,0	100,0	100,0
N=	447	872	282	1154

2.2. Participantes y posición del actor.

Se debe tener en cuenta que para 77.9% de los casos regionales no se obtuvo información sobre el número de participantes (ver Tabla 2.5). El 22.1% restante se distribuye así: 8.5% son acciones colectivas hasta con 15 participantes, 3.8% tuvieron entre 16 y 200 participantes, 3.6% entre 201 y 800 participantes y la no despreciable cantidad de 6.4%, más de 801 participantes. En síntesis, se identificaron pocas acciones según el número de participantes, pero se lograron detectar cerca de 30 con más de 801 participantes.

Tabla # 2.5.
Numero de Participantes en el Hecho de Acción Colectiva

NUMERO DE PARTICIPANTES	Región	Valle	Cauca	Total
1 - 15 Participantes	8,5	12,3	5,7	10,6
16 - 200 Participantes	3,8	3,7	2,5	3,3
201 - 800 Participantes	3,6	3,5	1,8	3,1
801 y mas Participantes	6,2	5,3	4,2	5,1
No hay Información o es imprecisa	77,9	75,2	85,8	77,9
Total	100,0	100,0	100,0	100,0
N=	447	872	282	1154

En el estudio de la acción colectiva se ha privilegiado la descripción del actor contendor subalterno. En esta investigación identificamos, en primer lugar, al actor “desencadenante” de la acción colectiva que hace parte de una “relación social de conflicto”. Posteriormente identificamos al “actor contendor” y finalmente, nos preguntamos por el rol “dominante o dominado” del actor que desencadena la acción. El resultado de este ejercicio es que en muchas oportunidades se presentan acciones colectivas (no rutinarias) desencadenadas desde un actor dominante.

En cuanto al actor “desencadenante” (tabla 2.6), encontramos que en la Región el 34.5% son las Fuerzas Armadas y de Seguridad del Estado, cifra que muestra iniciativa de su parte, aunque es relativamente mayor en los dos departamentos. Este porcentaje es del 38.2% para el Valle y del 44.7% para el Cauca. La guerrilla tomó la iniciativa en 25.5% de los hechos regionales, contra 32.6% en el Cauca y 13.6% en el Valle. Los grupos de para-militares y autodefensas tuvieron 1.3% de iniciativa regional, porcentajes similares a los del Valle y del Cauca. Autoridades publicas, patronos y gremios tuvieron iniciativa en 2.0% de los casos. De manera muy significativa, el porcentaje restante 26.4% (excluyendo 10.3% sin información) fueron acciones colectivas con iniciativa de ciudadanos, incluyendo desplazados, indígenas, obreros y empleados públicos y privados, trabajadores informales, organizaciones de base, campesinos y otros. Muy importante entonces la reacción desde el Estado, la iniciativa de la guerrilla, la participación menor en este período de los para-militares y, en medio de este conflicto armado, las acciones colectivas que denominamos “*sociales*”.

Tabla # 2. 6.
Caracterización Socio-Económica del Actor Desencadenante

CARACTERIZACION SOCIO-ECONOMICA	Región	Valle	Cauca	Total
Miembros de Fuerzas Armadas y Seguridad	34,5	38,2	44,7	39,8
Miembros de grupos de Guerrilla	25,5	13,6	32,6	18,2
Ciudadanos – Desplazados	11,2	13,0	2,1	10,3
Indígenas	4,3	0,5	7,8	2,3
Empleado Publico	3,1	3,8	1,1	3,1
Empleados y Obreros Privados	1,8	1,8	0,0	1,4
Trabajadores Informales	1,3	0,9	0,4	0,8
Miembros Grupos Paramilitares y Autodefensa	1,3	1,3	1,4	1,3
Autoridades y Directivas Publicas	1,1	1,3	1,1	1,2
Estudiantes	1,1	2,6	1,1	2,3
Propietarios, Patronos y Gremios	0,9	1,4	0,0	1,0
Organizaciones de Base	0,7	1,6	0,0	1,2
Campesinos	0,7	0,8	1,4	1,0
Otros	2,2	5,0	0,7	4,1
Sin Información	10,3	14,2	5,7	12,1
Total	100,0	100,0	100,0	100,0
N=	447	872	282	1154

Con referencia al actor contendor (ver tabla 2.7), las autoridades y directivas públicas tienen el mayor porcentaje de 24,6%, seguido de los miembros de grupos de guerrilla con 22,1%. Las Fuerzas Armadas y de Seguridad son contendoras en 14,3% de los casos y los ciudadanos-desplazados en 10,1%. Entre los porcentajes restantes que son menores, se destaca un 7,8% contra narcotraficantes y un 3,1% contra organizaciones políticas y de base. Los patronos y propietarios privados son contendores en un 2,7%, pero en el Valle es mucho mayor, 6,3%. Similarmente la delincuencia común participan con un porcentaje igual al anterior y mucho mayor en el Valle, 7,2%.

Tabla # 2.7.
Caracterización Socio-Económica del Actor Contendor

CARACTERIZACION SOIO-ECONOMICA	Región	Valle	Cauca	Total
Autoridades y Directivas Publicas	24,6	26,0	16,3	23,7
Miembros de grupos de Guerrilla	22,1	15,1	32,3	19,4
Miembros de Fuerzas Armadas y Seguridad	14,3	8,7	17,4	10,8
Ciudadanos – Desplazados	10,1	8,8	9,9	9,1
Narcotraficantes	7,8	11,7	5,3	10,1
Organizaciones de Base y Políticas	3,1	3,2	2,2	2,9
Patronos - Propietarios, Sector Privado	2,7	6,3	2,8	5,5
Delincuentes Comunes	2,7	7,2	2,1	5,9
Indígenas	1,8	0,7	1,8	1,0
Empleado Publico	1,6	2,2	1,4	2,0
Empleados y Obreros Privados	1,6	1,8	0,8	1,5
Miembros de Paramilitares y Autodefensa	0,9	1,8	1,8	1,8
Estudiantes	0,5	0,7	0,7	0,6
Campesinos	0,4	0,5	2,1	0,9
Desmovilizados	0,2	0,2	0,0	0,2
Trabajadores Informales	0,0	0,6	0,3	0,4
Otros	2,0	1,5	0,7	1,4
Sin Información	3,6	3,0	2,1	2,8
Total	100,0	100,0	100,0	100,0
N=	447	872	282	1154

La Tabla 2.8 presenta información sobre la presencia “en la escena” de los actores involucrados y la direccionalidad, dominante o dominada, que se le puede atribuir al hecho, teniendo en cuenta la posición del actor desencadenante en una relación de conflicto entre dos. 41.4% de las acciones observadas en la región indican la presencia en la escena de los dos actores y un carácter “dominante”, mientras que en 35.3% de los casos también hay presencia de los dos actores, pero con sentido “dominado”. Los porcentajes también son mayores para la perspectiva dominante, cuando hay presencia de un actor, o cuando no hay presencia de actores. En 4.3% de los casos no hay direccionalidad clara en la relación social. Esta información indica entonces un predominio regional de las acciones desencadenadas desde posiciones de poder “dominantes”. Se presenta un porcentaje un poco más bajo, pero muy significativo de acciones colectivas desde posiciones de poder “dominadas”.

Tabla 2. 8
Presencia y Direccionalidad del Hecho de Acción Colectiva

PRESENCIA Y DIRECCIONALIDAD	Región	Valle	Cauca	Total
Dos actores – Dominante	41,4	44,0	53,2	46,3
Dos actores – Dominada	35,3	29,5	26,2	28,7
Actor desencadenante – Dominante	6,5	4,9	7,8	5,6
Actor desencadenante – Dominada	2,2	2,8	2,1	2,6
Actor contendor – Dominante	5,8	9,4	5,3	8,4
Actor contendor – Dominada	2,2	1,8	2,8	2,1
Dos actores - Sin claridad	2,5	3,4	0,7	2,8
Un actor – Sin claridad	1,8	2,2	0,4	1,7
Ningún actor	2,2	1,9	1,4	1,7
Total	100,0	100,0	100,0	100,0
N=	447	872	282	1154

2.3. Tema, Modalidad, Uso de violencia y Medios de la acción.

Independientemente del rol del actor en la acción, es importante identificar el “tema” del conflicto (ver Tabla 2.9). Aproximadamente, 57.1% de los casos se refiere ya sea a Enfrentamientos con la guerrilla por el control estatal (43.8%), a acciones que tienen que ver con el Narcotráfico (10.8%), o bien al Control territorial para-estatal (2.5%). Adicionalmente, 4.5% de los casos tiene que ver con el tema de la seguridad ciudadana y la lucha contra la delincuencia. Por otro lado, el Estado se encuentra involucrado en acciones que implican a la Administración Pública en diversos campos, como las Políticas estatales de diverso orden, los Servicios del estado, Conflictos políticos, Sistema electoral, Ministerio Público, entre otros. En su conjunto estas acciones colectivas suman alrededor de 19.6% de los casos. Hay conflictos que se refieren a temas laborales y salariales, tierras, vivienda, economía informal y espacio público, precios, utilidades y propiedad, los cuales suman aproximadamente 15.1% de los casos. Finalmente, hay temas Generacionales, Religiosos, Educativos, De Convivencia ciudadana, Derechos Humanos y DIH, los cuales suman aproximadamente 4.7% de los casos.

Tabla # 2. 9.
Tema del Hecho de Acción Colectiva

TEMA	Región	Valle	Cauca	Total
ECONOMICO				
Infraestructura	4,5	3,8	0,0	2,8
Laboral Salario	2,9	3,0	0,4	2,3
Tierras	2,0	0,7	5,6	1,9
Precios (Tarifa - Matriculas)	1,1	1,1	0,0	0,9
Ganancias – Utilidades	0,9	1,1	0,0	0,9
Economía Informal-Espacio Publico	0,7	1,3	0,4	1,0
Propiedad	0,7	3,2	0,4	2,5
Vivienda (Invasión - Desalojos)	0,4	1,5	0,0	1,1
Recursos Naturales y Medio Ambiente	0,0	0,8	0,0	0,6
Otros Económicos	0,0	0,2	0,0	0,2
SUBTOTAL	13,2	16,7	6,8	14,2
POLITICO				
Luchas Guerrilleras por Control del Estado	43,8	25,7	58,9	34,1
Acciones Estatales Contra el Narcotráfico	10,8	14,8	13,1	14,4
Administración Publica	4,9	4,7	2,5	4,2
Seg. Ciudadana y Lucha a Delincuencia	4,5	10,9	2,1	8,6
Control Territorial Para-Estatal	2,5	2,4	2,4	2,2
Servicios del Estado	2,2	1,7	2,1	1,8
Luchas partidistas por control del Estado	2,0	2,6	0,7	2,2
Políticas Estatales de Paz	0,9	0,9	0,0	0,7
Política Económica	0,7	0,6	0,7	0,5
Sistema Electoral	0,4	0,3	0,0	0,3
Administración de Justicia	0,2	0,3	0,4	0,3
Ministerio Publico	0,2	0,5	0,7	0,5
Otros Políticos	3,6	2,8	2,1	2,6
SUBTOTAL	76,7	68,2	85,7	72,4
SOCIO-CULTURAL				
Derechos Humanos y DIH	2,7	2,4	1,8	2,3
Ciencia y Educación	0,7	1,5	1,4	1,4
Convivencia y Civildad	0,7	1,1	0,4	1,0
Generacional	0,2	0,1	0,4	0,2
Ético – Corrupción	0,2	0,3	0,0	0,3
Estético	0,0	0,2	0,0	0,2
Religioso	0,0	0,1	0,0	0,1
Defensa Animal	0,0	0,1	0,0	0,1
Otras Socio-culturales	0,2	0,5	0,0	0,3
SUBTOTAL	4,7	6,3	4,0	5,9
Sin Información	5,4	8,8	3,5	7,5
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0
N=	447	872	282	1154

De las *modalidades* de acción predominantes en la región, 30.4% tienen que ver con el conflicto político armado, desde el Terrorismo hasta los Enfrentamientos y Hostigamientos, pasando por Toma de poblaciones, Secuestros, Toma de rehenes y Bombardeos. En 27.7% de los casos hay Capturas, Militarización, Allanamiento y Desalojo de espacios. 13.0% de los casos se caracterizan por Desaparición, Muerte o

amenaza a personas. De manera significativa para nuestro trabajo, aproximadamente el 26% de los hechos se distribuyen en formas de acción asociadas con la resistencia civil (10.4%), Manifestaciones y marchas (8.7%), Denuncias y reclamos entre otros (6.7%). Teniendo en cuenta las modalidades, hay una fuerte concentración en aquellas vinculadas con formas del conflicto armado, político y no político, altamente vinculadas con formas degradadas o “sucias” de desarrollar el conflicto. Es en medio de estas formas que se desarrollan acciones colectivas “*sociales*”.

Tabla # 2. 10.
Modalidad del Hecho de Acción Colectiva

MODALIDAD	Región	Valle	Cauca	Total
Terrorismo, Atentado, Emboscada, Enfrentamiento, Hostigamiento, Sabotaje, Bombardeos, Toma de población, Secuestro, Rehenes	30,4	17,7	41,1	23,4
Captura, Confiscación, Militarización, Allanamiento y Desalojo	27,7	34,4	32,3	33,8
Desapariciones, Muertes, Masacres, Amenazas	13,0	15,8	9,2	14,2
Ocupación de espacios, Huelgas, Paros, Asambleas, reuniones, paros cívicos, Invasión predios rurales y urbanos, Pedrea Boicot	10,4	9,4	8,5	9,2
Manifestaciones, Marchas	8,7	10,8	3,9	9,1
Declaraciones, Denuncias, Reclamos, Pleito judicial, Demanda, Tutela, Mensaje, Presión legal	6,7	7,9	1,1	6,2
Robos y Otros	3,1	4,0	3,9	4,1
Total	100,0	100,0	100,0	100,0
N=	447	872	282	1154

Consistente con la información anterior, en 45.0% de los casos aparece claramente el uso de la violencia y en 27.7% no; En 12.8% de los casos no aparece violencia, aunque hay un claro despliegue de fuerza y de medios de violencia (ver Tablas 2.11 y 2.12).

Tabla # 2. 11
Presencia de Violencia en el Hecho de Acción Colectiva

PRESENCIA DE VIOLENCIA	Región	Valle	Cauca	Total
Si Aparece Violencia	45,0	37,3	52,8	41,1
No Aparece Violencia	27,7	31,4	14,9	27,4
No Es Clara la Información	14,5	17,2	13,5	16,0
No Aparece violencia, Con fuerza	12,8	14,1	18,8	15,5
Total	100,0	100,0	100,0	100,0
N=	447	872	282	1154

La violencia se asocia no solo con el uso de armas de fuego, sino también, de manera importante, con el uso de medios explosivos. Los medios no violentos tienen que ver con los discursos hablados u escritos, esencialmente.

Tabla # 2.12.
Medios empleados en el Hecho de Acción Colectiva

MEDIO EMPLEADO	Región	Valle	Cauca	Total
Fuerza Física	34,2	38,4	41,1	39,1
Armas de Fuego	23,5	20,2	27,7	22,0
Palabra, Discurso	21,3	22,1	7,1	18,5
Explosivos	15,7	9,9	18,8	12,0
Medios Impresos	2,9	4,4	2,8	4,0
Arma Blanca	0,7	0,7	0,4	0,6
Otros Medios	0,9	3,1	0,7	2,5
Sin Información	0,9	1,3	1,4	1,3
Total	100,0	100,0	100,0	100,0
N=	447	872	282	1154

2. 4. Organización, Negociabilidad y Complejidad de la Acción.

El 42.1% de los hechos regionales muestra un carácter “organizado” y el 32.7% “alguna organización”, mientras que un porcentaje menor, 11.2%, muestra espontaneidad (ver Tabla 2.13). La espontaneidad es un poco mayor en la Región que en el Valle y mucho mayor que en el Cauca. Contrariamente, el carácter de “organizado” es menor en la Región que en el Valle y mucho menos que en el Cauca. Esta situación comparativa distinta de la Región es interesante y puede referirse a acciones colectivas distintas de las que articula el conflicto armado.

Tabla # 2. 13.
Nivel de Organización implicado en el Hecho de Acción Colectiva

ORGANIZACIÓN	Región	Valle	Cauca	Total
Espontáneo	11,2	10,4	5,3	9,2
Con Alguna Organización	32,7	29,6	25,5	28,7
Organizado	42,1	46,0	51,1	47,3
No es clara la Información	11,6	11,0	15,2	11,9
Sin Información	2,5	3,0	2,8	2,9
Total	100,0	100,0	100,0	100,0
N=	447	872	282	1154

Con base en la información de prensa, se estimó la “negociabilidad” de los hechos, dado su carácter más o menos violento. 39.8% de los hechos son Violentos y no parecen ser negociables, mientras que en 1.1% de los casos se usó la Violencia y apareció la negociación. De manera significativa, 21.9% de los conflictos No son violentos y conducen a negociación y 37.1% de los conflictos No son violentos y no conducen a negociación, lo que constituye un porcentaje muy importante que se debe especificar por su significado para la estructuración de la sociedad. Este porcentaje es similar al del Valle y es mayor en el caso del Cauca (ver Tabla 2.14).

Tabla # 2. 14.
Negociabilidad implicada en el Hecho de Acción Colectiva

NEGOCIABILIDAD DEL HECHO	Región	Valle	Cauca	Total
Violento y no conduce a negociación	39,8	37,5	44,0	39,2
No violento y no conduce a negociación	37,1	37,3	41,8	38,3
No violento y conduce a negociación	21,9	24,5	9,9	21,0
Violento y conduce a negociación	1,1	0,6	3,5	1,3
Sin Información	0,0	0,1	0,7	0,3
Total	100,0	100,0	100,0	100,0
N=	447	872	282	1154

Finalmente, si bien 28.4% de los hechos parecer tener un carácter “aislado” en su relación con otros hechos, 26.4% son hechos que se relacionan con otros, sin que se puedan considerar “eventos” por su significación para el cambio social. Pero una cifra importante de 45.2% de los hechos, se consideraron significativos, al punto de ser partes de “eventos” de acción colectiva y, a partir de allí, en un grado de elaboración mayor, componentes de “estudios de caso” de acción colectiva, y mayor aun, pueden ser componentes de movimientos sociales regionales. La Región, muestra un porcentaje mayor de estos hechos, en relación con el Cauca y el Valle, que tienen un porcentaje menor. Este porcentaje es consistente con el porcentaje mayor de hechos no violentos y no negociables.

Tabla # 2. 15.
Relación con otros Hechos de Acción Colectiva

RELACION CON OTROS HECHOS	Región	Valle	Cauca	Total
Hecho Aislado	28,4	39,1	32,3	37,4
Hecho vinculado a otros, sin ser evento	26,4	25,0	29,1	25,9
Hecho es de caso, evento o movimiento	45,2	35,9	38,7	36,7
Total	100,0	100,0	100,0	100,0
N=	447	872	282	1154

2.5 Conclusiones.

La acción colectiva regional parece tener una cierta especificidad intermedia, comparada con los perfiles de los Departamentos del Cauca y del Valle. De manera más precisa:

1) Hay dos núcleos municipales de la Región, muy distintos cada uno de ellos, pero que tienen el peso mayor en la estructuración de las acciones colectivas: Buenaventura y Palmira. Por fuera de estos municipios y de sus cabeceras, la dinámica mayor esta en municipios con cabeceras entre 20001 y 50000 habitantes. Es cierto que hay un porcentaje significativo, aunque menor, de acciones colectivas que son rurales, muchas de ellas en municipios con cabecera de población significativa. Lo urbano es un rasgo importante de la región que tiende a parecerse, en este sentido, al Valle del Cauca y que enmarca la acción colectiva.

2) El “espacio” preferido de la acción colectiva regional es “la calle”, los “recintos cerrados” y “los medios de comunicación”. Pero aparece un porcentaje importante, menor a los anteriores, que vincula las “carreteras” y el “campo abierto”. No se tuvo una identificación precisa del número de participantes para la mayoría de las acciones, pero se estimó que 45% fueron “masivas”, con más de 200 participantes, de los 100 casos en los que se logró detectar información.

3) Con referencia a las acciones colectivas, la iniciativa “desencadenante” esta prioritariamente de parte de agentes del Estado y, en una proporción menor a la anterior, de las guerrillas. Al lado de estas acciones hay un porcentaje significativo de “demandas” que se pueden atribuir como actores desencadenantes a diferentes sectores ciudadanos. El conflicto se establece de manera muy significativa con el Estado, en sus diferentes formas de representación institucional. El sentido predominante global del conflicto regional es desde la “dominación”, por el control social, más que desde los sectores “dominados”.

4) Los temas del conflicto y de las acciones colectivas involucradas tienen que ver prioritariamente con el conflicto con la guerrilla. Un porcentaje muy grande de acciones tiene que ver, por otro lado, con el control de la delincuencia, ante todo la organizada como el narcotráfico. Al lado de estos dos temas hay una variedad de acciones que tienen que ver con demandas propiamente sociales, como salarios, servicios del Estado, tierras, infraestructura y un conjunto significativo de acciones articuladas a demandas por los Derechos Humanos, el DIH y temas generacionales. La Región permite ver esta combinación imbricada entre conflictos “sociales”, “políticos-armados” y aquellos que se derivan de una delincuencia muy arraigada.

5) Las formas de acción varían, en consecuencia, entorno a dos formas generales antagónicas: aquellas en las que aparecen enfrentamientos propios de la guerra, incluyendo bombardeos y formas de terrorismo, y aquellas en las que aparecen la manifestación pública, la voz, el reclamo, formas de boicot y toma de espacios. Aunque la violencia aparece en las más distintas formas de acción, la primera línea concentra una violencia que parece no resolverse en el conflicto, mientras que la segunda no necesariamente muestra formas de violencia y tampoco de resolución inmediata del conflicto.

TERCERA PARTE: ESCENARIOS DE ACCION COLECTIVA

Esta parte se detiene en la descripción de cinco “escenarios de acción colectiva”. Para su descripción es central la forma que asume la acción, incluidos aspectos que tienen que ver con lo que usualmente se conceptualiza como los “repertorios” (...de la acción) y aspectos cargados de simbolismo. Pero también, en este trabajo se intenta avanzar en la descripción del “escenario de conflicto”, es decir, en la descripción del conflicto entre dos actores, su tema, las modalidades de acción involucradas de partes y partes, la normatividad implicada y la incidencia de situaciones de contexto. Iniciamos con el escenario más cuestionable desde el punto de vista de los estudios tradicionales de la acción colectiva: el de la delincuencia organizada, con énfasis especial en el narcotráfico. Continuamos con el escenario del conflicto político armado, también un escenario heterodoxo en los estudios de acción colectiva, salvo en una orientación *tulleana* en el que la guerra juega un papel en la formación de los Estados, para llegar, en un tercer momento, al escenario de luchas sociales, éste sí, estrechamente vinculado con la tradición más general de los estudios de acción colectiva contenciosa. Terminamos con la descripción de aspectos de la movilización del escenario de “protesta indígena” y con un “estudio local” sobre el caso de Buenaventura.

3.1. LA DELINCUENCIA ORGANIZADA (NARCOTRAFICO)

Algunos autores consideran que la acción colectiva puede estar permeada por la criminalidad, dado que esta última es, en buena medida, una percepción estatal-dominante sobre los sectores subalternos y su protesta. Pero no aceptan que la acción colectiva, por lo tanto, se conceptualice solamente como criminal. La protesta, la contención y la criminalidad pueden ser fenómenos paralelos, de los cuales no se escapa la formación del Estado (Tilly, 1992). Otros autores utilizan un concepto de criminalidad como el de grupos o personas que no optan por medios legítimos y, por lo tanto, excluyen la criminalidad del campo de estudio de la acción colectiva contenciosa, ya que ésta tendría legitimidad comunitaria, tanto en medios como en fines, a diferencia de la criminalidad a secas (Offe, 1985).

En nuestra perspectiva, hemos partido en el presente estudio de una consideración que no excluye la dimensión de la criminalidad en el estudio de la acción colectiva. Al mismo tiempo, hemos querido desarrollar el aspecto del “conflicto” implicado en la acción colectiva y por lo tanto, como ya se dijo, hemos buscado considerar y tipificar los “dos actores” de la relación. Pero nos hemos tropezado con el siguiente problema: dado un rasgo definitorio de las acciones colectivas como aquellas que son “no rutinarias” y al no excluir el rasgo de criminalidad que puedan tener las acciones en una relación social de conflicto, nos topamos con un abultado número de acciones criminales “como tales” que son claramente “dominantes”. Son acciones, además, que se caracterizan por la apelación que hacen usualmente a procedimientos de violencia.

En nuestra consideración, este tipo de acciones colectivas usualmente no se ha tenido en cuenta en los estudios sociológicos, pero son estratégicas para caracterizar el devenir de una sociedad que no cambia de la manera “revolucionaria” clásica, sino autoritaria y reaccionaria (Moore, 1975). Este capítulo esboza entonces formas de acción colectiva que se pueden tipificar como “criminales” y que no se pueden entender como formas “contenciosas desde abajo”. Crean claramente un conflicto, en parte con el Estado y con

sectores sociales distintos, pero prosperan en relación con éste y articulados en muchos casos con sectores dominantes de la sociedad. La importancia que se le otorga al escenario tiene que ver con la significación de la criminalidad en la estructuración de la sociedad y el Estado en la Región.

3.1.1. Redes locales e internacionales de narcotraficantes (allanamientos y detenciones).

A mediados de febrero de 2006, la Fiscalía junto con la DEA, adelantan la operación internacional “Tormenta” en varias regiones del País, en Miami y Houston en EE.UU. En la Región, la operación se lleva a cabo en Jamundí y Palmira, desde donde operaba la organización delincuencia. La operación se hace gracias a un procedimiento de infiltración. Se capturan seis personas sindicadas de pertenecer a una red de tráfico de cocaína.

En marzo, miembros de la Dijin realizan 21 allanamientos a propiedades de Juan Carlos Abadía, alias “Chupeta” y de “Beto Rentería”, en Cali, Tulúa, Palmira, Jamundí y Riofrío. A mediados de mes, se incautan 2.8 toneladas de coca por un guardacostas norteamericano, apostado en alta mar a 1050 millas de Buenaventura. La droga era llevada en una lancha tipo “Go fast”. Se detienen 5 personas. Dos días después, la Armada decomisa una embarcación “semi-sumergible” en el sitio El Pital sobre el río Timba, zona de influencia de las Farc. La embarcación tiene capacidad para transportar entre 2 y 4 toneladas de droga. Se detienen dos personas.

En junio, se suceden dos operativos internacionales de significación. Primero, el grupo Comca de la Dijin, la Policía Antinarcóticos, la Fiscalía y la DEA, llevan a cabo la operación “Doble identidad”, en la que desmantelan una red de traficantes de heroína que operaba desde Santander de Quilichao y Cali, utilizando varios medios de transporte como correo humano, maletas doble fondo, camuflaje entre muebles de trasteo y disolución en cremas y lociones. Se capturan a 20 personas en dichas poblaciones, además de Medellín, Bogotá y Pereira, y otros 9 en Tampa, New York, New Jersey y Miami. Pocos días después, la Dijin, la Fiscalía y la DEA realizan 28 allanamientos simultáneos en Cali, Pereira, Cartagena, Medellín, Rihacha, Bogotá, Palmira, Tulúa y Santander de Quilichao. Producto de la operación, 28 personas son capturadas, entre ellos un patrullero y un subintendente de la Policía y se incautan varios elementos. El líder de la red era propietario y gerente de una exportadora de fruta, la cual era usada para lavar activos y camuflar la droga. Se presume que utilizaban por lo menos 8 rutas aéreas y marítimas, contratando extranjeros para el transporte. Igualmente señalan que la red trabajaba para “Don Diego”. A fines de este mismo mes, en Buenaventura son incautados 4.250 kilos de insumos sólidos para procesamiento de cocaína que eran transportados en una embarcación tipo metrera.

En julio, la Policía Valle captura en Buenaventura a un narcotraficante pedido en extradición por EE.UU. y junto a la Armada, incautan, días después, 40 toneladas de insumos para fabricación de cocaína que iban a ser enviados a las costas chocoanas desde el puente El Piñal. También son incautados en zona rural de Miranda 1300 kilos de marihuana prensada tipo exportación que eran transportados en un camión entre productos alimenticios.

En agosto, la prensa publica un informe en el que indica que, según la Policía Antinarcóticos, debido a la triplicación en el número de incautaciones efectuadas en lo corrido del año, Buenaventura se ha convertido en un centro de acopio de insumos químicos para procesamiento de cocaína, los cuales son luego enviados a las costas del pacífico. En octubre se incrementa el decomiso de droga e insumos en Buenaventura. Inicialmente la Armada decomisa dos toneladas de cocaína, a bordo de embarcaciones artesanales por el estero San Antonio. Días después las Unidades de Guardacostas realizan la operación “Ontario” en la que incautan 22 toneladas de insumos sólidos a bordo de una motonave que se desplazaba por la bahía de Buenaventura, aunque luego un Juez de Garantías revoca las medidas de aseguramiento, indicando que los insumos químicos eran bicarbonato de sodio, utilizados para fabricar pan. El día 17, el CTI incauta media tonelada de cocaína en una vivienda del barrio Juan XXIII y al día siguiente, la Policía Antinarcóticos, la Armada y la Fiscalía realizan otra operación en la desembocadura del río San Juan que permite la incautación de 8.5 toneladas de cocaína, considerado el cargamento incautado mas grande en lo que va corrido del año en Colombia y América Latina, el cual presuntamente pertenecía a hombres de la organización de Wilber Varela, alias “Jabón”. La zona donde fue hallado es de influencia de las Farc. Pocos días después, en una vivienda del barrio Bellavista, la Infantería de Marina decomisa 2 toneladas de marihuana y simultáneamente la Policía halla otras 3.5 toneladas en un sector aledaño al mismo barrio. A finales de octubre, en el sector La Estrella de Jamundí son hallados y destruidos dos laboratorios para producir coca por parte del Batallón de Alta Montaña.

En noviembre, tropas de la Tercera Brigada del Ejército destruyen un cristalizadero de cocaína en la vereda Betulia, de Suárez. El lugar contaba con amplios equipos técnicos de procesamiento con capacidad para producir una tonelada mensual y podía albergar hasta 30 personas.

En diciembre, la Policía Antinarcóticos, tras meses de seguimiento, incauta más de una tonelada de cocaína de alta pureza camuflada entre pieles húmedas, a bordo de un contenedor con destino al puerto Manzanillo en México, proveniente desde Yumbo a nombre de la firma C.I. Mercurio. También se lleva a cabo la operación “Demoledor” entre Guardacostas, Fuerza Aérea y DAS en inmediaciones del río Timba, donde hallan un submarino artesanal de alta técnica naval con capacidad para transportar 3 toneladas de cocaína y destruyen un astillero clandestino usado para fabricar lanchas rápidas.

En enero del 2007, se produce la captura de Eugenio Montoya, alias “Don Hugo”, hermano de “Don Diego” por parte del grupo Graos (grupo especial de la Dijin con apoyo de autoridades británicas) y el Escuadrón Móvil de Carabineros en una finca entre El Dovio y Roldanillo.

En abril, el CTI captura en el barrio Bellavista a un narcotraficante de Buenaventura solicitado por la Corte de Florida. En mayo destruyen 5 laboratorios para procesar cocaína y varias hectáreas sembradas de coca en la vereda El Pital, corregimiento La Mesita, de Jamundí. En junio, en un operativo de rutina en carreteras de Candelaria, decomisan un cargamento de 2 toneladas de marihuana camuflado entre muebles modulares a bordo de un camión de la empresa Encomiendas Omega. La marihuana provenía de Corinto con destino a Barranquilla.

En la primera semana de agosto, las autoridades de Brasil y la DEA detienen en Sao Paulo, Brasil, a Juan Carlos Ramírez Abadía, alias “Chupeta”, uno de los narcotraficantes del cartel del norte del Valle mas buscados internacionalmente, pedido entre otros por una corte de New York. La captura se produjo en desarrollo de la operación “Farraos” que contemplo allanamientos en 28 localidades, logrando además la identificación de inmuebles de la organización y la captura de 12 personas, muchos de ellos testaferros con cuentas en bancos de Uruguay para lavar activos. El día 20 del mismo mes, tropas del Batallón Pichincha en desarrollo de la operación “Alcatraz II” desmantelan un laboratorio para procesar cocaína en la vereda Belén, de Toribio, con gran cantidad de insumos sólidos y líquidos. En septiembre cae el narcotraficante “Don Diego” en una modesta finca de Zarzal.

En octubre, tropas de la Tercera División del Ejército desmantelan un laboratorio para producir cocaína en la vereda Las Vueltas, de Santander de Quilichao y en diciembre, la Dijin captura en Cali a un hombre perteneciente a la banda “Los Culimochos” que opera en Buenaventura, al servicio de “Jabón”. Es solicitado en extradición por EE.UU. sindicado de coordinar el transporte de droga en lanchas rápidas ubicando los lancheros y el combustible.

3.1.2. Narcotraficantes y grupos armados ilegales.

En marzo de 2006, se presenta el informe trimestral de la Misión de la OEA de apoyo al Proceso de Paz con las AUC. Allí se denuncia que varios grupos vinculados al narcotráfico están operando como auto-defensas en varios lugares del Valle. En Buenaventura se menciona que esta en fase de reclutamiento un grupo de auto-defensa en el barrio Cristalina.

En julio, son incautadas 8 toneladas de marihuana prensada en la vereda La Camelia, de Corinto, listas para ser transportadas. Éste ultimo cargamento era custodiado por miembros del Frente 6 de las Farc quienes se enfrentan a la Fuerza Publica. A mediados de agosto, de nuevo en Corinto, es hallado y destruido un sofisticado laboratorio para procesar cocaína de alta calidad, perteneciente al mismo Frente de las Farc, esta vez en la vereda Violetas, a orillas del río Guengué, así como la incautación de un cargamento con insumos químicos en la vía entre Villarrica y Santander de Quilichao, camuflados entre cajas de naranja, presumiendo que tenían como destino grupos de las Farc en la costa nariñense.

En septiembre, el Ejército perteneciente al Batallón de Alta Montaña y el CTI, destruye dos laboratorios para procesar cocaína en zona rural de Jamundí, uno en el corregimiento San Vicente y otro en la vereda El Placer, éste último perteneciente a la columna Miller Perdomo de las Farc.

En octubre, en la carretera Cabal Pombo es interceptada una tractomula que transportaba 4 toneladas de insumos, que según las autoridades, pertenecía a la columna móvil Daniel Aldana de las Farc.

A mediados de mayo de 2007, decomisan 1220 kilos de marihuana en la vereda El Placer, de Jamundí que adjudican a la columna Miller Perdomo de las Farc.

En septiembre, la Segunda Brigada Fluvial incauta 416 kilos de cocaína a bordo de dos lanchas rápidas que intentaban salir por el barrio Lleras de Buenaventura. A fines del mismo mes en el corregimiento La Dolores, de Palmira, la Policía Valle halla en un parqueadero varios cilindros de gas llenados con insumos químicos. Según las autoridades pertenecía al Frente 30 de las Farc y serían transportados hacia Buenaventura.

3.1.3. Narcotráfico, Funcionarios Públicos y Fuerzas de Seguridad del Estado (Ejército y Policía).

A finales de mayo de 2006, son asesinados diez policías del grupo especial COMCA y un civil informante, en el corregimiento de Potrerito en Jamundí. Los agentes de la policía se dirigían a una finca en la que presuntamente se encontraba un cargamento de cocaína cuando fueron emboscados por miembros del Batallón de Alta Montaña del Ejército, comandado por el Coronel Byron Carvajal. Los militares argumentan que fue un error militar, pero el Fiscal General califica el hecho como un crimen y no como un error y esboza la hipótesis de que se le habría hecho un “mandado” al narcotráfico. Las investigaciones iniciales realizadas sobre la base de comunicaciones por celular entre los militares, indica que los policías fueron víctimas de una trampa y que el Coronel Carvajal estaba al tanto de los hechos. Según el relato de prensa, con posterioridad al hecho se rumoraba en Jamundí que se habrían reunido dos importantes miembros de un cartel del narcotráfico: alias el “indio William” y alias “Capachivo”, jefes del brazo armado de “Don Diego”. Según la Fiscalía, un informante habría asegurado que el Coronel Carvajal tenía vínculos con el cartel del Norte del Valle. Las declaraciones iniciales del Coronel son contradictorias sobre el lugar en el que estaba el día del hecho (en una cita médica o en la sede de la Tercera Brigada). El análisis técnico de los celulares muestra que la señal de su celular se reporta desde Jamundí, el 21 y 22 de mayo. A raíz del escándalo, se propone reducir el apoyo de los Estados Unidos al Ejército colombiano, argumentando continuas violaciones de militares a los Derechos Humanos. Días después, el narcotraficante “Don Diego” envía una carta al Presidente en la que niega haber participado en la muerte de los policías.

El 26 de octubre de 2006, el Presidente Álvaro Uribe hace denuncias públicas en un Consejo de Seguridad sobre un presunto favorecimiento a narcotraficantes por parte del Secretario de Gobierno de Buenaventura, Adolfo Chipantiza, quien habría llamado al comandante de la Segunda Brigada Fluvial para pedirle que devolvieran media tonelada de cocaína que había sido incautada el día 17 del mismo mes en una vivienda del barrio Bellavista. El Jefe de Estado pidió que sus escoltas lo llevaran de inmediato ante los jueces, pero allí quedó libre por procedimiento legal: falta de orden de captura. Sin embargo la Fiscalía y la Procuraduría abren investigación al respecto y el Alcalde le pide su renuncia. Una semana después, es asesinado un ex escolta del Secretario de Gobierno, quien había trabajado hasta el día que se hizo la denuncia. Ese mismo día, también otras tres personas fueron asesinadas por sicarios, pero sin especificar algún tipo de relación con el hecho.

A finales de noviembre, un Juez de Control de Garantías dicta medida de aseguramiento contra tres suboficiales de la Armada adscritos al grupo Guardacostas del Pacífico, sindicados de facilitar el acceso de embarcaciones con droga al Puerto de Buenaventura.

A mediados de diciembre, en el caso del Secretario de Gobierno de Buenaventura, la Fiscalía y la Procuraduría anuncian la apertura formal de investigación contra el comandante de la Segunda Brigada Fluvial por omisión al deber de denunciar oportunamente, ya que la denuncia se efectuó nueve días después de ocurrido el hecho. Solo hasta finales de febrero de 2007 se reanuda el proceso, con el dictamen de medida de aseguramiento contra el Secretario de Gobierno proferida por un Juez de Circuito de Buenaventura.

A comienzos de agosto se destapa un escándalo al interior de unidades del Ejército apostadas en el Valle del Cauca que tiene que ver con infiltraciones de la organización de “Don Diego” para ejecutar un plan de rescate a su hermano Eugenio Montoya, detenido en la cárcel de Combita, Boyacá. Inicialmente se captura a una funcionaria del Ministerio de Defensa y a un propietario de un almacén de prendas militares. Luego se ordena la captura a tres altos mandos del Ejército y días después se conoce la lista completa de 14 militares involucrados, de los cuales dos eran coroneles, cuatro mayores, cuatro capitanes, un teniente, dos suboficiales y un cabo. Algunos de ellos comandaban unidades especiales encargadas de custodiar el Cañón de Garrapatas y otras zonas del norte del Valle, con influencia principalmente de la organización armada “Los Machos” al servicio de “Don Diego”. Días después se habla del propósito de “Don Diego” de conformar una organización denominada Griex, Grupo de Infiltración y Exploración, dirigido por el mayor (r) Juan Carlos Rodríguez, alias “Zeus”, prófugo de la justicia, quien habría comprado armamento por valores de \$7.802.000 y \$20.300.000 al propietario del almacén de intendencia. Éste grupo al parecer ya había recibido entrenamiento en una finca de El Dovio y mantenía contacto con Gilberto Rodríguez, alias “El Hombre de la Camisa”, jefe del esquema de seguridad de “Don Diego”.

El escándalo produce la renuncia de los comandantes de la Tercera Brigada y la Tercera División, argumentando su retiro por “honor militar” y como parte de la responsabilidad política, nacional e internacional, generado por las investigaciones penales contra los militares. Las averiguaciones y pesquisas de éste proceso se llevan hasta comienzos de septiembre y se apaciguan luego de la captura de “Don Diego” el 10 de ese mismo mes. La captura se lleva a cabo en la hacienda El Pital, vereda El Vergel, del municipio de Zarzal, efectuándose en la madrugada con un amplio dispositivo de fuerza que contempló enfrentamientos con los anillos de seguridad privada del “capo”, el cual intento huir escondiéndose entre matorrales a las afueras de la finca y, cuando se vio capturado, ofreció US\$5 millones para que lo dejaran libre. El Presidente y el Ministro de Defensa elogian la operación de captura y afirman que se logro gracias a la depuración del Ejército efectuada en el escándalo de infiltración.

3.1.4. Sicariato.

A principios de Febrero de 2006, se captura en Buenaventura a alias “Jair”, presuntamente jefe de una oficina de sicarios al servicio del narcotráfico y quien tenía orden de captura por homicidio. Trabajaba como prestamista en un establecimiento público llamado “Inversiones Jair”.

A mediados de mayo en un consejo de Seguridad realizado en Buenaventura, el Ministro de Defensa Camilo Ospina, le atribuye al narcotráfico la ola de violencia por la que atraviesa el Puerto por esos días.

Entre diciembre de 2006 y enero de 2007 se presentan varios hechos en Jamundí relacionado con ajustes de cuentas entre grupos sicariales al servicio del narcotráfico. El primero de ellos fue una balacera a mediados de diciembre, presentada al interior de una discoteca donde mueren cuatro personas, entre ellas una mujer que presuntamente era el objetivo principal del ataque y quien tenía antecedentes por porte de armas según el comandante de Policía de Cali. El 30 de diciembre, otros tres hombres son asesinados por varios sicarios al interior de un restaurante ubicado al Sur de Cali. Luego, el día 3 de enero, sicarios a bordo de un automóvil, asesinan a un hombre en pleno parque central de Jamundí, del cual confirman que trabajaba como conductor en una finca de “El Indio William”. Estos tres hechos son atribuidos a disputas entre dos lugartenientes de “Don Diego”: alias “Capachivo” y alias “Yerson”. Las autoridades realizan un Consejo de Seguridad en el que acuerdan fortalecer los trabajos de inteligencia, aumentar el pie de fuerza y destinar recursos para dotación de equipos de comunicación, gasolina y vehículos a la Fuerza Pública. A comienzos de febrero, asesinan a un comerciante de Jamundí al interior de un parque recreacional de Palmira, pero no se establece algún tipo de relación con los hechos anteriores.

3.1.5. Conclusiones.

La Región de nuestro interés es solo una muestra de lo que sucede también en otras regiones del país. Tiene la particularidad de incluir la zona del Pacífico y al puerto de Buenaventura que tienen un significado especial en el tráfico de drogas ilícitas. Pero también las zonas de montaña del Cauca y del Valle en las que se encuentran cultivos ilícitos de coca y amapola así como laboratorios de procesamiento de donde se destaca la zona de Corinto y Miranda, tradicionalmente dedicada a la producción de Marihuana. Algunos puntos de conclusión sobre éste escenario son:

- 1) Frente a una actividad de dimensiones económicas descomunales como son el tráfico de marihuana, cocaína, heroína e insumos químicos, aparece actuando un aparato represivo estatal, especialmente de Policía, Ejército, Fuerza Naval y Aérea, apoyado por la Fiscalía y por autoridades extranjeras, especialmente la DEA, aunque se menciona también un apoyo británico. Estos operativos que tienen un alcance internacional, resultan localmente en allanamientos, detenciones y confiscaciones. Se habla específicamente de redes de tráfico de marihuana, cocaína y heroína; de los líderes de dichas redes, especialmente de Wilber Varela, alias Jabón –posteriormente asesinado en Venezuela-, Diego Montoya, Alias “Don Diego” y la detención de Juan Carlos Abadía, alias “Chupeta” en el Brasil. Los medios de transporte utilizados son en parte el tradicional “camuflaje”, pero se mencionan específicamente el uso de lanchas rápidas “Go fast” y semi-sumergibles. En las detenciones que se llevan a cabo caen miembros de la Policía y al mismo tiempo se indica que los mafiosos, en algunos lugares especialmente Buenaventura, operan en zonas de influencia de las Farc.
- 2) En la Región se hacen evidentes las relaciones entre narcotraficantes y grupos de auto-defensa o guerrilla. La Misión de la OEA encargada de supervisar el proceso de Paz con las AUC señala que en la zona, ciertos grupos de narcotraficantes operan como autodefensas. Por otro lado, se habla de dos Frentes de las Farc, el VI y el XXX, que tendrían bajo su protección cultivos y

laboratorios de procesamiento de droga. Específicamente se habla de dos columnas de las Farc, la móvil “Daniel Aldana” y la “Miller Perdomo” que opera en Jamundí, a las que se les han hecho incautaciones de insumos y marihuana.

- 3) El hecho más significativo ocurrido en ambos años que muestra la profunda inserción del narcotráfico al interior del Estado y en especial de sus organismos de seguridad, es el asesinato de diez policías de un grupo especial contra el narcotráfico, el COMCA, por parte de miembros del Batallón de Alta Montaña del Ejército, al mando del coronel Byron Carvajal, sucedido en zona rural de Jamundí en momentos en que llegan a allanar una finca donde supuestamente se encontraba un cargamento de cocaína. Los policías fueron emboscados y acibillados. El Ejército argumentó inicialmente un error, pero las evidencias apuntaban a una masacre. Posteriormente, se vincula al coronel Carvajal con el cartel del norte del Valle. El coronel y otros miembros del Ejército serán juzgados y encontrados culpables de homicidio. En otros hechos se vincula a personal de la Armada (suboficiales) con el tráfico de estupefacientes y se hace público un escándalo por infiltraciones en el Ejército de la organización militar de “Don Diego” conocida como “Los Machos”, que involucra a 14 militares, la mayoría de alto rango. “Don Diego” estaría conformando un grupo denominado “GRIES”, dedicado a la “infiltración y exploración”. Los comandantes de la Tercera División y de la Tercera Brigada renuncian “por honor”. Por otra parte, en un Consejo comunitario, el mismo Presidente Uribe pide la detención (aunque arbitraria en ese momento y de esa forma) del Secretario de Gobierno de Buenaventura quien estaría involucrado en la petición a la Armada de devolver una droga incautada.
- 4) Al lado de la actividad del narcotráfico prosperan las oficinas de “sicarios”, los ajustes de cuentas entre organizaciones rivales, los asesinatos entre lugartenientes cuando el jefe de la organización es detenido, los asesinatos por cobros o deslealtad. Buenaventura es un caso en el que se concentra este tipo de violencia y lleva a que el Ministro de Defensa le atribuya al narcotráfico la ola de homicidios en la el municipio.

Este escenario se estructura entonces en torno a una prospera economía ilegal que permea fuertemente el Estado y la sociedad. Explica en gran medida la dinámica de violencia y se constituye en un eje central de estructuración de la sociedad regional.

3.2. EL CONFLICTO POLITICO ARMADO.

Entre los años 2006 y 2007 se detectaron 196 hechos de acción colectiva conflictiva vinculados con el conflicto político. Su distribución geográfica por municipios induce a proponer una sub-regionalización del conflicto político armado así:

- 1) El municipio de Buenaventura, que tiene 51.5% de las frecuencias, se puede tomar como un caso en sí mismo. Es importante precisar que se trata de un municipio muy extenso, de territorio predominantemente rural, que desde el sur comprende toda la ribera occidental de la cordillera central que va desde el Río

Naya –limite con el municipio de López de Micay, departamento de Cauca-hasta, por el norte, el río San Juan –limite con el departamento de Choco.

- 2) Un conjunto de municipios alrededor de Palmira, desarrollan una intensa actividad de conflicto político armado. Estos municipios son Florida, Pradera, Miranda y Corinto. En estos municipios se reúnen características de un alto desarrollo de la agro-industria, especialmente alrededor de la caña de azúcar, incluyendo expectativas recientes con los bio-combustibles. Es además, la más moderna de los dos departamentos y posee una concentración urbana muy significativa, al mismo tiempo territorios importantes de población indígena y negra en el sector de ladera y montaña, la cual abarca hasta los Departamentos del Huila y Sur del Tolima, en el cañón de las Hermosas.
- 3) Otra sub-región tiene por municipio central a Santander de Quilichao y reúne a Puerto Tejada, Villarrica, Caloto, Guachené, Morales, Buenos Aires, Suárez y Jamundí. En esta sub-región es más clara la articulación entre procesos acentuados de industrialización y modernización de la agricultura, economías campesinas, población negra significativa y territorios indígenas en la parte de ladera y montaña. Es la subregión más típica en cuanto a combinación de formas de agricultura, muy modernas en la parte plana, más tradicionales en la ladera, urbanización intermedia muy significativa y población diversa desde un punto de vista étnico.
- 4) Finalmente, los municipios de Toribio, Jámalo y Calono, con una actividad centrada en el primero de estos municipios. Son predominantemente territorios de ladera y con una mayoritaria población indígena.

El análisis de la información de este escenario se presentara siguiendo la sub-regionalización propuesta y teniendo en cuenta períodos por semestre.

3.2.1 Buenaventura.

En el primer semestre/06, sobresale un plan de Gobierno para contrarrestar la situación de violencia en Buenaventura. Este plan incluye la conformación del 7^a Distrito de Policía en el municipio, con personal adicional y nueva tecnología, el diseño de CAI's móviles y el apoyo de 200 hombres de la Fuerza Naval. Se hace evidente la conexión general entre la violencia y el narcotráfico, pero, de manera especial, la lucha contra la presencia de grupos ilegales, especialmente la guerrilla con el Frente 30 de las Farc y su comandante local, alias J.J. El tema del control territorial urbano de los diferentes grupos armados se revela como crucial. Aparecen muertos de los diferentes bandos y un "Plan Pistola" de las Farc. Los días que anteceden a las elecciones se asiste a una oleada de atentados con explosivos y las Farc declaran objetivo militar a los Delegados de la Registraduría.

En el segundo semestre/06, se destaca la inserción de la Policía y la Fuerza Naval en los barrios y la reacción de diferentes grupos armados contra dicho procedimiento. Son asesinados o atacados con arma de fuego miembros de la Policía, incluyendo miembros del Grupo de Inteligencia, aparentemente como consecuencia del "Plan Pistola" decretado por las Farc. También se utilizan carros bomba activados a control remoto y

petardos contra puestos de Policía (CAI's). Todo esto sucede mientras la Policía despliega el plan "Buenaventura Segura VII" en diferentes barrios de la ciudad. Se destaca la militarización de los barrios Lleras y Alfonso López. Según las autoridades, se realizan 250 allanamientos de viviendas (en algunas se encuentran arsenales), se hace una redada en la cárcel, se retienen y capturan personas, entre ellas el supuesto líder del "Plan Pistola". En algún momento, en medio de una ola de petardos, las autoridades decretan un "toque de queda" en las comunas 5 y 12 de la ciudad.

En la zona rural, en inmediaciones del río Yurumanguí, se incautan provisiones del Frente 30. En otros hechos, se capturan miembros del Frente con explosivos y las Farc vuelan un poliducto de ACPM. Hay capturas de milicianos en inmediaciones del río Raposo y hostigamientos de las Farc al Ejército en la vía que conduce a Cali.

En distintos sectores de la ciudad se presentan balaceras y asesinatos, incluso durante un velorio. La prensa menciona la desaparición de personas y días después, 8 cadáveres aparecen flotando en la bahía. Se habla también de la muerte de miembros de las Farc por "sicarios". El Comité Local de Derechos Humanos, menciona además, la práctica de extorsiones y boleteos. El Comandante de la Policía, coronel Gutiérrez habla de una guerra entre la guerrilla y el narcotráfico "por alijos". El Alcalde Quiñones se remite a un conflicto entre bandas que habían sido de las AUC. En el mes de octubre, se presentan atentados con petardos contra Inspecciones de Policía, el DAS, patrullas de Policía y del Gaula. En un Consejo de Seguridad al que asiste el Presidente Uribe, Monseñor Epalza habla de infiltraciones del crimen organizado en la Policía. A raíz de su denuncia, él debe abandonar la ciudad. El pie de fuerza se incrementa en 150 policías para completar 700 hombres. Se instalan 3 nuevos CAI's. Una comisión de la Defensoría del Pueblo habla de 1.000 personas desplazadas por la confrontación urbana y califica la situación humanitaria como grave. La Fuerza Naval del Pacífico desarrolla jornadas cívicas en varios barrios mientras sigue la oleada de petardos en la ciudad.

En la vía al mar se presentan retenes, incineración de tractomulas y muerte de dos conductores. Estalla una carretilla bomba en el puente del Piñal. Se incautan armas en el río Raposo y se desmantela en la zona rural un campamento del Frente 30 con capacidad para 100 guerrilleros. Al final del semestre, se crea un Comando Operativo Especial de Policía para Buenaventura.

El primer semestre/07, se caracteriza por la puesta en marcha del Comando Operativo Especial de la Policía con 900 efectivos, bajo el mando del coronel Yamil Moreno, apoyado por la Infantería de Marina. Se presentan capturas de milicianos en distintos barrios mientras que sus habitantes denuncian abusos de autoridad. Se decreta el toque de queda en las comunas 3, 5, 7 y 12. Se activa una carga explosiva contra un camión de la Policía que deja 6 muertos y varios heridos. El Alcalde de la ciudad dice que la ciudad vive una disputa por territorios que nadie domina. En un Consejo de Seguridad, el Ministro de la Defensa crea un "Grupo Elite anti-terrorista" y ofrece recompensas para capturar a los responsables de la bomba, integrantes del Frente Manuel Cepeda Vargas. Se produce la detención del presunto responsable, al mismo tiempo que continúan los ataques de las Farc contra desmovilizados de las AUC y miembros de la Infantería de Marina. Se presentan múltiples enfrentamientos entre Fuerzas del Orden (Policía y Fuerza Naval), Farc (incluyendo desmovilizados) y AUC (también incluyendo desmovilizados) a nivel de barrios y en la zona rural. Estos enfrentamientos incluyen asesinatos, amenazas, capturas, petardos, bombas y desplazamientos de

población. La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA, presenta un informe (octavo) en el que habla del rearme de grupos de desmovilizados en distintos barrios de Buenaventura. Una ola de petardos a Estaciones de Policía antecede la activación de una bomba de alto poder en la carretera Cabal Pombo a la altura del Barrio Nueva Granada, el cual deja 6 muertos y 13 heridos. Las autoridades atribuyen el hecho a las Farc y hacen en gran despliegue en los barrios de la ciudad. Se capturan milicianos de las Farc, continúan los petardos y aparecen asesinatos vinculados con la organización del transporte público urbano. Por su parte la prensa afirma que estarían llegando grupos de 200 guerrilleros y 300 paramilitares para luchar por el control territorial. En el Barrio Cristal se presentan seguidos enfrentamientos entre las Farc y las Fuerzas del Orden en las que se usan armas de largo alcance. A finales del semestre, es reemplazado el coronel Yamil Moreno por el coronel Ramiro Tobón Peña quien anuncia que el Comando de Buenaventura se transformará en un Comando Especial del Pacífico. La Fiscalía anuncia órdenes de captura contra miembros del Frente Manuel Cepeda Vargas, especialmente su cabecilla, alias J.J.

A finales del semestre, se desactivan varias cargas explosivas. Se desmovilizan milicianos de las Farc que entregan material de intendencia e información. Se captura al jefe de las milicias urbanas y, la Armada, da de baja a Milton Sierra, alias J.J., líder del Frente Manuel Cepeda Vargas, en comprensión del río Cajambre. En el Bajo Calima se llevan a cabo enfrentamientos con la columna Libardo García en un territorio considerado como ruta de entrada de insumos químicos y salida de cocaína. A raíz de la muerte de J.J. se informa de la captura de 18 milicianos, mientras que la ciudad vive una oleada de petardos y estalla una bomba en el puente de El Piñal. Se decreta el Toque de Queda y la Ley seca. El General Naranjo, en Consejo de Seguridad, informa que la Fuerza anti-terrorista se incrementará en 80 hombres y que habrá recompensas por información sobre los autores de los petardos. En Juanchito estalla una bomba de alto poder que deja dos civiles muertos, entre ellos una niña. En otro Consejo de Seguridad, el Presidente habla de la necesidad de replantear la estrategia de inteligencia y crear comisiones de fiscales para agilizar la judicialización. Frank Pearl, Consejero Presidencial para la Desmovilización y Reinserción lleva a cabo una reunión en la que se habla de 35 desmovilizados asesinados y 25 que han vuelto a delinquir, aparentemente en conexión con el control del mercado. Los desmovilizados solicitan salir de la ciudad o del país.

De manera intrigante se presenta una masacre desde un carro tipo burbuja contra una peluquería, con saldo de cuatro muertos y dos heridos. El gremio de los peluqueros se queja y dice que en el año anterior han sido asesinados doce de ellos. Un grupo que se autodenomina “Fuerzas Armadas Desmovilizadas” amenaza a la Presidenta del Sindicato de Trabajadores del Hospital. Se colocan petardos contra la casa del Gerente del Hospital Luís Ablanque. Es asesinado el Gobernador Indígena del Río San Juan. También aparecen asesinados cotereros del muelle, así como cuerpos descuartizados en bajamar. Se asiste, paralelamente, a una oleada de desplazamiento de población de algunas zonas rurales y al interior de la ciudad.

A finales de semestre, se llevan a cabo dos marchas, la primera, con la participación de más de 2.000 personas agrupadas en cerca de 30 organizaciones, realizada en rechazo a las masacres, asesinatos y desapariciones, y la segunda, contra la violencia, con más de 7.000 participantes. La Comisión de Derechos Humanos del Senado y la Cámara sesiona en Buenaventura y crean una delegación permanente. Una vez más, un

sacerdote denuncia una alianza entre la Policía y grupos ilegales.

En el segundo semestre/07, sobresalen las acciones tendientes a afectar las elecciones. A comienzos del semestre, se desactivan petardos cerca de la Registraduría. Es asesinado un candidato al Concejo por el partido Conservador y son amenazados ediles y candidatos a Concejo y Alcaldía. En septiembre, sicarios atentan contra tres candidatos del Partido de la U y contra dos candidatas al Concejo (Lady Tatiana Palacios y Maritza Omen). Igualmente, se presentan dos atentados contra el candidato a la Alcaldía Héctor Copete, el segundo de ellos con una granada de fragmentación lanzada a su casa. El comandante de la Policía dice que el atentado iba contra cuatro policías que pasaban revista a la vivienda. También se presenta un atentado contra el candidato del Polo Democrático Alternativo Guillermo Portocarrero y se repite el atentado contra Lady Palacios del partido de la U, esta vez contra su sede política. También se atenta con un petardo contra la sede de Eliécer Payan, candidato al Concejo por el partido Liberal y se frustra un ataque contra el candidato a la Alcaldía Félix Ocoró. La Defensoría Regional del Pueblo indica que en el Departamento hay 33 candidatos en riesgo y 19 amenazas, varios de ellos en Buenaventura. La Senadora Dilian Francisca Toro, del partido de la U, pide más atención del Gobierno Nacional para Buenaventura.

En el casco urbano, se crea un grupo especializado de 60 hombres para prevenir extorsiones en la zona del mercado. Se detienen varias personas, entre ellas una sindicada de pertenecer a las Farc. Al mismo tiempo se capturan personas encargadas de reorganizar las milicias del Frente Manuel Cepeda Vargas y se habla de diferencias internas de la organización; se ofrecen 190 millones por la captura de alias “Santiago”, sucesor de “J.J.” y alias “Mincho”, comandantes del Frente Manuel Cepeda y del Frente 30 respectivamente. En Agosto se desarrolla una operación especial entre el DAS, La Policía y la Infantería de Marina que neutraliza atentados y captura presuntos milicianos del Frente Manuel Cepeda Vargas. En el mes de septiembre se presentan varios asesinatos de policías, algunos de estos por sicarios, y se considera que hay una reactivación del Plan Pistola de parte de las Farc. Igualmente se presentan atentados contra puestos de Policía, capturando a presuntos milicianos como responsables. A mediados de octubre, 18 guerrilleros del Frente Manuel Cepeda Vargas se desmovilizan para acogerse a los planes de reinserción. En noviembre activan un petardo contra una patrulla con siete policías en el Barrio Bolívar. Por su parte las autoridades capturan a presuntos milicianos vinculados con los atentados a políticos en el barrio Juan XXIII y Viento Libre.

En la zona rural, en el km. 23 de la carretera Cabal Pombo, el Frente 30 y la columna Libardo García intentan montar un reten y se da un enfrentamiento con unidades del Batallón de Alta Montaña. Por su parte, éste Batallón despliega la operación “Omega” que destruye un campamento en la vereda Peñitas con capacidad para 15 personas. En el Bajo Calima, una patrulla de la Infantería de Marina es atacada con una bomba a control remoto de 10 kg. de anfo, la cual deja un saldo de cuatro muertos y ocho heridos. En estos hechos estaría involucrada la columna Libardo García del Frente 30. La prensa informa sobre una oleada de desplazamiento forzoso. A mediados de noviembre, en el sector Cacao, a inmediaciones del río Raposo, al sur del municipio, la Infantería de Marina halla un arsenal del Frente 30 de las Farc. Las operaciones y combates contra esta agrupación se extienden varios días más y el día 22 mueren dos soldados en el corregimiento Cisneros. En Cali es capturado un guerrillero que había quedado herido en la operación que dio de baja a alias “J.J”. Era considerado su jefe de seguridad,

explosivista y politólogo. A final de mes, se anuncia relevo en el comando de la Segunda Brigada Fluvial de infantería de Marina. Asumiría el coronel Héctor Aguas, actual miembro del Estado Mayor de la Brigada.

A lo largo del semestre continúan apareciendo cuerpos en zonas de bajamar y en los alrededores del los Barrios Lleras y Viento Libre. En diciembre, se reporta el hallazgo de los cuerpos de cuatro pescadores en avanzado estado de descomposición a bordo de una lancha a la deriva cerca a La Bocana con señales de impactos de bala e incineración. Autoridades presumen que se podría tratar de robo o ajuste de cuentas.

El Gobernador Angelino Garzón denuncia la aparición de las “Águilas Negras” en el Departamento. En la comuna 5 de Buenaventura aparecen panfletos alusivos a amenazas y presencia de esta agrupación. Algunos peluqueros denuncian amenazas de muerte contra ellos por parte de desconocidos y creen que se trate de grupos paramilitares. A mediados de mes, un personero estudiantil del Instituto Técnico Industrial es hallado muerto, flotando en una zona de bajamar aledaña al barrio Miraflores, con varios impactos de bala y señales de quemadas con ácido en el rostro.

De otra parte la Agencia de la ONU para los refugiados, ACNUR, publica un informe en el que indica que el departamento del Valle tiene el mayor crecimiento de desplazados en 2006. Dentro de éste, Buenaventura es el municipio que recibe y expulsa el mayor número de desplazados. Otro informe que se publica es un balance de la desmovilización del Bloque Calima en el Valle. Sobre Buenaventura indican que hay incumplimientos por parte del Estado, varios han sido asesinados y otros más han reincidido para defenderse de las milicias. El Alto Consejero Presidencial para la Reinserción reconoce que la experiencia del Bloque Calima no fue exitosa y que Buenaventura es inmanejable. Así mismo, por medio de denuncias de desmovilizados de las Farc se presentan balances negativos. Se habla del asesinato de varios de ellos en Cali y Buenaventura entre octubre y diciembre, entre ellos a John Angulo, alias “El Chino” y William Riascos, alias “Seguidilla”, quienes coordinaron la desmovilización de un grupo numeroso de milicianos a comienzos de año, éste último desaparecido.

3.2.2 Palmira y municipios aledaños.

En el primer semestre/06, se presentan varios atentados con explosivos contra patrullas de la Policía, atentados contra torres de energía y puentes, hostigamientos y enfrentamientos, asesinatos de indígenas y campesinos por parte de grupos armados. La guerrilla declara un paro armado en la zona. Las autoridades diseñan un nuevo plan de seguridad con patrullas rurales móviles y desarrollan allanamientos en la parte urbana. De manera más específica:

En la parte rural de Palmira, en el sitio La Gertrudis, cerca de la entrada al Ingenio Manuelita, es derribada una torre de energía que pasa por el borde de la carretera Panamericana.

En la zona montañosa de Florida, se destaca un combate entre el Ejército y el Sexto Frente de las Farc. También se desactiva un carro bomba con 150 kilos de anfo en la vereda Los Alpes.

En el mismo municipio se presentan asesinatos de indígenas y campesinos por parte de grupos armados. A principios de marzo, el Coordinador de Derechos Humanos de la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca, Orivac, denuncia el hostigamiento de grupos armados en la zona de Florida. Una pareja de indígenas es atacada desde una moto con armas de fuego y granada. El hombre quedó herido y la mujer falleció. Por su parte, el Secretario de Gobierno del Municipio, Walter Jaramillo, indica que tres cilindros con explosivos fueron desactivados en el Puente Misael Pastrana que comunica con Miranda. A mediados de abril, en Potrerillo, zona rural de Palmira, son asesinados cuatro campesinos. Según el reporte de prensa, un grupo de hombres fuertemente armados que vestían camuflados sacaron a las cuatro personas de sus viviendas y las ajusticiaron con tiros de fusil AK-47. Según el comandante de la Policía de Palmira, Mayor Edgar Horacio Ledesma, el crimen se habría realizado porque los campesinos no eran simpatizantes de las Farc, además de que uno de los asesinados tenía un hijo activo en el Ejército. El Secretario de Gobierno Departamental, Orlando Riascos, señala como responsables a los grupos armados ilegales de la región. A finales de mes, una patrulla de Policía que adelantaba tareas de vigilancia y control fue atacada por parte de milicianos de las Farc con una granada de fragmentación en el casco urbano de Florida. Cuatro uniformados resultaron heridos, así como seis civiles más. El Alcalde, Hugo Venancio Córdoba, ante la oleada de atentados contra las autoridades sucedidas en los últimos meses, cita un Consejo de Seguridad en la que se toman una serie de medidas como restricción a circulación de menores a altas horas de la noche y parrilleros de motos.

En mayo, las autoridades hablan de un “nuevo esquema de seguridad” para las zonas rurales de Palmira, Florida y Pradera. La estrategia, lanzada por primera vez, es una base policial en El Arenillo, municipio de Palmira, a cargo de un oficial y 45 uniformados. Según el comandante de Policía Valle, coronel Jaime Gutiérrez “Las unidades policiales no permanecerán estáticas, sino que patrullaran constantemente la jurisdicción rural que les fue asignada”. A finales de mes, campesinos de la zona montañosa de Palmira y El Cerrito informaron sobre la declaración de paro armado hasta el 5 de junio por parte de las Farc en los caseríos El Toche, Cabuyal, Teatino y Combia, en Palmira, y Tenerife en El Cerrito. Dicen que “ninguna persona podrá subir o bajar de la zona hasta el 5 de junio próximo. Así mismo habrían prohibido el transporte de leche y productos agrícolas, al igual que de particulares y pasajeros.” (120050601). El comandante del Batallón Codazzi de Palmira calificó la información como rumores y adujo presencia de la Fuerza Pública en la zona.

A finales de mayo, la Policía Judicial y la Fiscalía adelantan allanamientos en los barrios Nuevo Horizonte, Fajardo y Casas Amarillas, de Florida. En una de las casas hallan cargas explosivas listas para instalar, una granada de fragmentación IM-26, seis kilos de amonal, diez estopines y 40 metros de cordón detonante. Un menor de 16 años fue capturado e inmovilizaron una camioneta Luv 2000.

En junio se registra la explosión de un campo minado sobre una carretera del municipio de Corinto. Al parecer iba dirigido contra una patrulla de 15 policías que pasaría por el lugar pero por un error habría explotado antes.

El segundo semestre/06 se caracteriza por fuertes enfrentamientos entre Ejército y la Guerrilla, el anuncio de una base militar para la zona, la polémica alrededor del despeje

para el Intercambio Humanitario, los asesinatos, el desplazamiento de población, la captura y desmovilización de miembros de la guerrilla.

Al iniciar el mes de julio, la Policía en la operación “Llanogrande” incauta un sofisticado arsenal avaluado en mas de \$1000 millones, el cual contiene 3 fusiles Punto 50, 18 armas de precisión, 15 miras telescópicas, 15 designadores lacericos y 8 proveedores de 100 cartuchos cada uno. Tres personas fueron detenidas. La incautación se produjo al interior de un taller de mecánica en el corregimiento La Dolores, de Palmira y según la Policía pertenencia a las Farc. Poco después, cerca de 50 integrantes de la Compañía Alonso Cortés de las Farc atacan a media noche la reciente base de El Arenillo en Palmira, dejando 6 policías muertos y 3 heridos. Según el comandante de la región cuatro de Policía, general Luís Jacinto Mesa, el ataque se realizo desde la parte alta utilizando cilindros bomba cargados con metralla y dinamita. El comandante de Policía Valle anuncia que no abandonaran la base y anuncia la instalación de dos más en próximos meses. De manera simultánea, la estación de apoyo era atacada por unos 30 miembros de las Farc. A mediados del mismo mes, la Policía captura en el barrio Colorado de Palmira, a tres hombres sindicados de pertenecer al Frente 6 de las Farc, uno de ellos explosivista y otro encargado de realizar labores de inteligencia.

En esos mismos días, encapuchados bajan a dos hombres de un campero de servicio público y los asesinan en Villapinzón, zona rural de Florida. Uno de los hombres era el conductor del campero, quien residía en el corregimiento La Diana y era líder reconocido del sector. El otro hombre es un indígena del mismo sector. A mediados de mes, en Tulúa se lleva a cabo un consejo extraordinario de seguridad con la presencia del Ministro de Defensa Juan Manuel Santos, el Gobernador del Valle, alcaldes locales, altos mandos militares y de policía. Entre otras cosas, se anuncia en el evento la construcción de una base de alta montaña del Ejército en el corregimiento La Diana, financiada por industriales de la caña de azúcar.

A partir de agosto, el tema del despeje militar de Pradera y Florida como eventual condición para un posible acuerdo humanitario entre el Gobierno Nacional y las Farc toma relevancia creciente, sobretudo a partir de la conformación de una Comisión del Congreso para buscar acercamientos entre las dos partes y las presiones de los familiares de los secuestrados políticos en poder de las Farc, principalmente de los ex diputados del Valle, así como de otras instituciones y personalidades políticas.

El 7 de septiembre se realiza un consejo de seguridad en Florida y Yumbo en el que participan autoridades civiles y militares de las dos localidades para analizar el tema de asesinatos. Se decide aumentar el pie de fuerza y construir un nuevo CAI en Florida. Los familiares de los secuestrados se reúnen a mediados de este mismo mes con el Alto Comisionado Para la Paz y el Episcopado para pedir el despeje. Días después, se revela una presunta oposición de la cúpula de las Fuerzas Militares hacia el despeje, la cual habría frenado la presentación del decreto presidencial que autorizaba la desmilitarización de ambos municipios, aunque el Comisionado para la Paz dice que se trato de “mera especulación”. En las principales ciudades del departamento, miles de personas marchan en conmemoración del Día Internacional de la Paz, para rechazar la violencia y pedir la libertad de todos los secuestrados, sumado todo ello a la exigencia del despeje.

Durante la segunda mitad de septiembre hasta la primera semana de octubre, se presentan combates entre el Ejército y guerrilleros de la columna Gabriel Galvis de las Farc en los límites entre Valle y Cauca. En la vereda Santo Domingo de Florida el Ejército da de baja a tres insurgentes, incauta material bélico y desmantela un cristalizadero de cocaína. En la zona rural de Miranda y en el corregimiento Los Alpes, de Florida, el Ejército ocupa campamentos de las Farc, uno de ellos con capacidad para albergar 500 guerrilleros, con zanjas, refugios antiaéreos, dormitorios, pistas de entrenamiento y fabricas para elaborar granadas. Los campamentos se encontraban rodeados de campos minados y en las vías de acceso se hallaban carros bomba. Por ultimo, en Corinto, a comienzos de octubre, se presenta un enfrentamiento entre el Batallón Contra guerrilla N. 3 y una cuadrilla del Frente 6 de las Farc en la vereda El Silencio. Por parte del Ejército, se reporta la baja de siete soldados. En medio de los combates se conoce de la activación de alarmas por posibles desplazamientos desde la zona rural de Florida. En la zona urbana, la Policía realiza operativos de control con algunos resultados como incautación de granadas, explosivos, armas y la captura de cinco personas.

El 20 de septiembre, hombres armados vestidos de civil llegan a un caserío del corregimiento La Quisquina de Palmira y asesinan selectivamente a tres hombres, uno de ellos tendero, y otro de ellos, mayordomo de la finca La Bolivia. La prensa habla de fuentes extraoficiales que indican que el hecho se debe a “limpieza de sapos” en la región, es decir, asesinato de colaboradores. El comandante del Batallón Codazzi de Palmira, general Gerardo Endara Plaza, dice no conocer los autores ni los móviles, pero que la zona es de influencia del Frente 6 de las Farc. Dos días después se conoce de la existencia de un informe del Sistema de Alertas Tempranas que la Defensoría del Pueblo había presentado sobre riesgos de la población en la vereda La Quisquina, Potrerillo, Tenjo, Caluce, La Buitrera, Toche, Combia, Teatino y El Arenillo. Por su parte el comandante de Policía Valle, coronel Jaime Gutiérrez, responsabilizo a las Farc por el triple crimen y anunció de nuevo la instalación de una base de patrullaje en la zona en días próximos.

El 24 de septiembre se conocen pruebas de supervivencia de los ex diputados del Valle, los cuales insisten en el tema del intercambio. Sin embargo, el Ministro de Defensa declara que no hay condiciones para tal despeje y señala aumento de presencia guerrillera en Pradera y Florida. A finales de septiembre, el Presidente anuncia la posibilidad de una zona de encuentro sin especificar si se trata de despeje total o parcial de los municipios. Las Farc responden días después declarando estar listas para el proceso, siempre y cuando se decrete la desmilitarización y se les quite el calificativo de “terroristas”.

Luego, el Ministro de Defensa Juan Manuel Santos ordena la militarización de las zonas rurales de Florida y Pradera, en momentos en que se discute la posibilidad de realizar conversaciones sobre el Intercambio Humanitario. Condicionamientos de parte y parte dilatan los acercamientos durante el mes de octubre, en medio de un inusitado espíritu esperanzador por parte de los familiares de los ex diputados y la población civil en general. El día 19 de octubre, estalla un carro bomba al interior de la Escuela Militar Nueva Granada de Bogotá, el cual es atribuido a las Farc. Éste hecho genera una fuerte reacción del Gobierno Nacional suspendiendo todo tipo de acercamiento y ordena a las Fuerzas Militares intentar el rescate de los secuestrados. Los controles militares en Pradera y Florida se endurecen y según el comandante del Ejército, general Mario

Montoya, “la intención es tener controlada totalmente la zona”. Se informa además que tropas de la Quinta División del Ejército mantienen controles sobre la parte del Tolima, en lo que podría aparecer como un cerco militar a las posibles zonas de encuentro que se estaban definiendo.

En noviembre, se destacan enfrentamientos en la vereda San Pablo de Corinto, donde mueren dos militares y dos civiles. El día 12, Tropas de la Tercera División del Ejército y la Tercera Brigada hallan un campamento e incautan materiales explosivos a las Farc, ambos en la vereda Los Alpes de Florida. Igualmente se presenta el robo de un vehículo con 73 cilindros de gas en la vía Corinto-Miranda por parte de las Farc y su posterior recuperación por parte de la Policía en la vereda El Barranco de Miranda.

En el mes de diciembre se produce la captura de un cabecilla del Frente Manuel Cepeda Vargas de las Farc en Palmira, responsable de varios atentados en Cali. Por medio de éste se efectúa más tarde la desmovilización de 45 miembros del Frente.

En los primeros días de enero/2007, la Policía informa sobre la captura en Florida de nueve personas sindicadas de pertenecer y/o colaborar con la columna Gabriel Galvis de las Farc. Según la Policía, algunos están solicitados por rebelión o señalados de estar encargadas de realizar extorsiones, secuestros, manejo de explosivos y alertar a los cabecillas “Leonel” y “Jonathan” sobre la presencia y movimientos de la Fuerza Pública en la zona rural del municipio. En la finca Los Barrancos de Pradera hallan una fosa común con los cadáveres de dos hombres desaparecidos desde el 16 de diciembre.

En la última semana del mes, la Organización Indígena Regional del Valle del Cauca, Orivac, denuncia la presencia de grupos armados que se denominan “Águilas Negras” en la zona rural de Florida. Una Comisión visita la zona, la cual está integrada por Defensoría Regional del Pueblo, delegados de la ONU y gobernadores indígenas. Según el Personero Municipal se constató, a través de varias versiones, la presencia de este grupo, cuyos miembros visten con uniformes negros y portan armas de largo y corto alcance. Sin embargo, el comandante del Batallón Codazzi de Palmira, teniente coronel Elmer Peña, asegura que se trata de guerrilleros de las Farc que se hacen pasar como integrantes de las “Águilas Negras” para desviar la autoría de los asesinatos.

En febrero, el Ministro de Defensa preside un consejo comunitario de seguridad en la Cámara de Comercio de Palmira, el cual cuenta con la presencia de la senadora Dilian Francisca Toro y altos mandos militares, para analizar índices de delincuencia en la ciudad.

A mediados de febrero, diversas autoridades del departamento del Valle se reúnen en Ginebra para lanzar una campaña contra las minas antipersonales. En el balance de este problema se indicó que los municipios más afectados en los últimos 10 años son Florida, Cali, Tulúa, Palmira y Jamundí. En lo corrido del año se habían presentado cuatro casos, algunos de estos en Florida. Al respecto el Personero del municipio Homero Montaña, asegura que se tiene información de campos minados en los corregimientos Las Brisas, El Líbano y Llanito.

En marzo, las autoridades hallan una caleta con 260 kilos de hidrogel en el corregimiento La Dolores, de Palmira, presumiblemente para atacar contra la infraestructura eléctrica. Por otra parte, se presentan varias acciones de grupos armados

contra comunidades indígenas en Florida. El día 4 del mismo mes, un grupo de guerrilleros de la columna Gabriel Galvis ejecuta por deserción a un indígena del Cabildo Triunfo Cristal Páez del corregimiento El Líbano. El hecho provoca una fuerte reacción de la Guardia Indígena quienes persiguen a los guerrilleros y logran quitarle el fusil a uno de ellos -aunque todos huyen- y entregarlo a la Fiscalía. Días después, hombres armados sin identificar, sacan por la fuerza a un indígena de su vivienda del Cabildo Central de Florida y es degollado. Cuatro días después, Orivac confirma el asesinato Ricardo Ipia, otro miembro -líder- del cabildo, muerto en circunstancias similares en el sector Altamira. Y un día después de éste último episodio, otro hombre es asesinado en la vereda Llanito del corregimiento La Paz de Florida, esta vez identificado por la fuente como agricultor.

En medio de la preocupación generada por estos hechos, se suspende la inauguración de la nueva Base Militar en el corregimiento La Diana de Florida, argumentando difíciles condiciones climáticas para el transporte aéreo del Ministro de Defensa. Simultáneamente desde primeras horas del día, cerca de 600 indígenas bloquean la carretera de acceso a la base para protestar por la construcción de ésta en territorio indígena.

A finales de marzo, Tropas del Batallón Contraguerrilla N. 57 dan de baja a cuatro individuos que se movilizaban en un Renault 6 por el corregimiento La Ruiza de Pradera. Los hombres son presentados como integrantes de la columna Gabriel Galvis de las Farc que intentaban realizar un secuestro. Les fueron hallados 2 pistolas y 2 revólveres, dos uniformes de policía y equipos de comunicación.

En mayo, en un hecho catalogado de “extrañas circunstancias”, mueren un militar y dos civiles miembros de la Red de Cooperantes producto del estallido de un cilindro bomba puesto al interior de un vehículo que había sido hallado en la vía entre los corregimientos Potrerillo y La Quisquina de Palmira. Un coronel del Batallón Codazzi indicó que ese día había sido reportado un secuestro en la finca Montelindo, parte alta de La Quisquina. Al enviar unidades militares al lugar fue hallado el cilindro con un cordón detonante. El militar y los civiles cortaron el cordón y montaron el cilindro al carro donde se transportaban, donde luego estalla y deja el resultado arriba mencionado.

En junio, al tiempo que se discute ampliamente el tema del despeje militar de Pradera y Florida como condición para realizar una posible negociación del intercambio humanitario, es secuestrado el comandante de Policía de Florida, capitán Javier Solórzano y dos personas más: un gerente de una empresa de apuestas y su hijo. El plagio se produce en la finca El Parral de Miranda, usada como estadero. En horas de la noche, ocho hombres armados de las Farc llegan al lugar y al percatarse de la identidad del policía, los montan en un carro y se los llevan. Dos días después, más de 2000 personas marchan por las calles de Florida para pedir la liberación del comandante de Policía y sus acompañantes.

De otra parte, la Policía Metropolitana de Cali incauta 100 kilos de explosivos en la vía entre Candelaria y Pradera. Un hombre es capturado, manifiesta pertenecer al Frente 6 de las Farc y declara que los explosivos tenían como fin realizar atentados contra la fuerza pública en Pradera y Florida.

En agosto se destacan dos hechos de contexto. Primero, un evento realizado por el Ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias llamado: “Cruzada contra el despeje” al que asisten cerca de 500 personas entre campesinos, líderes comunitarios y dirigentes políticos y gremiales. Segundo, una visita de miembros de Orivac y una delegación del Parlamento Británico a la zona rural de Pradera. El Coordinador de Derechos Humanos de Orivac, Luís Ángel Perdomo, da a conocer que el 20% de la población que se había desplazado de las zonas de Pradera y Florida han retornado a sus hogares, a pesar de que aun se mantengan rasgos de zozobra entre la comunidad. El Personero de Pradera rebate las estadísticas de desplazamiento de Orivac y afirma que tal cifra es menor.

A comienzos de septiembre, tropas de la Tercera División del Ejército decomisan 5 kilos de marihuana, 15 arrobas de hoja de coca y 20 galones de gasolina en zona rural de Florida, perteneciente a la Columna Gabriel Galvis de las Farc. El día 16 del mismo mes, en el corregimiento Tenjo de Palmira, tropas del Ejército dan de baja a cuatro presuntos milicianos de la cuadrilla Alonso Cortes que se movilizaban en un Renault 18 sin placas, portando 4 armas y granadas.

A mediados de mes llegan 3 cartas del capitán Guillermo Solórzano, comandante de Policía de Florida secuestrado hace 3 meses por las Farc. Días después, es liberado el gerente de apuestas por mediación de la Oficina de Gestión de Paz del Valle.

En la primera semana de octubre se lleva a cabo un consejo de seguridad en Buga. Allí, el Ministro de Defensa anuncia al aumento de 100 hombres del pie de fuerza de la policía de Palmira; mitad para la zona urbana, mitad para la zona rural. En Pradera, el candidato a la Alcaldía por el Movimiento Alas Equipo Colombia, Adolfo Escobar, denuncia amenazas de muerte en su contra para exigirle la renuncia a su candidatura. Declara haber recibido una llamada de un hombre identificado como comandante de un bloque móvil y un mensaje escrito dándole 24 horas para renunciar. El día 16 de ése mismo mes, en Palmira es secuestrado un candidato al Consejo por la Alianza Social Afrocolombiana, ASA. El candidato es interceptado por la calle, subido a un vehículo, tapado los ojos con gafas de soldadura, dopado, y llevado a un lugar desconocido. Horas después es rescatado en el sector Monterredondo de Corinto. Ya liberado, el aspirante al Consejo retira su candidatura y anuncia apartarse de la vida política, mas no del trabajo comunitario. No señalan quienes serian los responsables del secuestro, aunque el coordinador del Comité Político de ASA, sostiene que durante el secuestro el candidato fue obligado a grabar un audio en el que decía que el candidato a la Alcaldía William Rodríguez había entregado \$35 millones al grupo ASA para apoyarlo. Un último caso de violencia electoral se produce en Corinto con el asesinato del diputado liberal a la Asamblea del Cauca, Elmar Duran. El hecho es atribuido a las Farc por el Gobernador del Cauca y genera la reacción del director nacional del partido por garantías para los miembros de la colectividad. En este mismo hecho se informa brevemente del asesinato a un candidato a la Alcaldía de Morales, ocurrida el pasado 25 de septiembre en Silvia.

En noviembre, el día 7, el Ejército halla y destruye un campamento con capacidad para 40 personas perteneciente a la columna Gabriel Galvis de las Farc en la vereda Cajones, de Florida. A finales del mismo mes, se desarrolla la operación “Cóndor” entre los grupos Jungla del Ejército y Eincar de la Policía Nacional junto a la Fuerza Aérea en zona rural de Corinto. Un campamento del Frente 6 de las Farc es bombardeado, dejando siete guerrilleros muertos, cinco capturados y el decomiso de armas, munición y material para fabricar estupefacientes.

3.2.3 Santander de Quilichao y circunvecinos.

Durante el primer semestre/06, el Comandante de la Tercera Brigada, General Sánchez, reporta en dos oportunidades las bajas de supuestos milicianos de las Farc asociados con actividades de secuestro. El padre de uno de ellos rechaza la versión. En la zona de Caloto se presenta un enfrentamiento entre las Farc y el Ejército que deja viviendas destruidas y población civil desplazada. A finales de mayo, las Farc promueven retenes en las vías que conducen a Puerto Tejada, Padilla, Miranda y Corinto, con la amenaza de quemar los carros que transiten por las vías. En Guachené una patrulla de policía es emboscada y dos agentes resultan muertos.

A finales de julio, en la finca La Palma de Villarrica, un operativo del Gaula con apoyo de la “red de cooperantes”, da de baja a cinco personas y capturan a uno más. Éste último, primo del “Negro Acacio” y desmovilizado de la columna Teófilo Forero. Según información del Gaula en el lugar esperaban cobrar una extorsión.

En agosto, una patrulla de Policía es atacada con cilindro bomba en la zona rural de Caloto, dejando ocho agentes heridos. El hecho lo atribuyen a guerrilleros de la columna móvil Jacobo Arenas. Poco después, un soldado muere al pisar una mina antipersonal. El hecho lo relacionan con la presencia de guerrilleros del Frente 8 de las Farc y la supuesta infiltración de los indígenas en las tomas de tierra. En los días siguientes, se informa de operativos de miembros del Batallón Pichincha en Suárez, Jamundí y Caloto, donde capturan a cuatro personas e incautan material bélico.

A principios de octubre, de nuevo en Suárez, integrantes de la columna móvil Jacobo Arenas y Frente 8 de las Farc derriban dos torres en el paraje San Miguel. Tres días después, una patrulla de la base militar del Batallón Pichincha, encargada de vigilar los alrededores de la represa La Salvajina, cae en un campo minado en zona rural de Suárez. En el hecho mueren 4 soldados y ocho más resultan heridos. En la vereda El Amparo, del mismo municipio, se dan enfrentamientos con miembros del ELN donde mueren dos insurgentes.

En la segunda semana de octubre, militares de la Tercera Brigada llevan a cabo la operación “Fénix” en zona rural de Santander de Quilichao. En ésta dan de baja a dos presuntos guerrilleros del Frente 6 de las Farc.

A inicios de diciembre, efectivos del Gaula dan de baja a tres presuntos integrantes de la Columna Móvil Jacobo Arenas en un paraje entre Timba y Santander de Quilichao. Al parecer los hombres se disponían a dejar una carga explosiva en la red eléctrica. Días después otros tres presuntos integrantes de la misma agrupación guerrillera son dados de baja en el sector Lomitas de Santander de Quilichao.

En la primera semana de marzo/2007 se registran varios retenes ilegales de las Farc sobre la vía Panamericana; uno, a la altura del río Ovejas, donde asaltan un bus de la empresa Transpuerto Tejada, pinchan las llantas de 6 tractomulas y las atraviesan sobre la vía. El Ejército hace presencia y se presenta un enfrentamiento corto. Los guerrilleros se repliegan hacia las montañas. El otro reten se presenta tres días después, en el corregimiento Mandivá de Santander de Quilichao, donde aproximadamente 30 guerrilleros del Frente 6 de las Farc tenían listas 3 tractomulas para atravesar sobre la vía. Igualmente, la Columna Móvil Jacobo Arenas intenta montar otro reten en zona

rural de Caloto, pero el Ejército llega al sitio y da de baja a cuatro guerrilleros. En zona rural de Suárez se presentan enfrentamientos entre el Ejército y la Columna Miller Perdomo de las Farc, dejando un guerrillero muerto. A mediados de marzo, el Ejército realiza operativos de captura contra seis presuntos guerrilleros de la Columna Jacobo Arenas de las Farc en Cali, Popayán y Santander de Quilichao. Poco después, Tropas de la Tercera Brigada del Ejército dan de baja un guerrillero de la Columna Móvil Jacobo Arenas en inmediaciones de la vereda El Turco de Santander de Quilichao.

En mayo, un grupo de hombres armados baja de un vehículo a una profesora de la escuela San Pedro Claver de Puerto Tejada y la asesinan en un paraje del corregimiento Timba. Acusan a las Farc de ser los responsables.

El día 24, miembros del Frente 6 de las Farc derriban una torre de energía en la vereda La Catalina de Buenos Aires. Octava torre derribada en la región.

A comienzos de septiembre en el corregimiento Villa Colombia, de Jamundí se entregan al DAS tres guerrilleros del Bloque Arturo Ruiz del Frente 30 de las Farc que pretendían efectuar un atentado con carro bomba en Cali, similar al realizado contra el Comando de Policía. Los insurgentes entregan el carro y los explosivos. La entrega se realiza con mediación de Gustavo Muñoz, miembro del Consejo Nacional de Paz y presidente de la Fundación Nueva Esperanza de Secuestrados.

A finales de noviembre, unidades del Batallón Pichincha destruyen un campamento del Frente 6 de las Farc utilizado para procesar cocaína en zona rural de Suárez.

En los primeros días de diciembre, el Ejército captura en Caloto a un presunto cabecilla del Frente 6 de las Farc señalado de ser responsable del asesinato del diputado del Cauca Elmer Eliel Duran en octubre pasado, así como de extorsión e intimidación.

3.2.4. Toribio, Jambalo y Caldon.

A principio de abril/2006, el Ejército tiene un enfrentamiento con la guerrilla en la vereda las Filipinas de Caldon con saldo de un guerrillero muerto y seis capturados. Se presume que iban a tomarse la Panamericana para montar un retén y hurtar vehículos con alimentos. A finales de mes, se presentó un fuerte hostigamiento de la guerrilla en la zona urbana del municipio, utilizando francotiradores, con saldo de un policía herido de gravedad. Hubo explosiones con cilindros bomba en los alrededores.

Los hostigamientos con francotiradores se repiten la segunda semana de mayo, esta vez causando heridas a dos policías y daños en el cementerio. Según el comandante de Policía del Cauca, Coronel Luís Cely, habrían disparado con fusiles y ametralladoras M60 desde los cerros que rodean al municipio.

A mediados de julio, en Jambalo, se registra un hostigamiento por parte de los Frentes 6 y 8 de las Farc en los alrededores del casco urbano. Solo hubo daños en algunas viviendas y desplazamiento a la zona urbana.

En julio, la Policía Antiexplosivos desactiva un cilindro de gas instalado en la base del puente del río Ovejas, corregimiento Pescador de Caldon. El intento de voladura del

puente fue adjudicado a la columna Jacobo Arenas de las Farc. Poco después, efectivos del Batallón José Hilario López hallan 5 granadas artesanales de 120 mm y 1 lanza-granadas de mano en la vereda La Llanada de Caldon, que al parecer pertenecían a la columna Jacobo Arenas y los harían estallar al paso de una patrulla militar

A finales de agosto lanzan un cilindro bomba a la zona urbana de Toribio, aparentemente dirigido contra la estación de policía local, pero afectó algunas viviendas. El hecho es adjudicado a miembros de la Columna Móvil Jacobo Arenas de las Farc.

A mediados de septiembre, Tropas de la Tercera Brigada hallan un campamento de las Farc en el sitio Rionegro. Incautan 1 mortero, 10 granadas de mortero, 5 pipas de gas, una rampla lanza-cilindros, 500 kilos de nitrato de amonio y 7 vehículos.

En octubre, unidades del Batallón José Hilario López efectúan la “Misión Táctica Ofensiva Orión” en Caldon. En el marco de ésta, se efectúa un combate con miembros de la Columna Móvil Jacobo Arenas de las Farc en la vereda La Llanada y un militar resulta herido. En otro operativo en la última semana del mes, interceptan un bus intermunicipal de la empresa Cootranar en la vía Panamericana, incautando 49 granadas tipo IM26 y GL. Además, en operativo conjunto del Gaula, DAS y CTI entre Caldon y Santander de Quilichao, rescatan dos plagiados que al parecer habían sido secuestrados por integrantes de la Columna Móvil Jacobo Arenas. Pocos días después, el CTI y el Batallón José Hilario López capturan a cuatro presuntos miembros de la misma agrupación.

A mediados de diciembre, la Policía frustra un atentado en su contra y a un barrio de Jámbalo. El atentado se efectuaría con varios cilindros cargados de anfo y metralla, así como 6 kilos de explosivos. El plan del ataque fue atribuido a la Columna Móvil Jacobo Arenas de las Farc. Después de estos hechos, las Brigadas Tercera y Veintinueve del Ejército movilizan tropas hacia la cabecera municipal y a la vía entre Toribio y San Francisco. Una semana después, miembros del Batallón de Infantería Pichincha desactivan un campo minado con 41 artefactos en zona rural de Jámbalo, del cual presumen fue instalado por la Columna Gabriel Galvis y Alonso Cortes de las Farc. Por último, el día 23 aparece una denuncia de comunidades indígenas de Jámbalo, afirmando que miembros del Ejército asesinó a dos comuneros en el sector Playa Baja y los presentó como integrantes de la guerrilla.

En marzo/2007, las Farc entregan a dos policías de la Estación de Toribio que habían sido secuestrados el pasado febrero en un reten ilegal en la vía entre El Palo y Toribio. La entrega se realizó a una comisión humanitaria integrada por el Cabildo Indígena de Toribio, la Defensoría del Pueblo, la Iglesia, la Cruz Roja y la Personería Municipal.

A finales de mayo, una patrulla de policía es atacada con explosivos puestos bajo la vía por las Farc en el corregimiento Siberia de Caldon, con saldo de tres policías heridos.

A finales de julio, miembros del Frente 6 y Columna Jacobo Arenas de las Farc atacan en la madrugada al casco urbano de Jámbalo, causando daños materiales en algunas viviendas. En la reacción de la Fuerza Pública muere un guerrillero.

En septiembre, miembros del Ejército destruyen un cristalizadero con capacidad para procesar cerca de 400 kilos mensuales de cocaína en la vereda Loma Redonda de Jámbalo que al parecer pertenecía a la Columna Jacobo Arenas de las Farc. Dos personas fueron capturadas. El día 15, los Frentes 6 y 8 de las Farc atacan durante 45 minutos aproximadamente el casco urbano de Toribio, dejando un policía muerto, tres mas heridos junto a seis civiles. Los enfrentamientos continuaron en algunas zonas rurales como La Mina, Loma Redonda y El Tablado. El Comando de la Brigada 29 envía refuerzos y sobrevuela el avión fantasma. Una semana después, la Policía Nacional, en operación encubierta, desmantela una red de milicianos de la Columna Jacobo Arenas de las Farc responsable de una emboscada a la Policía de Silvia en 2005, el asesinato de 3 policías de Toribio en agosto de 2006 y el hostigamiento de la semana anterior a éste ultimo municipio, pero la fuente no se precisa el lugar de las capturas.

En octubre se presentan enfrentamientos entre miembros de las Farc y el Ejército en el corregimiento Pueblo Nuevo de Caldon. Tres militares mueren y cinco más resultan heridos; mientras que cinco guerrilleros también mueren e incautan material bélico. Días después, en Toribio desmantelan una “casa bomba” en el sector Loma Brisas, instalada por la Columna Móvil Jacobo Arenas de las Farc. El día 24 del mismo mes, tropas del Ejército dan de baja a alias “Jabalí”, presunto cabecilla de la Columna Móvil Jacobo Arenas de las Farc, sindicado de realizar varias emboscadas a la Fuerza Publica en Toribio y Tacueyó. La detención se produce en la vereda La María de Toribio. En éste lugar hallan material bélico, equipos de campaña, de comunicación e inteligencia militar.

Por ultimo, en diciembre, integrantes de la Columna Móvil Jacobo Arenas de las Farc atacan el puesto de Policía del casco urbano de Toribio e intentan robar la Caja Agraria. El ataque dura 45 minutos aproximadamente. Tres policías mueren y varias casas resultan averiadas.

3.2.5. Conclusiones.

1) En Buenaventura el conflicto político armado vincula a las Fuerzas del Estado con las Farc, para-militares, desmovilizados de los dos últimos y narcotraficantes. Es un caso extremo de conflicto armado por el control de territorios urbanos y rurales que nadie domina y donde las características del conflicto armado son las de una guerra sucia sin fines políticos explícitos. El Estado parece haber tomado la decisión en el marco de la política de Seguridad Democrática de copar militarmente el territorio. Para esto refuerza la presencia en la parte urbana con la Policía y transforma su operación local en un Distrito de Policía con un “comando operativo” que llega a tener 900 efectivos y actúa junto con la Infantería de Marina, el DAS y la Fiscalía. Se desarrollan acciones de militarización de barrios, toques de queda y detención de presuntos milicianos. La reacción a la presencia policial y militar es paralela con “planes pistola”, petardos contra estaciones de Policía, enfrentamientos en los barrios y bombas activadas al paso de vehículos de Policía.

Al mismo tiempo que esto sucede en la ciudad se presentan balaceras con un carácter más anónimo, asesinatos indiscriminados y cuerpos que aparecen flotando en bajamar en la proximidad de ciertos barrios. Hay referencias a acciones desplegadas por paramilitares, por desmovilizados de las Auc que se habrían vinculado de nuevo a la

criminalidad según el informe de la OEA, por Águilas Negras, por grupos de sicarios. También se mencionan extorsiones y boleteos en la zona del Mercado.

En la zona rural, la actividad estatal esta a cargo esencialmente de la Infantería de Marina. Se presentan enfrentamientos con el Frente 30 de las Farc en inmediaciones a los ríos y la carretera Cabal Pombo, donde se presentan retenes y se incineran tractomulas. La Armada da de baja a Milton Sierra, alias J.J. Comandante del Frente Manuel Cepeda Vargas, En el último período hay mas detenciones de guerrilleros y se presentan desmovilizaciones.

En medio de esta confrontación la población civil se ve fuertemente afectada. En algunos casos aparecen casos de asesinatos selectivos referidos a pastores, peluqueros, sindicalistas y un gobernador indígena. Se desarrollan marchas de la población en protesta por la situación de violencia del municipio. El efecto más visible de afectación de la población civil es el desplazamiento, paradójicamente hacia el casco urbano de Buenaventura, dentro del casco urbano y hacia otros municipios.

La violencia política no se agota en los enfrentamientos entre actores armados. En el municipio hay asesinatos y atentados dirigidos contra personas de distintas orientaciones comprometidas con el proceso electoral. Se trata entonces de afectar el proceso electoral.

2) En Palmira y municipios aledaños, especialmente en Pradera y Florida, se presentan atentados contra patrullas de la Policía en los cascos urbanos y en zonas rurales aledañas, atentados contra la infraestructura eléctrica y puentes. En el primer semestre/06 se declara un “paro armado” por parte de la guerrilla. Las autoridades responden con una estrategia de “patrullas móviles” y el allanamiento de barrios en Florida. Paralelamente se presentan asesinatos de indígenas y campesinos por parte de grupos armados no identificados. En la parte rural se presentan fuertes enfrentamientos entre Ejército y guerrilla del Frente 6 de las Farc y aparece el tema central de conflicto en esta sub-región: el copamiento militar de la zona de montaña con el establecimiento de una Base Militar, apoyado por los gremios, especialmente de cultivadores de caña y productores de azúcar de la parte plana. Esta propuesta entorpece la posibilidad de un posible despeje -total o parcial- de territorios de los dos municipios mencionados para desarrollar un proceso de Intercambio Humanitario. Paralelamente a estos conflictos, aparecen múltiples asesinatos, algunos de ellos con carácter selectivo, de campesinos, indígenas y personas tildadas de “sapos”. En algún momento del segundo semestre/06 se hacen marchas por la Paz y el Intercambio Humanitario con asistencia de miles de personas. Las Autoridades informan sobre la captura de un cabecilla del Frente Manuel Cepeda Vargas y la desmovilización de 45 miembros del Frente 6. Igualmente se capturan personas sindicadas de pertenecer a la columna Gabriel Galvis.

Durante el primer semestre /07, son notables las acciones de grupos armados, esencialmente en Florida y Pradera, contra grupos de indígenas. La Orivac denuncia la presencia de Águilas Negras, pero, en uno de los hechos, la Guardia Indígena reacciona persiguiendo a guerrilleros de las Farc. Los indígenas, a manera de protesta, bloquean la carretera hacia La Diana el día de la inauguración de la Base Militar y ésta finalmente es suspendida. En los distintos hechos resultan indígenas y campesinos asesinados y se desarrolla un fuerte desplazamiento de población rural que posteriormente regresará una pequeña parte a sus viviendas. En Palmira, se vive una criminalidad más difusa, se

encuentran fosas comunes con cuerpos de desaparecidos y de manera selectiva se presentan asesinatos de miembros de la Red de Cooperantes. El Ministro de Defensa convoca un Consejo Comunitario de Seguridad para contrarrestar los índices de violencia en la zona. Esto llevará al aumento de 100 hombres en el pie de fuerza de Palmira y una campaña contra minas anti-persona. Paralelamente, se adelanta una discusión nacional sobre el Intercambio Humanitario y el posible despeje de la zona rural de Pradera y Florida. En medio de esta discusión, las Farc secuestran al comandante de la Policía de Florida y la población local reacciona con una manifestación rechazando el hecho. Por su parte, el Ministro de Agricultura convoca una “Cruzada contra el Despeje” con una nutrida participación de habitantes de la zona.

Las autoridades hacen decomisos de droga que se atribuyen a la columna Gabriel Galvis de la Farc. También se da de baja a miembros de la cuadrilla Alonso Cortés. Al finalizar el año 2007, se despliega la operación “Cóndor”, entre el Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía en la zona de Corinto, en la que se desmantela un campamento del 6 Frente de las Farc y se da de baja a un importante número de guerrilleros.

Al lado del conflicto entre grupos armados se presentan hechos de violencia que tienen que ver con políticos: amenazado, el candidato a la Alcaldía en Pradera por Alas Equipo Colombia; secuestrado el candidato al Concejo por la Alianza Social Afrocolombiana y asesinado un diputado liberal a la Asamblea del Cauca.

3) En Santander de Quilichao y circunvecinos se presentan hechos que se pueden diferenciar y que tienen que ver prioritariamente, ya sea con la zona plana, con el corredor de ladera de la cordillera central o con la zona de Salvajina. En la zona plana hay acciones, por ejemplo en Timba y Lomitas, que se refieren a la baja de milicianos supuestamente vinculados con la actividad del secuestro. También aparece en funcionamiento la “red de cooperantes” que proporciona información al Gaula conducente a la baja de personas presuntamente vinculadas con extorsiones. Por otro lado, una profesora de Puerto Tejada aparece asesinada en Timba. En la zona de ladera, especialmente en Caloto, se presentan enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla generando desplazamientos. Durante el año 2006, las Farc hacen retenes en las vías y despliegan ataques con cilindros-bomba a patrullas de la Policía promovidos por la columna Jacobo Arenas. En el 2007, se presentan retenes en la Panamericana cerca de Mondomo y del río Ovejas. En la zona de Salvajina hay atentados contra torres de energía, denuncias ante las autoridades por campos minados y enfrentamientos que involucran al Ejército, las Farc -columna Miller Perdomo- y el Eln. Además se desmantelan campamentos de las Farc vinculados con narcotráfico. Por otro lado, es asesinado un candidato a la alcaldía de Morales. En Jamundí, guerrilleros de la columna Arturo Ruiz del Frente 30 se entregan a las autoridades.

4) En Toribio y sus circunvecinos se despliegan varios enfrentamientos entre el Ejército y las Farc en medio de una población mayoritariamente indígena. Hay acciones de la guerrilla buscando afectar la vía Panamericana a la altura del río Ovejas, jurisdicción de Caldon. Igualmente hostigamientos contra el puesto de Policía en el casco urbano de éste municipio, cilindros-bomba y francotiradores. Este tipo de hostigamientos contra las estaciones de Policía se repite en los cascos urbanos de Jambaló y Toribio, donde se detecta una “casa-bomba”. En la zona rural, la Policía o el Ejército son atacados con explosivos en Siberia y Pueblo Nuevo, corregimientos de Caldon y Toribio respectivamente. Por su parte, el Ejército despliega la operación “Orión” contra la

columna Jacobo Arenas en Caldo. Resultado de los diversos enfrentamientos, se presentan, además de las muertes y detenciones de personas, desplazamientos de población. Los indígenas denuncian el asesinato de dos comuneros por parte del Ejército, quienes los habrían presentado como guerrilleros muertos en combate. Al final del período se realizan detenciones de cabecillas de la columna Jacobo Arenas.

3.3. LA PROTESTA SOCIAL

En unos municipios con más intensidad que en otros, pero con una notable relevancia regional, se asiste a una movilización de sectores de la población sobre temas que reivindican desde la remuneración y estabilidad por el trabajo hasta protestas por el reordenamiento territorial y los resultados electorales, pasando por protestas por el incumplimiento de los compromisos gubernamentales de inversión social y la prestación de servicios públicos. A continuación se presentan algunos desarrollos concretos de la protesta social en la región.

3.3.1. La protesta laboral.

En el proceso de contratación docente para los programas etnoeducativos en Buenaventura, los docentes afro desarrollan una serie de presiones para solicitar aplazamiento de la fecha estipulada para las pruebas y mayor capacitación en el tema. Inicialmente, el 7 de febrero de 2006, cerca de 500 maestros realizan una manifestación frente al CAM pidiendo que se aplaze el concurso por espacio de diez meses, el cual estaba programado para el mes de marzo. Días después, se reúne la Ministra de Educación, voceros de Alcaldía, directivos docentes, líderes de comunidades negras y representantes de la Comisión Pedagógica Nacional, donde acuerdan aplazar el concurso hasta junio. Por su parte, otro grupo de aproximadamente 130 docentes de educación misional contratada se toman pacíficamente la Catedral por varios días, protestando ante el Ministerio por la anulación de sus cargos desde diciembre de 2005. Paralelo a la toma, la totalidad de docentes del municipio se declaran en paro en solidaridad con los docentes que se toman el centro religioso. El Ministerio responde que la certificación del municipio no permite la vinculación legal de contratación misional. Una semana antes de la prueba etno-educativa, en junio del mismo año, cerca de 150 docentes con apoyo del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle de Buenaventura, Sutev, se toman pacíficamente las instalaciones del CAM para protestar por la prueba, diciendo que, a pesar de estar de acuerdo con ella, ésta no brinda garantías de estabilidad en los puestos y que falta capacitación. Otro grupo de delegados se presenta ante el Gobernador del Valle, Angelino Garzón, quien crea una comisión para estudiar el caso y determinar si es conveniente aplazarlas o no. Producto de este estudio, la Gobernación envía una carta al Presidente Álvaro Uribe pidiendo el aplazamiento por razones jurídicas. Sin embargo, las pruebas son efectuadas el día 26 tal como se tenía previsto, en medio de un plan de seguridad dispuesto por las autoridades para brindar el desarrollo normal de las mismas.

Continuando con conflictos laborales del sector educativo en Buenaventura, desde los primeros días de enero de 2007, una semana antes del reinicio de clases, los docentes se declaran en huelga para exigir el pago de salarios, horas extras, dotaciones, algunas prestaciones sociales y el mejoramiento locativo de algunas instituciones. Luego de una

larga reunión con el Alcalde Saulo Quiñones, los directivos del Sutev deciden levantar el paro un día después de iniciado. Entre las exigencias del sindicato esta la solicitud de conocer los montos reales de los recursos que se giran para educación por el Sistema General de Participaciones. En junio del mismo año, las instituciones educativas privadas vinculadas al plan de cobertura se declaran en paro por el incumplimiento de la Administración Municipal en el pago de 8 meses de salario y realizan una marcha con participación de padres de familia, directivos y docentes; reciben apoyo del Sutev. Las razones expresadas por el Alcalde Saulo Quiñones sobre el atraso se refieren a demoras en el proceso de legalización de las instituciones y a un plan de depuración para que colegios y escuelas “de garaje” no entren en el Plan de Cobertura. En la negociación, el Gobierno Municipal se compromete a pagar 5 meses de manera paulatina hasta la primera quincena de julio y el resto en 2 meses, con lo que los colegios reinician clases. Paralelamente, en el plano nacional, FECODE convoca a paro, el cual se concreta en el municipio solo hasta el día 22 de junio con el paro de las instituciones tanto públicas como privadas, con la particularidad de presionar para que la Secretaria de Educación no descuenta 9 días de cese de actividades en enero pasado y que se cumpla el compromiso de pago de los 3 meses al sector privado.

A mediados de agosto/2007, el Ministerio de Educación toma la decisión de suspender la cobertura educativa a instituciones privadas en Buenaventura, argumentando irregularidades en las contrataciones y la evasión de cerca de 20.000 estudiantes de las instituciones oficiales, noticia que es bien recibida por parte del Sutev. A pesar de esto, el pago de los meses de salario atrasado no se efectúa, por lo que en octubre los docentes privados realizan manifestaciones frente a la Alcaldía y a principios de diciembre bloquean la carretera Cabal Pombo en la bifurcación con la vía alterna-interna. La administración municipal, que cuenta con nueva alcaldesa luego de la destitución del ex alcalde Saulo Quiñones, manifiesta no contar con recursos y luego de conversaciones entre ésta y los docentes, los segundos deciden esperar un mes mas para el pago de los salarios.

Otro conflicto algo similar se desarrolla en Palmira en agosto de 2007. En este caso, la demanda de los docentes se hace por medio de amenaza de paro ante el retraso en el pago de la prima vacacional. La Secretaria de Educación manifiesta no haber recibido los dineros de transferencia nacional y cancelan la deuda con recursos propios, pocos días después.

Otro sector en el que se desarrollan conflictos presentado durante el periodo es el de los empleados de los hospitales públicos. En medio de una crisis de la red hospitalaria del departamento y problemas de manejo administrativo por parte de la gerencia, el Hospital Departamental de Buenaventura acumula una deuda significativa que ocasiona atrasos en el pago de salarios y poca viabilidad financiera. Inicialmente en febrero de 2006 se producen amenazas de paro por parte de los trabajadores, el cual es contrarrestado con la intervención del Gobernador Angelino Garzón quien anuncia inversión con programa de reestructuración. Meses después, en agosto, el Ministerio de Protección Social ratifica el aporte de \$8.500 millones para saneamiento fiscal del hospital, así como \$3.500 millones mas por parte de la Gobernación y \$1.500 del Hospital, con lo que se lograría, según el gerente Pedro Pablo Cortes, viabilizar la institución, pero contemplando una reducción progresiva en el monto de salarios. En marzo del 2007, el Gobierno Nacional reduce los recursos que se tenían presupuestados para el hospital, pasando de \$7.969 a \$5.908 millones, obligando a reducir nomina y

buscar adiciones presupuestales en la Secretaria de Salud del Departamento. Ante esto, la Asociación Nacional de Trabajadores de Hospitales de Colombia en Buenaventura, Anthoc, realiza una marcha el día 7 de marzo en protesta por tal recorte. Además anuncian paros ese mismo mes por el retraso de 3 meses de salario, el cual es solucionado parcialmente y finalmente en mayo entran en paro por varios días ante nuevos atrasos de salario y exigencia de bonificaciones. Éste último paro o asamblea permanente es levantado luego de llegar a preacuerdos con las directivas del hospital y el gobierno departamental que incluye pago de bonificación por \$250.000, pago de 1 mes de salario y compromiso de pago de la prima de junio. Sin embargo, el gerente del hospital recalcó en el proceso de reestructuración, el cual se concreta a comienzos de agosto de 2007 con la salida de 48 empleados, 28 por retiro voluntario y 20 por jubilación. El sindicato, a pesar de no compartir la decisión, declara que respeta la decisión de quienes se acogieron al plan de retiro voluntario. Adelantan también asambleas generales para definir acciones frente a la dilatación de los plazos fijados por el Gobierno Nacional para el pago de deudas laborales y prestacionales contemplando cese de actividades, pero en lo restante del año no se reportan más hechos.

También en Palmira se presentan problemas fiscales alrededor del Hospital San Vicente de Paúl, el cual moviliza en determinadas ocasiones a los sindicatos y otros sectores relacionados con el servicio del centro hospitalario como contratistas y usuarios. El déficit fiscal, que asciende a más de \$2000 millones de pesos, es presentado inicialmente por la Contraloría Municipal a finales de agosto de 2006, donde califica de “grave” la situación y culpa a la administración de tal estado. Éste hospital había sido sometido a un proceso de reestructuración en el año 2000 y en el balance de 2005 hecho por la Contraloría presentaba problemas financieros, a pesar de los planes de desempeño y liquidación de empleados suscritos en ese entonces. La primera respuesta del Gerente del Hospital consiste en descalificar al informe de Contraloría, argumentando apreciaciones equivocadas por parte del ente de control por la tardanza en el ingreso de dineros del Departamento, el Municipio y las ARS a las cuentas del hospital de 2005. El sindicato va un poco más allá y habla de incumplimientos de acuerdos con el Gobierno Nacional en pasadas reestructuraciones y denuncia atraso de 4 meses en el salario a las cooperativas que prestan su servicio al hospital.

En noviembre de 2006, el Gerente del hospital reconoce el déficit fiscal, pero atribuye sus causas a la reestructuración administrativa del año 2000. Habla también de cancelación de contratos con el municipio, disminución de dineros provenientes de las ARS y pagos a los bancos que excedían lo proyectado. De los acuerdos suscritos luego de la reestructuración en el año 2000 con la Nación, el Departamento y el Municipio, afirma el Gerente que solo la primera ha cumplido, mientras que el segundo lo hizo tarde y el tercero adeuda \$1000 millones. Éste último plantea la necesidad de los soportes de facturación para el giro de los recursos. La exigencia legal se convierte en atraso para el desembolso de los \$1000 millones de deuda del municipio, problema que pone en evidencia al área financiera del hospital al reconocer la pérdida de las facturas físicas o la omisión de éstas. Solo un año después, a finales de octubre de 2007, habiendo revisado los archivos digitales de prestación de servicios, la Secretaria de Salud y el Gerente del hospital anuncian el pago de \$1000 millones por deuda de 7 años al Comité de Saneamiento Contable del Municipio.

En febrero de 2007, marchan el sindicato y los usuarios, rechazando la liquidación del Instituto de Seguro Social, ISS, adelantado a nivel nacional, así como el déficit del

Hospital San Vicente de Paúl y el anuncio de cierre del Centro de Atención Básica Los Libertadores, CAB. Algunos participantes de la marcha plantean la posibilidad de que el hospital sea entregado por el Municipio al Departamento. Un día después en una audiencia pública se acuerda la firma de un contrato por \$6.189 millones para prestación del servicio y se conforma una mesa de trabajo para construir la propuesta de manejo conjunto entre Municipio y Gobernación.

Los conflictos laborales acaecidos durante 2006 y 2007 en la región de estudio alrededor de los hospitales públicos confluyen en un momento de crisis del sector de la salud a nivel departamental que llega a su punto más álgido en marzo de 2007 cuando la Asamblea Departamental del Valle declara la crisis en la Red Hospitalaria del Valle. En muchas otras ciudades del Valle se reportan conflictos similares como Cali, San Pedro, Cartago, Buga, Zarzal, entre otros.

Otros dos conflictos laborales de significación presentados en la región, pero con menor intensidad durante los dos años son una marcha de corteros de caña a mediados de febrero de 2006 por las calles de Florida, en la que más de 200 de ellos participan, protestando por el recorte masivo de personal en los ingenios debido a la mecanización del corte, buscando llamar la atención nacional. Por último, amenazas de paro y bloqueo por parte de trabajadores contratistas del Terminal portuario de Buenaventura en mayo de 2007 reclamando pago de horas extras, dominicales, prestaciones sociales, entre otros.

3.3.2. Protesta comunitaria.

Entre 2006 y 2007 varias comunidades rurales principalmente campesinas, aunque también de origen indígena y afrodescendiente, llevan a cabo movilizaciones significativas que contemplan marchas, tomas de entidades oficiales, paro cívico y bloqueos de carreteras. Algunos hechos que aquí se mencionan no se desarrollan en los municipios que pertenecen a la región de estudio, pero son promovidos por habitantes de la región que se desplazan hacia otros municipios.

En mayo de 2006, un grupo numeroso de campesinos, comunidades afro descendientes e indígenas de las zonas rurales de Suárez, Morales y Buenos Aires, realizan una marcha desde Jamundí hasta la sede de la Universidad del Valle en Cali, para exigir el cumplimiento de acuerdos de inversión social suscritos en 1986 con Epsa, luego de la construcción de la represa La Salvajina. Algunos funcionarios de la empresa de energía se reúnen con representantes de las comunidades. Producto de los acuerdos, en enero de 2007 la empresa entrega 100 hectáreas de tierra a algunos habitantes de Morales con la idea de poner en funcionamiento la vía Crucero-Pan de Azúcar y darle una vocación turística a la región. Además de los reclamos por el incumplimiento de Epsa, se suceden otros tipos de acciones que reflejan disputas políticas locales surgidas de cuestionamientos a la administración local de Suárez por denuncias de campesinos sobre irregularidades en inversiones del municipio con dineros provenientes de Epsa.

En mayo del 2007, cerca de 100 campesinos del corregimiento La Meseta se toman pacíficamente la sede de la Alcaldía, luego de que el Alcalde local agrediera y amenazara verbalmente a un docente y líder comunitario, participante de diversas exigencias a la administración local. Los campesinos pedían un ofrecimiento público de

disculpas por parte del Alcalde y compromiso de respuesta amable a las demandas hechas por la comunidad. A su vez lamentaban demoras en la entrega de resultados de investigaciones de denuncias hechas contra el Alcalde a la Personería y la Procuraduría.

A comienzos de octubre/2007, en Buenaventura, un comité de distintas organizaciones sociales, entre las que se mencionan sindicatos de la salud, la educación y el Terminal portuario, juntas de acción comunal, organizaciones indígenas, vendedores ambulantes, entre otros, declara paro cívico indefinido en Buenaventura con la posibilidad del bloqueo a la Avenida Simón Bolívar en inmediaciones del barrio Santa Cruz. El bloqueo total a la vía dura 1 hora, comenzando a las 6:00 a.m. Luego de la intervención del Alcalde Saulo Quiñones se despeja un carril. El paro cívico dura poco más de un día y se presentan roces con la Fuerza Pública. Tanto el Alcalde como el Gobernador se reúnen durante toda la noche buscando soluciones. El primero, acordó mesas de trabajo que contribuyan en la entrega de un pliego de peticiones con plazo hasta las 7:00 a.m. del día siguiente, y el segundo, una intercesión ante el Gobierno Nacional para buscar acercamientos. Al día siguiente las comunidades no entregan el pliego de peticiones y el Secretario de Gobierno da la orden de desalojo hacia las 10:00 a.m. Los manifestantes se instalan en la Escuela Vasco Núñez de Balboa, anunciando continuidad en las exigencias al Gobierno Nacional, las cuales se caracterizan por ser variadas: “el abandono estatal, la inseguridad y la falta de diligencia en el cumplimiento de promesas hechas en ocasiones anteriores (...) incumplimiento con las obras de la vía alterna, desempleo, desapariciones y desplazamiento forzado, falta de respuesta del Gobierno Nacional al desastre de la carretera Cabal Pombo y situación de miseria del municipio, que según datos de Planeación Nacional es del 80%”. A su vez denuncian atropellos por parte de la Fuerza Pública. En un fragmento de declaraciones a El País, un vocero de las comunidades afirma: “nos cansamos de que nos estén matando y que solo les preocupe la ciudad cuando hay trancones porque afectan la Sociedad Portuaria”. Sobre éste hecho, algunos voceros de comunidades negras le restaron validez a la movilización e indicaron que comunidades indígenas que participaban de la movilización provenían de inmediaciones del río San Juan. El comandante de la Segunda Brigada de Infantería de Marina insinúa infiltraciones de la guerrilla.

En el mismo mes de octubre de 2006, cerca de 100 campesinos de Jamundi se instalan en el caso urbano del municipio para exigir a la Alcaldía al arreglo de las vías interveredales y otros temas como demandas de vivienda, sistemas de alcantarillado, ampliación de cobertura educativa e implementación del programa Familias Guardabosques.

En julio de 2007, un grupo de aproximadamente 200 indígenas de los resguardos de Santander de Quilichao se toman pacíficamente la sede de la Alcaldía para pedir la reapertura de la Unidad Departamental de Salud que había sido cerrada por motivos de liquidación, exigiendo la presencia del liquidador y el Secretario de Salud del Departamento para dialogar, aunque la información de la fuente no presenta el termino de ambos hechos.

Entre el 10 y el 12 de octubre se llevan a cabo varias movilizaciones en diferentes sitios de la región y el país. Una de las más importantes es el bloqueo a la vía Panamericana a la altura de los corregimientos El Pital y Mondomo, de Santander de Quilichao. Allí, cerca de 1000 personas taponan la vía y se producen enfrentamientos con el ESMAD de la Policía por cerca de 5 horas. En el enfrentamiento se menciona la quema de tres

tractomulas, quema de llantas, tala de árboles, lanzamiento de explosivos de fabricación casera, rocas y palos, y disparos escuchados sin conocimiento de su proveniencia. A pesar de que en ellas participaba en su mayoría población indígena, la vocera del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, aclara que el bloqueo no es organizado ni avalado por la organización. El Gobernador del Cauca, Juan José Chaux, por su parte responsabilizó a las Farc de promover la movilización y tener una estrategia para “transportar en buses, busetas y chivas a indígenas y campesinos para realizar una toma violenta a Popayán”. Las protestas continúan durante los tres días. El mando militar de la Brigada 29 afirma que las Farc habían distribuido entre la población un comunicado obligando a participar en la protesta. Igualmente en Cali, indígenas y campesinos provenientes del sur del Valle y el norte del Cauca se toman pacíficamente la sede del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, durante aproximadamente 5 horas, exigiendo una reunión con los directivos de la institución para dialogar sobre titulación de predios rurales. Al término de la toma se acuerda una reunión para el próximo 17 de octubre con el Gerente del Incoder, el Subsecretario de Gobierno Departamental, la Secretaria de Agricultura y catorce líderes de los manifestantes. Luego de desocupado el edificio un grupo numeroso de campesinos e indígenas se instalan en el CAM.

Finalmente en Buenaventura es bloqueada la carretera Cabal Pombo a la altura de Citronela, por cerca de 2000 personas entre las que se mencionan comunidades indígenas y campesinas asentadas a inmediaciones de los ríos y algunos sindicatos. Por lo menos el día 11, la vía estuvo bloqueada durante medio día y luego de 5 horas de dialogo con la Alcaldesa y la Fuerza Publica se llega a un principio de acuerdo para conformar mesas de trabajo, para las cuales la alcaldesa se compromete a destinar recursos. Entre las exigencias de éste bloqueo se resaltaba un llamado por el abandono estatal, las restricciones a la circulación por los ríos y esteros del Pacifico, el incumplimiento del Gobierno en el nombramiento de docentes y la recuperación de las escuelas.

3.3.3. Los Servicios Públicos (Agua, Basuras, Obras viales y Transporte).

Las demandas ciudadanas por servicios públicos como el agua potable y por el costo de éste, las acciones de rechazo a la instalación de un relleno sanitario, las peticiones de arreglo de vías y exigencia de mitigación de impactos por la construcción de algunas obras viales y las demandas de gremios de transporte urbano, tradicionales (taxis) o recientes (mototaxismo), son los principales casos alrededor de las cuales se entretajan una serie de acciones colectivas de significación regional, las cuales atañen mas al Valle que al Cauca.

Sobre los conflictos por servicios públicos, éstos se desarrollan principalmente en Buenaventura. Se manifiesta a través de bloqueos de vías en marzo y abril de 2006, y marchas con concentraciones en el CAM en diciembre de 2006. Inicialmente las marchas se efectúan en barrios precisos de la ciudad, reclamando mejor prestación del servicio por parte de la empresa Hidropacifico. En la concentración en el CAM se quemaron los recibos de facturación alegando altos costos y mala calidad del servicio, aunque la empresa argumente que los costos se deben a desperdicios. En Candelaria se presentan algunas manifestaciones y acciones institucionales como la acción popular en reclamo a la instalación de agua potable y presión a los Alcaldes locales de Pradera y Florida, quienes se oponen al proyecto de acueducto para Candelaria, ya que éste

supondría tomar las aguas de los ríos Bolo y Fraile respectivamente. Sin embargo, durante los dos años estudiados, el desarrollo del conflicto se desarrolla en marcos institucionales en donde intervienen las autoridades ambientales como es el caso de la Corporación Regional Autónoma del Valle del Cauca, CVC, las empresas de acueducto como Acuavalle, asociaciones de gestores y usuarios de servicios públicos y la gobernación departamental.

El conflicto del relleno sanitario surgido a partir del cierre inevitable del depósito de basuras de Navarro en Cali y la posterior escogencia de los terrenos para ser usados como nuevo sitio regional de disposición final de basuras, género movilizaciones significativas en Jamundí y Florida, de donde se habían postulado algunos lotes para la tramitación de la licencia ambiental requerida por CVC, y también en otros municipios por fuera de la región como San Pedro, Yotoco, Roldanillo, Cali y Yumbo.

Este conflicto se inicia en años anteriores a los aquí estudiados. Al iniciar el año 2006, el proceso de escogencia de los terrenos apenas comenzaba y se planteaba inicialmente el lote Pan de Azúcar en la Hacienda Las Cañas del corregimiento Guachinté de Jamundí como posibilidad. A finales de enero de 2006, cerca de 3000 personas de las zonas rurales y urbanas marchan por las calles de Jamundí rechazando dicha propuesta. Meses más tarde, en abril, se plantea la posibilidad de adecuar el ya existente relleno de Presidente, en el municipio San Pedro. Ante esta propuesta los habitantes de los corregimientos aledaños como Pueblo Nuevo y Presidente bloquean por un día el ingreso de carros recolectores de basura al relleno. Luego, surge otra propuesta de dos predios en Yotoco, la cual genera inicialmente la manifestación de algunos habitantes, y en junio siguiente, en el marco de una audiencia pública hecha por la CVC, los habitantes vuelven a mostrar su inconformismo. A mediados de junio surgen dos nuevas propuestas: un terreno en el corregimiento El Líbano, de Florida, impulsado por la firma Proasa, y un proyecto de relleno regional para el norte del Valle en Roldanillo. Como en las propuestas anteriores, éste anuncio generó el inconformismo de los habitantes, así como de sectores de la administración local, los cuales se vieron encontrados en opiniones divididas. Por su parte, en Jamundí, nuevamente se movilizaron los habitantes, esta vez con una marcha al casco urbano del municipio desde los corregimientos aledaños al lote propuesto como Timba, Robles y Quinamayo, reclamando también falta de socialización de los proyectos. En el desarrollo de la marcha se habla de intento de taponamiento de la vía Cali-Jamundí, la cual es dispersada por la Policía.

En los primeros días de julio de 2006 arranca el estudio de licencias ambientales por parte de la CVC a los lotes de Florida, Jamundí y los dos de Yotoco. En Florida se organiza una agenda de acciones para rechazar el relleno sanitario regional a través del Comité Permanente por la Defensa del Patrimonio Ecológico e Hídrico de Florida, contemplando inicialmente una marcha, una audiencia ambiental y una acción popular. Convocan a poblaciones indígenas a la marcha, preparan ponencias para la audiencia ambiental y -asegura el Personero- se recogen 3.000 firmas de ciudadanos inconformes con el proyecto para enviarlas a la CVC. La marcha es llevada a cabo el 18 de agosto con la participación aproximada de 20.000 personas provenientes de distintos municipios con banderas y camisetas blancas. Finalizada la marcha en el parque central del corregimiento San Antonio de los Caballeros, se da conocer un pliego de peticiones a la CVC, notificando la eventual modificación al Plan Básico de Ordenamiento Territorial, PBOT, adelantado por el Consejo Municipal, lo cual contempla la

prohibición de construir un relleno regional en el corregimiento El Líbano.

A mediados de enero de 2007, la CVC expresa la no autorización de la licencia ambiental para el lote de El Líbano, Florida. A su vez presenta dos nuevos lotes en Yumbo para el trámite de estudio de la licencia ambiental, ubicados en los sitios La Llanada y La Sorpresa. Días después un grupo de habitantes de Yumbo realizan una manifestación frente a la sede de la CVC en rechazo a la propuesta. Por su parte, la Alcaldía de Yumbo advierte la exclusión de esos lotes en el Pgis y el Comité consultivo del Pbot y anuncia la imposición de una tutela contra la CVC alegando fallas de procedimiento en el otorgamiento de licencias ambientales. Al finalizar el mes, una comisión de la CVC visita los lotes en Yumbo con la presencia del Alcalde, concejales, funcionarios, industriales y voceros comunitarios. El día 6 del mes siguiente, se lleva a cabo una marcha numerosa de habitantes de la zona rural y urbana de Yumbo en protesta por esa posibilidad. Algunos manifiestan la cercanía de 4 kilómetros entre el sitio y la comunidad de San Marcos, la cual toma agua de un pozo profundo que esta a 500 metros del lote. También el Alcalde expresa la voluntad de algunos industriales de retirarse del municipio si se construye el relleno.

A mediados de marzo de 2007, el municipio de Cali propone dos nuevos lotes ubicados en el corregimiento El Hormiguero y la comuna 22 de Pance. Inmediatamente algunos habitantes de estos sectores rechazan la idea, se reúnen con el presidente del Consejo de Cali, conforman un comité para reunirse con el director de la CVC y proponen realizar 4 acciones: audiencia publica, demanda, acción popular y toma pacífica.

En mayo, la CVC define las fechas para la realización de audiencias públicas en los municipios propuestos para construir el relleno sanitario regional. En Jamundí se cita para el 22 de mayo y en Florida para el 29 de junio. Sin embargo a mediados de mes (el día 16) en la audiencia de licitación, sorpresivamente solo una firma (Promesa de Sociedad Futura Interaseo del Valle S.A. ESP) presenta pliegos, proponiendo el lote Colomba-El Guabal de Yotoco. Ante ello el Personero se muestra en desacuerdo porque dice que va en contravía del esquema de ordenamiento territorial, mientras que la Alcaldesa opina que con éste se deben buscar beneficios para el municipio en fisco y empleo. En Florida, el anuncio de la audiencia ambiental moviliza a la población - representada en el Comité Permanente por la Defensa del Patrimonio Ecológico e Hídrico de Florida- a preparar ponencias de tipo técnico y expresan la posibilidad de hacer un paro cívico para impedir el relleno. A esta decisión se suma el proceso de clausura del relleno municipal ordenada por la CVC, pero el gobierno municipal propone la instalación de una planta local de tratamiento de residuos sólidos y otra de compostaje en lugar de un relleno regional.

En la primera semana de junio, el Alcalde de Florida presenta anticipadamente algunos argumentos que expondrá mas tarde en la audiencia ambiental del día 29. Algunos de ellos son revisión al Pbot de Florida y no aprobación de licencia de uso de suelo por parte de Planeación Municipal, además de alistar recursos para la planta de tratamiento local. Una semana antes a la audiencia, el día 21, en medio de la celebración de la Feria de la Caña en Florida, un grupo de personas realizan una marcha previa a la cabalgata infantil, protestando por supuesto favorecimiento del Alcalde a la firma Proasa a cambio de beneficios económicos. Mas tarde, el Desfile de la Alegría es interrumpido con quema de llantas, papas explosivas y otros desordenes públicos frente a la sede de la feria. Al día siguiente, se lleva a cabo una manifestación frente a la Alcaldía y se toma

la decisión de suspender definitivamente la Feria. Según el Alcalde las protestas tienen razones políticas, ya que para él, el Consejo y la Personería se han opuesto al relleno regional y pidió que sean investigadas las dependencias propias.

No es claro si la audiencia en Florida se realizó, pero días antes de ello la Superintendente de Servicios Públicos, Eva María Uribe, confirma que el único pliego presentado por la firma Promesa aprobó los requisitos básicos y se ponen a la espera de la licencia ambiental para iniciar la segunda etapa de oferta económica. El 10 de agosto se publica el otorgamiento de la licencia ambiental por parte de la CVC al lote Colomba-El Guabal de Yotoco. Inmediatamente surgen oposiciones como las del ya mencionado Personero local, así como líderes cívicos, concejales y otros; mientras que contrariamente el Gerente de la empresa de Agua y Aseo del Pacífico se muestra a favor. Se lleva a cabo a inicios de septiembre la audiencia ambiental convocada por CVC donde continúan las opiniones divididas, las cuales son resueltas con la propuesta del director de la CVC de crear veedurías ciudadanas para controlar el funcionamiento del relleno regional, explica las razones de la licencia ambiental y enfatiza en que el proyecto no va a ser un “basurero” sino un sitio de disposición técnica final de residuos sólidos.

De manera similar, otro conflicto manifestado en algunos municipios urbanos de la región con desencadenamiento de acciones colectivas significativas, pero de incidencia departamental y nacional, tiene que ver con regulación de tarifas de taxi en Buenaventura y regulación al transporte público urbano, principalmente por el surgimiento de la práctica de trabajo informal de transporte de pasajeros en moto denominada “mototaxismo”, en municipios como Palmira, Buenaventura y Santander de Quilichao.

El primer caso de las tarifas de taxi se da a raíz de una medida del Municipio para adoptar el sistema de cobro por taxímetro a partir del mes de mayo de 2006, hecha a principios de marzo del mismo año. Los taxistas rechazan dicha medida y cerca de 1.000 de ellos bloquean las principales vías de la ciudad, incluyendo al Puente El Piñal (vía de acceso al Terminal portuario) durante 7 horas (entre 7:00 a.m. y 2 p.m.) del día 7 de marzo. La huelga del gremio de taxistas de Buenaventura logra la negociación con el Alcalde, llegando al acuerdo de reconsiderar la decisión de implementar el taxímetro, sometiéndolo a consulta con el Ministerio de Transporte Nacional. A finales de septiembre de 2007, este gremio vuelve a bloquear las vías de la ciudad durante 5 horas, esta vez en la avenida Simón Bolívar, reclamando por un posible aumento excesivo en el cupo de taxis. En esta oportunidad, la secretaria de Transito local niega que halla tal cupo, pero crea una comisión de verificación del número de carros matriculados.

El segundo caso del “mototaxismo” fue más prolongado en el tiempo y se manifestó en varios municipios, no solo de la región, sino del departamento, como Buga y Tulúa, y del país, como Cauca y Tarazá en el departamento de Antioquia, y Turbaná, en el departamento de Bolívar, entre otros). A pesar de que viene de tiempo atrás al periodo estudiado, inicia manifestándose en cada municipio aisladamente, pero en la corta trayectoria adquiere niveles institucionales y organizativos a la manera de gremios. En Palmira, en marzo de 2006, el Gobierno Municipal reactiva por un periodo de seis meses el “Decreto 061” de prohibir acompañante mujer en moto durante las horas pico y restringir por completo el acompañante hombre con el objetivo de controlar esta práctica de transporte. En respuesta, la Asociación de Motociclistas de Palmira declara

adelantar un estudio sobre el mecanismo jurídico para modificar o desmontar tal decreto. 15 días después, los “mototaxistas” y la Asociación de Motociclistas de Palmira hacen una manifestación en el centro de la ciudad para pedir la derogación del decreto, alegando el derecho al trabajo y la igualdad, así como solicitando una reducción en lo que consideran excesivos controles por parte de la Policía; aunque el comandante de éste último, anuncia que se mantendrán los operativos de control. Similarmente en abril del mismo año en Buenaventura, la Secretaria de Transito Municipal anuncia a la Asociación de Mototaxistas de Buenaventura, Ademotaxis, la prohibición de los “motorratones” por considerarlos ilegales y sin reconocimiento del Ministerio de Transporte. Los voceros del gremio califican de injusta la medida, dado el importante servicio que prestan a los transportadores de carga.

A finales de mayo en Palmira, un ciudadano apoyado por el gremio de motociclistas, instaura una acción popular ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle, pidiendo la derogación del decreto que obliga a usar chaleco las 24 horas del día y prohibición de parrillera en moto, la cual afecta a moto-transportadores y ciudadanos en general, declarándolo inconstitucional. El Jefe Jurídico de la Alcaldía responde que la norma fue tomada en base al Código Nacional de Transito y que la medida refleja una disminución en los índices de accidentalidad y delincuencia. Los transportadores de las empresas de buses de transporte urbano se manifiestan en el conflicto cesando labores durante 5 horas en un día del mes de agosto, presionando a la Secretaria de Transito Municipal por medidas que frenen la proliferación de mototaxis y denunciando abusos por parte de los taxistas que prestan servicios colectivos.

A comienzos del mes de septiembre de 2006, el Ministerio de Transporte expide el decreto 2961 en el que declara ilegal el transporte de pasajeros en moto a nivel nacional por considerarlo un servicio que no presta todas las garantías de seguridad al pasajero, e insta a los gobiernos municipales a establecer medidas para frenar su expansión y tender a desaparecerlas. En éste mismo mes, se realiza en Tulúa, el Cuarto Encuentro Nacional de Mototransportadores, del que surge la propuesta de demandar el Decreto 2961 con una acción de tutela interpuesta al Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca por considerarlo violatorio al derecho a la igualdad, a la movilización, a la libre asociación y al trabajo. En el evento, el director ejecutivo de la asociación anuncio que se alista un proyecto de acuerdo, previsto para ser presentado en noviembre a todos los consejos municipales donde existen practicas de “mototaxismo”. En éste se atribuirían mecanismos jurídicos para que los alcaldes puedan reglamentar dicha actividad. De manera particular, también desmiente algunos rumores de señalamientos que, según él, representantes del transporte público organizado los vinculan con grupos armados como las Auc. Aduce que el surgimiento de dicha práctica es consecuencia de la falta de oportunidades laborales y deficiencias del transporte publico en algunas ciudades del país. Mes y medio después, el 1 de noviembre, el presidente de la Asociación de Mototransportadores de Palmira, presenta denuncias públicas sobre el asesinato de dos personas dedicadas al “mototaxismo” en los últimos veinte días, un atentado y amenazas contra él y su familia, una de ellas por alguien que se identificó como miembro de las Farc. El comandante de Policía de Palmira declara que no considera que se trate de persecución al gremio y el Secretario de Gobierno Municipal indica que el hecho fue denunciado a una mesa de concertación con la Defensoría del Pueblo.

El día 21 del mismo mes, el gremio de Santander de Quilichao desarrolla fuertes

protestas en el casco urbano de éste municipio luego de que se implantara la medida de prohibición de parrillero. Las protestas inician como una marcha por las calles de la ciudad y luego va adquiriendo formas de asonada. Se relata que al atardecer se taponan varias vías atravesando llantas incendiadas, una de ellas en el parque de los taxistas. Llegada la noche, se producen un intento de quema a la sede de la Alcaldía, se queman numerosos archivos de la oficina de Transito, se lanzan objetos contra algunos almacenes y se producen enfrentamientos con la Fuerza Publica. Igualmente se habla de pedreas contra buses intermunicipales en el sector de la variante. Ante ello, desde la Brigada 29 del Ejército y el Comando de Policía Departamental se envían refuerzos y el Alcalde del municipio decreta prohibición a circulación de motos durante 24 horas y ley seca. Sobre las medidas que dieron origen a los disturbios anuncia que se mantendrían. Al día siguiente, un numeroso grupo de personas realizan una marcha en rechazo a los actos de violencia. El comandante operativo de Policía Cauca declara no descartar que miembros de la columna Jacobo Arenas y Frente 6 de las Farc hayan aprovechado la protesta y la hallan infiltrado. Los mototaxistas aseguraron que detrás de los hechos hay intereses políticos. Las autoridades civiles mencionan sobre la participación de transportistas de otros municipios vecinos como Villarrica y Puerto Tejada.

A comienzos de diciembre de 2006, El País advierte sobre aumentos en accidentalidad por el problema de “la guerra del centavo” entre mototaxis, llaman a no hacer uso del servicio y anuncian mayores operativos de control. En mayo de 2007, la Secretaria de Transito de Buenaventura prohíbe la circulación de motorratones por su carácter ilegal y por la posibilidad de generar “situaciones anormales de orden publico”.

El 12 de agosto de 2007, se realiza el Primer Congreso Departamental de Motociclistas y Mototaxistas en Palmira. En éste evento se recogen los proyectos de acuerdo exitosos de legalización del “mototaxismo” de otros municipios de Antioquia y Bolívar, con la idea de ser presentados al Consejo Municipal de Palmira.

Un último tema de conflicto manifestado en la región, relacionado con el transporte y la renovación de algunas arterias viales de importancia, gira alrededor del desarrollo de construcción de obras viales. En la construcción de la vía alterna-interna en Buenaventura, En la vía Palmira-Pradera, en la vía doble calzada Palmira-Cali y en las carreteras rurales de la zona montañosa de Pradera.

En Buenaventura se adelanta desde tiempo atrás la construcción de la vía alterna-interna, la cual permitirá ingresar el transporte de carga al Terminal portuario sin necesidad de cruzar la ciudad, es decir, reducir tiempos en el transporte de mercancía. Anteriormente la obra había tenido problemas en su ejecución tales como la quiebra del contratista en agosto de 2004 y líos por predios desde su inicio. Por el trazado de la vía, se contemplaba la compra de los terrenos de algunas viviendas a sus propietarios. En la última fase de la obra, entre mayo y julio de 2006, habitantes de varios predios adelantan bloqueos a las obras. En un último tramo de una parte de la obra en el barrio Oriente e Isla de la Paz, en mayo, entre siete y diez propietarios con sus respectivas familias, bloquean las obras y exigen al Instituto Nacional de Vías, Invias, una indemnización por la afectación a sus casas. Ante la persistencia del bloqueo, el Alcalde amenaza con acudir a desalojos por medio de la Fuerza Publica si se mantienen las obstrucciones a la obra. Sin embargo, a comienzos de junio se llega a un principio de acuerdo entre Invias, el Gobierno Municipal y los habitantes que permite la continuación de las obras.

Aproximadamente un mes después, a partir del 18 de julio, habitantes del mismo barrio bloquean el acceso de maquinas a las obras aduciendo incumplimientos en los acuerdos por parte de Invias en cuanto a indemnizaciones por afectación a sus viviendas. Esta vez un grupo de habitantes del barrio El Jardín se unen a los bloqueos exigiendo obras de mitigación como puentes peatonales, vías de acceso a los barrios, escuelas, puestos de salud, zonas verdes y campañas educativas. Éste ultimo bloqueo se extiende por mas de una semana y se levanta después de un acuerdo entre la Alcaldía y los habitantes de los barrios, en el que la primera se compromete a hacer un seguimiento a los compromisos de Invias en cuanto al mejoramiento de las viviendas afectadas por las obras.

En Pradera, por dos oportunidades durante el periodo, se llevan a cabo acciones colectivas en las que se exigen mejoramiento de vías. Una a fines de septiembre de 2006, en la que cerca de 3000 habitantes del municipio, incluyendo al Alcalde, funcionarios, concejales, estudiantes y comunidad en general, marchan por la vía Palmira-Pradera protestando por su mal estado y una supuesta negligencia del Gobierno e Invias para mejorarla. La otra acción en este municipio se presenta casi dos meses después, en noviembre, pero en esta oportunidad campesinos e indígenas de la zona rural, marchan por las vías del casco urbano de Pradera en protesta por el mal estado de las carreteras rurales e indican que en algunas zonas el transito esta interrumpido.

En Palmira, los habitantes de los corregimientos de Rozo, La Torre, Matapalo, Palmaseca, La Acequia, La Herradura y La Dolores, marchan por las principales vías de Rozo para pedir que el Inco no utilice una parte de un terreno de 36.000 mt² que había sido donado por una familia para la construcción del Parque Temático La Bicicleta, del cual habían propuesto utilizar una parte para la construcción de la intersección Tres Esquinas. Según un funcionario de Inco, solo se utilizaría una esquina del terreno que no llega a superar el 20%; mientras que un concejal del municipio y la directora de la corporación Corporozo afirman que se trata de cerca del 80% del terreno.

3.3.4. Reordenamiento territorial y resultados electorales.

Otro tipo de protestas sociales presentadas en la región tienen que ver con procesos institucionales de reordenamiento territorial (creación de nuevos municipios) y elecciones locales. Una característica importante de éste tipo de acciones es la espontaneidad con la que surgen, en el marco de procesos políticos de larga y mediana duración.

Durante el año 2006 se propone la creación de un nuevo municipio en el Cauca, a partir de la separación administrativa del corregimiento Guachené del municipio de Caloto, para pasar a ser municipio autónomo. El proyecto es impulsado principalmente por el gobernador del Cauca, Juan José Chaux. El 29 de septiembre de 2006, dos días antes de la presentación del proyecto de ordenanza a la Asamblea, cerca de 600 personas de Caloto marchan por las calles del municipio rechazando dicho proyecto y declaran al Gobernador como “persona no grata”. La discusión del proyecto en la Asamblea Departamental del Cauca se efectúa el 19 de octubre. Ese mismo día, cerca de 500 personas acuden a las afueras de las instalaciones de la Asamblea en Popayán, unos en contra y otros a favor del proyecto, produciéndose agresiones físicas entre éstos, dejando heridos y retenidos. Al final de la sesión el proyecto no es aprobado. Meses mas tarde, a mediados de diciembre del mismo año, el Gobernador eleva a Guachené a

la categoría de municipio mediante el decreto 0653. Se celebra misa y fiesta en el nuevo municipio para oficializar el acto administrativo. En febrero de 2007, el Alcalde de Caloto solicita al Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca, la nulidad del decreto 0653 alegando afanes politiqueros y clientelistas por parte del Gobernador. Sin embargo éste último declara haberlo hecho con conocimiento de causa y consultando al Presidente de la República. El caso de la revisión del decreto llega hasta el Consejo de Estado, del cual se espera fallo en octubre de 2007. Semanas antes de la fecha prevista para el fallo del Consejo de Estado se llevan a cabo varias marchas en Guachené para presionar por la ratificación del decreto del Gobernador.

El otro caso son las acciones colectivas generadas a partir de los resultados electorales para alcaldías en octubre de 2007 en Pradera y Florida. Es de mencionar que en esta jornada nacional de elecciones, las protestas posteriores a los comicios no solo se presentaron en estos dos municipios sino en otros del departamento, pero con menor nivel (Yotoco, Vijes y Yumbo) y de otros departamentos (Córdoba, Sucre y Meta).

En Pradera se producen manifestaciones frente a la vivienda y la sede política del alcalde que incluyen la quema de su vehículo. También es saqueada e incinerada la sede de la Registraduría local y robadas dos ferreterías. Ante los hechos se declara toque de queda y prohibición de parrillero en moto por cinco días, se militariza el municipio y se refuerza el cuerpo policial con 300 hombres. En los días siguientes, el coordinador de Derechos Humanos de Orivac, revela que la Casa Indígena también fue saqueada durante las protestas. La Policía reporta la captura de 16 personas sindicadas de simpatizar con el candidato perdedor del partido Alas Equipo Colombia, quien niega que se hayan hecho arengas para promover tales actos. El candidato elegido afirma que los hechos fueron causados por “personas que se quieren camuflar detrás del proceso electoral para hacer daños y fechorías”. La Procuraduría no reporta ninguna queja contra funcionarios públicos en el proceso electoral y aseguró que los tarjetones no se encontraban en la Registraduría al momento de la incineración.

Por su parte en Florida, cerca de 500 simpatizantes del candidato perdedor a la Alcaldía, en su mayoría indígenas, se toman pacíficamente la sede de la Registraduría Municipal y retienen durante 5 horas a la registradora local, una delegada de la Defensoría Regional del Pueblo y tres personas más. Allí denuncian supuestas irregularidades en el escrutinio de los votos y los boletines informativos, fraude y sabotaje. Comentan sobre bolsas llenas de votos de un mismo candidato encontradas en algunos puestos de votación luego de los comicios e inconsistencias en las ventajas de votos expresadas en los boletines. Algunos voceros plantean inicialmente la repetición de las elecciones, pero el Defensor regional del Pueblo nombra un registrador *ad hoc* para el recuento de los votos. En los días siguientes se produce este proceso con la presencia de aproximadamente de 2000 personas en el parque central del municipio. El candidato electo manifiesta no estar de acuerdo con el recuento de votos porque no se dejó reclamación en la mesa e insiste en la consecución legal de los 1020 votos de ventaja sobre el candidato perdedor. A pesar de las vías pacíficas el municipio también es militarizado durante los días que lleva a cabo el proceso.

3.3.5. Conclusiones.

1) Los conflictos laborales detectados en la región se concentran en Buenaventura y

Palmira, movilizan prioritariamente a trabajadores y empleados del sector público y llevan a cabo típicamente acciones como marchas, paros, amenazas de paro, manifestaciones o concentraciones y, en un caso, toma pacífica de una iglesia. Los sindicatos de educadores y de empleados hospitalarios jugaron un papel central en la movilización, pero también aparecen los empleados privados que se contratan por medio de cooperativas de trabajo en escuelas y hospitales públicos. Aunque posteriormente van a ser muy significativos, aparecen movilizaciones de los corteros de caña y de los trabajadores portuarios en Florida y Buenaventura, ambos del sector privado. Los reclamos, en el sector educativo, tienen que ver con la estabilidad laboral, con el rechazo a pruebas de idoneidad y al no pago de salarios. En el sector hospitalario, el tema es el de la “crisis hospitalaria” general, a raíz de reestructuraciones que vienen desde el año 2000, en la que los hospitales reducen su personal y deberían recibir ingresos de la Nación, del Departamento, del Municipio y de las Administradoras de Riesgos en Salud (ARS). Los Hospitales de Buenaventura y Palmira no pueden pagar salarios ni proveedores, motivando amenazas de paro, marchas y paro en Buenaventura. En Palmira hay una marcha contra la liquidación del Instituto de Seguro Social. La movilización de los corteros en Florida se presenta por la reducción en el enganche de personal por la mecanización de las tareas de corte. En Buenaventura por la estabilidad de los trabajadores contratistas del Puerto.

2) Comunidades rurales identificadas como campesinas, aunque también como indígenas o afrodescendientes, llevan a cabo una serie de movilizaciones –algunas veces de manera diferenciada; otras veces conjunta- contando con un número importante de participantes. Se destacan marchas en la zona de Suárez, Morales y Buenos Aires para exigir que se cumplan acuerdos de inversión suscritos con Epsa y para denunciar malos manejos con los dineros de inversión por parte de la alcaldía de Suárez. En octubre del 2007, sobresale el Paro Cívico decretado por varias organizaciones sociales de Buenaventura, donde confluyen distintos sectores populares, sindicales y vendedores ambulantes para protestar por el abandono estatal, la inseguridad, la violencia, el desplazamiento y la falta de cumplimiento de promesas. En el desarrollo del paro, es bloqueada la Avenida Simón Bolívar. En otro hecho se presenta un bloqueo de la carretera Cabal Pombo con más de 2000 personas para denunciar una vez más el abandono estatal, las restricciones a la circulación en ríos y esteros y pedir el nombramiento de docentes.

De manera más puntual, 100 campesinos se instalan en el casco urbano de Jamundí para exigir el arreglo de vías interveredales, el alcantarillado y educación. En Santander de Quilichao, 200 indígenas se toman pacíficamente la alcaldía y piden la reapertura de la Unidad Departamental de salud. Campesinos e indígenas del norte del Cauca se toman pacíficamente la sede regional del Incoder para dialogar sobre titulación de predios. En un Bloqueo a la vía Panamericana en el corregimiento de Mondomo en el que participan 1000 personas –fundamentalmente indígenas- se presentan graves hechos de violencia de enfrentamientos con el Esmad. Un dirigente del Cric informa que el bloqueo no tiene el aval de su organización. Las autoridades y el Gobernador del Cauca hablan de infiltración de la guerrilla y de una supuesta toma de Popayán.

3) Hay una variedad de acciones colectivas que se relacionan con servicios públicos. Movilizaciones por el agua y debido a su costo para algunos sectores de ciudades como Buenaventura o en municipios completos como Candelaria; el rechazo a la instalación de rellenos sanitarios regionales, de manera muy pronunciada en Jamundí y Florida; la

regulación de sistemas de transporte urbanos y la afectación de la población por el desarrollo de obras viales o el deterioro de éstas. Todos estos temas de conflicto desarrollan formas de protesta ciudadanas que recurren principalmente a las marchas, al bloqueo de vías y a las concentraciones. En algunas oportunidades las acciones abiertas y públicas se convierten en asonadas con violencia, quema de llantas y oficinas públicas y enfrentamientos con la Policía. En un caso se presentó una movilización en Florida que implicó la suspensión de la Feria local.

También se dan casos de procesos organizativos comunitarios que combinan la acción colectiva con mecanismos de participación legal institucional en la búsqueda de reconocimiento estatal de las peticiones. Los casos del relleno regional y los “mototaxistas” permiten observar la eficacia de la acción colectiva para el logro de objetivos comunes, acudiendo a instancias del estado local. Que el relleno sanitario regional se haya llevado para Yotoco, el municipio que menor movilización produjo en rechazo al proyecto -en contraposición a Florida- y en donde autoridades locales se mostraban a favor de él, puede ser consecuencia del bajo nivel de movilización en el primer municipio.

En el caso del mototaxismo se presentan manifestaciones masivas en Palmira, Buenaventura y Santander de Quilichao. Es un caso de legalización de una actividad informal que se la asocia con dineros del narcotráfico y las AUC; en el desarrollo de la protesta y con el uso de la violencia, se argumenta ingerencia de la guerrilla. En cuanto a la construcción de vías, el tema es el de la indemnización de los ciudadanos afectados en sus propiedades que acuden a bloqueos de vías y maquinaria o bien la exigencia de ciudadanos para vías en mejor estado.

4) El caso de Guachené, expresado en acciones como las marchas y manifestaciones publicas a favor o en contra del nuevo municipio, refleja contradicciones de diverso orden que tiene que ver con la riqueza del territorio, los grupos é intereses locales y los intereses desde la Gobernación del Departamento y su apoyo en el Estado central. En cuanto a los conflictos y la movilización por los resultados electorales, los dos casos analizados en municipios contiguos son bien diferentes. En Pradera, con un desacuerdo entre fracciones políticas gobiernistas que lleva a hechos de violencia; en Florida, una acusación de fraude de un candidato indígena que implica una toma pacífica de la Registraduría y un recuento de votos.

5) En medio de una economía ilegal muy poderosa, de un conflicto político armado que tiene consecuencias devastadoras sobre la población, la Región norte-sur muestra la voz de sus ciudadanos sobre temas socialmente válidos y apelando preferencialmente a medios de expresión y protesta también legítimos. La capacidad de asimilación por parte del Estado es baja, a pesar de la legitimidad de las demandas y de los medios utilizados para la protesta.

3.4 LAS LUCHAS INDIGENAS⁵

Del total de acciones registradas en los Departamentos del Valle y del Cauca que se relacionan con los indígenas, en 26 actuaron como desencadenantes y en 11 como contendores de acciones iniciadas por otros. De estas últimas, la mayoría ocurre en el

⁵ La versión inicial de esta parte del texto fue preparada por la socióloga Renata Moreno.

municipio de Florida. Se trata de asesinatos cometidos presuntamente por la guerrilla a los que responden con acciones de resistencia civil. De las acciones en que actúan como desencadenantes en el Valle y el Cauca, la mayoría (57,7%) ocurre en los municipios de la Región norte del Cauca-sur del Valle, lo que hace manifiesta la importancia de esta zona para el escenario de confrontación en el cual están involucrados los indígenas. Dentro de esta Región, los indígenas aparecen como actores desencadenantes principalmente en los municipios nortecaucanos de Caloto, Calono, Jambaló y Santander de Quilichao con 11 casos en total; mientras que se presentan solo 4 casos en los municipios del sur del Valle de Pradera y Florida. Las zonas donde se presenta la mayoría de las acciones son zonas rurales con cabecera municipal menores de 20.000 habitantes (38.5%) y zonas rurales con cabecera municipal entre 20.001 y 50.000 habitantes (15.4%) por lo que el factor de lo rural aparece como significativo en este tipo de acciones colectivas con actores indígenas. En la mayoría de los casos el actor contendor, contra quienes se enfrentan los indígenas es la autoridad pública (73,1%) y la direccionalidad de la acción es dominada en un 88.5% de los 26 casos. Por lo tanto, se trata de acciones colectivas principalmente contenciosas en donde los temas principales de disputa con el gobierno son las reivindicaciones de tierras, los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, aunque también se tocan temas de administración pública, política económica, servicios del Estado, administración de justicia y educación. Las demandas planteadas al Estado en estos temas son llevadas a cabo sin violencia en un 65.4% de los casos y son acciones que además conducen a negociación en un 73%, aunque aparece violencia claramente en 5 casos. Las demandas se hacen a través de una combinación de repertorios de acción que van desde reclamos, declaraciones y denuncias, hasta ocupación de espacios, invasión de predios rurales y manifestaciones y marchas. Predominan formas de acción organizadas en un 61.5% con un gran número de participantes en la mayoría de ellas: en 50% de las acciones participan más de 200 personas. En estas acciones los medios más empleados son: la palabra y el discurso (12 casos), así como la fuerza física (13 casos). Las acciones colectivas en que aparecen involucrados los indígenas como actores desencadenantes no constituyen casos aislados unos de otros, sino que hacen parte en su mayoría de eventos significativos que alcanzan impacto regional en un 38.5 % de los casos, pero también nacional en un 19%. Se trata entonces de hechos encadenados unos a otros que se sostienen en el tiempo y logran una significación estructural por su impacto social y político.

A continuación presentamos cuatro modalidades de acción colectiva altamente significativas para entender la dinámica regional del escenario indígena. Reaparece el conflicto por la tierra, sobre todo en la zona norte del Cauca. También se presentan dos modalidades diferenciables de acción claramente orientadas a incidir en el Estado central con elementos de un proyecto alternativo de sociedad. Finalmente, algunas acciones se desarrollan en conflicto con actores armados que adquieren la forma de resistencia al conflicto armado.

3.4.1. Las tomas de tierras

A pesar de que en marzo del año 2006 los indígenas declaran públicamente que no realizarán invasión de tierras, fracasadas las negociaciones con el gobierno, éstas se reactivan entre agosto y noviembre del 2006, y entre noviembre y diciembre del 2007. Estas tomas, tienen como eje principal las haciendas La Emperatriz y Japio en el

municipio de Caloto, aunque también aparecen nombrados otros predios como Zulema y La Dominga. Estas dos haciendas han sido reclamadas por los indígenas como parte de los acuerdos realizados con el Gobierno en el año 2005, correspondientes a la indemnización por la masacre del Nilo, la cual contempla la entrega de 8.000 has. Según los indígenas, a la fecha tal acuerdo no ha sido cumplido. La zona donde están ubicadas ambas haciendas incluye principalmente terrenos planos del norte del Cauca, de expansión de la agroindustria azucarera.

Estas ocupaciones son al parecer iniciadas por el grupo Nietos del Quintín Lame, (disidencia interna del movimiento indígena compuesto principalmente por jóvenes y con incidencia de la guerrilla), pero luego asumidas por el movimiento indígena institucional en cabeza de la ACIN y el CRIC. Los hechos narrados en la fuente no dejan de ser confusos respecto al carácter de los actores indígenas implicados en un comienzo. Así, en las primeras noticias sobre estos hechos en agosto, se habla de invasiones en las que se señala indistintamente como autor a los Nietos del Quintín Lame, al grupo disidente Hijos de Manuel Quintín Lame, a indígenas del norte del Cauca y a los Paeces. Sin embargo, en noviembre de 2006 y en el 2007, cuando se reinician este tipo de acciones sobre la finca La Emperatriz, aparecen declaraciones de respaldo explícito por parte de reconocidos representantes del movimiento indígena regional a las tomas de tierras. Para Feliciano Valencia:

“la comunidad Páez, ahora más que nunca, ha decidido: ‘hacer presencia y con espíritu de lucha’, en los municipios de Corinto, Santander de Quilichao, Buenos Aires y Caloto, donde hay tierras en negociación. ‘No vamos a ofrecer resistencia ni a sacrificar la vida de nuestra gente, pero tampoco vamos a dar papaya’, subrayó el representante indígena.”⁶

En cuanto al número de participantes en las tomas de tierras aparecen 200 o más personas, se incrementan a más de 350 cuando las autoridades indígenas las reivindican en noviembre de 2006 y llega a 3.000 en las tomas de noviembre de 2007, es decir, la participación tiene un carácter creciente.

En las primeras tomas de tierra en 2006, figura como justificación la necesidad de adjudicación de tierras para trabajar. Sin embargo, el tema de los incumplimientos de los acuerdos de entrega de tierras se convierte en el principal argumento levantado por las autoridades indígenas en sus declaraciones sobre la invasión a las fincas:

“Los paeces aseguran que el gobierno no cumplió los acuerdos de septiembre pasado, cuando se firmó un compromiso por parte del Ejecutivo para adquisición y entrega de 6.665 has de tierras a los aborígenes, de las que, según estos, fueron despojados hace más de 20 años”⁷

No obstante, se debe tener en cuenta que demandas más amplias acompañan la toma de tierra como son el planteamiento de la necesidad de una reforma agraria en el país, y otras que se inscriben en marcos de significación y conflicto más amplios, al hacer alusión a un proceso de mayor envergadura que denominan: *Liberación de la Madre Tierra*, iniciado desde el año 2004, como forma de darle un sentido más

⁶ El País, 29 de noviembre de 2006. p. A3.

⁷ El País, 30 de noviembre de 2006, p. A10.

histórico y acorde a la representación del papel de lo indígena, con relación al medio ambiente.

Como ya se ha dicho, estas acciones, atendiendo a su modalidad y organización, se presentaron durante ambos años. Ocurrieron después de acciones desplegadas por los indígenas que buscaron la negociación con el Estado, aunque terminaron sin éxito y en medio de una puja entre grupos disidentes y el movimiento indígena como tal.

Así, los repertorios de acción indígena que antecedieron a las tomas de tierra en agosto de 2006 fueron audiencias públicas, asambleas permanentes, cumbres, vigiliias comunitarias y marchas pacíficas, orientadas a llamar la atención nacional sobre su problemática, a reanudar negociaciones sobre la tenencia de tierras y a unir fuerzas con otros sectores. A finales del 2006 se presentan fuertes enfrentamientos entre indígenas y Fuerza Pública.

El primer hecho registrado en el año 2006 es una audiencia pública en el municipio de Caldon, donde las comunidades indígenas del oriente del Cauca realizan una serie de denuncias sobre amenazas contra sus autoridades, así como el incumplimiento de la protección a los indígenas por parte del Estado y los señalamientos de la Fuerza Pública que acusa a los indígenas de ser protectores de los grupos armados. Después del rompimiento de las negociaciones con el gobierno, los indígenas se declaran en asamblea permanente hasta encontrar una respuesta sobre el proceso de adjudicación de tierras. Convocan también a la Primera Cumbre de Organizaciones Sociales y Movimientos Indígenas de Colombia, realizada en el resguardo La María del municipio Piendamó, de la cual se hablará más adelante.

En mayo de 2006, se unen a la jornada de marchas por todo el país para protestar contra el TLC y la reelección presidencial. La marcha regional es realizada desde el municipio de Florida hasta la Plaza de San Francisco en Cali, pero también hay concentraciones en el resguardo La María para analizar la problemática de tierras. Este último evento termina en fuertes disturbios con la Fuerza Pública, siendo duramente reprimido. La protesta, además de ser acusada de infiltración de las Farc por parte del gobernador del Cauca y el ministro del Interior Sabas Pretelt de la Vega, produce un fuerte rechazo por parte del Comité Gremial del Cauca que se manifestó en contra de la protesta aduciendo que ella conllevaba un grave colapso para la economía regional. Aunque el movimiento indígena no abandona la vía del diálogo luego de estos enfrentamientos, aparecen las tomas de tierras en noviembre del 2006. De igual forma, en el 2007 las tomas se dan luego de la suspensión de la mesa de tierras en enero y de acciones como la marcha hasta Bogotá en julio, coordinada por el CRIC y la ONIC donde pusieron en discusión los siguientes temas: Acuerdo Humanitario, Consulta Nacional frente al TLC, Referendo sobre el Plan de Desarrollo y las Transferencias, Reforma Agraria, libertad y protección para la Madre Tierra, revocatoria del Estatuto de Desarrollo Rural, salida negociada al conflicto armado, desmantelamiento del Plan Colombia y fuertes denuncias referidas al desmonte de los derechos constitucionales indígenas en Colombia⁸.

Se presentan distintos grados de violencia en las tomas de tierra, difíciles de precisar dado el sesgo periodístico, pero que parecen mostrar posiciones diferentes en el

⁸ ACIN, 21 de julio de 2007.

movimiento indígena nortecaucano alrededor del uso de la violencia y las formas de lucha, algunos privilegiando las acciones directas. Los indígenas son acusados en noviembre de 2006 por las autoridades de atacar con papas explosivas, palos, piedras y canicas de vidrio que lanzan con caucheras. Ante los hechos de violencia sucedidos durante las ocupaciones de las haciendas en el año 2006, los gobernadores indígenas responden admitiendo la infiltración de personas que cometen ese tipo de actos, pero a su vez rechazan de manera tajante cualquier tipo de violencia y lamentan la muerte de uniformados⁹.

Igualmente, en octubre de 2007 se realiza una marcha con participación de indígenas sobre la vía Panamericana, en los sectores de El Pital y Mondomo, jurisdicción de Santander de Quilichao. En esta marcha con expresiones de violencia resultan 15 policías heridos, 3 tractomulas incineradas, se queman llantas, talan árboles y lanzan artefactos explosivos de fabricación artesanal. En esta ocasión, también es acusada de haber contado con colaboración de miembros de las Farc, y también los voceros del Cric negaron que el bloqueo hubiera sido organizado o avalado por su gremio¹⁰. Ya a principios del año 2007, el movimiento indígena nortecaucano había enfrentado una serie de ocupaciones de tierras en sus mismos territorios, más concretamente en el resguardo de Tacueyó, por parte de grupos como los Nietos del Quintín Lame y Avelino Ulcué, que después retomaron las invasiones en la hacienda La Emperatriz frente a lo que las autoridades indígenas defienden su posición de negociación y diálogo, como se expresa en este aparte de un comunicado del Cric del 5 de junio:

“Que si bien es entendible la necesidad de tierras existente para las comunidades del departamento del Cauca y que por parte del Estado ha habido un incumplimiento sistemático para atender los compromisos adquiridos con nuestras organizaciones y procesos, es obligación de los comuneros que definan continuar procesos de Liberación de la Madre Tierra, agotar, según nuestros mandatos, los procedimientos internos como asambleas donde participe la comunidad, el cabildo y delegados de las asociaciones zonales para tomar decisiones justas y consecuentes, ya que las decisiones no coordinadas afectan los procesos de negociación regional y por lo tanto es imprescindible contar con la aprobación de las comunidades y autoridades indígenas del resto del departamento. Emplazamos también, con carácter de urgencia, al gobierno nacional, con el propósito de reactivar los procesos de concertación, en particular, lo de Tierras, tanto del decreto 982, lo convenido en diciembre de 2005 y la Mesa Nacional de Concertación de Tierras, de la cual se levantaron los delegados indígenas el pasado 30 de mayo del 2007.”¹¹

Cuando se retoma la iniciativa de ocupar las haciendas La Emperatriz y Japio por parte del movimiento indígena, ocurridas en periodos precisos de ambos años, podemos ver que éstas son realizadas como forma de presionar el cumplimiento de los acuerdos firmados con el gobierno para la adjudicación de tierras, de tal modo que tienden a posibilitar la negociación. Pero la posición del gobierno es reiterativa en rechazar las negociaciones a través del empleo de mecanismos de presión violenta. La respuesta del Estado durante los dos años frente a la toma de tierras generalmente recurre al envío de escuadrones del Esmad para conseguir los desalojos de las haciendas, al mismo tiempo que suspende la entrega de tierras a los indígenas. Las adjudicaciones de predios que se hacen en el año 2007 son para indígenas de otras regiones del Cauca como Inzá,

⁹ El País, “Violencia en Caloto”, 2 de diciembre de 2006, p. A8.

¹⁰ El País, “Farc infiltraron marcha indígena”, 11 de octubre de 2007, p. A5.

¹¹ CRIC, “Hacer Vale la Palabra y las Decisiones Colectivas para continuar la Huella de los Mayores”, Comunicado Público, 5 de junio de 2007.

campesinos y afrodescendientes que no han sido protagonistas de movilizaciones por la tierra¹². Por otro lado, agravando las relaciones del gobierno con los indígenas, se profundizan también los señalamientos del gobernador del Cauca Juan José Chaux que vincula los procesos de *Liberación de la Madre Tierra* con la insurgencia y más precisamente con el Bloque Jacobo Arenas de las Farc, lo que según la ACIN ha traído como consecuencia varias muertes selectivas, amenazas, señalamientos y retenciones a comuneros acusados de terrorismo y rebelión¹³.

Lo anterior, sumado a los importantes intereses económicos que afectan sus demandas sobre tierras planas, hace que, aunque el grado de negociabilidad implicado en las acciones colectivas llevadas a cabo por los indígenas alrededor de la toma de tierras en la región parezca alto, no hay un contexto que permita su resolución definitiva y pacífica.

3.4.2. La Primera Cumbre de Organizaciones Sociales y Movimientos indígenas de Colombia en La María, Piendamó, mayo 2006.

Los indígenas de la zona de estudio se caracterizan por la utilización de distintos repertorios para la acción, combinando otros medios como la palabra y el discurso, además de la fuerza física, que son desplegados en tipos de repertorios como asambleas, audiencias públicas y cumbres, las cuales anteceden a las acciones directas como la toma de tierras. En los repertorios en los cuales prima la palabra es donde se crean los marcos para la acción por medio de la discusión de la problemática entre las bases y los líderes, acompañados de asesores y organismos humanitarios aliados del proceso; se llama la atención pública hacia la situación social y humanitaria de esta población; se buscan alianzas con otros sectores y se buscan también respuestas negociadas con el gobierno a sus demandas por medio de propuestas escritas que se socializan en este tipo de eventos.

Un ejemplo de un conjunto de acciones colectivas de este orden es la Primera Cumbre de Organizaciones Sociales y Movimientos Indígenas de Colombia que se realizó en el resguardo de La María en el municipio de Piendamó en el mes de mayo de 2006, luego del levantamiento de las negociaciones con el gobierno a comienzos del año. Esta zona ya había sido propuesta por la organización indígena como territorio de convivencia, diálogo y negociación durante el Congreso Extraordinario del Cric que se realizó en medio de la gran movilización indígena de junio de 1999 en La María, Piendamó. A principios del año 2000, algunas organizaciones populares del Cauca iniciaron en La María, Piendamó, un proceso de coordinación de actividades centrado inicialmente en la exigencia del cumplimiento de los acuerdos firmados con el gobierno nacional. De ese

¹² Los \$4.200 millones que el Ministerio de Agricultura desembolsará para adquirir tierras para campesinos y afrodescendientes abrirán un nuevo capítulo en las relaciones entre el Estado y las organizaciones sociales del departamento del Cauca. Lo anterior porque se trata de nueve organizaciones sociales las que tendrían acceso a la adjudicación de predios y mejoramientos productivos. "Todo esto es el punto final de un proceso que le permitirá al Cauca no sólo restaurar el equilibrio de tierras, sino evitar la prolongación de mayores problemas sociales", acotó el ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias. Pero los más satisfechos con este anuncio son, sin duda, quienes viven de la explotación del campo y que no hacen parte de organizaciones indígenas. El País, 5 de marzo de 2007. P. B5. Labriegos también tendrán tierras.

¹³ Comunicado de la ACIN. Comuneros del Norte del Cauca víctimas de las balas de los diferentes actores armados. 9 de diciembre de 2007.

proceso nació el Bloque Social Alternativo que llevaría a Floro Tunubalá a la Gobernación del Cauca.

En la Cumbre de 2006 se aprecia un alto grado de organización y coordinación desde las instancias más altas del movimiento indígena como la Onic, el Cric, la Acin, así como diversas organizaciones sociales de otros sectores. Según datos de la prensa, participaron varias organizaciones nacionales como Salvación Agropecuaria, la Coordinadora Nacional Agropecuaria, CNA, Fensuagro, los sindicatos del Valle, Cauca y Huila y las organizaciones indígenas de Antioquia, Chocó, Caldas, Risaralda, Quindío, Valle, Cauca, Nariño, Huila y Tolima. Sin embargo en el documento oficial de la cumbre las organizaciones que aparecen como participantes son: Cric, Cima, Coordinadora Nacional Agraria, Ruta Pacífica de Mujeres, Movimiento Campesino de Cajibío, Campesinos sin Tierra de Popayán, Anuc Ur Cauca, Crit, Pueblos Nasa de Putumayo, Proceso de Comunidades Negras, Utinaya, Acuerdo de Salvajina, Codesco, Ong's defensoras de DD.HH. y Usuarios de servicios públicos de Popayán. Lo anterior muestra un importante poder de convocatoria por parte de la organización indígena del Cauca más que todo a nivel regional. Los datos de prensa no hablan del número de participantes, sin embargo en documento oficial del Cric se habla de 50.000 personas¹⁴.

Las conclusiones de la Cumbre van dirigidas fundamentalmente al Gobierno Nacional al cual se le presentan propuestas en los siguientes temas: 1) La constitución de una mesa de interlocución de alto nivel del Gobierno con los sectores que resultarían afectados por el TLC, el cual contemple como una de sus posibles conclusiones la convocatoria de un referéndum sobre su firma, 2) La constitución de una mesa de interlocución de alto nivel del Gobierno nacional sobre una reforma agraria integral que tenga en cuenta la redistribución de la tierra, equidad, recursos económicos, formas de pago, reparación a las víctimas del conflicto, modelo económico y garantías para viabilizar propuestas de ley, 3) Cumplimiento de acuerdos firmados por el Estado colombiano con organizaciones sociales: reconocimiento de acuerdos, evaluación de los compromisos adquiridos y cronograma de cumplimiento y 4) Garantías de respeto a las comunidades en su movilización y organización social¹⁵.

Estas propuestas tienden fundamentalmente a la negociación con el Gobierno. No se quedan en la petición del cumplimiento de los acuerdos anteriormente firmados con éste, sino que además proponen otros temas que tienden a reafirmar procesos alternativos tanto de participación democrática como de desarrollo social y económico para las poblaciones rurales. Se resalta la aparición de nuevo de la reforma agraria como estrategia para viabilizar al campo colombiano y la demanda de participación de la sociedad civil en la solución al conflicto armado en el país, con propuestas de paz que se había formulado en el proceso de paz con el presidente Pastrana pero que en el actual gobierno se congelaron totalmente.

Sin embargo, la coyuntura nacional de protesta contra el gobierno termina involucrando las actividades pacíficas alrededor de la cumbre en La María con una lógica de confrontación violenta a través del choque de los manifestantes con la Fuerza Pública, resultando varios heridos, un muerto, muchos daños materiales y la suspensión de la cumbre, así como transformando el carácter de negociabilidad que tenía el evento.

¹⁴ CRIC. "Cumbre Itinerante y Permanente de Organizaciones Sociales "Pedro Mauricio Pascué"" La María, Piendamó. Boletín. Mayo-junio 2006.

¹⁵ Ibid, p. 31.

Respondiendo a su objetivo de fortalecer la articulación entre organizaciones sociales y movimientos políticos alternativos, las organizaciones indígenas de las comunidades Nasa, Embera Chami y Wannan, se unen a la jornada de marchas por todo el país para protestar contra el TLC y la reelección. La marcha, como ya se menciono, se realizo entre Florida y Cali, sumado a la concentración en el resguardo La Maria.

Estas marchas terminan en disturbios en distintas partes del país y en la región de estudio acaban con choques entre cerca de 2000 campesinos que pretendían marchar hacia la asamblea indígena reunida en el resguardo de La María, en Piendamó, y un piquete de la Policía, provocando el bloqueo de la vía entre Popayán y Cali, generando una confrontación violenta entre los manifestantes y la Fuerza Pública, cuando la Policía quiso desalojar, en el resguardo La María, a unos 15 mil manifestantes. La posición del gobernador del Cauca, José Chaux Mosquera, no es sólo de rechazo a la marcha é imparte la orden de desalojo, sino que la acusa además de ser promovida por infiltrados de las Farc quienes, según grabaciones en su poder, les habrían dado órdenes a campesinos e indígenas sobre la jornada de protesta.

La protesta se intensifica a partir del día siguiente cuando los manifestantes se niegan a desalojar la Panamericana, exigiendo la presencia de altos funcionarios del Gobierno Nacional como los ministros del Interior, Agricultura y Medio Ambiente y el Director del Departamento Administrativo Nacional de Planeación, con el fin de firmar un nuevo acuerdo sobre la tenencia de tierras, pero el Gobierno responde con la negativa a dialogar mediante vías de hecho y, por el contrario, refuerza el desalojo con el Escuadrón Antimotines, realiza la detención de 60 manifestantes y envía una comisión de más bajo nivel a la zona (una comisión gubernamental encabezada por el viceministro del interior, Luís Hernando Angarita). A las acusaciones de infiltración de las protestas por parte de las Farc, proferidas por el gobernador del Cauca, se suma ahora el Ministro del Interior, Sabas Pretelt de la Vega. Por otro lado, el Consejo Gremial del Cauca también se manifestó en contra de la protesta aduciendo que ella conllevaba un grave colapso para la economía regional.

En los días siguientes los indígenas refuerzan su presencia en la zona llegando a reunir 5.000 personas, pero aún así la Fuerza Pública consigue recuperar el control de la vía de manera violenta. Ante la magnitud de las agresiones sufridas por parte de la Fuerza Pública que afecto severamente el Resguardo de La María y la ausencia de los ministros solicitados por los indígenas, los manifestantes deciden levantar la protesta para evitar los choques con la Fuerza Pública y suspender de nuevo las negociaciones con el gobierno. Las organizaciones indígenas y campesinas concentradas en el resguardo de La María, Piendamó, resuelven mantener la asamblea itinerante de manera indefinida por todo el país, lo que se verá concretado en la posterior marcha hacia Bogotá.

El impacto de la cumbre luego de estas confrontaciones alcanza no sólo el nivel nacional sino también el internacional, al llegar las denuncias sobre violación de derechos humanos hasta al Congreso de los Estados Unidos. Los indígenas recibieron apoyo de organizaciones de derechos humanos nacionales como Codhes e Indepaz. A través de estas denuncias solicitan a los congresistas revisar la asistencia militar a las fuerzas armadas colombianas, así como la posible aprobación del Tratado de Libre Comercio con ese país.

3.4.3. La marcha hacia Bogotá

Uno de los eventos más significativos de los indígenas en estos dos años fue la realización de una gran marcha hacia la capital del país el 23 de julio de 2007, organizada por el Cric y la Acin, con paradas en los municipios de Cali, Armenia e Ibagué, en donde llevaron a cabo asambleas y reuniones con sectores sociales y políticos alternativos de las distintas regiones. Con esta marcha elevaron demandas sobre distintos temas como el acuerdo humanitario, la consulta frente al TLC, un referendo sobre el Plan de Desarrollo, las Transferencias, la reforma agraria, la revocatoria del Estatuto rural y el desmantelamiento del Plan Colombia.

Esta manifestación partió desde Santander de Quilichao y coincide con el I Encuentro Nacional Agro-minero interétnico que se realizó en Bogotá el 23 y el 24 de julio de ese mismo año, en donde se discutió sobre el proyecto de reforma a la legislación minera. La marcha se organiza después de la presentación del gobierno de su Estatuto Rural, como también después de varias denuncias en donde acusan al Estado de atacar los rituales de liberación de la madre tierra en el Cauca¹⁶. Todo esto estaría teniendo un efecto muy negativo sobre las comunidades indígenas, afectando las zonas indígenas que coinciden con zonas de explotación minera, o bien afectando la constitución de resguardos y los derechos adquiridos sobre el territorio por parte de los indígenas. La denuncia contra el Estado se da por múltiples hechos como heridos, amenazas, detenciones arbitrarias y la creación de un ambiente de zozobra en la zona, por parte de la Fuerza Pública.

El movimiento indígena nortecaucano se muestra en estas acciones bastante unificado, a pesar de los conflictos internos que tuvieron a comienzos del año. La presencia en la marcha fue masiva, aunque la prensa habla de mil indígenas que salieron del Cauca, los comunicados indígenas hablan de 2.000 personas. También muestran niveles de organización bastante altos, en donde la coordinación por parte de las organizaciones como la Onic, el Cric y la Acin fue fundamental. En cada parada realizaron concentraciones, marchas y actos culturales, previamente coordinados en su logística con organizaciones sociales de las ciudades a las que llegaban. La utilización de recursos como el internet para esta ocasión fue muy importante, manteniendo una actualización permanente de la información de la marcha y las visitas en la página web, con fotos, audio e informes completos¹⁷. Fue importante también el uso de chivas para movilizarse de una ciudad a otra.

El marco de significado que se le dio a esta acción trató de rebasar las antiguas protestas de demandas sectoriales al Estado, para llamar esta vez a la unidad con otros movimientos sociales para construir propuestas de país desde los sectores populares. Así algunas de las afirmaciones que se usaron para convocar a este evento fueron las siguientes:

¹⁶ Comunicado del CRIC. Continúa la represión del Estado contra los Rituales de Liberación de la Madre Tierra en el Cauca. Julio 12 de 2007.

¹⁷ Se transmite por Radio Payumat y por Internet, si las condiciones de estadía y desplazamiento lo permiten, con una tecnología de wimax que tiene cubrimiento en las ciudades. Hay también un equipo de transmisión en RPT (o transmisor móvil) que se utiliza para transmitir las marchas hasta el sitio donde se instale el Internet. Comunicado de la ACIN, 23 de julio de 2007.

“porque es a hablar con el pueblo a lo que vamos, a tejer unidad por la dignidad y la vida y éste es el *sentido que nos convoca*: desprivatizar la infamia!”

“Desde el movimiento indígena del Cauca se convoca a la unidad para soñar el país posible y necesario que merecemos como colombianos”.

“Esta es una acción que tendrá tareas a corto y mediano plazo pues se busca recoger una agenda desde las organizaciones sociales y populares que permitan perfilar un plan de vida nacional”¹⁸.

La particularidad que revisten estos marcos de significado está en el énfasis que realizan esta vez sobre la articulación con otros sectores y problemáticas, que tiene como antecedente sin embargo, la apertura del Territorio de Convivencia de Diálogo y Negociación de la Sociedad Civil en la María Piendamó, cuando una de las críticas más recurrentes al movimiento indígena ha sido la de su agudo carácter sectorial y alejado de otros grupos poblacionales, mostrando una nueva tendencia en el movimiento indígena hacia la ampliación de sus reivindicaciones y alianzas. Así en Cali, por ejemplo, exigieron en la marcha que realizaran la entrega de los cadáveres de los ex diputados asesinados en cautiverio, así como la realización del acuerdo humanitario.

El cubrimiento de la prensa, aunque se puede decir que amplio, se centra sobre todo en los momentos anteriores a la llegada de los indígenas a Bogotá. Sin embargo, coloca las demandas de esta población en el plano público durante varios días, alcanzando por lo tanto un grado de significación alto a nivel nacional. Sobre la respuesta del Estado a esta marcha no aparece claramente en los diarios. Solo se habla de la firma de un convenio de 60.000 dólares para apoyar el cumplimiento de los acuerdos del Nilo entre el ministro del Interior, Carlos Holguín, y el representante del programa del PNUD, antes de la llegada de los indígenas a la capital.

Dado el carácter pacífico de esta marcha, en la cual no se reportaron disturbios ni otra clase de desmanes, no se registraron acciones represivas por parte de la Fuerza Pública; ni acusaciones de infiltración por parte de la guerrilla como sucede con las tomas de tierras. Esta forma de movilización, se podría decir entonces, arroja como en otras ocasiones, un resultado positivo para el movimiento indígena, aunque no se puede afirmar nada sobre el cumplimiento o no del objetivo de los indígenas de lograr alianzas estratégicas con otros sectores. Sin embargo, este aparente éxito en la movilización, no se verá reflejado en la satisfacción plena de sus demandas de tierra, ya que a finales de este año la toma de tierras reaparece, exigiendo de nuevo el cumplimiento por parte del Estado de los compromisos adquiridos en materia de tierras para esta población.

3.4.4. Acciones de resistencia civil.

Como una manera de hacer resistencia a los grupos armados ilegales, las comunidades indígenas de Florida decidieron que quemarán todas las armas de hombres que violen su territorio y que ataquen a sus integrantes en rechazo al conflicto armado. La determinación se toma tras el asesinato del indígena Jhon Jairo Ramos en febrero de 2007, por parte de la guerrilla cuando se encontraba en su residencia del sector Granate, en el corregimiento del Líbano, zona montañosa de Florida. La situación desata la

¹⁸ Comunicado de la ACIN, 23 de julio de 2007.

reacción de la guardia indígena del sector que repelió el ataque para intentar capturar a los atacantes tal como ocurrió el pasado 23 de enero cuando un pelotón de soldados del Batallón Codazzi de Palmira disparó contra una familia que se movilizaba en un camión. "Nosotros quemaremos el fusil de la guerrilla como símbolo de que no estamos de acuerdo con las armas, lo que puede traer una represión fuerte contra los indígenas" subrayó el vocero de la Orivac, tras advertir que el arma retenida fue puesta a disposición de la Fiscalía, igual como ocurrió con las de los soldados retenidos en enero.

3.4.5. Conclusión.

Se ha hecho una descripción de acciones colectivas llevadas a cabo por población indígena, en su mayoría de la etnia Nasa, que tiene presencia principalmente en zonas rurales de municipios del norte del Cauca y sur del Valle. Los indígenas muestran altos niveles de organización, consiguen movilizar un número considerable de personas dentro y fuera de su territorio. Sus temas de conflicto son la tierra, la sobrevivencia y, de manera muy importante, la consolidación de un modelo de vida contrario al que defienden las autoridades. Sus demandas pretenden, más que confrontar al Estado, negociar con él, para lo cual usan varias modalidades de acción: desde ocupaciones de espacios o invasiones de predios hasta marchas y manifestaciones -como formas de presionar las negociaciones- pasando por acciones de reagrupamiento colectivo que chocan con el Estado. Se presentan acciones de fuerza y violencia desde los indígenas, pero lo que domina es la reacción estatal desmesurada en el uso de la fuerza y la violencia, así como de otros grupos armados ilegales. Aparece entre los indígenas una motivación por desarrollar modalidades no violentas de acción, por el diálogo y por la denuncia de la violencia homicida de los actores armados sobre su población. Como resultado hay tanto acuerdos como motivos para movilizarse por el incumplimiento de pactos.

Los rasgos observados de una fuerte identidad y organización, de una capacidad grande de movilización de recursos y personas, así como de confrontar a sus contradictores y plantear alternativas de conflicto, tanto con las autoridades estatales como ante un público mayor de la sociedad civil, hace pensar que estamos frente a un movimiento social de carácter étnico que no tiene equivalente en la País y que tiene significación nacional.

3.5. BUENAVENTURA: UN NODO DE CONFLICTO

Buenaventura es un caso paradigmático por varias razones. Como se vio en la presentación de los hechos de acción colectiva conflictiva por municipio (Tabla 2.1), Buenaventura concentra 42.5% de éstas en la Región norte del Cauca-sur del Valle. Esto quiere decir que durante los años 2006 y 2007 se reconocieron en este municipio 190 acciones colectivas conflictivas, muchas más que en cualquier otro municipio. En medio de una situación de violencia muy acentuada -que también se describe en la primera parte de este trabajo- el municipio muestra una amplia gama de formas de movilización de la sociedad local por temas distintos, algunos de ellos claramente referidos a los intereses de la sociedad civil. Se debe tener en cuenta que el 73.6% de estas acciones colectivas sucedieron en el casco urbano de Buenaventura, mientras que

el 23.7% restante en zonas rurales, las cuales cubren más del 99% del territorio del municipio.

Escenarios de conflicto de diverso tipo se entrecruzan en Buenaventura. Por un lado, una situación de violencia aguda producto del conflicto político armado y expresiones de criminalidad que tienen como fin el control de Buenaventura como territorio estratégico para economías legales é ilegales. A este conflicto convergen diversos actores y tiende a focalizarse en sectores específicos de la ciudad y el campo, con afectación directa a la población civil que reacciona con reclamos por la Paz y los Derechos Humanos. Por otro lado, expresiones de acción colectiva *sociales* esencialmente dirigidas al Estado sobre temas laborales o de política social -educación y salud específicamente- en un contexto de debilidad de las instituciones estatales locales encargadas de prestarlos. Finalmente se debe tener en cuenta la movilización alrededor de la renovación urbana y la adecuación de infraestructura del puerto marítimo. Es importante precisar que la mayoría de estos conflictos hace parte de procesos que también tuvieron presencia en otros municipios del departamento o el país, pero con alguna especificidad local.

3.5.1. Narcotráfico

El Pacífico colombiano se ha convertido en un lugar privilegiado para la producción y el transporte ilegal de droga hacia el exterior. Tanto el Pacífico nariñense como el chocano se ven afectadas por este fenómeno que tiene su eje central Buenaventura, principal centro urbano de la costa pacífica y principal puerto marítimo del País, con relativa infraestructura de movilidad estratégica por tierra hacia las zonas centrales del País, además del importante transporte fluvial por mares y ríos que conecta con regiones apartadas de la costa Pacífica y el exterior. La ciudad adquiere así, una importancia estratégica enorme para el comercio y el transporte de mercancías, entre ellas, las economías ilegales.

La mayoría de acciones registradas entre 2006 y 2007 relacionadas con el narcotráfico, están estrechamente asociadas al transporte de drogas e insumos químicos. De 20 acciones cuyo tema eran las acciones llevadas a cabo por el Estado contra el narcotráfico en el área de jurisdicción, terrestre y marítima, de Buenaventura, 15 son incautaciones y 5 son capturas de personas o allanamientos de espacios. La mayoría de esas incautaciones fueron de cargamentos de droga e insumos químicos para el procesamiento de coca. Unas pocas además, fueron de vehículos de transporte marítimo o partes de éstos -tales como motores fuera de borda, lanchas tipo *Go fast*, metreras, barcos pesqueros, e incluso, sumergibles artesanales hechos con alta tecnología, buen diseño y alta capacidad de almacenamiento.

Durante los años analizados, la dinámica general del escenario muestra un carácter progresivo en la actuación estatal por el control de la actividad. Pasa de continuas incautaciones de insumos químicos para el procesamiento de cocaína en sectores de salida al mar del casco urbano de Buenaventura -como el estero San Antonio- a incautaciones de medianos y grandes cargamentos de droga, primero, en zonas aledañas al casco urbano, y posteriormente, en zonas rurales de Buenaventura y el Choco. En los primeros ocho meses del año 2006 aparecen con frecuencia las incautaciones de insumos químicos, la mayoría a bordo de medianas embarcaciones sobre el estero de

San Antonio o camiones de carga en la carretera Cabal Pombo. A partir de octubre del mismo año, se presentan de manera más regular algunas incautaciones de cocaína en cantidades que no superan las 2 toneladas y, particularmente en octubre de 2006, algunas de marihuana en sectores específicos de la ciudad. Varios de estos hechos son atribuidos a organizaciones guerrilleras, otros a organizaciones de narcotráfico y otros indeterminados. En este mismo mes se lleva a cabo una operación entre la Policía Antinarcóticos y la Armada que permite la incautación más grande de cocaína en todo el año a nivel nacional. Son incautadas 8.5 toneladas a bordo de 3 lanchas tipo *Go fast* en la desembocadura del río San Juan, límites entre Choco y Valle. En adelante, las principales incautaciones muestran un desplazamiento hacia las zonas del sur del Choco, principalmente en jurisdicción del municipio de Pizarro. En noviembre de 2006 se llevan a cabo incautaciones de lanchas, motores fuera de borda y combustible. Posteriormente, en los meses de marzo y mayo de 2007 se producen dos grandes incautaciones de cargamentos de cocaína listos para ser sacados al exterior, el primero, de 6.5 toneladas, y el segundo, de 13.2 toneladas respectivamente, este último, cantidad record en los últimos años.

Posterior a estas dos grandes incautaciones, éstas se reducen considerablemente. A mediados de junio de 2007 es capturado fuera de Buenaventura el presunto encargado del envío de los cargamentos de cocaína decomisados en la zona de Pizarro y días después, en la misma zona, es hallado el más grande sumergible de fabricación artesanal utilizado para el transporte de cocaína en aguas cercanas al mencionado municipio, con capacidad para llevar hasta 5 toneladas y permanecer 4 días sumergido.

Éstos hechos de significación nacional fueron asociados regularmente a organizaciones dedicadas al narcotráfico -especialmente el Cartel del norte del Valle-, aunque también aparecen otras atribuidas propiamente a la guerrilla. Es posible que las alianzas entre diferentes organizaciones sean un hecho, lo cual permite una mayor capacidad operativa, y seguramente ganancias económicas apreciables para las distintas partes. De las alianzas y pactos alrededor de la economía ilegal no se salvan los funcionarios públicos y organismos de seguridad del Estado, lo cual muestra el grado de permeabilidad social e institucional que el narcotráfico puede llegar a alcanzar en determinados contextos. Se puede hacer referencia a dos casos: uno, el del Secretario de Gobierno de Buenaventura, quien es acusado y detenido por favorecer actividades de narcotráfico, y dos, la captura de 3 suboficiales de la Armada Nacional a finales de noviembre de 2006 por delitos similares.

Los últimos seis meses del 2007 a nivel regional y nacional, están marcados por las capturas de personas consideradas medios y altos mandos de diferentes estructuras del narcotráfico con incidencia en Buenaventura y la costa pacífica en general. En el segundo semestre del 2007 y los primeros meses del 2008 se producen importantes capturas de los cabecillas más buscados del denominado Cartel del norte del Valle, así como la muerte de otros. La reducción en el número de incautaciones posterior a junio de 2007 puede ser el reflejo del desmantelamiento de grupos dominantes que poseían un importante control de la zona, fenómeno que se ve acompañado de disputas entre quienes entran a competir por el dominio del negocio.

Los datos disponibles sobre las formas de transporte permiten inferir también la envergadura y sofisticación del narcotráfico en Buenaventura. En marzo y diciembre de 2006 hallan sumergibles de fabricación artesanal sobre el río Timba, al sur de

Buenaventura, pertenecientes a organizaciones de narcotráfico. También en diciembre del mismo año, se detecta el transporte de droga hacia el exterior por el Terminal marítimo, llevada en contenedores a bordo de barcos de gran calado y mimetizada entre mercancías de otro tipo.

Las manifestaciones de violencia producto del narcotráfico se hacen evidentes en situaciones concretas, pero resultan ambiguas en el registro por la complejidad del problema y la diversidad de actores e intereses que se mueven alrededor de este escenario. Muchas de las muertes violentas aparecen como homicidios efectuados por anónimos sobre cuerpos que muestran señales de sevicia y que rayan con la barbarie. La relación con la criminalidad y los actores armados se desenvuelve en una disputa violenta que involucra a amplios sectores de la sociedad, confundándose en muchas ocasiones con conflictos políticos o que toman un tinte político.

3.5.2. Conflicto armado y lucha por el control territorial.

Es importante señalar algunos antecedentes del conflicto armado en Buenaventura. Los finales de los años noventa constituyen un punto álgido del conflicto armado que se refleja en el incremento notable de los índices de violencia homicida a partir de 1999 (ver primera parte). En Buenaventura, hacen presencia las Farc, principalmente con el Frente 30 y su expresión urbana el Frente Manuel Cepeda Vargas. También han hecho presencia grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, Auc, con el Bloque Calima y el Bloque Pacifico, junto a organizaciones armadas del narcotráfico interesadas en garantizar el acopio de insumos químicos para el procesamiento de cocaína y el envío de droga hacia Centroamérica y Estados Unidos mediante rutas marítimas.

El conflicto armado, en el que intervienen las Fuerzas Armadas del Estado, es por el dominio territorial urbano y rural, teniendo en cuenta su particular sentido económico. En la parte rural se trata de una disputa violenta por el control de las zonas de selva tropical y las rutas de tránsito fluvial por los diferentes ríos y esteros con salida al océano pacífico (río Raposo, río Naya, río Mallorquín, río San Juan, río Timba, estero San Antonio, entre otros). En la parte urbana, por el control de barrios, además del control de las zonas de bajamar en el casco urbano de Buenaventura.

La desmovilización de las Auc a mediados de 2005 se traduce en una disminución de la confrontación armada. La guerrilla empieza a recuperar zonas que había perdido con los paramilitares tanto en la zona rural como en la urbana. Sin embargo, la Fuerza Pública incrementa su capacidad operativa significativamente, lo cual conlleva a una transformación en las formas de confrontación de las partes. Además, el proceso de desmovilización y reinserción de los paramilitares y los guerrilleros no es totalmente exitoso, lo que hace que persistan en el escenario del conflicto aunque en menor proporción y con etiquetas distintas, tales como las denominadas “Águilas Negras”. Es en este contexto que se enmarcan las dinámicas del conflicto en los años 2006 y 2007 que presentaremos a continuación.

El aumento de la capacidad operativa de las Fuerzas Militares del Estado es un factor que caracteriza este periodo de conflicto. En el caso de Buenaventura, este proceso se consolida paulatinamente en relación a las formas de acción que despliegan los actores

en contención. Inicialmente, en un Consejo Comunitario realizado en marzo de 2006, el Ministerio de Defensa toma la decisión de convertir el Distrito de Policía de Buenaventura adscrito a Policía Valle en un Distrito Especial Autónomo con mayores recursos en unidades policiales y equipos, especialmente de inteligencia. Poco después llegan 200 hombres de la Armada y la Policía con el objetivo de militarizar los barrios de la comuna 5, considerada epicentro de las Farc así como los muelles de embarque que rodean dichos barrios. El 1 de mayo del 2006, en vísperas de elecciones, se lleva a cabo un nuevo Consejo de Seguridad, esta vez en Cali pero tocando el tema de Buenaventura. Como resultado se anuncia el aumento del *piè* de fuerza en 200 hombres adicionales, la construcción de 3 nuevos CAI móviles de la Policía en Buenaventura y el fortalecimiento de las operaciones investigativas.

La semana anterior a elecciones presidenciales se llevan a cabo una serie de atentados. Los ataques se producen contra puestos y patrullas de Policía, viviendas, sedes de empresas de aseo, de apuestas y de comunicaciones. Además, el intento de quema de una tractomula y el derribamiento de una torre de energía en el Bajo Anchicaya, dejando la ciudad a oscuras por dos días. En su respuesta, las autoridades decretan ley seca y toque de queda, capturan un miliciano, dan de baja a otro y uno más queda herido. Pasadas las elecciones, el 30 de mayo lanzan un petardo a la sede política de la campaña del Presidente electo Álvaro Uribe y luego declaran objetivo militar a dos delegados de la Registraduría Nacional.

Días más tarde, la Fuerza Naval del Pacífico lleva a cabo operaciones contra el Frente 30 de las Farc en cercanías al río Timba, al sur de Buenaventura. Destruyen un campamento y un laboratorio, incautan material bélico y equipos para fabricación artesanal de lanchas *Go fast*. El 21 de junio de 2006, la Infantería de Marina confirma la captura del presunto responsable de la serie de atentados pre-electorales que tenía su centro de operaciones en el barrio La Inmaculada. Otros más son dados de baja en días posteriores.

Un segundo momento de reestructuración de las Fuerzas Militares se da a inicios de julio de 2006. En primer lugar relevan al comandante de Infantería de Marina y en segundo lugar, deciden que este organismo sea encargado exclusivamente de las comunas 5 y 12, mientras la Policía se encargaría de las diez comunas restantes.

En agosto de 2006 se produce un atentado a la estructura petrolera en la vereda Gamboa de Buenaventura que produce el derrame de 85.000 galones de acpm. El hecho es atribuido a las Farc. Paralelamente, se realiza la operación conjunta “Buenaventura Segura VII”, entre Policía, Armada, Gaula y CTI en los barrios Lleras y Alfonso López con más de 300 hombres. Se producen 250 allanamientos logrando alrededor de 14 capturas e incautaciones. La respuesta de las Farc se produce el 18 de agosto con la explosión de un taxi bomba de gran poder dirigido contra el CAI de El Pailon, dejando una persona muerta y 6 heridos, cinco de ellos civiles. Igualmente el 27 del mismo mes, lanzan un petardo a la Estación de Policía del barrio El Progreso y evitan uno más el día 30 contra el CAI del barrio 14 de Julio.

Entre septiembre y noviembre de 2006 la dinámica de conflicto transcurre sobre atentados con petardos a instalaciones de la Policía y el DAS, contra la cárcel y otras edificaciones más. También ataques a miembros de la Fuerza Pública mientras patrullan las calles en ejecución de un “Plan Pistola”. Se presentan una serie de ataques utilizando

vehículos de transporte público, o dirigidos contra estos, en los que se menciona el enfrentamiento entre milicias de las Farc y desmovilizados de las autodefensas, especialmente en el barrio Viento Libre.

El 26 de octubre de 2006 se realiza un nuevo Consejo de Seguridad en Buenaventura con presencia del presidente Alvaro Uribe. En el evento el obispo de la diócesis de la ciudad, monseñor Héctor Epalza, denuncia infiltraciones del crimen organizado y el narcotráfico en la Fuerza Pública y define los consejos de seguridad como “consejos de inseguridad”. Pocos días después el obispo abandona la ciudad debido a amenazas de muerte, que según fuentes de inteligencia, provendrían de una alianza entre paramilitares y guerrilla.

En noviembre de 2006, una carretilla bomba activada a control remoto es colocada en cercanías al puente El Piñal dejando un saldo de 4 Infantes de Marina, 3 Policías Antiexplosivos y 1 civil heridos. A finales de mes la Defensoría Regional del Pueblo visita la ciudad junto a una comisión de la ONU y la Personería Municipal dando cuenta de la difícil situación de desplazamiento que se presenta producto de enfrentamientos con armas de largo alcance entre guerrilla, paramilitares y fuerza pública en algunos sectores de la ciudad, principalmente de bajamar.

A finales de diciembre de 2006 empieza a operar como tal el nuevo Distrito Especial de Policía de Buenaventura, según la fuente, con 900 hombres. A inicios del año 2007 la Armada lleva a cabo una operación denominada “Albino” logrando la captura de un importante miliciano, segundo al mando del Frente Urbano Manuel Cepeda Vargas.

El último momento de reorganización de las Fuerzas Armadas y de Policía se da en enero de 2007, luego de que atacaran un camión de la Policía en el barrio La Independencia dejando 6 muertos, cuatro de ellos civiles, y 14 heridos, siete de ellos civiles. Inmediatamente el Ministro de Defensa preside un Consejo de Seguridad, crea un cuerpo elite antiterrorista denominado Fuerzas Especiales Urbanas, Afeur, y una serie de medidas de extrema vigilancia como frentes de seguridad con el gremio de taxistas, control a la venta de propiedades, empadronamiento a las viviendas, jornadas de cedulación masivas e instalación de cámaras de seguridad. Igualmente se reparte un volante entre la población con nombre y foto de 3 milicianos ofreciendo cuantiosas recompensas por ellos. Los resultados de las medidas son inmediatas: dos días después las fuerzas especiales -con datos brindados de un informante- capturan a uno de los tres hombres por los que ofrecían recompensa. Así mismo se produce la entrega de quien sindicaron ser el comandante de las milicias urbanas de las Farc. Éste último será posteriormente encargado de promover la desmovilización de 103 milicianos del Frente Manuel Cepeda Vargas en Cali y Buenaventura a comienzos de febrero, entre ellos el tercer hombre del volante.

Por el mismo tiempo, varios hechos se refieren a la llegada de contingentes de paramilitares a Buenaventura. En primer lugar, una nota periodística publicada el 28 de enero de 2007 que hace alusión a una serie de graffitis en algunos sectores de la ciudad aludiendo a las Autodefensas Campesinas del Pacífico. En segundo lugar, amenazas contra dirigentes sindicales y dirigentes comunales. En tercer lugar, un incremento sustancial en los homicidios y la aparición nuevamente de las masacres y las desapariciones. En cuarto lugar, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA, publica a inicios de marzo el octavo informe de verificación al proceso de

desmovilización y reinserción de los paramilitares, en el que señala la creciente evidencia sobre la presencia de grupos como las Águilas Negras y otros más en el sur del País (Valle, Cauca y Nariño), compuestos en buena medida de desmovilizados de las Auc y ligados a zonas de cultivo y transporte de drogas y armas. Para el Valle del Cauca menciona la existencia de las Autodefensas Unidas del Valle (AUV), las Rondas Campesinas Populares (RCP) y las Águilas Negras. En Buenaventura se habla del rearme en barrios como San Luís, El Progreso, Las Palmas, AR9, El Cristal, Rockefeller y Pampalinda.

Entre marzo y junio de 2007 se intensifican los hechos de violencia principalmente en los barrios de presunta presencia paramilitar. En marzo se producen una serie de atentados, según las autoridades, en rechazo a la visita del presidente de Estados Unidos a Colombia, George W. Bush y el aniversario de la muerte de Manuel Cepeda Vargas. En abril y mayo, se intensifican los asesinatos, las desapariciones y enfrentamientos con armas de largo alcance en áreas cercanas al Comando del Distrito Especial de Policía en el que participan un número importante de combatientes. La situación se torna tan complicada que se reportan desplazamientos internos de personas que habitan en los barrios Bellavista, Olímpico, Pampalinda y El Cristal. La Fuerza Pública realiza algunas capturas y decomisos menores de droga, con la particularidad de que en muchas ocasiones involucran a desmovilizados de las Farc y las Auc. A finales de mayo, relevan nuevamente al comandante de Policía y plantean la posibilidad de convertir el Distrito Especial en una regional con jurisdicción sobre otros municipios del Pacífico.

En momentos de intensificación del conflicto armado, la sociedad civil se manifiesta promoviendo manifestaciones que piden el respeto a los Derechos Humanos y un cese a las acciones violentas por parte de los grupos armados. El 31 de mayo de 2007 más de dos mil personas, entre ellos cerca de 30 organizaciones civiles rurales y urbanas, marchan por las calles de la ciudad. Esta manifestación sirvió de antesala a la reunión de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República que ante las quejas de la población decidió crear una delegación para recoger diariamente violaciones de tales derechos. Miembros de la iglesia nuevamente denuncian presuntos nexos de la fuerza pública con grupos ilegales.

En junio de 2007, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea llevan a cabo una fuerte ofensiva contra el Frente 30 de las Farc en inmediaciones del río Cajambre. Como consecuencia de estas operaciones, es muerto Milton Sierra, alias “J.J”, máximo cabecilla del Frente 30 de las Farc; información que solo es confirmada una semana después de producido el hecho. Además, en la zona del Bajo Calima, el Ejército logra frustrar una emboscada que la Columna Libardo García pretendía efectuar al paso de un camión en el que se transportaba a los uniformados.

Días después, entre el 22 y el 24 del mismo mes, se producen principalmente una serie de explosiones utilizando petardos de bajo poder que parecieran pretender alterar el orden público sin afectar blancos precisos. Solamente una bomba de alto poder es detonada en el corregimiento Juanchaco, produciendo la muerte de dos civiles: una niña de 3 años que jugaba en su escuela y un hombre de 65 años, además de otros heridos. Después de los hechos, el general de la Policía Nacional Oscar Naranjo preside un Consejo de Seguridad, decreta ley seca, toque de queda, ofrece recompensas y aumento de miembros del cuerpo elite antiterrorista. También, el Presidente manifiesta su intención de aumentar el pie de fuerza en Buenaventura y el Ministro de Defensa decide

trasladar la Seccional de Inteligencia de la Regional Occidente de la Policía Nacional de Popayán a Buenaventura. De nuevo, esta vez la sociedad civil se manifiesta contra la violencia y la inseguridad con una movilización de más de 7000 personas contando con la participación de numerosas instituciones.

En adelante, los hechos que suceden por lo menos hasta el mes de septiembre de 2007, muestran, por un lado, una capacidad operativa disminuida por parte de las milicias de las Farc que sufren algunas capturas significativas, e incluso se menciona sobre presuntas disidencias internas. Por otra parte, hay un incremento en la capacidad de contención de la fuerza pública que en repetidas ocasiones logra frustrar ataques con explosivos.

En julio de 2007, la intensidad el conflicto en cuanto a hechos de terror y enfrentamientos disminuye considerablemente. Pero en el medio social, el fenómeno de las autodefensas muestra señales de recomposición que son incluso reconocidas por el Alto Consejero Presidencial para los Desmovilizados, Frank Peral; pero desconocidas por las Fuerzas Militares Locales. Las desapariciones y hallazgos de cadáveres en el mar con señales de tortura se incrementan, a la vez que aparecen por primera vez panfletos y volantes alusivos a las Águilas Negras.

Un último periodo de intensificación del conflicto armado se presenta entre septiembre y octubre de 2007. Este lapso de tiempo esta caracterizado por la contienda electoral para elección a corporaciones departamentales, municipales y locales. Dos dinámicas cobran relevancia durante estos dos meses: en primer lugar, expresiones de violencia política mediante atentados dirigidos contra candidatos a la alcaldía y al consejo, pertenecientes a diversos partidos políticos. En segundo lugar, una reactivación de los ataques contra miembros de la Fuerza Pública, mostrando un cambio importante en los medios empleados: el reemplazo de petardos y cargas explosivas por granadas de fragmentación, en parte dado, por la cantidad de artefactos que en periodos pasados lograba desactivar la Fuerza Pública. Pasadas las elecciones, los hechos de conflicto armado disminuyen considerablemente.

En la zona rural, Tropas del Batallón de Alta Montaña llevan a cabo la operación “Omega” en días previos a elecciones. Como consecuencia hallan y destruyen un campamento de la Columna Libardo García en la vereda Las Peñitas. Poco después, el 26 de octubre de 2007, la misma columna móvil de las Farc, coloca una bomba activada a control remoto contra una patrulla de Infantería de Marina en el corregimiento Bajo Calima, dejando 2 militares muertos y 3 heridos, mientras otros 2 civiles mueren y 5 mas resultan heridos. Producto de tal situación, las elecciones en el corregimiento son fuertemente afectadas. Los enfrentamientos en la zona entre Ejército y Farc continúan varios días mas, causando el desplazamiento de población civil al casco urbano de Buenaventura.

La intensificación del conflicto en el Bajo Calima y los combates en inmediaciones del río Raposo entre la Armada y el Frente 30 de las Farc durante el mes de noviembre de 2007, marcan un proceso de desplazamiento del conflicto de la zona urbana a la zona rural, aunque no cesen por completo las acciones en la ciudad, dado por la impresión de que la Fuerza Pública hubo logrado avanzar en el control de las zonas urbanas, que antes eran de claro dominio guerrillero o de grupos de autodefensa, aunque no significa por tanto, una pérdida total de presencia en algunos sectores para ambos, ni la definitiva

eliminación de acciones en lo restante del 2007. Volviendo atrás, a mediados de octubre es asesinado un comerciante. El homicida es capturado y confiesa pertenecer a las Autodefensas Campesinas del Pacífico. A comienzos de noviembre, un grupo de peluqueros denuncian amenazas de muerte por parte de paramilitares que los acusan de ser colaboradores de la guerrilla. Por esos mismos días, un personero estudiantil es hallado muerto en el mar con claras señales de tortura. El 5 de diciembre, hallan a cuatro pescadores muertos a bordo de una lancha a la deriva, cuyos cuerpos, que se encontraban en avanzado estado de descomposición, presentaban impactos de bala y signos de incineración.

Una nota periodista del 16 de diciembre señala aspectos en el siguiente sentido: rearme paramilitar por parte de desmovilizados de las Auc ligados al narcotráfico. En ese mismo sentido, los procesos de desmovilización con guerrilleros parecen correr una suerte similar. Además de varios capturados por reincidir, otros más fueron asesinados en los meses de noviembre y diciembre. Lo anterior, evidencia falencias en el proceso de reinserción que implica dificultades en la superación del conflicto, es decir, una reproducción continua de éste con diferencias de grado en su intensidad, por lo menos en los años aquí analizados.

Hasta aquí solo hemos descrito el escenario de narcotráfico y conflicto armado. Si bien, este es un eje articulador muy importante en la configuración de la sociedad, es importante destacar como en medio de una situación de violencia tan acentuada persisten formas de acción colectiva de carácter societal y organizacional que demandan atención del Estado con diversas motivaciones. Veamos algunas de especial significación en Buenaventura.

3.5.3. Demandas Ciudadanas, Sindicales y Gremiales: diversidad de conflictos.

Entre 2006 y 2007 se han identificado escenarios de acción colectiva alrededor de demandas por servicios públicos, conflictos salariales de empleados públicos y privados de la educación y empleados públicos del sector de la salud, conflictos por procesos de contratación pública para los proyectos etno-educativa, conflictos por regulación del transporte público por parte de taxistas y mototaxistas, conflictos por reubicación de población en terrenos adjudicados para la renovación de la malla vial, protestas de transportadores por trámites en el puerto marítimo y exigencias de comunidades indígenas rurales y comunidades urbanas por políticas y servicios del Estado. Describiremos brevemente cada uno de estos escenarios.

3.5.3.1. Servicios Públicos

Las acciones colectivas por servicios públicos en Buenaventura están relacionadas con exigencias a las empresas prestadoras del servicio por la suspensión del agua y altos costos en la facturación. En marzo y abril de 2006 se presentan dos bloqueos al paso vehicular en los barrios Nueva Frontera y Puerta del Cielo, exigiendo mejor prestación del servicio de acueducto y llegando a negociaciones con la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado e Hidropacífico para el restablecimiento del mismo. En diciembre del mismo año, la Asociación de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios realiza una marcha y una concentración en el Centro Administrativo Municipal donde quemaron los

recibos de facturación en protesta por el alto costo y la mala calidad de los servicios. Esta vez la empresa Hidropacífico niega las razones de la protesta y señala el desperdicio como causante de los altos costos.

3.5.3.2 Salarios, Contrataciones y Recortes Presupuestales

En este escenario convergen principalmente los sindicatos de empleados de la salud y la educación, así como asociaciones de empleados privados de la educación con vínculos con el gobierno local. Las formas de acción colectiva más recurrente son los paros y marchas, pero también aparecen tomas a instalaciones religiosas.

En lo que tiene que ver con el Hospital Departamental de Buenaventura, la serie de acciones colectivas llevadas a cabo por los empleados públicos reunidos bajo el Sindicato Anthoc, respondían a procesos de reformas administrativas inducidas por el Estado frente a cuantiosas deudas financieras por parte del hospital, las cuales implicaban atrasos en el pago de salarios y paros o anuncios de paro por parte de los empleados.

A inicios del 2007, el Gobierno Nacional lleva a cabo un recorte presupuestal. Además es declarada una crisis en la Red Hospitalaria del Valle. Dicha situación llevó por consiguiente a la decisión de reestructurar el hospital. En respuesta a ello, el sindicato realiza una marcha para rechazar el recorte de recursos y se llevan cabo paros por salarios atrasados. En agosto de 2007 se culmina el proceso de reestructuración por medio del retiro voluntario de 28 empleados y la complementación de la fase de jubilación de 20 empleados más.

Alrededor del sector educativo se pueden identificar dos dinámicas de acción colectiva. La primera relacionada con las pruebas para la contratación de personal docente público con enfoque etno-educativo desarrollada entre febrero y junio de 2006. Inicialmente el 7 de febrero, más de 500 docentes afrodescendientes realizan una manifestación frente al Centro Administrativo Municipal para pedir el aplazamiento de las pruebas etno-educativas, alegando no haber sido preparados suficientemente en el tema. La Ministra de Educación se reúne en Buenaventura con voceros de la Alcaldía, voceros de los docentes, líderes de comunidades negras y representantes de la comisión pedagógica nacional, en la que acuerdan realizar las pruebas en el mes de junio.

Días después, el 22 de febrero, cerca de 114 docentes de educación contratada se toman las instalaciones de la Catedral de Buenaventura, exigiendo la renovación de sus contratos, los cuales fueron retirados desde diciembre 2005 por la certificación del municipio que obliga a contrataciones directas con el Estado. A su vez, el resto de docentes del sector público declara un paro parcial indefinido apoyado por el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle, Sutev. En esta ocasión el Ministerio de Educación no atiende las peticiones de los docentes debido a los requisitos legales de los municipios certificados, por lo cual se retiran de la Catedral y reinician actividades.

Días antes a la prueba, un grupo de aproximadamente 150 docentes se toma pacíficamente las instalaciones del Centro Administrativo Municipal con el objetivo de pedir nuevamente el aplazamiento. Sin embargo las pruebas se realizan el día que estaba previsto, el 26 de junio.

La segunda dinámica esta relacionada con exigencias salariales por parte de docentes públicos y privados durante el año 2007. En enero, el Sutev, declara un cese de actividades para presionar el pago de salarios, horas extras, prestaciones sociales y mejoramiento locativo de algunas instituciones. A mediados de año, las instituciones privadas inscritas en el plan de cobertura se declaran en paro en varias ocasiones por el incumplimiento de ocho meses de salario por parte del gobierno municipal, contando con el apoyo de padres de familia y el Sutev. Los sectores oficiales también se vieron afectados por la situación, aunque en menor medida, haciendo eco de la coyuntura nacional de los sectores de la educación. Las negociaciones con el gobierno local mostraban dificultades presupuestales, ya que luego de acuerdos para levantar los paros, el incumplimiento por parte del gobierno local era constante, lo que convocaba a nuevos paros. El Ministerio de Educación decide suspender en julio la cobertura a colegios privados por supuestas irregularidades en la contratación y la evasión de cerca de 20000 estudiantes de las instituciones oficiales. Sin embargo las presiones por el pago de salarios atrasados continuaron en octubre con manifestaciones frente a la Alcaldía, y una más en diciembre con el bloqueo de la carretera Cabal Pombo por cerca de dos horas.

3.5.3.3. Renovación Urbana y Regulaciones al Transporte Público

En el periodo analizado empieza a surgir la preocupación de diversos sectores políticos y económicos por la adecuación de la infraestructura vial que conduce al puerto marítimo como parte de un proceso de agilización del transporte de carga que entra y sale. Una de las principales obras contempladas en esta proyección es la construcción de la vía alterna-interna para evitar la circulación de transporte pesado por el casco urbano y llegar directamente a la zona portuaria. Dicha obra implicaba la expropiación de predios habitados por sectores de población que entran en conflictos con Invias por los precios de compra de los terrenos y las obras de mitigación de impacto. Las principales formas de protesta en este sentido son bloqueos a las obras impidiendo el acceso de maquinaria, al paso que se desarrollan litigios jurídicos. En julio de 2007, luego de acuerdos entre la comunidad, la Alcaldía e Invias, la vía es abierta parcialmente. En octubre del mismo año, una nueva manifestación se realiza bloqueando la vía por el incumplimiento de algunas obras como puentes peatonales.

Por otra parte se identificaron varias acciones colectivas realizadas por gremios de transporte urbano como los taxistas y los mototaxistas. Estas acciones se desarrollan principalmente en respuesta a medidas de regulación al transporte público por parte del gobierno local. En marzo de 2006, el gremio de taxistas lleva a cabo un bloqueo a las principales vías de la ciudad para exigir la derogación de la medida de implantar taxímetros. El gobierno local determina que la decisión última la tomará el Ministerio de Transporte Nacional. Otro factor que motivó un nuevo bloqueo por parte del mismo gremio fue el incremento en el número de vehículos matriculados. Respecto a los mototaxistas, las acciones colectivas también se llevan a cabo mediante bloqueos a las vías. El motivo principal gira alrededor del reconocimiento, o no, por parte de las instituciones como sistema de transporte legal.

3.5.3.4. Comunidades Rurales y Urbanas, Sindicatos y otros sectores: alianzas sociales por el abandono estatal

Un último tipo de acción colectiva que merece una atención especial por su carácter reivindicativo es aquella desarrollada por indígenas y campesinos en alianza con otros sectores sociales como organizaciones comunales y sindicatos, trabajadores informales y otros, que reclaman por políticas sociales del Estado. Dos acciones colectivas de gran impacto se pueden identificar en este sentido: un paro cívico que contempló el bloqueo a la avenida Simón Bolívar realizado el 8 de agosto de 2006 y el bloqueo de la carretera Cabal Pombo el 11 de octubre de 2007.

De ambas acciones se debe destacar la numerosa participación de diversos sectores de la sociedad rural y urbana, la recurrencia a bloquear las principales vías de acceso a Buenaventura como la carretera Cabal Pombo y la Avenida Simón Bolívar que producen la congestión de todo tipo de transporte, esencialmente el comercial y los impactos generados en instancias del Estado local, departamental y nacional.

La importancia de estas acciones colectivas radica principalmente en que por medio de ellas se puede reflejar una situación general de las condiciones sociales de Buenaventura. De manera integrada, se podría decir que en estas movilizaciones la razón principal de la protesta era el abandono estatal. Sin embargo varios hechos en el contexto de Buenaventura, ocurridos durante los dos años analizados, reflejan que para sectores dominantes en ámbitos políticos y económicos mostraron un privilegio creciente con el impulso a varios proyectos en Buenaventura como la conversión del municipio a Distrito Especial Portuario, Industrial, Eco turístico y Biodiverso y la gestión de recursos a nivel nacional para grandes obras de infraestructura como la construcción de la doble calzada Buga-Buenaventura. Es decir, en momentos en que para altos representantes del Estado, Buenaventura cobra una importancia creciente en la agenda, a su vez, sectores diversos de la sociedad reclaman el abandono de éste.

3.5.4. Conclusiones

Buenaventura es un caso paradigmático de lo que ocurre en la Región en términos de las formas de acción colectiva, su estructuración alrededor de varios intereses y conflictos y sus consecuencias en la Sociedad y el Estado. El análisis centrado en solo dos años, hace manifiesta la amplia variedad de formas de acción colectiva y de conflicto, pero también induce a pensar en la relación que se puede presentar entre los distintos escenarios en el espacio de un solo municipio.

El peso de la economía ilegal sobre el municipio es determinante. Parece una historia de no acabar en la que, si bien se puede pensar en organizaciones rectoras del narcotráfico, otros sectores legales é ilegales, generalmente armados, están vinculados con dicha forma de economía. Es cierto que los dos años muestran una importante reacción desde el Estado y sus organismos armados y judiciales, pero la capacidad de recomposición de la organización ilegal es muy grande y pocas cosas indican que la actividad tienda a desaparecer.

La economía ilegal requiere protección y para esto tiene sus propios agentes. Pero también hay grupos armados ilegales que establecen acuerdos con el narcotráfico para

brindar dicha protección y hay una lucha armada a favor y en contra del Estado, es decir, hay un escenario político armado que se puede distinguir, pero que no está desligado de la economía ilegal. En el caso de Buenaventura, el dominio de los territorios, urbanos y rurales, aparece como un tema de conflicto privilegiado. La guerra se ha trasladado a la ciudad y la política de Seguridad Democrática se ha aplicado - como en la comuna 13 de Medellín- mostrando lo que puede hacer el lado armado del Estado, pero también el gran vacío que se presenta por la ausencia del lado institucional y de bienestar del Estado. En los dos años, el Estado gana territorio, desmoviliza actores armados ilegales, golpea la organización guerrillera local, pero no crea ciudadanía. Hay que tener en cuenta que al lado de la confrontación armada, Buenaventura es un caso en el que se hace evidente la guerra sucia y la reaparición de grupos criminales específicos después de procesos de desmovilización. El impacto sobre la población civil es devastador y se deben reconocer las voces de protesta colectiva a favor de la vida y contra la violencia.

En medio de estos dos escenarios esencialmente violentos, Buenaventura muestra una cara de reivindicaciones ciudadanas, vinculadas con sectores sociales específicos y, en algunos casos, con connotaciones étnicas, especialmente afro-colombianas. Sobresale la legitimidad de las demandas (por pagos de salarios, por estabilidad laboral, por condiciones de contratación) y sobresalen formas de acción públicas, aunque con mecanismos de fuerza en algunos casos (tomas de espacios, bloqueos). Los actores demandantes son fuertemente proclives a la negociación y al acuerdo, pero reiteran la falta de cumplimiento a los pactos por parte del Estado que muestra, precisamente, la debilidad de su lado institucional y de bienestar. Los servicios públicos como el Agua, la Educación y la Salud son centrales, así como el transporte. Se debe poner atención al tema de la propiedad urbana en una pugna entre pobladores, constructores de vías y Sociedad Portuaria. Hay una gran contradicción entre el valor económico del Puerto y la calidad de vida de sus habitantes. Finalmente se debe destacar que el municipio es predominantemente de población negra, que algunas acciones colectivas se hacen apelando a rasgos étnicos y que en algunos casos sobresalen alianzas entre comunidades afro-descendientes y campesinos.

CUARTA PARTE: LA REGION, LA ACCION COLECTIVA Y LA CRIMINALIDAD

A lo largo del trabajo ha aparecido con mayor o menor importancia, según el escenario, el tema de la acción colectiva y la criminalidad organizada. Este tema es crucial para nuestra argumentación sobre la configuración de la sociedad regional. Sin embargo, se debe tener en cuenta que éste énfasis no es usual en los estudios sobre acción colectiva que de manera general se centran en movilizaciones y movimientos con una definición de medios “legítimos” y fines aceptados colectivamente (Offe, 1985: 827). El supuesto del presente texto, es que en el estudio de la Región, aparecen formas muy significativas de acción colectiva en las que la “legitimidad” de los medios utilizados por los actores y el acatamiento de fines colectivos, no se pueden distinguir nítidamente como para reunir en categorías distintas las formas de acción colectiva criminales y las no criminales. La legitimidad sobre medios y fines se encuentra en proceso de construcción en los más diversos campos de acción, atravesados por un hecho notable: la criminalidad, específicamente la organizada alrededor de una economía ilegal, no asume un papel “contencioso desde abajo”, sino que juega un papel dominante y en relaciones contradictorias, de amigo y enemigo, con el Estado. *En síntesis, nos encontramos con acciones colectivas no rutinarias, compenetradas con el orden social dominante, que se asocian con la criminalidad organizada y que juegan un rol determinante en la estructuración de la sociedad regional. Esta sociedad es ambivalente en cuanto al apoyo que le brinda a sus fines y comparte, es complaciente, sumisa o víctima de los medios que pone en práctica.*

En este contexto, la radiografía de la acción colectiva regional muestra un Estado que, aunque permeado por la criminalidad, responde con una agotadora y costosa estrategia represiva, centrada en incautaciones, allanamientos a laboratorios, detención de personas y desmantelamiento de organizaciones, cuyos resultados son ambiguos é inciertos en cuanto a controlar la economía ilegal y a fomentar valores y prácticas sociales alternativas. Hay una relación de “falso amigo” o de “enemigo a medias” que incide en el conjunto de la sociedad y la marca específicamente por su modalidad de operación vinculada con formas de violencia extremas. Hay varias justificaciones que se pueden dar a la idea de “falso amigo o enemigo a medias”, pero una muy importante en el plano regional es el surgimiento de grupos para-militares y de autodefensa que dependen también de la economía ilegal para su subsistencia, pero que tienen por objetivo central aniquilar la presencia guerrillera en el territorio -principal enemigo del Estado- sin tener que acogerse a modalidades controladas de desarrollo de la guerra. Aterrorizando y sometiendo a la población.

El análisis regional muestra, más allá de las actividades estatales contra el narcotráfico, alianzas implícitas en el desarrollo del conflicto entre para-militares y fuerzas del Estado contra la guerrilla. Muestra también contradicciones entre fuerzas estatales y para-militares y las dificultades que se presentan a raíz de acuerdos de desmovilización entre Estado y organizaciones para-militares con el resurgimiento y la proliferación de grupos criminales. En medio de este conflicto entre actores armados organizados, aparecen en el escenario una notable cantidad de asesinatos que quedan en el anonimato.

Si bien la criminalidad con base en una economía ilegal es un principio de estructuración de la sociedad regional, nuestro estudio hace la distinción entre este

escenario y aquel dominado por el conflicto político armado que tiene su propia especificidad, aunque mantiene relaciones que pueden llegar a ser muy estrechas y seguramente condicionadas económicamente por el primer escenario. Aunque existen superposiciones entre los territorios del narcotráfico y los de la guerrilla, son territorios que dan lugar tanto a alianzas, como a confrontaciones.

El escenario muestra una especificidad alrededor de un conflicto central entre la guerrilla y las fuerzas estatales, en el que los para-militares juegan un papel importante. Se manifiesta en la confrontación por el dominio territorial y el control de la población: en la costa Pacífica, en la cordillera central -especialmente hacia el Cañón de las Hermosas-, en la zona plana de agricultura comercial y en territorios de ladera predominantemente indígenas. Se debe destacar que la Región muestra claramente la situación del conflicto político armado no solamente en la zona rural, sino también en la urbana, cuyo caso extremo es Buenaventura. El análisis de la acción colectiva en este escenario pone en evidencia los alcances y limitaciones de la política gubernamental de Seguridad Democrática. Allí se reconoce y argumenta que se trata de lograr presencia militar y legitimidad institucional en un territorio aún fragmentado por la presencia de grupos armados. Desde un punto de vista puramente militar, el período muestra en la Región un avance de las fuerzas estatales. Pero aparece la enorme brecha que se presenta entre presencia militar y legitimidad institucional. Parecería que todo está por hacerse en torno al problema del funcionamiento de un Estado que requiere adhesión y respaldo ciudadano. El escenario se caracteriza por formas de acción bélica extremas - algunas claramente terroristas como la utilización de bombas en sitios públicos, los bombardeos en lugares poblados, los campos minados, los enfrentamientos y emboscadas y la afectación de infraestructura. Al lado de enfrentamiento puramente político y armado aparecen modalidades de guerra sucia, de violencia homicida “anónima” -en algunos casos dirigidas contra sectores de población como campesinos e indígenas. Es notable la capacidad de resistencia de la población y, en algunas oportunidades, notable su decisión por movilizarse y denunciar los excesos y violaciones a los derechos Humanos del conflicto armado.

Los estudios tradicionales de acción colectiva han tendido a privilegiar el análisis de la movilización desde el punto de vista del actor dominado que resiste, reta y logra cambiar sus relaciones con las autoridades. Esto lo hemos podido hacer, esencialmente con el escenario de “luchas sociales” y de “luchas indígenas”. Muchas de sus acciones pueden ser consideradas como “criminales” o “delincuenciales” por las autoridades, pero de una manera estructural tanto los medios como los fines de la acción se pueden interpretar como legítimos. Es notable el factor de “justicia” que aparece detrás de reivindicaciones, por el pago al trabajo realizado, por la estabilidad laboral, por servicios públicos adecuados, por la indispensable intervención del Estado en planes y proyectos de desarrollo, o bien la justicia que hay en las manifestaciones de rechazo a las consecuencias inequitativas del reordenamiento territorial o de las obras de infraestructura al desplazar asentamientos de población. También es justificable que, sin disponer de medios asociados con el poder, se opte por modalidades de petición que van desde las manifestaciones, la toma de espacios, los bloqueos o la toma de tierras. En general, las demandas y sus modalidades son propias de un proceso de modernización en el que se puede ver de manera nítida la debilidad del Estado en la respuesta a las demandas ciudadanas. Es una respuesta que privilegia la fuerza y en algunos casos la violencia desmedida. También hay intervenciones que promueven la negociación y el acuerdo, pero, en conjunto, aparece un problema mayúsculo de capacidad de respuesta

estatal, de asignación de recursos, de manejo de los mismos como bien público y de institucionalización del conflicto.

En torno a la “legitimidad” de las luchas sociales, pero considerando que muchas de ellas puedan ser consideradas como “delincuenciales” por el Estado, el estudio regional muestra casos significativos de acciones colectivas que buscan la “legalización” de actividades mantenidas en la informalidad. Las dimensiones de actividades no legales-informales, algunas de ellas vinculadas con dineros lavados en el comercio o en el transporte público y que provienen de la economía ilegal, pueden llegar a ser significativas por los actores y recursos que movilizan y por su objetivo, el cual busca el reconocimiento del Estado.

En la Región sobresale un conjunto de acciones colectivas que tienen una identidad clara, muestran una movilización continuada sobre temas de conflicto específicos, desarrollan formas de acción particulares y muestran comprensión de un campo de conflicto con el Estado y, de manera más general, con su ubicación en la sociedad contemporánea. Es el caso particular de las acciones colectivas de los indígenas que se estudiaron específicamente en la Región, pero que tienen una cobertura mayor por fuera de ella. En medio de un contexto de violencia como el que hemos descrito, de la presencia del narcotráfico y de actores armados como los para-militares y la guerrilla, las acciones colectivas de los indígenas muestran que hacen parte de un movimiento social mayor. Nos limitamos a plantear algunas ideas sobre los casos estudiados.

a) Si bien es cierto que los rasgos de identidad son muy fuertes, los contextos de conflicto armado inciden entre los indígenas, especialmente desde la guerrilla. Se presentan diferenciaciones entre indígenas sobre objetivos inmediatos y modalidades de lucha que tienen que ver con dicha incidencia.

b) Atendiendo a las formas de acción, se puede argumentar que dominan aquellas que buscan y tienen una fuerte legitimidad entre indígenas, igualmente entre otros sectores sociales, especialmente populares, pero que también buscan aceptación nacional e internacional. Estas formas incluyen reuniones de información y acuerdos, manifestaciones públicas, bloqueos, grandes marchas, negociaciones con garantes. Aunque en la confrontación se presentan hechos de violencia y fuerza, éstos se eluden como táctica principal con la excepción de la toma de tierras.

c) Se argumenta el conflicto con temas que tienen que ver con la sobrevivencia, en un sentido económico y también en un sentido socio-cultural. El tema de la tierra y el territorio vuelve a aparecer (en el primer sentido), pero es notable la articulación de un discurso tendiente a la reproducción de un pueblo-sociedad, étnicamente definido. Aquí hay un desarrollo notable en el que los indígenas están buscando viabilidad histórica, en un futuro que se espera sea pactado. De manera muy concreta, se juega el problema del particularismo identitario dentro de un planteamiento que de alguna manera debe ser universalista.

d) En el desarrollo de las acciones aparecen como contradictores la Fuerza Pública, el Gobierno nacional y regional, los grupos de interés dominantes-locales y, de manera importante, otros grupos armados, especialmente la guerrilla. Sobre hechos de fuerza, como la toma de tierras, el Estado interviene con el desalojo y la negociación. Los

indígenas pactan, pero siempre están atentos al cumplimiento de los acuerdos y a justificar nuevas acciones por la ineficiencia estatal.

e) Más allá del impacto en la opinión pública de las acciones colectivas posiblemente articuladas a un movimiento social, pero como consecuencia de éste, aparecen en la región hechos selectivos de violencia contra los indígenas buscando su debilitamiento o desplazamiento de algunos territorios, de manera más notable en el municipio de Florida. Ahora bien, no se pueden hacer afirmaciones similares a las anteriores y referidas a los indígenas, para el caso de los afrodescendientes. Esto no quiere decir que el elemento étnico no esté presente en la acción colectiva y la movilización, aunque lo está de manera distinto. Por ejemplo, subsumido en acciones “campesinas” como las observadas para el norte del Cauca. En el estudio de caso de Buenaventura aparece con mayor claridad la dimensión étnica de la acción colectiva, articulada estrechamente con reivindicaciones ante el Estado y negociaciones por recursos públicos. Hay un caso notable de unidad de acción entre afrodescendientes, organizaciones comunitarias é indígenas y sobresalen las protestas por la violación a los Derechos Humanos y la inseguridad local.

¿Porqué tanta violencia y modalidades tan degradadas en la Región? En buena medida porque la violencia ha perdido su carácter “instrumental”, se ha compenetrado como modalidad “sustantiva” de la acción y no se doblega ante el poder del Estado. Esto se relaciona estrechamente con la predominancia del crimen organizado, con la perpetuación de una violencia política que no se resuelve, con una sociedad sitiada por el miedo, por un Estado que responde, en primer lugar, con una estrategia militar y, por lo tanto, por la constitución muy débil de un polo de civilidad anudado por un Estado de Derecho fuerte. El rasgo de la violencia como un medio, entre otros, dentro de un conflicto con fines que se pueden legitimar, aparece de manera secundaria. Se destaca más el rasgo del recurso a la violencia “en sí” y a su efecto demostrativo, por la barbarie, sobre la colectividad. Esta es una variación significativa en la percepción de la violencia en los estudios de acción colectiva tradicionales (Tilly, 2003). Desde la perspectiva del Estado, los allanamientos, confiscaciones, detenciones y desmantelamientos de organizaciones son muchos, incluso con formas de negociación y sometimiento, pero las características son las de un conflicto persistentemente violento.

La Región¹⁹ comprende entonces territorios, poblaciones, acciones colectivas y conflictos muy diversos. Es una radiografía de una sociedad mayor que tiene características similares. Muestra las dificultades por las que atraviesa un proceso de modernización, con un peso muy grande de la economía ilegal, que no se construye políticamente ni de manera revolucionaria ni populista, sino que es agenciado desde arriba de manera autoritaria. La violencia se hace rutinaria y bárbara, y la modernidad, esquiva en sus valores é instituciones fundamentales. Hay en la Región, sin embargo, voces, acciones, movilizaciones y en algún caso aportes de movimientos que combinan

¹⁹ A lo largo del trabajo no se ha hecho explícito un concepto de región. En buena medida, más allá de la “definición de trabajo” que agrupa unos municipios, privilegiamos una sociología histórica, alrededor de las ciudades y su *hinterland*, vinculando formas de acumulación, con formas de poder, con tradiciones culturales y de identidad ciudadana (Weber, 1969: 938-1046), en las que el concepto de acción colectiva conflictiva se constituye en el eje analítico de investigación. Sobre el tema de Región é Investigación social hemos podido conocer el interesante texto de Clara Inés García (2009). Habría que estimar si nos podemos ubicar en alguna forma de sociología histórica regional.

identidades clasistas con étnicas, con aquellas que reivindican derechos ciudadanos que son de la mayor significación prospectiva. No sólo por esta diversidad sino también porque puede apartarse de las modalidades violentas tradicionales y ante todo de la violencia *per se*. La Región puede ser un ejemplo de combinación entre intereses particulares y universales que se hace viable y en la que juegan un papel importante los sectores mestizos y educados que aumentan cuantitativamente. El reto si es construir marcos de referencia con medios y fines legítimos que contrarresten la criminalidad.

BIBLIOGRAFÍA

ARCHILA, Mauricio et al (2006). *Conflictos, Poderes é Identidades en el Magdalena Medio (1990- 2001)*, Colciencias CINEP.

GARCIA, Clara Inés (2009). *Universos Socio-espaciales, Procedencias y Destinos*, INER, Universidad de Antioquia - Siglo del Hombre Editores. Medellín. Libro próximo a publicarse.

GONZALEZ G, Fernán, ed (2008). *Hacia la Reconstrucción del País: Desarrollo, Política y Territorio en Regiones afectadas por el Conflicto armado*, ODECOFI, COLCIENCIAS, CINEP, Bogotá.

GONZALEZ, Fernán (2006). *Conflicto Armado, Movilización Social y Construcción de Región en el Magdalena Medio*, en: Mauricio Archila et al. *Supra* (2006)

GUZMAN, Álvaro (2003). “Delincuencia y Violencia: Nación, Región y Ciudad”, en: *Cuatro Ensayos de Coyuntura: Valle y Cauca a finales del siglo XX*, Bogotá, CIDSE-CEREC.

GUZMAN, Álvaro (2007a). “Acción Colectiva y Región: Valle y Cauca (1995-1997)”, en: *Sociedad y Economía*, No. 13, pp. 7-26.

GUZMAN, Álvaro (2007b). *Reflexiones teóricas y metodológicas sobre acción colectiva conflictiva*, Ponencia CLACSO, CIDSE-Univalle, Grupo de Acción Colectiva y Cambio Social. No publicado.

MOORE, Barrington (1973). *Los Orígenes Sociales de la Democracia y de la Dictadura*, Barcelona, Ediciones Península.

OFFE, Claus (1985). “New Social Movements: Challenging the Boundaries of Institutional Politics”, en: *Social Research*. Vol. 52, No. 4, Winter, 1985, pp. 817-868.

PNUD (2003): *El Conflicto: callejón con salida*, Informe Nacional de Desarrollo Humano-Colombia.

TILLY, Charles (2003). *The Politics of Collective Violence*. Cambridge University Press, Cambridge U.K.

TILLY, Charles (1992). *Coerción, Capital y Estados Europeos 990-1990*, Madrid, Alianza Editorial.

TILLY, Charles (1978). *From Mobilization to Revolution*, Addison-Wesley Publishing Co. Reading, Mass.

WEBER, Max (1969). *Economía y Sociedad*. FCE, México.



FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS
CENTRO DE INVESTIGACIONES Y
DOCUMENTACIÓN SOCIOECONÓMICA

Cidse

**UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y
ECONÓMICAS**

**CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DOCUMENTACIÓN
SOCIOECONÓMICA-CIDSE**

**INFORME FINAL DEL PROYECTO:
DESIGUALDADES ÉTNICO RACIALES, ACCIÓN COLECTIVA,
ETNICIDAD Y RESISTENCIA EN EL NORTE DEL CAUCA Y
SUR DEL VALLE
CONVOCATORIA INTERNA DE LA VRI 2006**

**GRUPO DE INVESTIGACIÓN:
ACCIÓN COLECTIVA Y CAMBIO SOCIAL**

PARTE IV

**RASGOS DE LA ACCIÓN BÉLICA DE ACTORES LEGALES E
ILEGALES EN EL NORTE DEL CAUCA Y SUR DEL VALLE**

**Profesor Investigador:
Mario Luna B.**

**Monitor del Proyecto:
Catalina Acosta O.
Melissa Saavedra G.**

CALI, ABRIL DE 2009

LA REGIÓN DEL NORTE DEL CAUCA Y SUR DEL VALLE EXAMINADA SEGÚN LOS RASGOS DEL CONFLICTO ARMADO

Mario Luna Benítez¹
Diciembre de 2008

Introducción

En este capítulo nos preguntamos cómo es posible la integración de la región compuesta por el Sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca desde el punto de vista del conflicto armado y de la violencia que puede estar asociado a su desarrollo, durante el período 2000 – 2006. La selección de estos años es relativamente arbitraria y ha dependido de la disponibilidad de datos en un tiempo relativamente corto para su procesamiento. Sin embargo, es de anotar que dicho período forma parte de una fase avanzada del conflicto armado trazada por los siguientes rasgos: en primer lugar, por los cambios sufridos, desde un poco antes de 1998, en las formas de acción y de organización de la insurgencia de izquierda; en segundo lugar, por el proceso de expansión de los grupos paramilitares, con su arribo al Valle del Cauca y su inserción en el norte Cauca contra la guerrilla, un proceso iniciado a mediados de 1999 (Guzmán, Moreno, 2007 :176); y en tercer lugar, por los cambios impulsados en la acción de las FF. AA. desde 1998.

El período escogido se inicia con los años más fuertes del recrudescimiento de las acciones de la guerrilla que va paralelo a las conversaciones de paz con el gobierno de Andrés Pastrana, y comprende también la puesta en marcha de la política de seguridad democrática del primer gobierno de Uribe Vélez, que habría de cambiar la correlación de fuerzas militares en la región. No sobra advertir que hasta entonces la mayor violencia en nuestra región provenía de las actividades del narcotráfico y de la delincuencia común, junto con el asentamiento de sus agentes en la región y una progresiva expansión de su dominio territorial y de su apropiación de tierras, en particular en el sur del Valle del Cauca en Jamundí y en el norte del Cauca en los municipios de Corinto, Santander de Quilichao y otros situados en los límites de su parte plana del lado de la cordillera central (Guzmán, Moreno, 2007 : 175). Luego, la violencia se intensificará con la concurrencia de todos esos factores mencionados, sobresaliendo la violencia homicida que va paralela a un nuevo impulso de las actividades asociadas a diversas economías ilegales, redobladas en donde ya tenían tradición y expandidas geográficamente hacia la zona montañosa del Pacífico. Nuevas rutas y nuevos corredores del comercio ilegal ingresan como zonas de disputa entre los actores armados legales e ilegales.

El tema de la integración de la región es complejo desde la perspectiva del análisis del conflicto armado y de su impacto. Lo saldaríamos fácilmente si borráramos las fronteras que existen, históricas y políticas, entre los diversos actores armados y los metiéramos en un mismo saco, tal como se ha realizado desde ciertas posiciones políticas e ideológicas o desde la percepción de la gente corriente, o cuando los analistas ponen el énfasis en la confluencia de esos actores en un mismo tipo de actividades ilegales y de relación con la

¹ El autor pertenece al grupo de investigación “Acción colectiva, conflicto y cambio social” del Centro de Investigaciones – Cidse – de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Valle. Este capítulo está basado en el informe del proyecto “Desigualdades étnico raciales, acción colectiva, etnicidad y resistencia en el norte del Cauca y sur del Valle”. El autor agradece la participación de las estudiantes de sociología Catalina Acosta y Melissa Saavedra en la investigación.

población. Pero si tomamos en cuenta dichas diferencias constitutivas el definir la integración de la región se vuelve más difícil.

En el fondo tenemos dos perspectivas en confrontación, no necesariamente excluyentes. Son perspectivas que apuntan a un sentido geopolítico – a veces de geografía militar – y que se sustentan en la acción de los diversos actores armados, dentro de un contexto en el que confluyen formas distintas de entender procesos de modernización y de percibir la desintegración o integración social y política de ciertas tradiciones regionales, a las que están asociadas prácticas de conflicto y resistencia social de la población en su diversidad racial, étnica, social, política y cultural.

La *primera* perspectiva asocia a los paramilitares y a las fuerzas institucionales – agentes del Estado y del mundo privado y de la política – a un nuevo impulso modernizador apoyado directa o indirectamente en los beneficios de las economías ilegales, que ha tenido su principal polo en Cali y actualmente en el norte del Valle, pero que también en forma paralela y quizás confluyente deriva de políticas estatales nacionales, con intereses privados regionales comprometidos, para el desarrollo industrial de municipios ubicados en la zona plana del norte del Cauca y que se resumen en la cobertura jurídica y económica que procede de la aplicación de la ley Páez. Es posible atribuir a esta perspectiva, en los últimos años, una contradicción profunda con la integración social de las comunidades étnicas presentes en la región, indígenas y negros. Los agentes de esta orientación, en el mejor de los casos, expresan su indiferencia por este proceso y apuntalan los mecanismos de la desintegración social comunitaria, sobre todo cuando entran en juego territorialidades necesarias a la supervivencia étnica. La *segunda* perspectiva asocia a las guerrillas dentro de un proyecto virtual de modernización derivado de su imaginario, asentado desde tiempo atrás en la región del norte del Cauca y en especial en municipios que por el centro del Cauca le son colindantes (Inzá, Belalcázar, Silvia, Piendamó y Cajibío²), proyecto que a veces es confluyente y a veces profundamente contradictorio con los proyectos sociales y la perspectiva de vida de sectores diversos de dicha población étnica asentada en la región.

Advirtiendo el peso de esas dos perspectivas, nos preguntamos si el conflicto armado que reúne actores diversos, dado los cambios sufridos en la última época y que los asocia esencialmente al desarrollo de las economías ilegales, unifica las dos subregiones que tendrían sentidos geopolíticos distintos y quizás contrarios, el que está implicado desde el sur del Valle del Cauca y el que viene desde el centro del Cauca. Para resolver la pregunta analizamos el comportamiento de dos dimensiones cruzadas: la violencia homicida y la acción bélica, subdividida ésta entre *directa* (la confrontación entre actores armados) e *indirecta* (la de los actos de terror y de acciones económicas tal la piratería terrestre). Adicionalmente, examinamos el grado de impacto de la violencia y la acción de fuerza sobre la población civil y los grupos étnicos³. Nuestra hipótesis es que estas dos dimensiones de análisis se hallan distribuidas por su peso estadístico entre las dos

² El corte arbitrario que simplemente selecciona los municipios del norte del Cauca y los incluye en nuestra región, realiza una separación brusca de las relaciones geopolíticas e históricas de Jambaló y Toribio, en términos de insurgencia armada de izquierda, con los municipios mencionados del centro del Cauca y con aquellos que son colindantes y asociados a la guerrilla del lado del Tolima y del Huila. Igualmente sucede si se desligan municipios de la zona occidental del norte del Cauca de un eje actual articulador del conflicto como es el municipio de El Tambo. En ambos cortes todo el análisis quedaría sometido al predominio de los rasgos que se adquieren desde la perspectiva del sur del Valle.

³ En este aspecto aún no definimos que el conflicto armado en la subregión pueda ser asimilado dentro de la hipótesis de Kalyvas que indica que la principal afectada de manera intencional en las guerras civiles contemporáneas sea la población civil (Kalyvas, 2001).

subregiones geopolíticas mencionadas, aunque debemos decir que la primera tiende a cobijar al menos la mitad de los municipios del norte del Cauca. Esta hipótesis estadística cuestiona ciertos enfoques que las asocian fuertemente, aunque no podemos extraer al respecto una conclusión alternativa tajante.

De otra forma, el tema de la integración de la región puede ser tratado desde una subdivisión dada por la geografía militar, que definiría diversas zonas y que agruparía en ellas de forma diferente a los municipios comprendidos en la región: zonas santuario, micro regiones del conflicto, zonas de movilidad y comunicación, zonas teatro de operación, corredores estratégicos del conflicto. Los alcances de este análisis, dada la naturaleza de los datos trabajados, es bastante limitada, por lo que apenas la esbozamos. Desde este último enfoque introducimos la descripción de la historia de la violencia política o de otro de tipo de violencia en su forma de asentamiento en la región:

1. La violencia política no es nueva en la región por el costado de la cordillera central que atraviesa y une casi a todos nuestros municipios del sur del Valle y un poco más de la mitad de los del norte del Cauca. Ella siempre ha tenido una complejidad que con el correr de las décadas va en aumento. Antes de los años 60, la propiciaban las luchas entre bandas partidistas, ligadas con autoridades civiles, políticas y militares, locales o regionales, y fue usada en la definición de las disputas electorales y de los conflictos agrarios. Los reductos que sobrevivieron fueron usados por hacendados y empresarios agrícolas como protección de sus dominios o como ampliación de sus tierras frente a una población campesina, negra, mestiza o indígena que tenía a la tierra como su objetivo reivindicativo. El análisis del secuestro del industrial y ex ministro Harold Eder en marzo de 1965 muestra la mayor complejidad adquirida por la violencia política y social en la región⁴.

2. Desde 1955 se asientan en el centro del Cauca, del lado de la cordillera central, y procedentes del Huila y del Tolima, los primeros destacamentos campesinos que disputan con las armas y con una relativa organización el derecho a la tierra y a las actividades agrarias. Ellos van a participar a mediados de los años 60 en la formación de las FARC, en la zona comprendida por Riochiquito y las jurisdicciones de Páez e Inzá. Estas nacen con una nueva orientación política y una intencionalidad militar que esboza una estrategia para la insurgencia de izquierda que supera los derroteros de dichos destacamentos⁵. Así, el Cauca en su parte centro y en el norte ha sido zona histórica de refugio de las FARC, tanto como en el costado de la cordillera central del sur Valle del Cauca, zonas que además sufren implantaciones sucesivas de varias guerrillas, entre ellas el ELN aún vigente.

3. La violencia política, asociada a otro tipo de violencias ligadas al desarrollo de las economías ilegales, y que cuenta con varios actores armados ilegales, es reciente en la cordillera occidental que atraviesa las dos subregiones concernidas. Aunque tiene antecedentes de presencia de las guerrillas desde los años 80 (especialmente el Eln), en su potencialidad actual con nuevos parámetros de definición económica, logística y militar,

⁴ Cometido por las bandas liberales de Aguililla y Tijeras, que circulaban desde el Tolima hacia el Cauca y el Valle, en Caloto. De esa complejidad da cuenta la percepción ambigua y confusa de las instituciones sobre el secuestro, con múltiples atribuciones de autoría, implicando a líderes agrarios, a campesinos y a líderes del MRL de Corinto y Palmira (Cf. Expediente, 1966). Hasta hoy se manipula la versión para atribuirlo a las FARC (conversación con el hijo del mayordomo de la Hacienda de los Eder, mayo de 2004).

⁵ La *Declaración Política* de la reunión central tenida en abril-mayo de 1966 en la que se crearon las FARC, publicada en el periódico *Resistencia* #26 de junio de 1966, muestra un objetivo amplio de alianzas con diversos sectores populares e intelectuales con el fin de gestar la insurrección popular y la toma del poder del Estado (González, 1992: 97-103)

responde a una expansión del conflicto armado. Esta incorporación de la cordillera occidental va en paralelo y al unísono de las modificaciones adquiridas por el conflicto armado del costado de la cordillera central.

4. El paramilitarismo, en las dos cordilleras, es recientemente importado desde el exterior en los municipios de la región. Este tipo inserción da relatividad a la idea de considerar al paramilitarismo como una forma originaria de autodefensa campesina o de las élites frente a la guerrilla, y se asemeja más al ejercicio de una fuerza externa puesta al servicio de grandes intereses, legales e ilegales, ejercida contra una población que en el tiempo ha convivido con la guerrilla y no pocas veces ha sido cooptada políticamente por ésta a partir del conflicto social que hace resistencia a las élites portadoras de esos grandes intereses. Es claro que en el asentamiento del paramilitarismo, algunos sectores políticos y de los militares, ligados a esos intereses, han jugado un cierto papel. No obstante, señalamos que existió un pequeño destacamento de origen campesino, las llamadas autodefensas campesinas de Ortega, que poseyeron un carácter diferente al paramilitarismo llegado de Antioquia y Chocó (Cf. Guzmán y Moreno, 2007).

5. Hay un florecimiento de grupos armados de jóvenes asociados a diversas economías ilegales que disputan el dominio en la zona. Compiten con las milicias urbanas de las FARC situadas en los barrios periféricos y con territorios demarcados. Si desde tiempo atrás existían bandas juveniles ligadas a la pequeña delincuencia, estas adquirieron alcances mayores al aliarse con los paramilitares. Luego con la desmovilización de los grupos paramilitares se profundiza su cambio, pues algunos de esos grupos se aliaron con las FARC mientras antiguos miembros del bloque Calima de las Auc, los reclutados en la zona y otros venidos de afuera que se quedaron, recuperaron sus redes entre la población urbana para disputar de nuevo su poderío en las actividades de la economía ilegal. Es el caso de los Victorinos en el casco urbano de Santander de Quilichao. Además de los milicianos existen otros grupos en Puerto Tejada, que es el foco dinámico que alimenta y articula el gran pandillaje en los municipios de Guachené y Villarrica. Los hay también en Caloto y Padilla. Son grupos con armamento pesado que les da un carácter de mercenarios, con fuertes niveles de autonomía, organización y múltiple cruce de actividades, entre ellas el control de las bandas de atracadores. Podríamos anticipar que dado el predominio étnico negro y de ciertas condiciones de desarrollo económico similar de estos municipios (la presencia del nuevo parque industrial que los convierte en pequeñas ciudades dormitorio de mano de obra exterior), y la confluencia en ellos de este proceso de actores armados y su violencia, parecieran en su conjunto formar una división más de la subregión del norte del Cauca⁶, una especie de zona intermedia del conflicto.

En síntesis, la complejidad de la violencia resalta tres rasgos principales de la región de estudio: primero, en el Cauca las FARC tienen un visible origen histórico y una tradición, y su asentamiento participa en una mediana temporalidad de las varias rupturas estratégicas que se producen en el conflicto armado y que son analizadas por Eric Lair (2004: 107-121). En menor medida sucede igual con el Eln. Este hecho impide reducir la violencia de la insurgencia a una simple lógica instrumental y, por otra parte, permite distinguir en la geopolítica a las dos subregiones analizadas, para luego establecer en ellas la actualidad de distintos tipos de zonas acordes con el uso de categorías analíticas de la geografía militar. Segundo, desde siempre ha habido una variedad de actores ilegales armados, con múltiples interferencias y relaciones de confrontación y cooperación entre sí, incluyendo la Fuerza

⁶ Datos cualitativos obtenidos en la conversación con miembros del Observatorio de la violencia de la Universidad del Cauca (julio de 2008).

pública, que se privatiza al obedecer a designios particulares de orden, local, regional y nacional; esa concurrencia de actores es variable en el tiempo y sufre ciclos de ruptura y reciclaje. La complejidad de la violencia está asociada además a un contexto dinámico de relaciones sociales, económicas y políticas impulsadas por agentes privados locales y regionales (e internacionales) que cooperan o entran en conflicto con los grupos armados. En tercer lugar, si se considera en general como polo desencadenante del conflicto armado a esa presencia histórica de la guerrilla en el Cauca advertimos que, desde la coyuntura y desde otros aspectos estructurales, el eje dinámico actual de los múltiples actores ilegales y de los intereses en juego se ha desplazado hacia el centro del Valle del Cauca. Sabemos que son muchas las acciones ilegales de diverso orden, en el norte del Cauca, que son motivadas bajo orientaciones y exigencias generadas en el Valle y su capital.

De esa manera, no es fácil definir los rasgos del conflicto armado en la región y encerrarlos en una fórmula de las producidas en el mundo político y periodístico en Colombia, y menos predecir a partir de ella su futuro. Por ahora entablemos, como punto de partida de un estudio de más largo aliento del conflicto en la región, un reagrupamiento de sus municipios según sus tendencias más visibles y sus rasgos más ostensibles.

El análisis de la perspectiva general del conflicto armado

Nos aproximamos a la participación de diversos actores en el conflicto armado y en la generación de la violencia en la región, deteniéndonos en particular en la insurgencia armada bajo el presupuesto de que tiene una iniciativa en el desarrollo del conflicto y un interés predominante en el carácter político de la violencia⁷.

El perfil de la violencia producida por el narcotráfico y la delincuencia común ha sido descrito con amplitud en el país. Se tiene mayor definición y claridad sobre su origen, sus rasgos y sus objetivos. En nuestro estudio, advertimos que la violencia directa de estos actores no ingresa en el acumulado estadístico de nuestros datos.

De otra parte, el perfil de los paramilitares y de su violencia tiene el mismo nivel de definición que los anteriores actores ilegales, aunque en nuestro caso siendo una violencia importada en la región aún permanecen ocultos su origen y sus relaciones con los agentes de la economía legal y de las instituciones políticas y militares en la región; el rasgo predominante de su violencia es evidente en sus acciones y está centrado en el homicidio con fines instrumentales, en general respondiendo a las dinámicas de la protección de la economía ilegal y con un sentido político de defensa de la economía de agentes privados legales, de poderes clientelistas regionales y de acompañamiento de la acción institucional militar frente a la guerrilla. Es una acción violenta que en la mayor parte de los hechos producidos en la región ha sido selectiva y sicarial, aunque se produjo también como una acción violenta colectiva de sus destacamentos sobre la población civil cuyo resultado fueron masacres y desplazamientos masivos.

No nos detenemos aquí en las formas de inserción y de acción en la región, en la expansión lograda, en los intereses, en las relaciones políticas y dinámicas económicas y sociales de los paramilitares, pues tomamos en cuenta el reciente diagnóstico realizado en el artículo

⁷ Definimos lo político por el tener una estrategia frente al poder y el Estado, pero esencialmente porque en ella exista un tipo de relación imaginada y practicada con sectores de la población civil, estratificada desde el punto de vista de clase y otras categorías de división social, como la étnica cultural.

ya citado de Guzmán y Moreno (2007). Basta destacar aquí, por un lado, que parte del carácter político de la acción paramilitar está centrada en la contención de la adhesión de la población civil a la guerrilla, por medio del terror y la amenaza, sin que en su lógica estratégica haya estado implícita una defensa generalizada de los intereses populares con miras a su desarrollo como poder político y social (a pesar de que hizo uso instrumental de situaciones difíciles de sectores de la población frente a la guerrilla y los enlazara en la idea de que eran defensores de los colombianos y de la patria, un discurso imaginario encubridor de sus verdaderos intereses); por otro lado, que el paramilitarismo desarrolla una violencia instrumental para sustentar intereses propios o ajenos en la economía legal o ilegal, de lo que es un síntoma su permanencia en la parte plana de los municipios de la región y en sectores rurales que hacen parte de la defensa de corredores estratégicos para la economía ilegal; en ambos casos los paramilitares han atacado expresiones de conflicto social producidas por indígenas y negros que han afectado a intereses privados legales e ilegales (el caso de las invasiones de fincas de la zona plana o ubicadas en la primeras planicies montañosas); concomitantemente su lógica estratégica política es la inserción institucional de dichos intereses dentro de la economía legal y la sociedad establecida, sin que riña necesariamente con el poder de las élites civiles y políticas establecidas.

En lo que compete al examen de las guerrillas, retomamos aquí los análisis que han resaltado los cambios producidos en ellas. El enfoque general que centraba a los grupos armados de izquierda en las orientaciones clásicas de la estrategia de la “guerra de guerrillas” y definía sus objetivos en una rebelión que adquiriría su sentido político en la capitalización que la guerrilla haría de la resistencia de las clases populares, rurales y urbanas, con miras a una toma del poder del Estado, fue superado en los análisis recientes de mediados de los años 90, en especial los realizados por los extranjeros.

Desde 1980, la violencia política de las guerrillas se insertaba en un contexto amplio de violencias provenientes de diversos actores, en especial de los vinculados a la economía ilegal. El narcotráfico irrumpía con un gran poderío económico y una gran capacidad de crear ejércitos privados que disputaban el poder de las fuerzas institucionales o se asociaban a ellas penetrándolas para lograr fines comunes. Su dominio llamó la atención sobre los cambios que producía en el escenario de fuerzas que competían en el campo político. Los analistas se hicieron la pregunta, aún vigente, si era posible en ese contexto trazar las fronteras de lo que pertenecía o no a lo político (Pécaut, 1991).

Igualmente nuevos hechos asociados a la actividad guerrillera, en particular de las FARC, marcaron la atención sobre los cambios en el poderío militar de las guerrillas y sobre su asociación a factores no considerados dentro de la orientación clásica de la estrategia de rebelión mencionada. Varios hechos fueron básicos, el movimiento de los colonos cocaleros en el Putumayo respaldado por las FARC, las tomas militares a la base militar de Las Delicias, en 1996, en el Putumayo, y la base de telecomunicaciones en Patascocoy, Nariño, en 1997, estratégica para las operaciones del ejército en el sur, pero también las derrotas tácticas a la Fuerza pública en la ofensiva de las FARC en 1997 contra el puesto militar en La Carpa (Guaviare), y en 1998 el asalto a una brigada móvil bien entrenada en El Billar (Caquetá) y el ataque al complejo policial de Miraflores de nuevo en el Guaviare⁸.

⁸ Los analistas coinciden en retomar estos hechos como evidencia de los cambios políticos (conducentes a negociaciones de paz) y militares (conducentes a nuevas modalidades de accionar táctico y estratégico de la guerrilla y a exigencias de cambio para la Fuerza pública) del conflicto armado, a partir de 1996. Aquí retomamos la síntesis de Lair (2004: 135).

El llamado de atención, se centró primero sobre los factores que incidían en el poder y crecimiento de las guerrillas, que no estaban anclados en una simple inserción en la población civil estratificada en clases sociales, opuestas políticamente, y con sectores de ellas potenciales para apoyar la resistencia armada a partir de sus propios conflictos sociales y/o el desarrollo de sus identidades sociales. Si los cambios fueron notorios en las FARC, los cambios en el ELN no se hicieron esperar. Las primeras superaron su vinculación a las tradiciones de lucha agraria del campesinado cuando conquistaron la adhesión de nuevos sectores agrarios en zonas de frontera agrícola y de colonización, que finalmente terminaron vinculados a los cultivos ilícitos y la economía de la droga. En el caso del ELN, fue clara una nueva reinscripción en el espacio rural, cuando logró conquistar territorios del mismo tipo de zonas que las FARC dominaban, tal el caso de la región del Carare en norte de Santander⁹.

El crecimiento de las guerrillas tenía soportes distintos al adoctrinamiento ideológico en el “trabajo con las bases sociales”, que buscaba una adhesión de la población a sus estrategias políticas, trabajo que había desarrollado en forma constante la oposición comunista en las zonas rurales desde los años 50¹⁰ y con antecedentes en décadas anteriores.

El nuevo tipo de adhesión de las bases sociales fue primero detectado en el intercambio de protección y de seguridad laboral, dado por la guerrilla, y la participación en los ingresos aportados por los cultivos cocaleros, una especie de servicio social y de mercado de trabajo asociados a la dinámica de los grupos armados. Mucho más tarde se sospechó de una inserción directa de la guerrilla en los circuitos de la economía ilegal de la droga. Igualmente el aumento desmedido del secuestro económico orientó sobre las relaciones entre la guerrilla, la población civil y la delincuencia común organizada.

Fue así como cobraron visibilidad las interferencias entre guerrilla, delincuencia común y agentes del narcotráfico, y los apoyos sociales centrados en la capacidad coactiva que contradecía las actividades políticas pacíficas propias de la izquierda. Con el correr de los años 90, ese intercambio de mutuo beneficio entre guerrilla y sectores de la población aclaró que ya no era tan importante la adhesión ideológica de una población estratificada socialmente sino que lo relevante era conquistar los recursos económicos, a costa incluso de ejercer dominios asfixiantes sobre aquella. Asociado a esa dinámica el interés fue puesto en la creación de redes particulares insertadas dentro de la población. Los objetivos de las guerrillas parecieron anteponerse y alejarse de los objetivos de la colectividad de los sectores populares, cuyo caso más visible ha sido el de las reivindicaciones étnicas.

En esa novedad la resistencia política perdió sus referentes sociales y políticos, y el conflicto armado de izquierda aunque creció enormemente se sumergió en la búsqueda de la ampliación de sus propios circuitos económicos. La propia población civil era despojada de sus referentes en el conflicto social y político y de sus propias lógicas de identidad colectiva. Esa nueva dinámica ha parecido privar a la política de toda pertinencia en el conflicto armado. Pero igualmente el crecimiento de los grupos armados en esa forma llamó la atención sobre su propia cohesión o fragmentación en el contexto de tantas interferencias (Pécaut, 1997: 22-23). Esto tendrá una consecuencia general pero puede ser estudiado en la nueva orientación del conflicto insurgente en el Cauca, no ya política y

⁹ Para un estudio de este caso ver la tesis de maestría en sociología de Elsa Medina (Medina, 2008).

¹⁰ La importancia del activismo comunista en el campo es puesto de presente en sus memorias por el viejo dirigente del partido Alvaro Delgado, a tal punto de señalar que el partido comunista era un partido predominantemente campesino (Delgado, 2007: 147-148).

social, sino económica, y en medio de una constelación de intereses de diversos grupos ilegales, volcados hacia nuevos espacios rentables para esos circuitos económicos. Son los corredores hacia Cali y Buenaventura, combinados con el mantenimiento de zonas ligadas a necesidades tradicionales de movilidad, tránsito y asentamiento en los territorios.

Todo este desciframiento puso en duda la continuidad de la violencia propiamente política de izquierda en los años 90, e interrogó sobre su participación cuantitativa y cualitativa en los hechos de la nueva violencia generalizada. La violencia política iba a la deriva hacia una violencia prosaica, esto es, una violencia despojada de sus referentes políticos y sociales significativos e insertada además en un modo de funcionamiento problemático de la sociedad, en la que se crean soportes en diversas redes que influyen a la población y le definen “regulaciones officiosas” (Cf. Pécaut, 1997). Esto explicará la imperiosa necesidad de la medición de la violencia en el nivel de interferencias entre los actores armados y por lo tanto del tratar la violencia de la guerrilla en el contexto más general de las modalidades de la violencia prosaica¹¹.

Un segundo aspecto de los cambios salieron a flote un poco más tarde referidos a la dinámica militar del conflicto armado, cuyo eje serían las modificaciones en el funcionamiento de la guerrilla, notorias a partir de 1996, con la creación de las columnas móviles – la del Cauca llamada Jacobo Arenas asociada al Frente Sexto de las FARC – y la capacidad de acción bélica de mayor envergadura. Estos cambios impactan las estrategias militares y relacionan de manera distinta los asentamientos, las acciones y la movilidad de las guerrillas en los espacios geográficos, que en lo esencial, como ha sido subrayado, superan la concepción clásica de la guerrilla de izquierda (Echandía, 2004a¹²; González et. al., 2003¹³; Pécaut, 2004¹⁴; Lair, 2004). Las nuevas dinámicas espaciales están asociadas a las estrategias de consecución de los recursos como prioridad y al dominio de la perspectiva de una nueva dinámica militar sobre los aspectos políticos y sociales, lo que se ha llamado “el militarismo de la guerrilla”.

¹¹ Pécaut tanto como otros analistas, desde fines de los años 80, señalan por ejemplo que las muertes que obedecen a las acciones directas del conflicto armado y de la violencia política son mucho menores que los homicidios en el conjunto de la violencia.

¹² Echandía muestra la diversificación de la presencia territorial de la guerrilla, su expansión en zonas rurales apartadas y su asentamiento en centros económicos importantes, su creación de una economía de la guerra no dependiente de sus zonas santuario, asentada en dominios territoriales o con autonomía de estos (por ejemplo, la extorsión y el secuestro urbano) y, por lo tanto, muestra su mayor autonomía respecto al apoyo social de la población. Identifica además los cambios en la conducta de los protagonistas y la formulación de sus planes para controlar zonas de elevado valor estratégico. Muestra las fluctuaciones en su capacidad de ofensiva militar y en su acción bélica, y la de otros actores incluyendo la fuerza pública, argumentando ciclos de la intensidad del conflicto.

¹³ Además de distinguir entre acción bélica y acción lesiva del Derecho internacional humanitario, aporta una subdivisión espacial entre macro regiones (que comprenden varios departamentos o sectores de ellos), regiones intermedias del conflicto (zonas de transición) y micro regiones (zonas donde el conflicto es intenso y determinante en una zona más o menos amplia).

¹⁴ Daniel Pécaut (2004) señala una nueva etapa del conflicto donde lo importante no es tanto la apropiación de territorios sino la capacidad de asegurar posiciones claves y obligar al adversario a ceder terreno político, bajo el presupuesto de una mayor autonomía de los actores armados en relación a la población y de su prosecución de metas estratégicas. Se pasa de la importancia de la territorialidad y el control territorial, a la relevancia del *control estratégico* en la que el interés en una zona no es la influencia que controla la población sino *las ventajas* que aseguran la conducción de la guerra. El carácter estratégico deriva de la posición geográfica de un espacio (control de rutas, zona de retaguardia, punto de partida de operaciones militares, movilidad, comunicación etc.). Agrega el mecanismo de la infiltración territorial (presencia ocasional o capilar en una zona) y la disputa fuerte en las zonas que impiden el fortalecimiento de la territorialidad, planteando en consecuencia una progresiva *desterritorialización* del conflicto donde lo más significativo ocurre por fuera de las zonas de control de cada contrincante.

Pero igualmente estas nuevas dinámicas espaciales implican nuevas dimensiones del conflicto armado, lo que se ha dado en llamar la disputa territorial de diverso orden y frente a la cual la población civil involucrada es puesta en el plano de la confianza y la desconfianza frente a los actores armados en medio de situaciones intensas del riesgo creado por esas disputas. En cuanto al aspecto político referido a la adhesión de la población, el cálculo instrumental impera y no pocas veces el uso de la coacción y del terror obliga a adhesiones pasajeras o permanentes, implicando una nueva forma de dominio sobre la población civil (Cf. Pécaut, 1997: 23).

Estas nuevas alternativas de enfoque para el análisis del conflicto armado en Colombia tienen confirmaciones y reservas para su aplicación general, en el tiempo y en el espacio, a todas las situaciones de la dinámica de las guerrillas, de sus relaciones de cooperación o antagonismo con otros actores armados, y de sus confrontaciones con el Estado. Su eficacia analítica depende de coordenadas históricas – sociales, políticas, económicas, de la evolución misma de los actores armados – en los diversos contextos locales y regionales. Esa perspectiva nueva de análisis para el caso que nos ocupa, el norte del Cauca y sur del Valle, debe ponerse a prueba por la dinámica propia de los acontecimientos del conflicto en la región. Las situaciones que quizás se acomoden más a la novedad del enfoque contemporáneo son las de los municipios de Buenaventura y Jamundí, recientemente ingresados a las lógicas del conflicto armado con sus múltiples agentes e interferencias entre los agentes, y al parecer, recientemente, algunos municipios de la zona plana del norte del Cauca, como Guachené, Villarrica y Puerto Tejada, para no hablar de Santander de Quilichao, sumergido en la violencia prosaica pero con ciertas tradiciones históricas de insurgencia armada en su parte montañosa.

La relación entre la violencia y el conflicto armado

En Colombia se ha relevado una conexión entre la violencia (léase homicidio, secuestro...) y la presencia de actores armados, nacida de la sobre posición de la cartografía de ambos tipos de indicadores (Echandía, 1999). Aunque parece viable su aplicación en nuestras subregiones, tenemos dificultad para asumir la hipótesis argumentada en dicha conexión de que existen “mecanismos de contagio”¹⁵ entre la violencia y el conflicto armado, argumentada en la correlación establecida entre este último y el desarrollo de las actividades delincuenciales, bajo el presupuesto de que éstas aumentan o disminuyen según el conflicto armado aumente o disminuya. La correlación dependería además de la menor o mayor política de contención pública a toda actividad ilegal¹⁶, un efecto que ha sido examinado como novedad en la coyuntura reciente (Sánchez et. al, 2006: 88-98).

La dificultad radica en que esa relación de aproximación cartográfica no precisa en el detalle las participaciones en la violencia homicida de unos y otros actores armados,

¹⁵ Relocalización, difusión espacial y difusión jerárquica son algunas de las nociones que definen los patrones de la expansión de la violencia señalados en el libro de Fabio Sánchez et. al (2006: 89).

¹⁶ Alejandro Gaviria en el prólogo al libro citado de Fabio Sánchez et al., reivindica la eficacia de la política pública de represión a la criminalidad y a la acción armada ilegal para disminuir la violencia, resaltando que ella es tratable y reversible. Su apreciación no toma en cuenta que esa política concentra los índices de violencia en un principio y solo causa deflaciones posteriores como podremos ver en algunos municipios de nuestra región. Olvida además que dicha contención institucional se ha acompañado de actores privados violentos y que va de la mano con la censura pública en la publicación de las acciones institucionales perjudiciales a la población. Ambos aspectos producen el subregistro oficial de las muertes.

legales e ilegales, ni sus interferencias y asimilaciones, ni la variabilidad que pueda haber de la presencia y el dominio de determinado actor armado en ciertas zonas. Sabemos eso sí que la medición es más cercana en la percepción de los afectados de la violencia (veremos el caso de los indígenas tan relevante en el norte Cauca y sur del Valle), aunque es poco relevada por los estudiosos debido a que suponen imprecisión estadística en el registro y una cierta ideologización que acompaña su presentación. Pero advertimos también que no necesariamente la acción bélica, directa o indirecta, ha de ser la que estrecha relaciones con la muerte y la agresión contra el DIH, pues depende del tipo de actor, de sus dinámicas cotidianas y de sus circunstancias en la consecución de ciertos objetivos tácticos o estratégicos. En este sentido existen debilidades para registrar y medir las muertes que se producen en la población civil en las zonas teatro de operaciones bélicas. Es también débil la medición del impacto que tiene la resistencia indígena sobre la acción bélica de la Fuerza pública, conociéndose más los rasgos y los efectos de su contención a la acción bélica de la insurgencia armada.

El comportamiento del homicidio en nuestra región

Comenzamos por examinar las cifras absolutas y las tasas de homicidio en el conjunto de nuestra región, comprendidas por el total de eventos en el sur del Valle y en el norte del Cauca, entre 2000 y 2006. Se trata del homicidio asociado a la presencia y la acción de los actores armados, esto es, bandas relacionadas con el narcotráfico, guerrilla, paramilitares, fuerzas armadas institucionales. La fuente básica es la base de datos del Observatorio de la vicepresidencia de la República¹⁷.

Tabla 1. Homicidios y tasas de homicidio en nuestra región 2000-2006

Año Sub-región	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Tasas Sur del Valle	107.6	85.1	100	82.5	77.3	71.3	74.5
Tasas Norte Cauca	63	80.5	46.3	39.8	39.2	54.1	62.5
Tasas Región	89	83.2	77.8	64.8	61.6	64.2	69.6
# Hom. Sur del Valle	557	447	533	446	424	397	419
# Hom. Norte Cauca	233	301	175	152	151	210	245
# Hom. Región	790	748	708	598	575	607	664

Fuente Policía Nacional

Procesado: Observatorio del Programa Presidencia de DDHH y DIH; Vicepresidencia de la República, y el proyecto Región sur del Valle y Norte del Cauca¹⁸

En la tabla #1 tenemos que el número de los homicidios en cifras absolutas en la región sufrieron una disminución a partir del año 2001 hasta el año 2004. Quiere esto decir, que en los dos primeros años de la política de seguridad democrática (iniciada en septiembre del año 2002), en el conjunto de la región, se produjo una disminución de los homicidios y

¹⁷ Los municipios del sur del Valle son: Palmira, Pradera, Florida, Candelaria y Jamundí. Excluimos a Buenaventura por su elevado número de homicidios que, por un lado, la hace merecedora de tener un tratamiento de micro-región del conflicto armado y, por otro lado, distorsiona los datos del conjunto del sur del Valle en relación con el norte del Cauca, haciendo aparecer que la integración es menor entre las dos subregiones, dado ese desequilibrio tan grande a favor de la primera subregión.

¹⁸ Las tasas fueron reelaboradas a partir de las proyecciones de población del proyecto, teniendo como base el censo del 2005, manteniendo los datos de homicidio del Observatorio de la Vicepresidencia. Las tasas del Norte del Cauca estaban subestimadas.

que luego desde el 2005 vuelven a aumentar. Sin embargo, advertimos que la disminución comienza en el último año y medio del gobierno de Andrés Pastrana, período último de las negociaciones de paz con las FARC.

Examinando las subregiones tenemos un dato interesante, que la tendencia a disminuir no es tan lineal, a excepción hecha del sur del Valle, que luego de un sube y baja de los homicidios tiene un descenso a partir del 2003 hasta el 2005, para volver a aumentar en el 2006. No sobra señalar que, después del año 2000, la tendencia en esta subregión será la de tener una cifra menor de homicidios que la alcanzada en ese año inicial.

También es particular el comportamiento del homicidio en el Norte del Cauca: sobresale el aumento que tiene el número de homicidios en el año 2001 (más o menos el segundo año de la permanencia de las Auc en la zona) y luego desciende durante tres años, 2002-2004, para aumentar progresivamente durante el 2005 y el 2006, último año en el que el número de homicidios es mayor que en el año 2000 sin llegar a superar la máxima cifra del 2001. Llama la atención que en el norte del Cauca la cifra de homicidios parece estar asociada al rearme de los grupos de autodefensa, que aunque unas veces funcionan como tales en general están vinculados directamente con la criminalidad de la economía ilegal. También está asociada la última violencia a la emergencia y evolución de las bandas de jóvenes de la población negra de la zona plana, hacia vínculos con la misma gran delincuencia.

Comparando las subregiones por las tasas de homicidio, las tendencias anotadas se expresan en ellas: Si en el sur del Valle tenemos la tasa más alta en el año 2000, que vuelve a reaparecer en ese nivel en el 2002, en el norte del Cauca la más alta está en el 2001. Es claro que el sur del Valle tiene las tasas más altas en todos los años, tendiendo a disminuir, como anotamos, en los años 2005 y 2006 lo que aproxima sus tasas a las del norte del Cauca, pues en estos dos años las de esta subregión tienden a aumentar con notoriedad. Esta tendencia hace más homogénea a la región en estos dos años desde el punto de vista de las tasas de homicidio, que puede traducirse en la idea de un sur del Valle menos violento y un norte del Cauca más violento, recuperando niveles de inicio del período.

Como nuestra finalidad es mostrar la relación de la violencia homicida con el conflicto armado y en especial con la insurgencia guerrillera, vale la pena mencionar cómo la violencia es mayor en nuestra región respecto al oriente-centro del departamento del Cauca donde, por un lado, están los municipios de Páez e Inzá, cercanos a la zona santuario de las FARC en los límites con el Huila, y por otro encontramos el punto de arranque o de llegada, en el municipio de Silvia, del corredor longitudinal de la cordillera central, que va hasta Palmira. Los dos primeros municipios tienen tasas relativamente bajas de homicidio, aunque es mayor la violencia en el municipio de Páez. En Silvia, aunque las tasas de homicidio tienen un comportamiento bajo, similar a nuestros municipios de Toribío y Jambaló que están en la continuidad del corredor, ellas aumentan significativamente a partir del 2001 y en los tres primeros años de la política de seguridad democrática¹⁹.

A tono con la novedad del conflicto armado en la cordillera occidental y sus perfiles contemporáneos, y con el avance de las actividades de la economía ilegal en esa zona, tal el mismo caso de Buenaventura, encontramos que en Piendamó, situado sobre la vía Panamericana, y en la entrada a los corredores de esa cordillera, en Cajibío y El Tambo, las

¹⁹ La referencia es el cuadro #2 del informe de investigación *Rasgos de la acción bélica de actores legales e ilegales en el norte del Cauca y sur del Valle*, Universidad del Valle-Cidse, Cali, agosto del 2008, pp. 13-14.

tasas de homicidio son mayores y, en el caso de este último municipio, sus tasas se corresponden con las de los municipios violentos de nuestra región²⁰.

La violencia homicida asociada al conflicto armado en nuestros municipios

Se trata ahora de hacer una clasificación, teniendo la referencia de la tabla #2, de los municipios de nuestra región, primero reagrupando según nuestras subregiones del sur del Valle y del norte del Cauca y luego concluyendo en una escala general para la región. Mirados en su conjunto, los municipios seleccionados del sur del departamento del Valle, tienen tasas de violencia bastante más altas que los municipios del norte del Cauca.

Tabla 2. Tasas de homicidio municipios de nuestra región 2000-2006

Tasas de homicidio Municipio	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Jamundí	158.9	141	133.8	75.9	113.6	113.6	70.6
Palmira	87	78	83.7	81	70	66	78.9
Florida	82	69	179	156.8	118.4	135.7	131.6
Pradera	91	68.7	70	60.8	45.6	63.5	62.7
C.delaria	87.5	69.6	80.4	51	46	25.6	25
Santander	128	150	85	61	71.7	77	72.4
P. Tejada	87.7	132.6	54	49.5	63	182.7	152.9
Buenos A.	56.8	96.9	8	27.6	19	33.4	62
Corinto	65	120.8	92.7	80	57.4	60	41.9
Miranda	41.5	60.4	45.6	50.7	33.9	24	26.6
Caloto	54	78.4	78.4	40.5	27	48.8	65
Morales	50	58	28.9	28.8	20.5	8	16
Caldono	27	23.4	16.6	13	6.5	6.5	22.5
Jambaló				28.7	7		6.7
Toribío	24	7.9	3.9	3.9	19	15	11
Padilla	22	22	22.7	46	47	60	48
Suárez	33			10	35.7	10.4	36.5
Villarrica							69
Total Región	89	83.2	77.8	64.8	61.6	64.2	69.6

Fuente Policía Nacional

Procesado: Observatorio del Programa Presidencia de DDHH y DIH; Vicepresidencia de la República, y el proyecto Región sur del Valle y Norte del Cauca²¹

Si examinamos cada municipio, destacando sus ciclos, desde el punto de vista de sus estabilidades, picos sobresalientes y caídas de las tasas de homicidio, observamos que Puerto Tejada es el más violento en los dos últimos años de nuestro período, con el pico de violencia más alta en el 2005 (182.7) y la más alta del año 2006 (152.9), mientras en los años anteriores había mantenido tasas de homicidio 70 puntos más bajas, similares a las de

²⁰ Ibid, pp. 13-15

²¹ Las tasas fueron reelaboradas a partir de las proyecciones de población del proyecto manteniendo los datos de homicidio del Observatorio de la Vicepresidencia. Los municipios que estaban con tasas sobrestimadas en los cálculos de este Observatorio fueron (en su gran mayoría 10 a 50 puntos por encima de nuestro cálculo): Jamundí, Buenos Aires, Miranda. Los que estaban muy subestimados (10 a 50 puntos por debajo): Florida, Santander, Puerto Tejada, Padilla. Con una subestimación mucho menor (5 a 10 puntos) Caloto, Morales, Suárez Los que estaban en el mismo nivel al de nuestro cálculo (1 a 4 puntos por debajo en su gran mayoría): Palmira, Pradera, Candelaria, Corinto, Caldono, Jambaló, Toribio, Villarrica. En general todos los nuevos datos conservan la misma tendencia en el tiempo que se había descifrado en nuestro informe de investigación con los datos del Observatorio.

Santander de Quilichao a partir del 2002. Puerto Tejada es un municipio de alta población negra, de desempleo y de trabajadores de la caña. Es el segundo municipio con mayor violencia mortal a medida que avanza el período, asociada al tipo de actores mencionados en la introducción, hasta ocupar el primer lugar en homicidios en la región.

Le sigue Florida con una tasa cercana al pico más alto mencionado (179 homicidios por cien mil habitantes en el año 2002), tasa que se mantiene cercana a ese nivel tan elevado en el 2003 (156.8). La diferencia entre los dos municipios estriba en que Florida en los años posteriores sigue manteniendo tasas de homicidio bien altas²² entre 115 y 135 homicidios por cien mil habitantes, lo que lo hace el más violento de todos durante el período. Puerto Tejada hace el relevo de la violencia en los últimos tiempos, mientras Florida lo es en el momento de la inauguración de la política de seguridad democrática, aunque también al final del periodo acompaña al anterior municipio en el nuevo ascenso de las tasas.

Florida esta situada en el pie de monte de la cordillera central y ha sido centro desde el 2003 de una pugna política en torno a las negociaciones con las FARC y el canje humanitario. En estos años el control del municipio ha estado en manos abiertamente primero de paramilitares y luego de las Fuerzas armadas institucionales. Este hecho revelaría que el avance político y armado de la institucionalidad en la zona no ha garantizado bajas en las tasas de homicidio y que, contrario al sentido publicitado de asociar la violencia con la insurgencia de izquierda, es necesario encontrar otro tipo de conflicto y de actores asociados a ella. Se puede debatir por lo tanto la idea simple de que los agentes de las actividades formales y convencionales se hallan a salvo de la violencia, aunque un análisis más suspicaz se preguntaría sobre la asociación de estos agentes con la presencia de actores armados que producen esos niveles altos de violencia (incluyendo su relación con agentes del sistema político), encubiertos en el hecho de su auto percepción difundida públicamente de que la zona se encuentra en “manos más seguras”. Habría por lo tanto que interrogarse por cuáles son los sectores sociales de la población y la ciudadanía, distintos a esos agentes que están seguros, que serían los que sufren los embates de la violencia homicida.

Al comienzo de la década es Jamundí el que tiene el pico más altos, y hasta el 2002 es emulado por Santander de Quilichao (años de llegada del paramilitarismo). En Jamundí las tasas tienden a caer con fluctuaciones de subidas altas y bajadas a tasas intermedias en los cuatro años siguientes. Los otros tres municipios, Candelaria, Pradera y Palmira, tienen un comportamiento similar en sus tasas de homicidio, en un nivel intermedio de violencia (entre 60 y 90 homicidios por cien mil habitantes), entre el año 2000 y el 2002, aunque a partir del 2003 Palmira comienza a destacarse como el municipio más violento de los tres. A su vez Candelaria y Pradera mantienen ese comportamiento similar hasta el 2003, para luego el primero bajar su nivel en las tasas hasta el 2006, y el segundo, después de una baja en el 2004, volver a un nivel intermedio, su comportamiento estándar durante el período.

La tasa de homicidios alta de ese comienzo de década, en el Norte del Cauca, está centrada en tres municipios, en su orden, Santander de Quilichao, Corinto y Puerto Tejada, este último situado en la parte plana, límites de Valle y Cauca, el primero en el límite entre la zona plana y montañosa de la cordillera central, y el segundo, en los límites de la zona montañosa de la cordillera central. Santander de Quilichao rebasa con creces la tasa promedio de homicidio en la subregión, al tener una tasa de 128 en el año 2000 y de 150 en

²² Los niveles comparativos alto, intermedio y bajo se definen en una escala dentro de los propios datos que tenemos sobre la región y las subregiones.

el 2001; si bien en los años siguientes en este municipio descenderán sus tasas de homicidio, en cerca del 60% (a 61 en el 2003), éstas se mantendrán comparativamente altas según las tasas de los otros municipios estudiados, teniendo Santander tasas que oscilan entre 60 y 75 homicidios por cien mil habitantes.

Buenos Aires tiene tasas intermedias al inicio de la década, con una de 56.8 en el año 2000 y 96.9 para el 2001 (año de masacres paramilitares en su entorno); en el 2002 descenderá en su tasa de homicidios (8), su menor en la década (al parecer la denuncia nacional e internacional de las acciones del paramilitarismo en la zona y luego la captura de un grupo considerable de ellos propiciaron ese descenso). No obstante, en los años siguientes vuelve a subir, con pequeñas oscilaciones, hasta volver a ascender a una tasa intermedia de 62.

Los municipios con menor violencia homicida al comienzo de nuestro período, con bajas tasas durante esos siete años son en su orden: Jambaló, Toribío, Padilla y Suárez. Los dos primeros son municipios de asentamiento y circulación de la insurgencia armada.

Jambaló, municipio de concentración indígena y de organización de resguardos, no tiene homicidios hasta el año 2003 cuando aparece con una tasa baja de 28.7 y disminuye a 7 en el año siguiente, desaparece de nuevo en el 2005 y retornar al mínimo en el 2006. En Toribio, también con alta concentración de indígenas, la tasa de homicidio comienza relativamente baja, 24.1, para llegar al mínimo durante 2001, 2002 y 2003, y cobrar un pequeño ascenso en los años siguientes incluyendo el 2006, pero manteniendo bajas tasas. Igualmente Padilla comienza con una tasa de homicidio baja, 22 en el año 2000, que se mantiene constante hasta el 2002 antes de tomar un relativo ascenso en los años cuatro años siguientes, alrededor del 48, y con un pico de tasa intermedia en el 2005. Finalmente, Suárez comienza la década con una tasa de homicidio relativamente baja si se la compara con la de Santander de Quilichao, un 33.3, tiene años donde desaparecen los homicidios, 2001 y 2002, vuelven a aparecer en el 2003 mostrando tasas similares a la mencionada en los años 2004 y 2006.

Del resto de municipios es Caldone el que posee un comportamiento cercano a estos últimos mencionados con tasas bajas que giran en los años 2000, 2001 y 2006 alrededor de 22.0, y con un ciclo descendente poco a poco entre el 2002 y el 2005.

Los cuatro municipios restantes del Cauca que nos interesan tienen un comportamiento cercano al los de mayores tasas de homicidio, con una violencia casi constante de nivel intermedio en los siete años examinados, a excepción del último municipio entre los que enseguida ordenamos desde el mayor nivel: Corinto, Caloto, Miranda y Morales.

Corinto inicia la década con una tasa alta de homicidio de 65, que asciende para el año 2001 a 120.8, la quinta más elevada de la subregión; mantiene en 2002 y 2003 tasas intermedias del mayor rango, para luego descender a niveles cercanos a la inicial durante los años 2004 y 2005, y seguir bajando en el 2006, hecho que llama la atención pues hemos visto que municipios de la zona plana tienden a aumentar sus tasas. Corinto es un municipio de transición entre una violencia que puede ser potencialmente mayor hacia el Valle modernizado y de mayor dinámica de actividades ilegales (norte del municipio) y una violencia menor hacia el sur en los municipios del Cauca de dominio indígena.

Caloto, situado en la línea que va de Corinto hacia Santander de Quilichao, tiene una menor violencia intermedia al inicio del período que éstos, con una tasa de homicidio de 54

en el 2000, que asciende en los dos años siguientes a 78.4. Aunque tiende a bajar en sus tasas por debajo de las intermedias, sólo desciende significativamente a 27 en el 2004. En el año 2006 recobra un nivel intermedio mayor que su tasa inicial de la década.

Miranda mantiene tasas bajas de homicidio aunque cercanas a las intermedias en el período examinado. Tiene solamente un pico alto en el 2001, 60.4, para luego descender bastante hacia el final del período. Si bien, en cuanto a homicidios, es menos dinámico que Corinto, es también una transición a un municipio más violento que ellos, Florida.

Morales hacia el costado occidental, tiene una violencia menor que los municipios de la cordillera central: en el inicio del período tiene una tasa de 50, y luego de un ascenso notorio en el 2001 desciende bastante año a año hasta llegar a 16 en el 2006.

De Villarrica no se tienen datos hasta el año 2006, cuando aparece una tasa intermedia de 69 homicidios por cien mil habitantes; y Guachené no figura como municipio en la base de datos del Observatorio de la Vicepresidencia. Ya sabemos que están integrados a una zona plana donde el homicidio responde a condiciones del desarrollo de la economía ilegal, más que a actividades propiamente subversivas o de contención a éstas.

En un resumen general vemos que Florida y Jamundí tienen tasas altas de homicidio en el sur del Valle y que en el norte del Cauca del lado de la cordillera central, Santander de Quilichao y Puerto Tejada, a los que podrían sumarse Corinto y en menor medida Caloto, integran una zona de alta violencia en la región. El resto de sus municipios de la parte plana tienen tasas intermedias contrastando todos con los ubicados en la zona indígena montañosa, porque tienen bajas tasas de violencia homicida.

Los rasgos de la acción bélica y sus formas de localización

En la base de datos que estamos analizando apenas se distingue entre la iniciativa de los actores armados ilegales y la iniciativa de la fuerza pública por establecer contactos bélicos de contención sobre la acción ilegal. No contamos para el examen de la acción bélica, por ahora, con diferenciaciones de actores ilegales, ni como se enfrentan entre sí. Sabemos por otros estudios que las guerrillas y las AUC se enfrentaron en menor medida, que prefieren la acción indirecta a través de lo que se denomina la violencia prosaica con finalidades micro políticas del conflicto armado²³, como ya está más o menos establecido, aunque los mismos casos regionales y locales pueden hacer variar esta percepción analítica ya generalizada. Esta situación dominó, al menos en nuestras subregiones, desde 1999 al año 2003 y aún persiste en menor medida. La confrontación entre guerrillas y paramilitares abrió paso desde el año 2004 a un conflicto bélico más directo, que condujo a su vez a la formación de teatros locales de operaciones. Este cambio se acompañó de una iniciativa de la Fuerza pública sobre la insurgencia, casi con exclusividad²⁴, para llegar hasta las zonas santuarios de las FARC y penetrar en esos territorios. Es una iniciativa recrudescida

²³ “Si el prosaísmo se entiende bien con la crueldad, es porque los protagonistas de la violencia casi nunca se enfrentan directamente entre sí. Apenas si se ha asistido a combates entre paramilitares y guerrilleros. Los enfrentamientos se hacen por interpuesta población civil, y es mediante el terror ejercido sobre ella como los protagonistas se esfuerzan en modificar las fronteras de las redes de dominio y de tomar el control de nuevos territorios” (Pécaut, 1997: 26).

²⁴ Al comienzo de la década de los años 2000, la Fuerza pública realizó algunos operativos contra las AUC, por ejemplo, en Buenos Aires y el Pacífico, cuando ya la labor de éstas se encontraba realizada, pero al fin y al cabo se enfrentó con los paramilitares.

más o menos desde mediados del 2007 hasta el presente, sobre lo cual aún no tenemos datos. Esta iniciativa desarrolla formas de guerra más técnica y predominantemente apoyada por acción bélica aérea, aunque falta establecer las formas de acción sobre terreno.

Además en la base de datos se distingue entre distintas modalidades de la acción bélica de los grupos ilegales. Es claro que desde un punto de vista teórico, las distintas modalidades enunciadas puede desarrollarlas cualquier actor armado, incluyendo la delincuencia organizada. Sin embargo, desde el conocimiento cualitativo de los actores es posible apreciar qué modalidades hacen parte dominante del repertorio de acción de un actor o de otro (por ejemplo, las emboscadas, los hostigamientos y los ataques a instalaciones de la Fuerza pública son modalidades más realizadas por la insurgencia armada) mientras que otras son de uso común, por ejemplo, los actos de terrorismo (a pesar de que han sido atribuidos con mayor frecuencia a la insurgencia que a los paramilitares, los usan también bandas del narcotráfico y pandillas delincuenciales), y otras como la masacre o el homicidio selectivo son de predominio de las AUC, sin que la guerrilla se escape de realizarlas; también en la piratería terrestre participan todos, tanto como del secuestro.

Al respecto introduciremos primeros los datos regionales y subregionales más generales de la acción bélica de los actores ilegales y luego clasificaremos a los municipios de cada subregión. Más adelante introduciremos las distintas modalidades de acción para clasificar a los municipios según ella y finalmente presentaremos la iniciativa de la fuerza pública.

La acción bélica en la región y subregiones

La tabla #3 nos muestra el comportamiento de la acción bélica de los actores armados ilegales y arroja datos interesantes sobre su evolución durante el período examinado.

Tabla 3. Distribución de la acción bélica en las subregiones, años 2000-2006

Sub-región	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Total	N=
Sur del Valle	25.6%	5.8%	7.0%	8.1%	5.8%	24.4%	23.3%	100%	86
Norte del Cauca	7.8%	5.3%	7.8%	16.6%	20.7%	26.0%	15.7%	100%	319
Total región	11.6%	5.4%	7.6%	14.8%	17.5%	25.7%	17.3%	100%	405

Fuente Boletines diarios del Das

Procesado: Observatorio del Programa Presidencia de DDHH y DIH; Vicepresidencia de la República, y el proyecto Región sur del Valle y Norte del Cauca

Así tenemos que en la región la acción bélica de los actores armados ilegales tiene un aumento sostenido desde el año 2003, cuando empieza a ser mayor que en el año 2000 y luego de una caída en el 2001 y el 2002. En la región en el año 2005 se concentra un cuarto de todas las acciones del período examinado, es su pico mayor. Pero este comportamiento de esa acción bélica en la región adquiere para las dos subregiones una evolución diferente pero interesante para cada una de ellas: Así en el sur del Valle el pico más alto de concentración de la acción bélica ilegal, está al comienzo de década, en el año 2000, y comienza a decaer ostensiblemente en los cuatro años siguientes, 2001-2004, años que cubren tanto las negociaciones de paz del gobierno de Pastrana como el comienzo de la política de seguridad democrática de Uribe. Pero este descenso se ve cortado en los años 2005 y 2006 cuando recupera prácticamente el mismo nivel del año 2000. Parece que en ese aumento confluyen varios factores, entre ellos, la discusión sobre el despeje de una zona para intercambios humanitarios, en Florida y Pradera, que significó un fuerte

copamiento del ejército en la zona, implicando una respuesta de la guerrilla, y el cambio de la guerrilla en su repliegue táctico después de los avances mayores de las fuerzas institucionales y de la primera desmovilización de las AUC. Una precisión implica un mayor examen de la acción bélica ilegal en nuestros municipios del Valle.

De otra parte, en nuestra subregión del norte del Cauca, la acción bélica de los actores ilegales, presumimos que esencialmente de la guerrilla, aumenta desde el año 2003 un poco más del doble de lo que se producía desde el inicio de la década, 2000-2002, hasta alcanzar un nivel muy elevado en el 2004 y 2005 cuando se triplican prácticamente los eventos bélicos. La acción bélica está distribuida entonces como baja en los años de las negociaciones de paz del gobierno de Andrés Pastrana y como alta luego de haber comenzado la política de seguridad democrática, que llevó a la determinación de introducir de nuevo los cuarteles de policía en los municipios de mayor peso indígena contraviniendo la política de los gobiernos locales y la gobernación. Para el año 2006 se examina un descenso pero al mismo nivel del año 2003.

La siguiente tabla #4 examina la distribución entre el sur del Valle y el norte del Cauca de la acción bélica año por año en el período. La mayor parte de los n=405 eventos de acciones bélicas, casi el 80.0%, se concentra en el norte del Cauca. Pero la evolución en el período en las dos subregiones, comparándolas, muestra un dato interesante.

Tabla 4. Comportamiento año por año de la acción bélica en la región, 2000-2006

Sub-región	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Total
Total sur del Valle	46.8%	22.7%	19.3%	11.7%	7.0%	20.2%	28.6%	21.2%
Total norte del Cauca	53.2%	77.3%	80.7%	88.3%	93.0%	79.8%	71.4%	78.8%
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Total región n=	47	22	31	60	71	104	70	405

Fuente Boletines diarios del Das

Procesado: Observatorio del Programa Presidencia de DDHH y DIH; Vicepresidencia de la República, y el proyecto Región sur del Valle y Norte del Cauca

Lo que observamos, en general, es que las acciones bélicas que se distribuían casi paritariamente en ambas subregiones al comienzo de la década, año 2000, a partir del 2001 en adelante hay un cambio radical al mostrar una mayor intensidad en el norte del Cauca y sucediendo casi todas en esta subregión en el año 2004. Después de este pico más alto de concentración en el norte del Cauca, la acción bélica comienza a aumentar en el sur del Valle sin recuperar el nivel del inicio de década.

Esta distribución es de nuevo un punto de apoyo para examinar las acciones bélicas en las dos subregiones comenzando por el norte del Cauca y clasificar los municipios por su grado de intensidad durante el período.

La acción bélica en los municipios del Norte del Cauca

Entre el año 2000 y 2006 se realizaron en el conjunto de nuestros 14 municipios del norte del Cauca 319 acciones armadas. Este número de acciones corresponde a un 42.9% del total de acciones armadas realizadas en el departamento del Cauca (n=744) en el período examinado. La comparación en este caso es importante porque el departamento del Cauca tiene relevancia histórica en el desarrollo del conflicto armado y gana un lugar por su ubicación geopolítica, una relevancia que ha subido en la medida en que el conflicto

armado adquiere sus perfiles contemporáneos. Sin embargo, ha habido una evolución de dicha participación del norte del Cauca en el período, pues si bien en el año 2000 producía el 28.1% (n=89) de los eventos totales del departamento, esta producción fue ascendiendo poco a poco hasta alcanzar en el 2004 a contener el 55.5% (n=119), y en el 2005 el 56.10% de n=148; para el año 2006 el norte del Cauca aún participa del 50.0% de n=100 acciones en el departamento²⁵. La iniciativa de la guerrilla parece entonces recrudecerse en nuestra subregión durante la puesta en marcha de la seguridad democrática. Puede uno deducir la importancia del conflicto armado en el norte del Cauca, en el examen de este proceso en el suroccidente colombiano y, de acuerdo con ello, la relevancia de caracterizar nuestra región desde el punto de vista de ese conflicto.

Ahora bien, la distribución de las acciones armadas por municipio, en nuestro conjunto subregional, es de la siguiente manera según la Tabla # 5: El municipio que más ha sufrido las acciones por iniciativa de los grupos armados es el de Toribio con 21.6% de n=319, seguido muy de cerca por Caldon con el 18.8% de las acciones y Santander de Quilichao con el 16.3% de las mismas; entre los tres, que forman un triángulo, concentran casi las tres quintas partes de las acciones, un 56.7%, en el norte del Cauca.

Siguen Corinto y Jambaló con una intensidad intermedia de participación en las acciones armadas, 11.3% y 10.7% (n=319). Luego Caloto, de tasas intermedias de homicidio y ubicado en el corredor estratégico de la cordillera central, posee un nivel significativo de participación en las acciones de los grupos armados, el 6.6%. Miranda y Puerto Tejada tienen en su orden un nivel cada vez menor de participación en las acciones de la guerrilla.

Tabla # 5 Las acciones bélicas en los municipios del norte del Cauca, 2000-2006

Municipio	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Total	%
Santan. Q	20.0%	35.3%		7.5%	12.1%	13.2%	14.0%	52	16.3%
Puerto Tejada		11.8%			3.0%	2.4%	10.0%	11	3.4%
Buenos Aires	8.0%			1.9%	3.0%			5	1.6%
Corinto	20.0%	5.9%	12.0%	11.3%	15.1%	8.4%	8.0%	36	11.3%
Miranda	12.0%		16.0%	1.9%	3.0%	4.8%		14	4.4%
Caloto	4.0%	11.8%	16.0%		1.5%	12.0%	6.0%	21	6.6%
Morales						1.2%	8.0%	5	1.6%
Caldono	28.0%	23.5%	8.0%	28.3%	12.1%	19.3%	16.0%	60	18.8%
Jambaló				13.2%	13.6%	14.5%	12.0%	34	10.7%
Toribio		5.9%	4.0%	32.1%	31.8%	24.1%	18.0%	69	21.6%
Padilla					1.5%		6.0%	4	1.2%
Suárez	8.0%			3.8%	1.5%		2.0%	6	1.9%
Villarrica		5.9%			1.5%			2	0.6%
Guachené								0	0%
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%
Total subregional	n=25	n=17	n=25	n=53	n=66	n=83	n=50	319	n=319

Fuente: Boletines diarios del Das

Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República, y el proyecto Región sur del Valle y Norte del Cauca

Los siguientes municipios, Suárez, Buenos Aires, Morales, Padilla y Villarrica, presentan en un orden descendente una baja actividad bélica, entre el 1.9% y el 0.6% (n=319).

²⁵ Datos examinados en el informe de investigación ya citado.

Villarrica es el que presenta la menor dinámica de acciones armadas, dos ocasionales en el período, y sobre Guachené la fuente no trae datos.

Podemos analizar comparativamente la evolución de las acciones armadas, año por año, en los municipios del norte del Cauca (Tabla # 5), destacando algunos hechos: Al comienzo del período en los años 2001 y sobretodo 2002 sobresalen las acciones en Santander de Quilichao, municipio que mantendrá en los últimos tres años del periodo un nivel regular, más bien bajo. También es destacable al inicio de la década el mayor nivel de acciones armadas en Caldono, año 2000, que se reproducirá en el año 2003. Caldono tiende a mantener niveles intermedios de acciones armadas con apenas dos caídas, 2002 y 2004.

Toribio que entre el 2000 y el 2002 había mantenido o una nula o una baja participación en las acciones de los grupos armados sube bruscamente a partir del 2003 esa participación, siendo el de mayor nivel de acciones hasta el año 2006. También Jambaló que hasta el año 2002 había estado pacífico, aumenta su participación en las acciones armadas de la guerrilla en un nivel regular bajo, que se mantendrá constante hasta el 2006.

Corinto desde el comienzo de la década participa en un nivel intermedio de las acciones armadas, con oscilaciones hacia la baja en uno que otro año y en los últimos años del periodo. En ese mismo nivel están hasta el año 2002, siendo bastante menor su actividad bélica, primero Miranda y luego Caloto, municipios que luego merman ostensiblemente la participación en las acciones armadas, aunque Caloto parece encenderse de nuevo en el año 2005. En los otros siete municipios de muy baja participación en la acción bélica es irrelevante su análisis en el tiempo.

Como ya lo hemos señalado en nuestro informe, la comparación con los 7 municipios que en el centro del Cauca limitan con nuestra subregión norte del Cauca es relevante, primero por la presencia histórica de las FARC en el centro oriente del Cauca, segundo por ser el centro occidente del Cauca una zona donde se expresan y reúnen las condiciones más contemporáneas del conflicto armado, y finalmente porque ahí se ubican zonas que le dan cierta continuidad a corredores estratégicos del conflicto cuya prolongación se dirige hacia el norte. Estos 7 municipios tienen una cantidad menor de acciones bélicas (155), cerca de la mitad de las realizadas en el norte del Cauca, que representan el 20.8% de n=744 acciones armadas en todo el Cauca. Esto quiere decir que, sumando las cifras, desde esta parte del centro del Cauca hacia el norte se realizan el 63.7% (n=744) de las acciones bélicas²⁶ en todo este departamento²⁷.

La acción bélica en los municipios del Sur del Valle

En nuestra subregión del Valle del Cauca, la acción bélica es relevante en su orden en Florida y Palmira, con un 40.7% y un 29.1% del total de acciones bélicas (n=86). Jamundí tiene un nivel algo significativo de participación con un 13.9% de ellas, mientras que en su orden Candelaria y Pradera tienen una baja participación (tabla #6).

²⁶ La cifra se vuelve más significativa si se tiene en cuenta que no comprende ni a Popayán ni a todos los demás municipios del centro del Cauca.

²⁷ Cf. Informe de investigación.

Tabla # 6 Las acciones bélicas en los municipios del sur del Valle, 2000-2006

Municipio	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Total	%
Candelaria	13.6%	20.0%		14.3%		4.8%	10.0%	8	9.3%
Florida	22.7%	20.0%	50.0%	42.8%	80.0%	38.0%	55.0%	35	40.7%
Jamundí	27.3%	40.0%	33.3%	28.6%	0	0	5.0%	12	13.9%
Palmira	27.3%	0	16.7%	0	0	52.4%	30.0%	25	29.1%
Pradera	9.1%	20.0%	0	14.3%	20.0%	4.8%	0	6	7.0%
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%
Total sur Valle	22	5	6	7	5	21	20	86	N=86

Fuente: Boletines diarios del Das

Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República, y el proyecto Región sur del Valle y Norte del Cauca

Esta tabla nos muestra que el conflicto armado en el sur del Valle, tiene alguna significación estadística para el primer año de inicio de la década y para los dos últimos del período examinado, dado su concentración de la mayoría de las acciones bélicas de la subregión. En el año 2000, todos los 5 municipios tienen una participación, incluyendo Candelaria y Pradera, pero es bastante significativa en su orden en Jamundí y Palmira, y luego muy cercana la de Florida. Ya para los años 2005 y 2006 las acciones bélicas se concentran en Palmira y Florida; en el primer año, Palmira lleva la delantera, concentrando más de la mitad de la actividad bélica, y en el segundo año se cambian los papeles y Florida pasa al primer plano. Llama la atención que en Jamundí desaparezcan las acciones bélicas hacia el 2005 y reaparezcan mínimamente en el 2006, y que la participación de Candelaria, casi al nivel del año 2000, se restablezca en el último año.

Clasificación de los municipios en el cruce entre homicidios y acción bélica

En este punto reunimos las dos dimensiones examinadas para clasificar los municipios según su cruce y discutir la hipótesis que relaciona nivel de violencia homicida e intensidad del conflicto armado. Esta hipótesis va más allá de puntualizar la ocurrencia de la acción bélica y la comisión de homicidios u otra forma de delito violento. Ella relaciona de manera más general la violencia homicida y *la presencia* de los actores armados en los municipios con su *dominio y control*, porque se advierte que por su movilidad los actores armados pueden cometer acciones violentas por fuera de sus zonas de dominio y control, incluyendo a la Fuerza pública. Es lo que se ha llamado la desterritorialización de la acción de los actores armados y del conflicto. Aceptando esta desterritorialización y manejándola con seriedad, la comprobación de cualquier hipótesis se vuelve más difícil, en especial si se quiere sacar conclusiones por tipo de actor armado. La fuerza de la hipótesis al respecto implicaría mediciones más precisas sobre las presencias geográficas estables y transitorias de los actores armados y de sus redes en los municipios, tanto como de la atribución, a determinados actores, de las acciones bélicas y de los propios homicidios y otros delitos de violencia como secuestro y desapariciones.

En nuestro caso, tenemos serias limitaciones en la base de datos que en el momento manejamos. Sólo por datos cualitativos podemos definir presencias geográficas de los actores armados y relacionarlas con la distribución de la comisión de los homicidios. Por ejemplo, reconocemos por otros estudios a los municipios de mayor presencia paramilitar o

del narcotráfico y los municipios de presencia histórica y de circulación tradicional de la guerrilla. Aunque sabemos que en un mismo municipio puede coincidir la presencia de varios actores armados, reconociendo que la guerrilla se asienta normalmente en sus zonas montañosas y el paramilitarismo en la zona plana o urbana. Respecto a una atribución de la acción bélica sabemos que un elemento del repertorio de esas acciones puede ser más usado por un tipo de actor, tal el caso de las emboscadas, los hostigamientos o ataques a la fuerza pública, de fácil atribución a la guerrilla. Más difícil es medir la movilidad transitoria de los grupos armados para hacer atribuciones más precisas.

Ahora bien, habiendo definido de esa manera la presencia de los actores armados en los municipios y su implicación en las acciones bélicas, nuestra clasificación apenas mostrará que donde hay presencia histórica y actual de la insurgencia armada las tasas de homicidios son menores y también que donde más desarrolla su acción bélica menos violencia homicida se realiza. Y en cuanto a la presencia y acción de actores como los paramilitares y otro tipo de bandas de la delincuencia y la economía ilegal, se revela la asociación con el homicidio. De otra parte, se comprueba una hipótesis al respecto del conflicto armado irregular, que este produce menos muertes en su engranaje propiamente bélico y guerrero.

Inicialmente tenemos un cuadro de clasificación sin distinguir entre acción bélica directa e indirecta, distinción que haremos cuando introduzcamos las modalidades de acción del conflicto armado.

Cuadro # 1 Clasificación de los municipios de las subregiones según nivel de homicidios y acción bélica

	Acción bélica →	Alta	Intermedia	Baja
Subregión	Homicidios			
Sur del Valle	Tasas altas		Florida	Jamundí
Sur del Valle	Tasas intermedias		Palmira	Pradera Candelaria
Sur del Valle	Tasas bajas			
Norte del Cauca	Tasas altas	Santander de Quilichao		Puerto Tejada
Norte del Cauca	Tasas intermedias		Corinto Caloto	Miranda Morales Buenos Aires Villarrica 2006
Norte del Cauca	Tasas bajas	Toribío Caldono	Jambaló	Padilla Suárez

Procesado por el proyecto Región sur del Valle y Norte del Cauca

Al haber excluido a Buenaventura²⁸ el cuadro tiene mayor equilibrio, nos destaca a Santander de Quilichao como el municipio más damnificado por los dos tipos de violencia

²⁸ En las condiciones actuales el alto nivel de las tasas de homicidio tanto como la intensidad de la acción bélica en Buenaventura rebasa con creces los encuadramientos de la tabla, inclusive si se lo compara con los altos niveles de Santander de Quilichao, pues Buenaventura lo supera hasta 3 y 4 veces en los hechos de homicidio y de acción bélica.

y nos permite compararlo, con Toribio y Caldono que tienen el mismo nivel alto de acción bélica, pero con bajas tasas de homicidio. Nos permite igualmente ver algunos extremos, en diagonal en el cuadro, tomando el sentido inverso del cruce de las dos violencias en los municipios de Toribio y Caldono, respecto a Jamundí que tiene altas tasas de homicidio pero con nivel bajo de acción bélica. E igualmente permite comparar a Florida con alta tasa de homicidio y acción bélica intermedia, con Jambaló que tiene bajas tasas de homicidio y el mismo tipo intermedio de acción bélica.

Desde este punto de vista, la asociación entre alta violencia homicida y alta presencia y desarrollo de la iniciativa de acciones armadas de las guerrillas parece no existir, y depender más de casos particulares como en el de Santander de Q, situada en un cruce de caminos sobre la parte plana y la carretera panamericana y con fuerte influencia primero de paramilitares, cuya acción homicida es mayor, y segundo, posterior a la desmovilización de paramilitares, de nuevas bandas asociadas a la delincuencia común, el narcotráfico y la piratería terrestre, que se alimentan de los reinsertados de las AUC y de nuevos miembros jóvenes de las poblaciones. O la situación particular de Florida, donde en el casco urbano han dominado los paramilitares, lo que explicaría la superación del nivel de homicidios sobre el nivel de la acción bélica. O examinar como Jambaló con presencia histórica de las FARC, con nivel intermedio de acción bélica posee bajas tasas de homicidio, donde pudiera explicarse también este desnivel por la presencia de la contención indígena al conflicto armado y en alguna medida por la acción de la gobernación del Cauca, en época de Floro Tunubalá para contener el desarrollo de la violencia.

Una clasificación parecida a la de Jamundí la tiene, en el norte del Cauca, Puerto Tejada, con altos niveles de violencia homicida pero baja acción bélica en ellos.

En el cruce de los intermedios de ambas dimensiones tenemos a Palmira, Corinto y Caloto. En el cruce de la violencia homicida intermedia y la baja acción bélica tenemos a Pradera, Candelaria, Miranda, Villarrica, Buenos Aires y Morales. En el cruce de acción bélica intermedia y bajas tasas de homicidio está Jambaló. Y los menos damnificados de las dos formas de violencia son Padilla y Suárez.

Las modalidades de la acción bélica en nuestra región y subregiones

Respecto a las modalidades de acción ya mencionadas, nosotros introducimos la distinción entre la acción bélica directa (emboscadas, hostigamientos, ataques a instalaciones de la fuerza pública) y la acción bélica indirecta (los ataques de terror), mientras existen otras modalidades del repertorio, que denominamos acción armada económica o política (secuestro, piratería terrestre...), y acción violenta sobre la población y violatoria de los derechos humanos (masacres, homicidios y homicidios selectivos...). En el norte del Cauca se dan 174 acciones de acción bélica directa, 91 de la indirecta, y 54 de la acción económica. Mientras en el sur del Valle se dan 31 acciones de acción bélica directa, 35 de la indirecta, y 20 de la acción económica.

Enseguida mostramos la distribución del tipo de acción bélica en las subregiones para luego reclasificar al conjunto de los municipios de la región según el predominio en ellos de la acción bélica directa o indirecta y su cruce con la violencia homicida.

Tabla #7 La acción bélica según modalidades en el norte del Cauca, 2000-2006

Modalidad	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Total	%
Actos terror	20.0%	5.9%	16.0%	18.9%	19.7%	36.1%	56.0%	91	28.5%
Ataq instal Fp	12.0%	11.8%	4.0%	26.4%	9.1%	19.3%	4.0%	44	13.8%
Emboscadas	20.0%	5.9%	0	5.7%	15.1%	3.6%	2.0%	23	7.2%
Hostigamientos	28.0%	23.5%	44.0%	37.7%	39.4%	26.5%	34.0%	107	33.5%
Piratería ter	20.0%	52.9%	36.0%	11.3%	16.7%	14.5%	4.0%	54	16.9%
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%
Total subregional	25	17	25	53	66	83	50	319	N=319

Fuente: Boletines diarios del Das

Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República, y el proyecto Región sur del Valle y Norte del Cauca

La tabla #7 nos muestra en el norte del Cauca una jerarquía entre las modalidades donde *el hostigamiento* tiene la mayor participación con 33.5% de n=319 acciones; le siguen lo que la fuente clasifica como *actos de terrorismo* con un 28.5%; luego vienen los *actos de piratería terrestre* con 16.9%; los *ataques a instalaciones de la fuerza pública* ocupan un 13.8% de las acciones y finalmente las *emboscadas* el 7.2%. Esta es una distribución diferente a la del departamento del Cauca, en el que los actos de terrorismo, los hostigamientos y la piratería terrestre tienen casi el mismo nivel alto de participación. En esa comparación es destacable que en el norte la piratería terrestre baja ostensiblemente en comparación a todo el departamento, mientras los ataques a instalaciones de la fuerza pública y las emboscadas conservan el mismo nivel²⁹.

Ahora bien, aunque la distribución entre modalidades fue más equitativa en el año 2000, en el norte del Cauca los *hostigamientos* fueron la acción más realizada y aumentan con mucha fuerza su participación dentro del conjunto de las acciones armadas en el 2002 (un 44% de n=25 acciones) y siguen siendo fuertes en el resto de los años examinados, especialmente en el 2003 y el 2004. Esta modalidad no parece bajar para el final de nuestro período a pesar de una pequeña deflación en el 2005. Aunque los *actos clasificados de terrorismo* se han ejecutado en todo el período, con una baja notable en el 2001, aumentan su participación dentro de las acciones armadas con fuerza en los dos últimos años, llegando a ser la mayor modalidad empleada en el 2005 y en el 2006 cuando alcanza un sobresaliente 56.0% (n=50) de las acciones bélicas realizadas. Los *ataques a instalaciones de la fuerza pública* tienen un nivel significativo en el año 2003 (26.4% de un n=53) y luego en el 2005, pero su nivel es fluctuante en el periodo con algunos años de una participación relativamente baja; las *emboscadas* fueron significativas en el año 2000 (20% de n=25) y en el 2004 (15.1% de n=66), y tienden a desaparecer en algunos años; finalmente, la *piratería terrestre* es significativa al comienzo del período examinado, años 2000-2002, siendo la mayor acción realizada en el 2001 (un 52.9% de un n=17) y la segunda en el 2002, pero al parecer es una modalidad que pierde fuerza con la recuperación masiva de la presencia de la fuerza pública en las carreteras a partir del año 2003, y realmente tiende a bajar del todo al final de los años examinados.

En el sur del Valle predominan los *actos de terrorismo*, seguido por los *hostigamientos* y en igual nivel *la piratería terrestre* (tabla #8). Apenas 3 años tienen alguna significación estadística³⁰ en la acción bélica en el sur del Valle del Cauca, 2000, 2005 y 2006. En el primer año los *actos de terror* predominan seguidos por la piratería terrestre y en un nivel

²⁹ Ver informe de investigación ya citado.

³⁰ Los datos de las columnas de los otros años, son importantes desde un punto de vista cualitativo.

un poco más bajo los hostigamientos; los ataques a las instalaciones de la Fuerza pública tienen alguna participación. Esta tendencia se mantiene en el 2005 con diferencias: se acentúan enormemente *los actos de terrorismo* (61.9% de n=21), la piratería baja un poco y los hostigamientos casi desaparecen cediendo su lugar a las emboscadas. La situación cambia para el 2006 pues *los hostigamientos* van adquirir una fuerza que no tenían en el período, ocupando el primer lugar con un considerable 45.0% de las n=20 acciones bélicas del año mientras se reducen los actos de terror a la mitad de su participación en el 2005, la piratería sigue perdiendo fuerza y los ataques a las instalaciones de la fuerza pública se mantienen al mismo nivel del año anterior. Podríamos decir que en el sur del Valle la acción bélica *indirecta* es la dominante, seguido por la acción bélica *económica* y que en el año final del período la acción bélica *directa* (hostigamientos, ataques a instalaciones de la fuerza pública y emboscadas) que en conjunto había tenido en años anteriores una tercera parte aproximada de participación, aumenta ostensiblemente como modalidad en la subregión. Mientras se puede observar en el norte del Cauca, en contraste, que el conjunto de la acción bélica *directa* es la predominante aunque en el último año del período la *indirecta* crece notablemente al sobrepasar el conjunto de la *directa*.

Tabla #8 La acción bélica según modalidades en el sur del Valle, 2000-2006

Modalidad	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Total	%
Actos terror	40.9%	20.0%	33.3%	57.1%		61.9%	30.0%	35	40.7%
Ataq instal Fp	9.1%						10.0%	4	4.6%
Emboscadas			16.7%		40.0%	14.3%		6	7.0%
Hostigamientos	22.7%	20.0%		28.6%	60.0%	4.8%	45.0%	21	24.4%
Piratería ter	27.3%	60.0%	50.0%	14.3%		19.0%	15.0%	20	23.3%
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%
Total subregional	22	5	6	7	5	21	20	86	N=86

Fuente: Boletines diarios del Das

Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República, y el proyecto Región sur del Valle y Norte del Cauca

Podemos pasar ahora a la clasificación de los municipios por el tipo de acción bélica predominante y los cambios que sufre su evolución en el período³¹: En Toribío predomina la acción bélica *directa* 88.4% de n=69, sobresaliendo los *hostigamientos*, acompañados en menor medida en unos años por las *emboscadas* y en otros por *ataques a las instalaciones de la fuerza pública* que se multiplican a partir del 2003 cuando son reubicadas esas instalaciones en las cabeceras municipales por decisión del gobierno central. Los actos de terrorismo aparecen en el 2005 y el 2006, aunque no son dominantes.

Similar al anterior, en Jambaló, predomina ostensiblemente la acción bélica guerrillera *directa*, con un 58.8% de *hostigamientos* y un 32.3% de *ataques a instalaciones de la fuerza pública* (n=34), a lo que se puede sumar un bajo nivel de *emboscadas* a la Fuerza pública, 2.9%. La acción bélica *indirecta* y clandestina, los actos de terrorismo, tiene un bajo nivel de 5.9% y no ha existido la piratería terrestre.

En Corinto todo el tiempo ha estado presente la acción bélica *indirecta*, con disminución hacia los años finales del período, cuando ya comienza a dominar la acción *directa* con

³¹ Cf. Informe de investigación. El lector podrá observar como la acción bélica *indirecta* tiende a asociarse con los municipios de la parte plana y la *directa* a los incrustados en la montaña.

hostigamientos y emboscadas. La piratería terrestre estuvo presente en los años 2003 y 2005. Así el nivel de acción bélica directa alcanza el 50.0% de las acciones de la guerrilla en el municipio (n=36), y el de la indirecta y clandestina de actos de terror alcanza el 33.3%, que tiene un nivel similar al de los hostigamientos. La piratería terrestre tiene una intensidad de 16.7% igual a la de las emboscadas. Ha habido apenas un ataque ocasional a instalaciones de la Fuerza pública en el periodo.

En Caldono dominan las acciones bélicas *indirectas* de los actos de terrorismo (el 38.8% de n=60), acompañadas como hecho significativo de un aumento de la piratería terrestre (15.0%). Sin embargo, la acción bélica *directa* de conjunto tiene una suma un poco menor a la de las dos anteriores, con el 26.7% de hostigamientos y el 16.7% de ataques a instalaciones de la Fuerza pública. Su evolución en el período es como sigue: en el año 2000 las acciones corresponden por parejo a hostigamientos y piratería terrestre mientras que ya para el 2003 van por parejo los ataques a instalaciones de la Fuerza pública y los actos terroristas, y seguirán presentes para el 2005. Desde mediados del periodo los actos de terrorismo son su rasgo principal, como sucede en Santander de Quilichao.

En Caloto es relativamente alto el nivel de la acción *indirecta* del terrorismo, aunque no tan alto como en Caldono, acompañada de un mayor nivel de acción económica, la piratería terrestre con un 23.8% (n=21). Los actos de terrorismo y los hostigamientos van a la par, cada modalidad participa con un 28.6% de ese total de acciones, pero tiene un nivel significativo de emboscadas, el 14.3%. Tiene un ocasional ataque a instalaciones de la fuerza pública. El nivel de la acción bélica *directa* es menor en comparación con Jambaló. En todo el período ha habido acción económica, en el 2005 aparece con fuerza la acción *indirecta* terrorista, y los hostigamientos y las emboscadas están presentes a lo largo del período con fluctuaciones a la baja.

Algo similar a Caloto sucede en Santander, pero con mayor intensidad, donde predomina la acción bélica *indirecta* de los actos de terrorismo, el 38.5% de n=52, que va de la mano con la acción económica de la piratería terrestre, el 36.5%. La acción bélica *directa* con los hostigamientos a la Fuerza pública tienen un relativo nivel intermedio, 17.3%, acompañada de un bajo nivel de emboscadas, 5.8%, y de un ocasional ataque a las instalaciones de la Fuerza pública. Su evolución en el tiempo es así: en los tres primeros años sobresale la acción económica de la piratería terrestre, a la que se le suman los hostigamientos en el 2002. Luego del 2003 comienzan a elevarse año a año los actos de terrorismo. Santander tuvo un nivel regular, más bien bajo, de acciones bélicas *directas* durante el período.

Sabemos que en Miranda y Puerto Tejada la acción bélica es menor. En Miranda la mayor parte de ese número pequeño de acciones son *hostigamientos* a los militares y piratería terrestre (ésta en los años intermedios), y luego en su orden participan los actos terroristas (aparecen el 2002) y los ataques a instalaciones militares, mientras es ocasional la práctica de la emboscada. La acción bélica *directa* tiene presencia a lo largo del período sin que su cantidad sea muy significativa. Mientras en Puerto Tejada no hay acción bélica *directa*, más de la mitad de las pocas acciones armadas son de piratería terrestre 54.5% (n=11), y el resto son actos clasificados de terroristas por la fuente, el 45.4%.

En Suárez, Buenos Aires, Morales, Padilla, la acción bélica es casi inexistente. En Suárez los pocos hechos corresponden a la *indirecta* de los actos de terror y apenas se presentan algunas emboscadas y los ataques a instalaciones de la Fuerza pública, no existen además

eventos de piratería terrestre. En Buenos Aires, los pocos eventos son en su mayoría acción bélica *directa*, mientras en Morales es la *indirecta*, tanto como en Padilla en su mayoría.

Consideremos en la misma forma los municipios del sur del Valle del Cauca. En Florida es significativa una distribución equitativa de sus n=35 acciones bélicas en todo el período aunque se concentran un poco en los últimos tres años; dominan los *actos de terrorismo*, con un 37.1% (n=35), modalidad competida por los *hostigamientos*, con un 31.4%; es destacable la participación de la piratería terrestre, un 20.0%. Los *actos de terror* se presentan en todo el período, con mínimas dosis en su comienzo y una ausencia en el 2004, seguramente cuando se habló del despeje del municipio para el acuerdo humanitario, para luego intensificarse en el 2005 y 2006. Los *hostigamientos* están ausentes entre el 2000 y el 2002, años de conversaciones de paz, y casi ausentes entre el 2003 y el 2005, pero tienen una significación mayor en el 2006. En síntesis, hay un predominio de la acción bélica *indirecta* sumada la acción económica.

Palmira concentra en los dos últimos años sus acciones armadas, en particular en el 2005, aunque también las hubo en el 2000 el mismo nivel apreciable de participación que en el 2006³². Entre las n=25 acciones predomina la acción bélica *indirecta* de los actos de terror a la que se suma la acción económica; le sigue de cerca el conjunto de la acción bélica directa. Los actos de terror se producen en el 2000 y en el 2005 con alguna significación.

En Jamundí la casi totalidad de las pocas acciones armadas de grupos ilegales (n=12) se realizan antes del 2003, y el 50% de ellas se realizaron en el año 2000. Actos de terror, hostigamientos y piratería terrestre son en su orden las modalidades que se presentan con escasa diferencia de participación entre ellas.

En Candelaria las pocas acciones están distribuidas a lo largo del período, y son con exclusividad, primero, acciones de piratería terrestre, realizadas al comienzo y al final del período, segundo, los actos de terrorismo, en los años 2000 y 2003, después desaparecen. En Pradera las pocas acciones que se presentan también están distribuidas a lo largo del periodo, y son de toda modalidad, a excepción de las emboscadas, dispersas en el tiempo.

Clasificación de los municipios en el cruce entre homicidios y tipo de acción bélica

El reclasificar a los municipios según el tipo de acción bélica nos permite elaborar el siguiente cuadro #2 que nos muestra especificaciones interesantes de la clasificación realizada en el cuadro #1, en su lectura por filas. Su lectura nos indica que si hay alguna asociación entre violencia homicida y acción bélica, esta última tendría carácter de *indirecta* y de acción *económica*: así todos los municipios que tienen altas tasas de homicidio, tienen ese tipo de asociación, a excepción de Buenos Aires, y ya sabemos que la violencia homicida en este último municipio se halla asociada a la presencia del paramilitarismo en el comienzo de la década y luego al final de nuestro período cuando las tasas vuelven a subir están asociadas a la actividad económica ilegal.

³² Esta precisión sobre la casi ausencia de acción bélica, directa o indirecta, en los años 2001-2004, contrasta enormemente con el gran despliegue operativo de la Fuerza pública en el casco urbano de Palmira, en el momento de la discusión del acuerdo humanitario en Florida, que fue con toma y permanencia de los militares en el parque de Bolívar, bajo el pretexto de que las FARC se iban a tomar la ciudad, un dispositivo político puesto en marcha para justificar la negativa al despeje.

Cuadro # 2 Clasificación de los municipios en la región según nivel de homicidios y el tipo de acción bélica

Acción bélica	Alta indirecta y económica	Alta distrib.	Alta directa	Intermedia indirecta y económica	Intermedia distribuida	Intermedia directa	Baja Indirecta	Baja directa
Tasa Hom.								
Altas	Santander de Q.			Florida*			Jamun* Puerto Tejada*	
Intermedia				Caloto Palmira*	Corinto		Candel* Morales	Miranda* Pradera* Buenos Aires
Baja		Caldono	Toribio			Jambaló	Suárez Padilla	

* En Puerto Tejada, Candelaria y Jamundí se acompaña por la acción económica. En Miranda y Pradera se distribuye casi por igual entre la directa y los otros tipos de acción. En Florida y Palmira la acción bélica directa tiene presencia en un poco más y un poco menos del 40%, respectivamente.

Procesado por el proyecto Región sur del Valle y Norte del Cauca

La lectura de la fila de las tasas intermedias de homicidio nos corrobora su misma asociación con el predominio de la acción bélica *indirecta y económica*, como es el caso de Corinto, Miranda y Pradera que tienen una distribución casi paritaria de ese tipo de acción. Lo interesante es que la asociación se revela en todos los municipios de la zona plana, comprendidos aquellos que tienen fuerte composición étnica negra. Finalmente, los municipios que tienen *bajas* tasas de homicidio son aquellos que tienen *alta e intermedia* acción bélica *directa*, Toribio, Caldono y Jambaló, el segundo de los cuales comparte casi paritariamente con las otras modalidades de acción. Sin embargo, se especifica que Suárez y Padilla con bajas tasas de homicidio tienen asociación con la acción bélica *indirecta*.

La definición de los rasgos regionales del conflicto armado

Algunos autores han señalado la importancia de distinguir las acciones propiamente bélicas entre los actores beligerantes y aquellas acciones que violan el derecho internacional humanitario, que son de diverso carácter (González et al, 2003: 98-99). Es esta una distinción importante para establecer los rasgos del conflicto armado en Colombia. No obstante, sería importante refinar un poco más los datos y procesar su cuantificación estadística distinguiendo entre las acciones que afectan con muerte y agresión a la población, de aquellas que afectan los bienes materiales o la acción de organismos humanitarios, o a las personas protegidas, o las producidas por el uso de medios ilícitos de guerra (por ejemplo las minas antipersonales). Es un tipo de registro que normalmente no se sigue. Habría que desagregar además las muertes producidas en el proceso mismo de la acción bélica directa en el teatro de operaciones. Estas distinciones son importantes porque el repertorio de acción de los actores es diferente, o conteniendo los mismos elementos hay variación en su nivel de aplicación. También el estudio mencionado es pertinente para nuestro estudio en su definición de la geografía de la guerra en tres niveles (el macro, el intermedio y el micro) según la dinámica del conflicto a nivel regional, y, por supuesto, la definición de sus interrelaciones (González et al, 2003: 115-191). Sin embargo, en una primera definición de nuestra región se nos escapa la posibilidad de establecer esta clasificación, que implicaría las relaciones más amplias del sur del Valle y del Norte del Cauca con regiones aledañas incluso de los departamentos limítrofes, como por ejemplo, el

Huila y el Tolima, o bien con las regiones del eje cafetero. Sólo Buenaventura podría clasificarse como micro-región en los términos de los autores.

En cuanto a la situación regional del sur occidente colombiano que comprende los departamentos concernidos en este estudio y sus subregiones es sugestivo el análisis de Echandía (2004b). El aspecto central de su enfoque sostiene que la distribución espacial de la actividad armada se corresponde menos a la presencia estable de los grupos irregulares y se relaciona cada vez más con objetivos de carácter estratégico. Formula entonces que los protagonistas han cambiado sus prioridades. Subraya la evolución del conflicto hacia modalidades diferentes del control territorial que mantenía por la fuerza y/o por medios indirectos un dominio sobre una zona y población, al introducir las pugnas por el control estratégico, que es una lucha por las ventajas asociadas a la guerra; entran en disputa por consiguiente el control de importantes corredores estratégicos, el control de zonas militares de avanzada y de repliegue, y el control de recursos económicos.

Lo importante es que Echandía logra descifrar formas de operar diferente de la insurgencia en especial la creación de columnas móviles en respuesta a la estrategia del Estado de crear las brigadas móviles. La insurgencia busca también el salto cualitativo en el desarrollo de la guerra, lo que ha afectado notablemente la situación tradicional del conflicto en el Cauca y en el Valle. También logra identificar zonas de operaciones en disputa que nos interesan en el contexto macro regional que está interrelacionado con las subregiones de norte del Cauca y sur del Valle. Para el último período, a partir de 1999 propone que el Estado ha retomado la iniciativa estratégica, produciendo una intensificación del conflicto; señala que al inicio de la década y en especial entre el 2002 y el 2004 la mayor parte de los combates los proponía la Fuerza Pública, y que a partir del 2003 hay una caída del accionar de la insurgencia, advirtiendo que las FARC mantienen el nivel de acción por insistencia en sabotajes a la infraestructura, el incremento de los hostigamientos, emboscadas y ataques a las instalaciones de la Fuerza pública. El Eln disminuyó su acción bélica y recibió más ataques de la Fuerza pública. Después del 2003, el otro actor ilegal, las AUC, disminuyó sus acciones debido a las negociaciones que entablaron con el gobierno.

De otra parte, esa dinámica del conflicto armado se distribuye más o menos por corredores estratégicos, zonas tradicionales y de “santuario” de la insurgencia y micro regiones de localización de múltiples actores. Por ahora es difícil distinguir zonas que sean teatro de operaciones, pero se pensaría en la zona rural de Caloto y Caldone, a veces la zona rural de Jambaló, pero se requieren datos precisos, cuantitativos y cualitativos, para definirlos, que no los aporta la base de datos examinada. Igualmente, es ya un hecho reconocido que las AUC y la Fuerza pública, a excepción de los batallones de alta montaña, poco a poco instalados en el período, y de sus brigadas móviles, tienden a asentarse en la zona plana mientras las guerrillas escampan y se mueven por la parte montañosa de los municipios. Por eso en el análisis del Observatorio de la vicepresidencia atribuyen el aumento de acciones y violencia al inicio de la década al dominio que comienzan a ejercer las AUC sobre la Vía Panamericana, dándonos de paso la idea de que el punto de inflexión ascendente del homicidio en la zona está en el paso del final de la década de los 90 al comienzo de la del 2000, que es la que nosotros analizamos. Por lo demás será claro que un análisis más profundo de la región podrá en un futuro variar en el detalle la ubicación de los municipios, según una geografía del conflicto (Lair y Sánchez, 2004: 122).

Presentamos entonces aquí una distribución de los municipios según una geografía del conflicto, de la cual forma parte el mapa #1 que contiene una distribución geográfica de los

actores armados, incluyendo la fuerza pública, en el norte del Cauca, subregión que desde un comienzo consideramos como el eje de la propia perspectiva del conflicto armado. Ayudados también por esa distribución visual de los actores armados, reagrupamos los municipios en tres corredores de los cuales señalamos su sentido dentro del contexto de una geografía política y militar un poco más amplia que la región.

1- Los municipios de Jamundí, Padilla, Villarrica, Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Caloto (parte plana), Guachené están concernidos en el corredor de la vía Panamericana que va de Nariño a Valle. Por supuesto está implicada la dirección de Cali-Popayán como ejes administrativos-políticos centrales.

2- Los municipios de Buenos Aires, Suárez y Morales, si bien tienen alguna cercanía con la vía Panamericana (comunicación con Piendamó), están más concernidos en la influencia de los corredores de la cordillera Occidental, donde forman un eje con los municipios de Cajibío y El Tambo, éste último con bifurcaciones hacia la zona noroccidental en el camino de los ríos Naya y San Juan, hacia el Pacífico caucano (a la altura de Timbiquí Cauca, importante por el tráfico de armas y drogas), y hacia el sur de Argelia, Patía, Balboa y el piedemonte de la cordillera Central (zona de enclave cocalero).

3- Caldono, Jambaló, Toribío, Caloto (zona montañosa), Corinto, Miranda, Florida, Pradera y Palmira (zona montañosa), un largo corredor sobre la cordillera central. Candelaria puede entrar en el circuito del corredor, estando unido por las vías de comunicación y siendo cercano a la ruta del río Cauca y del ingreso a la ciudad de Cali. Es claro que se abren varios corredores del lado del Huila y que por Palmira (corregimientos de Chontaduro, la Buitrera y el Arenillo) se puede ingresar a otro corredor que comunica con el Tolima permitiendo el paso hacia el sur oriente y desde ahí hacia el centro del país. Se aclara la persistencia del conflicto en municipios que le dan continuidad a dichos ejes de comunicación y movilidad.

El primer conjunto de esos municipios reagrupados hemos visto ya que tiene implicaciones de alta violencia homicida y acción bélica indirecta y económica, que son municipios de alta participación étnica negra, donde están implicadas actualmente reagrupaciones de distintos actores ilegales vinculados con distintas formas de la economía ilegal. Mirado de norte a Sur marca la pauta Jamundí como puerta de entrada al norte del Cauca y luego Santander de Quilichao como eje central, aunque manda la parada Puerto Tejada para ciertas formas de violencia nacidas en un pequeño subconjunto de municipios.

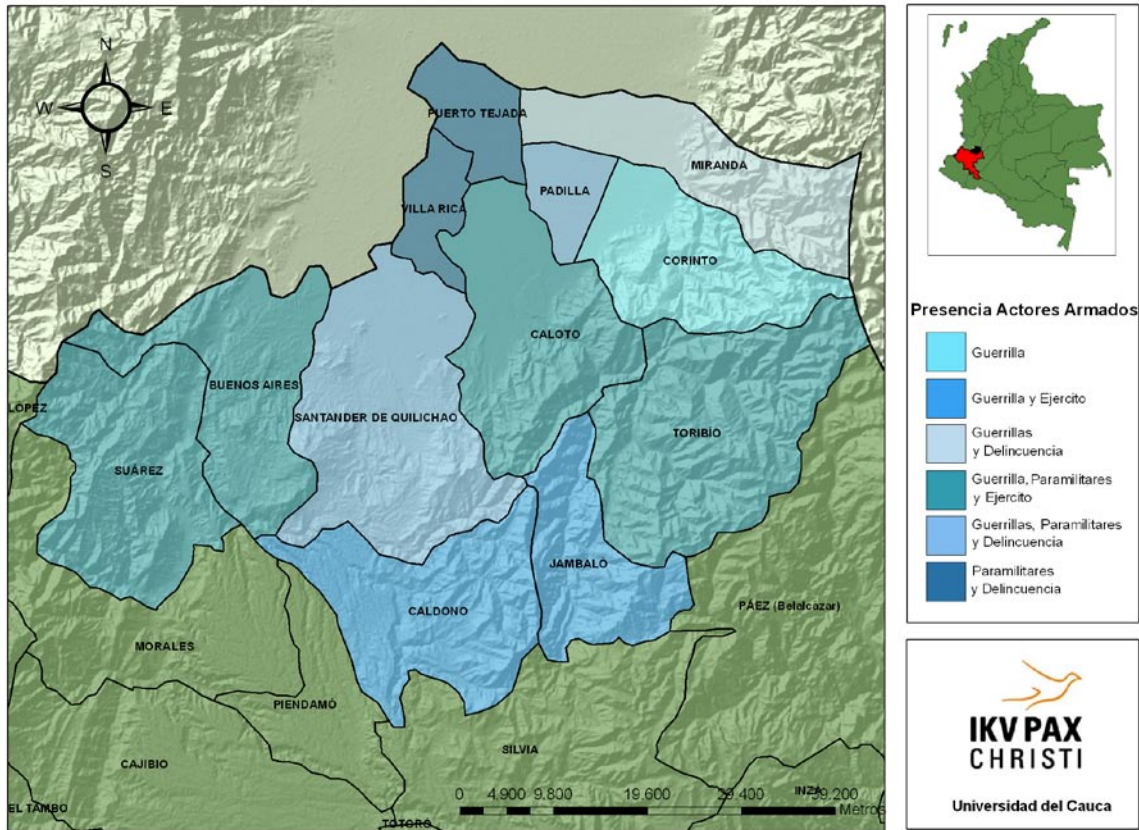
El segundo conjunto, a pesar de ser una de las puertas de entrada a los corredores mencionados, tiene baja violencia homicida y baja asociación con acción bélica indirecta. La excepción es Buenos Aires, altamente damnificado por el homicidio. La ubicación de Morales es el punto donde esos municipios se orientan dentro de una geopolítica y una composición geomilitar más amplia en varias direcciones. Por ejemplo, su relación más cercana con El Tambo, el cuarto municipio más grande de Colombia, de asentamiento más tradicional de las FARC y al comienzo de la década del Eln³³, cuyo dominio desde esos

³³ Las FARC permitieron el asentamiento de una columna que salió, según cálculos con unos dos mil hombres desde el Pacífico sur de Nariño, Barbacoas y otros municipios, ante la arremetida de paramilitares y Fuerza Pública, que llegó diezmada al municipio mencionado y que se reunió con otros reductos del Eln desalojados de la zona de Buenos Aires. Dato cualitativo aportado por los miembros del Observatorio de la violencia de la Universidad del Cauca (entrevistas, julio de 2008).

mismos años es disputado por un destacamento de las AUC, aún presente como Aguilas Negras, que juegan a su vez el rol de bandas o pandillas asociadas al narcotráfico³⁴.

Mapa No. 1 Presencia de Actores Armados en el norte del Cauca.

PRESENCIA DE ACTORES ARMADOS - CAUCA



Fuente: Investigación Democracia Local, Elecciones y Conflicto en el Norte del Cauca y el Centro del Tolima. IKV Pax Christi-Universidad del Cauca

El tercer conjunto es el que sufre las mayores variaciones en los tipos de violencia: en el comienzo mirado el corredor de sur a norte, con zona montañosa y de dominio étnico indígena, los municipios que podemos considerar como “zonas santuario” y tradicionales de la guerrilla tienen alta confrontación bélica directa y baja violencia homicida, mientras en el intermedio del corredor se sufre la inversión hacia una mayor violencia homicida (es una violencia constante en el período de nivel intermedio en Corinto, Miranda, Caloto y acción bélica indirecta y económica intermedias, marcando la pauta Corinto); más hacia el norte aumenta la violencia homicida en Florida y Palmira.

Es de señalar, para investigar más a fondo, el hecho de que los niveles de violencia altos se detengan en Florida y que no se transmitan hacia el lado de Pradera y Candelaria, y si se quiere a la zona rural de Palmira. Es también curioso que siendo el corredor estratégico para la circulación de la guerrilla de las FARC, la violencia no pareciera provenir de este actor, y que en el intermedio de la ruta el nivel de la violencia esté más relacionado con la cercanía con Cali y con la presencia de otros actores armados, incluyendo la presencia de fuerzas institucionales. Esto querría decir que la violencia no procedería directamente de la actividad “política armada” de la guerrilla, sino de otras actividades que podrían estar

³⁴ Cf. Observatorio de la violencia de la Universidad del Cauca (entrevistas, julio de 2008).

asociadas o no a la permanencia de la guerrilla en la zona o de su asociación con otras redes. Igual puede valer para el análisis de los otros corredores.

El sur del Valle, tanto como algunos municipios del norte del Cauca, es la puerta de avance de la modernización de la región, con los cultivos de caña y el asentamiento de diversas industrias, sean o no establecidas bajo la ley Páez. Desde el punto de vista del conflicto armado, estos municipios del Valle representan la continuidad de corredores estratégicos de interés para la guerrilla – en su sentido clásico de tránsito por la cordillera central, o de su asentamiento y circulación más reciente por la cordillera occidental³⁵ – y de interés para las actividades del narcotráfico, incluyendo los cultivos ilícitos, y para el contrabando de diverso carácter. Son tres o más ingredientes que combinados parecen producir una situación de violencia que rebasa la lógica de un conflicto social y político violento en su sentido clásico del desarrollo de la guerra de guerrillas. Dentro de esos factores que dinamizan la violencia, el que permanece en el trasfondo como invisible, a pesar de su visibilidad social y política, son las actividades formales e institucionalizadas de las industrias de diverso orden y de las formas de gran tenencia de la tierra³⁶.

En forma ya conjunta nos hacemos a una definición espacial de la concurrencia de actores armados en los municipios concernidos, lo que retomamos a continuación en un cuadro del trabajo del Observatorio de la violencia de la Universidad del Cauca³⁷, organizado por nosotros en zonas y corredores y completado con alguna información sobre las formas del repertorio de acción bélica utilizada y del nivel de violencia de los municipios del norte del Cauca y sus municipios limítrofes:

Cuadro 3. Presencia de Actores ilegales, Norte Cauca y sus municipios límites 1998-2007

Municipio	FARC	ELN	PARAMILITARES	OTROS	Violencia y Modalidades
Puerto Tejada			Grupos Emergentes (ND)	Bandas delincuencia, Grupos narcotraficantes	Altas tasas de homicidio Baja acción bélica indirecta
Santander de Quilichao	Sexto Frente, Milicias Urbanas		Bloques Calima y Farallones (desmovilizados). Águilas Negras y los Victorinos	Bandas delincuencia, Grupos narcotraficantes Los Güaros	Altas tasas de homicidio Alta acción bélica indirecta y económica
Caloto	Sexto Frente, Columna móvil Jacobó Arenas		Bloques Calima y Farallones (desmovilizados).		Tasas de homicidio intermedias Intermedia acción bélica indirecta y económica
Padilla	Columna móvil Jacobó Arenas			Bandas delincuencia, Grupos narcotraficantes	Bajas tasas de homicidio Baja acción bélica indirecta
Guachené	Frente Sexto		Grupos emergentes (ND)	Bandas delincuencia	Alta tasa homicidio 2006 - Ausencia de acción bélica
Villarrica			Nueva Generación	Bandas delincuencia Grupos narcos	Alta tasa homicidio 2006 - Ausencia de acción bélica

³⁵ Producida desde mediados de los años 90, con el antecedente marcado por la actividad del m-19 en los 80.

³⁶ Esta incógnita sobre la inserción o no inserción de los agentes de las actividades institucionalizadas y formales en los procesos de violencia en la subregión, es compartida con los analistas del Observatorio de la Violencia de la Universidad del Cauca. Las formas de asociación a la violencia de diversa procedencia y al conflicto armado requiere de datos más explícitos y cualitativos que los de la información de prensa.

³⁷ Los datos fueron recolectados a partir de entrevistas en el norte del Cauca; para los municipios del centro, a excepción de El Tambo, la información apenas se está elaborando.

Buenos Aires	Sexto Frente y columnas móviles Arturo Ruiz y Jacobo Arenas	Cía. José María Becerra	Bloque Calima (desmovilizado) y Aguilas Negras		Altas tasas de homicidio Baja acción bélica directa
Suárez	Frente Octavo		Bloques Calima y Farallones (desmovilizados).		Bajas tasas de homicidio Alta acción bélica indirecta
Morales	Tránsito de la Jacobo Arenas (últimos años)				Tasas de homicidio intermedias Baja acción bélica indirecta
Piendamó	Tránsito de la Jacobo Arenas (últimos años)				Tasas de homicidio intermedias Intermedia acción bélica indirecta y económica
Cajibío	Tránsito de la Jacobo Arenas (últimos años)				Tasas de homicidio intermedias Baja acción bélica distribuida
El Tambo	Octavo Frente, Veintinueve y Sesenta	Cía. Milton Hernández y Columna móvil Camilo Cien Fuegos	Bloques Calima y Farallones (desmovilizados). Los Rastrojos y/o Bloque Sur Independiente		Altas tasas de homicidio Alta acción bélica distribuida
Miranda	Sexto Frente, Columna móvil Gabriel Galvis			Bandas delincuencia	Tasas de homicidio intermedias Baja acción bélica directa
Corinto	Sexto Frente, Columna móvil Jacobo Arenas				Tasas de homicidio intermedias Intermedia acción bélica distribuida
Toribío	Sexto Frente, Columna móvil Jacobo Arenas y la Teófilo Forero		Aguilas Negras		Bajas tasas de homicidio Alta acción bélica directa
Caldono	Sexto Frente y Veintinueve, Columna móvil Jacobo Arenas				Bajas tasas de homicidio Alta acción bélica distribuida
Jambaló	Sexto Frente, Columna móvil Jacobo Arenas				Bajas tasas de homicidio Intermedia acción bélica directa
Silvia	Sexto Frente, Columna móvil Jacobo Arenas		Grupos emergentes (ND)		Bajas tasas de homicidio Baja acción bélica directa
Totoró					Bajas tasas de homicidio Baja acción bélica distribuida
Inzá					Bajas tasas de homicidio Baja acción bélica directa
Páez					Relativas bajas tasas de homicidio Baja acción bélica directa

Fuente: Observatorio de Paz y violencia de la Universidad del Cauca, basado en base de datos del Observatorio Regional de Paz Cauca y Nariño ORPAZ 2007-2008, Indepaz 2007, Defensoría delegada para la Evaluación del Riesgo de la Población civil como consecuencia del conflicto armado, Sistema de Alertas Tempranas –SAT: Informe del Riesgo 2004-2007, y procesado además por el proyecto Región Sur del Valle y Norte del Cauca

Comportamiento de los contactos armados por iniciativa de la Fuerza pública

La acción de la fuerza pública aumenta a lo largo de los años examinados. Son acciones bélicas directas y ofensivas (las que se realizan como capturas por inteligencia podrían

denominarse acciones indirectas pero no están contabilizadas aquí) que a medida que pasa el tiempo avanzan hacia las zonas históricas de la guerrilla. Van de la mano un ascenso de la acción de la guerrilla como respuesta a la política del gobierno Uribe Vélez. Esta restableció puestos de policía en algunos municipios del norte y centro del Cauca, los de dominio de población indígena, en contra del parecer de la gobernación de Floro Tunubalá³⁸, que como éste lo preveía iba a motivar un despertar de la actividad guerrillera frente a la presencia de la policía en los cascos urbanos de esos municipios.

Llama la atención que en el sur del Valle la iniciativa de la Fuerza pública (65 acciones) frente a la guerrilla y quizás en menor medida frente a otros grupos ilegales no supera en cantidad a la iniciativa a la acción bélica de todos ellos (86 acciones). En cambio, si tomamos la clasificación por modalidad, tenemos que esta misma cantidad de contactos por iniciativa de la Fuerza pública parece superar con creces la iniciativa bélica directa de la guerrilla (31 acciones), con un 110% más de acciones. Mientras que en el norte del Cauca, la iniciativa bélica de la guerrilla y otros actores ilegales (319 acciones) supera en un 125% a los contactos propiciados por la Fuerza pública (143 acciones). También en esta subregión del norte del Cauca sucede lo inverso que en el sur del Valle, la acción bélica *directa* de la guerrilla (174 acciones) supera en un 22% la iniciativa de la Fuerza pública (143 acciones)³⁹. Esta diferencia en las acciones armadas muestra la importancia de tomar al norte del Cauca desde la perspectiva de la acción bélica de la guerrilla por su sentido histórico y su dimensión actual. Pero además muestra que el adversario número uno de la Fuerza pública publicitado como de gran peligro para la subregión del Valle, es aquí mucho menos activo y menos peligroso directamente que en norte del Cauca, mostrando que la negativa a un intercambio humanitario en la zona de Pradera y Florida es mucho más un asunto de política nacional que de razones geopolíticas o geomilitares.

Tabla 9. Comportamiento año a año de los contactos armados por iniciativa de la Fuerza pública en la región, años 2000-2006

Sub-región	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Total	N=
Sur del Valle	15.4%	4.6%	16.9%	9.2%	10.8%	15.4%	27.7%	100%	65
Norte del Cauca	6.3%	6.3%	11.9%	16.1%	14.7%	21.0%	23.8%	100%	143
Total región	9.1%	5.8%	13.5%	13.9%	13.5%	19.2%	25.0%	100%	208

Fuente Boletines diarios del Das

Procesado: Observatorio del Programa Presidencia de DDHH y DIH; Vicepresidencia de la República, proyecto Región Sur del Valle y Norte del Cauca.

La evolución porcentual año a año muestra el aumento progresivo de la acción de la Fuerza pública en la región, aunque presenta variaciones en las subregiones: en el norte del Cauca se dispara esa iniciativa en el año 2002, doblándose respecto a los dos primeros años, y aumentando poco a poco hasta llegar en el 2005 y el 2006 a un 50% más que en los años intermedios; en el sur del Valle la acción de la Fuerza pública tiene un nivel más constante en todo el período, con un descenso notorio en el año 2001, cuando las negociaciones de paz, y un aumento del 80% en el 2006 respecto a la cifra del 2005 (Tabla 9).

³⁸ Conversación con el profesor Diego Jaramillo de la Universidad del Cauca, ex asesor de la gobernación en ese momento (Julio de 2008).

³⁹ En los datos de ambas subregiones hay que tener en cuenta que tomamos virtualmente el total de acciones bélicas de las Fuerza pública como si fueran acciones dirigidas contra la guerrilla, lo cual puede no ser cierto en la recolección de los datos.

Los contactos por iniciativa de la Fuerza pública en la subregión del norte del Cauca (143) son el 34.3% del total de esa iniciativa en el Cauca (n=417). En la comparación por años (tabla #10) el número de contactos empieza a ser *significativo* desde el punto de vista *estadístico* a partir del 2003 (n=23) hasta finalizar el período. En este año los 3 municipios que en su orden, de mayor a menor, vivieron la iniciativa de la Fuerza pública fueron Miranda, Corinto y Jambaló. En el 2004, los tres fueron: Toribio con nivel sobresaliente, Corinto aumentando su intensidad y Miranda bajando respecto al año anterior. Para el 2005, la iniciativa de la Fuerza pública se ha extendido a una buena parte de los municipios del norte del Cauca, incluyendo Caloto, Puerto Tejada y Morales, pero sigue sobresaliendo Toribio con un nivel menor que en el 2004, Corinto con un nivel similar y menor al del 2004, y llega a sobresalir Caldono en el mismo nivel de iniciativa que Corinto. Para el 2006, habiendo aumentado el número de acciones de la Fuerza pública, su grado de dispersión es mayor, equilibrándose en el conjunto de la subregión, y aparecen en un mismo nivel Caldono, Corinto, Miranda y un poco más bajo Jambaló, Caloto y Santander de Quilichao que del 2003 al 2005 no había tenido iniciativa de la Fuerza Pública. Llama la atención que baje tanto esa iniciativa en Toribio en el 2006, y que municipios como Suárez y Villarrica aparezcan siendo objeto de la acción de la Fuerza pública.

Tabla #10 Contactos armados por iniciativa de la Fuerza pública en norte Cauca 2000- 2006

Municipio	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Total	%
Santander de Quilichao	11.1%	44.4%	29.4%				11.8%	14	9.8%
Puerto Tejada						3.3%		1	0.7%
Buenos Aires	22.2%	11.1%		13.0%	9.6%			8	5.6%
Corinto	22.2%	11.1%	5.9%	17.4%	23.8%	20.0%	14.7%	24	16.8%
Miranda	11.1%		11.8%	26.1%	14.2%	10.0%	14.7%	20	14.0%
Caloto		11.1%	17.6%	4.3%		6.7%	11.8%	11	7.7%
Morales					4.8%	3.3%	2.9%	3	2.1%
Caldono		22.2%	29.4%	8.7%		20.0%	14.7%	20	14.0%
Jambaló				17.4%		10.0%	11.8%	11	7.7%
Toribío			5.9%	13.0%	47.6%	26.7%	5.9%	24	16.8%
Padilla									
Suárez	33.3%						5.9%	5	3.5%
Villarrica							5.9%	2	1.3%
Guachené									
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Total subregional	9	9	17	23	21	30	34	143	N=143

Fuente Boletines diarios del Das

Procesado: Observatorio del Programa Presidencia de DDHH y DIH; Vicepresidencia de la República, proyecto Región Sur del Valle y Norte del Cauca.

Estableciendo algunas relaciones importantes en este estudio, los municipios de mayor iniciativa de la Fuerza pública como son Corinto y Toribio, seguidos muy de cerca por Miranda y Caldono (Tabla #10), son cuatro municipios que pertenecen al corredor estratégico de la cordillera central. Hemos visto que Toribio y Caldono tienen alta actividad bélica y baja violencia homicida, el primero, con más presencia de la guerrilla y su actividad bélica directa, el segundo con paridad en las acciones bélicas directas e indirectas. Estos dos municipios donde confluye la iniciativa de la Fuerza pública son entonces teatro de confrontación de actores armados, en Toribio en los años 2004 y 2005, en Caldono en los dos últimos años de nuestro período pero con antecedentes en el año 2002. Muy cercano a ser también teatro de operaciones bélicas está Corinto, a partir del año 2003 en que aumenta y se estabiliza cierto nivel de la iniciativa de la Fuerza pública, ya que también tiene una actividad bélica intermedia, distribuida entre directa e indirecta, y

que está acompañada de un nivel intermedio de violencia homicida. En Miranda la acción bélica es directa y en un nivel muy bajo (actividad guerrillera baja), está lejos de ser teatro de operaciones, pero tiene una violencia homicida intermedia, a la que parecería responder con efectos contradictorios una iniciativa de la Fuerza pública acentuada en el 2003 y el 2006, como constatamos más abajo.

Santander de Quilichao, Caloto y Jambaló tienen un nivel intermedio de iniciativa de la Fuerza pública. De los tres es Jambaló el que alcanza un nivel intermedio de acción bélica directa (asignada a la guerrilla), y por lo tanto tiene tendencia a convertirse en zona teatro de confrontación, en el 2003, 2005 y 2006. Por otra parte, resalta ese nivel *intermedio* de iniciativa de la Fuerza pública en un municipio de alta acción bélica indirecta y de acción económica, y de alta violencia homicida, como lo es Santander de Quilichao, pero se acomoda más ese nivel en Caloto que también tiene un nivel intermedio del mismo tipo de acciones bélicas que Santander y de violencia homicida intermedia.

La iniciativa de la Fuerza pública fue menor en Buenos Aires, al inicio del período y en el 2003 y el 2004, llamando la atención ese nivel bajo, por ser éste un municipio con alta violencia homicida, baja acción bélica de la guerrilla y alta presencia de los paramilitares. En Puerto Tejada con presencia dominante de actores ilegales de delincuencia común, con paramilitarismo y guerrilla en niveles bajos, también resalta la ausencia de una iniciativa de la Fuerza pública, pues es un municipio que tiene también alta violencia homicida. Es claro que en Santander, Buenos Aires y Puerto Tejada sobresale la siguiente correlación negativa: entre mayor presencia de la violencia homicida asociada a la presencia de actores ilegales es menor la iniciativa de la Fuerza pública para contenderla; en los dos primeros municipios de alta presencia paramilitar la correlación lleva a la sospecha política de alguna complicidad, en el caso de Puerto Tejada es necesario explorar más.

Así este análisis en el norte del Cauca nos hace preguntar si la presencia y la iniciativa de la Fuerza pública lleva aparejada una contención de la tasa de homicidio en municipios en que es alta e intermedia esa iniciativa, resultando datos en contraste: En Toribio los años en que ella se desarrolla son años en que aumentan las tasas de homicidio, mientras en Caldonó son años de baja en dichas tasas. En Corinto con una iniciativa constante de la Fuerza pública ella va paralela a una paulatina baja de la tasa de homicidios. En cambio en Miranda, de baja acción bélica y de tasas intermedias de homicidio, el primer año de esa iniciativa de la Fuerza pública (2003) es un año de un elevamiento de dichas tasas después de que venían descendiendo, pero en el 2006 la mayor iniciativa de la fuerza no interrumpe la curva descendente de la tasa de homicidios. En Jambaló solamente la apertura de esa iniciativa de la Fuerza pública en el 2003 parece corresponderse de inmediato con la aparición del homicidio (no lo había antes) con una tasa comparativamente alta (28), y en el segundo año de la iniciativa, 2005, desaparece, para aparecer de nuevo en el 2006. Resalta que en municipios de violencia bélica directa asociada a la guerrilla como Jambaló y Toribio la iniciativa de la Fuerza pública se corresponda con un aumento o la aparición de los homicidios; en Caldonó y en Corinto de acción bélica mixta la dicha iniciativa se corresponde con bajas en las tasas de homicidio. En donde hay alta e intermedia acción bélica indirecta, y tasas de homicidios altas e intermedias, como Santander de Quilichao y Caloto la iniciativa de la Fuerza pública es menor y concentrada en dos años, en el primero 2002 parece corresponder a una baja en la tasa de homicidio en Santander y en Caloto permanece constante, y en el 2006 se corresponde en ambos municipios a un alza de los homicidios. En este sentido podría decirse que la iniciativa bélica de la Fuerza pública puede tener efectos diferenciales sobre la variación de la tasa de homicidios dependiendo

del tipo de actores armados e ilegales y de acción bélica que se desarrolle en una zona, y dependiendo en que sentido se desarrollen sus acciones.

En el sur del Valle del Cauca la iniciativa de contactos de la Fuerza pública (tabla #11) se concentra en Florida, un municipio de alta violencia homicida y acción bélica indirecta y económica intermedia; y luego se da en menor medida en Jamundí y Palmira, el primero con alta violencia homicida y baja acción bélica indirecta, el segundo con violencia homicida y acción bélica indirecta y económica intermedias; finalmente en Pradera es mucho menor la iniciativa de la Fuerza pública y en Candelaria no existe. En Florida desde 2003 comienza a ser la más intensa de la subregión, y continúa siéndolo después, aunque es de anotar que estadísticamente la comparación es limitada año a año porque el número de eventos apenas si es significativo para el año 2006 (n=18). En Jamundí fue importante al inicio de la década y se realiza periódicamente, años 2002 y 2005, con alguna significación. En Palmira fue importante a partir del 2002, en especial en el año 2005.

Tabla #11 Contactos armados por iniciativa de la Fuerza pública en sur del Valle 2000- 2006

Municipio	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Total	%
Candelaria									
Florida	10.0%	33.3%	9.1%	66.6%	42.8%	50.0%	61.1%	26	40.0%
Jamundí	60.0%		45.4%	16.7%		30.0%	5.5%	16	24.6%
Palmira	10.0%	66.6%	27.3%		28.6%	20.0%	16.7%	13	20.0%
Pradera	20.0%		18.2%	16.7%	28.6%		16.7%	10	15.4%
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%
Total n=	10	3	11	6	7	10	18	65	N=65

Fuente Boletines diarios del Das

Procesado: Observatorio del Programa Presidencia de DDHH y DIH; Vicepresidencia de la República, proyecto Región Sur del Valle y Norte del Cauca.

En Florida donde durante el período ha estado siempre presente la iniciativa de la Fuerza pública, esta se corresponde con una tendencia a descender las tasas de violencia, aunque en los años 2005 y 2006, de mayor significación de la iniciativa, presentan un ascenso también significativo en las tasas de homicidio. En Jamundí, que en el período también tenía una tendencia a la baja de las tasas de homicidio, justamente en el momento en que asciende la iniciativa pública, año 2005, las tasas de homicidio se suben bruscamente. A esta correspondencia de ascensos y mayor iniciativa de la Fuerza pública habría que buscarle un contrapeso en una mayor investigación cualitativa, porque la simple correlación estadística parece sugerir que la Fuerza pública tiene una interferencia positiva con actores ilegales. En Palmira donde se mantienen casi constantes durante el período las tasas de homicidio, intercalando pequeñas bajas y ascensos año a año, no parece haber asociación con la iniciativa en ciertos años de la Fuerza pública.

El secuestro como modalidad de acción en la región

El secuestro es una de las modalidades que mejor expresa el prosaísmo de la violencia, porque golpea con crueldad desde distintos actores armados ilegales⁴⁰ a los diversos sectores sociales y porque es el centro de diversos acuerdos e interferencias entre varios actores ilegales. El secuestro golpea generalmente a los individuos (Pécaut, 2005: 25),

⁴⁰ También a veces desde actores legales golpea a los sectores populares en resistencia y conflicto social.

aunque la modalidad llegó a ser colectiva aplicada por paramilitares, Fuerza pública o guerrilla, dependiendo del tipo de secuestro.

El secuestro ocupa primer un lugar en el repertorio de la guerrilla y responde a los cambios que privilegian la consecución de recursos económicos para sostener el desarrollo militar, que llega a ser su prioridad estratégica y sustituye a la adhesión ideológica y política de la población. Pero es además una modalidad principal del repertorio de los paramilitares en la perspectiva de la desaparición y la muerte selectiva, usada dentro de una estrategia militar que busca agotar la base de los apoyos históricos, políticos, pragmáticos o utilitarios a la guerrilla dentro de la población. Desde dos perspectivas, que en un principio eran diferentes porque implicaban segmentaciones de clase, el uso del secuestro y/o la desaparición por estos actores coloca en la mira a la población civil cuando las lógicas pragmáticas dominan en los territorios bajo su control.

Tabla #12. El secuestro en nuestra región, 2000-2006

Subregión	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Total	%
Sur del Val	49.2%	38.1%	50.0%	22.2%	28.0%	42.1%	8.3%	99	36.1%
Norte Cau	50.8%	61.9%	50.0%	77.8%	72.0%	57.9%	91.7%	175	63.9%
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%
Total	61	42	36	54	50	19	12	274	
% Fila	22.3%	15.3%	13.1%	19.7%	18.2%	6.9%	4.4%	100%	N=274

Fuente Fondelibertad

Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República, proyecto Región Sur del Valle y Norte del Cauca.

En el Cauca se producen 496 hechos de secuestro y en el Valle se cometen 816, para un total de 1.312 en el período 2000-2006. En el Cauca la modalidad es un 40.0 % menor que en el Valle del Cauca, a pesar de que la dinámica bélica del conflicto armado sea mucho mayor en aquel departamento, lo que implica que el secuestro tiene otros determinantes que no son atribuibles a la insurgencia armada. Pero esta relación se invierte al considerar nuestra región: en el norte del Cauca el secuestro es un 28% mayor que en el sur del Valle, lo que parecería en este caso estar más acorde con el desarrollo del conflicto armado (y las economías ilegales) en aquella subregión (tabla #12).

En la región el período inicia con la mayor concentración de secuestros, 22.3% (n=274), y luego prosigue con fluctuaciones, descendiendo primero y ascendiendo de nuevo en los años 2003 y 2004 en porcentajes cercanos al del año 2000, para volver a caer a mínimas cantidades en el 2005 y el 2006 (tabla #12, ultima fila). En los años 2000 y 2002 el secuestro se reparte por igual en las dos subregiones, en el resto de los años predomina en el norte del Cauca, con diferencias muy grandes en el 2003 y 2004 (lectura por columna).

En la subregión del norte del Cauca (tabla #13), la concentración en el período tiene la misma distribución que en la región. Ahora bien, Santander de Quilichao concentra casi la mitad de los secuestros. Con porcentajes 3½ veces menores están Caloto y Miranda, y luego le siguen con porcentajes menores Toribio, Padilla, Corinto, Caldono. Estos últimos 6 municipios parecen conformar una micro-región del costado del corredor de la cordillera central desde el punto de vista del secuestro producido por la guerrilla, mientras que en Santander el secuestro es presumiblemente actividad de todos los grupos armados. El secuestro del costado de la cordillera occidental es menor en Morales y Buenos Aires.

Tabla #13. El secuestro en los municipios del norte del Cauca, 2000-2006

Municipio	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Total	%
Santander de Q	22.6%	69.2%	50.0%	64.3%	22.2%	45.4%	63.6%	81	46.3%
Puerto Tej.				4.8%				2	1.1%
Buenos Air	16.1%		5.6%		2.8%			7	4.0%
Corinto		7.7%	5.6%	7.1%	8.3%		9.1%	10	5.7%
Miranda	19.4%	3.8%	11.1%	9.5%	11.1%	9.1%	9.1%	19	10.9%
Caloto	3.2%	11.5%	11.1%	2.4%	25.0%	36.4%		20	11.4%
Morales	9.7%				13.9%			8	4.6%
Caldono		7.7%		7.1%	5.5%		9.1%	8	4.6%
Jambaló			11.1%	2.4%				3	1.7%
Toribío	19.4%		5.6%		11.1%	9.1%		12	6.8%
Padilla									
Suárez	9.7%			2.4%			9.1%	5	2.9%
Villarrica									
Guachené									
%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Total	31	26	18	42	36	11	11	175	100%

Fuente Fondelibertad

Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República, proyecto Región Sur del Valle y Norte del Cauca.

Examinando la tabla #13, y comparando año a año (por columnas), es destacable que en Santander de Q. el secuestro suba su intensidad, por encima de su promedio, en los años 2001-2003 y 2006, concentrando más de las dos terceras partes, o al menos la mitad, de los producidos en esos años en la subregión. Mientras en Miranda el secuestro es muy importante en el año 2000, mantiene casi su promedio durante el periodo a excepción del 2001, cuando baja ostensiblemente. Caloto empezó la década con bajo nivel de secuestro, subió luego a su promedio en los años siguientes, bajó en el 2003 pero tuvo una realza intensa en el 2004 y 2005. En Toribío el secuestro es muy importante en el año 2000 y en menor medida en el 2004. En Corinto el secuestro se va haciendo más significativo a medida que avanza el período, manteniendo niveles porcentuales por encima de su promedio. Algo similar sucede con Caldono, aunque la ausencia del secuestro se da en tres años. Jambaló tiene en el 2002 un nivel significativo. En el año 2000 de la llegada de los paramilitares a la subregión, en Buenos Aires es muy destacado el secuestro, mientras en Morales es significativo en el 2004. En Puerto Tejada el secuestro no es significativo y en los otros municipios no parece existir.

Tabla 14. El secuestro en los municipios del sur del Valle, 2000-2006

Municipio	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Total	%
Candelaria	23.3%	43.8%	11.1%		21.4%	12.5%		20	20.2%
Florida	30.0%	12.5%	16.7%	25.0%	57.1%	25.0%		27	27.3%
Jamundí	36.7%	6.3%	11.1%			25.0%		16	16.2%
Palmira	10.0%	31.2%	44.4%	58.3%	21.4%	25.0%	100.0%	29	29.3%
Pradera		6.3%	16.7%	16.7%		12.5%		7	7.0%
%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Sur del Val	30	16	18	12	14	8	1	99	N=99

Fuente Fondelibertad

Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República, proyecto Región Sur del Valle y Norte del Cauca.

En el sur del Valle (tabla #14), el secuestro está en todos los municipios y se concentra, en su orden de mayor a menor, en Palmira (una tercera parte), Florida, Candelaria, Jamundí y Pradera. Además, es significativo en el año 2000, al producirse en este año la tercera parte de ellos, distribuidos en este año, de mayor a menor, en Jamundí, Florida y Candelaria, y en mucho menor medida en Palmira. En los otros años existe una fuerte tendencia a la baja de los secuestros en esta subregión hasta casi desaparecer en el 2006. En Palmira sube su intensidad en los años 2001-2003, en que concentra entre el 30 y el 60% de los secuestros del sur del Valle en cada uno de esos años, y permanecen luego en algún grado. Florida tiene niveles de secuestro bastante por debajo de su promedio en el 2001 y el 2002, lo recupera en los años siguientes, pero tiene la paradoja de concentrar los secuestros de la subregión en el 2004, cuando la desmovilización paramilitar ya es un hecho y el ejército ha copado el municipio para impedir el acuerdo humanitario (no hay registro de secuestros para el 2006). Candelaria que no se ha destacado en otros aspectos del conflicto armado se lo hace con el secuestro, en niveles apreciables a comienzo de la década, en particular en el 2001. Jamundí que también concentra el secuestro en más de una tercera parte en el año 2000, baja luego su nivel de participación. En Pradera en los años 2002, 2003 y 2005 el secuestro tiene alguna presencia.

Impactos de la violencia política y el conflicto armado sobre los indígenas

Sobre el perfil del conflicto armado en el contexto de luchas agrarias, sociales y políticas concernientes a los movimientos étnicos y políticos de las comunidades indígenas, existe ya el artículo de William Villa y Juan Houghton (Villa y Houghton, 2005: 83-121) que traza de excelente forma sus coordenadas generales para el departamento del Cauca y el sur del Valle considerados como una región unificada por el proceso de construcción de autonomía y de afirmación étnica de los indígenas en medio de la violencia política. Esta es asociada primero a los rasgos tradicionales del conflicto social trazado por la oposición indígena- terratenientes- pájaros y fuerzas estatales en alianza, y luego en sus nuevos perfiles trazado por la resistencia de los indígenas frente a viejos y nuevos terratenientes asociados al paramilitarismo, el narcotráfico y fuerzas estatales en alianza.

A esos factores pueden agregarse a partir de 1997 elementos para explicar la violencia política contra indígenas, marcando una nueva etapa del conflicto armado para ellos: su avance electoral y su decisión de mantenerse en él, que chocaba contra la política de las FARC de sabotear las elecciones y el ánimo de dominio de las campañas electorales de parte de los paramilitares; luego, se suma el plan de expansión de estos últimos y de las fuerzas militares sobre el sur del Valle y el norte del Cauca (la masacre del Naya en el 2001 es un indicativo). Esta expansión paramilitar y militar sobre los territorios indígenas se concentra en un principio en los municipios de Buenos Aires, Santander de Quilichao, Jamundí, y en los municipios Nasa de Florida y Pradera. El triunfo electoral del BSA (Bloque Social Alternativo, con participación de las ASI y AICO) con Tunubalá, crea contradicciones políticas entre el nivel departamental y nacional de gobierno y recrudece la violencia⁴¹, situación que hacia el 2004 puede ser ejemplificada por los sucesos de arremetida de las FARC en Jambaló y al mismo tiempo por la iniciativa de violencia del

⁴¹ Hay que tener presente la alianza de la gobernación del Cauca, del Tolima y de Nariño, para desarrollar un proyecto de paz regional que puso a los altos funcionarios de estos gobiernos en la mira de los actores armados incluyendo los institucionales e ilegales, y también de las FARC, para quienes los planes de ese proyecto significaban una alianza con el imperialismo por la participación de entidades extranjeras (ver además de los autores mencionados, la entrevista a Diego Jaramillo, julio del 2008).

Ejército en Toribío, Jambaló, Silvia, Pradera y zonas circunvecinas. El desarrollo del Plan Colombia no hará más que intensificar la violencia contra los indígenas, percibida por ellos en este último momento en una intención de producir terror más que en la lógica de las muertes selectivas que se proponen exterminar las redes de la insurgencia, aunque también en este sentido la política de campesinos en acción tenderá a involucrar a la población en el conflicto armado, un hecho que suscita la resistencia de los indígenas, tanto como la violencia misma⁴² (Villa y Houghton, 2005: 92-94).

Sobre las violaciones individuales a los derechos humanos es bueno recordar antecedentes: aunque por décadas han estado presente las violaciones, entre 1990 y 1999 ellas tienen una baja ostensible respecto a los años 80, en algunos años llegando casi a bajarse del todo, y con picos altos de 37 casos en 1991, 22 en 1993, 28 en 1997 y 20 en 1999, mientras que a partir del año 2000 el ascenso es sorprendente, pues en este año alcanzaron los 124 casos, en el 2001 se tuvo un tope de 214, en el 2002 fueron 113 casos, en el 2003 se llegó a 129 y en el 2004 ascendió a 178 casos (tabla #15). El inicio de las negociaciones de paz, en medio del desarrollo del conflicto armado, no significó un descanso para las comunidades indígenas del Cauca y sur del Valle, lo que no implica que la violencia sea generada por la insurgencia y sí que está asociada a la llegada de las AUC a las subregiones consideradas en nuestro estudio. Luego el inicio de la política de seguridad democrática tampoco amainó la situación de violencia contra los indígenas, incluso se observa una curva de ascenso del 2002 al 2004 (Villa y Houghton, 2005: 86). Esta situación puede examinarla el lector con más claridad en la distribución que presenta el cuadro siguiente:

La tabla #15 nos deja ver como los paramilitares y la Fuerza pública concentran casi equitativamente en su participación el 73.0% de las violaciones, luego en mucho menor medida la guerrilla y los otros actores violentos.

Tabla #15. Violaciones individuales por actores armados, 1990-2004

Actor Armado	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	Tot	%
Fuerza Pública			1	2	2	14		2		15	81	6	4	87	115	329	35.6
Guerril	1			1	3		1	15		1	15	42	24	14	25	142	15.3
Otro act Violent	3	5	3	7	7	1		11	4	4	7	16	28	10	7	113	12.2
Paras	2	32	6	12	2	1			9		21	150	57	18	31	341	36.9
%																	100%
Total	6	37	10	22	14	16	1	28	13	20	124	214	113	129	178	925	

Fuente CECOIN, basada en la tabla elaborada por Villa y Houghton (2005: 89)

Procesado: proyecto Región Sur del Valle y Norte del Cauca.

En general, todos los actores producen su mayor parte de violencia después de 1999, en menor concentración en los *otros actores violentos*. Más allá de la cantidad de hechos de violencia que producen, que ya jerarquizamos, mirada la evolución de cada actor armado en sí mismo, en su desencadenamiento de violencia frente a los indígenas del Cauca y sur del Valle, tendríamos varias conclusiones significativas: La *Fuerza pública* respecto a su propia acción y a su relación con los indígenas es menos violenta antes de 1999 y es mucho más violenta después de 1999; quizás pueda atribuirse su menor dinámica violenta antes del año 99 a la contención política que genera la puesta en marcha de la nueva Constitución del 91 y a la dinámica de contención que ofrece la participación en política

⁴² Hay que recordar las marchas indígenas del norte del Cauca hacia Cali y antes las protestas en el centro regional, Popayán.

del propio movimiento indígena, quizás unido a una menor dinámica de recuperaciones de tierra, pues es un momento en el que los procesos electorales concentran la atención del movimiento étnico. Le siguen *las guerrillas* en ser menos violentas respecto a su propia evolución antes de 1999 y siendo más violentas luego de este año; vienen *los paramilitares* muy de cerca con la misma tendencia de menos violencia antes del 99 y, finalmente, los *otros actores violentos* concentran algo más su violencia sobre los indígenas antes de ese año límite, quizás porque los años 90 son un momento de mayor apertura de actividades ilegales en la zona, y porque esos actores delincuenciales ofrecen resistencia y contención mayor a la participación social y política del movimiento indígena, pues crean lazos con los terratenientes tradicionales y los emergentes nuevos terratenientes de corte ilegal (revelador como caso tipo es la masacre del Nilo). Examinemos más de cerca la evolución del período 1999-2004 en el siguiente cuadro que elaboramos nosotros para ver la distribución por intensidad de la violencia comparando año a año.

Vemos claramente en la tabla #16 como la Fuerza pública aumenta su participación en la realización de hechos de violencia sobre los indígenas en el período 99-04 al compararlo con el período 90-04; mientras tanto los paramilitares y la guerrilla, mantienen el nivel de su participación en los casos de violencia comparando los dos períodos. Los *otros actores armados* disminuyen un poco su participación.

Tabla #16. Intensidad de las violaciones individuales por actores armados, 1999-2004

Actor Armado	99	00	01	02	03	04	Tot 99-04	Dist. 99-04	Tot 90-04	Dist. 90-04
	%	%	%	%	%	%	Frec.	%	Frec.	%
Fuerza Pública	75.0	65.3	2.8	3.5	67.4	64.6	308	39.5	329	35.6
Guerrillas	5.0	12.1	19.6	21.2	10.8	14.0	121	15.5	142	15.3
Otro actores Violentos	20.0	5.6	7.5	24.8	7.7	3.9	72	9.2	113	12.2
Paramilitares		16.9	70.1	50.4	14.0	17.4	277	35.6	341	36.9
%	100	100	100	100	100	100		100		100
Total N=	20	124	214	113	129	178	778	N=778	925	N=925

Fuente CECOIN, basada en la tabla elaborada por Villa y Houghton (2005: 89)

Procesado: proyecto Región Sur del Valle y Norte del Cauca.

Si examinamos la intensidad de participación de cada actor, en una lectura comparativa año a año, el cuadro nos muestra lo siguiente: En el comienzo del período, años 1999⁴³ y 2000, años de oro de las negociaciones de paz, *la Fuerza pública* ha arremetido con mucha intensidad sobre los indígenas produciendo el 75.0% (n=20) y el 65.3% (n=124) de los hechos de violencia que se producen sobre ellos, en cada uno de esos años, e igualmente observamos que esa intensidad se repite en el 2003 y 2004 años en que ya funciona la seguridad democrática y en que la Fuerza pública retoma la iniciativa bélica y de copamiento en el Cauca y sur del Valle; esa violencia se ve disminuida casi a cero en el último año de las conversaciones, 2001, y en el primero de fin de las conversaciones y

⁴³ No hay que olvidar que se venía de una gran movilización campesina, pero sobretodo indígena en el Cauca, con toma de la Vía Panamericana, en el año 98, que produjo unos acuerdos con el gobierno que se firmaron y donde se comprometía éste a la entrega de más de 15.000 has de tierras para los indígenas. La resaca del incumplimiento de estos pactos se vive en el momento actual con varias tomas de haciendas en el norte del Cauca, año 2008.

ascenso de la política mencionada, el 2002; se puede decir que a los indígenas respecto a la acción de la Fuerza pública les fue mejor en esos años últimos de las conversaciones de paz. La tabla #15 también nos muestra, algo que ya sabíamos, la intensidad mayor de la acción de *los paramilitares* sobre los indígenas en el año 2001, que baja un poco en el año 2002, manteniéndose muy alta por encima de sus promedios para los dos períodos. La intensidad de la actividad mayor de *la guerrilla* es también en esos mismos años 2001 y 2002, mientras que la de otros *actores violentos* se eleva para el año 1999 y el 2002, que son años como dijimos de recomposición de la gran propiedad de la tierra y de sus agentes sociales y económicos en el norte del Cauca, aunque no hay que olvidar la existencia de los viejos terratenientes y la fuerza social y política de sus haciendas en vía de modernización. Tampoco hay que olvidar la fuerza del nuevo asentamiento industrial en la zona a partir de la ley Páez. Guerrilla y paramilitares mantienen su acción violenta sobre los indígenas a un nivel más bajo en los años 2003 y 2004, mientras los *otros actores violentos* siempre están presentes a lo largo del periodo, aunque su acción disminuye bastante en el 2004.

De otras fuentes tenemos datos sobre los homicidios de indígenas en el norte del Cauca, como nos lo muestra la tabla #17. Del total de homicidios de indígenas en el Cauca, el 75.3% (n=166) se producen en el norte del Cauca y, justamente, los hechos se concentran más en esta zona en esos años del comienzo de década⁴⁴.

De otra parte, la tabla #17 nos muestra en la distribución por municipios del norte del Cauca, la siguiente concentración: Corinto es el municipio que más tiene homicidios de indígenas del total en la zona, un 26.4% (n=125); le siguen en su orden con porcentajes un poco menores Santander de Quilichao y Buenos Aires; luego vienen con porcentajes alrededor del 10.0 % de los hechos, en su orden, Caloto, Miranda y Toribío; finalmente, Jambaló, Caldono y Morales, en este orden, participan con un mínimo de los homicidios.

Tabla #17 Homicidio de indígenas en el norte del Cauca 2000- 2006

Municipio	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Total	%
Santander de Q	11.5%	30.0%	19.0%		12.5%	12.5%		27	21.6%
Puerto Tej.									0.0%
Buenos Air	11.5%	35.0%						24	19.2%
Corinto	46.1%	23.3%	23.8%		25.0%			33	26.4%
Miranda			33.3%		25.0%	12.5%		10	8.0%
Caloto	15.4%	6.7%	14.3%			25.0%		13	10.4%
Morales	7.7%							2	1.6%
Caldono					25.0%			2	1.6%
Jambaló		5.0%	4.8%				50.0%	5	4.0%
Toribío	7.7%		4.8%		12.5%	50.0%	50.0%	9	7.2%
Padilla									
Suárez									
Villarrica									
Guachené									
%	100%	100%	100%		100%	100%	100%		100%
Total	26	60	21		8	8	2	125	N=125

Fuente: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República
 Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República, proyecto Región Sur del Valle y Norte del Cauca.

⁴⁴ Ver el informe de investigación, agosto 2008, ya citado.

Si examinamos la intensidad con que se da el homicidio en los municipios del norte del Cauca en los años significativos tenemos lo siguiente: En Corinto se realizan con gran intensidad los homicidios de indígenas en el año 2000 y en los dos siguientes años tienen una intensidad intermedia; en Buenos Aires el año 2001 es el año intenso de la realización de homicidios de indígenas, aunque ya mostraba en el año 2000 que la situación era preocupante, mientras que luego parece cumplida la labor especialmente de los paramilitares en ese sentido de atemorizar con la muerte; en Santander de Quilichao, también el año 2001 es intenso, aunque en este municipio, se va a mantener la tendencia en el año siguiente y en los años 2004 y 2005, esto es, el homicidio de indígenas recorre todo el período en este municipio desde el comienzo de la década. En Miranda el homicidio de indígenas es intenso en el 2002 y mantiene rezagos de este tipo de muerte en algunos años siguientes. Por su parte, Caloto es un municipio donde el homicidio de indígenas es significativo en menor grado en esos años de comienzo de década y eventualmente aparecerá después. Jambaló y Toribio también ponen sus muertos indígenas al comienzo de la década, pero lo particular en ellos, es que los pocos de estos homicidios que se producen en el norte del Cauca después de 2004 parecen irse concentrando en ellos.

Los homicidios de indígenas en el Valle del Cauca fueron 46, de los cuales 39 se realizan en Florida y Pradera, en el primero se concentra el 82.0% de ellos y el resto en el segundo municipio. En Florida están presentes y se concentra la gran mayoría en el año 2002, con unos cuantos en el 2001 y el 2006. En Pradera, las muertes se concentran en el año 2000.

*Otros homicidios políticos y sociales relacionados con el conflicto armado*⁴⁵

En el período 2000-2006, de 4 homicidios de autoridades políticas locales, alcaldes y ex alcaldes, que se presentan en el Cauca uno se produce en el norte del departamento, en Miranda en el año 2003, y de 5 en el Valle del Cauca todos se cometen por fuera de la parte Sur del departamento. Algo similar sucede con la muerte de concejales. Son realizados 10 homicidios de ellos en el departamento del Cauca, y solamente 1 se comete en el norte, también en Miranda en el año 2001. En el Valle son realizados 20, de los cuales solamente uno se produce en nuestra subregión sur, en Pradera en el año 2003.

En el período 2000-2006, el homicidio de sindicalistas de varios sectores, excluidos los maestros, son muy pocos en el Cauca, dos, de los cuales uno se comete en Corinto, norte del Cauca, en el año 2004, mientras que son más numerosos en el Valle del Cauca, 11 producidos después del año 2004, y ninguno se produce en nuestra subregión. En el mismo período, el homicidio de maestros sindicalizados es mucho mayor que los anteriores en ambos departamentos. De los 12 casos del Cauca, apenas 2 se producen en nuestra zona norte, uno en Piendamó en el 2001 y uno en Santander de Quilichao en el 2004. De los 21 del Valle, una cuarta parte se produce en el sur del departamento, la mayoría en el inicio de la década, con el avance paramilitar en la zona, 2 en Florida, 1 en Jamundí y otro en Palmira, y el último es en este municipio pero en el 2005. En el mismo período, el homicidio de maestros no sindicalizados sigue subiendo en ambos departamentos. De los 15 casos registrados en el Cauca, la tercera parte se produce en la zona norte, 2 en Corinto en el 2001, 2 en Miranda en el 2001 y 2002, años de expansión paramilitar, y uno en Santander de Quilichao, en el 2006. De los 57 casos del Valle, apenas 3 se producen en

⁴⁵ Los datos de esta parte provienen del Informe de investigación ya citado.

nuestros municipios del sur del Valle, todos entre el año 2001 y el 2004, uno en Jamundí, otro en Florida y el restante en Palmira.

Las víctimas de las masacres y los desplazamientos en nuestras subregiones

El sentido de las masacres y los asesinatos selectivos tienen la intencionalidad de sembrar el terror entre la población y, además, son un mecanismo para impedir el avance de los enemigos, para desarticular las redes de apoyo, las redes de informantes, los familiares y las milicias de los insurgentes. La iniciativa en ellas desde 1998 la han tenido las AUC pero las FARC responden a veces con la misma “medicina” lo que significa aumentos bruscos de los homicidios en la población civil en contextos donde tiende a aumentar la confrontación (Echandía, 2004a: 164-165). Sin embargo, señalamos en primer término que las masacres y los desplazamientos no necesariamente se producen en las zonas de operaciones bélicas, en el sentido anotado por Lair (2004), que tienen una variabilidad en el tiempo y en el espacio según el propio desenvolvimiento del conflicto armado. Se podría decir que juegan un papel en el contexto amplio de la dinámica del conflicto afectando las más de las veces a las zonas geográficas de transición, de movilidad y de comunicación de los actores armados, especialmente de la insurgencia, pero que en algún momento comienzan a afectar a las zonas santuarios tradicionales y más estables de las guerrillas.

En el período 2000-2006, las víctimas de masacres en el Valle del Cauca (491) es mucho mayor que en el Cauca (240), quizás debido al gran dominio de la economía ilegal del narcotráfico en el centro y norte del departamento del Valle, aunque habría que probar la eficacia del factor de contención que en el Cauca representa el movimiento indígena y la fuerza de las autoridades locales por éste conquistada. Sin embargo, en términos de nuestras subregiones este último factor apenas si opera en las zonas de dominio indígena, mientras en la zona plana de predominio étnico negro parece ser que las masacres tienen mayor cobertura. Así en nuestras subregiones se invierten los datos, el número de esas víctimas (51) en el sur del Valle es mucho menor que en el norte del Cauca (138).

Tabla #18 Víctimas de masacres en el norte del Cauca, 2000 - 2006

Municipio	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Total
Santander de Q	20	14						34
Puerto Teja								0
Buenos Air		40						40
Corinto		13	4		4	4		25
Miranda		4						4
Caloto		9	5					14
Morales								0
Caldono		4						4
Jambaló					5			5
Toribío	4							4
Padilla				4				4
Suárez	4							4
Total	28	84	9	4	9	4		138

Fuente Policía Nacional

Procesado: Observatorio del Programa Presidencia de DDHH y DIH; Vicepresidencia de la República, y el proyecto Región sur del Valle y Norte del Cauca

La tabla #18 nos muestra que el número de víctimas de masacres en el norte del Cauca, en el período 2000-2006 fueron 138 personas, que representan el 57.5% de n=240 víctimas en

todo el departamento del Cauca⁴⁶. El 81.1% de esas n=138 se concentran en los años 2000 y 2001 (112 personas), con la llegada de los paramilitares a la zona, aunque no se descarta alguna cifra correspondiente a la guerrilla y a la Fuerza pública. Sobresale la mayor cifra en Buenos Aires en el año 2001, y luego la cantidad producida en Santander de Quilichao en el 2001 y 2002. También Corinto fue muy afectado en el 2001, y continuó siéndolo en menor medida en los años 2002, 2004, 2005. Caloto es el siguiente municipio que tiene víctimas de masacres en el 2001 y 2002. Con excepción de Puerto Tejada y Morales, el resto de los municipios del norte del Cauca ha sufrido en algún momento un número pequeño de víctimas de masacre especialmente antes del año 2004. Las masacres parecen haber dejado de tener curso en el 2006.

Ahora bien, en el sur del Valle se registran 51 víctimas que representan el 10.4% del total de víctimas de masacre en el departamento, n=491. Estas víctimas en el sur del Valle se registran en mayor medida en Jamundí, la mitad de ellas, y en su orden le siguen Palmira con un cuarto de ellas y con registros menores, Candelaria y Florida.

Tabla #19 Víctimas de masacres en el sur Valle del Cauca, 2000 – 2006

Municipio	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Total
Candelaria					9			9
Florida	4							4
Jamundí	16				10			26
Palmira		4		4			4	12
Pradera								
Total sur del Valle	20	4		4	19		4	51

Fuente Policía Nacional

Procesado: Observatorio del Programa Presidencia de DDHH y DIH; Vicepresidencia de la República, y el proyecto Región sur del Valle y Norte del Cauca

Llama la atención que Florida tenga ese registro menor, lo que lleva a pensar que la masacre en este caso no está asociada a una zona de acción bélica indirecta o económica, sino que también puede obedecer a otras lógicas distintas a las del conflicto armado propiamente dicho, al menos para el Valle del Cauca (puede ser propiciada por las disputas políticas electorales vinculadas a grupos ilegales incluyendo Auc). Esto parece corroborarse en Candelaria, donde la masacre se concentra en el 2004 y Pradera que no registra víctimas de masacres, ambas con baja presencia bélica.

En cuanto al número de masacres que se registran en el norte del Cauca, tenemos que los actores ilegales realizan, entre el año 2000 y el 2006, 20 casos de masacre, un poco más del 50.0% (n=38) de los casos de masacre en todo el departamento del Cauca. Lo importante es el dato de la concentración de los eventos en los tres primeros años de la década, 2000-2002, un 85% de n=20, momento en el que incursionan con fuerza los paramilitares en la zona. Los municipios más afectados por la cantidad de masacres en su orden son: Santander de Quilichao, Corinto y Caloto. Las masacres se registran así: En el año 2000 (4 masacres), afectados Santander de Quilichao, Jambaló y Suárez; en el 2001 aumentaron los municipios afectados incluyendo a Guachené, pero los más damnificados fueron Santander de Quilichao y Caloto, y luego con una masacre, además de la conocida de Buenos Aires, los municipios del corredor estratégico de la cordillera central, Corinto y Miranda, a los que se suma Caldon. Padilla es tocado en el año 2002, y en este año se repite la masacre

⁴⁶ Cf. Informe de investigación ya citado.

en Caloto y Corinto. En este último municipio se vuelven a repetir en el resto del período. Las masacres en la zona dejan de producirse en el 2006 y al parecer de ahí en adelante.

Observamos una tendencia a la concentración de las masacres en municipios situados en los corredores de movilidad, comunicación y transición hacia zonas santuario, tales la vía Panamericana, el corredor de la cordillera central, lado occidental, y los que se abren en la occidental desde El Tambo hacia Suárez y Buenos Aires. Si pusimos el énfasis en que las masacres a comienzo del período las realizan paramilitares, sin descartar la insurgencia dependiendo del municipio, luego del 2004 esta última puede ser responsable de algunas de ellas. No obstante, no olvidemos el rearme de las AUC bajo la forma de las Águilas Negras aunque en algunos municipios, por ejemplo Florida, algunos pobladores perciben que estas “nuevas bandas” están asociadas a acciones camufladas de la Fuerza pública.

En el Valle del Cauca el número de masacres es mucho mayor que en el Cauca, pero la participación en ellas de nuestros municipios del sur del Valle es mucho menor que los del norte del Cauca en las de todo su departamento. Son 10 masacres las que se producen en nuestra subregión del Valle, y Jamundí tiene un número relevante, en el año 2000 y luego en el 2004; en este municipio dominan las lógicas de las bandas de narcotraficantes, aunque en el comienzo de la década hay presencia de la guerrilla en disputa con la llegada de las AUC. También en el comienzo de la década hay una única masacre en Florida, y en Palmira, aunque en este municipio la masacre se repite periódicamente (el paramilitar HH Velosa y otros han hablado de la masacre en poblaciones como el Arenillo y la Ruiza corregimientos de Palmira); Candelaria en el intermedio del período sufrió una masacre, y llama la atención la no presencia de esta modalidad en Pradera.

En cuanto al desplazamiento sabemos que no necesariamente se produce porque el lugar desde donde se expulsa sea un teatro de operaciones bélicas y que por lo tanto muchas veces obedece a lógicas de terror puestas en acción por los actores armados legales o ilegales. Los datos por ahora no nos permiten definir cuando las cifras obedecen a uno u otro sentido del conflicto armado.

Tabla #20 Desplazamiento Forzado (por expulsión), en el norte Cauca 2000 – 2006

Municipio	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Total
S/Ander Q	39	948	765	198	130	174	157	2,411
Buenos Air	200	8,021	329	150	246	169	138	9,253
Puerto Tejada	4	45	41	24	38	70	88	310
Corinto	21	104	1,832	162	177	168	186	2,650
Miranda	40	491	2,183	117	91	90	112	3,124
Caloto	6	149	141	84	53	1,503	488	2,424
Morales	48	154	139	42	97	40	148	668
Caldono	29	76	81	37	83	119	102	527
Jambaló	5	11	26	10	19	360	4	435
Toribio	0	50	1,342	29	73	630	79	2,203
Padilla	0	5	14	0	6	15	25	65
Suárez	63	260	232	53	124	171	52	955
Villa Rica	0	9	0	3	0	0	0	12
Guachené								
Total	455	10,323	7,125	909	1,137	3,509	1,579	25,037
% Fila	1.8%	41.2%	28.5%	3.6%	4.5%	14.0%	6.3%	100%

Fuente: SIPOD - Acción Social

Procesado: Observatorio del Programa Presidencia de DDHH y DIH; Vicepresidencia de la República, y el proyecto Región sur del Valle y Norte del Cauca

En el norte del Cauca se producen 25.037 víctimas de desplazamiento por expulsión, que son el 33.8% de n=74.047 en todo el Cauca. A excepción de Guachené, del que no hay registro, todos los municipios del norte del Cauca han sufrido expulsión de la población de su municipio. Los que menos han sufrido desplazamiento forzado en su orden son: Villarrica, Padilla, Puerto Tejada, Jambaló, Caldono y Morales, que son municipios cuyas cifras de desplazamiento se distribuyen en todo el período, a excepción de los dos primeros municipios que tienen años sin desplazamiento forzado. En el norte del Cauca, las mayores cifras de desplazamiento se producen en los años 2001 y 2002, aunque hay otro año de fuerte desplazamiento en algunos municipios, el año 2005 (Tabla #20).

El número de desplazados producidos en el año 2001 en Buenos Aires lo coloca a la cabeza, y bastante por encima de los otros, en cantidad de población expulsada de su municipio. Buenos Aires mantiene en los otros años una cifra baja de desplazados, pero de consideración si se compara con el resto de los municipios. Le sigue Miranda que, en el año 2002, tuvo un desplazamiento considerable de población, aunque en tres cuartas partes menor que en Buenos Aires en el año 2001; Miranda en este año tuvo un antecedente de desplazamiento alto que anunciaba lo que se vendría y, luego, se produce durante todo el período una cifra más baja pero no despreciable. Sigue Corinto que en el año 2002 sufre un desplazamiento casi similar al de Miranda en el mismo año, ambos municipios situados en el corredor de la cordillera central. Corinto en los años siguientes hasta el 2006 tendrá un desplazamiento en cifras más bajas que en el 2002, pero siempre mayor que en Miranda. Santander tiene cifras bastantes significativas en el 2001 y 2002 (948 y 765 pobladores), y como Corinto proseguirá en todos los años siguientes con cifras similares que éste; Toribío (sobre el corredor de la cordillera central) en el 2002 sufre un desplazamiento de 1342 pobladores, y luego en el 2005 otro de 630 (eventos que coinciden con dos ataques de las FARC a las instalaciones de la Fuerza Pública acantonada en la parte urbana del pueblo); en los otros años, Toribío va a presentar muy bajas cifras de desplazamiento a pesar de encontrarse en una zona de movilidad y asentamiento tradicional de las FARC. Caloto es un municipio que tenía en los años 2001 y 2002 cifras bajas de desplazamiento aunque de cierta consideración, pero en los dos últimos años, 2005 y 2006 sufre desplazamiento forzoso en un nivel elevado, 1503 y 488 pobladores respectivamente, desplazamiento que habría que examinarlo si se produce por convertirse la zona en teatro de operaciones o si simplemente obedece todavía a la lógica del terror.

Tabla #21 Desplazamiento Forzado (por expulsión) sur Valle 2000 – 2006

Municipio	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Total
Candelaria	0	0	11	10	18	26	15	80
Florida	19	613	710	116	99	175	285	2,017
Jamundí	1,065	722	1,141	195	224	143	253	3,743
Palmira	10	613	290	88	128	153	190	1,472
Pradera	23	194	149	376	86	81	76	985
Total	1,117	2,142	2,301	785	555	578	819	8,297
% Fila	13.5%	25.8%	27.7%	9.5%	6.7%	7.0%	9.9%	100%

Fuente: SIPOD - Acción Social

Procesado: Observatorio del Programa Presidencia de DDHH y DIH; Vicepresidencia de la República, y el proyecto Región sur del Valle y Norte del Cauca

El desplazamiento forzado por expulsión en el sur del Valle del Cauca (tabla #21) es apenas del 10.0% de la población desplazada en todo el Valle, n= 82.775. Es baja la intensidad de su cifra absoluta (8.297), distribuida en todos los años del período, y concentrada en los tres primeros años, 67.0% (n=8.297). A partir del 2003 desciende su

nivel de concentración hasta el final del período, cuando al parecer comienza de nuevo a subir. La concentración hasta el 2002 se corresponde con la llegada de las Auc a la subregión.

Entre los años 2000 y 2002, Jamundí tiene cifras elevadas de desplazamiento (1.065, 722, y 1.141 pobladores) bajando con fluctuaciones en los años siguientes a una quinta parte de sus cifras más altas. Florida, si bien no llega a los picos altos de Jamundí, es el segundo municipio que mantiene un desplazamiento considerable, especialmente en el 2001 y 2002, bajando a los mismos niveles y con iguales fluctuaciones que Jamundí en el resto de años, mientras en Palmira el desplazamiento estuvo al mismo nivel alto de Florida en el 2002, y sigue luego las mismas fluctuaciones en cifras más bajas que los dos municipios anteriores. El desplazamiento en Pradera en todo el período está en los mismos niveles y fluctuaciones de los tres mencionados para los años posteriores al 2002, y Candelaria, aunque tiene desplazamientos todos los años después del 2002 sus cifras son bajas.

Conclusiones

Hemos examinado un período desde el inicio de la década del 2000 hasta el año 2006, en tres partes de análisis comprendidas como la violencia homicida, la acción bélica directa (la confrontación entre actores armados) y la indirecta (la de los actos de terror), y finalmente los impactos de la violencia y la acción de fuerza sobre la población civil. En términos de sus rasgos localizados desde una geografía política y militar del conflicto (a veces con indicaciones sobre una geografía social que incluye niveles de conflicto social) llegamos a algunas conclusiones preliminares:

1. Desde el punto de vista del examen de la insurgencia armada de izquierda y de una temporalidad histórica de mediana duración, el examen del conflicto armado debe tomar como punto de partida el norte del Cauca, íntimamente relacionado con zonas santuario de las FARC establecidas en el nororiente del Cauca. Aquí el efecto analítico, partiendo del examen de las diversas cifras, resalta que esas zonas de insurgencia armada tradicional son más pacíficas, en términos de menor violencia homicida, a pesar de tener una acción bélica más directa que resalta la confrontación entre actores armados, en especial, de la guerrilla sobre la Fuerza Pública, y viceversa en menor medida. Es esta una disputa por controlar los municipios pertenecientes al corredor estratégico del lado occidental de la cordillera central. Los vínculos a las redes de los actores armados son más políticos y se plantean en tensión con actores sociales en resistencia como lo son las comunidades indígenas, que actúan para contener el desarrollo de la violencia política, lo que redobla el carácter más pacífico de la subregión en perspectiva desde el centro del Cauca.

2. Desde la complejidad contemporánea de los actores ilegales y en un tiempo de corta duración, un poco más de una década, el examen puede privilegiar la perspectiva desde el sur del Valle del Cauca, teniendo una mayor dinámica de modernización, en fases pasadas y en las actuales vinculadas a las economías emergentes (incluyendo el desarrollo generado por la ley Páez). A esta perspectiva pueden integrarse los municipios del norte del Cauca más cercanos al límite con el Valle y en su zona plana, cuyas características étnicas son de predominio negro. Estos municipios funcionan en el eje vial de la Panamericana. El efecto analítico mayor de esta perspectiva, es la concentración en ella de la violencia homicida, destacándose un actor armado, el paramilitarismo, acompañado de la Fuerza pública. La confrontación bélica *indirecta*, trazada por los actos de terror y los ataques a la población

civil, es su característica primordial. El objetivo primordial de la acción coercitiva y agresiva es el dominio de las economías ilegales (la economía de la droga, el contrabando y la piratería terrestre). Los vínculos de las redes de los actores ilegales e insurgentes están más trazados por los beneficios que estas actividades ilícitas conllevan a las que se unen la competencia entre bandas renovadas de delincuencia común, conformadas por cohortes de jóvenes negros de la zona. En este sentido llegamos a hablar de una subregión dentro de la subregión norte del Cauca.

3. La inclusión de Buenaventura distorsionaba todas las cifras del análisis del conflicto armado y por eso lo excluimos. Concluimos que este municipio, incluida su zona rural, pero especialmente la urbana, constituye por sí mismo una región micro del conflicto armado (Cf. González et al, 2003) y cuya característica especial es el ser punto de llegada y a su vez de partida de varios corredores de circulación de la economía ilegal, en sus varios ítems, de movilidad y comunicación de los actores armados, pero también centro de proyectos macro “institucionales” que están en juego en el desarrollo de la guerra.

4. Sin tener la misma importancia Florida es un municipio que podría constituirse, desde el punto de vista geopolítico y geomilitar, en una región micro para el análisis, dentro de los del sur del Valle del Cauca. Desde otra perspectiva y quizás para un período anterior, década de los noventa, el mismo Jamundí.

5. Las zonas de control y asentamiento del movimiento social indígena son en general las más pacíficas en cuanto a las acciones bélicas e incluso en la violencia homicida, a pesar de que los indígenas a medida que avanza el conflicto sufren mayores embates.

6. En términos temporales, los años 2000- 2003 están caracterizados por la violencia homicida en ciertos municipios localizados sobre corredores estratégicos, incluyendo la vía Panamericana, es el momento de expansión de las autodefensas y de las iniciativas de la Fuerza pública. Domina también la acción bélica indirecta, el terrorismo, y la piratería terrestre como elemento del repertorio de la acción económica de los actores ilegales.

7. En términos temporales, el período que va del año 2004 al 2006, es un período de mayor confrontación bélica, incluyendo la iniciativa de contacto bélico de la Fuerza pública. El mayor índice de confrontación coincide con el restablecimiento de instalaciones de la Fuerza pública en municipios que vivían más pacíficamente antes del desarrollo de la política de seguridad democrática.

Bibliografía

ARANGO, R., SANCHEZ, E. (2004). *Los Pueblos indígenas de Colombia en el umbral del nuevo milenio*. Departamento Nacional de Planeación, Bogotá.

DELGADO, Álvaro (2007). *Todo tiempo pasado fue peor, entrevistas hechas al autor por Juan Carlos Celis*, La Carreta Editores E. U., Bogotá.

ECHANDIA, Camilo (1999)

ECHANDIA, Camilo (2004a): “Evolución reciente de la geografía del conflicto armado colombiano”, en publicación institucional, *Dimensiones territoriales de la guerra y la paz*, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, pp. 151-181.

ECHANDIA, Camilo (2004b). “La guerra por el control estratégico en el suroccidente colombiano”, *Revista Sociedad y Economía*, octubre 2004, #7, pp. 65-89.

GONZÁLEZ, Fernán et al. (2003). *Violencia política en Colombia, de la nación fragmentada a la construcción del Estado*, Cinep, (reimpresión 2006), Bogotá.

GONZÁLEZ, J. J. (1992). *El estigma de las Repúblicas Independientes, 1955-1965*, Cinep, Bogotá.

LAÏR, Eric (2004). “Transformaciones y fluidez de la guerra en Colombia: un enfoque militar” (pp. 103- 143), en SANCHEZ, G. y LAÏR, E. (Editores) *Violencias y estrategias colectivas en al región andina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela*, IFEA, IEPRI, Grupo Norma, Bogotá.

PÉCAUT, D. (1987). “Acerca de la Violencia de los años Cincuenta” (pp. 29-44), en PÉCAUT, D. *Violencia y Política en Colombia, Elementos de Reflexión*, Universidad del Valle, Hombre Nuevo Editores, Medellín, 2003.

PÉCAUT, D. (1991). “Colombia: Violencia y Democracia” (pp.), *Análisis Político*, # mayo- agosto, IEPRI, Universidad Nacional, Bogotá.

PÉCAUT, D. (1997). “Presente, Pasado y Futuro de la Violencia” (pp. 3-36), *Análisis Político*, núm. 30, enero- abril, IEPRI, Universidad Nacional, Bogotá.

PÉCAUT, D. (2004). “Hacia la desterritorialización de la guerra y de la resistencia a la guerra”, en publicación institucional, *Dimensiones territoriales de la guerra y la paz*, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, pp. 23-36

SANCHEZ, Fabio et al (2007). *Las cuentas de la violencia*, Uniandes, Norma, Bogotá.

VILLA, W., HOUGHTON, J. (2005). “Los indígenas del Cauca y sur del Valle: Construcción de autonomía y afirmación étnica en medio de la violencia”, en VILLA, W. y HOUGHTON, J., *La violencia política contra los Pueblos indígenas en Colombia, 1974-2004*. IWGIA, OIA, CECOIN, Bogotá.

Documentos

EXPEDIENTE (1996). *Presidencia del Consejo de Guerra verbal*, Cali, enero 31 de 1966, firmado por el Tte. Cor. José María Ruiz, presidente del Consejo de Guerra.

INFORME (Sin fecha). *Situación de los derechos humanos, año 2006, nodo suroccidente, Nariño, Cauca y Valle del Cauca*, firmado por el Nodo Sur Occidente de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos – CCEEU



FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS
CENTRO DE INVESTIGACIONES Y
DOCUMENTACIÓN SOCIOECONÓMICA

Cidse

**UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y
ECONÓMICAS**

**CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DOCUMENTACIÓN
SOCIOECONÓMICA-CIDSE**

**INFORME FINAL DEL PROYECTO:
DESIGUALDADES ÉTNICO RACIALES, ACCIÓN COLECTIVA,
ETNICIDAD Y RESISTENCIA EN EL NORTE DEL CAUCA Y
SUR DEL VALLE
CONVOCATORIA INTERNA DE LA VRI 2006**

**GRUPO DE INVESTIGACIÓN:
ACCIÓN COLECTIVA Y CAMBIO SOCIAL**

PARTE V

**PROCESOS POLITICOS LOCALES
EN EL NORTE DEL CAUCA Y SUR DEL VALLE, 1988-2007**

**Profesor Investigador:
Jorge Hernández L.**

**Monitor del Proyecto:
Elizabeth Escobar E.
Omaira Londoño V.
Harold Valencia O.**

CALI, ABRIL DE 2009

PROCESOS POLITICOS LOCALES EN EL NORTE DEL CAUCA Y SUR DEL VALLE, 1988-2007

Jorge Hernández Lara*

En el territorio comprendido entre las cordilleras central y occidental, al sur del departamento del Valle y el norte del departamento del Cauca, se ha estado conformando desde los años ochenta del siglo veinte una nueva subregión, caracterizada por rasgos bastante peculiares, entre los cuales resalta uno que existe desde épocas coloniales pero recientemente ha adquirido nuevo significado: su gran diversidad étnica/racial. Se trata, en conjunto, de un proceso bien localizado de reconfiguración regional en el cual convergen otros de distinta naturaleza y temporalidad, entre los cuales se encuentran principalmente los siguientes:

La instalación de nuevos ingenios y la expansión de cultivos de caña de azúcar en el sur del valle geográfico del río Cauca, a partir de los años sesenta del siglo pasado, lo cual hizo que municipios caucanos como Miranda, Caloto y Santander de Quilichao quedaran incluidos en lo que podría denominarse el “Eje Cañero” –así como de habla de Eje Cafetero o Eje Bananero para otras regiones del país–, junto con los municipios vallecaucanos de Florida, Pradera, Candelaria, Palmira, El Cerrito y, más al norte, Tulúa, Riofrío y Zarzal.

La emergencia y consolidación del narcotráfico como actividad de alto impacto en la región, a partir de los años ochenta del siglo pasado: algunas zonas del norte del Cauca son reconocidas productoras de marihuana, al parecer de muy buena calidad, mientras que otras son productoras de hoja de coca o amapola; la fabricación de cocaína se realiza en “laboratorios” que se han instalado, abandonado, desinstalado, reactivado o reinstalado en prácticamente todos los municipios de la comarca; Cali y su área de influencia, incluido el sur del Valle, fueron la base de operaciones del denominado Cartel de Cali y, luego, han contado con fuerte presencia del Cartel del Norte del Valle.

El surgimiento de un nuevo distrito industrial en la zona plana del norte del departamento del Cauca, a raíz de la política inaugurada por varios decretos de emergencia que fueron expedidos a mediados de 1994 para facilitar la reconstrucción de los municipios directamente afectados por una avalancha del río Páez, política extendida luego a diez años y ampliada para cobijar 13 municipios del Huila y 17 del Cauca, con el fin de brindar exenciones tributarias y otros beneficios a las empresas que localizaran plantas o mejoraran las que ya tuvieran situadas en esos municipios.

* Sociólogo, Profesor del Departamento de Ciencias Sociales y miembro del Grupo de Investigación sobre Acción Colectiva y Cambio Social del CIDSE, en la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Valle, Cali, Colombia. Este escrito es un producto derivado del proyecto de investigación sobre *Desigualdades étnico/raciales, acción colectiva, etnicidad y resistencia en el Norte del Cauca y Sur del Valle*, financiado por la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Valle. El autor agradece el apoyo brindado por Héctor Fabio Ramírez, del Laboratorio de Estadística Social de la Facultad, por el cálculo de la población en edad de votar, así como a Laura Valderrama y Omaira Londoño, estudiantes del Programa de Sociología, que en distintos momentos ayudaron a construir una base de datos sobre acciones de grupos armados irregulares utilizada parcialmente en este capítulo.

La consolidación de Cali como una de las tres principales ciudades del país, gran urbe del suroccidente colombiano y cabeza de una red de asentamientos urbanos intermedios y medianos localizados a su alrededor, lo cual ha inducido procesos de metropolización y conurbación que cobijan el sur del Valle y el norte del Cauca: la progresiva conversión de algunas localidades en ciudades-dormitorio para personas que trabajan en la capital departamental, la opción que comienzan a contemplar algunos corregimientos de otro municipio vecino a Cali para darle forma a uno nuevo, la posibilidad de crear formalmente un área metropolitana compuesta por varios municipios en torno a la capital, la conveniencia de pensar en una ciudad-región a la hora de planificar y emprender obras de infraestructura, la alternativa que tienen las localidades vecinas de gestar asociaciones de municipios sin incluir a Cali,.

La progresiva modernización de la red vial en la región, especialmente la construcción de nuevos tramos de carretera con doble calzada entre el sur del Valle y el norte del Cauca o entre el valle geográfico del río Cauca y el puerto de Buenaventura, proceso que tiene posibilidad de ser complementado con un tren de cercanías entre Santander de Quilichao y Yumbo, todo lo cual facilita la mayor integración entre estas subregiones.

La reconfiguración de la trama social de la región, inducida por los procesos de industrialización, urbanización y modernización material, que han sido mencionados: consolidación de núcleos empresariales ligados al mercado mundial, ampliación y diversificación de las capas de medianos y pequeños industriales, expansión de las clases medias ligadas al comercio y otros servicios, proletarización de sectores campesinos y recomposición de algunos de ellos, incremento del número de subempleados y trabajadores por cuenta propia especialmente en las áreas urbanas.

El surgimiento de nuevas identidades sociales a partir de clivajes distintos a las clases sociales y las categorías ocupacionales, sobre todo a partir de 1991 cuando entró a regir una nueva Constitución Política que reconoció la diversidad constitutiva de la sociedad: etnias indígenas y poblaciones negras, religiosidades no católicas, minorías sexuales, mujeres, jóvenes y comunitarismos locales, principalmente.

La emergencia de nuevos conflictos sociales y redefinición de los previamente existentes en torno a la tierra, el empleo y las condiciones del trabajo, las vías de comunicación, los servicios públicos, la calidad de la salud y la educación, la seguridad ciudadana, la corrupción administrativa, las prioridades de política pública y, muy especialmente, el respeto de los derechos humanos.

La agudización del conflicto armado en una especie de “teatro regional de guerra” en el cual han actuado varios cuerpos especializados de las fuerzas estatales, varios frentes guerrilleros, algunos de los cuales se desmovilizaron a comienzos de los años noventa, y grupos paramilitares no del todo homogéneos, conflicto alimentado de diversas formas por el narcotráfico.

Procesos políticos de variada gama: negociaciones entre los gobiernos nacionales y algunos grupos alzados en armas, reinserción de los desmovilizados y surgimiento de expresiones

políticas que comenzaron a representarlos en su nueva etapa, elección popular de alcaldes desde 1988, aparición de actores sociales que participan directamente en las contiendas políticas, diversificación del mapa político regional, aparición de nuevos municipios, Etc.

Estos últimos, los procesos políticos que han contribuido a configurar la región, son el objeto de análisis en este capítulo: en primer lugar se establecen los límites de la subregión, a partir de los mojones con que la propia dinámica política ha ido demarcando el territorio; luego, se examina la evolución general de las reglas de juego que han enmarcado la actividad política durante el periodo, tratando de distinguir las principales fases de ese transcurso; después, asumiendo la importancia determinante que ha tenido la realización de siete elecciones locales durante el periodo que va de 1988 a 2007, el análisis se concentra en el examen del impacto que ellas han tenido en la pacificación de los conflictos políticos, la búsqueda de mayor participación popular en el funcionamiento de la democracia, la expresión de la diversidad social –principalmente la que deriva de clivajes étnico/raciales–, los niveles de gobernabilidad permitidos por la composición de gobiernos locales y concejos municipales y, finalmente, algunos rasgos de las culturas políticas predominantes.

La idea que guía el análisis, la misma que sirvió de hipótesis en el proceso de indagación que condujo a validarla, es la siguiente: el fortalecimiento de la democracia local, inaugurado con la descentralización política y administrativa de 1986, cuyo resultado más notable fue la elección popular de alcaldes, complementada con las reformas constitucionales de 1991 y favorecida por ciertas medidas específicas de desarrollo económico regional, ha ofrecido oportunidades inéditas a las comunidades indígenas y negras del sur del Valle y el norte del Cauca, para acumular poder y capacidad de intervenir sobre sí mismas de varias formas, entre las cuales se destacan la organización de movimientos cívicos y partidos políticos, el ejercicio continuado del gobierno municipal en varias localidades, una presencia más visible en los concejos municipales, la creación de nuevos municipios y una mayor influencia en la esfera política regional (las Asambleas y las Gobernaciones Departamentales), todo lo cual ha favorecido cierto proceso de integración entre municipios vecinos y ha contribuido a configurar una nueva subregión que tiene entre sus características más destacadas ser, bastante concientemente, pluriétnica.

Fronteras y límites políticos de la región

Desde mediados de los años ochenta del siglo veinte, a raíz de cambios institucionales introducidos para tratar de satisfacer ciertas demandas que importantes sectores sociales venían haciendo al Estado, se desencadenaron procesos de descentralización estatal y participación popular que se tradujeron en el fortalecimiento de los municipios como instancias político-administrativas y, por tanto, cierta tendencia hacia la municipalización de la política.

Lo primero que debe hacerse entonces es identificar las fronteras políticas de la región y sus límites internos, estableciendo con criterios pertinentes cuáles son los municipios que pertenecen a ella, pues los municipios y, en potencia, los corregimientos que hacen parte de cada municipio, es decir: entidades de carácter político-administrativo y base territorial, son las unidades de análisis que más convienen en este caso. Las fronteras y los límites de la región así trazados no pueden contener la totalidad de los procesos que han contribuido a su

configuración, porque algunos de ellos abarcan otros municipios e incluso otras regiones, tal como ocurre con flujos migratorios, dinámicas económicas, escenarios de conflicto, y movilizaciones sociales. Pero es preciso analizar los procesos políticos locales a partir de las configuraciones que ellos mismos generan, porque las regiones se configuran también en función de fenómenos políticos.

En la segunda mitad del decenio de los años noventa, poco después del asesinato de Marden Betancur, alcalde de Jambaló, en 1996, y en medio de un ambiente regional cargado de violencia, varios alcaldes de municipios situados en esta zona dieron vida a la Asociación del Norte del Cauca, Anorca, con el fin de prestarse solidaridad y actuar conjuntamente ante instancias como la Gobernación del Departamento, los Ministerios y algunos Institutos Descentralizados. Esta iniciativa, que declinó un poco después, cuando los mandatarios que la gestaron terminaron sus periodos de gobierno, fue retomada por los que resultaron elegidos en el 2000, quienes se reunieron el 30 de junio de 2001 en Puerto Tejada para firmar un convenio que le dio vida a la Asociación de Municipios del Norte del Cauca, Asunorca. La asociación incluye desde entonces doce municipios: Miranda, Padilla, Corinto, Toribío, Jambaló, Caldoño, Puerto Tejada, Villarrica, Caloto, Santander de Quilichao, Buenos Aires y Suárez, a los cuales debe agregarse Guachené, creado posteriormente, en diciembre de 2006, para completar trece.

Como puede verse, en el caso del norte del Cauca, fue la propia dinámica municipal la que configuró una subregión y no lo hizo sin tensiones, debido a que los nuevos municipios son desprendimientos de los ya existentes y estos siempre se resisten a perder territorio, población y, sobre todo, recursos fiscales: Suárez fue creado en 1989 como un desprendimiento de Buenos Aires, Villarrica en 1998 desprendido de Santander de Quilichao, Guachené en 2006 desprendido de Caloto.

No ha ocurrido lo mismo en el sur del Valle, en buena medida por la presencia cercana de Cali y su influencia directa sobre las localidades vecinas: no existe una asociación de municipios en esta subregión y si, en cambio, opciones que los inducen a privilegiar el nexo que cada uno pueda establecer con la capital departamental, mediante su posible integración en un área metropolitana en torno a Cali, en una dinámica que ha comenzado a afectar la propia integridad de algunos de ellos, como lo ilustra el caso de Rozo, Palmaseca y otros corregimientos de Palmira, que recientemente han dado muestras de querer convertirse en un municipio aparte.

Las administraciones departamentales, por su lado, dando prelación a criterios de localización geográfica, asumen que el sur del Valle está compuesto por diez municipios: Palmira, Pradera, Florida, Candelaria, Jamundí, Cali, Dagua, La Cumbre, Yumbo y Vijes, agrupando así localidades que tienen una gran heterogeneidad en relación con casi cualquier otro criterio que no sea la localización geográfica. Excluyen Buenaventura por considerarla una subregión en sí misma, algo que resulta bastante sensato si se tiene en cuenta que está localizada frente al mar, al otro lado de la cordillera occidental, es el municipio más extenso y uno de los más poblados del departamento y cuenta con una condición económica especial derivada de ser el principal puerto colombiano sobre el Pacífico, a pesar de estar localizado al sur del Valle.

Cali debe ser excluida de la subregión que agrupe a los municipios del sur del Valle en nuestro análisis, porque es un caso especial, está situada en otra escala: la de gran ciudad, y en caso de ser incluida distorsionaría las comparaciones que debemos hacer. Algo parecido puede decirse de Buenaventura, que tiene igualmente una condición especial: ser la principal ciudad del litoral pacífico colombiano, una región distinta de la que aquí examinamos, a la cual también pertenece López de Micay, el extenso y selvático municipio del norte del Cauca situado al occidente de la cordillera occidental, limítrofe con Buenaventura, no perteneciente a Asunorca. Dagua, La Cumbre, Yumbo, Vijes y Palmira están muy al norte del límite interno entre los departamentos del Valle y el Cauca, además de estar mediados por Cali en sus relaciones con el norte del Cauca. Nos quedamos pues con cuatro municipios del sur del Valle: Pradera, Florida, Candelaria y Jamundí.

La región en estudio está compuesta entonces por diecisiete municipios, que tienen entre sí suficiente homogeneidad como para que la comparación entre ellos resulte significativa. Las características básicas de su población son las que aparecen en la Tabla 1.

Tabla 1
Población de los municipios que hacen parte de la región en estudio, 2007

Municipio	Total	Población en edad de votar (18 años o más)	Urbana (%)	Rural (%)	Negra (%)	Indígena (%)
Buenos Aires	27,871	14.065	7.3	92.7	68.2	15.7
Caldono	31,294	18.176	4.4	95.6	0.5	69.8
Caloto	17,408	9.430	24.4	75.6	(18.1)	(48.3)
Candelaria	72,454	42.710	27.9	72.1	52.8	0.1
Corinto	28,955	15.284	42.4	57.6	21.2	34.3
Florida	56,441	33.251	73.4	26.6	31.1	47.0
Guachené	19,553	11.118	24.1	75.9	98.0	0.0
Jambaló	15,111	7.950	7.1	92.9	0.1	96.0
Jamundí	101,192	61.997	67.9	32.1	59.4	0.8
Miranda	34,773	19.562	67.3	32.7	51.4	17.0
Padilla	8,240	4.631	48.4	51.6	93.5	0.7
Pradera	50,011	28.842	86.7	13.3	30.8	0.9
Puerto Tejada	44,568	24.874	88.0	12.0	97.2	0.1
Santander de Quilichao	82,697	47.302	51.8	48.2	31.1	19.3
Suárez	19,101	10.235	25.0	75.0	57.9	21.1
Toribío	26,915	15.139	6.3	93.7	0.2	94.8
Villarrica	14,681	7.813	73.8	26.2	95.9	0.2
TOTAL	651.265	372.379	-	-	-	-

Fuente: DANE, Censo 2005 y Federación Colombiana de Municipios

Son municipios relativamente pequeños, mayoritariamente rurales, con porciones bastante significativas de población negra o indígena. Salvo Jamundí, el de mayor número de habitantes, y Padilla, el menos poblado, los demás oscilan entre los 15 mil y los 80 mil habitantes. En diez de los diecisiete municipios la población es mayoritariamente rural. Localidades de la zona plana del valle geográfico del río Cauca, como Guachené, Puerto Tejada, Villarrica y Padilla, son “municipios negros”, mientras que otras localizadas en zonas de montaña, como Jambaló y Toribío, son “municipios indios”, ya que en los seis casos más del 90% de su población tiene características étnico/raciales distintivas. Otras

ocho localidades tienen población negra o indígena en proporciones que oscilan entre el 50% y el 90%. Pradera es claramente un “municipio mestizo”, el único en que la suma de negros e indígenas no supera el 50%, mientras que Caloto está dividido por partes iguales entre mestizos e indígenas y en Corinto ni unos ni otros alcanzan a ser el 50% de la población total aunque los dos sumados sí.

En general se trata también de “municipios jóvenes”, en los cuales la población en edad de votar estaba en 2007, año de la más reciente elección, entre el 50.5% y el 61.3%.

Cambio constante, ambigüedades y definiciones en las reglas del juego político

Se han realizado siete elecciones municipales desde cuando el Acto Legislativo N° 1 de 1986 dispuso la elección popular de alcaldes, ampliando de esta manera la democracia en Colombia a través de una de sus dos dimensiones principales (Dahl, 1989:13-25): la participación (el derecho a participar en elecciones y en el gobierno), con la esperanza de que a corto plazo se fortaleciera también la segunda: la competencia (la oposición, el debate público), gracias al surgimiento de nuevas opciones políticas diferentes del bipartidismo predominante desde mediados del siglo XIX. El impulso municipalista inicial fue posteriormente complementado con la elección popular de gobernadores, a partir de 1991, y con el ajuste permanente del marco normativo que regula las elecciones locales y regionales. Aún hoy se discuten aspectos que implicarían nuevos ajustes: la posibilidad de permitir la reelección inmediata de los mandatarios municipales y departamentales, así como la conveniencia de unificar la fecha de su elección con la del presidente de la república o la obligatoriedad del voto, entre otros.

Al comienzo, en 1986, se dispuso que a partir de 1988 se realizara elección de alcaldes cada dos años, buscando que su periodo coincidiera con el de los miembros de los concejos municipales. Una determinación que hacía parte de un conjunto de medidas orientadas a promover la descentralización política y administrativa a favor del municipio como instancia de gobierno y gestión. Así se hizo en tres oportunidades: 1988, 1990 y 1992. Se eligieron en marzo, coincidiendo a veces con la elección de congresistas o consultas internas de los partidos, para que se posesionaran el primero de julio, pero en 1994 esto cambió, una vez entraron en vigencia disposiciones derivadas de la nueva constitución política promulgada en 1991.

Entre las novedades de 1991, aquellas que más impacto comenzaron a tener en los ámbitos locales fueron: la ya mencionada elección de gobernadores, la separación de fechas para elecciones locales/regionales y nacionales, el voto programático y la revocatoria del mandato para los alcaldes, la obligatoriedad de usar tarjetas electorales para todas las votaciones, el reconocimiento de movimientos políticos a partir de la recolección de 50 mil firmas o igual número de votos, el laxo sistema de avales a cargo de los partidos o movimientos políticos.

Los gobernadores comenzaron a ser elegidos en octubre, por primera vez en 1991, sin coincidir con elecciones nacionales, para que se posesionaran el primero de enero siguiente, por un periodo de tres años. Esto indujo a que el periodo de los alcaldes y los concejos municipales se ampliara también de dos a tres años, de tal manera que a partir de la cuarta

elección de alcaldes y la segunda de gobernadores, en 1994, esas dos elecciones comenzaron a coincidir, hasta el presente.

La unificación de las elecciones locales y regionales permitió separar la fecha de su realización de la fecha en que hicieran las nacionales, bien fuera para escoger congresistas o presidente de la república. Con esto se buscó brindarle a la dinámica política municipal y departamental el mayor margen de autonomía posible con respecto a la nacional, en donde lo que está en juego es diferente y no tiene mucho que ver con las necesidades locales, aunque si un poco con las regionales. La medida tuvo un efecto secundario que introdujo cierta ambigüedad en el funcionamiento de los gobiernos locales y regionales: le quitó a los alcaldes y gobernadores la posibilidad de intervenir en la definición del presupuesto para su primer año de gobierno.

La posibilidad de que los propios electores revocaran el mandato de los alcaldes, en caso de que estos no cumplieran con el programa de gobierno que habían inscrito junto con su candidatura, unida a los mecanismos de rendición de cuentas ante órganos de control como la Procuraduría y la Contraloría, evitó que esa prerrogativa u otra parecida quedara en manos de los gobernadores o el gobierno nacional, como sucede en otros países y alcanzó a ser propuesto en Colombia. Luego, cuando se reglamentó la revocatoria del mandato, quedó claro que no resulta fácil llevarla a la práctica, debido a la dificultad que ofrecen las barreras que deben superarse para lograrlo. Hay múltiples ejemplos de alcaldes suspendidos de sus cargos, pero muy pocos de alcaldes revocados.

Las primeras elecciones de alcalde, acompañadas de la elección de concejales, se llevaron a cabo mediante el uso de papeletas, tal como se realizaban antes de 1991 todas las elecciones en Colombia. Las papeletas eran entregadas a los votantes por activistas de los partidos en sus propias sedes, lo cual se prestaba para “amarrar” el voto de los electores a cambio de dinero o regalos en especie, al mejor estilo del clientelismo tradicional. La adopción de mecanismos como la tarjeta única entregada por el jurado de votación al elector y la disponibilidad de cubículos para que se pudieran marcar las tarjetas sin presiones de nadie, fueron un gran avance en procura de garantizar el voto libre y secreto. Ese avance trajo dificultades entre los electores, sobre todo en ámbitos rurales y urbanos marginales, menos acostumbrados a reconocer y marcar opciones en una especie de formulario lleno de señales y códigos que, cuando coincidió con la mayor explosión de listas y candidatos, llegó a ser realmente engorroso aún para tramitadores expertos.

Hubo explosión de listas y candidatos en parte porque las barreras que se pusieron para conformar partidos, movimientos o grupos ciudadanos, eran muy fáciles de superar, sobre todo en los municipios más poblados: 50 mil firmas o el mismo número de votos en la elección anterior. Esto no solo favoreció el pluralismo sino que lo exacerbó: produjo atomización y volatilidad, como lo han mostrado varios estudios, en particular aquellos que incluyen un mayor número de elecciones en sus análisis (Hoyos, 2005:45-59). El fenómeno se vio además reforzado por la facilidad con que se permitió entonces el otorgamiento de avales por parte de los grupos políticos a listas y candidatos, sin límite alguno.

Las elecciones locales y regionales de 1994, 1997 y 2000, se llevaron a cabo bajo las reglas de juego dispuestas por la Constitución de 1991 y sus primeros desarrollos legales.

Mientras tanto se siguió discutiendo la necesidad de nuevas medidas no contempladas hasta entonces o la modificación de otras que producían efectos perversos, no esperados o contrarios a lo que se buscaba desde el comienzo: mayor participación popular en las elecciones y consolidación de un pluralismo acotado, además de blindaje contra las influencias del narcotráfico, la corrupción y los grupos armados irregulares.

Después de muchas propuestas y contrapropuestas e, inclusive, la adopción de medidas puntuales como una nueva ampliación del periodo para alcaldes y gobernadores de tres a cuatro años en 2002, por fin se aprobó una nueva reforma política en 2003. Esta reforma se adoptó solo tres meses y medio antes de la séptima elección de alcaldes y la quinta de gobernadores, pero a ella debieron atenerse las elecciones locales y regionales de ese año. Entre las nuevas disposiciones, aquellas que más directamente influyeron la dinámica política local a partir de ese momento, hasta hoy, son: la definición institucional de los periodos para todos los cargos de elección popular, la modificación de los criterios para reconocer partidos y movimientos, la limitación de los avales, el establecimiento de un umbral para que los partidos o movimientos puedan participar en la repartición de escaños de las corporaciones públicas, la adopción del mecanismo de la cifra repartidora para la asignación de dichos escaños y el voto preferente para reordenar las listas de candidatos en función del número de votos que obtenga cada candidato.

A medida que iba pasando el tiempo eran cada vez más los municipios que realizaban elecciones atípicas, es decir en fecha distinta a la fijada para la elección general de alcaldes en todo el país. Esto, debido a que algún fallo judicial dispuso tempranamente, antes de 1991, que cuando un alcalde tuviera que abandonar su cargo sin culminar su mandato y el sucesor debiera ser elegido por votación popular, éste ejercería su mandato durante un nuevo periodo completo. Para superar el desorden que esto producía fue que se optó por una definición institucional de los periodos para todos los cargos de elección popular: en adelante estos tendrían límites temporales fijos y habría una única fecha para renovarlos. Los periodos de alcalde y concejales, gobernador y diputados fueron fijados en cuatro años.

Para corregir la enorme dispersión de partidos, movimientos y grupos ciudadanos, se optó por incrementar las exigencias para ser reconocidos como tales. La recolección de firmas quedó abolida, aunque se mantiene vigente para presentar candidaturas, y en su reemplazo se dispuso que se necesitaba acreditar mínimo un 2% de votos válidos en elecciones de senado o cámara de representantes.

El número de avales que cada partido o movimiento podía otorgar también fue limitado: en adelante cada partido solo podría presentar una lista por cada circunscripción electoral, con un número de candidatos que no superara el de los cargos por proveer.

Con el fin de desestimular la proliferación de pequeños partidos de ocasión, se introdujo como requisito para participar en la repartición de curules la superación de un umbral mínimo de votos, fijado en el 50% del cociente electoral para el caso de asambleas departamentales y concejos municipales, igual que para cámara de representantes. Para el caso del senado se estableció un 2% de la votación nacional.

Para la repartición de escaños en sí misma se introdujo la fórmula d'Hondt, en reemplazo del sistema de cocientes y residuos o fórmula de Hare que se venía utilizando hasta entonces, con lo cual se buscaba favorecer a los partidos grandes y promover el agrupamiento de los partidos chicos.

Se mantuvo el voto preferente, ya ensayado en alguna elección previa, para reordenar las listas por partido en función del número de votos que obtenga cada candidato, antes de asignar las curules en orden descendente. En ausencia de consultas internas obligatorias en los partidos para escoger y jerarquizar sus propios candidatos, esto facilita la confección de listas en partidos con muchos líderes de primer nivel; pero, por otro lado, favorece también la supervivencia de alianzas circunstanciales entre “empresarios” políticos que se asocian para obtener alguna ganancia que esperan luego poderse repartir, sin tener ningún interés en la constitución de partidos fuertes con identidad propia.

Con estas últimas normas se han realizado, hasta ahora, elecciones locales y regionales en 2003 y 2007.

Como puede verse, el marco normativo de los procesos políticos locales y regionales ha sufrido notables variaciones en corto tiempo, unas veces, al comienzo, para promover sin límites la ampliación del espectro político, y otras, más recientemente, para ponerle límites a la explosión que se produjo, siempre con la expectativa de lograr mayor participación popular y menor influencia de actores armados, agentes de corrupción y simples criminales, en un contexto que ha contado con abundante presencia de todos ellos. A pesar de los veinte años transcurridos entre la primera elección de alcaldes y la más reciente, puede decirse que esto se encuentra aún en la fase experimental, es posible que se presenten en cualquier momento nuevas medidas de ajuste en uno u otro sentido, dependiendo no solo de las virtudes que se le atribuyen a la “ingeniería constitucional”, sino de los intereses políticos en juego. Por lo pronto, se pueden distinguir tres fases:

Una primera fase, comprendida entre 1986 y 1992, es decir entre la aprobación de la elección popular de alcaldes y el momento en que se elaboran nuevas disposiciones a la luz de la Constitución Política de 1991, cubre tres elecciones, las de 1988, 1990 y 1992.

Otra fase, entre 1992 y 2003, abarca desde la entrada en vigencia de las novedades inspiradas en la nueva Constitución y la definición del contenido de la reforma política de 2003, abarca otras tres elecciones, las de 1994, 1997 y 2000.

La tercera y, hasta ahora, última fase va de 2003 hasta la fecha, desde cuando entra en vigencia la reforma política de 2003 hasta hoy, en ella se ha realizado dos elecciones, las de 2003 y 2007.

Hay que tener en cuenta la importancia de las elecciones locales de 1988, 1994 y 2003, por ser eventos que condensan importantes transformaciones del proceso global. En esas fechas se han iniciado ciclos marcados por la duración de los cargos para los cuales se eligen alcaldes y concejales: dos años en 1988, tres desde 1994 y cuatro a partir de 2003, cambios que siempre han venido acompañados de nuevas connotaciones para la vida política local.

Democracia local: fortaleza asediada

La región que comprende el sur del Valle y el norte del Cauca sirvió en el pasado como nicho para la gestación de grupos guerrilleros: FARC y Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL), fue luego ámbito de acción privilegiada de esos mismos y otros como el M19, el Frente Ricardo Franco (FRF) y el ELN, así como de un frente paramilitar: el de los Bloques Calima y Farallones. Por esto mismo, ha sido sede de al menos dos de los más importantes procesos de desmovilización de grupos armados irregulares que se han realizado hasta ahora en Colombia: los del M19 y el MAQL, habiendo experimentado también tanto los beneficios que trae la conversión de esos grupos en nuevas opciones políticas legales, a través de la Alianza Democrática-M19 (ADM19)) y la Alianza Social Indígena (ASI), como la frustración que produce el fracaso de los que no han logrado consolidarse, cuyo mejor ejemplo es el que dio origen a la Unión Patriótica. La descentralización política y administrativa emprendida en los años ochenta del siglo pasado –muy especialmente la elección popular de alcaldes–, su complemento: la elección popular de gobernadores, y las nuevas formas de ciudadanía introducidas por la Constitución de 1991, junto con la conformación de nuevos sujetos políticos en esta región, han favorecido la pacificación de la política y la ampliación de la democracia, aún en medio del conflicto armado y, más en general, la violencia, que han persistido. Puede hablarse de una democracia local asediada.

En 1951 la región de Riochiquito, perteneciente al municipio de Paez (Belalcazar), limítrofe con Toribío y Jambaló, habitada mayoritariamente por indígenas paeces, comenzó a ser explorada por unidades guerrilleras provenientes del Tolima bajo la dirección de “Charronegro” (Pizarro, 1991:172). Posteriormente, en 1964, cuando el movimiento de autodefensas campesinas desalojado de Marquetalia (Tolima) se convirtió en guerrilla móvil vino a dar a ese mismo sitio y realizó allí la Primera Conferencia Guerrillera, decidió adoptar la denominación de “Bloque Sur” y trazó planes para adquirir dimensión nacional, antes de desplazarse hacia la región de El Pato (Meta), todo lo cual desembocó tres años después en la conformación de las FARC. Desde entonces la zona de la cordillera situada en el sur del Valle y el norte del Cauca cuenta con la presencia de ese grupo armado, en particular de su sexto frente.

En 1974, coincidiendo con la oleada de luchas por la tierra que había desatado la ANUC tres años antes, surgieron en las zonas indígenas del norte del Cauca algunos núcleos de “autodefensa comunitaria”, asesorados por grupos guerrilleros presentes en la región, para contrarrestar la violencia con que los grandes propietarios se oponían a lo que el movimiento campesino e indígena siempre ha denominado recuperación de tierras (Laurent, 2005:92-93). Diez años después, en 1984, luego de que la fuerza pública desalojara 150 familias indígenas de una hacienda propiedad de un ingenio azucarero y fuera asesinado en Santander de Quilichao el párroco de Toribio, el sacerdote indígena Alvaro Ulcué, se dio a conocer la existencia del Comando Quintín Lame, el mismo que pronto adoptaría la denominación de Movimiento Armado Quintín Lame.

En ese mismo año, el M19 decidió constituir una Fuerza Militar de Occidente con asiento en la región, e inició una serie de acciones que incluyeron una toma de Corinto (abril 1984), otra de Miranda (mayo 1984), un intento de toma en Florida (junio 1984), y después de la tregua que hizo entre agosto de 1984 y abril de 1985, esta vez en unidad de acción con el

Comando Quintín Lame y el Frente Ricardo Franco, una toma de Caloto (abril 1985) y otra de Toribío (abril 1985), entre otras acciones de guerra que tuvieron como escenario no solo la zona montañosa de la región sino también su zona plana, cuando constituyó el denominado “Batallón América”, llegando en abril de 1986 hasta el límite sur del perímetro urbano de Cali.

Mientras tanto, en diciembre de 1985, ocurrió en la región la masacre de Tacueyó, un caso límite de violencia ejercida por los dirigentes de un grupo armado contra sus propios miembros, excepcional por el número de víctimas producidas en un solo episodio pero considerado normal en la vida interna de esos grupos por los motivos que se invocaron para cometerla: 164 miembros de Frente Ricardo Franco, la gran mayoría de ellos campesinos e indígenas de los pueblos vecinos, fueron asesinados por dos de sus comandantes, acusándolos de ser infiltrados del enemigo.

Los años ochenta del siglo veinte fueron pues una época de mucha violencia política en la región, provocada ante todo por la acción de grupos guerrilleros que la escogieron como teatro de operaciones, en parte porque detectaron que había en ella enormes demandas sociales sin satisfacer y, al mismo tiempo, cierta tradición de movilización entre sus pobladores, expresada en recuperación de tierras pero también en paros cívicos y otras formas de protesta: marchas, tomas, concentraciones, etcétera..

Precisamente para desbloquear situaciones como esta, en las cuales coexistían demandas legítimas insatisfechas y gran potencial de autogestión por parte de las comunidades locales, cobró fuerza en ciertas elites nacionales la idea de emprender un gran proceso de descentralización política y administrativa que pusiera en manos de actores locales, principalmente alcaldes elegidos mediante el voto directo de sus coterráneos, la solución de los principales problemas. Fue un conjunto de medidas pensadas también para neutralizar la influencia de los grupos armados, renovar el liderazgo político, incrementar la participación cívica y ampliar la democracia (Castro, 1986:33-85). Tanto el proceso de descentralización, para fortalecer la democracia local, como la “apertura política”, para atraer las guerrillas a un proceso de negociación, hacían parte de un mismo proyecto, inspirado a su vez en experiencias y tendencias internacionales: los acuerdos de paz en Centroamérica y la descongestión del Estado Central en la mayor parte del mundo.

Las guerrillas fueron efectivamente atraídas por las propuestas de negociación del Gobierno: una de ellas ensayó la participación en la vida democrática sin abandonar la acción armada y contribuyó de esta manera a producir un dramático fracaso, al cual aportaron en igual o mayor medida los enemigos del proceso de reconciliación, como lo demuestra el costo que debieron pagar los grupos que abandonaron sin reservas la acción armada y se enrutaron por el camino de la acción política no violenta.

En marzo de 1984 las FARC firmaron con el Gobierno, en La Uribe (Meta), un acuerdo de tregua que comenzaría a regir desde el 28 de mayo de ese mismo año. Pocos meses después, en agosto, el M19 y el EPL suscribieron acuerdos de tregua en Corinto (Cauca), El Hobo (Huila) y Medellín. El acuerdo con el M19 fracasó debido a la mutua desconfianza de las dos partes y la sospecha de que esa guerrilla continuaba realizando acciones militares a través de otros grupos armados. El ejército cerró el cerco sobre los campamentos que ese

grupo instaló primero en el alto de Yarumales y luego en Los Robles, ambos en jurisdicción del municipio de Corinto, para concentrar sus efectivos mientras transcurrían los diálogos. La ruptura se produjo en marzo de 1985 y se protocolizó tres meses después. En ese mismo marzo surgió la Unión Patriótica, como brazo político de las FARC, y se alistó para participar en las elecciones previstas para un año después. Allí obtuvo 3 senadores, 9 representantes (incluidos dos comandantes guerrilleros), veinte diputados en las asambleas departamentales y trescientos concejales en todo el país. En las elecciones presidenciales de mayo siguiente el candidato de la UP, Jaime Pardo Leal, obtuvo un significativo 4.5% de los sufragios. Luego, en junio de 1987, las FARC atacaron efectivos de un batallón en Caquetá, el Gobierno declaró rota la tregua en esa sección del país, se formó la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar con participación de todos los grupos insurgentes, en octubre fue asesinado Jaime Pardo Leal, se produjeron las primeras masacres protagonizadas por los paramilitares en la zona de Urabá y se recrudeció la confrontación armada, ahora con ingredientes de guerra sucia.

En medio del conflicto reactivado, en marzo de 1988, se realizaron los primeros comicios locales que incluían elección popular de alcaldes. La UP obtuvo 16 alcaldes y más de 50 concejales, mientras que “el Frente Popular apoyado por el EPL, con listas propias para concejos y asambleas, obtuvo dos alcaldes, 30 concejales y dos diputados” (Villamizar, 1995:521). Entre agosto de 1986 y marzo de 1988, el gobierno presidido por V. Barco había designado 25 alcaldes afiliados a la UP en aquellos municipios en los cuales la votación por el candidato presidencial de esa colectividad había sido relativamente alta en las elecciones presidenciales de mayo de 1986, de tal manera que a partir de 1988 tuvo nueve alcaldías menos, solo que ahora todas las 16 eran producto del grado de influencia de la que se perfilaba como tercera fuerza política en Colombia.

En febrero de 1989 el sucesor de Pardo Leal en la UP, Bernardo Jaramillo, tomó distancia de las FARC al condenar públicamente la vía armada y la degradación de las prácticas guerrilleras. En mayo el M19 secuestró a Alvaro Gómez, para forzar nuevos diálogos. En julio, después de liberado, se produjeron encuentros múltiples para concretar una propuesta de negociaciones. En septiembre el presidente Barco presentó su Iniciativa de Paz e inmediatamente las FARC, el M19 y el MAQL se mostraron favorables al llamado del Gobierno. Las FARC propusieron entonces una “comisión de notables” para respaldar el diálogo y, una vez conformada, en febrero de 1989, declararon un nuevo cese de fuego. En marzo el M19 instaló en la vereda de Santodomingo, municipio de Toribío (Cauca), una “ciudadela de paz”, inició negociaciones y un año después, en marzo de 1990, entregó sus armas y desmovilizó sus 900 hombres. El acto protocolario de dejación de armas se realizó en Caloto el 9 de marzo de 1990. Faltaban escasos dos días para la segunda elección de alcaldes y la correspondiente renovación de corporaciones públicas.

El M19 alcanzó a presentar seis candidatos propios a las alcaldías de Almaguer y Silvia, en el Cauca, Yumbo y Vijes, en el Valle, Bogotá y otra localidad en Cundinamarca. Ganó en Almaguer (Cauca), donde no tuvo contendor y obtuvo 33 votos, tuvo buen desempeño en Yumbo (Valle), donde obtuvo el 42% de la votación y en Bogotá, donde alcanzó el 7.75% de los sufragios (Ocampo y Ruiz, 1991:184). La UP, convertida ya en blanco de lo que después se ha denominado un “politicidio”, por la creciente cantidad de sus miembros que venían siendo asesinados, obtuvo magros resultados: once alcaldías con candidatos propios

—cinco menos que en la elección anterior—, a las cuales habría que agregar por lo menos una en coalición, la de Florida (Valle), en donde apoyó un candidato liberal que ganó con el 46.5 de los votos (Gaitán, 1992:108). El Frente Popular, auspiciado por el EPL, obtuvo por su parte la alcaldía de San Alberto, en el departamento del Cesar (Gaitán, 1992:96).

La guerra sucia continuó: el 22 de marzo fue asesinado Bernardo Jaramillo, máximo líder de la UP, y el 26 de abril ocurrió lo mismo con Carlos Pizarro, máximo líder del M19. Pero, al mismo tiempo, se abrió paso un proceso constituyente y nuevos grupos guerrilleros buscaron la paz.

Entre el 26 de junio de 1990 y el 1° de junio del año siguiente, el Movimiento Armado Quintín Lame realizó su propio proceso de paz: en marzo de 1991 instaló un campamento de negociación en Pueblo Nuevo, resguardo indígena situado en el municipio de Caldono y allí mismo, el 31 de mayo, entregó sus armas y desmovilizó sus 157 efectivos. Al otro día su vocero, Alfonso Peña, tomó posesión como miembro de la Constituyente que ya venía sesionando desde el 5 de febrero. En las deliberaciones de la Asamblea que redactaba una nueva Constitución se encontró con dos indígenas que habían sido elegidos por votación popular, con plenos derechos: el guambiano Lorenzo Muelas, en representación de AICO (Autoridades Indígenas de Colombia) y Francisco Rojas Birry, apoyado por el MAQL, en representación de la ONIC (Organización Indígena de Colombia). Pocos meses después, en junio de 1991, nació un nuevo movimiento político: la Alianza Social Indígena (ASI), en una reunión realizada en Yaguará, municipio de Chaparral (Tolima), a la cual asistieron líderes indígenas de varios departamentos, dirigentes campesinos del Cauca, desmovilizados del MAQL y dirigentes de “Pueblos Unidos”, una organización de pobladores urbanos de Popayán, surgida después del terremoto de 1983.

En julio de 1991 se promulgó la nueva Constitución y se produjeron las reformas políticas ya mencionadas con relación al fortalecimiento de la democracia local y regional. El antiguo M19 estaba ahora disuelto en la Alianza Democrática-M19 y el antiguo MAQL se había diluido para dar paso a la ASI. Había un nuevo clima político, pero dos grupos guerrilleros persistían: FARC y ELN, igual que los paramilitares, a través de las AUC, fuertemente ligados al narcotráfico. La UP comenzaba a ser cosa del pasado: sucumbió en medio de un baño de sangre. Las FARC sacaron de esa experiencia lecciones que las condujeron a concentrarse aún más en la acción armada, tanto, que luego no supieron aprovechar la nueva oportunidad que tuvieron durante el gobierno de Andrés Pastrana .

Para el caso de los municipios del sur del Valle y el norte del Cauca, el desempeño de los grupos políticos surgidos a partir de procesos de desmovilización guerrillera mostró tendencias similares a las que se presentaron a nivel nacional, con una notable excepción: la consolidación de la ASI, que desde su origen ha tenido en esta región uno de sus fortines.

A pesar de la falta de información sobre número de concejales elegidos por partido en los comicios de 1986 y 1990, en la Tabla 2 se destaca el dramático declive de la UP, que pasó de tener 10 concejales en 1988, con presencia en cuatro concejos municipales de la región, a su virtual desaparición del mapa político de la comarca en 1994, para reaparecer de nuevo en 1997 con un concejal en Santander de Quilichao. Es notable también la evolución de la ASI que, creada en 1991, no alcanzó a estar disponible para inscribir candidatos propios en

1992, aunque respaldó muchos que se habían inscrito a nombre de movimientos cívicos en varios municipios, obtuvo luego 28 en 1994, que le dieron presencia en nueve municipios, y prácticamente mantiene ese número en 1997, aún sin tener en cuenta algunas localidades para las cuales no hay datos (Buenos Aires, Corinto y Suárez), De la ADM19 puede decirse que se sostuvo con baja presencia y pequeñas oscilaciones durante el periodo. Después de 1997 se produjeron realineamientos políticos que pusieron punto final al ciclo de la UP y la ADM19. La ASI siguió adelante.

Tabla 2
Número de concejales elegidos en representación de movimientos políticos surgidos a partir de procesos de desmovilización guerrillera, 1988-1997

Municipio	1988	1990	1992			1994			1997		
	UP	UP	UP	ADM19	ASI	UP	ADM19	ASI	UP	ADM19	ASI
Buenos Aires	1	s.i.							-	-	-
Caldono		s.i.						3		3	7
Caloto		s.i.					1	2			2
Candelaria		s.i.		1							
Corinto	2	s.i.	1					6	-	-	-
Florida		s.i.		1				1			
Guachené	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jambaló		s.i.						6			8
Jamundí	1	s.i.	1	1							
Miranda		s.i.						2			
Padilla		s.i.									
Pradera		s.i.		1							
Puerto Tejada		s.i.		1						1	
S. Quilichao	1	s.i.						1	1		1
Suárez	-	s.i.						1	-	-	-
Toribio		s.i.						6			8
Villarrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	5	s.i.	2	5	0	0	0	28	1	4	26

Fuente: Estadísticas electorales de la Registraduría Nacional del Estado Civil

La democracia local se fortaleció en la región después de las desmovilizaciones guerrilleras producidas a finales de los años ochenta y comienzos de los noventa, las elecciones locales siguieron realizándose en las fechas acordadas y los lugares previstos, casi sin excepción; pero, el asedio continuó: las guerrillas que siguieron actuando, en particular las FARC, coparon buena parte del espacio dejado por las que se desmovilizaron y los paramilitares, aliados de los narcotraficantes, organizan mejor su presencia a través de las AUC. Estas llegaron al Valle en julio de 1999, solo un mes después del secuestro que el ELN hizo en la iglesia La María, en Cali. Luego, en febrero de 2000, dieron a conocer un comunicado que enviaron a varios alcaldes del sur del Valle y el norte del Cauca en el que anunciaron que habían llegado para quedarse y realizaban amenazas contra los mandatarios locales. Los bloques de las AUC que actuaron en la región se desmovilizaron en 2004, pero sus remanentes, denominados “grupos emergentes”, y las estructuras armadas que siempre habían estado al servicio del narcotráfico puro continuaron estando presentes.

La presencia paramilitar potenció en la región las estrategias mafiosas de intromisión en la política local que ya los grupos de narcotraficantes practicaban desde antes. Como es obvio, sobre este fenómeno no existe información suficientemente confiable, pero hay indicios e información no certificada. De las declaraciones concedidas hasta ahora por líderes del Bloque Calima de las AUC, como Everth Veloza y algunos de sus subalternos, se desprende que varios mandos militares y algunos alcaldes de la región colaboraron con ellos: han mencionado en particular un ex alcalde de Puerto Tejada y otro de Florida (El País, 05 y 19 de agosto de 2008). De lo que afirman no pocos activistas políticos en los municipios se deduce que los niveles de intromisión han sido mayores y siguen existiendo. En realidad el asedio a la democracia local siempre ha estado presente en la región, han cambiado un poco sus protagonistas pero el fenómeno persiste.

Un panorama global y muy parcial de las dimensiones de este asedio de los grupos armados contra la democracia local puede apreciarse en la Tabla 1 del Anexo. Allí aparecen señaladas algunas de las principales acciones violentas que los grupos armados –no importa cuál–, protagonizaron en cada uno de los municipios de la región durante los años en que hubo elecciones locales, entre 1988 y 2007. Los municipios más afectados fueron primero Florida y luego Toribío, pero también Jamundí, Santander de Quilichao y Caldono se vieron seriamente alterados. Asesinato de concejales o candidatos al concejo ocurrieron en Caldono y Corinto, secuestro de alcaldes y concejales o candidatos a esos cargos hubo en Buenos Aires, Florida, y Jamundí. Los municipios menos afectados por este tipo de acciones fueron los de la zona plana del norte del Cauca.

Mayor participación, no tanta como la esperada

En 1986 se realizaron los últimos comicios locales sin elección de alcaldes. En esa oportunidad solo uno de los trece municipios de la región: Buenos Aires –que entonces contenía al futuro municipio de Suárez, creado en 1989–, tuvo abstención por debajo del 50%, todos los demás registraron porcentajes más altos, entre 65% y 90%. Luego, con elección simultánea de concejales y alcalde, la abstención ha cedido de manera gradual en prácticamente todos los municipios de la región.

La primera elección de alcaldes, sin embargo, no implicó un cambio tan drástico en los niveles de participación, a pesar de la enorme novedad que representó. De acuerdo con las cifras que aparecen en la tabla 3, entre 1986 y 1988, la participación electoral aumentó en la mayoría de los trece municipios entonces existentes, pero no lo hizo de manera significativa: creció entre cinco y diez puntos porcentuales. Candelaria fue la excepción, allí la participación dio un salto al pasar de 10% a 40%. Por otro lado, hubo dos municipios, Puerto Tejada y Buenos Aires, en donde la participación disminuyó. Los mismos doce municipios que tuvieron abstención por encima del 50% en 1986 la continuaron presentando en 1988.

La ampliación del periodo de alcaldes y concejales de dos a tres años, así como las demás reformas producidas por la Constitución de 1991 en la democracia local, ayudaron a consolidar las tendencias que se venían presentando pero no actuaron como estímulo extraordinario para incrementar los niveles de participación electoral. Si se comparan las cifras de 1988 y 1994, se comprueba que esta aumentó de nuevo en la mayoría de los

municipios entre 1.4% y 10%, destacándose los casos de Candelaria y Miranda; pero, se mantuvo prácticamente igual en otros, como Caldono y Corinto, o inclusive disminuyó tan drásticamente como en Buenos Aires –ya sin el territorio y la población que ahora hacían parte del nuevo municipio de Suárez–, donde dio un salto atrás al pasar de 62% a 47%. Todos los municipios de la región tuvieron abstención por encima del 50% en 1994.

Tabla 3
Abstención en cuatro elecciones claves para Concejo en los municipios de la región del sur del Valle y norte del Cauca

Municipio	Variable	1986	1988	1994	2003
Buenos Aires	Población > 18 años	9.988	10.318	11.376	13.170
	Votación Concejo	6.793	6.472	5.358	5.288
Caldono	Población > 18 años	15.721	15.942	16.624	17.712
	Votación Concejo	4.564	5.381	5.469	8.368
Caloto	Población > 18 años	19.714	19.744	19.834	19.970
	Votación Concejo	6.205	6.087	7.502	13.928
Candelaria	Población > 18 años	30.784	31.763	34.888	40.162
	Votación Concejo	3.356	12.870	14.827	27.024
Corinto	Población > 18 años	12.008	12.287	13.166	14.603
	Votación Concejo	2.749	3.002	3.400	7.376
Florida	Población > 18 años	30.525	30.776	31.542	32.727
	Votación Concejo	9.848	11.393	13.469	21.217
Guachené	Población > 18 años	-	-	-	-
	Votación Concejo	-	-	-	-
Jambaló	Población > 18 años	s.i.	s.i.	s.i.	s.i.
	Votación Concejo	1.001	1.285	2.150	3.171
Jamundí	Población > 18 años	39.315	41.062	46.784	56.896
	Votación Concejo	10.289	11.148	15.702	24.665
Miranda	Población > 18 años	13.748	14.218	15.727	18.294
	Votación Concejo	3.572	4.098	5.887	9.009
Padilla	Población > 18 años	5.237	5.176	4.997	4.740
	Votación Concejo	1.564	1.826	2.118	3.744
Pradera	Población > 18 años	22.590	23.121	24.790	27.521
	Votación Concejo	7.603	10.065	12.325	16.931
Pto Tejada	Población > 18 años	23.215	23.371	23.844	24.574
	Votación Concejo	6.998	6.712	9.239	11.860
S de Quilichao	Población > 18 años	34.295	35.365	38.781	44.531
	Votación Concejo	11.967	12.719	14.582	26.959
Suárez	Población > 18 años	-	-	10.713	10.383
	Votación Concejo	-	-	3.876	7.548
Toribío	Población > 18 años	13.074	13.256	13.818	14.707
	Votación Concejo	2.264	3.310	4.232	7.022
Villarrica	Población > 18 años	-	-	-	s.i.
	Votación Concejo	-	-	-	3.740

Nota: La población total de Jambaló en las cuatro fechas y la de Villarrica en la última fecha, no pudieron ser calculadas, porque la metodología utilizada se basó en los microdatos del censo de 1993, en el cual no aparecen cifras para el primer municipio mientras que el segundo aún no existía.

Fuente: Estadísticas electorales de la Registraduría Nacional del Estado Civil

Un cambio más significativo se nota en 2003, cuando fueron elegidos concejales y alcaldes para un periodo nuevamente ampliado, de tres a cuatro años. Esta vez, en todos los municipios menos uno, Buenos Aires, volvieron a aumentar los niveles de participación, con respecto a 1994, y en varios de manera muy notable. Padilla, por ejemplo, tuvo una participación cercana al 80% y en Caloto fue del 70%. Además, ahora solo siete de los quince municipios para los cuales hay información tuvieron abstención por encima del 50%.

La primera elección de alcaldes o las dos ampliaciones de periodo para los mandatarios locales y los concejales municipales, igual que otras medidas que acompañaron en su momento a estas, produjeron impactos inmediatos de baja intensidad en los niveles de participación electoral. Pero, sumadas una a una estas medidas, junto con la experimentación y el aprendizaje que en torno a ellas realizaron las comunidades locales, generaron una tendencia gradual hacia el incremento de la participación que aún puede seguir avanzando, a condición de que el “Estado Municipal” siga siendo fuerte y, sobre todo, cuente con suficientes recursos para cumplir sus funciones.

Como ya se dijo, a partir de 1994 comenzó a usarse la tarjeta única electoral que los miembros del jurado entregan desde entonces a los votantes después de haber presentado su cédula de ciudadanía. Dejó de utilizarse la tradicional papeleta electoral, que se prestaba para la manipulación en gran escala de los electores por parte de los activistas políticos. La nueva tarjeta trajo, sin embargo, algunas dificultades: no pocos electores acostumbrados a llegar con el voto hecho para depositarlo en la urna, fueron incapaces de marcar por su propia cuenta, en el cubículo dispuesto para ello, en secreto, sus preferencias electorales. Se incrementó la cantidad de “votos residuales”, aumentó el desperdicio de votos.

Ya que no hay cifras sobre la cantidad de votos de esta clase que fueron depositados en las elecciones para concejo municipal entre 1988 y 1997, se puede apelar a las cifras que arroja la elección de alcaldes. Tampoco en este caso hay cifras para las tres elecciones que conforman el primer ciclo, las de 1988, 1990 y 1992, cuando se elegía alcalde para periodos de dos años; pero, sí para las restantes, incluidas las de 1994 y 2003, años en los cuales se inauguran los dos ciclos restantes: 1994-2000, en que se eligieron alcaldes para tres años, y 2003-2007, en que se eligen para cuatro años¹. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que en 1994 la Registraduría no distinguía aún entre votos nulos y tarjetas no marcadas, comenzó a hacerlo a partir de 1997, así que para la primera fecha los votos nulos incluían las tarjetas no marcadas, en los porcentajes que aparecen en la Tabla 4.

En pequeños municipios con abundante población rural, como la gran mayoría de los que componen esta región, es difícil atribuir un sentido claro y diferente a cada una de las tres categorías de “voto residual”. No obstante, se puede suponer que el significado de ellas tiende a ser el mismo que presentan en sociedades urbanas intermedias y grandes.

¹ La elección popular de alcaldes y el consiguiente fortalecimiento de la democracia local parecen haber tomado por sorpresa a la Organización Electoral en Colombia. Datos sobre votos en blanco o votos nulos en elecciones para concejo municipal, que la Registraduría Nacional del Estado Civil había incluido en sus Estadísticas Electorales de 1986, no fueron publicados luego entre 1988 y 1997, ni para elección de concejales ni para elección de alcaldes. Tampoco los detalles sobre la categoría “otros partidos y movimientos”. La información más deficiente es la de 1990.

Depositamos votos en blanco principalmente quienes están de acuerdo con el sistema electoral, pero no encuentran candidatos por los cuales valga la pena votar. Son votantes comprometidos.

Dejan la tarjeta sin marcar quienes se acercan a las urnas y renuncian a votar en el último momento porque el diseño de las tarjetas ofrece dificultades que les parecen insuperables. Son votantes perplejos.

También dejan la tarjeta sin marcar los que buscan solamente beneficios personales tangibles, tanto los que otorga la Ley (un día libre de trabajo, rebajas en matrícula estudiantil y servicio militar, etcétera), como los que reparten los activistas de los partidos y movimientos políticos el día de elecciones (dinero, comida, materiales de construcción, Etc). Son votantes mercaderes.

Anulan el voto quienes, tratando de superar las dificultades que ofrece el diseño de las tarjetas, se equivocan, la marcan mal o la dañan. Son votantes confundidos.

Tabla 4
Porcentaje de votos en blanco, tarjetas no marcadas y votos nulos en la elección de alcaldes, en la región del sur del Valle y el norte del Cauca, 1988, 1994 y 2003

Municipio	1994			2003		
	Blancos	No Marcados	Nulos	Blancos	No Marcados	Nulos
Buenos Aires	0.73	-	6.61	1.16	9.57	2.73
Caldono	0.95	-	8.20	0.82	7.83	2.58
Caloto	1.32	-	5.22	1.12	6.89	1.65
Candelaria	1.68	-	6.81	3.05	6.36	1.81
Corinto	0.76	-	6.91	0.47	4.82	0.82
Florida	2.16	-	3.31	2.54	4.53	1.74
Guachené	-	-	-	-	-	-
Jambaló	0.41	-	5.81	2.90	10.11	0.72
Jamundí	2.63	-	6.70	3.60	3.77	0.77
Miranda	0.57	-	3.56	0.91	4.17	1.78
Padilla	0.84	-	4.53	0.80	3.54	1.39
Pradera	1.02	-	3.75	5.22	5.77	1.93
Pto Tejada	1.45	-	7.06	s.i.	s.i.	s.i.
S de Quilichao	1.20	-	6.63	1.88	5.60	1.44
Suárez	0.41	-	7.22	0.79	5.69	1.09
Toribío	0.73	-	5.20	0.46	8.91	2.72
Villarrica	-	-	-	-	-	-

Fuente: Estadística Electorales de la Registraduría Nacional del Estado Civil

El voto en blanco no tuvo mayores variaciones entre 1994 y 2003 en la región, aunque en esta última fecha superó el 5% de la votación total en Pradera, un monto elevado, a pesar de que los electores tuvieron cuatro candidatos de partidos diferentes para escoger. La menor cantidad de voto blanco se produjo en Suárez (1994) y Toribío (2003)

En once de los catorce municipios para los cuales hay datos en ambas fechas, la cantidad de votos nulos y no marcados de 2003 es mayor que la de votos nulos de 1994. Las excepciones son Corinto, Padilla y Jamundí. En la primera elección con tarjeta, la de 1994, diez de los quince municipios entonces existentes tuvieron votos nulos (probablemente depositados por votantes perplejos y votantes confundidos), en proporciones mayores al 5%. En la elección de 2003 ocurrió lo mismo (es decir, la suma de votos nulos y tarjetas no marcadas superó el 5%), en todos los municipios menos en Jamundí.

Si para 2003 se analizan aparte las tarjetas no marcadas y los votos nulos resulta particularmente notable la cantidad de votantes perplejos (que dejan sin marcar su tarjeta), en todos los municipios, sobre todo en Jambaló, donde superó el 10% del total de la votación, y en Buenos Aires, Toribío y Caldone, donde estuvo por encima del 7.5%. Los votantes confundidos (que anulan sus votos), por su parte, fueron mas en Buenos Aires y Toribío. Perplejidad y confusión se llevan más del 10% de la votación en Buenos Aires, Toribío y Jambaló, municipios con predominio de población campesina, negra el primero e indígena los otros dos.

La expresión política de la diversidad social

Otro de los rasgos característicos del proceso político experimentado en la región durante el periodo examinado es la explosión de diversidad que se ha presentado. Hasta la implantación de la elección popular de alcaldes la región era abrumadoramente liberal, pero a partir de ese momento fueron apareciendo nuevas opciones: unas derivadas de los procesos de desmovilización guerrillera, otras bajo la forma de movimientos cívicos, algunas que surgieron a partir de sucesivos realineamientos partidistas y otras mas, gestadas directamente a partir de clivajes sociales, especialmente religiosos y étnicos.

En una investigación sobre la evolución de la política local desde los años treinta del siglo veinte hasta la víspera de la primera elección de alcaldes, en la cual se tomaron como base las elecciones de representantes a la Cámara (Pinzón, 1989), se demuestra que el sur del Valle y el Norte del Cauca fueron homogéneamente liberales y que en la mayor parte de los municipios situados allí el grado de implantación de ese predominio era alto, tal como lo muestra la Tabla 5: Hegemónico (H = entre 80% y 100% de votos por el partido predominante), o con Control Partidista (CP = entre 61% y 79% de votos por el partido dominante). Por momentos Candelaria, Florida, Jamundí, Miranda y Toribío tendieron a ser competitivos (CT = entre 50% y 60% de los votos favorecen al partido mayoritario). Solamente dos municipios: Caldone y Pradera clasifican como “No Tradicionales”, más el primero que el segundo, según la discutible definición que de esa categoría se usa en dicha investigación (para indicar que al menos dos veces en el periodo considerado la mayoría pasó de uno a otro partido). Como única excepción, Toribío figura con un desplazamiento hacia la izquierda en el periodo 1972-1982, debido a que en la elección de este último año un Frente Democrático obtuvo mayoría. Si se tienen en cuenta elecciones presidenciales habría que reconocer un matiz adicional: en los comicios de 1970, cuando G. Rojas Pinilla estuvo a punto de ganarle al candidato del Frente Nacional, los dos únicos municipios de la región en los cuales la Anapo obtuvo más de la mitad de los votos fueron Florida y Pradera (Gaitán, 1992:132). Pero, salvo los matices mencionados, se trata sin duda de una región tradicionalmente liberal.

Tabla 5
Filiación política predominante y nivel de implante en cada municipio, 1931-1982

Municipio	1931-1949	Frente Nacional	1972-1982	1984
Buenos Aires	Liberal (H)	Liberal (H)	Liberal	Liberal
Caldono	No Tradicional (CP)	No Tradicional (CP)	No Tradicional	Liberal
Caloto	Liberal (H)	Liberal (CT)	Liberal	Liberal
Candelaria	Liberal (CT-H)	Liberal (V)	Liberal	Liberal
Corinto	Liberal (H)	Liberal (H)	Liberal	Liberal
Florida	Liberal (CT-CP)	Liberal (CT)	Liberal	Liberal
Guachené	Creado en 2006	Creado en 2006	Creado en 2006	Creado en 2006
Jambaló	Liberal (H)	Liberal (H-CT)	Liberal	Liberal
Jamundí	Liberal (CT-H)	Liberal (H.CT)	Liberal	Liberal
Miranda	Liberal (CT)	Liberal (H-CT)	Liberal	Liberal
Padilla	Creado en 1967	Liberal (H)	Liberal	Liberal
Pradera	Liberal (CP-CT)	No Tradicional (CT-CP)	Liberal	Liberal
Puerto Tejada	Liberal (H)	Liberal (H)	Liberal	Liberal
S. de Quilichao	Liberal (H)	Liberal (H)	Liberal	Liberal
Suárez	Creado en 1989	Creado en 1989	Creado en 1989	Creado en 1989
Toribio	Liberal (V)	Liberal (CT-CP)	Liberal (1 Izq)	Liberal
Villarrica	Creado en 1998	Creado en 1998	Creado en 1998	Creado en 1998

- Notas: 1) No Tradicional quiere decir que durante el subperiodo la mayoría cambió de un partido a otro más de una vez, normalmente entre liberal y conservadora.
2) Nivel de implante: CP = Competencia, CT = Control, H = Hegemónico, V = Variable
3) El periodo 1972-1982 es muy corto, como para calificar el nivel de implante
4) Para 1984 se indica simplemente la mayoría predominante

Fuente: Pinzón, 1989: tablas 7 y 23

Lo que sucedió a partir de 1988 fue que comenzó a romperse la estructura bipartidista en virtud de la cual el liberalismo tenía garantizado su lugar como fuerza mayoritaria y el conservatismo en de primera minoría. Es algo que, en ausencia de datos completos sobre número de votos por partido en cada elección de concejos municipales², puede observarse con base en el número de concejales elegidos por cada agrupación partidista, tal como o muestra la tabla 6.

La región ha seguido siendo mayoritariamente liberal, nunca el Partido Liberal ha dejado de ser la fuerza mayoritaria, a pesar del progresivo decrecimiento de su número de concejales y los desprendimientos que han dado origen a varias disidencias y, más recientemente, a nuevos partidos.

² La Registraduría Nacional del Estado Civil no ha publicado hasta ahora datos sobre el número de votos obtenidos por cada partido o movimiento político en cada municipio en las elecciones para concejo de 1988, 1990 y 1994. Por otra parte, los discos que ha publicado con información sobre las elecciones locales de 1997 y 2000 están diseñados de tal manera que hacen prácticamente imposible extraer este tipo de datos. A partir de 2003, es decir para las dos más recientes elecciones locales, por fin esa entidad encontró la manera adecuada de presentar datos sobre elecciones locales. La Registraduría podría publicar en el nuevo formato que usa desde 2003 los datos de las elecciones locales anteriores y saldar así una deuda que tiene pendiente con la opinión pública y los investigadores sociales.

Tabla 6
Concejales elegidos por partido en la región del sur del Valle y norte del Cauca, 1986-2007

Partido	1986	1988	1990	1992	1994	1997	2000	2003	2007
Liberal	66	102	s.i.	75	109	94	91	54	50
Nuevo Liberalismo		2	s.i.					1	
Apertura Liberal							12	19	16
Conservador	31	25	s.i.	16	28	20	13	13	15
MSN				1	3		1		
M Humbertista						3	1		
F Progresista							4		
M Unionista							9	5	
MN Ayuda Mutua					1				
Popular Colombiano							4		
M Comunal y Comunitario							3	2	
M Independiente de Renovación							1		
Convergencia Ciudadana							1	9	19
M Popular Unido							9	33	
Equipo Colombia								10	
Somos Colombia								3	
M Nacional								1	
M Integración Popular								1	
Nuevo Partido								1	
Huella Ciudadana								4	
M Cívico Independiente								5	
M de Participación Ciudadana								1	
Alas-Equipo Colombia									3
Partido de la U									13
Cambio Radical									8
Colombia Democrática									1
Colombia Viva									1
Verde Opción Centro									4
Anapo						6	6	2	
Unión Patriótica	15	5	s.i.	2		1			
Alianza Democrática-M19				5	1				
Educación Trabajo y Cambio					2	1			
Alternativa Democrática						1	6		
M19						4			
Vía Alterna							3		
Polo Democrático Independiente								2	
Polo Democrática Alternativo									12
Unión Cristiana				1	1				
C4						1	1		
MIRA									1
ASI					21	26	32	40	44
AICO							1		
M Nal de Comunidades Negras						1			
M Nal Afrodescendiente									6
ASA									7
Coaliciones		4	s.i.			2	3		
Otros	15	24	s.i.	73	4	1			15

Fuente: Cálculos propios con base en Tablas anexas 2, 3 y 4.

Ese predominio se encuentra concentrado en los municipios de la zona plana con mayoría de población afrodescendiente, tales como Candelaria, Guachené, Miranda, Padilla, Puerto Tejada, Santander de Quilichao y Villarrica. También en Buenos Aires, Corinto y Pradera el peso del liberalismo ha sido bastante notable. El Partido Conservador, por su parte, vio amenazada su condición de segunda fuerza política en la región desde 1988, hasta que la perdió en 1997, ha mantenido más presencia relativa en Florida que en cualquier otro municipio y por momentos ha logrado convertirse en mayoría del concejo municipal de Toribío (1994), o compartirla con otro grupo en Caldonó (2007).

Algunos antecedentes mencionados en párrafos anteriores indican que la izquierda política ya había incursionado en la región, antes de los años ochenta del siglo veinte, a través de agrupamientos que habían logrado esporádicos niveles marginales de representación en los concejos municipales. A partir de ese decenio la presencia de fuerzas de izquierda, corridas ahora un poco hacia el centro, comenzó a ser más consistente. Como producto de las desmovilizaciones guerrilleras surgieron la Unión Patriótica, la Alianza Democrática-M19 y, en parte, la Alianza Social Indígena. La UP estuvo vigente entre 1986 y 1997, en constante declive. La AD-M19 logró escasísima representación en 1992 y 1994, cuando se dividió para dar paso a otros grupos: Educación, Trabajo y Cambio Social, Alternativa Democrática, M19, Vía Alterna, entre otros, los cuales volvieron a agruparse parcialmente en el Polo Democrático Independiente en 2003 y, más adelante, junto con una Anapo renacida y otros más, en el Polo Democrático Alternativo, que obtuvo 12 concejales en 2007, dispersos de a uno, dos o, máximo, tres, en ocho municipios de la región. La ASI pronto adoptó un perfil más asociado con clivajes étnicos, en este caso indígenas, que con la izquierda política.

También a partir de 1988, con especial fuerza hasta 1992, la democracia local experimentó otro fenómeno nuevo: una explosión de movimientos cívicos locales y regionales. Dada la dificultad de identificarlos, debido a su gran número y al solapamiento que muchos grupos políticos tradicionales buscaron en ellos, han sido clasificados como parte de una categoría residual muy amplia: “Otros Partidos y Movimientos”. Además, no existen datos sobre ellos para las elecciones de 1990, probablemente el momento en que tuvieron mayor auge. Todo esto dificulta su análisis y permite hablar de la existencia de una especie de “caja negra” en los procesos políticos locales. Aún así, se puede inferir que en la región los movimientos cívicos aumentaron progresivamente el número de concejales elegidos en su nombre entre 1986 y 1992, como parte del aumento de concejales que obtuvieron los agrupamientos denominados “Otros”, que pasaron de 15 a 73 concejales entre las dos fechas mencionadas y en la última llegaron a ser la “segunda fuerza” detrás del liberalismo, una “fuerza” por cierto muy heterogénea. Posteriormente, en 2007, se nota un resurgimiento de los movimientos cívicos, especialmente en municipios como Candelaria, Corinto y Puerto Tejada, algunos de ellos teñidos con rasgos de identidad étnica.

Un poco más tardíamente, a partir de 1992, comenzaron a hacer parte del mapa político regional opciones conformadas a partir de clivajes religiosos y étnicos. La Unión Cristiana, El Compromiso Cívico Cristiano con la Comunidad (C4) y el Movimiento Integral de Renovación Auténtica (MIRA), se han turnado para obtener un concejal en la región, unas veces en Santander de Quilichao y otras en alguno de tres municipios restantes. Más

vigorosa ha sido la implantación de opciones con perspectiva étnica. La Alianza Social Indígena (ASI), recogió la herencia de algunos movimientos cívicos que se habían formado en municipios con un volumen apreciable de población indígena y la primera vez que se presentó a elecciones locales, en 1994, obtuvo de una vez 21 concejales. Luego ha crecido sostenidamente: 26 en 1997, 32 en 2000, 40 en 2003 y 44 en 2007, habiéndose convertido desde 1997 en la segunda fuerza política de la región, detrás del liberalismo. La influencia de la ASI se concentra, como es de esperarlo, en municipios cordilleranos como Jambaló, Toribío, Corinto y Caldon. El movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), ha tenido menos éxito: obtuvo en 2000 un concejal en el municipio de Buenos Aires. La más reciente novedad es el surgimiento de opciones que representan la población afrodescendiente: el Movimiento Nacional de Comunidades Negras eligió por primera vez un concejal en representación de los afrodescendientes en 1997, en Padilla; luego, en 2007, el Movimiento Nacional Afrodescendiente y la Alianza Social Afrodescendiente eligieron 6 y 7 concejales, respectivamente, concentrando su influencia en municipios como Guachené, Suárez, Jamundí y Florida.

A partir de 2000 es claramente perceptible un nuevo fenómeno en el escenario político regional: la irrupción de agrupamientos desprendidos de los dos partidos tradicionales, en búsqueda de nuevas identidades políticas. No es el viejo fenómeno de las disidencias que al cabo de un tiempo vuelven al partido de origen, se trata ahora de “superar la vieja política” tratando de constituir nuevos partidos. Ha sido un proceso muy volátil, en medio del cual han surgido movimientos y partidos circunstanciales, la mayoría de los cuales no ha logrado tener representación en dos elecciones seguidas para concejos municipales. Pueden distinguirse tres momentos en este proceso hasta ahora, cada uno de los cuales coincide con una elección local.

En un primer momento, año 2000, eligieron por primera vez concejales en la región el Partido Popular Colombiano, el Movimiento Independiente de Renovación y el Movimiento Comunal y Comunitario. Los dos primeros desaparecieron luego y el último volvió a elegir dos concejales en 2003 pero ninguno en 2007. Las dos excepciones fueron Convergencia Ciudadana y el Movimiento Popular Unido, que incrementaron su representación para 2003 y luego se fusionaron bajo el nombre de la primera, obteniendo 19 concejales en 2007.

En un segundo momento, 2003, obtuvieron representación, fuera de los ya mencionados: Somos Colombia, Movimiento Cívico Independiente, Huella Ciudadana y otros cuatro, que en la siguiente elección ya no figuraron en el mapa político regional. Esta vez la excepción fue Equipo Colombia que luego se fusionó con Alas y volvió a elegir concejales en 2007.

Finalmente, en el tercer momento, 2007, eligieron concejales por primera vez el Partido de la U, Cambio Radical, Verde Opción Centro, Alas-Equipo Colombia, Colombia Democrática y Colombia Viva.

Se acabaron las hegemonías de partido, sobre todo liberal, que existían antes de que comenzara la elección popular de alcaldes y, por tanto, se renovara la política local. De siete municipios con alto predominio del partido mayoritario en el Concejo Municipal que había en 1988 se pasó a cinco en 1994 y ninguno en 2003. En 2007 solo Jambaló muestra

predominio alto de la ASI. En realidad lo que ahora predomina en la región es una gran dosis de pluralismo y competencia política: de tener cuatro municipios con predominio bajo del partido mayoritario en 1992, se pasó a siete en 2000 y trece en 2007, tal como lo muestra la Tabla 7.

Tabla 7
Grado de predominio del partido mayoritario (con más concejales elegidos)
en los municipios de la región del sur del Valle y norte del Cauca, 1988-2007

Municipio	1988	1990	1992	1994	1997	2000	2003	2007
Buenos Aires	L (A)	s.i.	L (A)	L (A)	s.i.	L (B)	MP (B)	L (M)
Caldoso	C/O (B)	s.i.	O (B)	L (B)	AS (M)	AS (B)	AS (M)	C/AS (B)
Caloto	L (A)	s.i.	O (M)	L (M)	L (M)	L (M)	MP (B)	AS/CC (B)
Candelaria	L (A)	s.i.	L (M)	L (M)	L (M)	L (M)	L (B)	TC (B)
Corinto	L (A)	s.i.	L (M)	AS (M)	s.i.	L (M)	L/AS (M)	AS (B)
Florida	L (M)	s.i.	L (B)	C (B)	L/C (B)	FP (B)	C (B)	C (B)
Guachené	-	-	-	-	-	-	-	L (B)
Jambaló	O (A)	s.i.	O (A)	AS (M)	AS (M)	AS (A)	s.i.	AS (A)
Jamundí	L (B)	s.i.	O (B)	L (A)	L (M)	L (A)	EC/HC (N)	AS (N)
Miranda	L (M)	s.i.	O (M)	L (M)	L (A)	L (B)	AL (B)	AL (B)
Padilla	L (A)	s.i.	O (A)	L (A)	L (A)	L (B)	L (M)	L (B)
Pradera	L (A)	s.i.	L (M)	L (A)	L (M)	L (B)	L (B)	PU (B)
Pto Tejada	L (M)	s.i.	L (B)	L (A)	L (M)	L (M)	AL (B)	L (B)
S de Quilichao	L (M)	s.i.	O (M)	L (M)	L (M)	L/AS (B)	L (B)	L (B)
Suárez	-	-	L (A)	s.i.	s.i.	L (A)	AL (M)	CC (B)
Toribío	L/O (B)	s.i.	L (M)	C (M)	AS (M)	AS (M)	AS (M)	AS (M)
Villarrica	-	-	-	-	-	L (M)	L (M)	L (B)

Partidos: L (Liberal), C (Conservador), O (Otros), AS (Asi), FP (Frente Progresista), MP (Mpu), EC (Equipo Colombia), HC (Huella Ciudadana), AL (Alternativa Liberal), CC (Convergencia Ciudadana), TC (Todos por Candelaria), PU (Partido de la U)

Predominio: A = Alto (75% a 100% del total de concejales)
M = Medio (50% a 74% del total de concejales)
B = Bajo (25% a 49% del total de concejales)
N = Ninguno (24% o menos del total de concejales)

Fuente: Cálculos propios con base en Tablas anexas 2, 3 y 4

En las alcaldías la dispersión es menor que en los concejos municipales, tal como se ve en la Tabla 8. El predominio liberal es más evidente: hasta 1997 este partido eligió la mayoría de alcaldes de las localidades que entonces hacían parte de la región y en 2007 aún continuaba logrando siete de los diecisiete, incluidos los mandatarios de los nuevos municipios creados en los últimos años (Guachené y Villarrica); además, disidencias liberales obtuvieron la alcaldía de Padilla en 2000 y Miranda en 2003. Los conservadores han tenido alcalde solamente en dos municipios: Florida, en tres ocasiones, y Pradera, en una oportunidad, a lo cual puede sumarse el hecho de que una disidencia de ese partido, aliada con los liberales, ganó la alcaldía de Santander de Quilichao en 2000. Otros movimientos políticos y cívicos obtuvieron alcaldías en varios municipios en distintos momentos, sobre todo en el ciclo electoral de 1988 a 1992, ocho en esta última fecha, así como en la más reciente elección (2007), en dos casos: Candelaria y Puerto Tejada. Nuevos partidos desprendidos del bipartidismo tradicional han ganado alcaldías a partir de 2000,

así: el MPU en Caldono (2000), Miranda (2000) y Candelaria (2003), Convergencia Ciudadana en Caloto (2003) y Suárez (2007), el Partido de la U en Florida (2007) y Pradera (2007). La ASI, por su parte, ha ganado siempre las alcaldías de Jambaló y Toribío, desde cuando lo hizo por primera vez en 1994, y ha obtenido las de Corinto en dos oportunidades (1994 y 2007), Caldono en tres ocasiones (1997, 2003 y 2007) y Jamundí en 2007. Ningún municipio ha tenido gobiernos de un mismo partido o movimiento a lo largo de los ocho periodos que abarca hasta ahora el experimento de la elección popular de alcaldes, aunque en ocho municipios el Partido Liberal ha gobernado durante al menos cinco periodos y en otras dos lo ha hecho la ASI.

Tabla 8
Filiación política de los alcaldes elegidos en los municipios de la región del sur del Valle y norte del Cauca, 1988-2007

Municipio	1988	1990	1992	1994	1997	2000	2003	2007
Buenos Aires	Lib	Lib	Lib	Lib	s.i.	s.i.	Lib	Lib
Caldono	Lib	Lib	Otro	Lib	ASI	MPU	ASI	ASI
Caloto	Lib	Otro	Otro	Lib	Lib	Lib	Cov Ciud	Lib
Candelaria	Lib	Lib	Lib	Lib	Lib	Lib	MPU	Todos x C
Corinto	Lib	Lib	Otro	ASI	s.i.	Alt Dem	Cívico Ind	ASI
Florida	Otro	Coal	Otro	Cons	Lib	Cons	Cons	P de la U
Guachené	-	-	-	-	-	-	-	Lib
Jambaló	Otro	Lib	Otro	ASI	ASI	ASI	ASI	ASI
Jamundí	Lib	Lib	Lib	Lib	Lib	Lib	Huella C	ASI
Miranda	Lib	Otro	Otro	Lib	Lib	MPU	Ap Lib	Lib
Padilla	Lib	Lib	Otro	Lib	Lib	Ap Lib	Lib	Lib
Pradera	Otro	Lib	Lib	Lib	Cons	Lib	Lib	P de la U
Pto Tejada	Lib	Lib	Lib	Lib	Lib	s.i.	s.i.	Unid x P T
S de Quilichao	Lib	Lib	Otro	Lib	Lib	Unionist-L	Libl	Lib
Suárez	-	s.i.	s.i.	s.i.	s.i.	L	Ap Lib	Conv Ciud
Toribío	Lib	Lib	Lib	ASI	ASI	ASI	ASI	ASI
Villarrica	-	-	-	-	-	s.i.	s.i.	Lib

Nota: Hasta 2003 hubo en algunos municipios “elecciones atípicas” (en fecha distinta a la programada para todo el país). Cuando así es aparece s.i. en el cuadro

Fuente: Estadísticas electorales de la Registraduría Nacional del Estado Civil

Si bien el pluralismo político representa ahora mejor que antes la diversidad social de la región, sobre todo sus clivajes étnicos y raciales, hay sectores sociales diferenciados que no han logrado constituirse como sujetos políticos ni actores sociales con suficiente peso, como para haber logrado mayor representación. El mejor ejemplo es el de las mujeres. A lo largo de ocho comicios han sido elegidas solamente once alcaldesas, dos veces en Caldono (1992 y 2007), Candelaria (2000 y 2007), Jamundí (2000 y 2007) y Puerto Tejada (1992 y 1997), una vez en Miranda (1988).

Relaciones entre ejecutivo y legislativo en el Estado Local

El gran peso que comenzaron a tener los alcaldes a partir del momento en que se introdujo su elección popular y la desestructuración paulatina del sistema bipartidista que comenzó a presentarse desde entonces, expresada en el aumento de opciones diferentes a las liberales y

conservadoras, implicaban un riesgo para la gobernabilidad de los municipios: era fácil que los electores se inclinaran a votar por alcaldes carismáticos e independientes, individualistas e, inclusive, anti-políticos, completamente desinteresados de contar con sus propias bancadas en los concejos municipales, caso en el cual las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo tenían todas las posibilidades de ser más fuente de conflicto que de armonía. No ha sido así en el sur del Valle y el norte del Cauca, salvo unos pocos casos, como puede deducirse de la Tabla 9.

Tabla 9
Filiaciones políticas del Alcalde y la mayoría en el Concejo Municipal (Alcalde/Mayoría Concejo), por periodo, en los municipios de la región del sur del Valle y norte del Cauca, 1988-2007

Municipio	1988	1990	1992	1994	1997	2000	2003	2007
Buenos Aires	L /L	L /s.i.	L /L	L /L	s.i. /s.i.	s.i. /L	L /MP	L /L
Caldoso	L /C-O	L /s.i.	O /O	L /L	AS /AS	MP /AS	AS /AS	AS /C-AS
Caloto	L /L	O /s.i.	O /O	L /L	L /L	L /L	CC /MP	L /AS-CC
Candelaria	L /L	L /s.i.	L /L	L /L	L /L	L /L	MP /L	TC /TC
Corinto	L /L	L /s.i.	O /L	AS /AS	s.i. /s.i.	AD /L	Civ /L-AS	AS /AS
Florida	O /L	CO /s.i.	O /L	C /C	L /L-C	C /FP	C /C	PU /C
Guachené	-	-	-	-	-	-	-	L /L
Jambaló	O /O	L /s.i.	O /O	AS /AS	AS /AS	AS /AS	AS /s.i.	AS /AS
Jamundí	L /L	L /s.i.	L /O	L /L	L /L	L /L	HC /EC-HC	AS /AS
Miranda	L /L	O /s.i.	O /O	L /L	L /L	MP /L	ApL /AL	L /AL
Padilla	L /L	L /s.i.	O /O	L /L	L /L	ApL /L	L /L	L /L
Pradera	O /L	L /s.i.	L /L	L /L	C /L	L /L	L /L	PU /PU
Pto Tejada	L /L	L /s.i.	L /L	L /L	L /L	s. i. /L	s.i. /AL	UPT /L
S de Quilichao	L /L	L /s.i.	O /O	L /L	L /L	MU-L /L-AS	L /L	L /L
Suárez	-	s.i. /s.i.	s.i. /L	s.i. /s.i.	s.i. /s.i.	L /L	ApL /AL	CC /CC
Toribío	L /L-O	L /s.i.	L /L	AS /C	AS /AS	AS /AS	AS /AS	AS /AS
Villarrica	-	-	-	-	-	s.i. /L	s.i. /L	L /L

Convenciones: L (Liberal), C (Conservador), O (Otros), CO (Coalición), AS (Asi), FP (Frente Progresista), MP (Mpu), AD (Alternativa Democrática), ApL (Apertura liberal), MU (Movimiento Unionista), Civ (Movimiento Cívico), EC (Equipo Colombia), HC (Huella Ciudadana), AL (Alternativa Liberal), CC (Convergencia Ciudadana), TC (Todos por Candelaria), PU (Partido de la U), UPT (Unidos por Puerto tejada)

Fuente: Cálculos propios con base en Tablas anexas 2, 3 y 4

En la mayor parte de los casos; es decir, en la gran mayoría de los municipios durante al mayor parte de los periodos de gobierno, han coincidido la filiación política del Alcalde y la de la mayoría de miembros del Concejo Municipal. Los vacíos de la información con que se cuenta no permiten decir que siempre fue así en algún municipio, pero podría ser. Esa misma información permite afirmar que son menos los casos en los cuales esa coincidencia no se ha presentado que aquellos en que si.

Los casos de menor coincidencia y, por tanto, mayores dificultades en las relaciones entre alcaldes y concejales, se han presentado en Caldone (2000), Caloto (2007), Corinto (1992, 2000 y 2003), Florida (1988, 1992 y 2000), Pradera (1988), Puerto Tejada (2007) y Toribío (1994), porque en estos las filiaciones de alcaldes y mayorías edilicias han tendido a ser antagónicas, a diferencia de otros casos en los cuales, existiendo diferencias, éstas se han dado entre movimientos pertenecientes a “familias políticas” cercanas. Ejemplos de esto

último hubo en Caldono y Toribío en 1988, Florida y Pradera en 1997, Miranda, Padilla y Santander de Quilichao en 2000, Buenos Aires, Caloto, Candelaria, Jamundí, Miranda y Suárez en 2003; Caldono, Florida y Miranda en 2007.

Hay que contar, sin embargo, con los rasgos de la cultura política predominante para comprender la forma en que los gobiernos locales superan los problemas de gobernabilidad que se presentan en las municipalidades: los alcaldes, casi siempre con mayor votación a favor que cualquiera de las fracciones políticas presentes en el Concejo Municipal, cuentan con suficientes recursos: manejo presupuestal y capacidad de nombrar funcionarios, como para “negociar” si es necesario uno-a-uno con los concejales, cuotas de apoyo para una u otra iniciativa o, más globalmente, la conformación de mayorías que aprueben los presupuestos y permitan tomar decisiones consideradas importantes por los burgomaestres.

Culturas políticas diversas

Para tratar de identificar los rasgos de cultura política presentes en la región, es indispensable reconocer que ellos tienen diversa procedencia: unos se originan en usos y costumbres de las comunidades indígenas y negras mientras otros han sido implantados por la dilatada presencia de los partidos tradicionales, especialmente el Partido Liberal. El resultado es una amalgama que merece ser investigada con todo cuidado. Una exploración inicial puede hacerse tomando tres casos distintos: un “municipio indígena”, un “municipio negro” y un municipio “mestizo”.

Jambaló es uno de los municipios con mayor porcentaje de población rural y el que posee la mayor cantidad de habitantes indígenas en la región, allí el territorio de la municipalidad coincide con el del resguardo y, por lo tanto, el peso de la autoridad tradicional es mayor que en cualquiera otra localidad. La que más se le acerca es su vecina Toribío, en donde la suma de los territorios de los tres resguardos que la componen es igual al territorio de la municipalidad. En Jambaló hay una dualidad de poderes complementarios: por un lado está el Gobernador del Cabildo y por otro lado el Alcalde Municipal, desde 1992 ambos han sido indígenas, pues desde esa fecha, primero a través de un movimiento cívico y después a través de la ASI, los indígenas “recuperaron” el gobierno municipal. El candidato ganador siempre ha sido escogido en una asamblea general de comuneros, miembros del resguardo, y desde 2000 ha sido candidato único. También desde esa fecha una única lista se ha presentado al concejo municipal y, obviamente, ha obtenido los once concejales, la de la Alianza Social Indígena, ASI.

Este grado de cohesión no se ha formado solamente gracias a la fuerte tradición colectivista de los indígenas. De hecho hasta antes de las elecciones de 2000 hubo concejales liberales. El asesinato en agosto de 1996 del alcalde que había sido elegido en 1994, Marden Betancur, a manos del ELN, por instigaciones de su rival en la campaña electoral, y la reacción posterior de los comuneros-ciudadanos en contra de todos los actores armados con presencia en la región y otras influencias externas, radicalizaron las aspiraciones de autonomía y densificaron aún más el comunitarismo propio de los indígenas.

El relativo aislamiento del municipio –está situado en la alta montaña de la cordillera central–, el buen desempeño de los alcaldes indígenas, la persistente amenaza que

representa la presencia de las FARC en su territorio, así como las recurrentes incursiones de las Fuerzas Militares y, en general, el hecho de que el entorno haya seguido siendo el que corresponde a una guerra irregular, han reforzado una cultura política en la cual la perspectiva indigenista es hegemónica y podría decirse que el Estado Local está completamente subordinado a la dinámica de la Sociedad Local.

A pesar de lo dicho, Jambaló no es una comunidad cerrada sobre sí misma, sus habitantes no se expresan políticamente solo a través de sus autoridades tradicionales o de un movimiento cívico local, respaldan la ASI, un movimiento político amplio, con perspectiva indigenista –si–, que realiza sin embargo alianzas regionales y nacionales con sectores no indígenas y practica el pluralismo hacia adentro y hacia fuera, muy conciente de que la población indígena es ella misma menos homogénea de lo que la visión romántica y desinformada del “buen salvaje” quiere hacer ver.

Puerto Tejada es el municipio con mayor porcentaje de habitantes urbanos y uno de los que tiene mayor cantidad de población afrodescendiente en la región, está situado en la zona plana del valle geográfico del río Cauca y es también una de las localidades que mayor fidelidad ha profesado por el Partido Liberal.

Ese predominio liberal ha contribuido a producir dos fenómenos combinados, que se presentan en este municipio con mayor fuerza que en otros con porcentajes de población negra de más del 90%: la gran fragmentación partidista y el difícil avance de opciones con perspectiva étnica o racial.

La fragmentación es evidente por el número de listas al concejo y candidatos a la alcaldía que se inscriben: siete y ocho en promedio, respectivamente, en las últimas cuatro elecciones. Especialmente notable es la cantidad de candidatos a la alcaldía, la mayor en promedio de la región. En 2007 hubo siete, a nombre del Partido Liberal, el Movimiento de Apertura Liberal, Cambio Radical, el Polo Democrático Alternativo, el Movimiento Nacional Afrocolombiano (MNA), la Alianza Social Afrocolombiana (ASA) y el Movimiento Unidos por Puerto Tejada (MUPT), que ganó.

Por tratarse de un municipio con abrumadora mayoría de población negra, prácticamente todas las fuerzas políticas incluyen en sus discursos retóricas relacionadas con reivindicaciones étnicas o raciales, aunque en la gran mayoría de los casos terminan por subordinarlas a otros intereses. Recientemente han aparecido, sin embargo, dos nuevos movimientos que tienden a poner estas reivindicaciones en el centro de sus preocupaciones, el MNA y la ASA. Se trata de opciones que surgen a partir de un mayor nivel de “conciencia étnico/racial”, y buscan darle proyección política a anteriores experiencias de movilización social que han buscado expresarse políticamente, incluido el denominado Proceso de Comunidades Negras activado en los años noventa del siglo veinte. Son expresiones políticas jóvenes, en pleno proceso de definición, que se diferencian por el matiz más racial que tiene el MNA y el toque más étnico que posee la ASA. El MNA tiene presencia también en Santander de Quilichao, Caloto, Miranda y Villarrica, la ASA en Suárez, Guachené, Santander de Quilichao, Padilla, Miranda y Caloto. En las elecciones para alcalde de Puerto Tejada en 2007 el MNA obtuvo la tercera votación detrás del MUPT

y el Partido Liberal, mientras que la ASA tuvo un desempeño más discreto, al situarse en quinto lugar.

Las dificultades que ha tenido el afianzamiento de una perspectiva política étnico/racial en Puerto Tejada, y otros municipios de la región con poblaciones mayoritariamente negras, tiene que ver con los obstáculos que impone la herencia liberal –individualista por un lado y clientelista por el otro– (De Roux, 1991: 21-24), así como con ciertas búsquedas no concluidas de los propios líderes afrodescendientes acerca de cómo orientar sus empeños: ¿reivindicar la condición de comunidades negras, casi gemelas de las del litoral pacífico, o establecer unos rasgos de identidad propios y diferentes a partir de su condición mediterránea y urbana?

Pradera es, como se dijo antes, el mejor ejemplo de “municipio mestizo” en la región, aquel en el cual las porciones de habitantes indígenas y negros, sumadas, no alcanzan a superar la mitad de la población total. Tiene además el segundo mayor porcentaje de habitantes urbanos, después de Puerto Tejada, cuenta con territorios en la zona plana del Valle del Cauca y en la zona montañosa de la cordillera central, es la sede de uno de los doce ingenios del “Eje Cañero”, el Central Castilla. Allí también la herencia liberal ha sido fuerte, solo que, como ocurre en su vecino Florida y a diferencia de lo que sucede en los demás municipios de la región, en este caso la influencia conservadora igualmente ha sido notable: de hecho, entre 1997 y 2000 Pradera tuvo alcalde y mayoría en el concejo de filiación conservadora. Puede decirse que es una de las pocas localidades en las que el bipartidismo tradicional, el de liberales y conservadores, logró mantener mayor vigencia, aunque justamente a partir de 2000 se ha presentado el mismo proceso de fragmentación partidista que ha afectado a otros municipios, en mayor o menor medida.

En Pradera no hay influencia de opciones políticas con perspectiva étnico/racial, Ni la ASI, ni la ASA o el MNA, han tenido allí concejales o votación significativa. La explosión de diversidad no ha sido mucha, el pluralismo un poco más, sobre todo a favor de opciones derivadas del bipartidismo tradicional: Movimiento Popular Unido, Convergencia Ciudadana, Partido de la U, Cambio Radical. También ha contado con fragmentación, expresada en la cantidad de listas y candidatos inscritos a concejo y alcaldía: 9.7 y 6.5 en promedio a partir del 1997, durante las última cuatro elecciones.

El experimento de la democracia local en una región nueva y diversa: resultados

En 1988, año de la primera elección de alcaldes e inicio del fortalecimiento de la democracia local, Colombia dio un paso firme hacia su conversión en una Poliarquía, ese tipo de regimenes “relativamente (pero no completamente) democráticos; o, dicho de otra forma [...] sustancialmente liberalizados y popularizados, es decir, muy representativos a la vez que francamente abiertos al debate público” (Dahl, 1989:18). Atrás quedó entonces la fase de semi-poliarquía que el propio Dahl le asignó, de acuerdo con las condiciones que tenía hacia 1969, y más atrás aún la condición de Oligarquía Competitiva que, siempre de acuerdo con las nociones del propio Dahl, pudo tener durante los años de vigencia plena del Frente Nacional, antes de la cuasi-victoria del General Rojas Pinilla en las elecciones presidenciales de 1970, cuando quedó demostrado que el grado de participación y debate público era mayor de lo que suponían y esperaban las elites gobernantes.

En el caso de la sub-región que comprende el sur del Valle y el norte del Cauca, una de cuyas principales características es la diversidad étnica y racial, la democracia local fortalecida permitió el surgimiento de opciones políticas nuevas con perspectiva indígena o afrodescendiente y, por esa vía, mejoró los niveles de representación política de la diversidad social. Los movimientos indígenas han logrado un mayor grado de consolidación que los afrodescendientes y hay otros grupos diferenciados que aún se encuentran subrepresentados, como las mujeres, pero no se puede negar que de 1988 a la fecha, periodo que coincide aproximadamente con el de la conformación misma de la subregión, estos procesos de cualificación de la democracia han sido bastante notables.

Varias comunidades indígenas y negras de la región se han convertido en sujetos políticos activos, primero como movimientos cívicos locales y luego como parte de movimientos políticos con pretensiones de influencia más allá del ámbito local, como en los casos de la ASI (Alianza Social Indígena), la ASA (Alianza Social Afrocolombiana) y el MNA (Movimiento Nacional Afrocolombiano). La mayor influencia de estas expresiones políticas y otras con perspectiva étnica o racial está concentrada en los municipios que poseen mayoría de población indígena o negra, tales como Jambaló, Toribío, Caldoño y Corinto, por un lado, Puerto Tejada y los demás municipios de la zona plana, por otro. En la región como conjunto nunca el partido liberal ha dejado de ser la fuerza política predominante, pero el partido Conservador perdió su segundo lugar desde 1997, nuevas agrupaciones hasta ahora inestables y volátiles han surgido como producto del resquebrajamiento del bipartidismo tradicional, otras también nuevas y en proceso de consolidación pertenecen a familias partidistas distintas. El pluralismo es ahora, sin duda, mayor que un cuarto de siglo antes cuando se inauguró la elección popular de alcaldes.

Entre 1986 y 2007 han sido creados tres nuevos municipios en la región, todos ellos con población mayoritariamente negra. La creación de nuevos municipios ha sido una táctica de acción política privilegiada por las comunidades afrodescendientes allí donde han percibido que pueden duplicar su poder: la creación de Villarrica desprendido de Santander de Quilichao, o quitarse de encima el predominio de otros grupos: la creación de Guachené, desprendido de Caloto. Tanto el ejercicio continuado del gobierno municipal en localidades ya existentes como la creación de nuevos municipios ha permitido que las nuevas elites allí formadas comiencen a tener mayor influencia en los gobiernos departamentales: el de Floro Tunubalá en el Cauca, entre 2001 y 2003, como en otras instancias regionales.

Ninguno de estos logros ha estado libre de tensiones interétnicas, a pesar de lo cual se ha estado abriendo paso un proceso de integración intermunicipal. La conversión del Corregimiento de Guachené, junto con otros, en un nuevo “municipio negro”, por ejemplo, perjudicó a ciertas elites mestizas acostumbradas a manejar el Gobierno de Caloto y puede beneficiar a los indígenas que pasan ahora a quedar como nueva mayoría poblacional en el viejo municipio (Paz, 2007: 158-159). Al mismo tiempo, los gobernantes de estas dos localidades han debido ponerse de acuerdo para fijar los límites de sus territorios y distribuir equitativamente los recursos fiscales provenientes de las empresas localizadas en la “Zona de Ley Paez” que comparten (El Liberal, 310708). Otra muestra de cooperación que surge del conflicto y refuerza la integración, aún en contra del querer de algunos

protagonistas, son los entendimientos entre Candelaria, Florida y Pradera, para tratar de compartir fuentes hídricas y mejorar la calidad del agua potable (El Tiempo, 060808).

Las mayores dificultades, tanto para la consolidación de la autonomía de las localidades como del proceso de integración, han sido: la acción de grupos armados irregulares, el asedio del narcotráfico, las tendencias centralistas de los gobiernos nacionales y la persistencia de prácticas clientelistas entre los propios habitantes de la región, cosas que no ha variado sustancialmente en los últimos años. Hay, sin embargo, experiencias de buen gobierno, entre las cuales se destacan varias “alcaldías indígenas”, ejemplares como muestra de que es posible, en ciertas condiciones, superar dichas barreras.

El análisis de una sola elección, sobre todo cuando se han despertado en torno a ella expectativas en relación con la superación de la corrupción política o el conflicto armado, como sucedió por ejemplo con la de 1997 (Hernández, 2003), no permite ver los contrastes de la democracia local tan claramente como el examen de un proceso que abarque varias elecciones en serie, la mayor cantidad posible, igual al que se ha intentado en este capítulo.

En 2011 habrá de nuevo elecciones locales. De acuerdo con lo señalado en este capítulo se espera que entonces 1) la perspectiva indígena abierta de la ASI continúe ganando influencia, pues aún está lejos de haber alcanzado el techo que le permiten las condiciones regionales, 2) opciones con perspectiva afrodescendiente, como el MNA y la ASA, consoliden su presencia con base en el desarrollo de una mayor “conciencia de raza” en la población negra de la mayoría de los municipios de la región, 3) haya nuevos alineamientos y probablemente nuevas muestras de volatilidad en el campo de los movimientos políticos provenientes del bipartidismo tradicional, 4) se consolide el pluralismo existente en torno a unas cuantas opciones que recojan la dispersión que ha prevalecido hasta ahora, más sólidas y menos locales, 5) continúe el asedio provocado por la presencia de grupos armados irregulares y, muy especialmente, el narcotráfico. Todo esto si nada extraordinario ocurre.

REFERENCIAS

- CASTRO, Jaime (1986). *Elección popular de alcaldes*, Bogotá, Ed. Oveja Negra.
- DAHL, Robert (1989 [1971]). *La Poliarquía: participación y oposición*, Madrid, Ed. Tecnos.
- DE ROUX, Gustavo [1991]. “Orígenes y expresiones de una ideología liberal”, en: *Boletín Socioeconómico*, N° 22, Cali, Universidad del Valle, Cidse, pp. 1-26.
- GAITAN, Pilar (1992). “Política y Descentralización”, en: P. Gaitán y C Moreno. *Poder Local: realidad y utopía de la descentralización en Colombia*, Bogotá, Ed. Tercer Mundo, pp. 17-181.
- HERNANDEZ LARA, Jorge (2003). “Elecciones bajo escándalo, fuego e ilusiones”, en: A. Guzmán y otros, *Cuatro Ensayos de Coyuntura: Valle y Cauca a fines del siglo veinte*, Bogotá, Cidse-Cerec, pp. 239-329.
- HOYOS GOMEZ, Diana (2005). “Evolución del sistema de partidos en Colombia, 1972-2000: una mirada local y regional”, en: *Análisis Político*, N° 55, Bogotá, Iepri-UN.
- LAURENT, Virginia (2005). *Comunidades indígenas, espacios políticos y movilización electoral en Colombia, 1990-1998*, Bogotá, Icanh.

- OCAMPO, Angélica y RUIZ, Germán (1991). “Las elecciones de alcaldes: avances y retrocesos”, en: R. Sánchez (Compilador). *Los nuevos retos electorales: Colombia en la antesala del cambio*, Bogotá, Uniandes-Cerec, pp. 167-186.
- PAZ ZAPATA, Francisco José (2007) *Guachené: municipio 1099 por consulta popular*, Cali, Ed. Feriva
- PIZARRO, Eduardo (1991). *Las FARC, 1949-1966: de la autodefensa a la combinación de todas las formas de lucha*, Bogotá, Ed. Tercer Mundo.
- REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
- s.f. *Estadísticas Electorales, 1986*
- s.f. *Estadísticas Electorales, 1988*
- s.f. *Estadísticas Electorales, 1990*, tomo 2
- 1992 *Colombia, elecciones 8 de marzo-1992*, tomos 1 y 2
- s.f. *Estadísticas Electorales 30 de octubre de 1994*, tomo 1
- s.f. *Elecciones 97-98*, disco
- s.f. *Estadísticas, 1997-1998-2000-2002-2003-2006*, disco
- s.f. *Elecciones 2007*, en: registraduria.gov.co
- VILLAMIZAR, Darío.
- 1995 *Aquel 19 será*, Bogotá, Ed. Planeta